

MANUAL DE OPERACIÓN MINISTERIAL EN EL SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARIAL

CONTENIDO

1.	Presentación.	02
2.	Objetivo.	03
3.	Etapas del Procedimiento Penal.	04
3.1.	Etapas de Investigación.	
3.1.1	- Fases de la etapa de investigación.	
3.1.2	- Actos de investigación.	
3.1.3	- Técnicas de investigación.	
3.1.4	- Formulación de la imputación.	
3.1.5	- Vinculación a proceso.	
3.1.6	- Investigación complementaria. . .	
4.	Etapa intermedia.	
5.	Juicio oral.	

PRESENTACIÓN.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en sus artículos 21 y 102 apartado A, establecen el principio de legalidad con el que actúa el agente del Ministerio Público de la federación, precisando las funciones que este tiene, así como los órganos auxiliares con los que se cuenta para realizar las investigaciones de hechos delictivos y la plena responsabilidad de los infractores, mismo que deberá de contar con la información necesaria de las diversas leyes, tratados, acuerdos, protocolos, lineamientos y todo cuerpo normativo subyacente.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación es el Máximo Tribunal Constitucional del país, en virtud de lo cual, tiene como responsabilidad fundamental la defensa del orden establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entre los que se encuentran la interpretación de los diversos cuerpos normativos

Sin embargo es necesario que el Agente del Ministerio Público, realice un análisis detallado de los casos en los que tenga que auxiliarse de ordenamientos existentes dentro de la normatividad de la institución o de otros organismos nacionales e internacionales, para evitar errores en su función o violentar derechos de víctimas o imputados en la aplicación de la ley.

Con motivo de lo anterior, la reforma constitucional en materia de seguridad y justicia, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008 y con la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece como principios la presunción de inocencia, juicio previo y debido proceso, los cuales también están inmersos en instrumentos internacionales suscritos y ratificados por el Estado Mexicano. De igual manera, es importante destacar que la presunción de inocencia prevalecerá en todas las etapas del procedimiento penal, mientras que no se declare la responsabilidad penal del acusado o acusada, en una sentencia firme.

Por lo tanto, el propósito de este manual es establecer los criterios que deben seguir las y los servidores públicos para la adecuada aplicación de la ley al momento de poner marcha la maquinaria coercitiva, debiendo observar la adecuada aplicación de los preceptos legales en sus actos ministeriales, así como el personal que lo auxilia deberá observar estas circunstancias para la obtención de resultados óptimos para la institución.

Objetivo:

El presente documento tiene como propósito uniformar y simplificar el trabajo que realizan día a día los Agentes del Ministerio Público de la Federación en la integración de los casos que llegan a su conocimiento, dado que por los tiempos tan cortos con los que este cuenta, así como por la carga de trabajo, resulta difícil en la mayoría de los casos contar con la información suficiente sobre las diversas disposiciones normativas que concurren en la investigación de los diferentes hechos delictivos, esto ayudará a que las investigaciones se robustezcan en cuanto al contenido jurídico y se optimicen los recursos con los que el fiscal cuenta para ejercer sus funciones.

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO PENAL

La investigación:

En la etapa de investigación dentro del proceso penal acusatorio adversarial, el Agente del Ministerio Público tiene la posibilidad de allegarse de información que le permitirá establecer que el hecho con apariencia de delito y la probable responsabilidad del imputado, que le es hecho de su conocimiento, ameritan que se inicie una investigación ministerial o bien se aplique la facultad prevista en el Código Nacional de Procedimientos Penales para no iniciar con la misma denominada facultad de abstenerse de investigar, esto desde luego observando lo dispuesto por el acuerdo emitido por la Procuraduría General de la República.

Para tener una procuración de justicia igualitaria, apegada al respeto de los derechos humanos; desde el momento de la denuncia o querrela el Ministerio Público debe observar y analizar si el delito que informan no está relacionado con algunos de los grupos que se consideran vulnerables, como lo son menores de edad, mujeres, migrantes, donde estén involucrados delitos sexuales o de libertad de expresión, etc, etc; ya que desde ese momento deberán hacer uso de diversos protocolos para asegurar que su actuación este encaminada a proteger en todo momento sus derechos.

PROTOCOLOS:

Protocolo de investigación Ministerial

Este documento sirve para establecer las bases en el ámbito de la investigación, verificando seguir con los pasos que se enuncian en este instrumento, el cual el Agente del Ministerio Publico deberá seguir para la homologación de resultados óptimos para la institución.

Protocolo de Actuación

DE INVESTIGACIÓN MINISTERIAL

AGOSTO | 2018

Índice

1. Introducción	3
2. Marco Jurídico	4
3. Alcance	7
4. Objetivo	7
5. Políticas de Operación	8
6. Roles de Participantes	11
Internos	11
Externos	12
7. Modelado de Procesos	13
N3. Macroproceso: Protocolo de Actuación de Investigación Ministerial	13
N4. Protocolo de Actuación de Investigación Ministerial	14
A. Diagrama de flujo. Protocolo de Actuación de Investigación Ministerial	14
B. Descripción detallada. Protocolo de Actuación de Investigación Ministerial	15
N5. Subproceso de Recepción de Noticia del Hecho sin Persona Detenida	17
C. Diagrama de flujo. Subproceso de Recepción de Noticia del Hecho sin Persona Detenida	17
D. Descripción detallada. Subproceso de Recepción de Noticia del Hecho sin Persona Detenida	18
N5. Subproceso de Recepción de Noticia del Hecho con Persona Detenida	20
E. Diagrama de flujo. Subproceso de Recepción de Noticia del Hecho con Persona Detenida	20
F. Descripción detallada. Subproceso de Recepción de Noticia del Hecho con Persona Detenida	21
N5. Subproceso de Ejecución de Actos de Investigación para la Víctima o Persona Ofendida	22
G. Diagrama de flujo. Subproceso de Ejecución de Actos de Investigación para la Víctima o Persona Ofendida	22
H. Descripción detallada. Subproceso de Ejecución de Actos de Investigación para la Víctima o Persona Ofendida	23
N5. Subproceso de Ejecución de Actos de Investigación para la Persona Detenida	25
I. Diagrama de flujo. Subproceso de Ejecución de Actos de Investigación para la Persona Detenida	25
J. Descripción detallada. Subproceso de Ejecución de Actos de Investigación para la Persona Detenida	26

Protocolo de Actuación de Investigación Ministerial



N5. Subproceso de Ejecución de Actos de Investigación	30
K. Diagrama de flujo. Subproceso de Ejecución de Actos de Investigación	30
L. Descripción detallada. Subproceso de Ejecución de Actos de Investigación	31
N5. Subproceso de Formas de Terminación de la Investigación Ministerial	34
M. Diagrama de flujo. Subproceso de Formas de Terminación de la Investigación Ministerial	34
N. Descripción detallada. Subproceso de Formas de Terminación de la Investigación Ministerial	35
N5. Subproceso de Ejercicio de la Acción Penal	37
O. Diagrama de flujo. Subproceso de Ejercicio de la Acción Penal	37
P. Descripción detallada. Subproceso de Ejercicio de la Acción Penal	38
N5. Subproceso de Formulación de Imputación	42
Q. Diagrama de flujo. Subproceso de Formulación de Imputación	42
R. Descripción detallada. Subproceso de Formulación de Imputación	43
N5. Subproceso de Vinculación a Proceso	45
S. Diagrama de flujo. Subproceso de Vinculación a Proceso	45
T. Descripción detallada. Subproceso de Vinculación a Proceso	46
8. Glosario	51
9. Anexos	56
Anexo 1. Simbología	56



Introducción

Como respuesta a la necesidad de cambiar el sistema penal, el 18 de junio de 2008, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) dando origen al nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio (SJPA), donde se estableció que el proceso penal debía ser acusatorio y oral, regido primordialmente por los principios de inmediación, contradicción, continuidad, concentración y publicidad, como ejes rectores del proceso, en el que se deberá esclarecer los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que se repare el daño, en un marco de promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos de toda persona involucrada en el mismo.

Por lo anterior, el 5 de marzo de 2014, fue publicado en el DOF el Decreto por el que se expide el Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP) mismo que en el artículo Décimo Primero Transitorio se instauró la obligación de contar con protocolos de investigación y de actuación del personal sustantivo en los lugares en donde entre en operación el referido sistema.

El procedimiento penal en el SJPA de acuerdo con el artículo 211 del CNPP comprende tres etapas: la de Investigación; la Intermedia o Preparación a Juicio y la de Juicio.

La primera etapa referida se encuentra a cargo de la o el agente del Ministerio Público de la Federación (AMPF) y se divide en dos fases: 1.- Fase de Investigación inicial, la cual inicia con la recepción de la noticia del hecho y concluye antes de la formulación de imputación y 2.- Fase de Investigación complementaria, la cual es llevada a cabo por la o el AMPF ante el Órgano Jurisdiccional y concluye al haberse decretado el cierre de investigación complementaria.

El presente Protocolo establece los criterios y elementos teórico-práctico necesarios para contribuir en la toma de decisiones e interacción de actuación del personal sustantivo de la Procuraduría General de la República (PGR) en la etapa de Investigación en sus dos fases cuando existan hechos que la ley señale como delito del orden federal.



Marco Jurídico

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
2. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
3. Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José, Costa Rica)
4. Código Nacional de Procedimientos Penales
5. Código Penal Federal
6. Ley Nacional de Ejecución Penal
7. Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal
8. Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública
9. Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
10. Ley General de Víctimas
11. Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres
12. Ley Federal para la Protección a Personas que intervienen en el Procedimiento Penal
13. Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores
14. Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación
15. Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República
16. Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República
17. Acuerdo por el que se dan a conocer los lineamientos para la integración, captura, revisión y envío del Informe Policial Homologado (IPH), previsto en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública
18. Acuerdo A/126/10 por el que se crea el Sistema de Registro de Detenidos relacionados con delitos de competencia de la Procuraduría General de la República (SIREDO) y sus reformas
19. Acuerdo A/079/12 por el que se establecen las directrices que deberán observar los servidores públicos de la institución para la detención y puesta a disposición de personas
20. Acuerdo A/080/12 por el que se establecen las directrices que deberán observar los agentes de la Policía Federal Ministerial para el uso legítimo de la fuerza
21. Acuerdo A/101/13 por el que se crea la Agencia de Investigación Criminal y se establecen sus facultades y organización, y su reforma
22. Acuerdo A/009/15 por el que se establecen las directrices que deberán observar los servidores públicos que intervengan en materia de cadena de custodia

Protocolo de Actuación de Investigación Ministerial



23. Acuerdo A/017/15 por el que se establecen los criterios generales y el procedimiento que deberán observar los agentes del Ministerio Público de la Federación, para solicitar la pena en el procedimiento abreviado
24. Acuerdo A/059/15 por el que se crea el Sistema de Consulta de Detenidos (SCD)
25. Oficio Circular C/001/16 por el que se instruye a los titulares de las subprocuradurías, fiscalías especializadas y especiales, Visitaduría General, Agencia de Investigación Criminal, unidades especiales y especializadas, delegaciones estatales u órganos equivalentes, y demás titulares de unidades administrativas y órganos desconcentrados de la Procuraduría General de la República que participen en la operación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio
26. Acuerdo A/173/16 por el que se delegan en los servidores públicos que se indican, facultades previstas en diversas leyes
27. Acuerdo A/099/17 por el que se establecen los criterios generales para la aplicación de los criterios de oportunidad
28. Oficio Circular No. C/003/18 por el que se instruye a los servidores públicos de la Procuraduría General de la República para privilegiar el abandono de bienes a favor del Gobierno Federal, así como las acciones de extinción de dominio, y su Nota Aclaratoria
29. Oficio Circular C/007/18 mediante el cual se instruye a los servidores públicos de la Procuraduría General de la República para solicitar al órgano jurisdiccional competente se impongan las medidas cautelares procedentes, de conformidad con lo establecido en el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales y en las demás disposiciones aplicables
30. Oficio Circular C/011/18 mediante el cual se dan a conocer los Lineamientos Operativos
31. Lineamientos por los que se establecen los criterios generales y el procedimiento para la aplicación de los criterios de oportunidad y de la determinación de la pena que el Ministerio Público solicitará al Juez de Control en la aplicación del procedimiento abreviado
32. Protocolo Nacional de Aseguramiento
33. Protocolo Nacional de Actuación de Destrucción de Plantíos Ilícitos
34. Protocolo Nacional de Traslados
35. Protocolo Nacional de Policía con Capacidades para Procesar
36. Protocolo para el Tratamiento e Identificación Forense
37. Protocolo de Actuación Investigaciones Financieras Paralelas
38. Guía Nacional de Cadena de Custodia
39. Lineamientos Generales a los que habrá de sujetarse el manejo, captura, operación y resguardo de la información del Registro Nacional de Víctimas u Ofendidos del Delito en la Procuraduría General de la República
40. Lineamientos Generales para la Operación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio de la Procuraduría General de la República



41. Manual del Modelo de Gestión tipo para la Operación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio en la Procuraduría General de la República

Además de los instrumentos jurídicos señalados, se deberán observar las disposiciones que tienen el carácter de reservadas en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

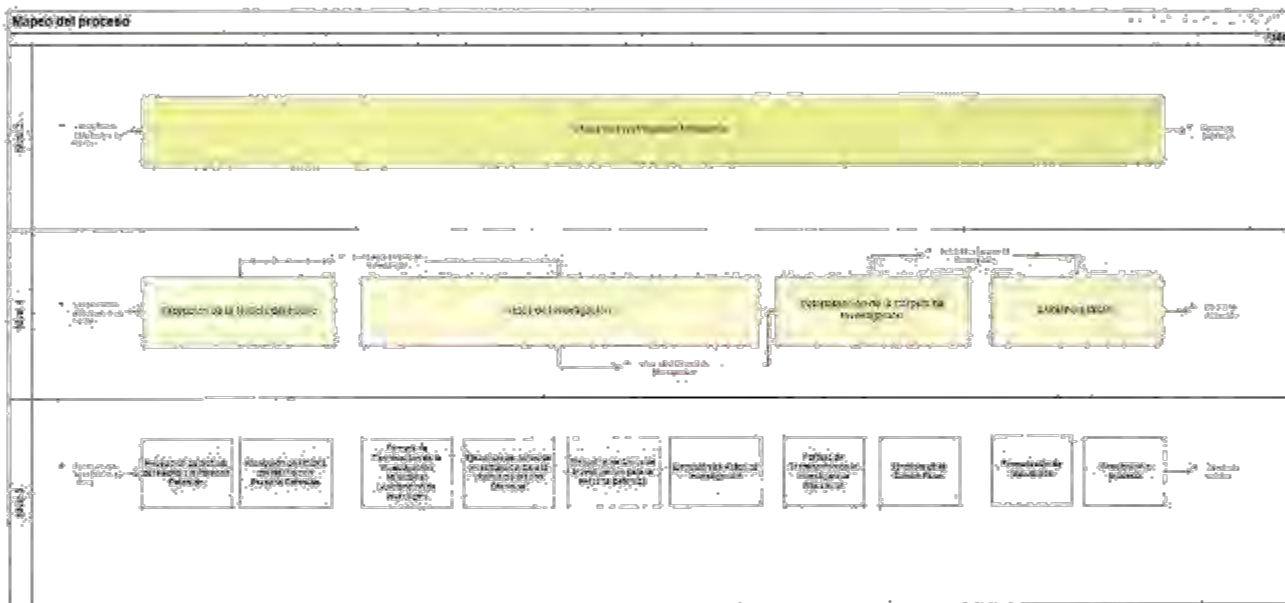
X
B
A

Protocolo de Actuación de Investigación Ministerial



Alcance

El presente Protocolo abarca la etapa de Investigación y las dos fases que la integran (Investigación inicial y complementaria). Desde la recepción de la Noticia del Hecho, la cual puede ser sin o con persona detenida, el inicio de la Carpeta de Investigación, elaboración del plan de investigación, la ejecución de actos de investigación, las determinaciones ministeriales y hasta antes de la formulación de acusación, es decir, una vez que se ha decretado el cierre de investigación complementaria.



Objetivo

Homologar la actuación del personal sustantivo de la PGR durante la etapa de Investigación cuando exista una Noticia del Hecho que la ley señale como delito del orden federal, a fin de reunir indicios y recabar datos de prueba para sustentar el ejercicio de la Acción Penal u otras determinaciones; la acusación en contra de la persona imputada y la reparación del daño a favor de la víctima o persona ofendida que permita garantizar la vida, integridad, libertad, seguridad y el debido proceso penal.

X

#



Políticas de Operación

1. La o el AMPF deberá fomentar el trabajo en equipo y la aplicación de un enfoque planeado en el desarrollo de la investigación con base en la teoría del caso.
2. La o el AMPF deberá privilegiar la aplicación de soluciones alternas durante la investigación.
3. La o el AMPF realizará las funciones conforme lo que establezca el Manual del Modelo de Gestión correspondiente.
4. La o el AMPF deberá hacer uso adecuado de los medios de impugnación en el desarrollo de la Audiencia Inicial y/o posterior a la misma.
5. La o el AMPF, personal de la PFM y personal Pericial en todo momento, deberán vigilar y respetar los derechos humanos de toda persona involucrada en el proceso penal.
6. La o el AMPF y personal de la PFM deberán hacer del conocimiento a la víctima o persona ofendida y a quien se le imputa un hecho que la ley señala como delito los derechos que le asisten.
7. La o el AMPF en todo momento, deberá identificar la pertenencia de toda persona involucrada en el proceso penal a un grupo o grupos en situación de vulnerabilidad con el propósito de aplicar el protocolo correspondiente.
8. La o el AMPF deberá considerar en todo momento el principio de presunción de inocencia y el derecho del respeto a la libertad personal.
9. En todo momento la o el AMPF y personal de la PFM deberán respetar el derecho a la intimidad y privacidad de cualquier persona que intervenga en el proceso penal; así como salvaguardar la identidad de las víctimas en los delitos que así lo ameriten y cuando la autoridad jurisdiccional así lo determine.
10. En caso de que la persona detenida sea extranjera, la o el AMPF deberá notificar de manera inmediata a la embajada o consulado que corresponda para que se proporcione la asistencia correspondiente.
11. Cuando la o las personas detenidas no hablen, no entiendan el idioma español, o tengan algún tipo de discapacidad que les impida comunicarse, la o el AMPF deberá proveer de traductor o intérprete y, en su caso, facilitar los medios tecnológicos que le permitan obtener de forma comprensible la información.
12. En cualquier caso, que involucre niñas, niños o adolescentes se considerarán los principios del Interés Superior de la Niñez, la prevalencia de sus derechos y su protección integral.
13. En el caso de que no se contare con un documento público, dictamen médico o cualquier otro dato de prueba para determinar si es niña, niño y/o adolescente, se presumirá que lo es. Desde el primer contacto debe existir acompañamiento de padre o tutor y/o de la Procuraduría Federal de Protección a niñas, niños y adolescentes.
14. Cuando la persona imputada tenga a su cuidado menores de edad, personas con alguna discapacidad o adultos mayores que dependan de ella, y no haya otra persona que pueda ejercer ese cuidado, la o el AMPF deberá canalizarlos a instituciones de asistencia social que correspondan, a efecto de que reciban la protección adecuada.
15. El personal de la PFM deberá realizar de forma inmediata los registros de detención y la o el AMPF el registro de la hora a la cual la persona detenida está a su inmediata disposición.



16. En caso de detención, el personal de la PFM y la o el AMPF deberán verificar si la persona imputada cuenta con antecedentes criminales y/o mandamientos judiciales y ministeriales pendientes de cumplimentar.
17. En el momento de la detención, cuando exista riesgo para la vida o integridad física de la víctima o persona ofendida, el personal de la PFM deberá garantizar la protección, facilitarle la atención médica y psicológica que para el caso requiera y dar aviso a la o el AMPF.
18. En el momento de la detención, el personal de la PFM y la o el AMPF deberá considerar lo previsto en las disposiciones relativas a la detención de mujeres en estado de gravidez, lactancia o reciente alumbramiento.
19. En caso de que la vida de la persona detenida corra peligro el personal de la PFM deberá tomar las medidas tendientes a garantizar su seguridad.
20. El personal de la PFM deberá canalizar la denuncia ante la o el AMPF y solo ante la imposibilidad de ello, podrá recibir la denuncia cumpliendo los requisitos que marca el CNPP.
21. La o el AMPF deberá privilegiar la intervención del personal Pericial en el procesamiento de los indicios o elementos materiales probatorios; solo en caso de que exista el riesgo inminente e inmediato de que estos se alteren, se pierdan o se destruyan, se le dará intervención inmediata al personal de la PFM con capacidades para procesar.
22. El personal de la PFM y personal Pericial deberán garantizar la integridad física de los indicios o elementos materiales probatorios, llevando a cabo su manejo y control con apego a los procedimientos establecidos en materia de cadena de custodia.
23. El personal de la PFM deberá allegarse de los datos necesarios para el esclarecimiento de los hechos bajo la conducción y mando de la o el AMPF.
24. La o el AMPF deberá realizar la solicitud de intervención a sus auxiliares suplementarios, las veces que sea necesario, con la finalidad de corroborar las hipótesis y la estrategia de investigación.
25. La o el AMPF antes de realizar una derivación al Órgano Especializado en Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, deberá practicar las diligencias urgentes e inaplazables para salvaguardar los indicios necesarios, para el caso de que se tenga que continuar con la investigación.
26. La o el AMPF podrá decretar la libertad en término del artículo 140 del CNPP, cuando la persona imputada sea detenida en flagrancia a efecto de que participe en un MASC y para ello deberá verificar previamente lo que dispone los artículos 168, 169, 170 y 179 de la ley adjetiva además de:
 - A. Que la víctima o persona ofendida haya manifestado su voluntad en participar en los Mecanismos Alternativos, previa comunicación con su Asesora o Asesor Jurídico, y
 - B. Que se garantice el pago de la reparación del daño.
27. La o el AMPF a efecto de cumplir a cabalidad con las obligaciones plasmadas en el artículo 131 fracciones V, VII y XXII, en relación con los diversos 212 último párrafo y 213 todos del CNPP, deberá recabar todos los datos de prueba necesarios para:
 - A) Esclarecer el hecho que la ley señala como delito;
 - B) Determinar la probabilidad de que la persona imputada lo cometió o participó en su comisión;
 - C) Individualizar la pena y reparación del daño.



28. La o el AMP a efecto de reparar el daño, deberá recabar los datos de prueba a efecto de:
- A) Identificar el tipo de daño ya sea físico, psicológico, material, o cualquier otro tipo de daño como consecuencia del ilícito cometido, el cual se haya ocasionado a la víctima o persona ofendida.
 - B) Valorar la gravedad del daño identificado.
 - C) Establecer el monto o cuantificación del daño identificado.
 - D) Obtener la información necesaria de otras autoridades o particulares con la finalidad de identificar bienes con los cuales sea posible garantizar la reparación del daño.
 - E) Solicitar a la o el Juez de Control providencias precautorias, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 138 del CNPP.
29. Cuando se identifiquen bienes directamente vinculados con la noticia del hecho, derivados del aseguramiento o localización en el lugar de los hechos o sean supervinientes de la Carpeta de Investigación (principal), la o el AMPF deberá seguir lo señalado en el Protocolo de Actuación Investigaciones Financieras Paralelas.

Handwritten signature or mark.

Handwritten signature or mark.

Handwritten mark.

Protocolo de Actuación de Investigación Ministerial



Roles de Participantes

Internos

Responsable	Descripción
Agente del Ministerio Público de la Federación	Conduce y dirige la investigación de un hecho que la ley señale como delito, promueve la pertinencia y oportunidad de aplicación de soluciones alternativas y formas de terminación anticipada del proceso, determina la Carpeta de Investigación y en su caso sustenta el ejercicio de la Acción Penal.
Personal de la Policía Federal Ministerial	Ejecuta materialmente la investigación, busca y aporta datos de prueba, asimismo realiza actos de investigación o elementos para el sustento de la teoría del caso.
Personal Pericial	Aporta el sustento científico técnico de la investigación, da asesoría técnico-científica con base en conocimiento especializado, procesa y valora los indicios o elementos materiales que sirven de base para la emisión de los dictámenes.

Handwritten signatures and initials.

Protocolo de Actuación de Investigación Ministerial

PGR

Procuraduría General de la Nación
Oficina de Investigación

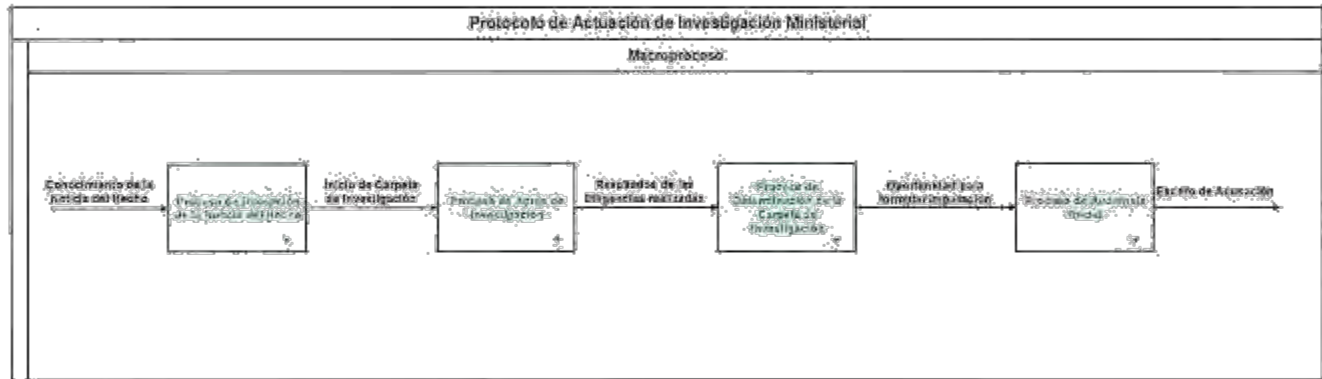
Externos

Actores	Descripción
Asesora o Asesor Jurídico	Informa y orienta a la víctima o persona ofendida, sobre sus derechos durante el procedimiento penal.
Autoridades	Dependencias gubernamentales del ámbito federal o local quienes reciben, atienden y proporcionan información que le solicitan.
Persona imputada	Interviene durante todo el procedimiento penal solicitando, manifestando e impugnando las decisiones que se dicten en él.
Jueza o Juez de Control	Autoriza técnicas de investigación con control judicial, califica la detención, vincula a proceso, impone medidas cautelares y establece el plazo de investigación complementaria.
Víctima o persona ofendida	Ofrece y aporta datos de prueba y coadyuva con la o el AMPF.



Modelado de Procesos

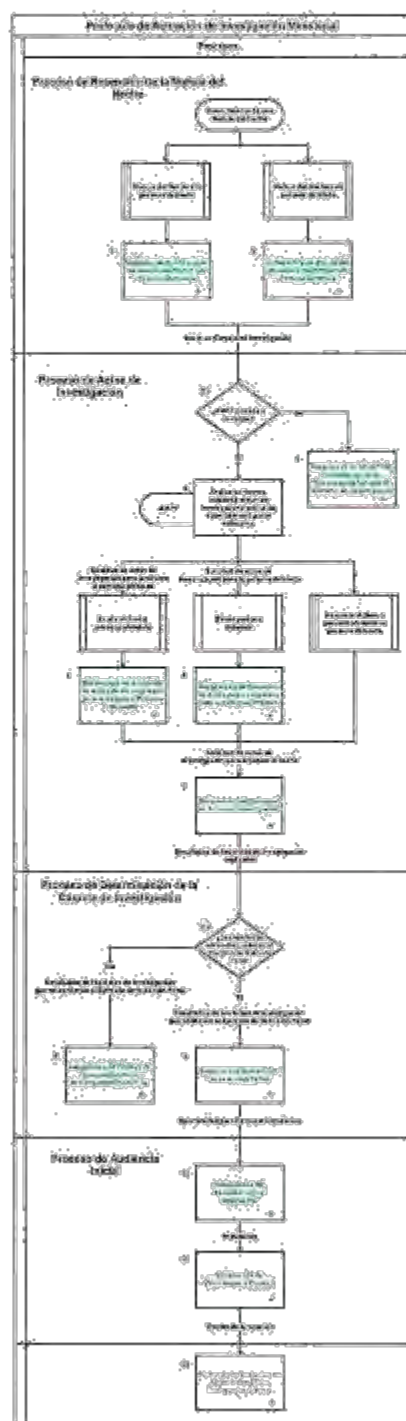
N3. Macroproceso. Protocolo de Actuación de Investigación Ministerial



[Firma manuscrita]

N4. Protocolo de Actuación de Investigación Ministerial

A. Diagrama de flujo. Protocolo de Actuación de Investigación Ministerial.





B. Descripción detallada, Protocolo de Actuación de Investigación Ministerial

El proceso de Recepción de la Noticia del Hecho se detona cuando se tiene conocimiento de una Noticia del Hecho y se sigue el camino de acuerdo con las siguientes opciones:

- A. Noticia del Hecho sin persona detenida
- B. Noticia del Hecho con persona detenida

Proceso de Recepción de la Noticia del Hecho

A. Noticia del Hecho sin persona detenida

1. Se ejecuta el "Subproceso de Recepción de Noticia del Hecho sin Persona Detenida".

Nota: Como resultado del subproceso se obtiene el Inicio de Carpeta de Investigación y continúa en la D1.
"¿La o el AMPF procede a investigar?"

B. Noticia del Hecho con persona detenida

2. Se ejecuta el "Subproceso de Recepción de Noticia del Hecho con Persona Detenida".

Nota: Como resultado del subproceso se obtiene el Inicio de Carpeta de Investigación y continúa en la D1.
"¿La o el AMPF procede a investigar?"

Proceso de Actos de Investigación

D1. ¿La o el AMPF procede a investigar?

- No procede a investigar
- 3. Continúa en el "Subproceso de Formas de Terminación de la Investigación Ministerial (Abstención de Investigar)".
- Sí procede a investigar
- 4. La o el AMPF analiza los hechos, establece el plan de investigación y solicita los actos de investigación necesarios.

Notas:

- Como resultado se obtiene la Solicitud de Actos de Investigación.
- En el caso de que se identifiquen bienes directamente vinculados con la recepción de la noticia del hecho, que necesiten ser investigados de manera paralela, la o el AMPF observará lo señalado en el Protocolo de Actuación Investigaciones Financieras Paralelas.

Existen tres caminos para los actos de investigación dependiendo las circunstancias:

- A. Existe víctima o persona ofendida
- B. Existe persona detenida
- C. No existe víctima o persona ofendida ni persona detenida



A. Existe víctima o persona ofendida

5. Ejecuta el "Subproceso de Ejecución de Actos de Investigación para la Víctima o Persona Ofendida".

Nota: Una vez realizado el proceso se obtiene la *Solicitud de actos de Investigación para acreditar el hecho* y continúa en la actividad 7. Ejecuta el "Subproceso de Ejecución de Actos de Investigación".

B. Existe persona detenida

6. Ejecuta el "Subproceso de Actos de Investigación para la Persona Detenida".

Nota: Una vez realizado el proceso se obtiene la *Solicitud de actos de Investigación para acreditar el hecho* y continúa en la actividad 7. Ejecuta el "Subproceso de Ejecución de Actos de Investigación".

C. No existe víctima o persona ofendida ni persona detenida

7. Ejecuta el "Subproceso de Ejecución de Actos de Investigación".

Nota: Como consecuencia del subproceso se obtiene los *Resultados de los Actos de Investigación realizados*.

Proceso de Determinación de la Carpeta de Investigación

D2. ¿Los resultados obtenidos conllevan al Ejercicio de la Acción Penal?

- Los resultados obtenidos no conllevan al Ejercicio de la Acción Penal
- 8. Continúa en el "Subproceso de Formas de Terminación de la Investigación Ministerial".
- Los resultados obtenidos conllevan al Ejercicio de la Acción Penal
- 9. Ejecuta el "Subproceso de Ejercicio de la Acción Penal".

Nota: Como resultado del subproceso se obtiene la *Oportunidad para Formular Imputación*.

Proceso de Audiencia Inicial

10. Ejecuta el "Subproceso de Formulación de Imputación".

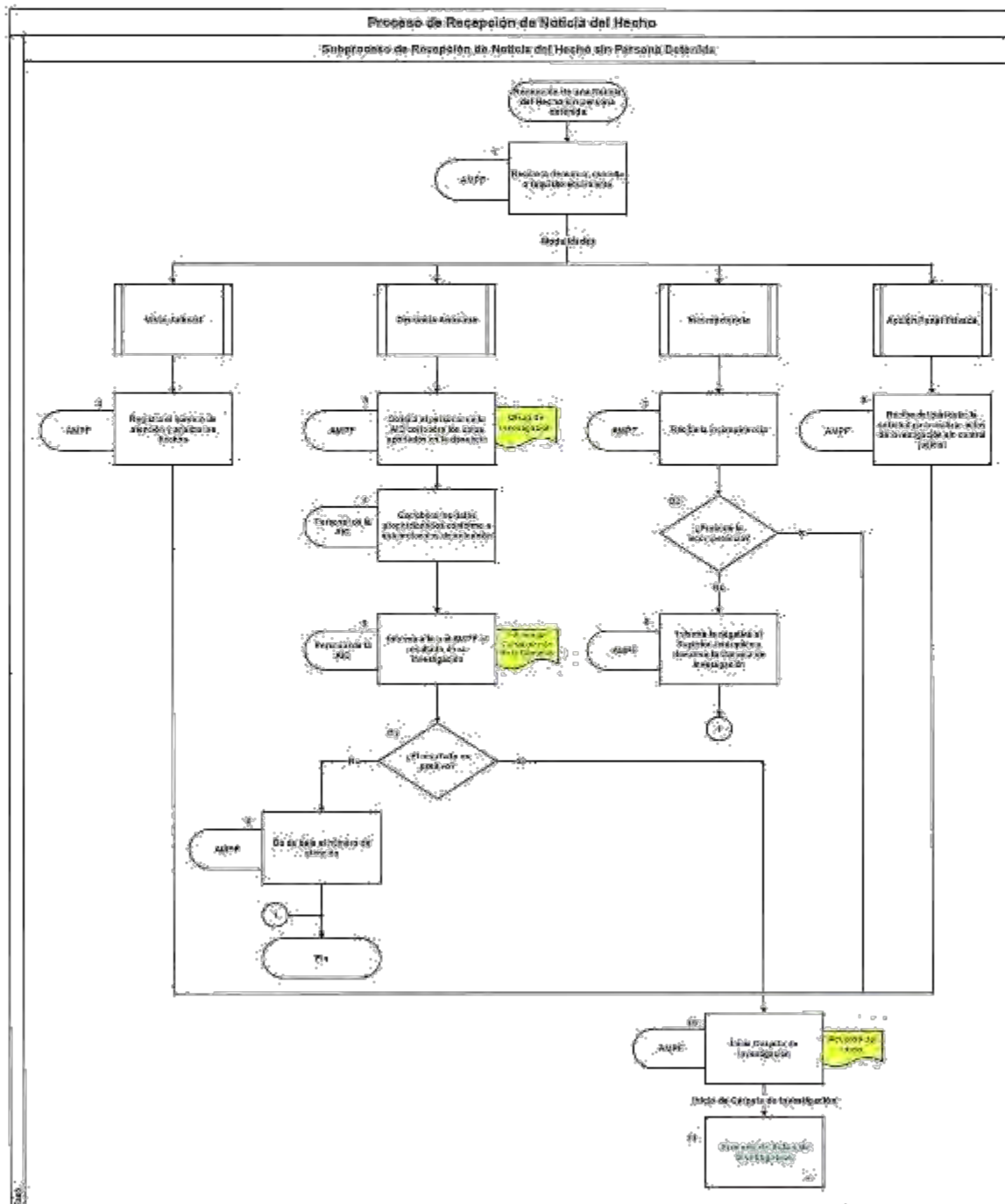
Nota: Como resultado del subproceso se obtiene la *Imputación*.

11. Ejecuta el "Subproceso de Vinculación a Proceso".

Nota: Como resultado del subproceso se elabora el *Escrito de Acusación*, el cual será la entrada para el siguiente Protocolo.

12. Continúa en el "Protocolo de Actuación de Etapa Intermedia o Preparación a Juicio".

C. Diagrama de flujo. Subproceso de Recepción de Noticia del Hecho sin Persona Detenida



D: Descripción detallada. Subproceso de Recepción de Noticia del Hecho sin Persona Detenida

Inicia con la recepción de una Noticia del Hecho sin persona detenida.

1. La o el AMPF recibe la denuncia, querella o requisito equivalente.

Notas:

- Cualquier persona puede denunciar la comisión de un hecho que la ley señale como delito y la persona facultada o legitimada puede presentar la querella o requisito equivalente.
- La denuncia se puede presentar por escrito u oralmente en la sede ministerial, así como por cualquier medio, como lo es un correo electrónico, llamada telefónica, red social, entre otros y en ella deberá contener (salvo las denuncias anónimas) la información de quien denuncia, como domicilio, la narración de los hechos, la identificación de quien o quienes cometieron el hecho o de las personas que lo hayan presenciado y todo cuanto le constare a la persona denunciante. La querella o requisito equivalente deberá contener las mismas precisiones que la denuncia.

Con base en la denuncia, querella o requisito equivalente, se derivan las siguientes modalidades:

- A. Vista Judicial
- B. Denuncia Anónima
- C. Incompetencia
- D. Acción Penal Privada

A. Vista Judicial

2. La o el AMPF registra el número de atención y analiza los hechos.

Continúa en la actividad 10. Inicia Carpeta de Investigación.

Nota: La o el AMPF analizará, clasificará y registrará el asunto en el sistema informático de la PGR.

B. Denuncia Anónima

Nota: La denuncia anónima se puede presentar por cualquier medio como lo es un correo electrónico, llamada telefónica, red social, entre otros. Asimismo, se puede presentar en la sede ministerial.

3. La o el AMPF solicita al personal de la AIC corrobore los datos aportados en la denuncia.

Nota: Genera Oficio de Investigación.

4. Personal de la AIC corrobora los datos proporcionados conforme a sus protocolos de actuación.
5. Personal de la AIC informa a la o el AMPF el resultado de su investigación.

Nota: Genera Informe de Corroboración de la Denuncia.



D1. ¿El resultado es positivo?

- El resultado es positivo

Continúa en la actividad 10: *Inicia Carpeta de Investigación.*

- El resultado no es positivo

6. La o el AMPF da de baja el número de atención.

Nota: La o el AMPF no deberá determinar una abstención de investigar por no tratarse de una Carpeta de Investigación.

Finaliza el subproceso.

C. Incompetencia

7. La o el AMPF recibe la incompetencia.

Nota: La o el AMPF recibe la Carpeta de Investigación por parte del homólogo federal o local para analizar los hechos y determinar si los mismos son de su competencia.

D2. ¿Procede la incompetencia?

- No procede la incompetencia

8. La o el AMPF informa la negativa al Superior Jerárquico y devuelve la Carpeta de Investigación.

Finaliza el subproceso.

- Si procede la incompetencia

Continúa en la actividad 10: *Inicia Carpeta de Investigación.*

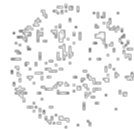
D. Acción Penal Privada

9. La o el AMPF recibe del particular la solicitud para realizar actos de investigación sin control judicial.

10. La o el AMPF inicia Carpeta de Investigación.

Nota: Genera Acuerdo de Inicio.

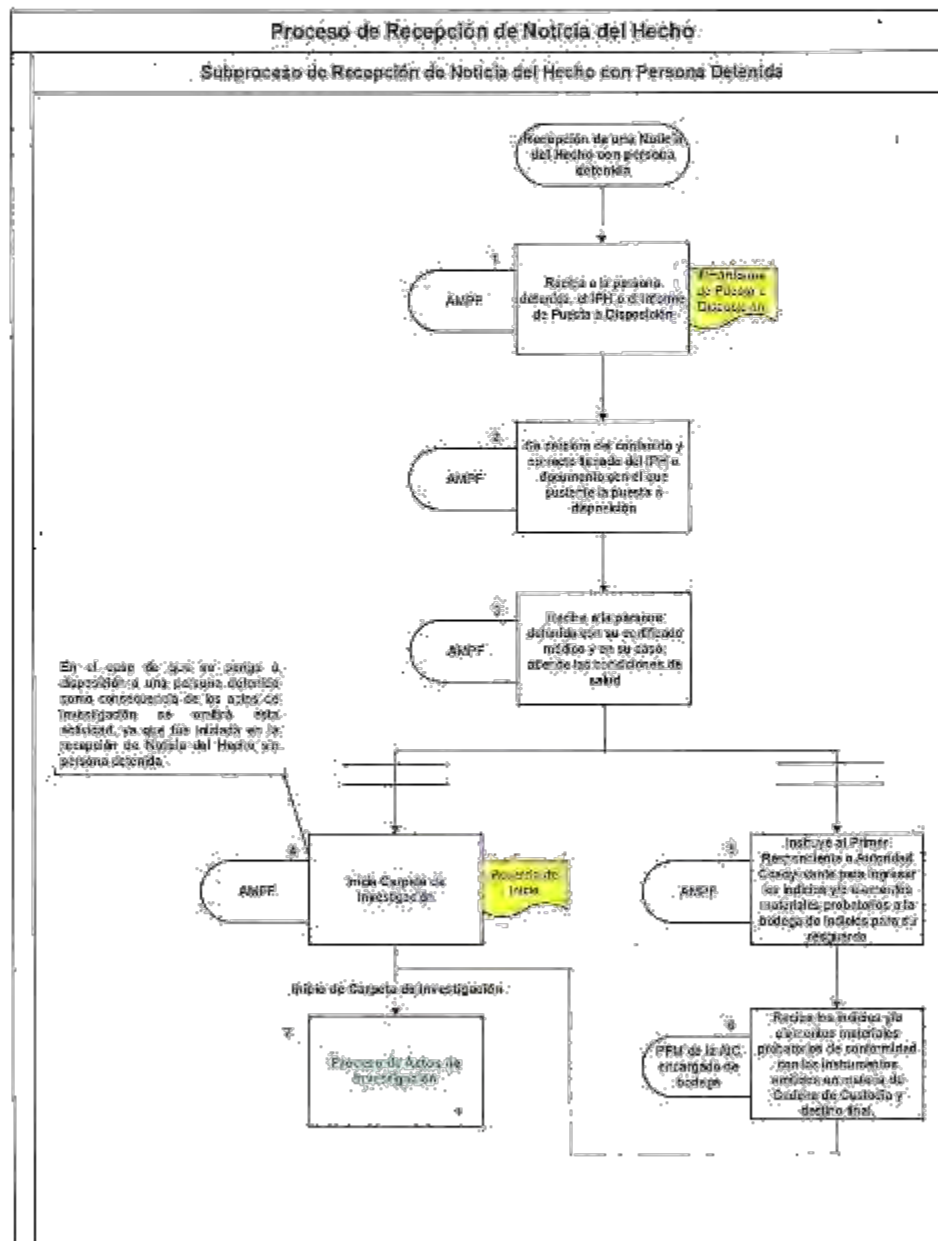
11. Continúa en el "Proceso de Actos de Investigación".



Subproceso de Recepción de Noticia del Hecho con Persona Detenida

N5. Subproceso de Recepción de Noticia del Hecho con Persona Detenida

E: Diagrama de flujo: Subproceso de Recepción de Noticia del Hecho con Persona Detenida





F. Descripción detallada. Subproceso de Recepción de Noticia del Hecho con Persona Detenida

Inicia con la recepción de una Noticia del Hecho con persona detenida.

1. La o el AMPF recibe a la persona detenida, el IPH o el Informe de Puesta a Disposición.

Notas:

- La detención la puede realizar cualquier policía (municipal, estatal o federal), alguna Autoridad Coadyuvante e inclusive cualquier persona que presencie algún hecho que la ley señala como delito, entregando a la autoridad más próxima a la persona detenida.
 - La o el AMPF recibe el IPH o Informe de Puesta a Disposición recabado por el Primer Respondiente y/o Autoridad Coadyuvante.
2. La o el AMPF se cerciora del contenido y correcto llenado del IPH o documento con el que se sustente la puesta a disposición.
 3. La o el AMPF recibe a la persona detenida con el certificado médico y en su caso, atiende las condiciones de salud.

En paralelo se ejecutan las actividades 4 y 5.

4. La o el AMPF inicia Carpeta de Investigación.

Notas:

- En el caso de que se ponga a disposición a una persona detenida como consecuencia de los actos de investigación se omitirá esta actividad, ya que fue iniciada en la recepción de Noticia del Hecho sin persona detenida.
- Genera Acuerdo de Inicio.
- Tratándose de personas detenidas en flagrancia y a las que se le haya impuesto como medida cautelar la prisión preventiva, se estará a lo dispuesto en el artículo 20 de la LNMASGMP a efecto de que participe en un Acuerdo Reparatorio con base en el "Protocolo de Soluciones Alternas".

Continúa en actividad 7. Continúa en el "Proceso de Actos de Investigación".

5. La o el AMPF instruye al Primer Respondiente o Autoridad Coadyuvante para ingresar los indicios y/o elementos materiales probatorios a la bodega de indicios para su resguardo.

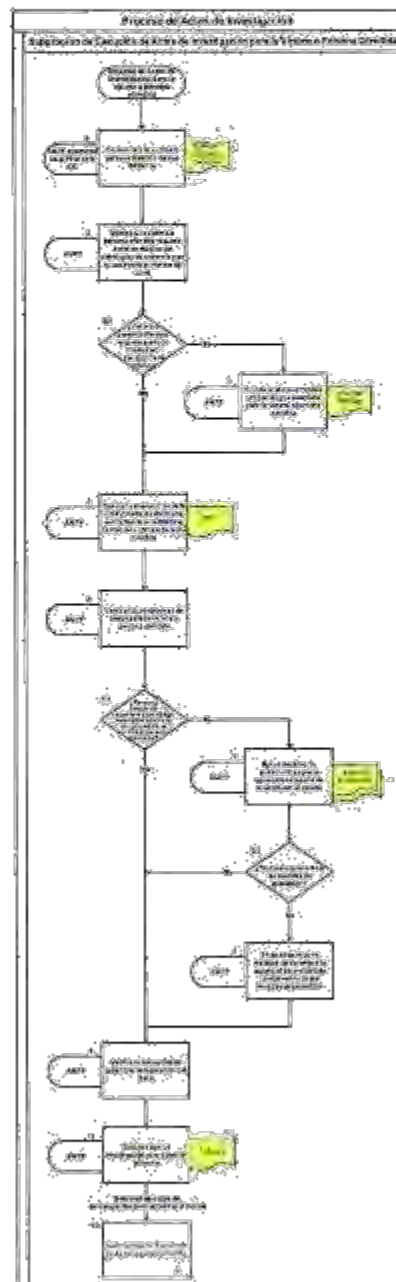
Nota: El personal de la PFM de la AIC encargado de la bodega de indicios recibe los indicios y/o elementos probatorios del Primer Respondiente o Autoridad Coadyuvante acompañados del RCC para cada uno de los indicios, los cuales quedarán bajo su guarda y custodia dentro de la bodega de indicios o en el lugar designado para tal fin, y a disposición de la o el AMPF.

6. Personal de la PFM de la AIC encargado de bodega recibe los indicios y/o elementos materiales probatorios de conformidad con los instrumentos emitidos en materia de Cadena de Custodia y destino final.

7. Continúa en el "Proceso de Actos de Investigación".

N5. Subproceso de Ejecución de Actos de Investigación para la Víctima o Persona Ofendida

G. Diagrama de Flujo, Subproceso de Ejecución de Actos de Investigación para la Víctima o Persona Ofendida



H. Descripción detallada. Subproceso de Ejecución de Actos de Investigación para la Víctima o Persona Ofendida

El subproceso se detona cuando existe una **Solicitud de Actos de Investigación para la víctima o persona ofendida**.

1. La o el AMPF o personal de la PFM de la AIC da lectura a la víctima o persona ofendida de sus derechos.

Nota: Genera Carta de Lectura de Derechos.

2. La o el AMPF verifica si la víctima o persona ofendida requiere atención médica y/o psicológica de urgencia y en su caso para el manejo de crisis.

D1. ¿La víctima o persona ofendida requiere atención médica y/o psicológica de urgencia?

- **Si requiere atención**

3. La o el AMPF solicita la atención médica y/o psicológica inmediata para la víctima o persona ofendida.

- La o el AMPF solicita la intervención del personal especialista en materia de medicina o de psicología a efecto de brindar la atención necesaria a la víctima o persona ofendida; así mismo la o el AMPF puede instruir al personal de la PFM de la AIC para que lo solicite.

- Genera el Oficio de Solicitud.

- **No requiere atención**

4. La o el AMPF solicita la intervención de la CEAV mediante oficio una vez teniendo acreditada la calidad de víctima o persona ofendida.

Notas:

- Previo a solicitar la intervención de la CEAV debe tenerse acreditada la calidad de víctima de conformidad con lo establecido en el artículo 4 de la Ley General de Víctimas. La o el AMPF debe considerar que no siempre quien denuncia tiene la calidad de víctima, circunstancia que no impide la continuidad del proceso.

- Genera Oficio

- En el Oficio se deberá solicitar como mínimo los siguientes puntos:

1. Designación de una Asesora o Asesor Jurídico
2. Solicitud de atención integral
3. Inscripción al RENAVI

- En caso de ser necesario la o el AMPF solicitará la compensación subsidiaria para la víctima a la CEAV.

5. La o el AMPF verifica las condiciones de riesgo para la víctima o persona ofendida.

D2. ¿La persona imputada representa un riesgo inminente contra la seguridad de la víctima o persona ofendida?

- No representa un riesgo

Continúa en la actividad 8. Verifica la necesidad de garantizar la reparación del daño.

- Si representa un riesgo

6. La o el AMPF aplica medidas de protección, según lo considere necesario de acuerdo con el asunto.

Notas:

- Genera Acuerdo y Notificación.

- La o el AMPF en caso de imponer alguna de las medidas previstas en los primeros 3 incisos del artículo 137 del CNPP guardará el cuidado de solicitar dentro de los 5 días siguientes a la audiencia a la o el Juez de Control a fin de ratificar las mismas.

D3. ¿Se dio cumplimiento a las medidas de protección?

- Si se dio cumplimiento a las medidas de protección

Continúa en la actividad 8. Verifica la necesidad de garantizar la reparación del daño.

- No se dio cumplimiento a las medidas de protección

7. La o el AMPF en su caso impone medidas de apremio a la autoridad para el debido cumplimiento de las medidas de protección.

Nota: En caso de incumplimiento a las medidas de protección, la o el AMPF podrá imponer medidas de apremio de conformidad con lo establecido en el artículo 104, en relación con el numeral 137, párrafo tercero, del CNPP.

8. La o el AMPF verifica la necesidad de garantizar la reparación del daño.

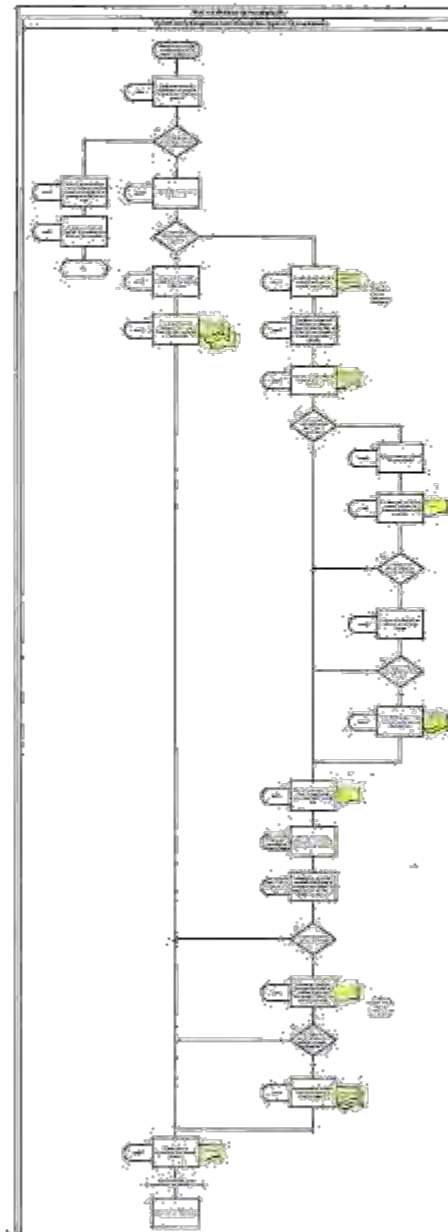
Nota: En caso de ser necesario solicita providencias precautorias ante la o el Juez de Control, como el embargo de bienes o inmovilización de cuentas y demás valores que se encuentren dentro del sistema financiero.

9. La o el AMPF solicita actos de investigación para acreditar el hecho.

10. Continúa en el "Subproceso de Ejecución de Actos de Investigación".



I. Diagrama de flujo. Subproceso de Ejecución de Actos de Investigación para la Persona Detenida:





J. Descripción detallada. Subproceso de Ejecución de Actos de Investigación para la Persona Detenida.

El subproceso se detona cuando existe una *Solicitud de Actos de Investigación para la persona detenida*.

1. La o el AMPF verifica que se hayan garantizado los derechos humanos de la persona detenida.

D1. ¿Se trata de alguna persona en situación de vulnerabilidad?

- Si se trata de una persona en situación de vulnerabilidad

2. La o el AMPF aplica la ley especial y el protocolo correspondiente a la persona en situación de vulnerabilidad de que se trate.
3. La o el AMPF remite en su caso, la Carpeta de Investigación a la Unidad Especializada.

Nota: Como resultado se tiene un asunto que involucre a persona en situación de vulnerabilidad.

Finaliza el subproceso.

- No se trata de alguna persona en situación de vulnerabilidad

4. La o el AMPF examina las condiciones de la detención.

D2. ¿La detención se realizó conforme a derecho?

- No se realizó conforme a derecho

5. La o el AMPF dispone la inmediata libertad de la o las personas detenidas.

Nota: Cuando se decreta la libertad de una persona durante la Investigación Ministerial, porque su detención no se realizó conforme a lo señalado en la CPEUM y el CNPP, no lo exime de su responsabilidad penal en el hecho que la ley señala como delito, únicamente no se decreta su legal retención por parte de la o el AMPF, pero la investigación en su contra continuará.

Antes de que abandone la sede ministerial, la elección de la persona detenida puede declarar en presencia de su Defensora o Defensor particular o Público Federal, en relación con los hechos denunciados.

6. La o el AMPF da vista al Superior Jerárquico del Primer Respondiente o Autoridad Coadyuvante.

Nota: Genera Acuerdo, Notificación y Oficio de Vista.

Continúa en la actividad 19. *"Solicita actos de investigación para acreditar el hecho"*.

- Si se realizó conforme a derecho.

7. La o el AMPF acuerda la retención de la persona detenida y le notifica dicho acuerdo.

Notas:

- Genera Acuerdo y Notificación.



- La o el AMPF cuenta con el término de 48 horas a partir de que la persona detenida es puesta a su disposición materialmente en la sede ministerial para resolver su situación jurídica, término que podrá duplicarse hasta 96 horas si se trata de delincuencia organizada.

- La o el AMPF solicita se designe una Defensora o Defensor Público Federal, en caso de que la persona detenida no nombre a una defensa privada.

Nota: De conformidad con el artículo 115 del CNPP, la persona imputada podrá designar a quien lo defenderá desde su detención, con independencia que con posterioridad podrá revocarlo. La o el Defensor deberá ser una persona con licenciatura en derecho o persona abogada titulada con la cédula profesional, calidad que podrá verificarse en la página de internet "Registro Nacional de Profesionistas" de la Secretaría de Educación Pública.

- La o el AMPF hace del conocimiento sus derechos a la persona detenida.

Notas:

- Para la creación de las constancias, la o el AMPF se apoyará del sistema informático con que cuente la PGR.
- Genera Constancia.

D3. ¿La persona detenida presenta daño físico o psicológico?

- No presenta daño

Continúa en la actividad 14. "Ordena el resguardo de la persona detenida al personal de la PFM de la AIC".

- Si presenta daño

- La o el AMPF ordena la atención médica correspondiente.

Notas:

- De manera oficiosa la o el AMPF solicitará el dictamen médico correspondiente, a efecto de precisar si existe daño físico o psicológico.
- En caso de que la persona detenida presente lesiones las cuales debieran ser atendidas en un hospital, personal de la policía que en su caso designe la o el AMPF de acuerdo con las leyes aplicables, trasladará y custodiara durante todo el tiempo que se encuentre recibiendo atención médica a dicha persona.

- La o el AMPF solicita al personal Pericial Médico de la AIC el dictamen de Mecánica de Lesiones.

Nota: Genera Oficio.

D4. ¿Las lesiones fueron originadas en la detención?

- No fueron originadas en la detención



Subproceso de Ejecución de Actos de Investigación para la Persona Detenida

- Si requiere querrela o requisito equivalente

- La o el AMPF notificará a la persona facultada a través de oficio, correo electrónico, llamada telefónica o cualquier medio digital, debiendo dejar la constancia correspondiente. La presentación de la querrela o requisito equivalente se podrá presentar en forma oral, por escrito o a través de medios digitales.
- Existen tres supuestos para determinar la temporalidad para presentar la querrela o requisito equivalente: 12 horas a partir de la localización y legal notificación de la persona facultada; 24 horas si no se ha localizado y 48 horas si se encuentra imposibilitada.
- Genera Oficio.

- No se obtuvo en tiempo y forma

- **Genera Acuerdo, Notificación y Oficio.**

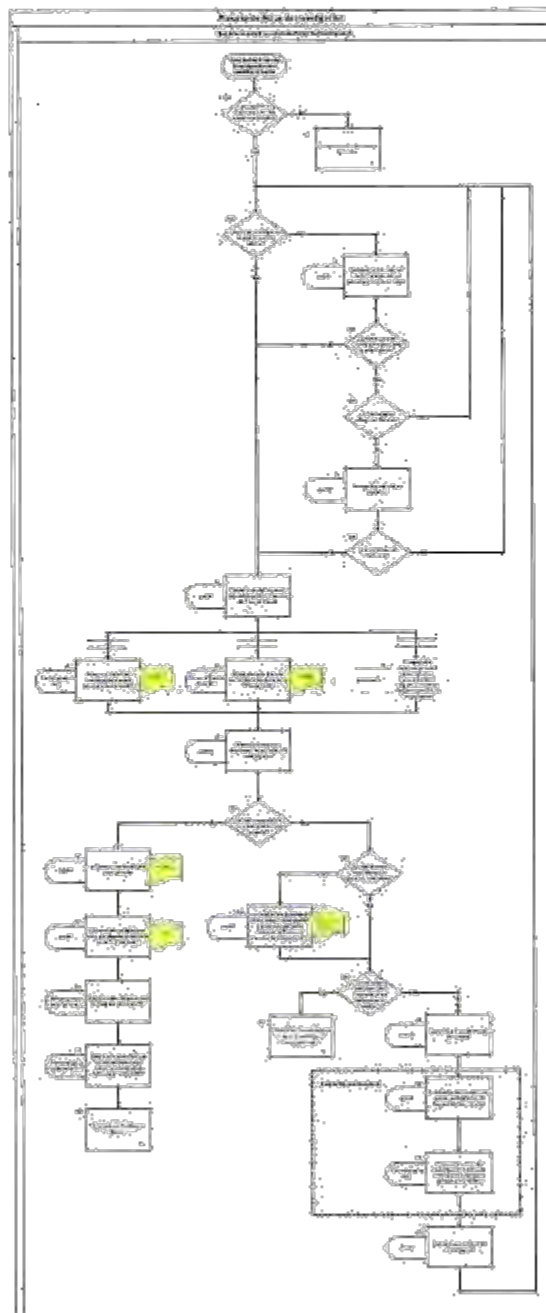
- Si se obtuvo en tiempo y forma

- **General Solicitude.**

20. Continúa en el "Subproceso de Ejecución de Actos de Investigación".

N5. Subproceso de Ejecución de Actos de Investigación

K. Diagrama de flujo. Subproceso de Ejecución de Actos de Investigación



L. Descripción detallada. Subproceso de Ejecución de Actos de Investigación

El subproceso se detona con la *Solicitud de Actos de Investigación para acreditar el hecho*.

Nota: La solicitud es sobre actos de investigación acordados en Sala de Mando.

D1. ¿Se puede llevar a cabo una Solución Alternativa del proceso?

Nota: De conformidad con el artículo 184 del CNPP existen dos formas de solución alternativa del proceso: I. Acuerdo Reparatorio y II. Suspensión condicional del proceso. El primero procede desde la presentación de la denuncia o querrela hasta antes del auto de apertura a juicio oral y el segundo procede cuando se ha dictado auto de vinculación a proceso hasta antes de la apertura a juicio.

- Si se puede llevar a cabo una solución alternativa
- 1. Continúa en el "Protocolo de Soluciones Alternativas".
- No se puede llevar a cabo una solución alternativa

D2. ¿Los actos de investigación requieren control judicial?

- No requieren control judicial

Continúa en la actividad 4. "*Ordena ejecutar los actos de investigación en sesión de Sala de Mando*".

- Si requieren control judicial

Nota: Se atenderá lo previsto en el artículo 252 del CNPP.

- 2. La o el AMPF solicita a la o el Juez de Control la autorización judicial por cualquier medio.

D3. ¿La o el Juez de Control autoriza el acto de investigación?

- Si autoriza

Continúa en la actividad 4. "*Ordena ejecutar los actos de investigación en sesión de Sala de Mando*".

- No autoriza

D4. ¿Es procedente interponer el recurso?

- No es procedente

Regresa a la D2: "*¿Los actos de investigación requieren control judicial?*".

- Si es procedente

- 3. La o el AMPF interpone el recurso de apelación.



D5. ¿La resolución es favorable?

- No es favorable

Regresa a la D2. "¿Los actos de Investigación requieren control judicial?"

- Si es favorable

4. La o el AMPF ordena ejecutar los actos de Investigación en sesión de Sala de Mando.

En paralelo se ejecutan las actividades 5, 6 y 7.

5. Personal de la AIC realiza los actos de Investigación y emite informe a la o el AMPF.

6. Personal Pericial de la AIC emite peritajes a la o el AMPF y/o al personal de la PFM de la AIC.

7. La autoridad proporciona información sobre antecedentes, nombres, videos, registros y hechos relacionados con la investigación.

8. La o el AMPF recibe y analiza los resultados de los actos de investigación.

D6. ¿Existen circunstancias para decretar el caso urgente?

- Si existen circunstancias para decretar el caso urgente

9. La o el AMPF acuerda la detención por caso urgente.

Notas:

- El acuerdo deberá enunciar el hecho que la ley señala como delito grave, la motivación para determinar el riesgo de que la persona imputada se sustraiga de la acción de la justicia y que, por razones de la hora, lugar o circunstancia, no se pueda ocurrir ante la autoridad judicial.
- Genera Acuerdo.

10. La o el AMPF emite orden de detención por caso urgente al personal de la PFM de la AIC.

Nota: Genera Oficio.

11. Personal de la PFM de la AIC ejecuta la orden de detención emitida por la o el AMPF.

12. Personal de la PFM de la AIC registra la detención, da lectura de derechos y presenta a la persona detenida ante la o el AMPF.

13. Continúa en el "Proceso de Audiencia Inicial".

- No existen circunstancias para decretar el caso urgente

D7. ¿Existen objetos, instrumentos o productos del delito?

- Si existen objetos, instrumentos o productos del delito



14. La o el AMPF acuerda el aseguramiento de los objetos, instrumentos o productos del delito conforme al Protocolo Nacional de Aseguramiento.

Notas:

- Genera Acuerdo.
- En el caso de que se identifiquen bienes derivados del aseguramiento o localizados en el lugar de los hechos, que necesiten ser investigados de manera paralela, la o el AMPF observará lo señalado en el Protocolo de Actuación Investigaciones Financieras Paralelas.
- No existen objetos, instrumentos o productos del delito

- D8. ¿Los resultados obtenidos son suficientes para determinar el asunto?

- No son suficientes

15. La o el AMPF convoca a Sala de Mando Ministerial.

16. La o el AMPF expone los hechos del caso que se analizará con el Equipo de Investigación.

17. Personal de la AIC propone los actos de investigación, fuentes de información y periciales acordes a los hechos.

18. La o el AMPF define nuevas líneas de investigación.

Nota: En el caso de que el Equipo de Investigación obtenga resultados negativos puede replantearse la estrategia a través de un nuevo Plan de Investigación.

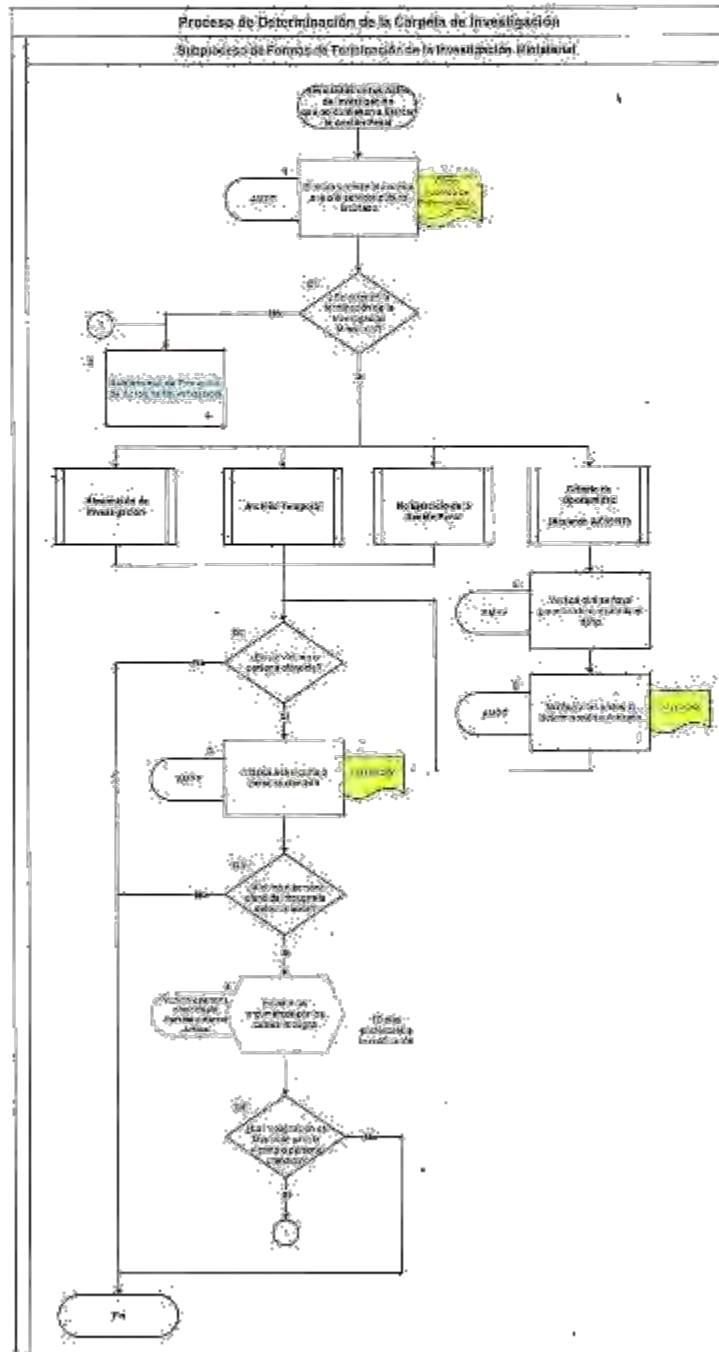
Regresa a la D2. "¿Los actos de investigación requieren control judicial?"

- Sí son suficientes

Nota: Se debe analizar si el cúmulo de datos de prueba que obran dentro de la Carpeta de Investigación, son suficientes para que la o el AMPF determine y resuelva el expediente tomando en consideración la garantía o reparación del daño a la víctima o persona ofendida y en su caso si justifican el monto de la reparación del daño. Asimismo, deberá valorarse la necesidad de desahogar, si fuera el caso la prueba anticipada, de conformidad con el artículo 304-306 del CNPP.

19. Continúa en el "Proceso de Determinación de la Carpeta de Investigación".

M. Diagrama de flujo. Subproceso de Formas de Terminación de la Investigación Ministerial





N. Descripción detallada. Subproceso de Formas de Terminación de la Investigación Ministerial

El subproceso se detona con los Resultados de los Actos de Investigación que no conlleven a Ejercer la Acción Penal.

1. La o el AMPF elabora y remite el acuerdo a la o el servidor público facultado.

Notas:

- Genera Acuerdo de Determinación y Oficio.
- Para el caso de Archivo Temporal, la o el AMPF deberá girar oficio a la Unidad de Análisis Criminal a efecto de que continúe con la investigación.

D1. ¿Se autorizó la terminación de la Investigación Ministerial?

- No se autoriza

Nota: La o el AMPF procede a practicar nuevos actos de investigación.

2. Regresa al **"Subproceso de Ejecución de Actos de Investigación"**.

- Sí se autoriza

Formas de terminación de la Investigación Ministerial

- A. Abstención de Investigación
- B. Archivo Temporal
- C. No Ejercicio de la Acción Penal
- D. Criterio de Oportunidad

Nota: La o el AMPF además dentro de la investigación ministerial podrá acordar:

- a) Incompetencia;
- b) Acumulación;
- c) Separación de investigación; o
- d) Recanalización.

A. Abstención de Investigación

Continúa en la D2. **"¿Existe víctima o persona ofendida?"**.

B. Archivo Temporal

Continúa en la D2. **"¿Existe víctima o persona ofendida?"**.

C. No Ejercicio de la Acción Penal

Página | 35

D2. ¿Existe víctima o persona ofendida?

- No existe víctima o persona ofendida

Finaliza el subproceso.

- Si existe víctima o persona ofendida

3. La o el AMPF notifica a la víctima o persona ofendida.

Nota: Genera Notificación

D3. ¿La víctima o persona ofendida impugna la determinación?

- La víctima o persona ofendida no impugna la determinación

Finaliza el subproceso.

- La víctima o persona ofendida impugna la determinación

4. La víctima o persona ofendida y/o Asesora o Asesor Jurídico expone los argumentos por los cuales impugna.

Nota: La víctima o persona ofendida tiene un periodo para impugnar la determinación de 10 días posteriores a la notificación, de acuerdo con el artículo 258 del CNPP.

D4. ¿La impugnación es favorable para la víctima o persona ofendida?

- La impugnación es favorable

Continúa en la actividad 2. Regresa al "Subproceso de Ejecución de Actos de Investigación".

- La impugnación no es favorable

Finaliza el subproceso.

D. Criterio de Oportunidad

Nota: Debe considerarse lo dispuesto en el artículo 256 del CNPP, así como en el Acuerdo A/099/17 por el que se establecen los criterios generales para la aplicación de los criterios de oportunidad.

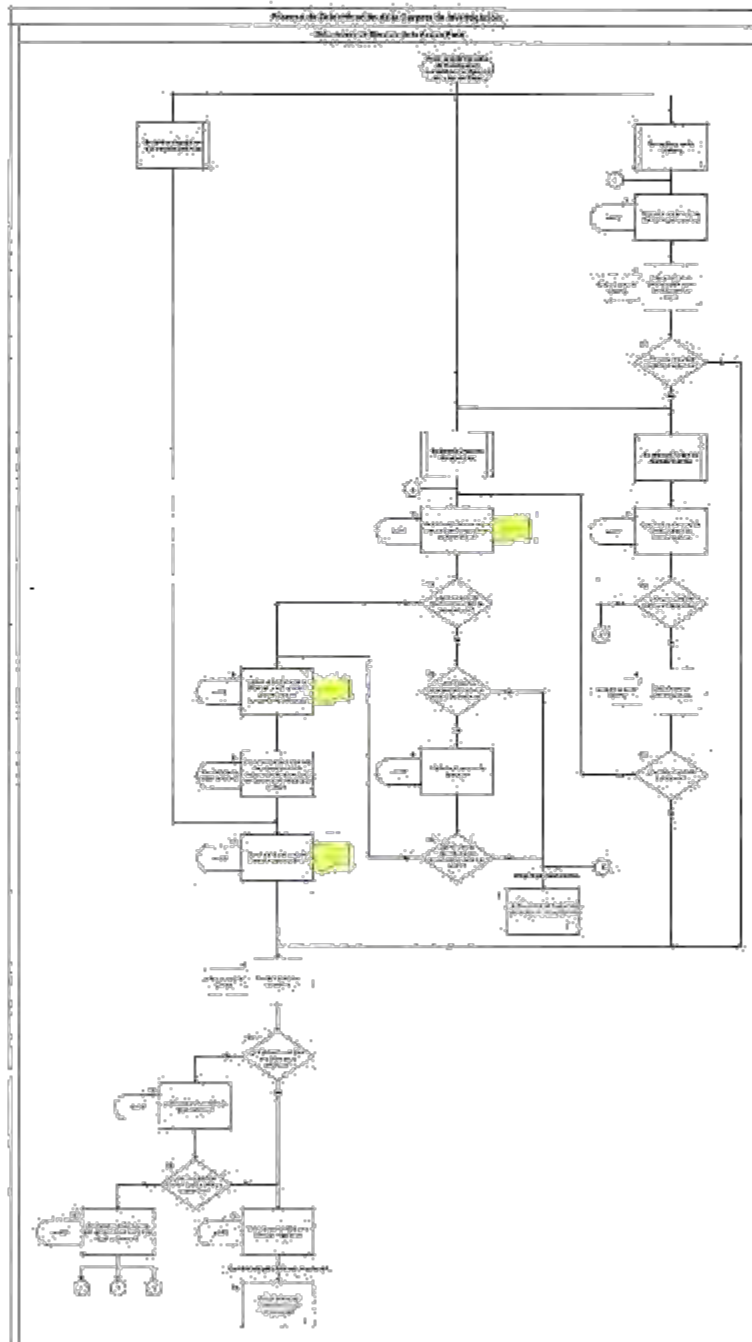
5. La o el AMPF verifica que se haya garantizado o reparado el daño.

6. La o el AMPF notifica a las partes la determinación autorizada.

Continúa en la D2. "¿Existe víctima o persona ofendida?"

Nota: Genera Notificación

O. Diagrama de flujo. Subproceso de Ejercicio de la Acción Penal



P. Descripción detallada. Subproceso de Ejercicio de la Acción Penal

El subproceso se detona con los Resultados de los Actos de Investigación que conllevan al Ejercicio de la Acción Penal.

Nota: La o el AMPF podrá decretar la libertad en términos del artículo 140 del CNPP, cuando la persona imputada sea detenida en flagrancia, para ello deberá verificar previamente lo que disponen los artículos 168, 169, 170 y 179 de la ley adjetiva.

Existen tres opciones para conducir a la persona detenida a la Audiencia Inicial ante la o el Juez de Control dependiendo la necesidad de cautela:

- A. Se tiene a disposición a la persona detenida**
- B. Se requiere emitir citatorio**
- C. Se solicita Orden de Aprehesión**

- A. Se tiene a disposición a la persona detenida**

Continúa en la actividad 10. "Solicita a la o el Juez de Control Audiencia Inicial".

- B. Se requiere emitir citatorio**

- 1. La o el AMPF solicita a la o el Juez de Control Audiencia Inicial.**

Nota: La solicitud se puede realizar a través de cualquier medio que garantice su autenticidad toda vez que la o el AMPF decretó la libertad de la persona imputada, antes de fenecer las 48 horas de conformidad con el artículo 140 del CNPP.

- 2. La o el Juez de Control cita a las partes para la celebración de la Audiencia Inicial.**

D1. ¿La persona imputada acude a la audiencia?

- Sí acude a la audiencia**

Continúa en la actividad 11. "Declara abierta la audiencia".

- No acude a la audiencia**

Notas:

- Si la persona imputada justifica su inasistencia, la o el Juez de Control le girará nueva cita y le notificará a la o el AMPF la determinación.
- La falta de presentación por parte de la persona imputada a la cita es motivo para que la o el AMPF considere solicitar uno de los siguientes supuestos: I. Orden de Comparecencia y II. Orden de Aprehesión.

- Se requiere Orden de Comparecencia**

- 3. La o el AMPF solicita a la o el Juez de Control Orden de Comparecencia.**



Nota: La o el Juez de Control puede prever a la o el AMPF a efecto de que precise o aclare algún dato dentro de su solicitud.

D2. ¿La o el Juez de Control emite la orden?

- No emite la orden

Continúa en la actividad 7. *Regresa al "Subproceso de Ejecución de Actos de Investigación".*

- Sí emite la orden

- 4. La Jueza o Juez de Control dicta Orden de Comparecencia.

D3. ¿La persona imputada comparece?

- Sí comparece

Continúa en la actividad 11. *"Declara abierta la audiencia".*

- No comparece

- C. Se requiere Orden de Aprehensión

- 5. La o el AMPF mediante escrito solicita a la o el Juez de Control Orden de Aprehensión.

Notas:

- La solicitud también se puede pedir en audiencia privada con la o el Juez de Control, donde se expondrán las motivaciones y fundamentos por los que se solicita la Orden de Aprehensión, como la necesidad de cautela, resistencia o evasión a la comparecencia.
- Genera Escrito.

D4. ¿La o el Juez de Control libra Orden de Aprehensión?

- Sí libra Orden de Aprehensión

Continúa en la actividad 8. *"Remite al personal de la PFM de la AIC la orden judicial para su cumplimiento inmediato".*

- No libra Orden de Aprehensión

D5. ¿La o el AMPF estima procedente interponer recurso de apelación?

- Sí estima procedente interponer recurso

- 6. La o el AMPF interpone el recurso de apelación.

- No estima procedente interponer recurso

- 7. Regresa al "Subproceso de Ejecución de Actos de Investigación".

[Firmas y sellos manuscritos]
Página | 39

Protocolo de Actuación de Investigación Ministerial



Proceso de Determinación de la Carpeta de Investigación

Subproceso de Ejercicio de la Acción Penal

Nota: El regreso al "Subproceso de Ejecución de Actos de Investigación" se debe a que los actos son insuficientes para la determinación.

D6. ¿El recurso es favorable a las pretensiones de la o el AMPF?

- No es favorable

Continúa en la actividad 7. Regresa al "Subproceso de Ejecución de Actos de Investigación".

- Sí es favorable

8. La o el AMPF remite al personal de la PFM de la AIC la orden judicial para su cumplimiento inmediato

Nota: Genera Oficio.

9. Personal de la PFM de la AIC da cumplimiento y deja a la persona imputada a disposición de la o el Juez de Control e informa a la o el AMPF.

10. La o el AMPF solicita a la o el Juez de Control Audiencia Inicial.

Notas:

- La Audiencia Inicial se puede solicitar cuando se tiene a la persona detenida y cuando se encuentre gozando de su libertad.
- Genera Oficio.

11. La o el Juez de Control declara abierta la audiencia.

D7. ¿La audiencia es para el control de la detención?

Nota: El control de la detención se formula cuando se solicitó audiencia con persona detenida, ya sea por flagrancia, caso urgente. No procede cuando la persona se presenta por medio de una citación o comparecencia.

- No es para el control de la detención

Continúa a la actividad 13. "Solicita oportunidad para formular imputación".

- Sí es para el control de la detención

12. La o el AMPF justifica las circunstancias de la detención.

Nota: Se abre debate entre las partes en torno a las mismas.

D8. ¿La o el Juez de Control califica de legal la detención?

- Sí califica de legal la detención

13. La o el AMPF solicita oportunidad para formular imputación.



Protocolo de Actuación de Investigación Ministerial

Proceso de Determinación de la Carpeta de Investigación

Subproceso de Ejercicio de la Acción Penal

Nota: Como resultado del subproceso se obtiene la Oportunidad para formular imputación.

14. Continúa en el *"Subproceso de Formulación de Imputación"*.

- No califica de legal la detención

15. La o el AMPF analiza las circunstancias por las que no se calificó de legal la detención.

Dependiendo de la situación se toman diferentes caminos:

A). Regresa a la actividad 1. *"Solicita a la o el Juez de Control Audiencia Inicial"*.

B). Regresa a la actividad 5. *"Mediante escrito solicita a la o el Juez de Control Orden de Aprehesión"*.

C). Regresa a la actividad 7. *"Regresa al Subproceso de Ejecución de Actos de Investigación"*.

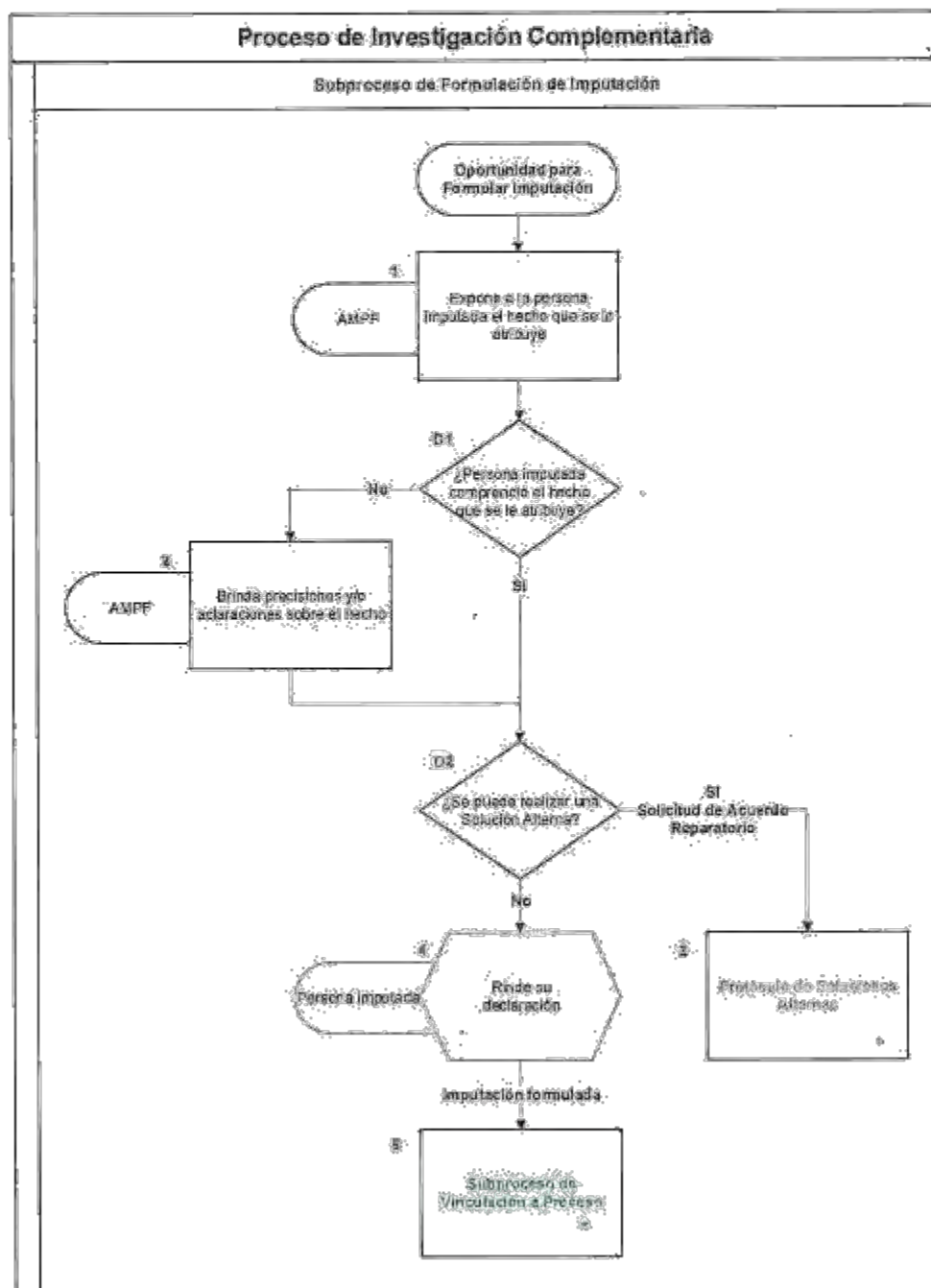
X

\$

X

N5. Subproceso de Formulación de Imputación

Q. Diagrama de flujo. Subproceso de Formulación de Imputación





R. Descripción detallada. Subproceso de Formulación de Imputación

El subproceso se defina con la **Oportunidad para Formular Imputación**.

1. La o el AMPF expone a la persona imputada el hecho que se le atribuye.

Nota: El contenido de la imputación es la siguiente (de conformidad con el artículo 310 del CNPP):

- El hecho que se le atribuye (de manera breve señalar las circunstancias de tiempo, modo, y ocasión, como sucedieron los hechos);
- La calificación jurídica preliminar (señalar el artículo, inciso y o fracción del CPF o de la ley especial);
- La fecha, lugar y modo de su comisión;
- La forma de intervención (señalar el actuar que tuvo en el hecho y el resultado del delito <instantáneo, permanente o continuo, continuado>) y;
- Nombre de quien acusa (mencionar los nombres de los elementos remitentes, testigos o denunciante).

La o el AMPF podrá solicitar la reserva de cierta información cuando sea estrictamente necesario, la cual no podrá prolongarse hasta después de la formulación de la acusación, de conformidad con el artículo 220 del CNPP y tratándose de delincuencia organizada, la autoridad judicial podrá autorizar que se mantenga en reserva el nombre y datos del acusador, de acuerdo con lo señalado en el numeral 20 inciso B) fracción III de la CPEUM.

D1. ¿La persona imputada comprendió el hecho que se le atribuye?

- No comprendió el hecho que se le atribuye

2. La o el AMPF brinda precisiones y/o aclaraciones sobre el hecho.

- Si comprendió el hecho que se le atribuye

D2. ¿Se puede realizar una Solución Alternativa?

Nota: En este momento procesal (investigación inicial) la única solución alternativa que procede es el Acuerdo Reparatorio, toda vez que no se ha dictado auto de vinculación a proceso. Las partes pueden sugerir optar por una solución alternativa pero también la o el Juez de Control puede invitarlos y con ello poner fin al procedimiento penal ordinario.

- Si se puede realizar una Solución Alternativa

3. Continúa en el "Protocolo de Soluciones Alternativas".

- No se puede realizar una Solución Alternativa

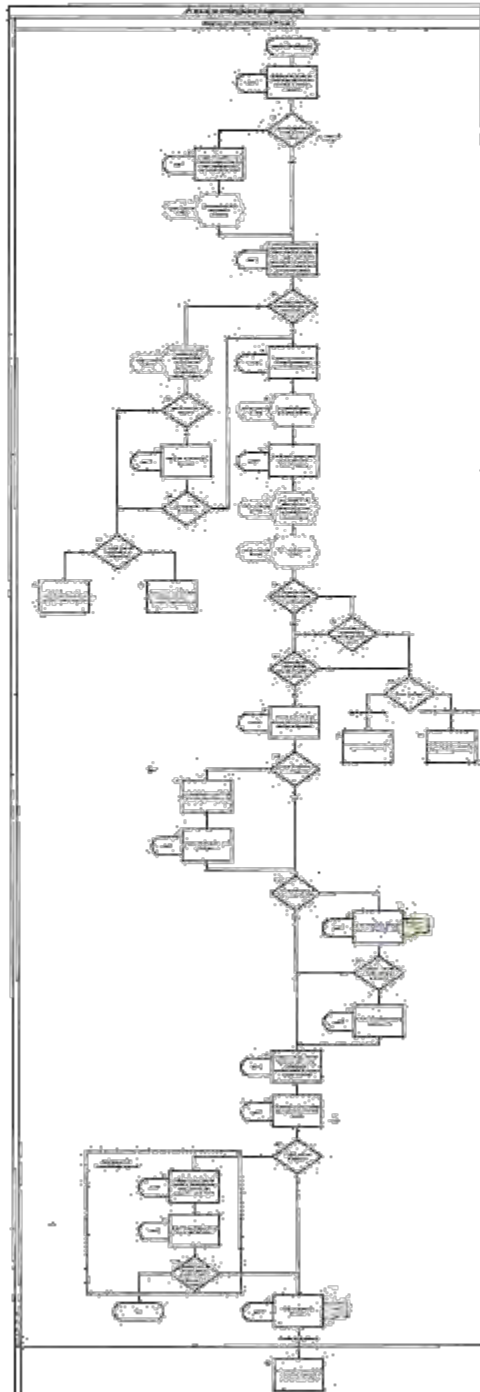
4. La persona imputada rinde su declaración.

Notas:

- La persona imputada puede abstenerse de rendir su declaración.
 - Como resultado se tiene una *imputación formulada*, la cual detona el siguiente "Subproceso de Vinculación a Proceso".
- 5. Continúa en el "Subproceso de Vinculación a Proceso".**

[Handwritten marks and signatures]

S. Diagrama de Flujo. Subproceso de Vinculación a Proceso



T. Descripción detallada. Subproceso de Vinculación a Proceso

El subproceso se detona cuando existe *imputación formulada*.

1. La o el AMPF solicita se dicte Auto de Vinculación a Proceso en contra de la persona imputada.

D1. ¿La persona imputada se acoge al plazo constitucional?

Nota: El plazo constitucional que puede acoger la persona imputada es de 72 o duplicarse a 144 horas.

- Si se acoge al plazo constitucional

Nota: La o el AMPF enuncia los datos de prueba y procede a la solicitud de medidas cautelares.

2. La o el AMPF solicita la imposición de medidas cautelares para el plazo constitucional y expone los argumentos.

Nota: Posterior a la solicitud la o el Juez de Control abre un primer debate entre las partes, para que manifiesten lo que a su derecho convenga. La necesidad de la medida cautelar es para garantizar la presencia de la persona imputada durante el plazo constitucional, garantizar la seguridad de la víctima o persona ofendida y evitar la obstaculización del procedimiento. Los tipos de medidas cautelares que la o el AMPF puede solicitar se encuentran contempladas en el CNPP.

3. La o el Juez de Control se pronuncia sobre las medidas cautelares.

Notas:

- En caso de que la defensa solicite ofrecer medios de prueba, la o el Juez de Control le concederá el uso de la voz para tal efecto, de conformidad con el artículo 154, en relación con el 314 del CNPP.
- En caso negativo la o el AMPF seguirá con la solicitud de vinculación a proceso.

- No se acoge al plazo constitucional

4. La o el AMPF expone los argumentos del hecho que la ley señala como delito y la probable participación de la persona imputada en el delito ante la o el Juez de Control.

Nota: Una vez que la o el AMPF terminó su intervención, la o el Juez de Control le concede la voz a la defensa (público o privado) de la persona imputada, a efecto de que manifieste lo que a su derecho convenga sobre la solicitud y datos de prueba expuestos por la o el AMPF. El número de intervenciones entre las partes es decisión de la o el Juez de Control, quien determinará dichas circunstancias.

D2. ¿La o el Juez de Control dicta Auto de Vinculación a Proceso?

- No dicta Auto de Vinculación a Proceso

Continúa en la actividad 5. "Ordena la inmediata libertad de la persona imputada revocando las providencias precautorias o medidas cautelares".

- Si dicta Auto de Vinculación a Proceso



Continúa en la actividad 9. *"Solicita la imposición de medidas cautelares y expone los argumentos"*.

5. La o el Juez de Control ordena la inmediata libertad de la persona imputada, revocando las providencias precautorias o medidas cautelares.

D3. ¿La o el AMPF interpone el recurso?

- No interpone el recurso

Continúa en la D4. *"¿Procede ordenar nuevos actos de investigación?"*.

- Si interpone el recurso

6. La o el AMPF interpone el recurso de apelación.

Continúa en la D5. *"¿El recurso es favorable?"*.

D4. ¿Procede ordenar nuevos actos de investigación?

- Si procede a ordenar nuevos actos de investigación

7. Continúa en el "Subproceso de Ejecución de Actos de Investigación".

Nota: Dependiendo el caso en particular, la o el AMPF replantea la estrategia para consolidar o modificar la hipótesis de su teoría del caso y así formular nueva imputación o motivar una determinación distinta al ejercicio de la Acción Penal.

- No procede a ordenar nuevos actos de investigación

8. Continúa en el "Subproceso de Formas de Terminación de la Investigación Ministerial".

D5. ¿El recurso es favorable?

- No es favorable

Regresa a la D4. *"¿Procede ordenar nuevos Actos de Investigación?"*.

- Si es favorable

9. La o el AMPF solicita la imposición de medidas cautelares y expone los argumentos.

Notas:

- Si se solicitaron medidas cautelares para el plazo constitucional, la o el AMPF podrá solicitar su continuidad, modificación o ampliación, según corresponda.
- Posteriormente a solicitud de la o el AMPF la o el Juez de Control abre un segundo debate entre las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga.

10. La o el Juez de Control se pronuncia sobre la medida cautelar.



11. La o el AMPF solicita plazo para el cierre de la investigación complementaria.

Nota: El plazo que la o el AMPF puede solicitar no podrá ser mayor a dos meses si se tratare de delitos cuya pena máxima no exceda los dos años de prisión, ni de seis meses si la pena máxima excediera de ese tiempo, de conformidad con el artículo 321 del CNPP.

12. La o el Juez de Control abre debate en su caso entre las partes y fija el cierre de investigación complementaria.

13. La o el Juez de Control concluye Audiencia Inicial.

Nota: Después de la conclusión de la Audiencia Inicial hasta antes del auto de apertura a juicio oral se podrá solicitar una solución alterna y/o forma de terminación anticipada del proceso.

D6. ¿Se solicita una salida distinta durante la audiencia?

- No se solicita una salida distinta durante la audiencia

Continúa en D9. *“¿Se solicita una salida distinta después del cierre de la audiencia?”*.

- Si se solicita una salida distinta durante la audiencia

D7. ¿Se cumplen los requisitos para continuar con la Salida Alterna?

- No se cumplen los requisitos

Continúa en la D9. *“¿Se solicita una salida distinta después del cierre de la audiencia?”*.

- Si se cumplen los requisitos

D8. ¿Salida solicitada?

- Soluciones Alternas

14. Continúa en el “Protocolo de Actuación de Soluciones Alternas”.

Nota: En este momento procesal (investigación complementaria) proceden las dos Soluciones Alternas: 1. Acuerdo Reparatorio y 2. Suspensión Condicional del Proceso.

- Forma de Terminación Anticipada

15. Continúa en el “Protocolo de Actuación de Formas de Terminación Anticipada del Proceso”.

Nota: La única forma de terminación anticipada que contempla el CNPP es el Procedimiento Abreviado.

D9. ¿Se solicita una salida alterna después del cierre de la audiencia?

- Si se solicita

Regresa a D8. *“¿Salida solicitada?”*.

16. La o el AMPF analiza si los datos de prueba son suficientes para formular la acusación.

☒ Si solicita nuevos actos de investigación

18. La o el AMPF recibe los resultados de la investigación.

- No solicita nuevos actos de investigación

Nota: La solicitud de prórroga puede recaer en la necesidad de requerir nuevos actos de investigación o recabar los ya solicitados al personal de la AIC u otras autoridades.

- Continúa en la actividad 21. "Informa a la o el Juez de Control el cierre de la investigación complementaria en la fecha y hora acordada".

19. La o el AMPF elabora oficio de prórroga ante la o el Juez de Control.

D12. ¿La o el Juez de Control otorga la prórroga?

- ☐ No otorga prórroga

Continúa en la actividad 21. "Informa a la o el Juez de Control el cierre de la investigación complementaria en la fecha y hora acordada".

- † **Sî otorga prorroga**

20. La o el AMPF recaba los resultados de la investigación.

21. La o el AMPF informa a la o el Juez de Control el cierre de la investigación complementaria en la fecha y hora acordada.

22. La o el AMPF presentan consecuencias derivadas de los datos de prueba.



Notas:

- Una vez reunido el cúmulo de datos de prueba en la Carpeta de Investigación y decretado el cierre de Investigación Complementaria, la acusación se presentará únicamente por la o el AMPF, ya que el sobreseimiento o suspensión del proceso puede ser presentada por la persona imputada o su defensa.
- Cerrada la investigación complementaria, la o el AMPF tiene 15 días para presentar su conclusión.

D13. ¿La o el AMPF formula acusación?

- Si formula acusación

Continúa en la actividad 25. *"Elabora escrito de acusación"*.

- No formula acusación

23. La o el AMPF solicita a la o el Juez de Control el sobreseimiento total o parcial o la suspensión del proceso.

Nota: La o el AMPF solicita audiencia a la o el Juez de Control para el sobreseimiento total o parcial respecto de determinados hechos y/o personas, o en su caso para la suspensión del proceso.

24. La o el AMPF expone los argumentos a la o el Juez de Control.

D14. ¿Jueza o Juez de Control dicta el sobreseimiento o suspensión del proceso?

- Si dicta el sobreseimiento o suspensión del proceso

Finaliza el subproceso.

- No dicta el sobreseimiento o suspensión del proceso

25. La o el AMPF elabora escrito de acusación.

Nota: El cual es el detonante del *"Protocolo de Etapa Intermedia o Preparación a Juicio"*.

26. Continúa en el "Protocolo de Actuación de Etapa Intermedia o Preparación a Juicio".

[Handwritten marks: X, B, and a signature]



Glosario

Acrónimos/Siglas	Definición
AIC	Agencia de Investigación Criminal
AMPF	Agente del Ministerio Público de la Federación
CEAV	Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas
CNPP	Código Nacional de Procedimientos Penales
CPEUM	Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
CPF	Código Penal Federal
DOF	Diario Oficial de la Federación
IPH	Informe Policial Homologado
PFM	Policía Federal Ministerial
PGR	Procuraduría General de la República
RCC	Registro de Cadena de Custodia
RENAVI	Registro Nacional de Víctimas
SJPA	Sistema de Justicia Penal Acusatorio

Protocolo de Actuación de Investigación Ministerial

PGR

Procuraduría General de la República
FOLIO 1 A 61 FOLIO 100

Término	Definición
Abstención de Investigación	Es una determinación ministerial que se funda y motiva cuando los hechos que se le hicieron del conocimiento a la o el AMPF no son constitutivos de delito, se encuentre extinguida la acción penal o la responsabilidad penal de la persona imputada.
Acción Penal	Es la solicitud de la o el AMPF ante el Órgano Jurisdiccional para que se inicie el proceso penal, con la finalidad de que se aplique la ley penal a la persona probablemente responsable de la comisión de un hecho que la ley señale como delito. Actualmente puede ser realizada también por los particulares.
Actos de investigación	Son las actividades que la o el AMPF y sus auxiliares realizan para allegarse de datos de prueba que esclarezcan el hecho que la ley señala como delito e identificar a la persona responsable de su comisión, así como el aseguramiento de los objetos, instrumentos o producto del delito. Pueden ser con control y sin control judicial.
Acuerdo Reparatorio	Pacto legal realizado entre la víctima y la persona imputada con la finalidad de reparar el daño y poner fin al procedimiento por medio de la mediación, la conciliación, el arbitraje o cualquier otro establecido en la ley, en los supuestos de delitos culposos en los que proceda el perdón, en los patrimoniales sin violencia y los que tengan pena leve según se establezca legalmente.
Acumulación	Procedimiento consistente en unir dos o más carpetas de investigación para que se resuelvan en una misma determinación, cuando exista concurso de delitos, se investiguen delitos conexos, cuando se trate de los mismos autores o partícipes de un mismo delito o se investigue un mismo delito cometido en agravio de diversas personas. Lo anterior tiene como finalidad acotar los tiempos, evitar la duplicidad de labores y resoluciones contrarias;
Archivo Temporal	Determinación que emite la o el AMPF cuando existe imposibilidad transitoria de cualquier índole para continuar con la práctica de diligencias que permitan comprobar el hecho que la ley señala como delito, así como la probabilidad de que la persona imputada lo cometió o participó en su comisión, o bien cuando comprobado el hecho que la ley señala como delito, se ignora a persona

Protocolo de Actuación de Investigación Ministerial

PGR

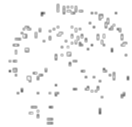
Procuraduría General de la República

Término	Definición
	probablemente responsable, suspendiendo temporalmente la fase de investigación.
Autoridades coadyuvantes	Autoridades que colaboran a preservar el lugar de los hechos hasta el arribo de las autoridades competentes y, en su caso, adoptar las medidas a su alcance para que se brinde atención médica de urgencia a quien se encuentre herido si los hubiere, así como poner a disposición de la autoridad a las personas detenidas por conducto o en coordinación con personal de la policía.
Auxiliares	Instituciones privadas que colaboran en la investigación ministerial para el esclarecimiento de los hechos que la ley señala como delito.
Autoridad	Dependencias o entidades del ámbito federal o local que colaboran en la investigación ministerial para el esclarecimiento de los hechos que la ley señala como delito.
Comparecencia de la víctima o persona ofendida	Acto por el cual la víctima o persona ofendida se presenta ante la autoridad ministerial para denunciar, manifestar, expresar o narrar un hecho que la ley señale como delito.
Criterio de Oportunidad	Facultad constitucional otorgada a la o el AMPF para no ejercer acción penal. La o el AMPF se abstiene de realizar la persecución penal pública con base en razones objetivas, sin discriminación y valorando cada caso en particular.
Denuncia anónima	Hacer del conocimiento a la o el AMPF de un hecho que la ley señala como delito, sin mencionar el nombre de la persona que denuncia.
Denuncia	Acción por la que cualquier persona hace del conocimiento a la autoridad competente que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito.
Querrela o requisito equivalente	Acción por la que la persona con interés jurídico hace del conocimiento a la autoridad competente que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito.
Equipo de Investigación	Equipo conformado principalmente por la o el AMPF, personal de la AIC y consultores complementarios para planear y/o ejecutar actos de investigación.

Protocolo de Actuación de Investigación Ministerial

PGR

Ministerio Público
Perú



Término	Definición
Incompetencia	La o el AMPF deja de conocer de un asunto, en virtud de que el hecho que la ley señala como delito sucedió fuera de su circunscripción territorial, no se trata de su especialidad o fuero.
Medida cautelar	Imposición jurisdiccional con el fin de asegurar la presencia de la persona imputada en el procedimiento; garantizar la seguridad de la víctima o persona ofendida; de quien será testigo, o evitar la obstaculización del procedimiento.
Medidas de apremio	Facultades coercitivas otorgadas a la autoridad ministerial para obtener el eficaz e inmediato cumplimiento de sus determinaciones.
Medidas de protección	Son mecanismos que buscan brindar apoyo y protección a la víctima o persona ofendida, de las agresiones e impedir la continuación de estas.
Medios de impugnación	Son actos procesales conferidos a las partes dentro del procedimiento penal ordinario, para combatir las resoluciones emitidas por el Órgano Jurisdiccional.
No Ejercicio de la Acción Penal	Es una determinación ministerial dentro de una Carpeta de Investigación cuando de los datos de prueba que la integran se actualiza una de las causales de sobreseimiento.
Objetos, instrumentos o productos del delito	<p>Objeto: persona, cosa o interés que es protegido por las leyes penales.</p> <p>Instrumento: elementos materiales mediante los cuales el sujeto activo de un hecho que la ley señale como delito utiliza para planearlo, cometerlo o encubrirlo.</p> <p>Producto: es la ganancia que se genera cuando se comete un hecho que la ley señala como delito.</p>
Partes	Se refiere a la víctima o persona ofendida, su Asesora o Asesor Jurídico, así como a la persona imputada y su defensa.
Providencias precautorias	Medidas solicitadas al Órgano Jurisdiccional para garantizar la reparación del daño de la víctima o persona ofendida.

Protocolo de Actuación de Investigación Ministerial



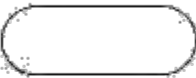






Término	Definición
Sala de Mando Ministerial	Es la herramienta metodológica a través de la cual se reúne el equipo de investigación para establecer la estrategia de investigación, litigación, y ejecución de pena.
Separación de Investigaciones	Acto por el cual una investigación se separa en dos o más investigaciones, a efecto de una mejor persecución.
Sobreseimiento	Acto por el cual se suspende el procedimiento penal ordinario por la falta de datos, medios o pruebas que justifiquen la probabilidad de que la persona imputada cometió el hecho que la ley señala como delito.
Solución Alternativa del proceso	Acuerdos compensatorios entre la víctima o persona ofendida e inclusive comunidades afectadas por la comisión de un hecho que la ley señale como delito y solo aplica cuando son considerados no graves, es decir sean intencionados o de origen patrimonial.
Vista Judicial	Acto jurisdiccional mediante el cual se hace del conocimiento a la o el AMPF un hecho que la ley señale como delito.

Handwritten signatures and marks.



Anexos




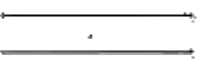
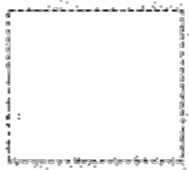



Anexo 1. Simbología

Símbolo	Nombre	Descripción
	Inicio Fin	Muestra el inicio o entradas y fin del proceso.
	Actividad	Indica la realización de una actividad sustantiva.
	Responsable Sustantivo	Indica quién es el responsable de la ejecución de la actividad sustantiva.
	Documento	Representa la generación de un documento en el desarrollo de una actividad.
	Decisión	Consiste en una pregunta o condición, cuya respuesta indica el camino que debe tomarse.
	Subproceso	Indica la ejecución de un subproceso dentro del flujo.
	Actividad externa	Indica la realización de una actividad externa en el proceso.

Protocolo de Actuación de Investigación Ministerial

PGR

PROCESO DE ACTUACIÓN DE INVESTIGACIÓN MINISTERIAL
1991-2010

Símbolo	Nombre	Descripción
	Responsable externo	Indica quién es el actor que ejecuta la actividad externa.
	Conector de actividad	Representa el enlace de dos actividades dentro de la misma página.
	Opción múltiple	Permite elegir uno o varios caminos con actividades distintas entre ellos.
	Paralelismo	Indica la ejecución simultánea de las figuras que precede.
	Área de interés en el flujo	Destaca una zona para indicar la importancia de un conjunto de actividades que están relacionadas.
	Punto de control	Sirven para indicar puntos de control o supervisión a cargo del Superior Jerárquico (SJ).
 Tiempo	Plazos	Indica el tiempo en el que se debe realizar una actividad.
	Dirección de flujo o línea de unión	Conecta símbolos y muestra la dirección del flujo del proceso. Se acompañan.

PGR

Procuraduría General de la República
Oficina del Procurador



Símbolo	Nombre	Descripción
<p>Entrada</p> <p>↓</p> <p>Subproceso de x</p> <p>↓</p> <p>(Salida de x1/entrada de x2)</p> <p>↓</p> <p>Subproceso de x2</p> <p>↓</p> <p>Salida</p>	Entradas y Salidas	Se escriben sobre las líneas de dirección de flujo que entran a un subproceso o salen de él a fin de señalar los detonantes y productos de los mismos.

[Handwritten marks and signatures]

Actuación Ministerial para la Atención de Niñas, Niños, y Adolescentes Migrantes No Acompañados.

Define los principios y procedimientos generales de actuación de los AMPF, con apego a estándares internacionales de protección a los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes migrantes que viajan sin compañía, atendiendo en todo momento el interés superior de la niñez.

El AMPF deberá: notificar al consul del país de nacionalidad del menor, informar al INM y al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, brindarle asesoría jurídica y en caso de ser necesario un traductor, así como un psicólogo.



**PROTOCOLO DE ACTUACIÓN MINISTERIAL PARA LA ATENCIÓN DE
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES MIGRANTES NO ACOMPAÑADOS.**

México, D.F. Enero 2016

ÍNDICE

PRESENTACIÓN	3
MARCO JURÍDICO	7
OBJETIVOS	9
POLÍTICAS DE OPERACIÓN	11
PRINCIPIOS RECTORES DE ACTUACIÓN	11
PROCEDIMIENTO	12

PRESENTACIÓN.

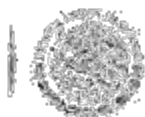
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra en su artículo 4º que en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio de interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos; principio que deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.

Por otro lado, la Convención sobre los Derechos del Niño establece en su artículo 3, párrafo primero que en todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior de la niñez.

En ese sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha interpretado que el interés superior de la niñez ordena la realización de una interpretación sistemática que considere los deberes de protección de las niñas, niños y adolescentes y los derechos especiales de estos previstos en la Ley Fundamental, en los tratados internacionales y en las leyes de protección de la niñez y conlleva ineludiblemente tomar en cuenta algunos elementos que permitan determinar con precisión el ámbito de protección requerida, tales como la opinión de la persona menor de edad, sus necesidades físicas, afectivas y educativas; el efecto que produciría sobre la persona un cambio; su edad, sexo y personalidad; los males que ha padecido o en que puede incurrir, y la posibilidad de que cada uno de sus padres responda a sus posibilidades, de manera que dicho principio debe informar todos los ámbitos de la actividad estatal que estén relacionados directa o indirectamente con las niñas, niños y adolescentes, lo que necesariamente implica que la protección de los derechos de la infancia se realice a través de medidas reforzadas o agravadas, ya que sus intereses deben protegerse siempre con una mayor intensidad.

Así mismo, el Comité de Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas determinó en su Observación General Número 6: "Trato de los menores no acompañados y separados de su familia fuera de su país de origen" exige una evaluación clara y a fondo de la identidad de éste y, en particular, de su nacionalidad, crianza, antecedentes étnicos, culturales y lingüísticos, así como las vulnerabilidades y necesidades especiales de protección.

Por su parte, el Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018 establece en su Meta Nacional "México en Paz", Objetivo 1.4. "Garantizar un Sistema de Justicia Penal eficaz, expedito, imparcial y transparente", Estrategia 1.4.1. "Abatir la impunidad", como líneas de acción diseñar y ejecutar las adecuaciones normativas y orgánicas en el área de competencia de la Procuraduría General de la República, para investigar y perseguir el delito con mayor eficacia, así como rediseñar y actualizar los protocolos de actuación para el personal sustantivo.



Así mismo, dicho instrumento dispone en su Objetivo 1.5. "Garantizar el respeto y protección de los derechos humanos y la erradicación de la discriminación", Estrategia 1.5.1. "Instrumentar una política de Estado en derechos humanos", como líneas de acción promover la implementación de los principios constitucionales en materia de reconocimiento y protección de derechos humanos, así como dar cumplimiento a las recomendaciones y sentencias de los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, y promover una política pública de prevención a violaciones de derechos humanos. Mientras que en su Estrategia 1.5.2. "Hacer frente a la violencia contra los niños, niñas y adolescentes en todas sus formas, sobre la base de una coordinación eficiente que asegure la participación de todos los sectores responsables de su prevención, atención, monitoreo y evaluación" señala como línea de acción prohibir y sancionar efectivamente todas las formas de violencia contra las niñas, niños y adolescentes, así como asegurar que quienes la han sufrido no sean revictimizados en el marco de los procesos de justicia y atención institucional.

El 04 de diciembre de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la cual tiene por objeto, entre otros aspectos, garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes conforme a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados Internacionales de los que el Estado mexicano forma parte.

Así mismo, dicho ordenamiento establece que el principio de interés superior de la niñez será una consideración primordial que se tomará en cuenta durante el procedimiento administrativo migratorio al que están sujetos niñas, niños y adolescentes migrantes, en el que se estimarán las posibles repercusiones de la decisión que se tome en cada caso, y enuncia las garantías de debido proceso que se deberán aplicar en los procesos migratorios que involucran a niñas, niños y adolescentes.

En el contexto de globalización que caracteriza a la sociedad en el siglo XXI, el fenómeno de la migración se presenta como un elemento de atención indispensable por parte de las autoridades, específicamente cuando este involucra a niñas, niños y adolescentes y con más contundencia en los casos de niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados, los cuales han ido en aumento de manera exponencial.

La migración infantil sin acompañamiento propicia la violación de sus derechos humanos; son innumerables los riesgos que corren las niñas, niños y adolescentes desde la salida de sus lugares de origen y durante su desplazamiento ya que pueden ser involucrados en la comisión de delitos o estar expuestos a ser captados por redes de explotación sexual, prostitución y pornografía infantil, así como ser sometidos a formas extremas de explotación laboral o, incluso, al tráfico de sus órganos.

En ese sentido, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su Informe "Derechos humanos de los migrantes y otras personas en el contexto de la movilidad"

humana en México⁶ refiere que tanto el Instituto Nacional de Migración, organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales coinciden en que ha habido un incremento del número de niñas, niños y adolescentes no acompañados que migran hacia o a través de México. Así mismo, en dicho informe se señala que el Estado mexicano tiene la obligación de adoptar medidas especiales de protección a favor de las niñas, niños y adolescentes que se encuentran bajo su jurisdicción; medidas que, por un lado, deben incorporar la noción de las niñas, niños y adolescentes como sujetos de derechos y, por otro, revestir la suficiente especialidad derivada de la situación de vulnerabilidad en que se encuentran.

En ese contexto, al hacer frente a esta problemática, es necesario contar con una noción de lo que debe entenderse por niñas, niños y adolescentes no acompañados, lo cual es posible entendiendo sus características: se trata de personas menores de 18 años que se encuentran en proceso migratorio en virtud de que viajan fuera de su país de origen, separados de ambos progenitores u otros parientes, o de las personas que por ley o por costumbre los tienen a su cargo, ya sea que hayan ingresado al país a través de una solicitud de asilo o de forma irregular.

Las niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados constituyen un grupo de especial vulnerabilidad en virtud de su edad, sexo y condición migratoria, entre otros aspectos, lo cual los ubica en una posición de alto riesgo de convertirse en víctimas de delitos o relacionados con los probables responsables de la comisión de conductas ilícitas.

En ese sentido, es de reconocerse que durante el procedimiento migratorio que se inicia en torno a las niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados la autoridad advierte la comisión de conductas ilícitas que hacen necesaria la intervención del Ministerio Público de la Federación, la cual cobra vital importancia en su atención y protección, así como en el procedimiento de investigación de los delitos garantizando en todo momento la mayor protección a sus derechos humanos, con especial atención al interés superior de la niñez, a la seguridad jurídica y al debido proceso.

Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su Opinión Consultiva OC-21/14 "Derechos y garantías de niñas y niños en el contexto de la migración y/o en necesidad de protección internacional" consideró que las garantías de debido proceso que, conforme al derecho internacional de los derechos humanos, deben regir en todo proceso migratorio que involucre a niñas o niños son: el derecho a ser notificado de la existencia de un procedimiento y de la decisión que se adopte en el marco del proceso migratorio; el derecho a que los procesos migratorios sean llevados por un funcionario o juez especializado; el derecho a ser oído y a participar en las diferentes etapas procesales; el derecho a ser asistido gratuitamente por un traductor y/o intérprete; el acceso efectivo a la comunicación y asistencia consular; el derecho a ser asistido por un representante legal y a comunicarse libremente con dicho representante; el deber de designar un tutor en caso de niñas o niños no acompañados o separados; el derecho a que la decisión que se adopte evalúe el

interés superior de la niña o niño y sea debidamente fundamentada; el derecho a recurrir la decisión ante un juez o tribunal superior con efectos suspensivos; y el plazo razonable de duración del proceso.

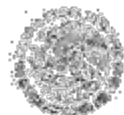
Por otro lado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió la Recomendación número 22/2015, en la que solicita a esta Procuraduría General de la República se elabore un protocolo de actuación con base en los estándares de protección especial de derechos humanos para niñas, niños y adolescentes en migración no acompañados, así como los deberes establecidos en la Opinión Consultiva OC-21/14 señalada.

Finalmente, la Ley de Migración establece diversas acciones a realizar por parte de esta Procuraduría General de la República, entre las que destaca proporcionar a los migrantes orientación y asesoría para su eficaz atención y protección, además de que el ejercicio de la acción penal en los casos de los delitos a que se refiere deberá realizarse de oficio.

MARCO JURÍDICO.

Internacional

- Convención sobre los derechos del Niño.
- Convención Americana de Derechos Humanos.
- Declaración Universal de los Derechos Humanos.
- Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.
- Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares.
- Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.
- Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial.
- Convención Interamericana sobre Tráfico Internacional de Menores.
- Convención Internacional para la Represión de la Trata de Mujeres y Menores.
- Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional.
- Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños.
- Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire.
- Convenio sobre la Prohibición de las Peores Formas de Trabajo Infantil y la Acción Inmediata para su Eliminación.
- Convención de Viena de Relaciones Consulares.
- Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores (Reglas de Beijing).
- Protocolo para la atención consular de niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados.
- Opinión consultiva OC 21-14 solicitada por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay sobre los derechos y garantías de niñas y niños en el contexto de la migración y/o en necesidad de protección internacional de 2014.
- Observación General de UNICEF sobre Trato de los menores no acompañados y separados de su familia fuera de su país de origen de 2005.



Nacional

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
- Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura.
- Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.
- Ley de Migración.
- Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
- Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
- Ley General de Víctimas.
- Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de Estos Delitos.
- Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.
- Código Federal de Procedimientos Penales.
- Código Nacional de Procedimientos Penales.
- Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.
- Reglamento de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
- Reglamento del Instituto Nacional de Migración.
- Reglamento de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos.
- Reglamento de la Ley General de Víctimas.
- Acuerdo por el que se emiten las normas para el funcionamiento de las estaciones migratorias del Instituto Nacional de Migración, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de octubre de 2009.
- Acuerdo mediante el cual se expide el Estatuto Orgánico del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2015.
- Circular No. 001/2010 por el que se instruye el procedimiento para la atención de los niños, niñas y adolescentes no acompañados, del Instituto Nacional de Migración, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de febrero de 2010.
- Recomendación 22/2015 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

OBJETIVOS

Objetivo General.

Definir los principios y procedimientos generales de actuación de los agentes del Ministerio Público de la Federación, en los casos en que atiendan o interactúen con niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados, con apego a los estándares de protección de los derechos humanos desde una perspectiva que tenga en cuenta de forma transversal los derechos de niñas, niños y adolescentes y, en particular, su protección y desarrollo integral, los cuales deben primar por sobre cualquier consideración de la nacionalidad o el estatus migratorio, a fin de asegurar la plena vigencia de sus derechos.

Objetivos Específicos.

- a)** Precisar los aspectos que deben observar los agentes del Ministerio Público de la Federación en su ámbito de competencia, para proteger la integridad de las niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados, así como para brindarles la atención correspondiente.
- b)** Establecer que los principios de interés superior de la niñez y de debido proceso constituyan el eje rector de la actuación de los agentes del Ministerio Público de la Federación en el ejercicio de sus funciones, respecto de las niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados.
- c)** Garantizar que en la actuación de los agentes del Ministerio Público de la Federación se elimine cualquier tipo de sufrimiento físico o psicológico a las niñas, niños y adolescentes no acompañados.
- d)** Obtener información tras la llegada de la niña o niño al lugar, puesto o puerto de entrada o tan pronto como las autoridades tomen conocimiento de su presencia en el país, para determinar su identidad y de ser posible, la de sus padres.

POLÍTICAS DE OPERACIÓN

- A.** La Procuraduría General de la República promoverá la formación y especialización permanente de agentes del Ministerio Público de la Federación, en materia de derechos humanos, en particular para el tratamiento de niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados;
- B.** Las y los agentes del Ministerio Público de la Federación que con motivo de la investigación de los delitos previstos en los artículos 159 y 161 de la Ley de Migración tenga contacto con niñas, niños y adolescentes que se encuentren en el estado de migrantes no acompañados, deberá sin dilación alguna dentro de su investigación hacer uso de todos los medios legales disponibles para brindarles orientación y asesoría para su eficaz atención y protección, de conformidad con lo que dispone la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, su Reglamento y demás ordenamientos aplicables;
- C.** El agente del Ministerio Público de la Federación solicitará la colaboración de las autoridades competentes en el procedimiento migratorio.
- D.** Las entrevistas e interrogatorios que se realicen a las niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados deberán realizarse mediante técnicas especializadas, evitando en todo momento su revictimización.

PRINCIPIOS RECTORES DE ACTUACIÓN

Respeto a los Derechos Humanos: Actuar con estricto respeto a los derechos humanos, reconociéndolos como los límites del ejercicio de la autoridad frente a los gobernados.

No discriminación: En todo momento se deberán evitar conductas encaminadas a impedir, limitar o negar el ejercicio de un derecho a los menores a que se refiere este protocolo, por razón de su sexo, pertenencia étnica, discapacidad, preferencia sexual o nacionalidad, entre otras; tienen derecho a ser tratados con el debido respeto a su dignidad humana.

Eficiencia: El personal que tenga contacto con los menores deberá contar con capacitación profesional y adecuada para su atención.

Prontitud: La atención al menor debe ser inmediata. Garantizando en todo momento su seguridad personal y la protección de los derechos de la infancia. Realizar las diligencias correspondientes en el menor tiempo posible.

Sin embargo, por motivos de hora o de salud de las niñas, niño o adolescentes, el Ministerio Público podrá ordenar que los actos que deban practicarse con la

participación de estos, tales como la valoración psicológica o médica, sean llevados a cabo al día siguiente.

Interés Superior de la Niñez: Se deberá garantizar a las niñas, niños y adolescentes sus derechos, procurando su bienestar e integridad física y emocional, en la toma de decisiones que más les favorezca.

Máxima información: Se informará y explicará con claridad a las niñas, niños y adolescentes, de acuerdo con su edad, los derechos que en su favor reconoce la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte y demás instrumentos jurídicos aplicables, así como los recursos jurídicos que le asisten y las actuaciones en las que sea necesaria su participación.

Asistencia: Durante todo el proceso el menor deberá contar con asistencia legal, un traductor en caso de ser necesario y personal capacitado en atención de niñas, niños y adolescentes.

Se deberá evitar el contacto de las niñas, niños y adolescentes con personas que puedan influir en su comportamiento o estabilidad emocional.

Empatía: Atendiendo al interés superior de la niñez, la autoridad debe reconocer la vulnerabilidad de las niñas, niños y adolescentes, por lo que deberá contar con los servicios pertinentes para atender las necesidades que requieran, especialmente los espacios donde deban permanecer.

La autoridad deberá asumir una actitud paciente, comprensiva y cálida, evitando actitudes distantes y autoritarias.

PROCEDIMIENTO

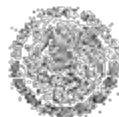
Conocimiento de los hechos

Este procedimiento puede seguir diferentes cursos de acción, dependiendo de la forma en que se conocen los hechos:

I. Recepción de la denuncia.

Cualquier persona y el Instituto Nacional de Migración (INM) podrán interponer su denuncia por los medios siguientes: comparecencia, escrito, teléfono o correo electrónico.

a. Denuncia por comparecencia.



a1. El denunciante acude a presentar la denuncia por escrito; la cual deberá ser investigada por la Policía Federal Ministerial (PFM).

a2. En caso de que personal del INM o de la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes presente a un niño, niña o adolescente no acompañado a formular denuncia, inmediatamente se hará del conocimiento del menor de forma clara y precisa el procedimiento.

a3. La o el AMPF entrevistará a la niña, niño o adolescente, con el objeto de conocer su identidad, nacionalidad, residencia, situación migratoria, el paradero de sus familiares, los motivos de su separación familiar y de la salida de su país de origen y sus necesidades particulares de protección, a nivel nacional o internacional, de atención médica y psicológica.

a4. La o el AMPF inmediatamente notificará al consul del país de nacionalidad o residencia de la niña, niño o adolescente no acompañado, a efecto de que brinde la asistencia correspondiente.

a5. En caso de que el denunciante sea otra autoridad, se notificará de inmediato al INM.

a6. El AMPF realizará las gestiones necesarias, a efecto de que la niña, niño o adolescente migrante no acompañado reciba asesoría jurídica desde el momento de su comparecencia.

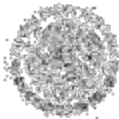
a7. El AMPF solicitará la asistencia de especialistas que brinden a las niñas, niños y adolescentes la asistencia médica, psicológica y de cualquier otra índole que requieran.

a8. En caso de que la niña, niño o adolescente no hable idioma español, el o la AMPF nombrará un traductor o intérprete del idioma o lengua que se requiera.

a9. La comparecencia de las niñas, niños y adolescentes se tomará en presencia del consul y del asesor legal. En caso de que de la misma se desprenda la probable comisión de otros delitos, estos serán investigados.

a10. Una vez agotadas todas las diligencias, el AMPF pondrá a disposición del INM a las niñas, niños y adolescentes no acompañados.

a11. En caso de que la o el AMPF no concluya los actos de investigación pertinentes y el INM no cuente con las condiciones necesarias para salvaguardar la integridad del menor, se solicitará mediante oficio al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia solicitando lo siguiente:



- I. Proporcionen la asistencia social para la atención de niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados que requieran servicios para su protección, y
- II. Otorgar facilidades de estancia y garantizar la protección de los menores, en tanto se determina su situación migratoria.

a.12. En caso de que el menor permanezca en los albergues del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, la o el AMPF tiene la obligación de respetar en todo momento los horarios establecidos por el Sistema.

a.13. Cuando las niñas, niños y adolescentes sean ingresados en algún albergue del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, el o la AMPF solicitará mensualmente se le informe sobre el estado físico y psicológico de los menores.

a.14. Cuando las niñas, niños y adolescentes sean ingresados en alguna estación migratoria del INM, mientras se realizan los trámites necesarios para su retorno asistido y repatriación, el AMPF deberá solicitar se le informe:

- I. Si la niña, niño o adolescente es trasladado a otro centro de atención, para brindarle asistencia migratoria;
- II. Si hay algún cambio en la situación jurídica de la niña, niño o adolescente, y
- III. La fecha de repatriación, así como la autoridad extranjera a la que se entregue a la niña, niño o adolescente.

b. Denuncia por escrito, por teléfono, correo electrónico y de oficio.

b.1. El personal del Centro de Denuncia y Atención Ciudadana de la Procuraduría General de la República (CEDAC) o, en su caso, la o el AMPF recibe la denuncia.

b.2. El personal del CEDAC, o en su caso, la o el AMPF elabora constancia sobre la recepción y la remite a la unidad administrativa correspondiente.

b.3. El Fiscal Supervisor de la Unidad de Atención Inmediata (UNAI), recibirá la denuncia, el cual determinará si de los hechos descritos se desprende algún ilícito del cual la unidad administrativa es competente; por lo que de ser el caso asignará el número que corresponda a la investigación.

b.4. En el supuesto de no contar con detenidos, el Fiscal Supervisor turnará a un AMPF adscrito a la UNAI, para que en coordinación con la PFM realicen los actos de investigación correspondientes.

b.5. La o el AMPF adscrito a la UNAI determinará si la investigación puede judicializarse, y de ser el caso la canalizará a la unidad correspondiente.



b.6. En el supuesto de que la denuncia presentada cuente con detenidos, se asignará el número correspondiente a la investigación y se turnará a la unidad especializada, la cual deberá ser atendida por la o el AMPF en turno, en caso de que se pongan a disposición las niñas, niños y adolescentes deberá seguirse el procedimiento conforme a lo establecido en el apartado A.

III. Actuaciones.

III.1. La o el AMPF asistido por personal psicológico especializado y de trabajo social notificará a las niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados, en presencia de su representante:

- a)** De la existencia de una investigación.
- b)** Del derecho a ser asistido gratuitamente por un traductor y/o intérprete.
- c)** Del derecho a ser oído y participar en la investigación o, en su caso, proceso correspondiente.
- d)** Del derecho a ser asistido por un representante legal y a comunicarse libremente con dicho representante.
- e)** Del acceso efectivo a la comunicación y asistencia consular.
- f)** De que las decisiones que se adopten en el marco del proceso migratorio le serán debidamente informadas.
- g)** Del derecho a recurrir, en su caso, a la decisión ante un juez o tribunal superior con efectos suspensivos, y del plazo razonable de duración del proceso.

III.2. Para efectos de lo precedente la o el AMPF se cerciorará de la correcta comprensión por parte de la niña, niño o adolescente dejando constancia de ello.

III.3. El AMPF se coordinará con el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, a efecto de asignar un tutor a las niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados y supervisará en todo momento que se les brinde un trato acorde con el principio de interés superior de la niñez y de respeto a los derechos fundamentales que establecen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte.

IV. Medidas de protección.

IV.1. La o el AMPF se auxiliará del personal especializado para realizar una evaluación de riesgos físicos y psicológicos de las niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados.

IV.2. La o el AMPF mediante oficio solicita al personal especializado que realice la valoración de riesgo de manera inmediata.

IV.3. El personal especializado de la Procuraduría General de la República en las materias señaladas en el numeral IV.2 realizan la valoración de riesgo.

IV.4. La o el AMPF recibe la valoración de riesgo solicitada. Dependiendo de si se advierte que la persona corre riesgo, se realizan distintas acciones, pudiendo dictar la o el AMPF medidas de protección:

A. Medidas internas.

A.1. La o el AMPF emite acuerdo para dictar las medidas de protección necesarias (médicas, sociales, psicológicas).

A.2. La o el AMPF solicita a las instancias y/o instituciones correspondientes, mediante oficio, brinden el apoyo.

A.3. La o el AMPF recibe respuesta a la solicitud.

A.4. La o el AMPF ejecuta las medidas autorizadas.

B. Medidas externas.

B.1. La o el AMPF emite acuerdo para dictar y solicitar medidas de protección a la autoridad competente.

B.2. La o el AMPF solicita, mediante oficio, las medidas de protección a la autoridad competente.

B.3. La autoridad competente recibe la solicitud y valora la procedencia.

B.4. La autoridad competente informa a la o el AMPF la procedencia.

B.5. La o el AMPF recibe respuesta a la solicitud de medidas de protección mediante oficio.

**EL SUBPROCURADOR DE DERECHOS
HUMANOS, PREVENCIÓN DEL DELITO Y
SERVICIO A LA COMUNIDAD**

DR. IBEROMAR BETANZOS TORRES

Homologado de Investigación para los Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares

Abarcará únicamente la etapa de Investigación inicial de los hechos (noticia criminal hasta la solicitud de audiencia inicial ante el Juez de Control). Establece los alcances de la búsqueda, el papel que desempeña el móvil por el que sucedieron los hechos, la forma de participación de los familiares de víctimas, el acceso a la justicia, su derecho a la verdad, todo el actuar del AMPF para generar una pronta localización del desaparecido.





PROTOCOLO HOMOLOGADO DE INVESTIGACIÓN

**PARA LOS DELITOS DE DESAPARICIÓN FORZADA Y
DESAPARICIÓN COMETIDA POR PARTICULARES**



Presentación

El 17 de noviembre de 2017 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas (Ley General), misma que entró en vigor el 15 de enero de 2018.

Al involucrar los tres órdenes de gobierno, la Ley General distribuye competencias y establece la coordinación entre autoridades para buscar a las personas desaparecidas y no localizadas, esclarecer el hecho que la ley señala como delito, así como prevenir, investigar, sancionar y erradicar los delitos en la materia, y los vinculados con ésta. De igual forma, establecer la forma de participación de los Familiares y garantizar su coadyuvancia en las etapas de la investigación, de manera que puedan verter sus opiniones, recibir información, aportar indicios o evidencias.

Este documento es un trabajo de construcción colectiva entre especialistas de las áreas de la Procuraduría General de la República, tales como la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad; la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales, la Agencia de Investigación Criminal (AIC); la Coordinación General de Servicios Periciales (CGSP); Visitaduría General y la Coordinación de Planeación, Desarrollo e Innovación Institucional (COPLADII), las Procuradurías Generales de Justicia Estatales, organizaciones de la sociedad civil, organizaciones internacionales y otras instituciones gubernamentales.

El presente Protocolo Homologado de Investigación se diseñó como una herramienta para guiar las actuaciones ante los hechos que la ley señala como delitos de Desaparición Forzada de personas y Desaparición cometida por particulares, así como las directrices de coordinación con las autoridades que intervienen en la materia del presente instrumento.

Asimismo, este documento estará sujeto a un mecanismo de verificación permanente para identificar, con oportunidad, las adecuaciones y mejoras que sean necesarias para lograr una mayor eficacia en su aplicación a fin de cumplir con lo que establece la Ley General.

Licenciado Alberto Elías Beltrán

Subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales

en suplencia de la o el Titular de la Procuraduría General de la República



Antecedentes

A partir de la creación de la Fiscalía Especial, se atendió la obligación de generar el Protocolo Homologado de Investigación para los delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición cometida por Particulares, a que se refiere la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas; para lo cual se convocó a especialistas de las áreas de la Procuraduría General de la República (PGR), tales como la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad (SDHPDSC); la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales (SJA), la Agencia de Investigación Criminal (AIC); la Coordinación General de Servicios Periciales (CGSP); Visitaduría General y la Coordinación de Planeación, Desarrollo e Innovación Institucional (COPLADII).

Resultado de ello, se obtuvo un proyecto de Protocolo; por lo que en cumplimiento a lo ordenado en el artículo 99 de la Ley General, se convocó a participar a organizaciones de la sociedad civil, organizaciones internacionales y otras instituciones gubernamentales, para que hicieran aportaciones que enriquecieran el proyecto de Protocolo homologado de Investigación para los delitos de Desaparición forzada de Personas y Desaparición cometida por particulares, lo cual ocurrió en 4 sesiones, tres de éstas se desarrollaron durante el mes de mayo y una más en el mes de junio, ambas de 2018. De entre los participantes gubernamentales destaca la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB); Policía Federal (PF); Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV); Fiscalía General de Justicia del Estado de México; Procuraduría General de Justicia del Estado de Tamaulipas; Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, así como el Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas (CNC-SNB). Por las organizaciones de la sociedad civil e internacionales, participaron representantes del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, A. C.; la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, A. C.; ID(H)EAS; Red Retoño; el Equipo Mexicano de Antropología Forense; el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y la Agencia Internacional de Desarrollo Alemana (GIZ).

Cada participante aportó ideas respecto a cómo se concibe el presente Protocolo, de lo cual se logró un proyecto que fue presentado a colectivos y familiares de víctimas. Así, durante los días 25 y 26 de junio de 2018 se convocó a familiares de víctimas de delitos de desaparición, representantes de organizaciones civiles y expertos(as) en la materia, a participar en mesas de trabajo que se planearon en instalaciones del Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE), con la finalidad de recolectar las mayores opiniones, sugerencias o comentarios referentes al proyecto de Protocolo.



El desarrollo de las actividades en las mesas temáticas de trabajo fue simultáneo, estableciéndose cuatro mesas, las cuales contaron con un facilitador del Comité Internacional de la Cruz Roja, un orientador por parte de la PGR y un relator, quien se encargó de registrar todas aquellas opiniones, observaciones o conclusiones que surgieron durante el desarrollo de la actividad. Una vez ello, se procedió a sistematizar la información proporcionada. Sin embargo, conforme a los planteamientos que formularon familiares de víctimas y representantes de colectivos que participaron en dichas mesas, manifestaron su preocupación de que el proceso de consulta para la emisión del Protocolo debe ser más amplio, convocarse a mayor número de personas, así como dedicar mayor tiempo al análisis del documento, para que se responda a la expectativa de quienes día con día se enfrentan al seguimiento de sus casos de investigación ante el personal sustantivo de la PGR, Procuradurías o Fiscalías Generales de los Estados, así como de la Comisión Nacional/Local de Búsqueda.

Por ello, este Protocolo Homologado de Investigación de los delitos de Desaparición forzada de personas y Desaparición cometida por particulares estará sujeto a un mecanismo de verificación permanente para identificar, con oportunidad, las adecuaciones y mejoras que sean necesarias, tendentes a lograr mayor eficacia en su aplicación.



Índice

1. Consideraciones Previas.....	6
2. Marco jurídico.....	20
3. Alcance.....	23
4. Objetivos del Protocolo.....	25
5. Políticas de operación.....	26
6. Roles de las/los participantes.....	29
7. Modelo del Proceso de Investigación.....	31
Macroproceso del Protocolo de Investigación para los delitos de Desaparición forzada de personas y Desaparición cometida por particulares.....	31
Protocolo de Investigación para los delitos de Desaparición forzada de personas y Desaparición cometida por particulares.....	32
A. Diagrama de flujo de los Procesos del Protocolo de Investigación para los delitos de Desaparición forzada de personas y Desaparición cometida por particulares.....	32
B. Descripción detallada de los Procesos del Protocolo de Investigación para los delitos de Desaparición forzada de personas y Desaparición cometida por particulares.....	34
Subproceso de Recepción de la noticia del hecho sin detenida(o) por Incompetencia.....	46
C. Diagrama de flujo. Subproceso de Recepción de la noticia del hecho sin detenida(o) por Incompetencia.....	46
D. Descripción detallada. Subproceso de Recepción de la noticia del hecho sin detenida(o) por Incompetencia.....	47
Subproceso de valoración de resultados y generación de la Hipótesis del Caso.....	48
E. Diagrama de flujo. Subproceso de valoración de resultados y generación de la Hipótesis del Caso.....	48
F. Descripción detallada. Subproceso de valoración de resultados y generación de la Hipótesis del Caso.....	49
Subproceso de Acreditación del Caso.....	53
G. Diagrama de flujo. Subproceso de Acreditación del Caso.....	53
H. Descripción detallada. Subproceso de Acreditación del Caso.....	54
8. Glosario de los Procesos y Subprocesos.....	57
9. Plan de Investigación.....	59
10. Análisis de Contexto.....	73
11. Anexos.....	78
Anexo I. Diligencias básicas para la investigación.....	78



Sección A. Acreditación de los elementos necesarios de los tipos penales de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares.....	82
Sección B. Investigación específica y diferenciada por sujeto pasivo.....	84
Sección C. Investigación específica por calidad del sujeto activo	105
Anexo II. Investigación de desapariciones forzadas de integrantes de movimientos políticos del pasado (en desarrollo)	106
Anexo III. Análisis dogmático de los delitos de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares	111
Glosario de elementos normativos de los tipos previstos en la Ley General	128
Anexo IV. Criterios judiciales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos	137
Anexo V. Solicitud de pruebas periciales.....	156
Anexo VI. Atención a las niñas, niños o adolescentes en los casos en que aparezcan durante la investigación	162
Anexo VII. Atención psicosocial en las notificaciones de alto impacto emocional a partir de la identificación y entrega de cadáver, restos humanos u objetos pertenecientes a la víctima directa	165
DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL DIAGRAMA “Anexo VII. Atención psicosocial en las notificaciones de alto impacto emocional a partir de la identificación y entrega de cadáver, restos humanos u objetos pertenecientes a la víctima directa”	173
Anexo VIII. Simbología empleada en los diversos diagramas del presente Protocolo.	175



1. Consideraciones Previas

El **17 de noviembre de 2017** se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas (Ley General), misma que entró en vigor el 15 de enero de 2018.

Al involucrar los tres órdenes de gobierno, la Ley General distribuye competencias y establece la coordinación entre autoridades para buscar a las personas desaparecidas y no localizadas, esclarecer el hecho que la ley señala como delito, así como prevenir, investigar, sancionar y erradicar los delitos en la materia, y los vinculados con ésta (de conformidad con el artículo 2 de la Ley General).

En ese sentido, la Ley General contempla dos grandes acciones a emprender:

1. **La búsqueda** de personas desaparecidas y no localizadas a cargo de la Comisión Nacional de Búsqueda dependiente de la Secretaría de Gobernación y de las Comisiones Locales, para lo cual crea un entramado institucional *exprofeso* para ello.
2. **La investigación de los delitos** de Desaparición forzada de personas y Desaparición cometida por particulares, a cargo de la PGR, Procuradurías o Fiscalías Generales de los Estados, a través de sus Fiscalías Especializadas en la materia.

Se trata de acciones complementarias encaminadas a un sólo objetivo: lograr la localización con vida de una persona reportada como desaparecida, así como llegar a la verdad de los hechos ahí en dónde se presume la ocurrencia de un hecho que la ley señala como delito, y lograr acreditar la comisión de los delitos de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y los demás previstos por la Ley General.

Esta Ley General, establece en su artículo 99, por un lado, la obligación de la Comisión Nacional/Local de Búsqueda de contar con un Protocolo Homologado de Búsqueda, en el que se detalle los procesos de búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas o no localizadas, mismos que deberán realizar las autoridades, tanto Comisiones de Búsqueda como Fiscalías Especializadas y demás autoridades competentes. Cabe señalar que, conforme al Transitorio Primero de la Ley General, las acciones de búsqueda continuarán desarrollándose conforme a los Protocolos que se encuentren vigentes al momento de la publicación de esta ley, en tanto no se generen los instrumentos contemplados para tal efecto.

Por el otro lado, la Ley General también señala la obligación de las Fiscalías Especializadas de contar con un Protocolo Homologado de Investigación, en el que se describa una serie de **criterios y de**



metodología específica para la investigación y persecución de los delitos de desaparición forzada de personas (artículo 73 de la Ley General). Así mismo, el artículo 5 fracción III de la Ley General señala que las acciones, medidas y procedimientos deben ser realizados atendiendo un **enfoque Diferencial y Especializado**:

...las autoridades deben tener en cuenta la existencia de **grupos de población con características particulares o con mayor situación de vulnerabilidad** en razón de su origen étnico o nacional, idioma o lengua, religión, edad, género, preferencia u orientación sexual, identidad de género, condición de discapacidad, condición social, económica, histórica y cultural, así como otras circunstancias diferenciadoras y **que requieran de una atención especializada que responda a las particularidades y grado de vulnerabilidad de las víctimas**. De igual manera, tratándose de las acciones, mecanismos y procedimientos para la búsqueda, localización y desarrollo de las investigaciones, **las autoridades deberán tomar en cuenta las características, contexto y circunstancias de la comisión de los delitos** materia de esta Ley.

Para el desarrollo de la investigación, se busca que las acciones y diligencias ministeriales se lleven a cabo bajo un esquema metodológico que contará con una estrategia denominada **Plan de Investigación**; esta herramienta tiene como insumo básico las acciones, diligencias y datos de pruebas recabados en la investigación con base en las aportaciones del personal sustantivo, familiares de las víctimas, testigos y de la Comisión Nacional/Local de Búsqueda. La conformación de este Plan de Investigación se basa en la aplicación de un método sistemático de planteamiento de hipótesis, y la definición de las acciones de investigación por desarrollar para la comprobación o replanteamiento de estas.

El Plan de Investigación distingue cuatro estrategias con **objetivos** definidos:

1. **Establecer la realización de acciones y diligencias** para allegarse de la información básica y complementaria para determinar que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, así como la probabilidad de que la/el indiciado(a) lo cometió o participó en su comisión.
2. **Coordinar y ordenar la intervención a las áreas policiales, periciales, de análisis de contexto y de procesamiento de información de inteligencia**, atento al caso concreto, con el fin de llevar a cabo acciones y diligencias de campo y gabinete, para generar los insumos que permitan acreditar la hipótesis principal (inicial) y complementaria del caso de investigación.



3. **Diseñar y elaborar una estrategia que contemple el enfoque diferenciado y especializado en la investigación** cuando se trate de sujetos pasivos con calidad específica, con base en una perspectiva de derechos humanos, de género y con su específica categoría analítica.
4. **Generar las acciones necesarias de comunicación, coordinación, cooperación y de intercambio de información** con las demás autoridades de los tres niveles de gobierno, que permitan la elaboración de planes conjuntos para la búsqueda de la persona desaparecida o coadyuven o aporten datos pertinentes, idóneos y eficaces en la investigación.

Ambos Protocolos, tanto el de Búsqueda como el de Investigación, conforme a la Ley General forman parte de una estrategia de colaboración integra entre autoridades, desde sus respectivos ámbitos de competencia, para establecer las acciones inmediatas de búsqueda de una persona no localizada o desaparecida, las acciones a realizar por las distintas autoridades en los momentos inmediatos posteriores a la ocurrencia de la desaparición, las diligencias y acciones de investigación necesarias para la investigación del delito, así como la definición de las políticas de operación necesarias para llevar a cabo los procesos establecidos en la normativa correspondiente.

Debida diligencia

Para la conducción de la investigación es necesario que tanto las/los agentes del Ministerio Público (AMP), Policías y Peritas(os), mantengan la imparcialidad de su criterio en el momento de conocer los hechos denunciados, la definición de las hipótesis, la valoración de los datos de prueba, la solicitud de medidas de atención y de protección a las personas involucradas en la investigación (tanto de víctimas como de imputados(as)). El artículo 212 del CNPP señala la obligación de la/el AMP de investigar los hechos:

Cuando el Ministerio Público tenga conocimiento de la existencia de un hecho que la ley señale como delito, dirigirá la investigación penal, **sin que pueda suspender, interrumpir o hacer cesar su curso...**

La investigación deberá realizarse de manera inmediata, eficiente, exhaustiva, profesional e imparcial, libre de estereotipos y discriminación, orientada a explorar todas las líneas de investigación posibles que permitan allegarse de datos para el esclarecimiento del hecho que la ley señala como delito, así como la identificación de quien lo cometió o participó en su comisión.



Para la definición del Plan de investigación y la conducción de las acciones, diligencias y cumplimiento de los objetivos, es fundamental que la investigación se conduzca de manera imparcial, en tanto que la definición de hipótesis implica considerar, con base en la evidencia y entrevistas recabadas, todas las posibilidades en las que pudo ocurrir el hecho que la ley señala como delito

La imparcialidad en la investigación necesariamente implica que quienes investigan no criminalicen a las víctimas directas e indirectas, ya sea por medio del planteamiento de hipótesis a partir de prejuicios o estereotipos (ya sea con motivo de género, identidad de género, orientación sexual, características fisiológicas, deficiencias de carácter físico, sensorial o mental, origen, pertenencia a pueblo o comunidad indígena, creencia, trabajo o estilo de vida), o de suposiciones sin fundamento o evidencia fáctica. Una investigación que inicia con un sesgo hacia una hipótesis mal planteada, o que inicia con una presuposición basada únicamente en la percepción de quien investiga, tiene un impacto negativo en la investigación, en horas de trabajo, recursos destinados, y en la pérdida de indicios que pudieron ser recolectados en los primeros momentos y horas seguidas a la desaparición de la víctima.

Impulso permanente a la búsqueda de la persona desaparecida

Si bien en la Ley General, en su artículo 79 establece que son las Comisiones de Búsqueda las encargadas de realizar "...todas las acciones y diligencias tendientes para dar con la suerte o el paradero de la persona hasta su localización, incluidas aquellas para identificar plenamente sus restos en caso de que estos hayan sido localizados", también es cierto que las Fiscalías Especializadas tienen la responsabilidad de "coordinarse y dar impulso permanente a la búsqueda de personas desaparecidas" (Ley General, artículo 68). Esta coordinación e impulso de las acciones de búsqueda por parte de las fiscalías, devienen de los indicios o datos que se recuperen durante la investigación del delito que sean útiles para orientar la búsqueda y localización de la persona desaparecida; de manera recíproca, los elementos o datos recolectados por las Comisiones de Búsqueda contribuyen a la investigación de los delitos contemplados en la ley así como aquellos relacionados con el mismo hecho; en este sentido ambas acciones se complementan y ocurren de manera recíproca, además de simultánea y coordinada.

Para el desarrollo de una efectiva investigación, es necesario establecer mecanismos de coordinación para la investigación pronta y efectiva del delito. Para ello, las Fiscalías Especializadas pueden establecer acuerdos y convenios de colaboración con otras autoridades, instituciones y organizaciones que pudiesen colaborar con información para el desarrollo de la investigación, tales como las Comisiones de Búsqueda, otras Fiscalías Especializadas, organizaciones internacionales, organizaciones privadas, organizaciones civiles y todas aquellas cuya experticia contribuyan a la investigación del delito.



En este sentido, algunas de las acciones necesarias para la búsqueda y localización de la persona desaparecida requieren de control judicial (tales como órdenes de cateo, geolocalización, intervención de comunicaciones, toma de muestra obligatoria o exhumación de cadáveres), por lo que corresponde a la/el AMP coadyuvar con la solicitud de dichos actos. En este sentido, las Fiscalías Especializadas también pueden desarrollar acciones encaminadas a la búsqueda y localización de la persona desaparecida, a partir de los indicios y datos de prueba en los que se presume el posible paradero de la persona desaparecida; en cuyo caso, la/el AMP tendrá que priorizar las acciones de investigación encaminadas a localización con vida de la persona desaparecida.

Estas acciones de búsqueda tendrán que realizarse conforme a los objetivos, políticas, procesos, técnicas y métodos específicos que se señalen en el Protocolo Homologado de Búsqueda, o en el ordenamiento que se encuentre vigente para realizar la búsqueda de la persona desaparecida al momento de publicación de este Protocolo de Investigación.

Coordinación efectiva entre el personal sustantivo

Para la definición del Plan de Investigación es necesaria la participación de la/el AMP, Policía y servicios periciales, para que de común acuerdo establezcan la hipótesis principal (inicial) del caso; las hipótesis investigativas por desarrollar; así como los objetivos de la investigación; actos de investigación y las diligencias a seguir para su comprobación. Una buena práctica para la definición del Plan de Investigación es la inclusión de peritas(os) durante estas reuniones de planeación y coordinación, en tanto que su experiencia científica y técnica es necesaria para la definición de la idoneidad de la práctica de las pruebas periciales.

Son numerosos los casos en los que quien investiga, con base en experiencias de casos previos o en recomendaciones de colegas, solicitan la práctica de pruebas periciales que no necesariamente son las adecuadas para la demostración de alguna hipótesis específica, la acreditación de algún elemento necesario del tipo penal, o la participación de algún sujeto activo; la participación de la/el perita(o) en la definición de los objetivos de la investigación y en las diligencias que solicitarán quienes investigan, permite considerar dentro del Plan de Investigación elementos como:

- La pertinencia de la práctica de la prueba para la investigación.
- La estimación de tiempo que tomará la realización de la prueba pericial, tomando en consideración los recursos humanos, materiales y financieros a disposición de las Fiscalías Especializadas y sus servicios periciales.



- La exploración de otras pruebas periciales equivalentes a las solicitadas por quienes investigan, o que incluso pudiesen ser complementarias a las definidas.
- La mejora de los canales de comunicación que faciliten la solicitud de las pruebas periciales.
- La idoneidad de los indicios que deben ser recabados por el personal sustantivo para el desarrollo de las pruebas periciales correspondientes.

Para la planificación de la práctica de diligencias en campo, es necesario tomar en consideración las experiencias del personal sustantivo, que han llevado a cabo acciones de investigación en la región; las experiencias acumuladas del personal ofrecen la oportunidad de anticipar las dificultades que se pueden presentar en el terreno, así como información de primera mano que permitan realizar una mejor distribución de los recursos necesarios para el desarrollo de la investigación.

Para la investigación de los delitos de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, es fundamental la colaboración de distintas autoridades de diferentes ámbitos de gobierno. La investigación de estos delitos es una obligación del Estado mexicano y de todas las autoridades que lo componen, por lo que la coordinación y cooperación en la investigación de estos delitos, es muy importante para asegurar la complementariedad de capacidades técnicas, humanas y científicas para el óptimo desarrollo de la investigación, por medio de convenios de colaboración y coordinación conforme al artículo 70 fracción XXI de la Ley General.

Enfoque Diferencial y Especializado

Dentro del presente Protocolo, además de la descripción y adecuación de la fase de investigación del proceso penal conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP) y a la Ley General, se busca proveer de apoyo a la/el AMP para el desarrollo de la investigación de los delitos de desaparición forzada de personas o desaparición cometida por particulares. El principal reto ha sido la definición de un enfoque “diferencial y especializado para la investigación”, si bien se ha desarrollado numerosa literatura e instrumentos normativos enfocados a la “Atención de las víctimas”, poco se ha dicho sobre criterios orientadores para el desarrollo de una investigación penal en México, y mucho menos orientada a la investigación de un delito específico atendiendo características particulares de los sujetos involucrados.

En este Protocolo se busca desarrollar un instrumento que provea de la flexibilidad para la/el AMP de dirigir su investigación atendiendo las características particulares del caso concreto, pero inscrita bajo una serie de condiciones básicas que atienda:

1. Los elementos esenciales de los tipos penales contemplados en la Ley General.



2. Las características particulares de los sujetos pasivos que recienten directamente el delito.
3. Los elementos indispensables para la acreditación de la responsabilidad del sujeto activo.

No hay que perder de vista que en tanto que la Ley General señala la necesidad de generar criterios y metodología específica para la investigación de estos delitos, estos deben estar orientados al propósito de “...reunir indicios para el esclarecimiento de los hechos y... los datos de prueba que sustenten el ejercicio de la Acción Penal, la acusación contra la/el imputado(a) y la reparación integral del daño” de conformidad con el artículo 213 CNPP.

En este sentido, es que se desarrolló un:

Enfoque especializado

Este se concentra en la investigación de los delitos de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares y sus delitos relacionados y vinculados previstos en la Ley General, así como en la acreditación de que la/el imputado(a) lo cometió o participó en su comisión. La especialización y competencia de las Fiscalías Especializadas contempladas en la Ley General viene de la investigación de los delitos de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares; esto implica que el personal sustantivo adscrito a estas fiscalías debe contar con las competencias necesarias para: aplicar la Ley General en la materia; encuadrar los tipos penales respecto al hecho que la ley señala como delito; contar con habilidades de organización de los recursos y priorización de objetivos, para que así sean capaces de desarrollar una investigación criminal de forma eficiente y efectiva, atendiendo los elementos requeridos por el tipo.

Para el apoyo del personal sustantivo, dentro de este Protocolo se desarrollaron como herramientas auxiliares que atienden la especialización del delito:

1. Modelado del Proceso de Investigación

Macroproceso. Protocolo de Investigación para los delitos de Desaparición forzada de personas y Desaparición cometida por particulares

Protocolo de Investigación para los delitos de Desaparición forzada de personas y Desaparición cometida por particulares

- A. Diagrama de flujo de los Procesos del Protocolo de Investigación para los delitos de Desaparición forzada de personas y Desaparición cometida por particulares
- B. Descripción detallada de los procesos del Protocolo de Investigación para los delitos de Desaparición forzada de personas y Desaparición cometida por particulares



Subproceso de Recepción de la Noticia del hecho sin detenida(o) por Incompetencia

- C. Diagrama de flujo. Subproceso de Recepción de la noticia del hecho sin detenida(o) por Incompetencia
- D. Descripción detallada. Subproceso de Recepción de la noticia del hecho sin detenida(o) por Incompetencia

Subproceso de valoración de resultados y generación de la Hipótesis del Caso

- E. Diagrama de flujo. Subproceso de valoración de resultados y generación de la Hipótesis del Caso
- F. Descripción detallada. Subproceso de valoración de resultados y generación de la Hipótesis del Caso

Subproceso de Acreditación del Caso

- G. Diagrama de flujo. Subproceso de Acreditación del Caso
- H. Descripción detallada. Subproceso de Acreditación del Caso

2. Plan de Investigación

3. Análisis de Contexto

Así como los Anexos de apoyo

Anexo I. Diligencias básicas para la investigación

Sección A. Acreditación de los elementos necesarios de los tipos penales de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares

Sección B. investigación específica y diferenciada por sujeto pasivo

Sección C. investigación específica por calidad del sujeto activo

Anexo II. Investigación de desaparición forzada de integrantes de movimientos políticos del pasado

Anexo III. Análisis dogmático de los delitos de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares

Glosario de elementos normativos de los tipos previstos en la Ley General



Anexo V. Solicitud de pruebas periciales

Anexo VI. Atención a las niñas, niños o adolescentes en los casos en que aparezcan durante la investigación

Anexo VII. Atención psicosocial en las notificaciones de alto impacto emocional a partir de la identificación y entrega de cadáver, restos humanos u objetos pertenecientes a la víctima directa

Todos los elementos anteriores abonan a la comprensión de los delitos de desaparición forzada por parte de los investigadores, en tanto que describen el proceso penal con las particularidades que señala la Ley General para estos delitos, desarrolla un método de gestión y organización de la información contenida en la Carpeta de Investigación (CI), introduce una herramienta de apoyo para la investigación de estos delitos, establece las acciones de investigación y diligencias básicas a realizar por las/los AMP, ofrece un apoyo a quien investiga para entender con base en el análisis del tipo penal la manera de encuadrar los hechos, ofrece un apoyo de consulta de los principales criterios y estándares internacionales conforme a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para la investigación en la materia, y ofrece una hoja de ruta para la solicitud de pruebas de periciales conforme a los supuestos de localización de la persona desaparecida.

Enfoque diferenciado

Se concentra en la aplicación de diferentes diligencias a partir del conocimiento de la noticia criminal de acuerdo con el grupo específico de sujeto pasivo que, con motivo de su condición de vulnerabilidad, resintió el delito. Si bien la Ley General señala como principio la aplicación de un enfoque diferenciado y especializado, y reconoce la existencia de grupos vulnerables, ésta únicamente los describe sin precisar en qué consiste su vulnerabilidad. En este Protocolo se están considerando como grupos vulnerables aquellos descritos en las agravantes definidas en el artículo 32 de la Ley General; esto debido a que la aplicación de la pena sobre la comisión de los delitos de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares obedece a que el daño resentido por la víctima directa es mayor en tanto la situación de vulnerabilidad en que se encuentran estos en grupos lo incrementan, ya sea por su identidad, características fisiológicas, actividades que desempeñan, o por su género.

La identificación de las circunstancias y características particulares de una víctima permitirá que quien investiga desarrolle y dirija la investigación con base en un análisis criminológico y victimológico, que



atienda las condiciones en las que consiste su condición de vulnerabilidad. Así pues, el enfoque diferencial, en conjunto con el análisis de contexto, permite a la/el AMP determinar las situaciones violentas, tipos de derechos humanos violentados e incluso realizar una aproximación respecto de los delitos a los cuales son susceptibles de sufrir determinadas personas o grupos. Por tanto, el abordar la investigación de hechos probablemente constitutivos de delitos, en particular de desaparición forzada de personas o desaparición cometida por particulares, bajo este enfoque, permitirá la construcción de las primeras hipótesis del caso, la consideración de delitos concurrentes, así como determinar o depurar líneas de investigación particulares.

Cabe señalar que para la aplicación de las agravantes señaladas en el artículo 32 de la Ley General, se consideran distintas condicionales que van desde las características fisiológicas de la víctima (menores de edad, mujeres, mujeres embarazadas, personas con discapacidad o personas adultas mayores), la demostración de una “condición” (de persona migrante o afrodescendiente, la pertenencia a un pueblo o comunidad indígena), la demostración de que el delito se cometió en razón de su identidad (de género u orientación sexual), o incluso que la desaparición haya sido cometida en razón de la actividad que desempeñaba (defensor(a) de derechos humanos, periodista o integrantes de instituciones de seguridad pública).

Para el apoyo del personal sustantivo, dentro de este Protocolo se desarrollaron como herramientas auxiliares, lo siguiente:

3. Análisis de Contexto

Así como los Anexos de apoyo

Anexo I. Diligencias básicas para la investigación

Sección B. Investigación específica por calidad del sujeto pasivo

Sección C. Investigación específica por calidad del sujeto activo

Anexo II. Investigación de desapariciones forzadas de integrantes de movimientos políticos del pasado

Anexo III. Análisis dogmático de los delitos de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares

Glosario de elementos normativos de los tipos previstos en la Ley General



Anexo VI. Atención a las niñas, niños o adolescentes en los casos en que aparezcan durante la investigación

Anexo VII. Atención psicosocial en las notificaciones de alto impacto emocional a partir de la identificación y entrega de cadáver, restos humanos u objetos pertenecientes a la víctima directa

Cabe señalar que, para la investigación de los delitos de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, en los cuadros del Anexo I “Diligencias básicas para la investigación” se establecen las acciones de investigación y diligencias básicas para acreditar los elementos descritos en el tipo penal: la participación de un sujeto activo que comente el delito, los verbos rectores que describen el ilícito, y el sujeto pasivo que resiente la conducta, es decir la víctima directa. El propósito de este anexo es la de describir, por cada uno de los elementos del tipo penal, las acciones de investigación a realizar para acreditar sus elementos.

Cabe precisar, que en el caso de la Sección B “Investigación específica por tipo de sujeto pasivo” las diligencias fueron planteadas para mostrar una serie de diligencias básicas con el propósito de establecer el móvil por el que sucedieron los hechos, tomando en consideración que la pertenencia o identificación, por parte del agresor, con un grupo vulnerable específico se encuentra relacionado con el móvil por el que se cometió la desaparición forzada de personas o desaparición cometida por particulares. Como ya se ha mencionado, quien investiga no debe caer en la suposición de transferir la carga de responsabilidad sobre la víctima por la conducta resentida buscando acreditar una “calidad específica de la víctima”, en tanto que esta suposición estaría revictimizando a las víctimas indirectas e incluso criminalizando a las víctimas directas, o estableciendo hipótesis con base en prejuicios y estereotipos que sesgarían la investigación.

En este Protocolo, la aplicación de una perspectiva específica y diferenciada se realiza sobre la investigación penal de los delitos de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares. Cabe señalar, respecto de la perspectiva diferenciada, que si bien la Ley General reconoce las condiciones de vulnerabilidad en las que se encuentran determinados sectores de la población, desde el punto de vista victimológico estas no implican que sean más propensos a resentir estos delitos, sino que para la investigación de los delitos de desaparición forzada de personas estas características implican la existencia de conductas relacionadas, así como diversas motivaciones detrás de la desaparición probablemente relacionadas a estas particularidades.



También es necesario destacar que, a pesar de la aplicación del enfoque diferencial y especializado tanto para la investigación especializada como para la atención de la situación de vulnerabilidad de las víctimas directas, aún se requiere una técnica adicional que permita comprender a profundidad aquellas circunstancias que contribuyeron a la comisión del hecho que la ley señala como delito específico, atendiendo a los elementos del tipo penal. El **análisis de contexto** representa la herramienta que quien investiga deberá emplear para conocer las condiciones bajo las cuales aconteció el hecho delictuoso, como puede ser, la estructura y forma de operación de la/el imputado(a), los antecedentes de hechos similares o relacionados en el área geográfica, la identificación de patrones de criminalidad que lleven a suponer la presencia de una organización criminal para cometer estos delitos, la identificación de elementos y características similares en diversos hechos que pudieron ser cometidos por los mismos perpetradores; estos elementos permitirán dilucidar los patrones delictivos y calificar, de forma sustentada, que se trata de conductas reiteradas que se llevan a cabo de forma sistemática bajo una organización específica.

Participación de los familiares en la investigación

Es necesario tomar en consideración que en México, muchas de las víctimas indirectas de la desaparición forzada de personas o desaparición cometida por particulares, así como los familiares de personas desaparecidas, realizan por sus propios medios el acopio de información relevante para el desarrollo de la investigación: ya sea que tengan conocimiento de posibles testigos del hecho, conozcan a los perpetradores de estos delitos, hayan participado en las jornadas de búsqueda o las hayan organizado y llevado por su propia cuenta, que lleven un registro pormenorizado de documentos o constancias de las investigaciones que se hayan realizado por distintas autoridades. Todo este cúmulo de información es relevante para el desarrollo de la investigación, y es necesario que la/el AMP tenga conocimiento de estos antecedentes para dirigir la investigación de manera más efectiva.

La aportación de datos de prueba de los familiares y personas afines a la víctima de desaparición es la función más importante que desempeñan dentro de la investigación penal, en tanto que hacen de conocimiento de la autoridad ministerial, primero, la ocurrencia del hecho que la ley señala como delito, y segundo, aporta información relevante para la definición de hipótesis y el establecimiento de acciones de investigación.

La Ley General reconoce en el artículo 138 el derecho de los familiares de personas desaparecidas, para que durante la investigación accedan a:



1. Participar y ser informados de las acciones de búsqueda que las autoridades competentes realicen;
2. Proponer diligencias, así como a brindar sus opiniones sobre aquellas que las autoridades competentes planeen;
3. Acceder, directamente o mediante sus representantes, a los expedientes que sean abiertos en materia de búsqueda o investigación;
4. Acceder a las medidas de ayuda, asistencia y atención, particularmente aquellas que faciliten su participación en acciones de búsqueda, incluidas medidas de apoyo psicosocial;
5. Beneficiarse de los programas o acciones de protección para salvaguarda de su integridad física y emocional
6. Solicitar la intervención de expertos o peritos independientes, nacionales o internacionales en términos de lo dispuesto en la normativa aplicable;
7. Ser informados de forma diligente, sobre los resultados de identificación o localización de restos, en atención a los protocolos en la materia
8. Acceder a los programas y servicios especializados que las autoridades competentes diseñen e implementen para la atención y superación del daño producto de los delitos contemplados en la presente Ley.

De igual manera, la Ley General de Víctimas (LGV) en su artículo 12 reconoce y protege los derechos de las víctimas durante el proceso penal. Es una obligación de la/el AMP mantener informados a las víctimas indirectas y sus representantes legales, el estado que guarda la investigación, cuando así lo requieran. Se sugiere que la/el AMP defina de común acuerdo con las víctimas indirectas reuniones de seguimiento y de presentación de avances en la investigación, **con base en el plan y agenda de investigación.**

Durante estas reuniones, las víctimas o sus representantes legales pueden proponer y solicitar a la/el AMP la realización de actos de investigación que consideren pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos (artículo 216 CNPP; 12 fracción III de la LGV). Para la resolución de estas solicitudes, la/el AMP tiene un plazo de tres días conforme a lo establecido en el CNPP, mismas que deberán quedar establecidas en el Plan de Investigación.

La comunicación entre la autoridad ministerial y las víctimas indirectas debe ser clara, continúa y permanente en todo momento, por lo que es una obligación tanto de la/el AMP, Policías y Peritas(os), el atender y resolver las dudas que surjan durante las reuniones de seguimiento, así como a solicitud de las propias víctimas o de sus representantes legales. Es muy importante que, durante todo el proceso



penal, las víctimas sean acompañadas por un(a) Asesor(a) Jurídico(a) (artículo 12 fracción IV de la LGV) quien represente sus intereses ante las autoridades ministeriales y judiciales.

De igual manera, durante la investigación de los hechos, es posible que la integridad física y la seguridad personal de las víctimas indirectas se vea comprometida, por lo que corresponde al Estado mexicano el proporcionar las medidas de seguridad y de protección necesarias (artículo 12 fracción VII de la LGV). Es una obligación de la/el AMP el indagar y determinar si las víctimas indirectas se encuentran en una situación de riesgo, con base en los principios de:

1. **Protección:** Considera primordial la protección de la vida, la integridad física, la libertad y la seguridad de las personas;
2. **Necesidad y proporcionalidad:** Las medidas de protección deben responder al riesgo o peligro en que se encuentre la persona destinataria, y deben ser aplicadas en cuanto sean necesarias para garantizar su seguridad o reducir los riesgos existentes;
3. **Confidencialidad:** Toda la información y actividad administrativa o jurisdiccional relacionada con el ámbito de protección de las personas, debe ser reservada, y
4. **Oportunidad y eficacia:** Las medidas deben ser oportunas, específicas, adecuadas y eficientes para la protección de la víctima y deben ser otorgadas e implementadas a partir del momento y durante el tiempo que garanticen su objetivo

Para la solicitud y aplicación de estas medidas, es necesario que la/el AMP tome en consideración la pertenencia de las víctimas indirectas a algún grupo en situación de vulnerabilidad o condición especial que requiera de un tratamiento diferenciado. La aplicación de estas medidas se realizará conforme a lo establecido en el artículo 137 del CNPP.

Cabe señalar, que, si bien corresponde a la/el AMP el impulso de la búsqueda permanente, la información concerniente a la búsqueda de personas desaparecidas y los resultados de estas corresponde a la Comisión Nacional/Local de Búsqueda. La/el AMP podrá solicitar a las comisiones de búsqueda la presentación de resultados de las búsquedas a los familiares y víctimas indirectas de la persona desaparecida, así como la actualización de la información de los Expedientes de Búsqueda. La Comisión Nacional/Local de Búsqueda, como auxiliares de la/el AMP (artículos 53 fracción XXI y XXIII y 70 fracción II, IV y X, de la Ley General) es la autoridad administrativa que llevará a cabo las acciones de búsqueda de las personas desaparecidas y no localizadas, sin embargo, esto no representa impedimento alguno para que desde las propias Fiscalías Especializadas se organicen y lleven a cabo dichas acciones.



2. Marco Jurídico

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
2. Código Penal Federal
3. Código Nacional de Procedimientos Penales
4. Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda
5. Ley General para Prevenir Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos delitos.
6. Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la Fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
7. Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública
8. Ley General de Víctimas
9. Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
10. Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas
11. Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
12. Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
13. Ley General de Responsabilidades Administrativas
14. Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública
15. Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados
16. Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal
17. Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
18. Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación
19. Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros tratos o Penas Cruelles, Inhumanos o Degradantes
20. Ley de Amparo Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Políticas de los Estados Unidos Mexicanos
21. Guía Nacional de Cadena de Custodia
22. Protocolo Nacional de Actuación de Primer Respondiente.
23. Protocolo Nacional de Actuación del Policía con Capacidades para Procesar el Lugar de la Intervención
24. Protocolo Nacional de Actuación de Traslado



25. Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y la Investigación del Delito de Desaparición Forzada
26. Convenio de Colaboración que celebran la Procuraduría General de la República, la Procuraduría General de Justicia Militar y las Procuradurías y Fiscalías Generales de Justicia de las Entidades Federativas

De Carácter General

1. Carta de las Naciones Unidas (ONU)
2. Declaración Universal de Derechos Humanos (ONU)
3. Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (OEA)
4. Carta de la Organización de los Estados Americanos
5. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ONU)
6. Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto San José. OEA)

Desaparición Forzada

7. Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas
8. Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas
9. Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas

Personas con Discapacidad

10. Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad.
11. Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
12. Protocolo Facultativo de la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad

Discriminación Racial

13. Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial.

Mujeres

14. Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer
15. Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la mujer “Convención de Belem Do Pará”.



16. Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW)

Menores

17. Convención sobre los Derechos del Niño (ONU)
18. Convención sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores
19. Convención sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores
20. Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de justicia a menores, “Reglas de Beijing”.
21. Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de los menores privados de la libertad

Minorías y Pueblos Indígenas

22. Convenio No. 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes.

Tortura

23. Declaración sobre la protección de Todas las Personas contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles Inhumanos o Degradantes
24. Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Cruelles, Inhumanos o Degradantes (ONU)
25. Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura (OEA)

Penal Internacional

26. Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional
27. Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos
28. Reglas Mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de la Libertad (Reglas de Tokio)
29. Conjunto de principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión
30. Protocolo Modelo para la Investigación Legal de Ejecuciones Extralegales, Arbitrarias y Sumarias, “Protocolo de Minnesota de las Naciones Unidas”.

Los criterios jurisprudenciales que generan los órganos jurisdiccionales nacionales, así como los internacionales en materia de derechos humanos y desaparición forzada de personas o desaparición cometida por particulares son aplicables de manera obligatoria en nuestro contexto jurídico nacional; en consecuencia, es importante que el personal sustantivo cuente con estas herramientas e instrumentos jurídicos que les permitan generar argumentos jurídicos lógicos, congruentes y coherentes en la



prevención, investigación y persecución de los hechos que la ley señala como delitos. Al respecto, se realizó una labor de sistematización de los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos más emblemáticos y de mayor trascendencia jurídica en esta materia especializada, los cuales quedan a disposición del personal sustantivo en el Anexo denominado “Criterios judiciales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.

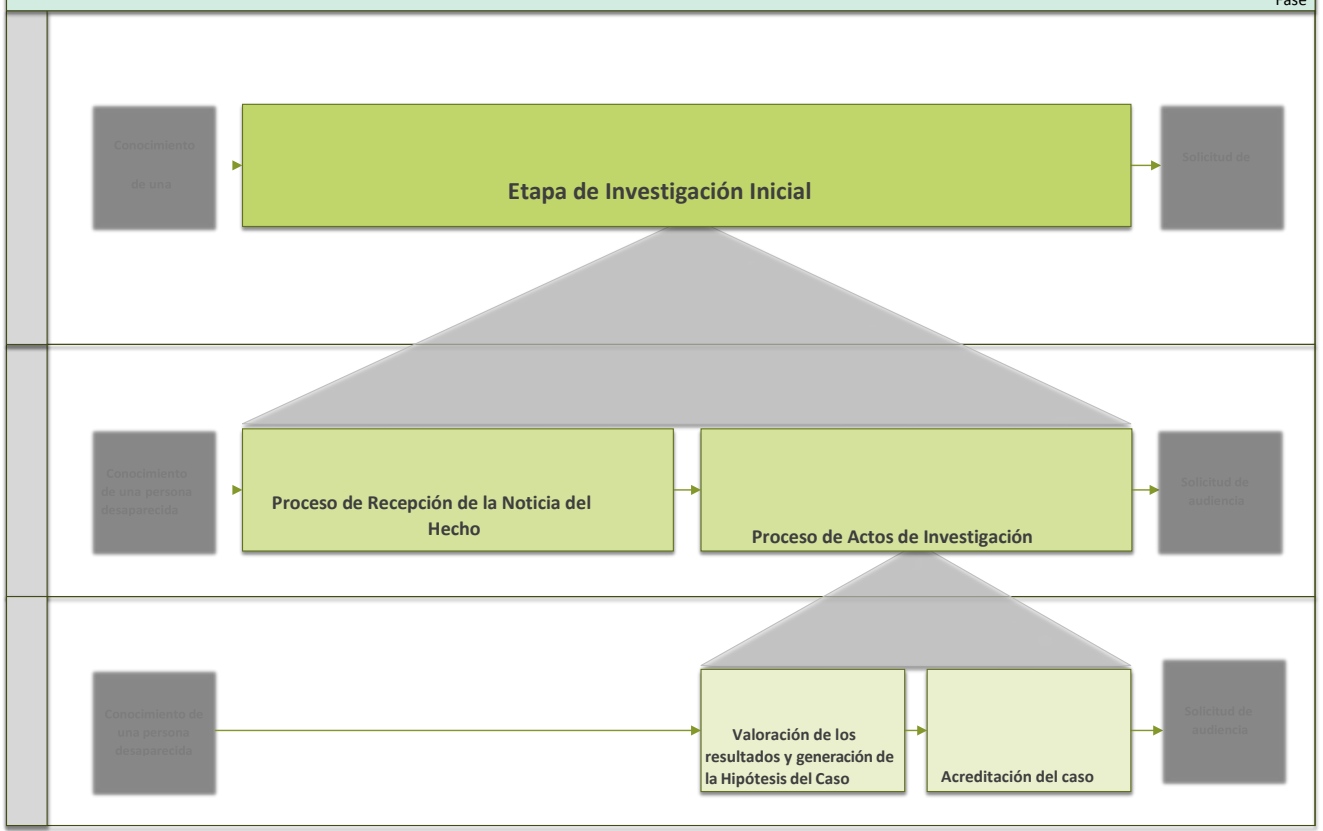
3. Alcance

El presente Protocolo abarcará únicamente la etapa de Investigación inicial de los hechos que la Ley General señala como delitos de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares; es decir, que comienza con la presentación de la denuncia, noticia o requisito equivalente y concluye con la solicitud de audiencia inicial ante el Juez de Control. Para el desarrollo del procedimiento penal ordinario se deberán atender los Protocolos de actuación y disposiciones normativas correspondientes. El flujo de la investigación se integra por dos Procesos: 1.- Proceso de Recepción de la Noticia Criminal, el cual contiene el conocimiento de la desaparición de una persona con detenida(o) y sin detenida(o) e inicio de la Carpeta de Investigación (CI), así como el Subproceso de la Recepción de la noticia del hecho sin detenida(o) por Incompetencia y 2.- Proceso de Actos de Investigación, mismo que está conformado por dos subprocesos: a) Subproceso de Valoración de los resultados y generación de la Hipótesis del Caso, el cual contiene la solicitud, ejecución y recepción de diligencias ministeriales y la elaboración del Plan de Investigación y b) Subproceso de Acreditación del Caso, el que está integrado por la acreditación de hipótesis y líneas de investigación, acreditación del hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de que la/el imputado(a) lo cometió o participó en su comisión, así como la solicitud de audiencia a la/el Jueza(ez) de Control para formular acusación y vinculación a proceso de la/el imputado(a).



Mapeo del proceso

Fase





4. Objetivos del Protocolo

1. Desarrollar una técnica específica, diferenciada y especializada para la investigación de los delitos de desaparición forzada de personas y la cometida por particulares, para conocer el paradero de la persona desaparecida, dilucidar el móvil y motivos de la desaparición, determinar la responsabilidad de los autores del hecho, para así garantizar a las víctimas el legítimo y legal acceso al derecho a la justicia completa e integral y satisfacer su derecho verdad.
2. Homologar la actuación del personal sustantivo de la PGR, Procuradurías o Fiscalías Generales de los Estados durante la investigación cuando exista un hecho que la ley señale como delito, a fin de reunir indicios y recabar datos de prueba para sustentar el ejercicio de la Acción Penal.
3. Conocer el paradero o destino de la persona desaparecida, mediante la acción, coordinación eficaz y oportuna de las instituciones corresponsables en el marco de la actuación legal que corresponda de acuerdo con su ámbito de competencia, así como garantizar el derecho a la verdad, la atención integral y reparación plena del daño a las víctimas del delito.
4. Establecer los alcances entre búsqueda e investigación que permita de manera efectiva con la Comisión Nacional/Local de Búsqueda la coordinación oportuna de las acciones tendentes al fortalecimiento de la investigación.
5. Dilucidar el móvil y los motivos detrás de la desaparición para el diseño de estrategias efectivas para el combate al delito de desaparición forzada de personas y la cometida por particulares.
6. Determinar con certeza jurídica la responsabilidad de la autoría intelectual, material y partícipes coautores de la desaparición forzada de personas y la cometida por particulares, así como de los delitos conexos o concurrentes, que deriven en sentencias, previendo la proporcionalidad de la reparación integral del daño.
7. Suministrar y actualizar con información confiable y oportuna el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas (SNBP) y aquellos registros que emanen del mismo de conformidad a su competencia y responsabilidad.



5. Políticas de operación

Las presentes políticas de operación son de carácter transversal y obligatorio para el personal sustantivo, para la adecuada aplicación de este protocolo.

1. La/el AMP, Policía y Peritas(os) en todo momento, deben reconocer, respetar y garantizar los derechos humanos de toda persona involucrada en el procedimiento penal.
2. La/el AMP deberá conducir la investigación con base en los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, confidencialidad, responsabilidad, publicidad, transparencia, imparcialidad, inmediatez, debida diligencia y recurso judicial efectivo.
3. La/el AMP deberá priorizar sus actos de investigación conforme al principio de presunción de vida.
4. La/el AMP, Policía y Peritas(os) están obligados a asegurar la participación de las víctimas directas e indirectas, entre estas familiares, durante la etapa de investigación evitando su revictimización, con acompañamiento médico y psicosocial que se requiera para el caso en concreto.
5. La/el AMP, Policía y Peritas(os) están obligados a atender, en todo el procedimiento de investigación, los principios de representación legal y coadyuvancia por parte de la(s) víctima(s) de tener derecho al acceso a la información y a la investigación, con facultad plena de aportar datos de prueba pertinentes, idóneos y eficaces conforme a lo señalado en la Ley General y el CNPP. En su caso, dará intervención a la/el asesor(a) jurídico(a), ya sea público o privado, quien participará junto con la víctima (directa o indirecta) o en su representación, en todas las diligencias que se practiquen.
6. La/el AMP debe ordenar de forma inmediata, urgente y oportuna la implementación de las medidas de protección, adecuadas al caso en concreto, a todas las autoridades pertinentes para salvaguardar la integridad de las víctimas, familiares o cualquier persona que se encuentre en riesgo dentro de la investigación atendiendo la normatividad aplicable.
7. La/el AMP debe fomentar el trabajo en equipo y la aplicación de una metodología debidamente planificada para el desarrollo de la investigación con base en la teoría del caso.
8. La/el AMP debe dirigir y realizar acciones planeadas y coordinadas con personal de la Policía, Peritas(os) y personal de la Unidad de Análisis de Contexto con el propósito de generar un Plan de Investigación que contemple metodológicamente las hipótesis y líneas de investigación que justifiquen las acciones y diligencias que acrediten la teoría del caso.



9. La/el AMP debe presentar una Agenda de Investigación con las acciones propuestas en el Plan de Investigación, las instituciones que participarán, diligencias específicas, responsables y tiempo estimado, lo anterior con la finalidad de estimar y vigilar el tiempo de respuesta.
10. La/el AMP debe en cualquier caso relacionado o que involucre niñas, niños o adolescentes conducirse con base en los principios que rigen el enfoque diferenciado y especializado con irrestricto respeto al ISN, la prevalencia de sus derechos y su protección integral conforme a los protocolos pertinentes que garanticen los principios de debida diligencia y justicia pronta e integral.
11. La/el AMP debe comunicar a las autoridades especializadas en cualquier caso relacionado o que involucre los derechos de las niñas, niños o adolescentes para su oportuna intervención en la investigación.
12. La/el AMP debe en cualquier caso en que se involucre a personas de un grupo en estado de vulnerabilidad, conducirse bajo los principios que rigen el enfoque diferenciado y especializado para el caso en concreto, evitando en todo momento la descalificación, la invisibilización de una vulnerabilidad específica, el maltrato, el desprecio o la estigmatización, la minimización del daño o cualquier otra que discrimine o menoscabe los derechos de las personas. Aplicando los protocolos vigentes y pertinentes que garanticen los principios de debida diligencia y justicia pronta e integral.
13. La/el AMP encargado de la investigación debe generar y actualizar la información pertinente de los registros nacionales que son obligatorios en su competencia, de manera pronta, inmediata y oportuna para efectos de no duplicar la investigación, agilizar la investigación y fomentar acciones para la búsqueda y localización de persona(s) desaparecida(s).
14. La/el AMP debe dar certeza de la información que a través de mecanismos adoptados por el SNBP obtenga para validar su veracidad, oportunidad y completitud de la información contenida en los registros.
15. Personal de la Policía y Peritas(os) que intervengan en la investigación deben generar la información y los resultados obtenidos con la immediatez y oportuna diligencia que el caso determine.
16. La/el AMP debe privilegiar la intervención de servicios periciales en el procesamiento de la evidencia o elementos materiales probatorios, llevando a cabo su manejo y control con apego a los procedimientos establecidos en la Guía Nacional de Cadena de Custodia (GNCC) o cualquier otro protocolo de la especialidad que implique la intervención del experto.
17. La/el AMP debe cumplir todo requerimiento o solicitud de información en los tiempos y plazos previstos en la ley, en atención al caso concreto.



18. La/el AMP debe generar las acciones necesarias y eficaces para establecer los canales de comunicación, coordinación y cooperación con otras autoridades para la investigación, con la finalidad de corroborar las hipótesis y las estrategias del Plan de Investigación cuando exista la conexidad de hechos.
19. La/el AMP deberá imponer a sus auxiliares directos, autoridades o particulares, alguna medida de apremio eficiente dependiendo del caso en concreto, para el debido cumplimiento de sus actos en ejercicio de sus funciones.
20. La/el AMP, Policía y Peritas(os), deberán velar por garantizar la confidencialidad y reserva de los datos personales, así mismo, respetarán el derecho a la intimidad y privacidad de cualquier persona que, por cualquier circunstancia, se vinculan con una investigación penal (víctimas, familiares, testigo o imputado(a), de conformidad con lo establecido en el artículo 6 de la CPEUM y la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
21. La omisión o negligencia en la aplicación del presente instrumento normativo por parte de la/el AMP, Policía o Perita(o), tendrá como consecuencia un procedimiento de responsabilidad administrativa y/o penal.



6. Roles de las/los participantes

Responsable	Descripción
Agente del Ministerio Público (AMP)	Conduce y dirige la investigación de un hecho que la ley señale como delito, construye el plan de investigación, partiendo de la formulación de su teoría del caso, coordinando a la Policía, Peritas(os) y otras autoridades; coadyuva con la Comisión Nacional/Local de Búsqueda a efecto de localizar a la persona desaparecida, se auxilia del área de atención psicosocial para que, a través de ésta se contacte con las víctimas o personas afectadas y analiza los datos de prueba a efecto de sustentar las peticiones legales ante la/el Jueza(ez) de Control. Solicita la intervención de las autoridades requeridas para las notificaciones de alto impacto emocional y coordina la integración del equipo de trabajo; b) Proporciona a las víctimas la información referente a la investigación.
Policía	Ejecuta materialmente la investigación, busca y aporta elementos de prueba que permiten formular la teoría del caso y desarrollar el Plan de Investigación; resguarda la seguridad de las víctimas o personas afectadas, de las autoridades y del lugar de la notificación.
Asesor(a) Jurídico(a) (AJ)	Representa los intereses jurídicos de las víctimas dentro del procedimiento de investigación en términos de la legislación aplicable en la materia.
Perita(o)	Aporta el sustento científico-técnico de la investigación, brinda asesoría científico-técnico con base en conocimiento especializado, procesa los indicios o elementos materiales que sirven de base para la emisión de los dictámenes y brinda información científico-técnico a las víctimas o personas afectadas, en presencia de la/el AMP, relacionada con el dictamen emitido de acuerdo con su área.
Psicóloga(o) Especialista en Atención Psicosocial (PEAP)	Realiza las tareas de atención psicosocial, brinda los servicios de contención psicológica sobre los denunciantes y prepara a las víctimas o personas afectadas para recibir la noticia; coordina la diligencia de notificación en auxilio de la/el AMP, con el fin de preservar la estabilidad e integridad psicoemocional de las víctimas o personas afectadas; brinda contención y acompañamiento antes, durante y



Responsable	Descripción
	después de la notificación; da seguimiento individual, grupal y comunitario a las víctimas.
Víctimas	Persona física que sufrió algún daño o menoscabo económico, físico, mental, emocional, o en general cualquier puesta en peligro o lesión a sus bienes jurídicos o derechos como consecuencia de la comisión de un delito o violación a sus derechos humanos. Así mismo, se constituirá como coadyuvante del Ministerio Público para aportar indicios o datos de prueba, proponer líneas de investigación y de manera general intervenir en todo el procedimiento.
Comisión Nacional/Local de Búsqueda	Autoridad administrativa (nacional o local) encargada de realizar la búsqueda de las personas reportadas como desaparecidas; tiene la obligación de informar de inmediato a la/el AMP de los hechos que las leyes señalan como delito, que se deprendan de las acciones de búsqueda que realicen, asimismo se coordina con la PGR, Procuradurías o Fiscalías Generales de los Estados durante la etapa de investigación y búsqueda.

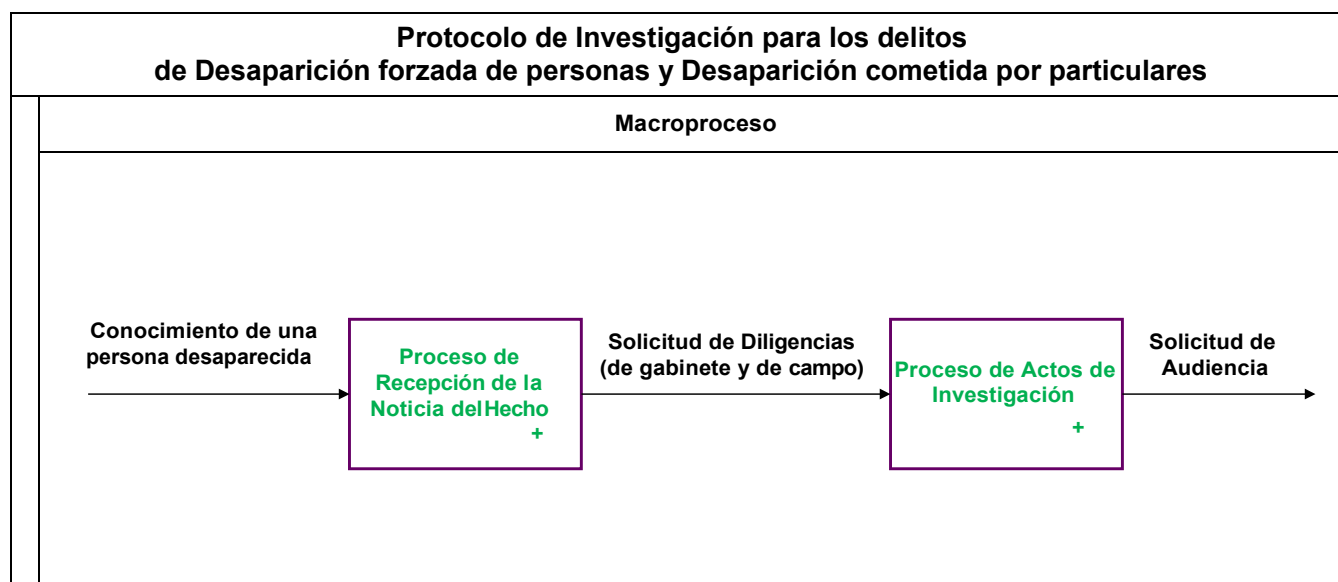


7. Modelo del Proceso de Investigación

Conforme a lo establecido en la Ley General y el CNPP, en esta sección se desarrolla el proceso a seguir por parte de la/el AMP para el inicio e integración de la CI durante la fase de investigación; sin soslayar que también es aplicable en lo que corresponda para los procedimientos de integración de AP, por lo que toda mención debe entenderse al caso concreto. En este proceso y sus subprocesos, se detallan las etapas a seguir en el caso de los delitos de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares; desde la recepción de la noticia del hecho, el inicio de la CI, elaboración del Plan de investigación, la ejecución de actos de investigación, las determinaciones ministeriales y hasta la solicitud de audiencia inicial ante Juez de Control. En todo caso la/el AMP deberá atender las disposiciones sobre los actos de investigación que requieren autorización previa de la/el Jueza(ez) de Control de conformidad a la ley aplicable en la materia y criterios jurisprudenciales.

Estos procesos tienen el carácter de obligatorio y establecen acciones y diligencias de actuación de manera enunciativa y no limitativa; la/el AMP, Policía o Perita(o) están obligados a atender esta metodología y aplicarla en el caso concreto conforme a los lineamientos que establece la normatividad en la materia.

Macroproceso del Protocolo de Investigación para los delitos de Desaparición forzada de personas y Desaparición cometida por particulares

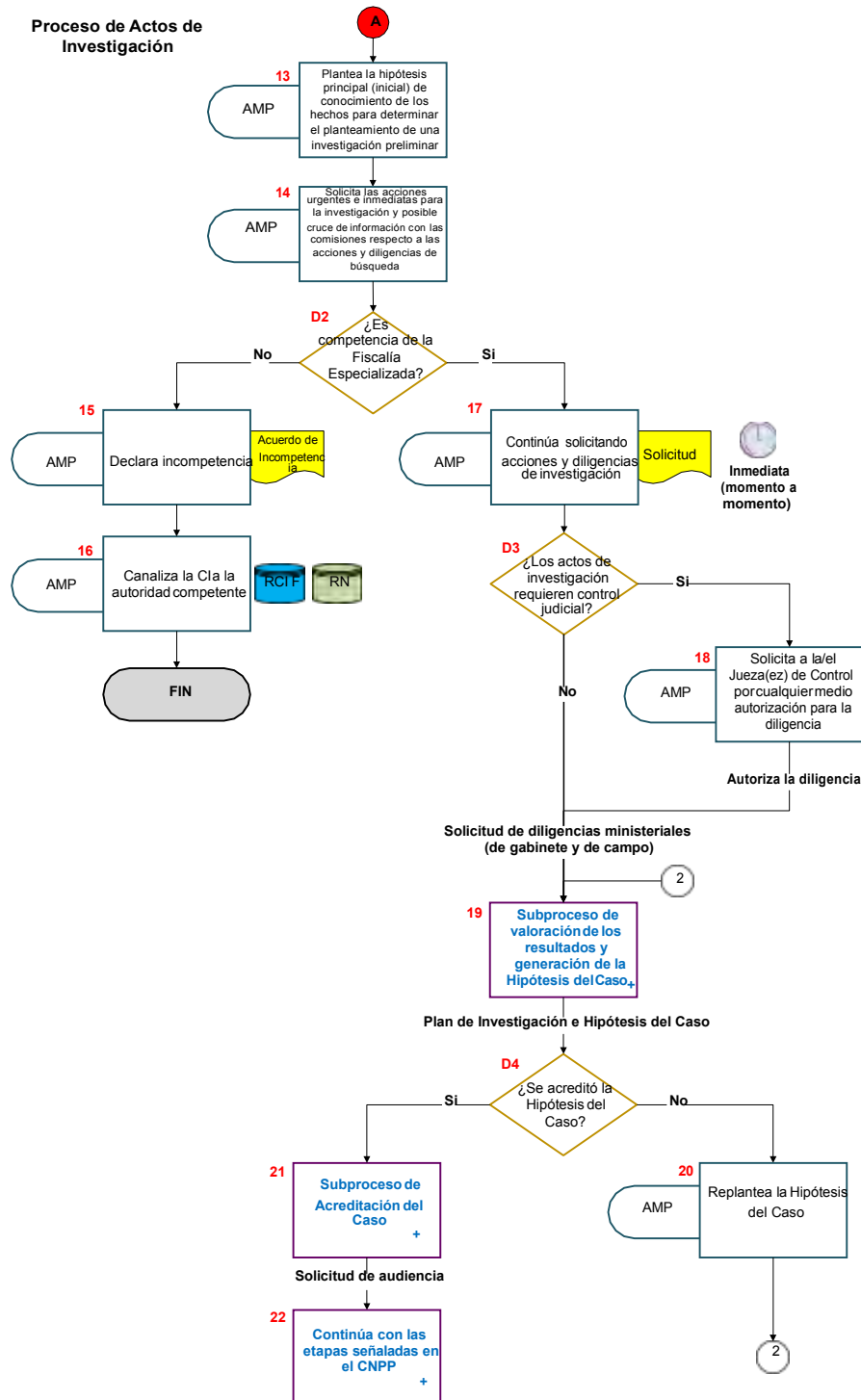




Protocolo de Investigación para los delitos de Desaparición forzada de personas y Desaparición cometida por particulares

Procesos (continúa)

Proceso de Actos de Investigación





B. Descripción detallada de los Procesos del Protocolo de Investigación para los delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición cometida por Particulares

El proceso de Recepción de noticia del hecho se detona cuando se tiene conocimiento de una persona desaparecida y se sigue el camino de acuerdo con las siguientes opciones:

- A. Con Detenida(o)**
- B. Sin Detenida(o)**

Proceso de Recepción de la noticia del hecho

A. Con Detenida(o)

- 1. La/el AMP recibe a la/el detenida(o), certificado médico y el IPH para iniciar la CI.**
- 2. Se complementa el procedimiento conforme a lo previsto en el CNPP y los protocolos de actuación correspondiente.**

B. Sin detenida(o)

La Recepción de la noticia del hecho sin detenida(o) se puede realizar en dos supuestos, dependiendo si existe Incompetencia:

- A. Recepción de la noticia del hecho sin detenida(o) por Incompetencia**
- B. Recepción de la noticia del hecho sin detenida(o)**

A. Recepción de la noticia del hecho sin detenida(o) por Incompetencia

- 3. Se ejecuta el Subproceso de Recepción de la noticia del hecho sin detenida(o) por Incompetencia**
- 4. Continúa en el Proceso de Actos de Investigación, del Subproceso de valoración de los resultados y generación de la Hipótesis del Caso, en la actividad 21. “La/el AMP/Perita(o)/Policía/UAC generan Plan de Investigación”**

B. Recepción de la noticia del hecho sin detenida(o)

Existen cuatro opciones:

- A. Denuncia**
- B. Noticia**
- C. Reporte**
- D. Reporte (Expediente de Búsqueda)**



Cualquier persona puede solicitar la búsqueda de una persona desaparecida o no localizada mediante: Denuncia, Noticia o Reporte. Tratándose de una Denuncia, no será necesaria su ratificación (de conformidad con el artículo 80 de la Ley General).

Para la investigación de los delitos de Desaparición Forzada de personas y cometida por Particulares, las autoridades y personal sustantivo podrán conocer del hecho por medio de estas tres vías. En el caso de la denuncia, necesariamente se presume la ocurrencia de un hecho que la ley señala como delito y por lo tanto su investigación es competencia de la autoridad ministerial. Para el Reporte, no se debe perder de vista que es una forma de iniciar la búsqueda de una persona desaparecida o no localizada, y por lo tanto corresponde a las Comisiones de Búsqueda respectivas, el iniciar las acciones inmediatas de búsqueda; de presumirse la ocurrencia de un hecho que la ley señala como delito, le corresponde a la autoridad ministerial el inicio sin dilación de la CI correspondiente.

A. Denuncia (artículo 82 de la Ley General)

5. La/el AMP/Polici a/AJ/PEAP realiza entrevista de la persona que conoci  de la desaparici n o de la v ctima indirecta.

Notas:

- Se genera entrevista
- La/el AMP y Polici a deben estar capacitados y profesionalmente certificados en la materia para recabar las entrevistas de v ctimas y testigos generando los insumos necesarios y fundamentales que den sustento y fortaleza a las dem s acciones y diligencias que motiven la investigaci n.
- La/el AMP y Polici a deben reconocer que las v ctimas y testigos son titulares y sujetos de derechos a los que debe respetarse y protegerse en todo momento su dignidad como personas; incluso a no ser objeto de violencia, arbitrariedades, discriminaci n y recibir por parte de todo el personal sustantivo un trato sensible e igual; con ello se garantizar  el acceso pleno a sus derechos humanos con un enfoque diferenciado y especializado atento al caso concreto.
- Como parte de los Derechos Humanos que le asisten a la v ctima directa o indirecta, es la de designar un(a) Asesor(a) Jur dico(a) p blico o privado, para la representaci n de sus derechos en cualquier momento del procedimiento de investigaci n, en t rminos de lo previsto en el art culo 110 del CNPP.
- Para recabar la entrevista se deber  solicitar la intervenci n de la CEAV/Comisi n Local de V ctimas, quien habr  de designar al personal pertinente a efecto de que brinde la



asistencia integral a la víctima directa o indirecta, testigos o familiares; asimismo se dará intervención a la/el Psicóloga(o) Especialista en Atención Psicosocial (PEAP) y Policía. La/el PEAP tendrá como acciones fundamentales de brindar atención, contención y acompañamiento de las víctimas en cualquier etapa del procedimiento de investigación.

- La/el AMP/Policía comunicarán los derechos que por ley se reconocen a la víctima y garantiza su legal acceso a los mismos. Se activará el registro correspondiente por medio del Folio Único en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDL), con la información necesaria para que las Comisiones de Búsqueda efectúen las primeras acciones de búsqueda y para evitar duplicidad de registros y actuaciones entre las diferentes autoridades de la materia.
- La/el AMP después de la entrevista, evalúa la información disponible, analiza el hecho que la ley señale como delito, la calidad específica de las personas involucradas, así como su competencia para investigar el mismo de forma inmediata y diligente (optimizando el tiempo, debido a que las primeras horas posteriores al evento aportan el mayor número de datos de pruebas).
- La/el AMP analiza la información y de esta manera estará en capacidad de generar una primera versión sobre los hechos, conforme a ello establecer la hipótesis inicial y generar las primeras acciones urgentes e inmediatas de la investigación.
- La/el AMP se coordinará con la Comisión Nacional/Local de Búsqueda para los cruces e interconexión de información correspondientes en el Sistema Único de Información (SUI), así como en la coordinación y cooperación de las acciones y diligencias para la búsqueda en vida de la persona desaparecida o no localizada.
- Si la desaparición de la persona sucedió previo a la vigencia de la Ley General, se deberá preguntar al entrevistado, algún familiar o amistades, si hizo del conocimiento el hecho a alguna autoridad. En caso afirmativo, se deben realizar las diligencias pertinentes para compilar la información a efecto de analizarla, evaluarla y registrarla en el Sistema Único, con ello evitar la revictimización del entrevistado y la duplicidad de actuaciones.

B. Noticia (artículos 4 fracción XIV y 83 de la Ley General)

Nota: La/el AMP evalúa la información disponible, verifica los antecedentes de la noticia y corrobora que se trate de un posible hecho que la ley señale como delito.

6. La/el AMP valora la existencia de un hecho que la ley señala como delito.

D1. ¿El hecho se considera delito?



Nota: Para determinar si el hecho es un delito deben considerarse las fracciones que se encuentran en el artículo 89 de la Ley General.

- **El hecho no se considera delito**

7. La/el AMP canaliza la denuncia o noticia a través de un Reporte a la Comisión Nacional/Local de Búsqueda a efecto de iniciar la búsqueda.

Nota: Se genera Reporte

Continúa en la actividad 9. “La Comisión Nacional/Local de Búsqueda realiza la búsqueda de la persona desaparecida y en su caso atiende lo previsto en el artículo 89 de la Ley General”.

C. Reporte (artículos 4 y 81 de la Ley General)

8. La/el AMP canaliza el Reporte a la Comisión Nacional/Local de Búsqueda.

Notas:

- Se genera Reporte de búsqueda cuando los hechos no sean constitutivos de delito.
- La/el AMP/Polici a comunicarán los derechos que por ley se reconocen a la v ctima y garantizar n su legal acceso a los mismos. Se activar  el registro correspondiente por medio del Folio  nico en el RNPDNL, con la informaci n necesaria para que las Comisiones de B squeda efect en las primeras acciones de b squeda.
- La/el AMP se coordinar  con la Comisi n Nacional/Local de B squeda para los cruces de informaci n correspondientes en el SUI, asimismo iniciar la b squeda con la menor dilaci n posible.

9. La Comisi n Nacional/Local de B squeda realiza la b squeda de la persona desaparecida y en su caso atiende lo previsto en el art culo 89 de la Ley General.

Notas:

- La b squeda se realizar  de conformidad al Protocolo Homologado de B squeda.
- La Comisi n Nacional/Local de B squeda deber  atender lo previsto en el art culo 89, fracciones IV y V de la Ley General, para establecer la presunci n de delito, a trav s de la nota y/o reporte de persona desaparecida, en cuyo caso, se dar  la intervenci n a la Fiscalt a correspondiente en donde la/el AMP deber  iniciar de inmediato la CI respectiva, bajo cualquiera de los tipos penales que se nale la Ley General.
- La Comisi n Nacional/Local de B squeda debe notificar a la/el AMP en caso de que se identifiquen elementos que presuman la ocurrencia de un hecho que la Ley se nal  como



delito, a partir de las acciones de búsqueda que lleve a cabo. A partir de ese momento, se mantendrá comunicación continua y permanente entre la Comisión Nacional/Local de Búsqueda y la/el AMP para realizar la búsqueda de la persona desaparecida o no localizada, con base en las atribuciones y ámbitos de actuación de cada autoridad.

- La Comisión Nacional/Local de Búsqueda deberá integrar un Expediente de Búsqueda en el que documente de manera lógica y ordenada, todas las acciones que lleve a cabo para la búsqueda y localización de una persona desaparecida o no localizada, mismo que tendrá como eje rector un Plan de Búsqueda.
- El Expediente de Búsqueda contendrá toda la información concerniente a las acciones de búsqueda llevadas a cabo por la Comisión Nacional/Local de Búsqueda, así como los resultados de estos. Este expediente deberá contener por lo menos: la referencia al Folio Único para la consulta de los datos de la persona desaparecida en el RNPDL, así como para la consulta de la información relevante en el SUI, y los sistemas que lo integran; las entrevistas realizadas a las víctimas indirectas y a las personas que solicitaron el reporte de búsqueda, la reconstrucción de la ruta de la desaparición de la víctima directa; el detalle de las jornadas de búsqueda realizadas, así como de los polígonos de búsqueda definidos; la relación de los objetos localizados y recolectados así como información recabada durante las jornadas de búsqueda, con las formalidades señaladas en el CNPP y la GNCC.

D. Reporte (Expediente de Búsqueda)

10. La/el AMP recibe el Expediente de Búsqueda de la Comisión Nacional/Local de Búsqueda.

Nota: El Expediente de Búsqueda debe contener la información recabada durante las jornadas de búsqueda, así como los objetos y demás evidencia localizados y recolectados, con base en las formalidades señaladas en el CNPP y la GNCC.

Continúa en la actividad 12. “La/el AMP inicia Carpeta de Investigación”.

- **El hecho sí se considera delito, en paralelo se realizan las actividades 11 y 12.**

11. La/el AMP informa a la Comisión Nacional/Local de Búsqueda sobre la desaparición de una persona a efecto de iniciar la búsqueda.

Nota: Se genera Reporte.

12. La/el AMP inicia Carpeta de Investigación.

Notas:



- Se genera y registra la CI.
- Se realizan acciones de cruce e interconexión de información con la Comisión Nacional/Local de Búsqueda, para el procesamiento de información en los registros respectivos y posibles acciones y diligencias que en forma coordinada se realice con las fiscalías especializadas (lugares de búsqueda).

Proceso de Actos de Investigación

13. La/el AMP plantea la hipótesis principal (inicial) de conocimiento de los hechos para determinar el planteamiento de una investigación preliminar.

14. La/el AMP solicita las acciones urgentes e inmediatas para la investigación y posible cruce de información con las comisiones respecto a las acciones y diligencias de búsqueda.

Notas: En atención a los principios de inmediatez, efectividad, exhaustividad, debida diligencia y demás a que se refiere el artículo 5 de la Ley General, la/el AMP realizará una valoración de acuerdo a la calidad de los sujetos involucrados y ordena las acciones urgentes e inmediatas para la búsqueda, investigación de los delitos de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares; para ello debemos tener en consideración que los elementos facticos, probatorios y jurídicos son fundamentales para generar estas acciones urgentes e inmediatas, cuyo fin esencial será la localización de la víctima con vida, generar información de calidad pertinentes, idónea y eficaz para posterior estrategias de investigación e identificar al perpetrador o perpetradores del hecho, mediante la generación de acciones y diligencias en este apartado son de forma enunciativa y no limitativa y son:

- ✓ Entrevistas a posibles testigos o cualquier otra persona que conozca de los hechos.
- ✓ Solicitud de inspecciones del lugar de los hechos (resguardo de evidencia, huellas o cualquier otro objeto relacionado con los hechos)
- ✓ Solicitud de resguardo y conservación de toda información sensible, objetos, instrumentos o herramientas personales, de comunicación, tecnológicos o de cualquier otra índole (teléfonos, celulares, computadoras, etc.) de la víctima, familiares, amistades o testigos relacionados al hecho motivo de la investigación.
- ✓ Solicitud de los resguardos y conservación de los datos relativos a todas y cada una de las comunicaciones (llamadas entrantes-salientes-transfer, mensajes entrantes y salientes, conexión a datos con su correspondiente geo referenciación y datos de IMEI, si mantiene activa la línea, pagos o saldos, fechas de activación, etc.), telefónicas a las



que tuvo acceso la víctima, familiares, amistades o testigos relacionados al hecho motivo de la investigación.

- ✓ Solicitud de análisis y mapeo por órganos de inteligencia de medios de comunicación.
- ✓ Solicitud a la/el Jueza(ez) de Control (de contarse con aparatos de comunicación de la víctima o su información de referencia), la realización de una geo- localización en tiempo real del posible lugar de localización de la víctima o de su último paradero, solicitud de inspecciones, centros de detención o lugares de la privación de la libertad.
- ✓ Solicitud de resguardo y conservación de videos de cámaras de seguridad pública o privada localizadas en el lugar de los hechos (calles, carreteras o accesos peatonales, etc.).
- ✓ Solicitud de resguardo y conservación a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a través del Sistema de Atención de Requerimientos de Autoridades (SIARA) un informe de los movimientos en cuentas bancarias y/o tarjetas de crédito o débito, o cualquier otro registró financiero de la víctima, familiares, amistades o testigos relacionados al hecho motivo de la investigación.
- ✓ Solicitud de resguardo y conservación de toda la información de redes sociales de la víctima, familiares, amistades o testigos relacionados al hecho motivo de la investigación.
- ✓ Solicitud de bienes muebles e inmuebles propiedad de la víctima.
- ✓ Solicitud (según el caso) de toma de muestras biológicas de referencia de familiares o parientes en primer grado de consanguinidad a efecto de confrontarlas en el Banco Nacional de Datos Forenses (BNDF) o registros afines.
- ✓ Solicitud para realizar la confronta correspondiente por medio del BNDF, Registro AFIS u otros registros afines (si se cuenta con huellas digitales de la víctima, familiares, amistades o testigos relacionados al hecho motivo de la investigación).
- ✓ Solicitud de aplicación y levantamiento del cuestionario Ante Mortem, tanto a familiares, personas cercanas a la víctima o autoridades federales/locales, como de aquellos que tuvieron el último conocimiento de su paradero, en el caso de que la Comisión Nacional/Local de Búsqueda no lo haya aplicado.
- ✓ Determinar la implementación de medidas de protección para la víctima directa (o de haberse realizado la localización) e indirecta atento al caso concreto y al riesgo de estas testigos o amistades.
- ✓ Solicitud de expedientes médicos, tratamientos o cualquier otro que revele la atención médica o psicoemocional de la víctima.
- ✓ Las demás acciones señaladas en el artículo 70 de la Ley General.



- Estas acciones son paralelas, transversales y complementarias con las propias a las que corresponde a la investigación y búsqueda en vida de la persona o personas desaparecidas; por lo tanto, tanto la/el AMP debe generar estas acciones urgentes e inmediatas e coordinación y colaboración con otras autoridades (comisiones de búsqueda, policías de los diferentes órdenes de gobierno u autoridades de proximidad entre otros); por lo tanto, se debe ordenar por la/el AMP:
- Difundir los datos personales y media filiación de la persona desaparecida en lugares públicos como son:
 - ✓ Terminales aéreas
 - ✓ Caminos federales
 - ✓ Puntos de vigilancia fronterizos
 - ✓ Puntos de vigilancia en coordinaciones estatales
 - ✓ Terminales camioneras
 - ✓ Caminos estatales
 - ✓ Puntos de vigilancia en el estado
 - ✓ CERESOS
 - ✓ Centros de detención por faltas administrativas
 - ✓ Caminos municipales
 - ✓ Puntos de vigilancia en el municipio
- Difundir la información de datos personales y media filiación de la persona desaparecida en medios de comunicación masiva como son:
 - ✓ Espacio radiofónico
 - ✓ Espacio en primera plana
 - ✓ Espacio televisivo
 - ✓ Reportes telefónicos
- Difundir información de datos personales y media filiación de la persona desaparecida en instituciones de salud públicas y privadas como son:
 - ✓ Hospitales públicos y privados
 - ✓ Instituciones de salud mental públicos y privados
 - ✓ Instituciones/centros de rehabilitación de adicciones
 - ✓ SEMEFOS/CEMEFO/INCIFO/DC
- Difundir información de datos personales y media filiación de la persona desaparecida en albergues públicos y privados como son:
 - ✓ Albergues para migrantes



- ✓ Albergues para personas en situación de calle
- ✓ Centros de estancia transitoria para niñas, niños y adolescentes
- ✓ Albergues para mujeres
- ✓ Albergues para población indígena
- ✓ Casas de descanso (personas adultas mayores)
- ✓ Casas de asistencia a personas discapacitadas
- Difundir información de datos personales y media filiación de la persona desaparecida a través de alertas según el caso concreto como son:
 - ✓ Alerta Amber
 - ✓ Alerta Alba
 - ✓ Alerta de personas desaparecidas
 - ✓ 911
 - ✓ 088
 - ✓ PF móvil (APP)
- Acciones y diligencias cuando se tenga identificado a las o los servidores públicos en materia de desaparición forzada mediante la solicitud de la información siguiente:
 - ✓ Ordenes de presentación o aprehensión, puestas a disposición
 - ✓ Operativos en la zona o cercanas al lugar de la desaparición
 - ✓ Registros de los servicios (fatigas o bitácoras), operativos o puntos de revisión, en los que se incluya servicio desempeñado, arma y vehículo asignado.
 - ✓ Álbumes fotográficos de las corporaciones o divisiones a las que pudieran pertenecer las personas señaladas como probables responsables.
 - ✓ Kárdex y/o expediente personal del o los servidores públicos señalados como probables responsables.
 - ✓ Registros de entradas y salidas de vehículos oficiales y personas.
 - ✓ Vehículos y/o unidades que coincidan con las características aportadas por los denunciantes y/o testigos.
 - ✓ Armamento que coincida con las características aportadas por los denunciantes y/o testigos.
 - ✓ Uniformes e insignias utilizadas por el personal de la Institución correspondiente.
 - ✓ Equipos de comunicación asignados a los servidores públicos posiblemente involucrados.
 - ✓ Análisis de rostros, voz, lugares de ocurrencia.
 - ✓ Episodios similares a los eventos del hecho investigado.



- Acciones y diligencias adicionales cuando se tenga identificado al particular o particulares en materia de desaparición mediante la solicitud de la información siguiente:
 - ✓ Placas de vehículos, reportes de robo
 - ✓ Análisis de delincuencia de la zona, grupos que operan, casas de seguridad, etc.
 - ✓ Redes telefónicas y números usados en incidentes similares
- La/el AMP deberá realizar las diligencias urgentes en atención a las particularidades del caso, ya sea que la CI se inicie con o sin detenido, o si es que se logra la localización de la persona desaparecida, ya sea con vida o fallecida. Para mejor orientación, acerca de las diligencias que pueden ser solicitadas atendiendo estos supuestos véase el Anexo IV “Solicitud de Pruebas Periciales”.
- Además de las diligencias enunciadas anteriormente como urgentes, la/el AMP deberá tomar en consideración las características específicas de la víctima; esto con el propósito de aplicar desde los primeros momentos de conocimiento del hecho posiblemente constitutivo de delito una estrategia con enfoque diferenciado y especializado. Para mayor referencia véase la Sección A “Investigación específica y diferenciada por sujeto pasivo” del Anexo I “Diligencias básicas para la investigación de los delitos de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares”.

D2. ¿Es competencia de la Fiscalía Especializada?

Nota: La competencia se determinará de conformidad a lo señalado en el artículo 24 de la Ley General, 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el artículo 20 del CNPP.

- No es competencia de la Fiscalía Especializada

15. La/el AMP declara incompetencia.

Notas:

- Se genera Acuerdo de Incompetencia conforme a los lineamientos que rijan las funciones de cada Fiscalía Especializada; incluso debe determinarse que en caso de incompetencia **se atenderá y analizará la especialización de la materia a quien se declinará el asunto, así como las características específicas y diferenciadas de la víctima.**
- Independientemente de que la/el AMP se declare incompetente, deberá ordenar la realización de todas y cada una de las acciones y diligencias básicas, urgentes e inmediatas para la investigación de los delitos de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, incluso, las acciones y diligencias



complementarias que sean necesarias, esenciales y fundamentales en cada caso en lo particular, para dar certeza a los datos de pruebas recabados, esto con base en los principios de efectividad y exhaustividad, debida diligencia, enfoque diferencial y especializado, enfoque humanitario, gratuidad, igualdad y no discriminación, ISN, máxima protección, no repetición, participación conjunta, perspectiva de género, presunción de vida y verdad.

- **La/el AMP notificara en todos los casos a la víctima indirecta, familiares y representante legal el acuerdo de incompetencia, fundando y motivando la razón detrás de esa determinación.**

16. La/el AMP canaliza la CI a la autoridad competente.

Nota: La/el superior jerárquico verifica que se trate de una incompetencia, lo autoriza y registra en la Base de Registro tanto el asunto como los datos de la autoridad que canaliza; posteriormente turna la investigación a la institución competente.

Finaliza el Proceso.

- **Sí es competencia de la Fiscalía Especializada**

17. La/el AMP continúa solicitando acciones y diligencias de investigación.

Notas:

- Se genera una Solicitud.
- Es una actividad que se desarrolla de manera inmediata (momento a momento).
- La/el AMP realiza su función de mando y dirección de la investigación solicitando a las/los agentes de la Policía que recaben los datos de prueba idóneos y pertinentes para el esclarecimiento de los hechos.

D3. ¿Los actos de investigación requieren control judicial?

- **Si requieren control judicial (de conformidad con el artículo 252 del CNPP)**

18. La/el AMP solicita a la/el Jueza(ez) de Control por cualquier medio autorización para la diligencia.

Nota: Si la/el Jueza (ez) de Control negare la solicitud por deficiencias de la solicitud, la/el AMP subsanará dichas deficiencias y solicitará nuevamente autorización al órgano jurisdiccional.



Como resultado se obtiene la autorización de la diligencia y continúa en la actividad 19. Ejecuta el “Subproceso de valoración de los resultados y generación de la Hipótesis del Caso”.

- No requieren control judicial (de conformidad con el artículo 251 del CNPP), se obtiene la solicitud de diligencias ministeriales (de gabinete y de campo).

19. Ejecuta el “Subproceso de valoración de los resultados y generación de la Hipótesis del Caso”.

Como resultado del subproceso se obtiene el Plan de Investigación e Hipótesis del Caso.

D4. ¿Se acreditó la Hipótesis del Caso?

- No se acreditó la Hipótesis de Caso

20. La/el AMP replantea la Hipótesis Caso.

Nota: Se replantea la Hipótesis del Caso y la/el AMP instruye nuevamente diversas y diferentes acciones y diligencias las cuales darán mayor certeza y soporte al caso concreto (pueden ser nuevas diligencias o ampliar las realizadas anteriormente generando un regreso al sistema de investigación).

Regresa a la actividad 19. *Ejecuta el “Subproceso de valoración de los resultados y generación de la Hipótesis del Caso”.*

- Si se acreditó la Hipótesis de Caso

21. Se ejecuta el “Subproceso de Acreditación del Caso”.

Como resultado del subproceso se obtiene la Solicitud de Audiencia.

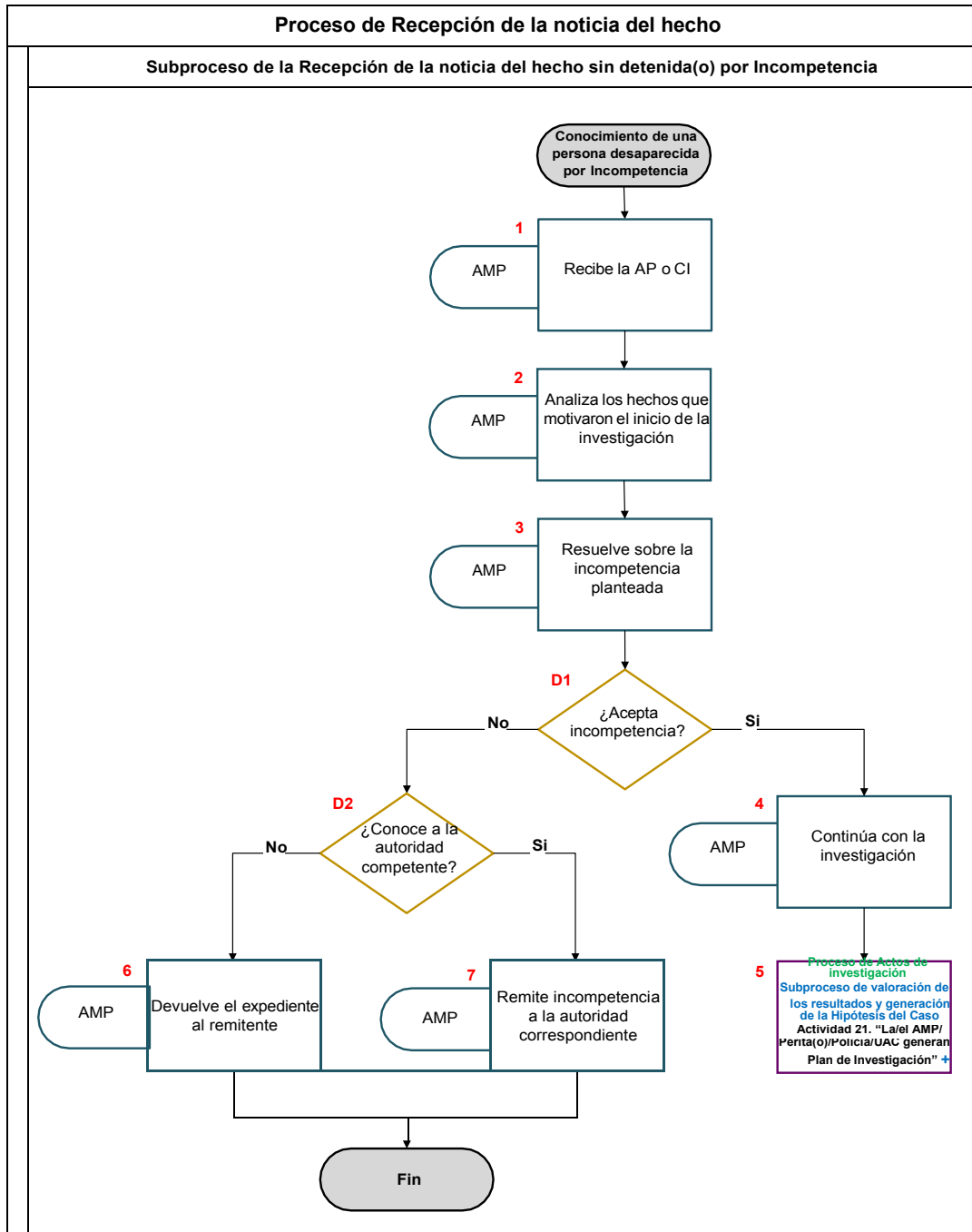
22. Continúa con las etapas señaladas en el CNPP.

Nota: Para continuar con el desarrollo del procedimiento penal ordinario se atenderán los Protocolos de actuación y disposiciones normativas correspondientes.



Subproceso de Recepción de la noticia del hecho sin detenida(o) por Incompetencia

C. Diagrama de flujo. Subproceso de Recepción de la noticia del hecho sin detenida(o) por Incompetencia





D. Descripción detallada. Subproceso de Recepción de la noticia del hecho sin detenida(o) por Incompetencia

El Subproceso de Recepción de la noticia del hecho sin detenida(o) por Incompetencia se detona cuando se tiene el conocimiento de una persona desaparecida por Incompetencia.

- 1. La/el AMP recibe la AP o CI.**
- 2. La/el AMP analiza los hechos que motivaron el inicio de la investigación.**
- 3. La/el AMP resuelve sobre la incompetencia planteada.**

D1. ¿Acepta incompetencia?

- **Si acepta incompetencia**
- 4. La/el AMP continúa con la investigación.**
- 5. Continúa en el Proceso de Actos de Investigación, del Subproceso de valoración de los resultados y generación de la Hipótesis del Caso, en la actividad 21. “La/el AMP/Perita(o)/Policía/UAC generan Plan de Investigación”.**
- **No acepta competencia**

D2. ¿Conoce a la autoridad competente?

- **No conoce a la autoridad**
- 6. La/el AMP devuelve el expediente al remitente**

Fin del proceso

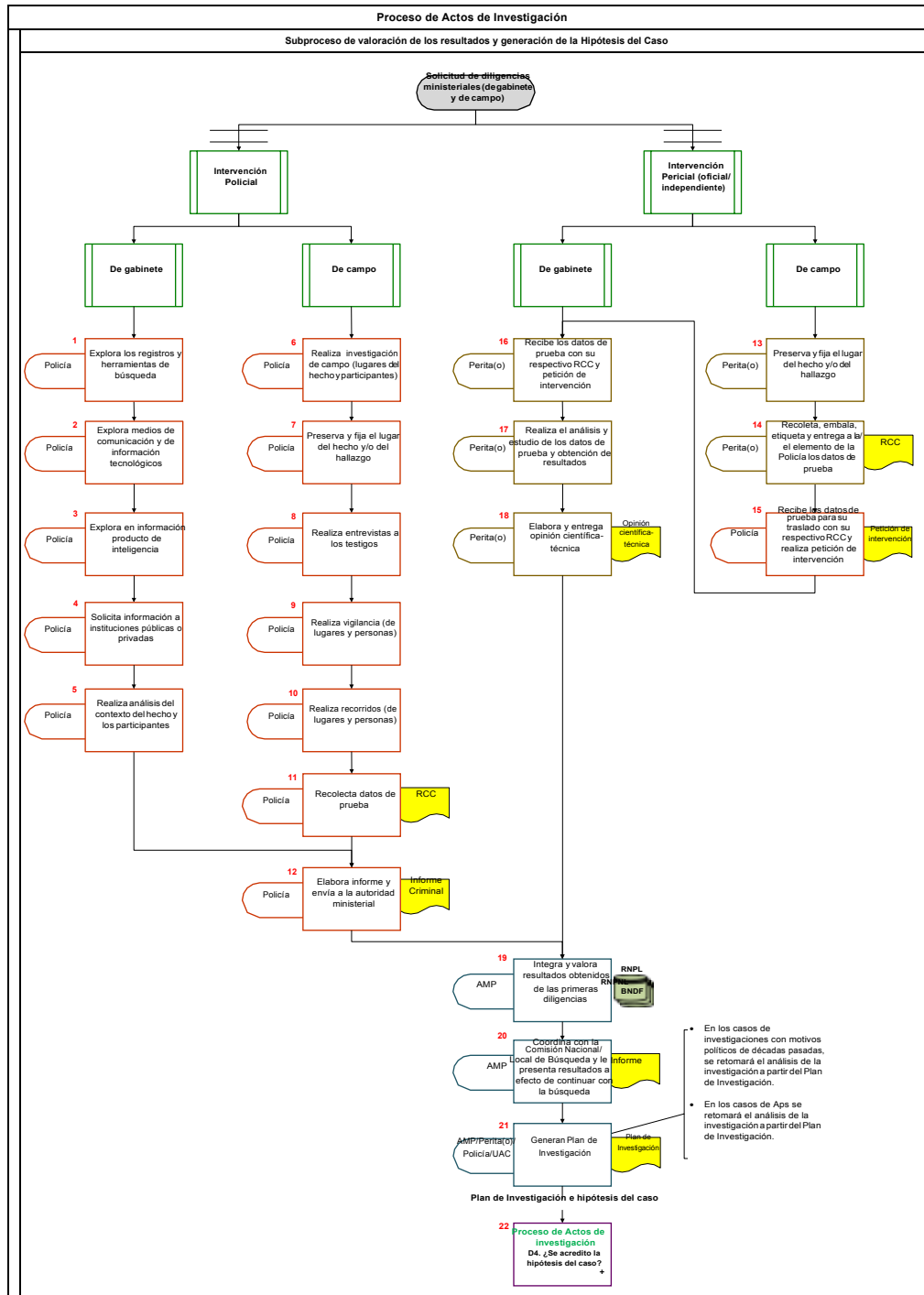
- **Si conoce a la autoridad**
- 7. La/el AMP remite incompetencia a la autoridad correspondiente.**

Fin del proceso



Subproceso de valoración de resultados y generación de la Hipótesis del Caso

E. Diagrama de flujo. Subproceso de valoración de resultados y generación de la Hipótesis del Caso





F. Descripción detallada. Subproceso de valoración de resultados y generación de la Hipótesis del Caso

Inicia con la solicitud de diligencias (de gabinete y de campo).

- La/el AMP genera las solicitudes de acciones de investigación y diligencias que tendrán que desarrollar en gabinete y campo la policía y las/los peritas(os).
- La comunicación y coordinación entre la/el AMP, Policías y Peritas(os) es continua y permanente durante toda la etapa de la investigación.

Con base en el tipo de acciones y de diligencias requeridas se tiene las opciones siguientes:

- A. Intervención Policial**
- B. Intervención Pericial (oficial/independiente)**

A. Intervención Policial

Existen dos tipos de intervenciones policiales dependiendo de las diligencias requeridas, las cuales deberán de realizarse de forma paralela, transversal y complementaria:

- a. De gabinete**
- b. De campo**

a. De gabinete

Nota: La/el Policía de gabinete deberá privilegiar la existencia de medios de comunicación, de información tecnológica y de la información producto del área de inteligencia, y de esta manera iniciar con las diversas instancias como son Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (CENAPI), División de Inteligencia, División de Investigación, Policía Federal Ministerial, Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y Computo del Estado o del Municipio (C5), entre otras.

- 1. La/el Policía explora los registros y herramientas de búsqueda.**
- 2. La/el Policía explora medios de comunicación y de información tecnológicos.**
- 3. La/el Policía explora en información producto de inteligencia.**
- 4. La/el Policía solicita información a instituciones públicas o privadas.**
- 5. La/el Policía realiza análisis del contexto del hecho y los participantes.**

Nota: Podrá realizar una primera aproximación del caso, integrando la contextualización social, política, económica, cultural, religiosa de los sujetos involucrados y del lugar donde acontecieron los hechos con la finalidad de obtener mayores elementos en la investigación por desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares de acuerdo con la complejidad de los hechos y los tipos penales analizados.

Continúa en la actividad 12. “La/el Policía elabora informe y envía a la autoridad ministerial”.



b. De campo

Nota: La/el Policía de campo debe privilegiar para la investigación la ubicación y fijación de los lugares relacionados con el hecho, corroborar los hechos denunciados, identificar y ubicar a los testigos con la finalidad de recabar las entrevistas de acuerdo con el caso, entre otras acciones.

6. La/el Policía realiza investigación de campo (lugares del hecho y participantes).

7. La/el Policía preserva y fija el lugar del hecho y/o del hallazgo.

Nota: En casos de complejidad en el lugar del hecho y/o del hallazgo, como lo son fosas con cuerpos mezclados, fragmentados, cuerpos sometidos a químicos, entre otros, la preservación y custodia del lugar del hecho deberá ser continua y permanente, hasta que los servicios periciales y el equipo interdisciplinario de expertos finalice su procesamiento.

8. La/el Policía realiza entrevistas a los testigos.

9. La/el Policía realiza vigilancia (de lugares y personas).

Nota: De acuerdo con la complejidad, la vigilancia deberá ser continua y permanente.

10. La/el Policía realiza recorridos (de lugares y personas).

11. La/el Policía recolecta datos de prueba.

Nota: Se genera el RCC.

12. La/el Policía elabora informe y envía a la autoridad ministerial.

Nota: Genera Informe de Investigación Criminal, en el cual se anexarán todos aquellos documentos, informes o entrevistas recabadas durante la investigación.

Continúa en la actividad 19. “La/el AMP integra y valora resultados obtenidos de las primeras diligencias”.

B. Intervención Pericial (oficial/independiente)

Existen dos tipos de intervenciones periciales dependiendo de las diligencias requeridas, las cuales pueden ser:

a. De campo

b. De gabinete

Notas:

- La/el Perita(o) oficial o independiente deberá identificar, recolectar y obtener todos los resultados científicos y técnicos de cada uno de los instrumentos, objetos o cualquier evidencia posible que estén relacionados con el delito. Cada uno de las/los Peritas(os) en cualquiera de sus especialidades deberá realizar sus estudios de acuerdo con los protocolos de operación en lo que rija su intervención y actuación, ya sea en actividades en campo, en gabinete o en laboratorio para que finalmente y mediante los resultados



expuestos en una opinión técnica sean remitidos a la autoridad ministerial y esta pueda sustentar su hipótesis sobre el caso.

- Para mejor orientación, acerca de las diligencias que pueden ser solicitadas véase el Anexo IV “Solicitud de Pruebas Periciales”.

a. De campo

13. La/el Perita(o) preserva y fija el lugar del hecho y/o hallazgo.

Nota: En casos de complejidad en el lugar del hecho y/o del hallazgo, se deberá conformar un equipo interdisciplinario de expertos.

14. La/el Perita(o) recolecta, embala, etiqueta y entrega a la/el elemento de la Policía los datos de prueba.

Nota: Se genera el RCC.

15. La/el Policía recibe los datos de prueba para su traslado con su respectivo RCC y realiza petición de intervención.

Nota: Se genera Petición de intervención.

Continúa en la actividad 16. “La/el Perita(o) recibe los datos de prueba con su respectivo RCC y petición de intervención”.

b. De gabinete

16. La/el Perita(o) recibe los datos de prueba con su respectivo RCC y petición de intervención.

17. La/el Perita(o) realiza el análisis y estudio de los datos de prueba y obtención de resultados.

18. La/el Perita(o) elabora y entrega opinión científica-técnica.

Notas: Se genera Opinión científica-técnica con el formato de dictamen que menciona el instructivo de trabajo para cada especialidad.

La/el Perita(o) deberá mencionar dentro de su opinión científica-técnica:

1. Planteamiento del problema
2. Material y métodos
 - Metodología aplicada
 - Técnicas aplicadas
 - Herramientas e instrumentos utilizados



3. Descripción del procedimiento
4. Consideraciones técnicas
5. Análisis forense
6. Conclusión(es)
7. Referencias bibliográficas
8. Anexos

19. La/el AMP integra y valora resultados obtenidos de las primeras diligencias.

Nota: La información obtenida se registra en las bases siguientes: RNPDNL, BNDF y Registro Nacional de Fosas con base al caso concreto.

20. La/el AMP coordina con la Comisión Nacional/Local de Búsqueda y presenta resultados a efecto de continuar con la búsqueda.

Nota: Se genera Informe.

21. La/el AMP/Perita(o)/Policía/UAC generan Plan de Investigación.

Notas:

- Se genera Plan de Investigación.
- En los casos de investigaciones con motivos políticos de décadas pasadas, se retomará el análisis de la investigación a partir del Plan de Investigación.
- En los casos de Averiguaciones Previas se retomará el análisis de la investigación a partir del Plan de Investigación.
- En ambos casos deben generarse las acciones y diligencias necesarias con base en el Plan de Investigación conforme a las reglas previstas en el Código Federal de Procedimientos Penales.
- Este Plan de Investigación debe notificarse a las víctimas, familiares o representantes legales, respetando los principios de debido proceso, audiencia, confidencialidad y reserva de la investigación.

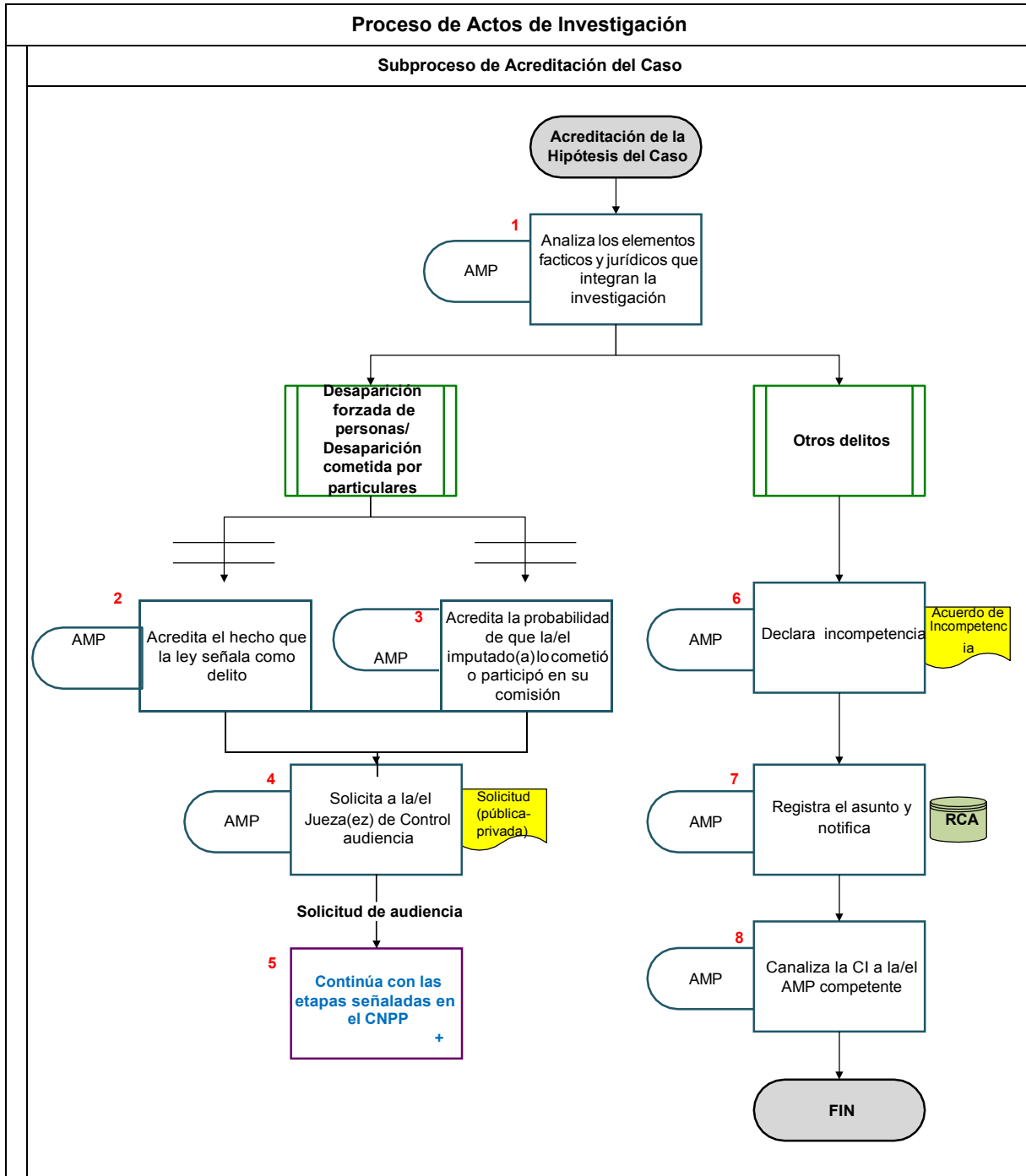
Como resultado del subproceso se obtiene el Plan de Investigación e Hipótesis del Caso.

22. Continúa en el Proceso de Actos de Investigación en la D4. ¿Se acreditó la Hipótesis del Caso?



Subproceso de Acreditación del Caso

G. Diagrama de flujo. Subproceso de Acreditación del Caso





H. Descripción detallada. Subproceso de Acreditación del Caso.

El subproceso se detona cuando se acredita la *Hipótesis del Caso*.

1. La/el AMP analiza los elementos fácticos y jurídicos que integran la investigación.

Teniendo calificados los datos de prueba, pueden existir las siguientes opciones:

- A. Desaparición forzada de personas
- B. Desaparición cometida por particulares
- C. Otros delitos

A. Desaparición forzada de personas/B. Desaparición cometida por particulares En paralelo

se realizan las actividades 2 y 3.

2. La/el AMP acredita el hecho que la ley señala como delito.

3. La/el AMP acredita la probabilidad de que la/el imputado(a) lo cometió o participó en su comisión.

Notas:

1. Por lo que respecta a la **Desaparición forzada de personas** es importante determinar la existencia del hecho que la ley señala como delito, la probabilidad de que la/el imputado(a) lo cometió y la identidad de la víctima. Para la existencia del hecho se debe comprobar lo siguiente:

- **Comprobación de la privación de la libertad:**
 - Para mayor referencia de los elementos necesarios para la acreditación del tipo penal, véase el Anexo II “Análisis dogmático de los delitos de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares”.
 - Para mayor referencia de las diligencias que pueden practicarse para la acreditación de este elemento del tipo penal, véase la Sección A “Acreditación de los elementos necesarios de los tipos penales de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares” del Anexo I.
- **Comprobación de la participación y/o aquiescencia de una autoridad**
 - Para mayor referencia de los elementos necesarios para la acreditación del tipo penal, véase el Anexo II “Análisis dogmático de los delitos de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares”.
 - Para mayor referencia de las diligencias que pueden practicarse para la acreditación de este elemento del tipo penal, véase la Sección A “Acreditación de los elementos necesarios de los tipos penales de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares” del Anexo I.



- **Comprobación de la negativa a dar información sobre la detención, paradero o su suerte.**
 - Para mayor referencia de los elementos necesarios para la acreditación del tipo penal, véase el Anexo II “Análisis dogmático de los delitos de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares”.
 - Para mayor referencia de las diligencias que pueden practicarse para la acreditación de este elemento del tipo penal, véase la Sección A “Acreditación de los elementos necesarios de los tipos penales de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares” del Anexo I.

2. Por lo que hace al delito de **Desaparición cometida por particulares** se sugiere consultar:

- Para mayor referencia de los elementos necesarios para la acreditación del tipo penal, véase el Anexo II “Análisis dogmático de los delitos de desaparición forzada de personas y cometida por particulares”.
- Para mayor referencia de las diligencias que pueden practicarse para la acreditación de este elemento del tipo penal, véase la Sección A “Acreditación de los elementos necesarios de los tipos penales de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares” del Anexo I.

Posteriormente, integrará y valorará los datos de prueba, registrando la información en las bases siguientes:

- **Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas**
- **Banco Nacional de Datos Forenses**
- **Registro Nacional de Fosas**

4. **La/el AMP solicita a la/el Jueza(ez) de Control audiencia.**

Nota: Se genera Solicitud (pública-privada).

5. **Continúa con las etapas señaladas en el CNPP.**

Nota: Para continuar con el desarrollo del procedimiento penal ordinario se atenderán los Protocolos de actuación y disposiciones normativas correspondientes.

C. Otros delitos

6. **La/el AMP declara incompetencia.**

Notas:

- Se genera Acuerdo de Incompetencia de acuerdo con los lineamientos que rijan las funciones de cada institución de procuración de justicia.



- Independientemente de que la/el AMP se declare incompetente, debe haber recabado todas y cada una de las acciones y diligencias básicas, urgentes e inmediatas, así como las complementarias, necesarias, esenciales y fundamentales en cada caso en lo particular, para dar certeza a los datos de pruebas recabados para la investigación de los delitos de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, esto con base en los principios de efectividad y exhaustividad, debida diligencia, enfoque diferencial y especializado, enfoque humanitario, gratuidad, igualdad y no discriminación, ISN, máxima protección, no repetición, participación conjunta, perspectiva de género, presunción de vida y verdad.
- La/el AMP elaborará el correspondiente proyecto de incompetencia, poniéndolo a consideración de la/el superior jerárquico, posteriormente registrará el asunto y los datos de la autoridad a la que se le canalizará la información.
- La/el AMP notificara a la víctima indirecta, familiares y representante legal el acuerdo de incompetencia, de conformidad con lo establecido en el CNPP.

7. La/el AMP registra el asunto y notifica.

Nota: La notificación se hará a la víctima indirecta y autoridades pertinentes.

8. La/el AMP canaliza la CI a la/el AMP competente.

Finaliza el subproceso.



8. Glosario de los Procesos y Subprocesos

Acrónimos/Siglas	Significado
AP	Averiguación Previa
AMP	Agente del Ministerio Público
BNDF	Banco Nacional de Datos Forenses
CI	Carpeta de Investigación
CENAPI	Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia
CEAV	Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas
CNPP	Código Nacional de Procedimientos Penales
CPEUM	Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
CIDH	Corte Interamericana de Derechos Humanos
FEMOSPP	Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado
GNCC	Guía Nacional de Cadena de Custodia
IPH	Informe Policial Homologado
ISN	Interés Superior de la Niñez



Acrónimos/Siglas	Significado
Ley General	Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas
PGR	Procuraduría General de la República
PEAP	Psicóloga(o) Especialista en Atención Psicosocial
RCC	Registro de Cadena de Custodia
RNPEDL	Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas
SNBP	Sistema Nacional de Búsqueda de Personas
SUI	Sistema Único de Información



9. Plan de Investigación

El Plan de Investigación, para mejor referencia en el presente Protocolo, debe entenderse como una herramienta de planeación, coordinación, dirección y control de la investigación, con el propósito de orientar las acciones de investigación encaminadas a reunir los indicios y datos de prueba necesarios para el esclarecimiento de los hechos que son del conocimiento de la/del AMP, y a acreditar los elementos que integran las conductas punibles.

Este plan debe ser elaborado por la/el AMP en coordinación con las/los agentes de la Policía, las/los Peritas(os) y Analistas criminales o de contexto.

Por medio de la definición de un Plan de Investigación es posible establecer con claridad, a partir de los primeros datos de prueba recolectados, una hipótesis principal de investigación, las tareas y actividades a desarrollar por los actores intervinientes, la definición de objetivos a alcanzar en el desarrollo de la investigación, una calendarización de actividades que permita cumplir con los tiempos procesales establecidos en la ley por medio de una Agenda del Caso, los recursos necesarios para el desarrollo de la investigación, un control de la gestión de los datos de prueba recolectados, y la preparación de los elementos básicos para la ejecución de actos judiciales.

En tanto que es una obligación de la/el AMP el realizar un registro de la investigación y que es “des formalizada” (artículo 217, CNPP), en cierta forma, **el Plan de Investigación se constituye en el eje rector de la investigación en curso, y marca un orden lógico en la integración de la CI.**

Si bien el desarrollo de un Plan de Investigación es una buena práctica metodológica por parte de quien investiga, hay que destacar que para la investigación de casos complejos este representa la directriz principal sobre la que quien investiga define, programa, de seguimiento y evalúa, aquellos elementos fácticos que constituyen la teoría del caso.

Es necesario destacar que, dado que esta es una herramienta metodológica, el Plan de Investigación no requiere de un formato en particular, no obstante, deberá estructurarse de tal forma que permita a quien investiga puntualizar los elementos básicos con los que cuenta, al respecto del hecho y construir su teoría del caso. Además, en este Plan deberá ser capaz de registrar brevemente los actos de investigación realizados y por realizar, analizar los datos de prueba con los que cuenta, así como las fortalezas y debilidades presentes en la investigación. La aplicación de esta herramienta permitirá a quien investiga advertir de forma anticipada, el estado en el que se encuentra la investigación en cada etapa procesal, así como la determinación ministerial que sea pertinente atendiendo al caso concreto.



Planteamiento de hipótesis

Una hipótesis es una proposición que busca explicar o resolver una pregunta en particular, esta se basa en premisas o suposiciones hechas con base en evidencia. La formulación de una hipótesis es el punto de partida de toda investigación, a partir de la cual se reunirá la evidencia que sustente o compruebe su veracidad o la rechace.

Las hipótesis están fundamentadas en premisas o en evidencia fáctica que sustente su veracidad.

Para la investigación de hechos constitutivos de delito, la formulación de la(s) hipótesis debe(n) estar encaminada(s) a establecer una narrativa de los hechos denunciados lo más aproximada a la forma en que se sucedieron. A partir de esta narrativa, es que se identifican aquellos elementos que constituyen la comisión o no del delito.

Para la elaboración del Plan de Investigación hay que distinguir entre distintos planteamientos de hipótesis:

Hipótesis principal (inicial): la formulación de esta hipótesis se sustenta en la denuncia y en las primeras entrevistas del denunciante y/o testigos, así como de los primeros actos de investigación de la policía y de las primeras diligencias que efectúan las/los peritas(os). El objetivo es formular una primera suposición sobre la manera en que se sucedieron los hechos denunciados.

Dentro de la formulación de la hipótesis principal es necesario identificar:

- El lugar o lugares en los que ocurrieron los hechos (lugar).
- La forma y las circunstancias en la que ocurrieron los hechos (modo).
- Los momentos en los que se sucedieron los hechos (tiempo).
- La identificación de las personas involucradas en el hecho (sujetos).

Para lograr la comprobación de la hipótesis principal, la/el AMP junto con las/los agentes de la Policía y las/los Peritas(os), deben sustentarla sobre la evidencia necesaria y suficiente para acreditar la ocurrencia de los hechos.

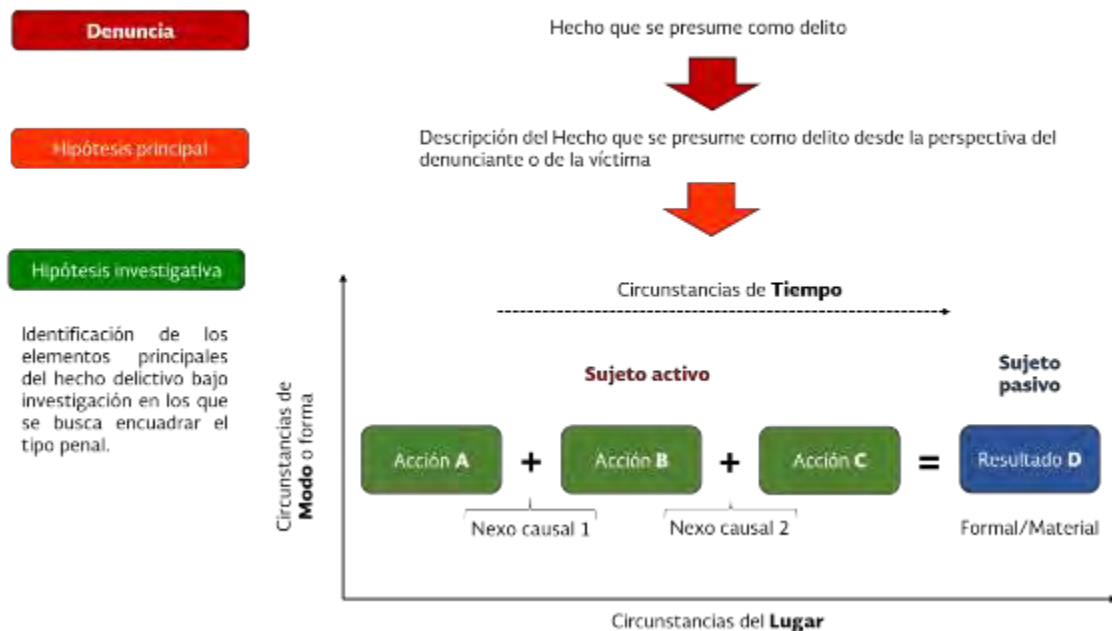
Hipótesis investigativa: la formulación de esta hipótesis plantea la identificación de los elementos principales del tipo penal en que se busca encuadrar en la investigación, la probable identificación de los sujetos activos del delito, así como la identificación de los sujetos pasivos, y del daño recibido por cada uno de ellos.



Para la formulación de esta hipótesis es necesario identificar los elementos básicos del tipo penal bajo investigación, con respecto a la hipótesis principal:

- Sujeto activo.
- Sujeto pasivo.
- Verbos rectores.
- Medios comisivos.
- Nexos causales.
- Resultados.
- Circunstancias de modo, tiempo y lugar

PLANTEAMIENTO DE UNA HIPÓTESIS



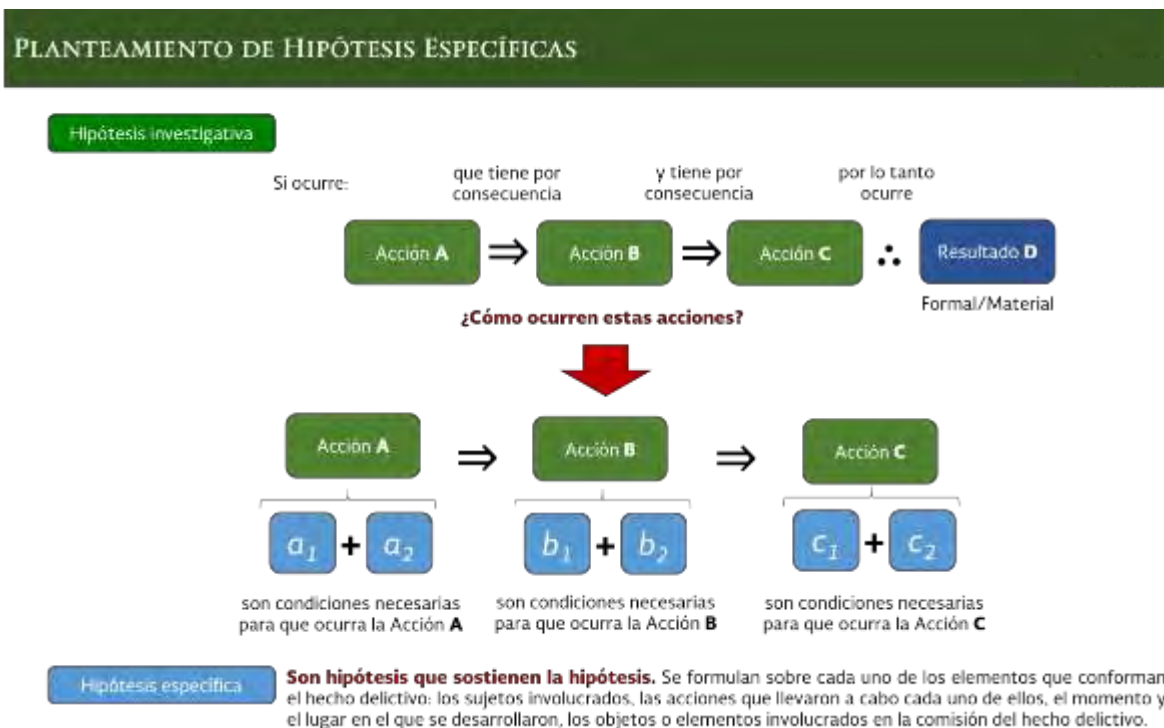
El propósito de la hipótesis investigativa es identificar los elementos que se desconocen respecto de la hipótesis principal del hecho delictivo, y que son necesarios para acreditar el tipo penal que se está investigando. **A partir de la identificación de estos elementos ausentes se establecerán los objetivos que orientarán la investigación.**

Hipótesis específicas: estas hipótesis constituyen premisas de carácter especulativo sobre las que se sostiene la hipótesis investigativa. Cabe señalar que dado el carácter especulativo de la hipótesis investigativa acerca de la forma en la que se sucedieron los hechos, las relaciones entre los elementos que constituyen el hecho delictivo, así como su encuadre respecto del tipo penal son especulaciones;

es la labor de la/el AMP y Policía el aportar la evidencia necesaria para comprobar y establecer cada una de esas relaciones.

En este sentido, las hipótesis específicas se formulan respecto a cada uno de los elementos que conforman el hecho delictivo: las personas involucradas, las acciones que llevaron a cabo cada una de ellas, el momento en que se desarrollaron estas acciones, el lugar de los hechos, objetos o elementos involucrados en la comisión del hecho delictivo.

La comprobación de cada una de estas hipótesis específicas fortalece y comprueba la hipótesis investigativa, en tanto constituyen los elementos que la componen; en la medida en que no se logran comprobar este tipo de hipótesis, es necesario plantear una o más hipótesis alternativas acerca de la manera en que se suceden los hechos denunciados, e incluso revalorar la pertinencia y suficiencia de la hipótesis principal. **Son hipótesis que sostienen la hipótesis.**



Hipótesis alternativa: El propósito de estas hipótesis, como su nombre lo señale, es la de generar una explicación alternativa, en la que con base en la evidencia disponible acerca del hecho delictivo, se genere otra explicación probable y plausible acerca de la manera en que se sucedieron los hechos y la participación de los sujetos involucrados. De manera coloquial, otra manera de referirse a las hipótesis alternativas es como línea de investigación.



Es posible plantear más de una hipótesis alternativa, de acuerdo con los datos de prueba recolectados y la causalidad que establezcan quienes investigan respecto de la manera en que se sucedieron los hechos.

Ejemplo.

Objetivos de la investigación

Para el desarrollo de la investigación de un hecho delictivo, el principal objetivo a alcanzar es la comprobación de la hipótesis principal, misma que tendrá como resultado el encuadre respecto de uno o más tipos penales en la hipótesis investigativa. Así pues, el establecimiento de los objetivos del Plan de Investigación debe proveer a la/el AMP y Policía de una “ruta de acción” en el que se establezcan las tareas a desarrollar por orden de prioridad.

En los casos de la investigación de los delitos de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, el principal objetivo es el alcance y garantía del derecho a la verdad de las víctimas, de su derecho a conocer el paradero de la víctima directa y el conocimiento del motivo de la desaparición, así como la sanción de los responsables tras la comisión del hecho. En este sentido, en este protocolo se establecen como objetivos del plan de investigación.

Objetivo principal: derecho a la verdad

1. Conocer el paradero de la persona desaparecida **¿Dónde está?**
2. Dilucidar el móvil y los motivos detrás de la desaparición **¿Qué ocurrió?**
3. Determinar la responsabilidad de los autores intelectuales y materiales de la desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares **¿Quiénes son los responsables?**
4. Garantizar la reparación integral del daño **¿Cuáles son los alcances de los daños y perjuicios?**

Es una obligación del Estado mexicano y de las instituciones de procuración de justicia el buscar alcanzar el derecho a la verdad de las víctimas, por lo que es una acción prioritaria la localización en vida de la persona desaparecida, es decir ¿en dónde está? Las acciones de búsqueda conforme a la Ley General son llevadas a cabo por las Comisiones de Búsqueda, y son impulsadas de manera permanente por la/el AMP (art. 68); esto quiere decir que las acciones de investigación administrativa realizada por las Comisiones abonan información relevante para la integración de la investigación de los delitos, y que la investigación realizada por la autoridad ministerial también aporta datos relevantes para realizar la búsqueda y localización de las personas que continúen desaparecidas. **En tanto no se logre**

la localización de la persona desaparecida, este intercambio de información se realizará permanentemente.

Atendiendo las competencias de la autoridad ministerial, la/el AMP y Policía les corresponde resolver las preguntas ¿Qué ocurrió? ¿Quiénes son los responsables? y ¿Cuáles son los alcances de los daños y perjuicios? Para encontrar respuesta a estas preguntas, el Plan de Investigación es la herramienta metodológica por medio de la cual quien investiga formula las hipótesis de investigación y define los objetivos a alcanzar para la comprobación de estas.

Definición de los objetivos de la investigación

La definición de los objetivos de la investigación se encuentra sujeta a la información disponible con la que cuenta quien investiga (AMP/Policía), a partir de la denuncia, las primeras entrevistas recabadas, y las primeras diligencias realizadas. Una manera de establecer cuáles son los elementos que se encuentran ausentes en la investigación es por medio del contraste de la hipótesis principal y de la hipótesis investigativa, es decir una comparación entre los hechos denunciados y las conductas descritas en los tipos penales bajo investigación. Una vez identificados los elementos que se encuentran ausentes, corresponde a quien investiga definir el orden de prioridad y de importancia que representa la acreditación de cada uno de esos elementos, así como las acciones de investigación necesarias por desarrollar.





En este sentido, los objetivos en el Plan de Investigación deben atender **criterios de necesidad y suficiencia**; es decir, del análisis que se haga de los hechos que en los que se presume la ocurrencia de un delito, por un lado se debe valorar la realización de aquellas acciones de investigación que son necesarias y por lo tanto indispensables para el esclarecimiento de los hechos, así como para la acreditación del tipo penal bajo investigación; por otro lado, hay que considerar la realización de alguna acción de investigación cuyo cumplimiento se considere como suficiente para el alcance de los objetivos planteados.

Para el planteamiento de los objetivos en la investigación, es necesario tener en consideración que un objetivo sirve como guía orientadora de la investigación, estableciendo los resultados que se desean obtener. En este sentido, los objetivos deben:

1. Ser consistentes con la demostración de las hipótesis planteadas.
2. Plantearse tomando en consideración los recursos disponibles para que sea alcanzable.
3. Expresar la acción que se va a llevar a cabo, en forma concreta, clara y precisa.
4. Redactarse con verbos en infinitivo, de forma tal que su alcance pueda ser verificado o refutado.

Los objetivos pueden ser exploratorios, para tratar de aclarar elementos que desconozcamos en el planteamiento de las hipótesis; pueden ser explicativos, en el sentido de que busquen establecer la forma en que una causa tiene un efecto.

El orden y la prioridad que otorgue a cada uno de los objetivos dependerán de los elementos fácticos con los que cuente la/el AMP, y de los elementos especificados en el tipo penal: los verbos rectores especificados en el tipo, el sujeto pasivo, los delitos concurrentes y vinculados con el hecho y la calidad del sujeto activo.

1. Acreditación de la Privación Ilegal de la Libertad y del Ocultamiento

Para los casos de Desaparición Forzada de personas y Desaparición cometida por Particulares, la prioridad para la investigación del delito comienza por los verbos rectores en los tipos penales “básicos” establecidos en la Ley General en los artículos 27, 28 y 34: **la privación ilegal de la libertad y el ocultamiento**. Para que la conducta tipificada en los delitos de desaparición forzada (tanto la cometida por servidores(as) públicos como por particulares) ocurra, necesariamente el perpetrador tuvo que privar de la libertad a la víctima para luego ocultarla, es decir para evitar que su “suerte o paradero fuera conocido”; en este sentido, la privación de la libertad tuvo como resultado el ocultamiento de la víctima, de no haber sido la víctima privada de la libertad, no hubiera ocurrido su posterior ocultamiento.



Para la investigación y acreditación de estos verbos, algunas de las acciones de investigación básicas que puede realizar la/el AMP son las señaladas en el Anexo “Diligencias básicas para la investigación atendiendo sujetos específicos”.

Dos ejemplos de la manera en que la autoridad tendrá conocimiento de estos hechos probablemente constitutivos de delito serán a partir del verbo rector asociado al evento denunciado. Así pues, la manera “común” o más frecuente sobre la que la autoridad tiene conocimiento de estos hechos es, por un lado, a partir de la privación ilegal de la persona, en cuyo caso, la prioridad de investigación se concentra en la inspección del lugar de los hechos en que ocurrió el suceso, el aseguramiento de los indicios que se localicen, así como en la identificación de posibles testimonios que abonen a la investigación. Bajo este supuesto, quien investiga únicamente sabe que la víctima fue privada de la libertad y se desconoce su paradero.

Por otro lado, la autoridad, en un primer momento, tiene conocimiento inicial del ocultamiento de la persona desaparecida. Estos casos se encuentran estrechamente vinculados con la localización de cadáveres o de restos humanos; bajo este supuesto, la forma y las condiciones detrás de la localización son las que aportan los indicios para acreditar el ocultamiento del cadáver. En este sentido, la prioridad de la investigación se concentra en el estudio y análisis del lugar de la localización, para luego investigar los ilícitos que pudieron estar vinculados o relacionados con el hecho delictivo.

2. Calidad específica del sujeto pasivo

Un segundo elemento por considerar en la investigación de estos delitos es la persona que recibe y resiente la conducta típica: el sujeto pasivo. La Ley General en su artículo 32 (fracción II a la VII), prevé una serie de agravantes sobre la pena al respecto de una serie de grupos poblacionales específicos, que obedecen a la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran debido a su condición, al trabajo que desempeñan e incluso a su identidad:

- a) Niñas, niños o adolescentes
- b) Mujeres y mujeres embarazadas
- c) Personas con discapacidad
- d) Adultos mayores
- e) Personas migrantes
- f) Afrodescendientes,
- g) Personas pertenecientes a pueblos o comunidades indígenas
- h) Personas desaparecidas por su identidad de género



- i) Personas desaparecidas por su orientación sexual
- j) Defensores de derechos humanos
- k) Periodistas
- l) Integrantes de Instituciones de Seguridad Pública

Para la investigación de los delitos de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares cometidos en contra de cada uno de estos grupos, es necesario tomar distintas aproximaciones desde el inicio de la investigación atendiendo sus características particulares, en tanto es muy probable que estén estrechamente relacionadas con el motivo detrás de su desaparición. Resulta conveniente que en la definición de la hipótesis investigativa y en el planteamiento de hipótesis alternativas se contemplen acciones de investigación específicas para cada caso.

Para la definición de los objetivos de investigación respecto del sujeto pasivo, es necesario atender en qué consiste la condición de vulnerabilidad de cada grupo; para ello se sugiere considerar tanto análisis victimológico como criminológico para la acreditación.

Para la investigación y acreditación de estos sujetos pasivos, algunas de las acciones de investigación básicas que puede realizar la/el AMP son las señaladas en los Cuadros del Apartado “Estrategias de investigación específica y diferenciada” en el Anexo “Diligencias Básicas para la investigación”.

3. Investigación de delitos concurrentes y vinculados

Dado el carácter continuado y permanente de los delitos de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del desconocimiento inicial que tiene la/el AMP sobre la forma en que se sucedieron los hechos denunciados, es necesario tomar en cuenta la concurrencia de otros ilícitos, así como su posible vinculación con otros sucesos ilícitos.

Para la consideración de estos delitos en la investigación, es necesario tomar en consideración no sólo la descripción de hechos realizada por el denunciante, sino también la calidad específica de los sujetos pasivos. Cada uno de los grupos sobre los que la Ley General agrava la pena, son víctimas de una serie de delitos estrechamente relacionados con su condición de vulnerabilidad.

Para la identificación de estos delitos, es necesario la realización de estudios criminológicos, victimológicos y de análisis de contexto, en tanto es necesario identificar las incidencias delictivas de delitos por regiones geográficas específicas, tomando en consideración la presencia de circunstancias de vulnerabilidad (tanto sociales, económicas, geográficas, políticas, entre otras), así como del momento en que se inscriben los hechos.



Para el análisis e investigación de delitos concurrentes y vinculados a los de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, es necesario tomar en consideración:

- a) La manera en que este delito se relaciona con los delitos de desaparición forzada de personas o desaparición cometida por particulares. Es decir, si la comisión de estos delitos son una condición necesaria para la comisión de los delitos de desaparición, o si se trata de un hecho separado resultado de la comisión de la desaparición forzada.
- b) La gravedad de estos delitos. Es decir, si la penalidad o las circunstancias en las que se desarrolló el hecho son mayores o equiparables a la de los delitos de desaparición forzada de personas o desaparición cometida por particulares.
- c) La participación de los sujetos activos en la concurrencia de delitos.

Algunos de estos delitos concurrentes y vinculados se encuentran señalados en los Cuadros de los apartados “Acreditación de sujeto activo” y “Estrategias de investigación específica y diferenciada” en el Anexo “Diligencias Básicas para la investigación”.

4. Acreditación del sujeto activo

Para encuadrar el tipo penal bajo investigación, ya sea por desaparición forzada de personas o la cometida por particulares, toma como elemento diferenciador la calidad del sujeto activo que lleva a cabo el delito: la/el servidor(a) público o cualquier otra persona.

En México la desaparición de personas es un fenómeno único que vale la pena distinguir del resto de los casos en el mundo. La desaparición forzada se encuentra asociada en la región latinoamericana con los hechos ocurridos en las dictaduras y juntas militares de los años 60, 70 y 80, en los que los perpetradores de la misma fueron integrantes del Estado que actuaron bajo una política sistemática y dirigida contra grupos opositores. En este sentido, su propósito era la merma de estos grupos por medio de su detención ilegal, la cual en muchos casos implicaba su homicidio y posterior ocultamiento de los cuerpos. En el caso mexicano esto no ocurre como una política sistemática; si bien es cierto que se ha comprobado el involucramiento de servidores públicos en casos de desaparición forzada, estos no obedecen a una política impulsada desde el Estado mexicano.

Ahora bien, si el propósito de la desaparición de una persona es el ocultamiento del destino o paradero de la víctima, cabe considerar el que esta sea cometida no sólo por servidores(as) públicos o autoridades, sino también por personas particulares por variadas razones. En este sentido, en la desaparición cometida por particulares es necesario tomar en consideración la identificación de elementos de **criminalidad organizada**, es decir la participación de un grupo de 3 o más personas



asociadas para cometer este delito. Para su identificación es necesario la identificación de patrones de criminalidad de manera repetida y sistemática en regiones o espacios geográficos determinados.

Agenda del caso: calendarización y gestión de actividades

Una vez definidos los objetivos de la investigación, es necesario gestionar, administrar y dar seguimiento a las acciones de investigación emprendidas. El establecimiento de plazos y la calendarización de las actividades, así como la identificación de los responsables de llevar a cabo cada una de ellas, son elementos necesarios para la adecuada planeación de la investigación, que puede establecerse en una Agenda del caso.

Para la calendarización de actividades es necesario tomar en consideración:

- I. Los recursos humanos y materiales disponibles en la Fiscalía.
- II. Los procesos internos de la PGR, Procuradurías o Fiscalías Generales de los Estados, tales como las solicitudes a los servicios periciales, solicitudes de intervención a la Policía, solicitud de medidas de protección y de atención a víctimas, así como de colaboración o de solicitud de información a otras instituciones y autoridades, entre otros, así como la documentación necesaria para cada uno de ellos.
- III. Los tiempos de gestión, trámite y recepción de las solicitudes de información elaboradas por la/el AMP.
- IV. Los tiempos estimados para la realización de pruebas periciales.
- V. Los tiempos de traslado del personal de campo a los probables lugares donde sucedieron los hechos.
- VI. La disponibilidad y convocatoria a posibles testigos de los hechos bajo investigación, así como a víctimas indirectas y sujetos bajo investigación.
- VII. La prontitud o dificultad para entrevistar a las personas que tuvieron conocimiento del hecho.
- VIII. Los tiempos estimados en las audiencias con la/el Juez(a) de Control, por ejemplo, ya sea para la solicitud de órdenes de presentación o de aprehensión, solicitud de actos judiciales y audiencias de vinculación a proceso.

Para la calendarización de estas actividades existen diversas herramientas y técnicas para la programación. Para el desarrollo de esta calendarización, se sugiere las recomendaciones siguientes:

- I. Definir las tareas de manera individual. Al plantear los objetivos y las acciones que conducirán al alcance de los mismos, se recomienda primero identificar todas estas en una sola lista, en la que se señale los tiempos estimados de cumplimiento.



- II. Identificar la dependencia entre tareas. Una vez plasmados los objetivos y sus acciones, es necesario identificar si es el desarrollo de algunas de las acciones de investigación y el cumplimiento de algunos de los objetivos planteados, dependen del cumplimiento de algún elemento previo.
- III. Plasmar las acciones de investigación en un diagrama de Gantt. Este tipo de diagramas es muy útil para la visualización de las acciones de investigación por realizar, así como los patrones de dependencia que existen en la realización de estas tareas, y los tiempos estimados de cumplimiento.

Se sugiere que en el desarrollo de la calendarización se identifiquen claramente aquellos objetivos y acciones cuyo cumplimiento este sujeto al cumplimiento de una acción previa, así como la participación de diversas personas responsables de llevar a cabo cada una de estas. Lo anterior debido a que la “cadena” de actividades que se forme, describe los tramos de control sobre los que la/el AMP puede supervisar su desarrollo y seguimiento.

En el ejemplo de “Agenda de Investigación” de la página 68, se utiliza como técnica de programación un Diagrama de Gantt. Esta técnica de administración de tiempos y tareas permite visualizar en un sólo cuadro: los objetivos planteados en la investigación, las acciones de investigación por desarrollar, las diligencias programadas, los responsables de llevar a cabo estas acciones, la dependencia que existe entre estas acciones, y los tiempos estimados para realizarlas.

En un diagrama de Gantt, cada una de las casillas señaladas en el calendario representa un día de la semana, e importante tomar en consideración los días naturales en la construcción del calendario para evitar confusiones y tener claros los tiempos programados para cada una de las acciones, además de que no se descartaría la necesidad de realizar alguna acción durante el fin de semana. La visualización de las tareas por desarrollar auxilia al AMP a tener una visión global de los tiempos estimados en el que se desempeñan cada una de estas acciones, así como de los tiempos estimados que tomará el desarrollo de la investigación, así como a tomar en consideración algún plazo perentorio que sea necesario cumplir.

Se sugiere que, para un mejor orden en la definición de la Agenda de Investigación, se coloquen los objetivos de investigación por orden de prioridad (puede auxiliarse del esquema piramidal de la p. 40) de la parte superior del diagrama hacia abajo; y que las acciones de investigación y sus pruebas periciales se ordenen siguiendo el orden en que es necesario que se vayan desahogando conforme se vayan recolectando los datos de prueba y los indicios relevantes para la investigación; de igual manera



se sugiere que se ordenen en bloques de colores o con marcas distintivas para identificar todas aquellas acciones de investigación y diligencias que contribuyan al cumplimiento de un objetivo.

Ejemplo: Agenda de Investigación

Datos de referencia de la investigación

Objetivo de la investigación planteado en infinitivo

No. Expediente:		[Número de Carpeta de Investigación]		Mes		Enero																															Febrero			
AMP Responsable:		[Nombre]		Semana		1			2			3			4			5																						
Responsable	Objetivo	Actividad/Diligencia	Tiempo estimado	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4		
AMP	Conocer del hecho	Inicio de la Carpeta de Investigación	INMEDIATO																																					
AMP		Registro en el RNPDL	INMEDIATO																																					
AMP		Notificación CNB/CEB	INMEDIATO																																					
AMP		Toma de entrevista del denunciante	2 horas																																					
EAV	Atender a la Víctima	Toma de cuestionario Antemortem	2 horas																																					
PEAP		Contención y apoyo psicosocial	INMEDIATO																																					
AMP		Solicitud de registro a la CEAV	5 días																																					
AMP		Solicitud de asesor jurídico a la víctima																																						
Recolectar los primeros datos de prueba																																								
POL	INV	Inspección del lugar de los hechos	3 días																																					
POL		Identificación de testigos																																						
POL		Entrevista a testigos	3 días																																					
PER	CRIM	Análisis de criminalística	3 días																																					
Recolectar la información de comunicaciones																																								
AMP	COM	Solicitud de registros de llamadas telefónicas	12 días																																					
PER		Análisis de red de vínculos	8 días																																					
AMP	COM	Solicitud de geolocalización a Juez de Control	5 días																																					
PER		Análisis de geolocalización de IMEI	10 días																																					

AMP: Agente del Ministerio Público
POL: Policía de investigación

PEAP: Psicólogo Especialista en Atención a Víctimas
EAV: Especialista de atención a víctimas

PER: Perito
INV: Investigador

CRIM: Criminalista
COM: Comunicaciones

Actividades o diligencias por

Esta es una actividad "encadenada". Para realizar el análisis de geolocalización es necesario contar primero con la autorización de Juez de control.



10. Análisis de Contexto

La Ley General, en su artículo 68, establece que las Fiscalías Especializadas deben contar con los recursos humanos y técnicos especializados y multidisciplinarios que se requieran para la conformación de una Unidad de Análisis de Contexto para su efectiva operación. Estas unidades son las áreas que generan los insumos necesarios para el desarrollo y definición de las acciones de búsqueda, así como para la investigación de los delitos de desaparición forzada de personas o desaparición cometida por particulares.

El análisis de contexto es una herramienta de estudio y análisis de las circunstancias en las que ocurren las violaciones graves a derechos humanos. Su desarrollo y uso proviene del Sistema Universal de Derechos Humanos y de la CIDH, en los que se ha utilizado para explicar la situación en la que se inscribió o que propició el que se llevaran a cabo violaciones graves a los derechos humanos perpetradas por aparatos Estatales o en situaciones de guerra o conflicto (tales como el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, el Tribunal Penal Internacional para Ruanda, y la Corte Penal Internacional).

De acuerdo con la CIDH, para la investigación de los delitos más graves en contra de los derechos humanos, es necesaria una **investigación especializada de contexto**; tal como manifestó en la sentencia del caso de *Manuel Cepeda Vargas v. Colombia*, en los numerales 118 y 119 que señalan:

118. En casos complejos, **la obligación de investigar conlleva el deber de dirigir los esfuerzos del aparato estatal para desentrañar las estructuras que permitieron esas violaciones, sus causas, sus beneficiarios y sus consecuencias, y no sólo descubrir, enjuiciar y en su caso sancionar a los perpetradores inmediatos**. Es decir, la protección de derechos humanos debe ser uno de los fines centrales que determine el actuar estatal en cualquier tipo de investigación. De tal forma [...] sólo puede resultar efectiva si se realiza a partir de una visión comprehensiva de los hechos, que tenga en cuenta los antecedentes y el contexto en que ocurrieron y que busque develar las estructuras de participación.

119. [...] las autoridades estatales deben determinar procesalmente los patrones de actuación conjunta y todas las personas que de diversas formas participaron en dichas violaciones y sus correspondientes responsabilidades. **No basta el conocimiento de la escena y circunstancias materiales del crimen, sino que resulta imprescindible analizar el conocimiento de las estructuras de poder que lo permitieron, diseñaron y ejecutaron intelectual y materialmente, así como de las personas o grupos que estaban interesados o se beneficiarían del crimen (beneficiarios)**. Esto puede permitir, a su vez, la

generación de hipótesis y líneas de investigación; el análisis de documentos clasificados o reservados, y un análisis de la escena del crimen, testigos, y demás elementos probatorios, pero sin confiar totalmente en la eficacia de mecanismos técnicos como éstos para desarticular la complejidad del crimen, en tanto los mismos pueden resultar insuficientes. En consecuencia, **no se trata sólo del análisis de un crimen de manera aislada, sino inserto en un contexto que proporcione los elementos necesarios para comprender su estructura de operación.**

En este sentido, en la sentencia del caso *González y Otras “Campo algodonero” v. México*, la CIDH concluye en el numeral 454 que el acceso al Derecho a la Verdad de las víctimas en los casos de violaciones graves a los derechos humanos “...exige la determinación de la más completa verdad histórica posible, lo cual incluye la **determinación de los patrones de actuación conjunta y de todas las personas que de diversas formas participaron en dichas violaciones**”.

Conforme a las sentencias de la CIDH, el análisis de contexto permite la identificación de estructuras organizadas que cometen estas violaciones a derechos humanos en espacios geográficos delimitados, en un momento de tiempo determinado, bajo condiciones específicas. Es decir, como parte de la obligación de los Estados en la investigación de violaciones graves a derechos humanos, es necesario que la/el AMP tome en consideración, por un lado, las condiciones en las que se llevó a cabo el delito o las violaciones graves a derechos humanos; por otro, la identificación de patrones de criminalidad que sugieran la acción organizada de un grupo o de una estructura para llevar a cabo estas conductas. En este sentido, el análisis de contexto ha sido utilizado para la identificación de grupos de criminalidad organizada, ya sea por parte de elementos del Estado o grupos organizados de agentes no estatales.

Así pues, **el análisis de contexto es una herramienta de análisis de las condiciones en la que ocurre un determinado evento, en un espacio y tiempo definido.** Para la investigación de delitos de desaparición forzada de personas o desaparición cometida por particulares, el análisis de contexto es relevante para el estudio de:

1. Las condiciones alrededor de la desaparición de la víctima directa.
2. Las condiciones alrededor de la circunstancia de localización de una víctima directa.
3. La identificación de patrones de criminalidad en la región en la que ocurrió la desaparición.
4. Las condiciones geográficas de las zonas en las que se desarrollaron los hechos.
5. Las condiciones económicas, sociales y culturales de la población residente en el lugar en el que se desarrollaron los hechos.
6. Las condiciones de riesgo en el lugar de los hechos tanto para víctimas directas como indirectas.

Por medio del uso de esta herramienta, quien investiga (Policía y la/el AMP) pueden orientar la investigación con base en un antecedente respecto al “contexto” o las circunstancias en las que se desarrollaron los hechos. Cabe señalar, que este tipo de análisis únicamente es un elemento orientador para que quien investiga, en tanto no representa un medio de prueba sobre el que se pueda formular una responsabilidad penal por un delito respecto de un hecho concreto, ya que es muy difícil establecer un nexo causal con el autor material del hecho. No hay que olvidar que una correlación entre eventos que ocurrieron en un mismo espacio y momento definido no necesariamente implica causalidad en la forma que sucedió. Es labor de quien investiga la de establecer la forma en la que se sucedieron los hechos, así como establecer el orden en qué ocurrieron, los motivos y razones que los originaron, y los efectos que tuvieron sobre la persona que resintió el delito.

Este tipo de análisis provee una narrativa sobre la que se desarrollan los hechos a investigarse, que sirve de apoyo a quien investiga para la definición de hipótesis de investigación, así como para definición de acciones y diligencias por realizarse.

Condiciones de contexto Forense

Dentro del estudio del análisis de contexto, otro elemento a considerar una vez localizada una persona sin vida es el análisis de las condiciones en las que se efectuó el hallazgo. Para el análisis y estudio de un hallazgo de cuerpos o restos humanos, es necesario que, desde el punto de vista de las disciplinas de antropología y arqueología forense, se determine las circunstancias en las que se efectuó la localización. Preguntas como:

- ¿Dónde se ubicaron los restos?
- ¿Desde cuándo los restos han estado en ese lugar?
- ¿Cómo llegaron los restos a ese lugar?

Son necesarias para determinar las “condiciones de contexto forense”; este término se refiere a poner el objeto de estudio en el momento y tiempo exacto con relación a otros objetos. Tanto los datos de localización como el análisis de contexto forense del objeto de estudio son los elementos más importantes en investigaciones forenses, en tanto su valor probatorio en un caso estriba en los elementos que aportan a la reconstrucción de los hechos en la escena del crimen. **La mayor parte de los indicios y de la evidencia recolectada pierde su valor probatorio cuando no es posible establecer su función dentro de la causalidad en la que ocurrieron los hechos, es decir, cuando no es posible determinar su función con base en el lugar en que fueron hallados y el contexto en el que se desarrollaron los hechos.**

En este sentido, para este tipo de análisis, es necesario profundizar en la recolección de evidencia desde el punto de vista de la antropología y de la arqueología forense, como las disciplinas que aportaran la mayor parte de los elementos que ayuden a reconstruir los hechos en torno a la localización de un cadáver o de los restos de una o más víctimas.

Un ejemplo de este tipo de análisis se puede realizar en torno a la inhumación ilegal de cadáveres o restos humanos localizados. “En las escenas del crimen que involucran inhumaciones, una fosa puede ser vista como un elemento. Una fosa, es una parte de la escena del crimen que no puede ser recolectada, pero si se excava apropiadamente, se puede obtener información valiosa al respecto de las herramientas con las que fue excavada, sus características geofísicas, así como otros cambios en el subsuelo que puedan ser preservados”¹.

Algunos de los elementos que podrían ser considerados para el análisis del contexto forense, en el caso de hallazgo de inhumaciones ilegales (fosa clandestina) son:

- La estratigrafía y componentes del subsuelo.
- La disposición de los elementos localizados en el subsuelo (superposición de elementos, la asociación de los elementos localizados, la “reversibilidad” de los objetos localizados, la intrusión en los depósitos).
- La “geotafonomía” del subsuelo (intervención de elementos naturales en el hallazgo, sedimentación del subsuelo, la compactación y depresión del suelo de estudio, marcas de herramientas).
- La documentación inicial de la localización de la fosa (condiciones naturales y geográficas del lugar, plan de exhumación, determinación de la extensión de la escena del crimen, determinación de rutas de acceso, descripción del área de localización).
- La determinación de los controles espaciales y de medición de la escena (mapeo del área, documentación de anomalías geográficas y del terreno, localización de depósitos secundarios, etc.).
- La documentación de las intervenciones hechas al sitio de localización para realizar la exhumación.
- La documentación de la exhumación (recolección de muestras, exhumación de los cuerpos, determinación de eventos, identificación de restos, etc.).

¹Hochrein, M. J., “Buried crime scene evidence: the application of geotaphonomy in forensic archeology”. En Stimson, P. y Mertz, C., eds. *Forensic Dentistry*. CRC Press: Boca Raton FL, 2002. Pp. 83-99; “The dirty dozen: the recognition and collection of tool-marks in the Forensic geotaphonomic record”, *Journal of Forensic Identification* 47:1997, pp.171-98; “Autopsy of the grave recognizing, collecting, and preserving forensic geotaphonomic evidence”. En Haglund, W. D., Sorg, M. H. eds., *Advances in Forensic Taphonomy: Method, Theory and Archeological Perspectives*. CRC Press: Boca Raton FL, 2002. Pp. 45-70.

- La examinación de las capas de tierra y depósitos en el subsuelo.

Todos los elementos anteriores, abonan con información acerca de la manera en que fue excavada la fosa, el número de personas que pudieron estar presentes y que participaron al momento de la inhumación, el uso de alguna herramienta o técnica particular durante la inhumación. Los elementos ya enunciados proveen de información relevante que, analizada en su conjunto, dan cuenta del *modus operandi* de los responsables de llevar a cabo la inhumación clandestina.

Se sugiere realizar este tipo de análisis sobre los sitios de localización de cadáveres y restos humanos, atendiendo las condiciones de cada caso y forma de ocultamiento (ya sea inhumación, incineración, desintegración, destrucción o abandono). El estudio multidisciplinario del análisis de un sitio de hallazgo de cadáveres o de restos humanos, desde distintas disciplinas de las ciencias exactas contribuye a una mejor comprensión de las circunstancias que rodean y en las que se llevó a cabo el hecho delictivo.

11. Anexos

Anexo I. Diligencias básicas para la investigación

Diligencias básicas para la investigación

Cuando el agente investigador por primera ocasión tiene conocimiento del hecho, ya sea por medio de la denuncia, noticia o reporte, de forma inmediata, deberá ordenar una serie de diligencias mínimas básicas, las cuales le permitirán corroborar el acontecimiento del hecho y obtener los primeros datos de prueba, con los cuales se formularán las hipótesis, tanto la principal como las alternativas y se orientará la investigación hacia determinados objetivos.

Es necesario destacar que la práctica de diligencias siempre atenderá al caso concreto y su planteamiento en el presente protocolo debe considerarse de forma enunciativa más no limitativa. La/el AMP, como director de la investigación, ordenará todas aquellas diligencias que considere convenientes, atendiendo al conocimiento adquirido en la denuncia, noticia o reporte hecho de su conocimiento.

El propósito de este Anexo es la de proveer al personal investigador de elementos que les permita dirigir y definir diligencias que acrediten los elementos esenciales de los tipos penales señalados en la Ley General, así como de diligencias orientadas a aportar datos de prueba sobre el móvil que originó el hecho, mismos que se traducen en acciones de investigación que abonan en el cumplimiento de los objetivos planteados en el Plan de Investigación; todo lo anterior identificando al personal responsable de llevarlas a cabo, así como los tiempos estimados para su realización y cumplimiento.

Cabe destacar, que la realización de estas acciones de investigación y diligencias básicas son complementarias a las diligencias “urgentes e inmediatas”. Hay que recordar que el propósito de estas últimas es la de que el personal investigador se allegue de la mayor cantidad de datos de prueba sobre el paradero de la persona desaparecida, la forma en que ocurrieron los hechos así como la identificación de los posibles perpetradores, no hay que olvidar que solo hay una oportunidad para recolectar esta información, en consideración de que las primeras horas más cercanas al evento delictivo son fundamentales para la recolección de evidencia; en tanto que el propósito de las primeras es establecer los nexos causales y la manera en que se desarrollaron los hechos, tomando en consideración los elementos de los tipos penales de desaparición forzada y cometida por particulares.

En este sentido, el personal investigador debe analizar la idoneidad y la pertinencia de la realización de

las acciones de investigación, diligencias y pruebas periciales; para lo cual es necesario tomar en consideración:

1. La información recolectada por medio de las diligencias “urgentes e inmediatas”
2. La complementariedad de las pruebas solicitadas y practicadas a la información que se tenga disponible
3. La pertinencia y la relevancia de las pruebas solicitadas y acciones de investigación que se lleven acabo
4. Los derechos de las víctimas directas e indirectas en la práctica de las pruebas solicitadas y de las acciones de investigación planeadas, tomando en consideración en todo momento su no revictimización
5. La hipótesis principal planteada en el momento de la denuncia, así como de las hipótesis alternativas que se planteen a lo largo de la investigación, y
6. La imparcialidad con la que el personal investigador debe plantear sus hipótesis libres de prejuicios, estereotipos, así como la criminalización de las víctimas

Sección A. Acreditación de los elementos necesarios de los tipos penales de desaparición forzada de personas

En la comisión de los delitos de desaparición forzada, los dos tipos penales básicos señalados en la Ley General contemplan verbos rectores necesarios para su acreditación respecto del hecho delictivo denunciado. Elementos como la privación ilegal de la libertad, la negativa de la autoridad a reconocer la privación de una persona, y el ocultamiento de una persona, son los elementos esenciales que configuran la desaparición forzada de personas.

Esta sección tiene el objetivo de dotar al personal investigador de una serie de objetivos, acciones de investigación y diligencias complementarias a las diligencias urgentes e inmediatas, con el propósito de acreditar la ocurrencia de alguno de los elementos esenciales del tipo: los verbos rectores. Debe destacarse que en tanto la desaparición forzada y la cometida por particulares establecen una conducta ilícita necesaria precedente para su realización (la privación de la libertad de la víctima), el elemento que otorga el elemento de “desaparición” es el ocultamiento de la víctima, ya sea por medio de la negativa a reconocer el conocimiento del paradero de la víctima o que se haya ocultado a la misma por algún

otro medio. Cabe señalar que, si la privación de la libertad no fuera acompañada del ocultamiento o de la negativa de conocimiento de la víctima, no se encuadraría una desaparición forzada ni una cometida por particulares, sino una privación ilegal de la libertad.

En este sentido, la acreditación de la ocurrencia de los hechos en los términos señalados en los verbos rectores del tipo penal, son esenciales para la investigación del delito y la formulación de la acusación en contra de los imputados. Para mayor detalle respecto de los elementos del tipo y sus supuestos

hipotéticos para el encuadre del hecho delictivo, se sugiere consultar el Anexo III de “Análisis dogmático de los delitos de desaparición forzada de personas”.

Sección B. Investigación específica por tipo de sujeto pasivo

Tanto en la normativa nacional como en diversos instrumentos internacionales, se reconoce la existencia de grupos quienes se encuentran expuestos a un mayor riesgo de violación de sus derechos debido a diferentes condiciones o características, como puede ser su edad, origen, género, preferencia u orientación sexual, etnia, condición de discapacidad, entre otros; refiriéndose a dicha circunstancia de riesgo como situación de vulnerabilidad.

Derivado de lo anterior, se concibe que los daños ocasionados por los delitos, en particular los delitos de desaparición forzada y la cometida por particulares, adquieren mayor gravedad, ya que las víctimas en atención a su condición de vulnerabilidad recientes estos daños de forma significativa; por lo tanto, se requiere adoptar medidas de protección diferenciada y atención especializada.

Así, la/el AMP, como director de la investigación ordenará todas las diligencias convenientes, esto derivado del primer conocimiento obtenido de la denuncia, noticia o reporte; no obstante, en aquellos hechos sujetos a investigación en los cuales se advierta que la víctima se encontraba en una situación de vulnerabilidad, será necesario desarrollar la investigación de una forma particular, en la cual se tenga presente un enfoque diferencial, el cual permitirá reconocer la posición de desventaja en la que se encontraba la víctima y el desarrollo de la investigación con la atención especializada que requiere.

Cabe destacar, que estas diligencias fueron planteadas con un doble propósito: el primero es que el personal investigador se allegue de los elementos que le permitan dilucidar el contexto en el que la víctima se desenvolvía y que, en atención a su condición de vulnerabilidad, pudieron estar relacionadas al móvil detrás de su desaparición; y el segundo, en el que las agravantes descritas en el art. 32 de la Ley General requieren de elementos particulares para su acreditación y posterior aplicación (el que la víctima sea..., el que la víctima tenga la condición de ..., el que la víctima haya sufrido el delito con motivo de..., el que la víctima perteneciera a...).

Las diligencias con enfoque diferenciado se practicarán de forma complementaria a las diligencias urgentes e inmediatas a practicar en todas las investigaciones seguidas por los delitos de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y delitos conexos, atendiendo a los requerimientos del caso concreto.

Sección C. Investigación específica por calidad del sujeto activo

Para el análisis y acreditación de los hechos denunciados respecto alguno de los delitos de desaparición forzada o la cometida por particulares, el elemento diferenciador de las dos conductas son las personas participantes en la comisión de estos: un servidor público o una persona que no ostenta un cargo público, es decir un particular.

Esta Sección tiene el objetivo de apoyar al personal investigador en la acreditación de la autoría o participación de algún servidor público en la comisión de la desaparición forzada. Para ello se describen una serie de objetivos, acciones de investigación y diligencias encaminadas a comprobar la intervención, en cualquiera de sus formas, de algún agente del Estado en la comisión de estos delitos.

En el caso de una persona “particular” (es decir que no es un servidor público”) no es necesaria la acreditación de una calidad específica, en tanto no es necesario comprobar que el agresor es una persona particular. En este sentido, las acciones de investigación descritas en el cuadro están encaminadas a establecer las diligencias y acciones de investigación encaminadas a aportar datos de prueba para la realización de un análisis de contexto del lugar, espacio y tiempo en el que se desarrollaron los hechos. En el caso de personas “particulares” las acciones de investigación deben estar dirigidas a la comprobación de una conducta repetida y reiterada en una región geográfica específica, en el que se advierta una estructura criminal orientada al ocultamiento de algún delito por medio de la desaparición cometida por particulares, o a que se trate de una organización dedicada a la comisión de este delito de una forma sistemática.

Sección A. Acreditación de los elementos necesarios de los tipos penales de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares

1. Diligencias básicas para la investigación y acreditación de la privación ilegal de la libertad

Acciones por realizar	Diligencias básicas	Conductas relacionadas
Determinación del lugar donde sucedió el hecho	Identificación y recolección de cámaras de vigilancia de C4, C5 y particulares Inspección del lugar de los hechos (identificación de bienes)	<ul style="list-style-type: none"> • Secuestro • lesiones, • amenazas, • tortura,
Localización de la víctima (rastreo de lugares en donde se ubicó la víctima, hasta determinar el probable paradero actual)	Solicitud de información de ingreso o egreso de la víctima a centro de prevención y detención (autoridades de seguridad pública, marina y ejército)	

2. Diligencias básicas para la investigación y acreditación del ocultamiento

Acciones por realizar	Diligencias básicas	Conductas relacionadas
Personal del servicio público		
Determinar la responsabilidad del personal del servicio público	Identificación y entrevista a testigos del hecho Solicitud de información a las autoridades de seguridad pública, marina o ejército si se encuentra detenida o estuvo detenida la víctima dentro de sus instalaciones, y cuál es su situación jurídica de la víctima (bitácoras, libros de gobierno, fatigas, etc.)	<ul style="list-style-type: none"> • Homicidio, • tortura, • trata de personas, • secuestro, • delitos en materia de inhumaciones y exhumaciones
Localizar el lugar donde podría mantenerse oculta a la víctima	Solicitud de información de las casas de seguridad detectadas en la zona de desaparición de la víctima Solicitud de un patrón de criminalidad en la zona de desaparición de la víctima Solicitud de identificación de los lugares de hallazgo de cadáveres, restos humanos o pertenencias de las víctimas (oculte, deseché, incinere, sepulte, inhume, desintegre o destruya) Identificación y recolección de cámaras de vigilancia de C4, C5 y particulares Inspección del lugar de los hechos (identificación de bienes muebles e inmuebles) Identificación y recolección de cámaras de vigilancia de C4, C5 y particulares	
Personas particulares		
Identificar a los particulares responsables	Identificación y entrevista a testigos del hecho Identificación y recolección de cámaras de vigilancia de C4, C5 y particulares	<ul style="list-style-type: none"> • Homicidio, • tortura, • trata de personas, • secuestro, • delitos en materia de inhumaciones y exhumaciones
Localizar el lugar donde podría mantenerse oculta a la víctima	Inspección del lugar de los hechos (identificación de bienes muebles e inmuebles) Solicitud de información de las casas de seguridad detectadas en la zona de desaparición de la víctima	

2. Diligencias básicas para la investigación y acreditación del ocultamiento		
Acciones por realizar	Diligencias básicas	Conductas relacionadas
	<p>Solicitud de un patrón de criminalidad en la zona de desaparición de la víctima</p> <p>Solicitud de identificación de los lugares de hallazgo de cadáveres, restos humanos o pertenencias de las víctimas (oculte, deseché, incinere, sepulte, inhume, desintegre o destruya)</p>	
3. Diligencias básicas para la investigación y acreditación de la abstención o negativa sobre el paradero de la víctima		
Acciones por realizar	Diligencias básicas	Conductas relacionadas
Determinar si se configura la abstención o negativa por parte de algún servidor público	Identificación y entrevista a testigos del hecho	<ul style="list-style-type: none"> • Abuso de autoridad, • cohecho, • delitos contra la administración de justicia
Identificar al servidor público responsable de la abstención o negativa	<p>Solicitud de información de ingreso o egreso de la víctima a centro de prevención y detención (autoridades de seguridad pública, marina y ejército)</p> <p>Inspección del lugar de los hechos (identificación de bienes muebles e inmuebles)</p> <p>Identificación y recolección de cámaras de vigilancia de C4, C5 y particulares</p>	

Sección B. Investigación específica y diferenciada por sujeto pasivo

1. Investigación específica y diferenciada cuando el sujeto pasivo sea una niña, niño y/o adolescente

Condición de vulnerabilidad

Las niñas, niños y adolescentes son diferentes a las personas adultas, que por sus características son especialmente vulnerables, ya que se encuentran en un proceso de madurez física y mental, lo cual implica una condición de dependencia y atención para su desarrollo, formación e identidad. En particular, esta dependencia genera la situación de vulnerabilidad y en respuesta el Estado debe generar acciones y procesos que brinden la protección y cuidados especiales que este grupo requiere.

Atendiendo a esta condición especial, respecto al delito de desaparición forzada de personas, es necesario implementar una metodología diferenciada, que atienda el principio del interés superior de la niña, niño o adolescente, orientada a una investigación que permita su búsqueda y localización.

Acciones por realizar	Diligencias básicas	Conductas relacionadas
Análisis del contexto de las condiciones de vida de la niña, niño o adolescente en relación con el móvil de la desaparición	Entrevistas a familiares y círculo de amistades cercanas En caso necesario se dará intervención a los traductores que correspondan, para la debida comprensión de los actos de investigación Estudio del entorno familiar para determinar si es motivo o causa de la desaparición Estudio de situación de violencia intrafamiliar para determinar si es motivo o causa de la desaparición Estudio del entorno social y escolar de la niña, niño o adolescente (causas de acoso de cualquier tipo o violencia física o moral) Estudio socioeconómico y de ocupación de la niña, niño o adolescente	<ul style="list-style-type: none"> • Trata de personas; • Corrupción de menores; • Tráfico de menores; • Robo de identidad; • u otras conductas relacionadas con su condición de vulnerabilidad
Análisis cibernético	Búsqueda por fotografía en páginas Web dedicadas a ofrecimiento a pornografía, corrupción y tráfico, así como venta de órganos	
Solicitud de activación de alertas	Activación de alertas de búsqueda (AMBER, Migratoria y Amarilla por INTERPOL)	
Notificación al Titular del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes y/o titular de la Procuraduría Federal/Estatal de Protección de los derechos de Niñas. Niños y Adolescentes	Comunicar a estas autoridades del inicio de la investigación con el propósito de que tengan la intervención y asistencia legal-pertinente en la atención a las víctimas y sus familias	
Acreditación de la calidad específica de la niña, niño o adolescente	Solicitud de documentación a registros para acreditar la minoría de edad (acta de nacimiento, CURP, fe de bautismo, pasaporte, certificados escolares, etc.)	
Prever la actualización de la ficha fotográfica	Solicitar retrato hablado en progresión de edad, en diversas apariencias u otros estudios pertinentes	

Marco jurídico nacional

- Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes
- Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
 - Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
- Reglamento de la Ley General de los Derechos de niñas, niños y adolescentes
- Protocolo de Actuación Ministerial para la Atención de Niñas, Niños y Adolescente Migrantes no Acompañados, enero de 2016, Procuraduría General de la República
- Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que afecten a niñas, niños y adolescentes Suprema Corte de Justicia de la Nación
- Protocolo de Actuación del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes Procedimiento Abreviado, Procuraduría General de la República Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo Justicia Penal para Adolescentes.
- Acuerdo por el que se expide el Estatuto Orgánico del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia

Marco jurídico internacional

2. Investigación específica y diferenciada cuando el sujeto pasivo sea una mujer o mujer embarazada

Condición de vulnerabilidad

Atendiendo al contexto histórico, social, económico y cultural, la situación de la mujer, de forma general ha sido de discriminación y violación a sus derechos fundamentales, ya que la subordinación de la mujer por el dominio del hombre, que ha persistido hasta la actualidad, se traduce en un desequilibrio de derechos y oportunidades. Este conjunto de condiciones y características de desventaja coloca a las mujeres en condición de vulnerabilidad.

Sumado a lo anterior, las mujeres comúnmente transitan por procesos especialmente difíciles que las ubican en situaciones especiales de vulnerabilidad, como lo es, el embarazo; ya que en esta etapa puede detonarse violencia de género, y la dependencia emocional que puede producirse, impide que las mujeres abandonen a sus parejas sentimentales.

Las mujeres que son sometidas a desaparición forzada de personas o desaparición cometida por particulares son vulnerables a actos de violencia sexual y otras formas de violencia de género.

Las mujeres víctimas de desaparición forzada de personas o desaparición cometida por particulares son doblemente víctimas en las situaciones en que los abusos sexuales dan lugar a embarazos no deseados o cuando ya estaban embarazadas antes de la desaparición forzada de personas o desaparición cometida por particulares. Esas situaciones exponen a las mujeres al trauma adicional que supone temer por su salud y por la posibilidad de dar a luz en unas circunstancias tan inhumanas y que, en muchos casos, pueden provocar la pérdida de la/el hija/o a manos de agentes del Estado.

En la investigación de delitos de desaparición forzada de personas o desaparición cometida por particulares, es necesario aplicar una herramienta metodológica efectiva que permita el desarrollo de acciones de investigación y práctica de diligencias con perspectiva de género, lo cual permitirá que el personal investigador descarte el uso de visiones estereotipadas de la víctima, relacionadas con las prácticas sociales y culturales impuestas por la sociedad a cada género. No obstante, los roles de género y estereotipos deberán considerarse como posibles móviles, desde la perspectiva del sujeto activo.

Acciones por realizar	Diligencias básicas	Conductas relacionadas
Análisis para determinar si la condición de género de la víctima tiene relación con el móvil de la desaparición	Entrevistas a familiares, pareja sentimental, compañero o compañera de trabajo y círculos de amistades más cercanas En caso necesario se dará intervención a los traductores que correspondan, para la debida comprensión de los actos de investigación	<ul style="list-style-type: none"> • Trata de personas; • Tráfico de personas; • Femicidio; • Homicidio; • Violencia sexual; • Acoso sexual u otras conductas relacionadas con su condición de vulnerabilidad
Análisis del contexto de las condiciones de vida de la persona en relación con el móvil de la desaparición	Estudio del entorno familiar para determinar si es motivo o causa de la desaparición Estudio de situación de violencia intrafamiliar para determinar si es motivo o causa de la desaparición Estudio del entorno social (causas de acoso de cualquier tipo o violencia físico o moral) Estudio socioeconómico y de ocupación (estados financieros y patrimonial) Solicitud de documentación a registros para acreditar identidad (acta de nacimiento, CURP, pasaporte, etc.)	
Análisis cibernético	Búsqueda por fotografía en páginas Web dedicadas a ofrecimiento a pornografía, corrupción y tráfico, así como venta de órganos	
Solicitud de activación de alertas	Solicitud de activación de alerta (por ejemplo, ALBA)	
Prever la actualización de la ficha fotográfica	Solicitar retrato hablado en progresión de edad, en diversas apariencias u otros estudios pertinentes	

Mujer embarazada	<p>Entrevista a testigos que tuvieran conocimiento del estado de gravidez de la víctima</p> <p>Entrevista a la/el médica(o) tratante o persona que le dio seguimiento al embarazo</p> <p>Solicitud del expediente clínico</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Robo de infante • Tráfico de menores • Otras conductas relacionadas con su condición de vulnerabilidad
-------------------------	---	--

Normatividad específica
<p>Marco jurídico nacional</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ley General de Acceso de las mujeres a una vida libre de violencia • Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres • Protocolo de investigación Ministerial, policial y Pericial con perspectiva de género, para el delito de feminicidio- Procuraduría General de la República • Protocolo de investigación Ministerial, policial y Pericial con perspectiva de género, para la violencia sexual - Procuraduría General de la República • Protocolo Para Juzgar con Perspectiva de Género-Suprema Corte de Justicia de la Nación • ACUERDO A/024/08 mediante el cual se crea la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas. <p>Marco jurídico internacional</p> <ul style="list-style-type: none"> • Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) • Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la Mujer, (Convención de Belem Do Para). • Modelo de protocolo latinoamericano de investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de género (femicidio/feminicidio). <p>Resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Caso González y otras vs México (Campo Algodonero) • Caso Fernández Ortega y otros vs. México • Caso Rosendo Cantú y otra vs. México

3. Investigación específica y diferenciada cuando el sujeto pasivo sea una persona adulta mayor

Condición de vulnerabilidad

La vulnerabilidad de las personas adultas mayores, de forma general, radica en que, conforme aumentan su edad, tanto sus condiciones de vida como su salud, se van deteriorando, lo cual genera una posición de dependencia, ya sea económica o para el desarrollo de sus actividades cotidianas, respecto de otros miembros de su familia o personas ajenas.

Aunado a lo anterior, las personas adultas mayores, frecuentemente, enfrentan la exclusión o relegación a consecuencia de la pérdida de su rol activo dentro de la sociedad, lo cual implica una vulneración a sus derechos humanos.

En lo que respecta a la investigación del delito de desaparición forzada de personas o desaparición cometida por particulares, es necesario destacar que en todos aquellos casos en los que se identifique que la víctima es una persona adulta mayor, ésta deberá desarrollarse, considerando todas aquellas limitaciones en las capacidades que la condición de persona adulta mayor implica.

Acciones por realizar	Diligencias básicas	Conductas relacionadas
Análisis del contexto de las condiciones de vida de la persona adulta mayor en relación con el móvil de la desaparición	Entrevistas a familiares, pareja sentimental, compañero o compañera de trabajo y círculos de amistades más cercanas En caso necesario se dará intervención a los traductores que correspondan, para la debida comprensión de los actos de investigación Estudio del entorno familiar para determinar si es motivo o causa de la desaparición Estudio de situación de violencia intrafamiliar para determinar si es motivo o causa de la desaparición Estudio del entorno social de la persona adulta mayor (causas de acoso de cualquier tipo o violencia física o moral) Estudio socioeconómico y de ocupación de la persona adulta mayor (estados financieros y patrimonial) Solicitud de expediente clínico	<ul style="list-style-type: none"> • Homicidio; • Robo; • Fraude; • Extorsión; • Robo de identidad, • Otras conductas relacionadas con su condición de vulnerabilidad
Solicitud de activación de alertas	Activación de la alerta (PLATEADA)	
Acreditación de la calidad específica de la persona adulta mayor	Solicitud de documentación a registros para acreditar la condición de la persona adulta mayor (acta de nacimiento, CURP, fe de bautismo, pasaporte, credencial I.N.A.P.A.M. etc.)	
Prever la actualización de la ficha fotográfica	Solicitar retrato hablado en progresión de edad, en diversas apariencias u otros estudios pertinentes	
Normatividad específica		

Marco Nacional

- Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores
- Ley Federal para Prevenir y eliminar la Discriminación
- Norma Oficial mexicana NOM-031-SSA3-2012, asistencia social. Prestación de servicios de asistencia social a adultos y adultos mayores en situación de riesgo y vulnerabilidad
- Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores

Marco internacional

- Los Principios de las Naciones Unidas en favor de las personas de edad, Asamblea General de las Naciones Unidas
- Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador"

4. Investigación específica y diferenciada cuando exista una persona con discapacidad

Condición de vulnerabilidad

La vulnerabilidad de las personas con alguna discapacidad radica en la mayor exposición a riesgos provocados por la misma condición padecida, además de la exclusión social y discriminación a las que estas personas continúan sometidas. Traduciéndose lo anterior, como impedimentos para su participación en la vida social en condiciones de igualdad y en vulneración a sus derechos humanos.

La investigación diferenciada respecto al delito de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares con alguna discapacidad deberá realizarse considerando la deficiencia física, mental o sensorial, padecida por la víctima, ya sea de forma permanente o temporal; así como las limitaciones en las capacidades que su condición implica.

Acciones por realizar	Diligencias básicas	Conductas relacionadas
Análisis del contexto de las condiciones de vida de la persona con alguna discapacidad en relación con el móvil de la desaparición	Entrevistas a familiares, pareja sentimental, compañero o compañera de trabajo y círculos de amistades más cercanas En caso necesario se dará intervención a los traductores que correspondan, para la debida comprensión de los actos de investigación Estudio del entorno familiar para determinar si es motivo o causa de la desaparición. Estudio de situación de violencia intrafamiliar para determinar si es motivo o causa de la desaparición Estudio del entorno social de la persona con alguna discapacidad (causas de acoso de cualquier tipo o violencia física o moral) Estudio socioeconómico y de ocupación de la persona con alguna discapacidad (estados financieros y patrimonial)	<ul style="list-style-type: none"> • Homicidio; • Robo; • Fraude; • Extorsión; • Robo de identidad, u otras conductas relacionadas con su condición de vulnerabilidad
Solicitud de antecedentes de representación legal en caso de existencia de bienes patrimoniales	Búsqueda de actos de representación legal de la víctima	
Acreditación de la calidad específica de la persona con alguna discapacidad	Solicitud de expediente clínico	
Prever la actualización de la ficha fotográfica	Solicitar retrato hablado en progresión de edad, en diversas apariencias u otros estudios pertinentes	

Normatividad Específica

Marco jurídico nacional

- Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación
- Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren derechos de personas con discapacidad
- Convenio General de Colaboración que celebran, la Procuraduría General de la República; y el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CONADIS)
- ACUERDO número A/02/95, mediante el cual se crea la Agencia del Ministerio Público Federal Especial para la Atención de Personas con Discapacidad Mental y se le adscribe a la Agencia del Ministerio Público Federal Conciliador la que a partir de la fecha se denominará Agencia del Ministerio Público Federal Conciliador y Especializada (vigencia indefinida)

Marco jurídico internacional

- Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad
Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad

5. Investigación específica y diferenciada cuando el sujeto pasivo tenga la condición de persona migrante

Condición de vulnerabilidad

Derivado de las condiciones políticas, económicas y sociales de los Estados, encontramos que las personas migrantes se

Derivado de las condiciones políticas, económicas y sociales de los Estados, encontramos que las personas migrantes se		
Acciones por realizar	Diligencias básicas	Conductas relacionadas
Migrante Nacional		
Acreditar la condición de migrante nacional	Entrevistas a familiares y círculo de amistades cercanas. En caso necesario se dará intervención a los traductores que correspondan, para la debida comprensión de los actos de investigación Estudio del entorno familiar para determinar si es motivo o causa de la desaparición Estudio de situación de violencia intrafamiliar para determinar si es motivo o causa de la desaparición Estudio del entorno social (causas de acoso de cualquier tipo o violencia físico o moral) Estudio socioeconómico y de ocupación Solicitud de documentación a registros para acreditar su calidad migratoria (acta de nacimiento, CURP, pasaporte, etc.) Solicitud al INM y SRE Solicitud de información a instituciones públicas respecto a diferentes registros de seguridad social o laboral Solicitud de asistencia jurídica internacional para determinar su entrada legal o ilegal a otro país	<ul style="list-style-type: none">• Homicidio;• Secuestro;• Amenazas;• Lesiones;• Robo;• Violación;• Privación de la libertad;• Tráfico de personas;• trata de personas;• Extorsión u otras conductas relacionadas con su condición de vulnerabilidad
Solicitud de activación de alertas	Activación de alertas de búsqueda (Migratoria y Amarilla por INTERPOL)	
Prever la actualización de la ficha fotográfica	Solicitar retrato hablado en progresión de edad, en diversas apariencias u otros estudios pertinentes	
Migrante Extranjero		
Acreditar la condición de migrante extranjero	Entrevistas a familiares y círculo de amistades cercanas. En caso necesario de dará intervención a los traductores que correspondan, para la debida comprensión de los actos de investigación Solicitud de activación del mecanismo de apoyo exterior	

	<p>Solicitud al INM, SRE, COMAR</p> <p>Solicitud de asistencia jurídica internacional</p> <p>Estudio de rutas migratorias (identificación de lugar de origen, trayecto y destino)</p> <p>Solicitud de Identificación de Nacionalidad (acta o registro de nacimiento)</p> <p>Solicitud de antecedentes penales del país de origen</p> <p>Solicitud de información a Casas de Migrantes u otras Organizaciones no gubernamentales de apoyo a migrantes</p>
Solicitud de activación de alertas	Activación de alertas de búsqueda (Migratoria y Amarilla por INTERPOL)
Prever la actualización de la ficha fotográfica	Solicitar retrato hablado en progresión de edad, en diversas apariencias u otros estudios pertinentes
Normatividad Específica	
Marco jurídico nacional	
<ul style="list-style-type: none"> • Ley de Migración • Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político • Reglamento de la Ley de Migración • Reglamento de la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria • Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia en casos que afecten a personas migrantes y sujetas de protección internacional Suprema Corte de Justicia de la Nación. • Acuerdo por el que se emiten las Normas para el funcionamiento de las Estaciones Migratorias y Estancias Provisionales del Instituto Nacional de Migración. 	
Marco jurídico internacional	
<ul style="list-style-type: none"> • Protocolo Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire • Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados • Convención sobre el Estatuto de los Refugiados • Convenio sobre los Trabajadores Migrantes • Convenio sobre las Migraciones en Condiciones Abusivas y la Promoción de la Igualdad de Oportunidades y de Trato de los Trabajadores Migrantes • Opinión Consultiva OC-21/14 Corte Interamericana en Derechos Humanos (CIDH, Opiniones consultivas, Documentos original) 	

6. Investigación específica y diferenciada cuando el sujeto pasivo sea una persona afrodescendiente

Condición de vulnerabilidad

A lo largo de la historia, encontramos que las personas afrodescendientes han enfrentado condiciones de esclavitud, marginación, discriminación y segregación, basados en su origen racial o étnico, su situación social y económica. El racismo y los delitos motivados por odio, como práctica generalizada de los grupos mayoritarios de la sociedad en décadas pasadas, aún representan problemas graves para todas aquellas personas que se auto reconocen como integrantes de estos grupos, quienes en la actualidad continúan enfrentándose a la discriminación y segregación social, derivada de los prejuicios y estereotipos que continúan arraigados en la sociedad.

Derivado de lo anterior, se puede advertir que, ese conjunto de condiciones facilita la violación de los derechos y libertades de las personas afrodescendientes, manteniéndolos en una condición de desventaja, impidiéndoles el acceso a mejores oportunidades, aumentando su vulnerabilidad.

En este sentido, es necesario precisar que la investigación del delito de desaparición forzada de personas o desaparición cometida por particulares, en donde las víctimas sean personas afrodescendientes, requerirán un enfoque diferenciado, en el cual, el reconocimiento o pertenencia a ese grupo sea considerado como móvil de la desaparición

Acciones por realizar	Diligencias básicas	Conductas relacionadas
Acreditación de pertenencia o reconocimiento al grupo afrodescendiente como móvil de la desaparición	Entrevistas a familiares y círculo de amistades cercanas En caso necesario se dará intervención a los traductores que correspondan, para la debida comprensión de los actos de investigación Entrevista con el propósito de acreditar el reconocimiento de pertenencia a un grupo afrodescendiente Estudio antropológico o etnológico para establecer la pertenencia a un grupo afrodescendiente Estudio de relaciones familiares Estudio del entorno social (causas de acoso de cualquier tipo o violencia física o moral) Estudio socioeconómico y de ocupación (estados financieros y patrimonial)	• Homicidio; • Amenazas; • Lesiones; • Privación de la libertad; • Daño en propiedad ajena; • Extorsión u otras conductas relacionadas con su condición de vulnerabilidad
Solicitud de antecedentes de violencia en contra de la persona	Antecedentes de violencia (física o moral) por su condición de afrodescendiente Solicitud al INM, SRE, COMAR	
Prever la actualización de la ficha fotográfica	Solicitar retrato hablado en progresión de edad, en diversas apariencias u otros estudios pertinentes	

Normatividad específica

Marco jurídico nacional

- Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación

Marco jurídico internacional

- Convención Interamericana contra toda forma de Discriminación e Intolerancia.
- Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y formas conexas de intolerancia.
- Decenio Internacional para los afrodescendientes 2015-2024, Departamento de Información Pública de las Naciones Unidas y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
- Plan de Acción del Decenio de las y los afrodescendientes en las américas (2016-2025)

7. Investigación específica y diferenciada cuando el sujeto pasivo sea una persona con pertenencia a un pueblo o comunidad indígena

Condición de vulnerabilidad
<p>Atendiendo a un análisis histórico de nuestro país, encontramos un patrón de desigualdad en contra de la población indígena, el cual no ha mejorado en la actualidad, ya que este sector de la población mexicana continúa enfrentando actos de racismo, discriminación y violencia, física, emocional y económica. Así mismo, esta desigualdad provoca la marginación de pueblos indígenas, quienes se ven obligados a aceptar condiciones de aislamiento, pobreza, desnutrición y analfabetismo; acentuando de esta forma, las prácticas discriminadoras derivadas de su condición de pobreza, su falta de acceso a los niveles de educación y respecto a sus usos y costumbres.</p> <p>Estas prácticas exclusivas de la sociedad respecto a los grupos indígenas se reflejan incluso en las políticas públicas implementadas por el Estado mexicano, al no otorgarles las facilidades para acceder a servicios sociales o de justicia; impidiendo, de esta forma, el ejercicio y disfrute de sus derechos básicos, convirtiéndolos en uno de los grupos más vulnerables de la población mexicana.</p> <p>Por lo tanto, en las investigaciones del delito de desaparición forzada de personas o desaparición cometida por particulares, en las cuales las víctimas pertenezcan a un pueblo o comunidad indígena o cualquier otro equiparable, deberán desarrollarse con un enfoque diferenciado, en el cual, el reconocimiento o pertenencia a ese grupo sea considerado como móvil de la desaparición. Destacando que, las consideraciones pertinentes, aplicarán también para el trato especializado que deberán recibir las víctimas indirectas.</p>

Acciones por realizar	Diligencias básicas	Conductas relacionadas
Acreditación de pertenencia o reconocimiento a un pueblo o comunidad indígena o cualquier otro equiparable como móvil de la desaparición (por ausencia de la víctima)	Entrevista a familiares y amistades con el propósito de indagar respecto a la pertenencia a un pueblo o comunidad indígena o cualquier otro equiparable En caso necesario se dará intervención a los traductores que correspondan, para la debida comprensión de los actos de investigación	<ul style="list-style-type: none"> • Homicidio; • Amenazas; • Lesiones; • Privación de la libertad; • Daño en propiedad ajena; • Extorsión u otras conductas relacionadas con su condición de vulnerabilidad
Solicitud de peritajes con la finalidad de establecer la determinación de la pertenencia de la persona a un pueblo o comunidad indígena, condiciones de vulnerabilidad para acreditar elementos de autodeterminación	Estudio antropológico o etnológico para establecer la pertenencia a un pueblo o comunidad indígena o cualquier otro equiparable Estudio de relaciones familiares	
Acreditar que la persona al momento del suceso o del hecho era titular de derechos indígenas o que vivía en una comunidad indígena o padecía de condiciones de vulnerabilidad	Estudio del entorno social (causas de acoso de cualquier tipo o violencia física o moral) Estudio socioeconómico y de ocupación Estudio de usos, costumbres y tradiciones	
Solicitud de antecedentes de violencia en contra de la persona	Antecedentes de violencia (física o moral) por su condición a un pueblo o comunidad indígena o cualquier otro equiparable	
Prever la actualización de la ficha fotográfica	Solicitar retrato hablado en progresión de edad, en diversas apariencias u otros estudios pertinentes	
Solicitud a las autoridades públicas y comunitarias de diversa documentación relacionada con la	Solicitud de documentación a registros para acreditar su personalidad (acta de nacimiento, CURP, fe de bautismo, pasaporte, certificados escolares, actas	

persona para efectos de acreditar la autodeterminación	comunitarias o de consejos de ancianos, testimonios vecinales, etc.)
--	--

Normatividad Específica

Marco jurídico nacional

- Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas
- Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas
- Protocolo de Actuación para quienes imparte justicia en casos que involucren derechos de personas, comunidades y pueblos indígenas (SCJN)

Marco jurídico Internacional

- Declaración Universal de los Derechos Humanos
- Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas
- Convenio Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes

8. Investigación específica y diferenciada cuando el sujeto pasivo sea víctima del delito por su identidad de género

Condición de vulnerabilidad

La identidad de género es una de las características que conforman los aspectos esenciales de la vida de una persona, entendiendo esta, como la manera en que la persona se asume a sí misma, es decir, el adoptar para sí una identidad más masculina o femenina, de acuerdo con los parámetros culturales imperantes en cada sociedad.

La oposición de la identidad de género de la persona, con los estereotipos y roles de género impuestos por la sociedad, ha sido motivo para llevar a cabo actos de marginación, discriminación, estigmatización y exclusión social; contribuyendo, de esta forma, a que las personas cuya identidad de género difiere a la esperada, se vean privadas de los beneficios sociales y legales; colocándolos en una posición en la cual aumenta el riesgo de que sus derechos humanos sean afectados.

Por consiguiente, quien investiga, en todos aquellos asuntos de desaparición forzada de personas o desaparición cometida por particulares, en los cuales se advierta que la víctima manifestaba una identidad de género contraria a lo establecido por los estereotipos sociales, la investigación deberá desarrollarse considerando esa circunstancia como el móvil del delito.

Acciones por realizar	Diligencias básicas	Conductas relacionadas
Análisis para determinar si la identidad de género de la víctima tiene relación con el móvil de la desaparición	Entrevistas a familiares, pareja sentimental, compañero o compañera de trabajo y círculos de amistades más cercanas En caso necesario se dará intervención a los traductores que correspondan, para la debida comprensión de los actos de investigación Estudio del entorno familiar para determinar si es motivo o causa de la desaparición. Estudio de situación de violencia intrafamiliar para determinar si es motivo o causa de la desaparición Solicitud de documentación a registros para acreditar identidad (acta de nacimiento, CURP, pasaporte, etc.) Solicitud de expediente clínico	• Homicidio; • Amenazas; • Lesiones; • Privación de la libertad; • Daño en propiedad ajena; • Extorsión u otras conductas relacionadas con su condición de vulnerabilidad
Análisis del contexto de las condiciones de vida de la persona en relación con el móvil de la desaparición	Estudio del entorno social (causas de acoso o violencia físico o moral) Estudio socioeconómico y de ocupación (estados financieros y patrimonial)	
Prever la actualización de la ficha fotográfica	Solicitar retrato hablado en progresión de edad, en diversas apariencias u otros estudios pertinentes	

Normatividad Específica

Marco jurídico nacional

- Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación
- Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.
- Protocolo de Actuación para el Personal de la Procuraduría General de la República en casos que involucren la Orientación Sexual o la Identidad de Género.
- Protocolo de actuación para quienes Imparten Justicia en Casos que involucren la Orientación Sexual o la Identidad de Género, Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Marco jurídico Internacional

- Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial.
- Principios sobre la aplicación de la legislación internacional de Derechos Humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de género, los principios de Yogyakarta (criterio no vinculante que expresan el desarrollo de un derecho específico).

9. Investigación específica y diferenciada cuando el sujeto pasivo sea víctima del delito por su orientación sexual

Condición de vulnerabilidad

Tanto la identidad de género como la orientación sexual son características que conforman aspectos esenciales de la vida de una persona, entendiendo por orientación sexual, como la capacidad de una persona de sentir una profunda atracción emocional, afectiva y sexual por personas de un género diferente al suyo, o de su mismo género, o de más de un género, así como la capacidad de mantener relaciones íntimas y sexuales con estas personas.

Relacionado a lo anterior, se advierte que las personas que poseen una orientación sexual distinta a la heterosexual han sido sujetos de marginación, estigmatización y exclusión social, ya que al igual que ocurre con el tema de identidad de género, una orientación sexual diferente se opone con los roles establecidos por la sociedad a cada género. Por lo tanto, la oposición de la sociedad a aceptar la diversidad sexual provoca que las personas mantengan su orientación sexual en silencio, se conviertan en objeto de exclusión, represión y que se les impida su libre desarrollo como seres humanos. Actualmente, las personas que abiertamente manifiestan una orientación sexual diversa a la establecida se enfrentan a procesos de odio y discriminación, además de una debilidad en la satisfacción de sus derechos fundamentales.

De lo anteriormente expuesto, se advierte la necesidad de que, en todas aquellas investigaciones respecto al delito de desaparición forzada de personas o desaparición cometida por particulares, en las cuales se advierta que la víctima manifestaba una orientación sexual distinta a la heterosexual, quien investiga deberá considerar dicha circunstancia como el móvil del delito.

Acciones por realizar	Diligencias básicas	Conductas relacionadas
Análisis para determinar si orientación sexual de la víctima tiene relación con el móvil de la desaparición	Entrevistas a familiares, pareja sentimental, compañero o compañera de trabajo y círculos de amistades más cercanas En caso necesario se dará intervención a los traductores que correspondan, para la debida comprensión de los actos de investigación Estudio del entorno familiar para determinar si es motivo o causa de la desaparición. Estudio de situación de violencia intrafamiliar para determinar si es motivo o causa de la desaparición Solicitud de documentación a registros para acreditar su identidad (acta de nacimiento, CURP, pasaporte, etc.)	• Homicidio; • Amenazas; • Lesiones; • Privación de la libertad; • Daño en propiedad ajena; • Extorsión u otras conductas relacionadas con su condición de vulnerabilidad
Análisis del contexto de las condiciones de vida de la persona en relación con el móvil de la desaparición	Estudio del entorno social (causas de acoso o violencia físico o moral) Estudio socioeconómico y de ocupación (estados financieros y patrimonial)	
Prever la actualización de la ficha fotográfica	Solicitar retrato hablado en progresión de edad, en diversas apariencias u otros estudios pertinentes	

Normatividad Específica

Marco jurídico nacional

- Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación
- Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.
- Protocolo de Actuación para el Personal de la Procuraduría General de la República en casos que involucren la Orientación Sexual o la Identidad de Género.
- Protocolo de actuación para quienes Imparten Justicia en Casos que involucren la Orientación Sexual o la Identidad de Género, Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Marco jurídico Internacional

- Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial.
- Principios sobre la aplicación de la legislación internacional de Derechos Humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de género, los principios de Yogyakarta (criterio no vinculante que expresan el desarrollo de un derecho específico).

10. Investigación específica y diferenciada cuando el sujeto pasivo sea víctima del delito por motivo de su trabajo como persona defensora de derechos humanos

Condición de vulnerabilidad

La actividad como persona defensora de derechos humanos contribuye a que se haga justicia a las víctimas de delitos y a la lucha contra la impunidad y corrupción, con miras a evitar violaciones futuras, lo cual implica, en la mayoría de las ocasiones, el ejercer presión sobre las autoridades y la promoción de la realización de mayores esfuerzos por parte del Estado para el cumplimiento de obligaciones en materia de derechos humanos. Razón por la cual, las personas defensoras de derechos humanos se enfrentan a actos de hostigamiento, criminalización, asesinatos y, de violencia en general, los cuales afectan no sólo su rol en la sociedad, también sus derechos civiles, económicos, sociales, culturales y ambientales, además de las garantías necesarias para su protección. Por lo tanto, la actividad de defensa de derechos humanos coloca a todos aquellos que la desempeñan en una condición especial de vulnerabilidad.

En atención a lo anterior, todas aquellas investigaciones seguidas por desaparición forzada de personas o desaparición cometida por particulares dedicadas a la defensa de derechos humanos deberán desarrollarse considerando dicha labor como la motivación principal para la comisión de ese delito.

Acciones por realizar	Diligencias básicas	Conductas relacionadas
Análisis del trabajo como persona defensora de derechos humanos para determinar el móvil de la desaparición	Entrevistas a familiares, pareja sentimental, compañero o compañera de trabajo y círculos de amistades más cercanas En caso necesario se dará intervención a los traductores que correspondan, para la debida comprensión de los actos de investigación Estudio socioeconómico y de ocupación Estudio para determinar si la labor como persona defensora de derechos humanos se encuentra relacionada con la desaparición Estudio del contexto donde desarrollaba sus actividades la persona defensora de derechos humanos	• Homicidio; • Amenazas; • Lesiones; • Privación de la libertad; • Robo; • Daño en propiedad ajena u otras conductas relacionadas con su condición de vulnerabilidad
Solicitud de antecedentes de violencia en contra de la persona defensora de derechos humanos	Solicitud al mecanismo de protección a periodistas y personas defensoras de derechos humanos de la Secretaría de Gobernación si el defensor de derechos humanos había solicitado o contaba con alguna medida de protección Solicitud al mecanismo de protección a periodistas y personas defensoras de derechos humanos de la Secretaría de Gobernación del análisis del riesgo sobre el que se determinó la medida de protección Antecedentes de violencia (física o moral) por su labor como persona defensora de derechos humanos	
Prever la actualización de la ficha fotográfica	Solicitar retrato hablado en progresión de edad, en diversas apariencias u otros estudios pertinentes	

Normatividad Específica

Marco jurídico nacional

- Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas
- Reglamento de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas
- Lineamientos para el Reconocimiento a la Labor de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas
- Protocolo de Coordinación Nacional para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas
- Manual sobre Mecanismos de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos en México

Marco jurídico internacional

- Directrices sobre la Protección de los Defensores de los Derechos humanos
- Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos.

11. Investigación específica y diferenciada cuando el sujeto pasivo sea víctima del delito por su trabajo como periodista

Condición de vulnerabilidad

Derivado de los acontecimientos económicos, políticos y sociales presente en las últimas décadas, la labor periodística ha venido considerándose como de alto riesgo, ya que las personas que desempeñan dicha labor, se han convertido en objeto de amenazas, agresiones físicas, psíquicas o morales y, en general, todo tipo de actos violentos, por la información que se pretende silenciar o censurar, ya sea por razones de tipo económico, intereses políticos, conflictos sociales, corrupción de las instituciones de gobierno, delincuencia organizada y en general, la violencia generalizada presente en las distintas Entidades Federativas, motivo por el cual, todas aquellas personas que desempeñan esta labor, se encuentran en una posición de mayor peligro, ya que son propensos a sufrir violaciones a sus derechos humanos.

Por consiguiente, las investigaciones del delito de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, en las cuales se advierta que la víctima se desempeñaba como periodista, deberán realizarse diligentemente, considerando su labor

Acciones por realizar	Diligencias básicas	Conductas relacionadas
Análisis del trabajo periodístico para determinar el móvil de la desaparición	Entrevistas a familiares, compañero o compañera de trabajo y círculos de amistades más cercanas En caso necesario se dará intervención a los traductores que correspondan, para la debida comprensión de los actos de investigación Estudio socioeconómico y de ocupación Estudio para determinar si la labor periodística se encuentra relacionada con la desaparición Solicitud de información al medio de comunicación al respecto de la línea editorial en el trabajo de la víctima Estudio del contenido de sus publicaciones (en todos los medios de comunicación)	<ul style="list-style-type: none"> • Homicidio; • Amenazas; • Lesiones; • Privación de la libertad; • Robo; • Daño en propiedad ajena u otras conductas relacionadas con su condición de vulnerabilidad
Solicitud de antecedentes de violencia en contra del periodista	Solicitud al mecanismo de protección a periodistas y personas defensoras de derechos humanos de la Secretaría de Gobernación si el periodista había solicitado o contaba con alguna medida de protección Solicitud al mecanismo de protección a periodistas y personas defensoras de derechos humanos de la Secretaría de Gobernación del análisis del riesgo sobre el que se determinó la medida de protección Solicitud de información de antecedentes del periodista a la FEADLE o Fiscalía especializada investigación de estos delitos (en caso de ser positivo, si se concedieron medidas de protección) Solicitud a instituciones gubernamentales y no gubernamentales de antecedentes de violencia (física o moral) por su labor periodística	
Prever la actualización de la ficha fotográfica	Solicitar retrato hablado en progresión de edad, en diversas apariencias u otros estudios pertinentes	

Normatividad Específica

Marco jurídico nacional

- Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas
- Reglamento de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas

- Protocolo de Coordinación Nacional para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas

Lineamientos para el Reconocimiento a la Labor de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas Acuerdo

- A/145/10 del Procurador General de la República, por el que se crea la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, la cual se adscribe a la Oficina del Procurador General de la República, y se establecen sus funciones.

Compilado del Acuerdo A/145/10, modificado por el A/109/12 de la Procuraduría General de la República.

Marco jurídico internacional

- Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión
- Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos.

12. Investigación específica y diferenciada cuando el sujeto pasivo sea una persona integrante de instituciones de seguridad pública

Condición de vulnerabilidad

Las personas integrantes de las instituciones de seguridad pública, son un componente esencial del sistema de justicia penal en México, no obstante la violencia generalizada presente en nuestro país, ha contribuido para que el desempeño de esta labor, sea considerada como de alto riesgo; toda vez que las instituciones de seguridad pública, en general todas las instituciones policiales de los diferentes órdenes de gobierno, se convierten en órgano represor del Estado, desempeñando actividades de prevención, seguridad y ejecutor de las leyes, se convierten en el objetivo fundamental de los diferentes grupos delincuenciales, motivo por el cual, son considerados como grupo susceptible a sufrir toda clase de actos violentos, a consecuencia del desempeño de sus funciones. También contribuye a lo anterior, la desestimación con la que la sociedad considera el desempeño de esas labores.

Considerando lo anterior, las investigaciones de desaparición forzada de personas o desaparición cometida por particulares en las cuales se advierta que la víctima se haya desempeñado como integrante de las instituciones de seguridad pública, deberán desarrollarse considerando, que su actividad como servidor público y el ejercicio de sus funciones, como es la salvaguarda de la seguridad pública, motivaron la comisión de dicho delito.

Acciones por realizar	Diligencias básicas	Conductas relacionadas
Acreditar la calidad de la persona integrante de instituciones de seguridad pública	Entrevistas a familiares, compañero o compañera de trabajo y círculos de amistades más cercanas En caso necesario se dará intervención a los traductores que correspondan, para la debida comprensión de los actos de investigación Solicitar expediente, cargo y funciones del servidor público (casos relevantes y si tenía alguna comisión o investigación relevante el día o en días previos a los de su desaparición) Estudio socioeconómico y de ocupación	<ul style="list-style-type: none"> • Homicidio; • Amenazas; • Lesiones; • Privación de la libertad; • Robo; • Daño en propiedad ajena; • Cohecho; • Extorsión u otras conductas relacionadas con su condición de vulnerabilidad
Solicitud de antecedentes de violencia en contra de la persona integrante de instituciones de seguridad pública	Antecedentes de violencia (física o moral) por su labor como integrante de instituciones de seguridad pública	
Prever la actualización de la ficha fotográfica	Solicitar retrato hablado en progresión de edad, en diversas apariencias u otros estudios pertinentes	

Normatividad Específica

Marco jurídico nacional

- Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública
- Ley de la Policía Federal
- Acuerdo 04/2012 del Secretario de Seguridad Pública, por el que se emiten los lineamientos generales para la regulación del uso de la fuerza pública por las instituciones policiales de los órganos desconcentrados en la Secretaría de Seguridad Pública

Sección C. Investigación específica por calidad del sujeto activo

1. Investigación específica de la calidad del sujeto activo de servidora(or) pública(o)

Acciones por realizar	Diligencias básicas	Conductas relacionadas
Determinar la calidad específica de la persona al servicio público	<p>Solicitar el expediente laboral</p> <p>Solicitar los manuales de procedimientos de la institución a la que se encuentra adscrita la persona al servicio público o cualquier otro documento que lo acredite</p> <p>Identificar y precisar las funciones bajo responsabilidad de la persona al servicio público</p> <p>Solicitar un informe de las funciones que realizaba la persona al servicio público al momento del hecho. Así como las pruebas documentales respectivas (bitácoras y fatigas)</p> <p>Solicitud mediante el cual se informe si la persona al servicio público intervino o participó en la detención de la víctima o bien, realizó o participó en un operativo (individual o colectivo) en el lugar o inmediaciones del hecho (características del armamento, vestimenta, vehículos, entre otras)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Abuso de autoridad; • Cohecho; • Delitos contra la administración de justicia; • Secuestro; • Homicidio; • Extorsión
Solicitud de antecedentes de la persona al servicio público	Solicitud de antecedentes de procedimientos administrativos	

2. Investigación específica de la calidad del sujeto activo como persona particular

Acciones por realizar	Diligencias básicas	Conductas relacionadas
Cualquier persona	<p>Entrevistas a familiares, círculo de amistades cercanas o cualquier otro testigo</p> <p>Solicitud de antecedentes personales, sociales, patrimoniales, familiares, penales, entre otros</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Abuso de autoridad; • Cohecho; • Delitos contra la administración de justicia; • Secuestro; • Homicidio; • Extorsión
Criminalidad organizada	<p>Entrevista a testigos</p> <p>Solicitud de un patrón de criminalidad en la zona de desaparición de la víctima</p> <p>Solicitud de identificación de los lugares de hallazgo de cadáveres, restos humanos o pertenencias de las víctimas (oculte, deseché, incinere, sepulte, inhume, desintegre o destruya)</p>	

Anexo II. Investigación de desapariciones forzadas de integrantes de movimientos políticos del pasado (en desarrollo)

Para la investigación y persecución de los delitos de desaparición forzada de personas con motivos políticos de décadas pasadas, las Fiscalías Especializadas deben elaborar un Plan de Investigación con base en una metodología específica que atienda las circunstancias históricas particulares de estos casos, la información recabada por distintas autoridades con el paso de los años, así como la información recolectada por organizaciones de protección de derechos humanos.

Es importante tener en consideración que, para la investigación de este tipo de desapariciones forzadas se debe precisar a qué se refiere la Ley General con “motivos políticos”. Desde el punto de vista doctrinal, un motivo es el fundamento que busca influir en el movimiento, y el movimiento es la acción ejecutada por el grupo de presión que está en contra de la ideología del gobierno por la defensa de ciertos derechos de carácter político, social u otros. De la Ley General se advierte que los términos motivos políticos y movimientos políticos son utilizados como sinónimos, por lo tanto, es posible que la intención del legislador era la investigación, persecución y sanción de todas aquellas desapariciones forzadas en las cuales las víctimas hayan manifestado ideologías opositoras al gobierno de aquel momento histórico.

Dado que este tipo de desapariciones forzadas sucedieron en décadas pasadas durante las cuales acontecieron una serie de cambios, no sólo en la estructura del País sino también en el ámbito social, es fundamental para quien investiga acotar y comprender el momento histórico particular en el cual se desarrollaron los hechos, para conducir la investigación. Para llevar a cabo ésta, es necesario acotar el periodo de tiempo histórico por el cual deberá entenderse “décadas pasadas”.

En tanto que el primer antecedente, de un esfuerzo del Estado mexicano por resolver estos casos, fue la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP) creada en enero del año 2002, la cual investigó ciertos casos con características particulares que, a criterio de dicha Fiscalía, cumplían con la condición de relación a movimientos sociales y políticos del pasado; atendiendo a la relevancia de esta fiscalía especial, y a los casos que tuvo bajo su investigación, en este protocolo se considerarán dentro del espacio temporal de “décadas pasadas”, todas aquellas desapariciones forzadas cometidas en contra de personas en razón de su afiliación política, activismo político, pertenencia a un movimiento político, el ejercicio de su libertad de expresión, o su disidencia con el aparato estatal de aquel momento histórico en el que ocurrió la desaparición, anteriores a su creación.

Ahora bien, para la investigación de estas desapariciones forzadas, ya se ha mencionado la importancia de acotar los hechos dentro de un momento histórico definido, es decir atendiendo la relevancia del contexto bajo el que se sucedieron los hechos bajo investigación, dentro de un espacio temporal y geográfico determinado. El análisis de contexto del momento histórico en el que ocurrió la desaparición es fundamental para la definición de las hipótesis del caso, así como para la dirección de la investigación.

Así pues, todos aquellos hechos probablemente constitutivos del delito de desaparición forzada de personas en los cuales se advierta que la víctima se haya visto involucrada en actividades de oposición al régimen establecido en un momento histórico determinado deberán ser tratados como “desapariciones forzadas cometidas en el pasado”.

Al respecto, para la elaboración del Plan de investigación se requiere:

- 1. Estudio y Análisis exhaustivo de la información histórica con motivos políticos de décadas pasadas, como son:**
 - a) Archivos públicos nacionales dentro de los tres órdenes de gobierno que contengan información pertinente, idónea y eficaz.
 - b) Archivos públicos internacionales, que contengan información pertinente, idónea y eficaz.
- 2. Estudio y análisis exhaustivo del ordenamiento jurídico vigente relacionado con motivo de los sucesos políticos de décadas pasadas;** con el objeto de dictaminar y establecer las violaciones más frecuentes, reiteradas o sistemáticas a los derechos de las personas detenidas arbitrariamente, privadas de su libertad, torturadas, secuestradas, asesinadas, desaparecidas u otros ilícitos, con motivo de esos sucesos.
- 3. Estudio y análisis exhaustivo de los indicios recabados en averiguaciones previas y pruebas aportadas en las causas penales vinculadas a personas detenidas arbitrariamente, privadas ilegalmente de su libertad, torturadas, secuestradas, asesinadas, desaparecidas u otros actos similares, con motivo de sucesos políticos del pasado.**
 - a) Presas(os) políticas(os).
 - b) Perseguidas(os) políticas(os).
 - c) Exiliadas(os) políticas(os).
 - d) Disidentes políticos.
 - e) Luchadoras(es) sociales.
 - f) Otros con similar contexto.
- 4. Estudio y análisis exhaustivo de las denuncias y testimonios recabados en averiguaciones previas y en las causas penales vinculadas a personas, por detenciones arbitrarias, privadas ilegalmente de su libertad, torturadas, secuestradas, asesinadas o desaparecidas u otros actos similares, con motivo de sucesos políticos, para efectos de abrir o cerrar hipótesis y líneas de investigación.**
- 5. Estudio y análisis exhaustivo que permita identificar y señalar material y formalmente los errores y omisiones en la integración de las averiguaciones previas y la conformación de las causas**

penales; con el objeto de reestructurar el proyecto de investigación, para abrir o cerrar las hipótesis y las líneas de investigación de cada caso. Inclusive para demostrar la pérdida, ocultamiento o destrucción de la evidencia probatoria.

6. **Estudio y análisis exhaustivo que permita identificar y señalar a la persona al servicio público o particulares que intervinieron en la planeación y ejecución de operaciones** en las cuales se realizaron detenciones arbitrarias, privaciones ilegales de libertad, tortura, secuestro, asesinato, desaparición u otros actos similares, para efectos de acreditar la probable responsabilidad de los autores y partícipes de los hechos ilícitos.
7. **Estudio y análisis exhaustivo en fuentes abiertas de documentos en versión digital y pública,** con motivo de los sucesos políticos del pasado que dieron origen a detenciones arbitrarias, privaciones ilegales de libertad, tortura, secuestro, asesinato, desaparición u otros actos similares.
8. **Realizar un análisis de contexto del país y a nivel regional, para esquematizar las zonas geográficas que fueron motivo de represión generalizada y sistemática con motivo de sus posturas políticas del pasado.**
9. **Realizar un análisis de contexto del país y a nivel regional para esquematizar las zonas que serán motivo de los planes de búsqueda** vinculadas a personas privadas de su libertad, torturadas, secuestradas, asesinadas o desaparecidas y otros sucesos políticos del pasado (para ello es necesaria la coordinación e intercambio de información con la Comisión Nacional/Local de Búsqueda).
10. **Conformar bases de datos históricos en relación cada caso para sustentar el procesamiento y cruce de información para futuras investigaciones con motivo de sucesos políticos del pasado.**
11. **Identificar a los actores y personal sustantivo que intervinieron en la integración de las averiguaciones previas y causa penales** vinculadas a personas privadas de su libertad, torturadas, secuestradas, asesinadas o desaparecidas y otros, con motivo de sucesos políticos del pasado.
12. **Estudio y análisis de las AP y Causas penales que se conformaron** por detenciones arbitrarias, privaciones ilegales de la libertad, tortura, secuestro, homicidio o desaparición forzada de personas u otros actos similares, en contra de personas con motivo de su involucramiento en movimientos políticos del pasado, **con el objetivo de generar nuevas entrevistas (evitando la revictimización) para dar sustento a nuevas hipótesis o líneas de investigación**

Algunas de las acciones de investigación básicas que se pueden realizar para la investigación de estos delitos, se describen en el siguiente cuadro:

Desapariciones por motivos políticos de décadas pasadas

Acciones por realizar	Diligencias básicas	
Revisión exhaustiva del expediente (CI o AP)	<p>Identificación de los expedientes que se hayan acumulado (CI, AP o Acta Circunstancias)</p> <p>Identificación de las autoridades en la integración del expediente (AMP, Policías, Peritas(os), localizarlos y de ser posible recabar su testimonio</p> <p>Identificación de los principales actores en los sucesos bajo investigación</p> <p>Verificación de los errores y omisiones en la integración del expediente</p> <p>Identificación y revisión de los indicios recolectados en la investigación, así como en las causas penales existentes</p> <p>Localización de testigos que no declararon de manera formal en el momento del hecho</p> <p>Identificación de los expedientes que se hayan iniciado en otros fueros o en otras materias por los mismos hechos (fuero Común, Militar u órganos administrativos)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Detención arbitraria • Abuso de autoridad • Privación ilegal de la libertad • Tortura • Tratos crueles inhumanos y degradantes • Secuestro • Homicidio • amenazas
Identificación de hipótesis del caso, líneas de investigación y de los sucesos descritos en el expediente	<p>Identificar personas, objetos y lugares del hecho investigado</p> <p>Identificar la información contenida en el expediente para efectos de obtener resultados ciertos y pertinentes</p> <p>Identificación de indicios que se hayan perdido, ocultado o destruidos</p>	
Localizar acciones de búsqueda que obren en los expedientes	<p>Identificar si es que se localizaron restos humanos o cadáveres durante la investigación</p> <p>Identificar los lugares de localización de restos humanos o de cadáveres</p>	
Clasificación de la información recabada en el expediente	<p>Clasificar la información conforme al indicio obtenido o recabado: documentos (públicos o privados), inspecciones (personas, objetos, lugares), testimonios, periciales.</p> <p>Organización de la información obtenida en bases de datos para su sistematización, clasificación y procesamiento</p>	
Estudio del contexto histórico en el que se desarrollaron los hechos	<p>Elaboración de línea de tiempo de acuerdo con la manera en que se desarrollaron los hechos, señalando el tiempo, personas y lugares, estableciendo una relación espacio-temporal.</p> <p>Análisis de contexto del lugar de los hechos durante el tiempo en que se desarrollaron</p> <p>Estudio del contexto histórico, social, político, económico, en que se desarrollaron los hechos.</p> <p>Estudio de contexto donde la víctima desarrollaba sus actividades</p> <p>Antecedentes de amenazas en contra de la víctima</p>	

Desapariciones por motivos políticos de décadas pasadas pasadas

Acciones por realizar	Diligencias básicas
Estudio de la normatividad vigente al momento de la desaparición	<p>Analizar las omisiones y abusos de autoridad cometidos durante el momento de la desaparición</p> <p>Analizar las violaciones de derechos de las víctimas en el momento de la desaparición</p> <p>Estudio y análisis de las conductas por las que se integró el expediente</p>
Recabar entrevistas a familiares y testigos para ampliar información	<p>Analizar las declaraciones recabadas en el expediente, para determinar si es necesaria la ampliación de declaraciones</p> <p>Recabar los cuestionarios Ante Mortem, tomando las debidas consideraciones sobre esta información.</p>
Consulta de archivos históricos relevantes	<p>Consulta de archivos históricos de las autoridades que se encargaron de la investigación</p> <p>Consulta de archivos públicos internacionales que pudieran contener información relevante</p> <p>Solicitud de revisión de archivos históricos con relación al caso concreto bajo investigación</p> <p>Solicitud de archivos y registros de las personas internas en las colonias penales</p> <p>Búsqueda de registros administrativos de detención de la época</p>
Análisis de fuentes abiertas sobre el hecho investigado	<p>Recopilación y estudio de notas y fuentes periodísticas</p> <p>Estudio y análisis de informes elaborados por instituciones académicas, sociedad civil, Comisiones de Derechos Humanos y organismos internacionales</p>

Anexo III. Análisis dogmático de los delitos de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares

Análisis de los elementos que componen los diferentes tipos previstos en la Ley General como lo es la desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del SNBP.

Delito: Desaparición Forzada de personas	
Artículo 27. Comete el delito de desaparición forzada de personas, el servidor público o el particular que, con la autorización, el apoyo o la aquiescencia de un servidor público, prive de la libertad en cualquier forma a una persona, seguida de la abstención o negativa a reconocer dicha privación de la libertad o a proporcionar la información sobre la misma o su suerte, destino o paradero.	
Clasificación del tipo penal	
Por la conducta: De acción: (privar de la libertad, negativa a reconocer dicha privación de la libertad) De omisión: (abstención)	Por su duración: Permanente o continuo: después de que el sujeto realiza la conducta, esta se prolonga en el tiempo a voluntad del activo.
Elementos del tipo penal	
Objetivos:	
Conducta:	Privar de la libertad a una persona, seguida de abstención o negativa de reconocer dicha privación de la libertad o negar proporcionar la información
Resultado	Material. Mantener privada de la libertad a una persona y negar reconocer la privación o negar proporcionar la información.
Sujeto activo:	El servidor público o particular que actúa con autorización, apoyo o aquiescencia
Sujeto pasivo	Cualquier persona
Medios	cualquier forma
Circunstancias	No se requieren
Bien jurídico	La libertad deambulatoria y la debida procuración de justicia, ante la omisión de reconocer la Privación ilegal de Libertad o entregar la información; así como el derecho a conocer la verdad respecto del paradero de los desaparecidos
Objeto material	La vida e integridad de la víctima
Normativos:	
De valoración jurídica	Servidor Público, privación de la libertad, autorización, abstención, negativa
De valoración cultural	Aquiescencia, suerte, destino
Descriptivos: Apoyo, paradero	Subjetivos: Dolo Elemento subjetivo específico: Ninguno El tipo de mérito es complejo de dos actos sucesivos, porque para su conformación es menester que se realice inicialmente un positivo, como lo es la privación ilegal de la libertad y posterior a ello otro negativo, ya sea mediante abstención o negación
Conjugación de supuestos hipotéticos	
El servidor público que prive de la libertad en cualquier forma a una persona, seguida de la abstención a reconocer dicha privación de la libertad.	

El servidor público que prive de la libertad en cualquier forma a una persona, seguida de la abstención a proporcionar la información sobre la misma.

El servidor público que prive de la libertad en cualquier forma a una persona, seguida de la abstención a proporcionar la información sobre su suerte.

El servidor público que prive de la libertad en cualquier forma a una persona, seguida de la abstención a proporcionar la información sobre su destino.

El servidor público que prive de la libertad en cualquier forma a una persona, seguida de la abstención a proporcionar la información sobre su paradero.

El servidor público que prive de la libertad en cualquier forma a una persona, seguida de la **negativa** a reconocer dicha privación de la libertad.

El servidor público que prive de la libertad en cualquier forma a una persona, seguida de la **negativa** a proporcionar la información **sobre la misma**.

El servidor público que prive de la libertad en cualquier forma a una persona, seguida de la **negativa** a proporcionar la información sobre **su suerte**.

El servidor público que prive de la libertad en cualquier forma a una persona, seguida de la **negativa** a proporcionar la información sobre **su destino**.

El servidor público que prive de la libertad en cualquier forma a una persona, seguida de la **negativa** a proporcionar la información sobre **su paradero**.

El particular que, con la **autorización** de un servidor público, **prive** de la libertad en cualquier forma a una persona, seguida de la **abstención** a reconocer dicha privación de la libertad.

El particular que, con la autorización de un servidor público, **prive** de la libertad en cualquier forma a una persona, seguida de la **abstención** a proporcionar información sobre la misma.

El particular que, con la autorización de un servidor público, **prive** de la libertad en cualquier forma a una persona, seguida de la **abstención** a proporcionar información sobre su suerte.

El particular que, con la autorización de un servidor público, **prive** de la libertad en cualquier forma a una persona, seguida de la **abstención** a proporcionar información sobre su destino.

El particular que, con la autorización de un servidor público, **prive** de la libertad en cualquier forma a una persona, seguida de la **abstención** a proporcionar información sobre su paradero.

El particular que, con la autorización de un servidor público, **prive** de la libertad en cualquier forma a una persona, seguida de la **negativa** a reconocer dicha privación de la libertad.

El particular que, con la autorización de un servidor público, **prive** de la libertad en cualquier forma a una persona, seguida de la **negativa** a proporcionar información sobre la misma.

El particular que, con la autorización de un servidor público, **prive** de la libertad en cualquier forma a una persona, seguida de la **negativa** a proporcionar información sobre su suerte.

El particular que, con la autorización de un servidor público, **prive** de la libertad en cualquier forma a una persona, seguida de la **negativa** a proporcionar información sobre su destino.

El particular que, con la autorización de un servidor público, **prive** de la libertad en cualquier forma a una persona, seguida de la **negativa** a proporcionar información sobre su paradero.

El particular que, con **el apoyo** de un servidor público, **prive** de la libertad en cualquier forma a una persona, seguida de la **abstención** a reconocer dicha privación de la libertad.

El particular que, con el apoyo de un servidor público, **prive** de la libertad en cualquier forma a una persona, seguida de la **abstención** a proporcionar información sobre la misma.

El particular que, con el apoyo de un servidor público, **prive** de la libertad en cualquier forma a una persona, seguida de la **abstención** a proporcionar información sobre su suerte.

El particular que, con el apoyo de un servidor público, **prive** de la libertad en cualquier forma a una persona, seguida de la **abstención** a proporcionar información sobre su destino.

El particular que, con el apoyo de un servidor público, **prive** de la libertad en cualquier forma a una persona, seguida de la **abstención** a proporcionar información sobre su paradero.

El particular que, con el apoyo de un servidor público, **prive** de la libertad en cualquier forma a una persona, seguida de la **negativa** a reconocer dicha privación de la libertad.

El particular que, con el apoyo de un servidor público, **prive** de la libertad en cualquier forma a una persona, seguida de la **negativa** a proporcionar información sobre la misma.

El particular que, con el apoyo de un servidor público, **prive** de la libertad en cualquier forma a una persona, seguida de la **negativa** a proporcionar información sobre su suerte.

El particular que, con el apoyo de un servidor público, **prive** de la libertad en cualquier forma a una persona, seguida de la **negativa** a proporcionar información sobre su destino.

El particular que, con el apoyo de un servidor público, **prive** de la libertad en cualquier forma a una persona, seguida de la **negativa** a proporcionar información sobre su paradero.

El particular que, con **la aquiescencia** de un servidor público, **prive** de la libertad en cualquier forma a una persona, seguida de la **abstención** a reconocer dicha privación de la libertad.

El particular que, con la aquiescencia de un servidor público, **prive** de la libertad en cualquier forma a una persona, seguida de la **abstención** a proporcionar información sobre la misma.

El particular que, con la aquiescencia de un servidor público, **prive** de la libertad en cualquier forma a una persona, seguida de la **abstención** a proporcionar información sobre su suerte.

El particular que, con la aquiescencia de un servidor público, **prive** de la libertad en cualquier forma a una persona, seguida de la **abstención** a proporcionar información sobre su destino.

El particular que, con la aquiescencia de un servidor público, **prive** de la libertad en cualquier forma a una persona, seguida de la **abstención** a proporcionar información sobre su paradero.

El particular que, con la aquiescencia de un servidor público, **prive** de la libertad en cualquier forma a una persona, seguida de la **negativa** a reconocer dicha privación de la libertad.

El particular que, con la aquiescencia de un servidor público, **prive** de la libertad en cualquier forma a una persona, seguida de la **negativa** a proporcionar información sobre la misma.

El particular que, con la aquiescencia de un servidor público, **prive** de la libertad en cualquier forma a una persona, seguida de la **negativa** a proporcionar información sobre su suerte.

El particular que, con la aquiescencia de un servidor público, **prive** de la libertad en cualquier forma a una persona, seguida de la **negativa** a proporcionar información sobre su destino.

El particular que, con la aquiescencia de un servidor público, **prive** de la libertad en cualquier forma a una persona, seguida de la **negativa** a proporcionar información sobre su paradero.

Delito: Ocultamiento o negativa a proporcionar información
Artículo 28. Al servidor público, o el particular que, con la autorización, el apoyo o la aquiescencia de un servidor público, oculte o se niegue a proporcionar información sobre la privación de la libertad de una persona o sobre el paradero de una persona detenida, u oculte a una persona detenida en cualquier forma se le impondrá la pena prevista en el artículo 30.

Elementos del tipo penal	
Objetivos:	
Conducta:	-oculte (acción) o se niegue (omisión simple) a proporcionar información sobre: <ul style="list-style-type: none"> • La privación de la libertad de una persona o; • Sobre el paradero de una persona detenida - oculte a una persona detenida en cualquier forma
Resultado	Formal. Ocultar o negar información sobre la privación de la libertad de una persona o sobre el paradero de una persona detenida
Sujeto activo:	El servidor público o el particular que actúa con autorización, apoyo o aquiescencia de un servidor público
Sujeto pasivo	Cualquier persona
Medios	Ninguno
Circunstancias	No se requieren
Bien jurídico	La libertad deambulatoria, integridad física y moral; debida procuración de justicia; así como el derecho a conocer la verdad respecto del paradero de los desaparecidos.
Objeto material	La víctima de desaparición forzada de personas
Normativos:	
De valoración jurídica	Servidor Público, privación de la libertad, autorización
De valoración cultural	Apoyo, aquiescencia, paradero
Subjetivos: Dolo	Subjetivo específico: Ninguno

Conjugación de supuestos hipotéticos
Al servidor público que oculte información sobre la privación de la libertad de una persona.
Al servidor público que oculte información sobre el paradero de una persona detenida.
Al servidor público que se niegue a proporcionar información sobre la privación de la libertad de una persona.
Al servidor público que se niegue a proporcionar sobre el paradero de una persona detenida.
Al servidor público que oculte a una persona detenida en cualquier forma.
El particular que, con autorización de un servidor público, oculte información sobre la privación de la libertad de una persona.
El particular que, con autorización de un servidor público, oculte información sobre el paradero de una persona detenida.
El particular que, con autorización de un servidor público, se niegue a proporcionar información sobre la privación de la libertad de una persona.
El particular que, con autorización de un servidor público, se niegue a proporcionar información sobre el paradero de una persona detenida.
El particular que, con autorización de un servidor público, oculte a una persona detenida en cualquier forma.

El **particular** que, con **apoyo** de un servidor público, oculte información sobre la privación de la libertad de una persona.

El particular que, con apoyo de un servidor público, oculte información sobre el paradero de una persona detenida.

El particular que, con apoyo de un servidor público, se niegue a proporcionar información sobre la privación de la libertad de una persona.

El particular que, con apoyo de un servidor público, se niegue a proporcionar información sobre el paradero de una persona detenida.

El particular que, con apoyo de un servidor público, oculte a una persona detenida en cualquier forma.

El **particular** que, con la **aquiescencia** de un servidor público, oculte información sobre la privación de la libertad de una persona.

El particular que, con la aquiescencia de un servidor público, oculte información sobre el paradero de una persona detenida.

El particular que, con la aquiescencia de un servidor público, se niegue a proporcionar información sobre la privación de la libertad de una persona.

El particular que, con la aquiescencia de un servidor público, se niegue a proporcionar información sobre el paradero de una persona detenida.

El particular que, con la aquiescencia de un servidor público, oculte a una persona detenida en cualquier forma.

Delito: Omisión de entrega de recién nacido de una víctima de desaparición forzada de personas

Artículo 31. Se impondrá pena de veinte a treinta años de prisión y de quinientos a ochocientos días multa a quien omita entregar a la autoridad o familiares al nacido de una víctima del delito de desaparición forzada de personas durante el periodo de ocultamiento, a sabiendas de tal circunstancia.

Elementos del tipo penal

Objetivos:

Conducta:	omita entregar a la autoridad o a familiares (comisión por omisión u omisión impropia) al nacido de una víctima del delito de desaparición forzada de personas, durante el periodo de ocultamiento, a sabiendas de tal circunstancia
Resultado	Material. omite entregar (no se entregue) al nacido de una víctima del delito de desaparición forzada de personas
Sujeto activo:	Cualquier persona
Sujeto pasivo	Nacido de una víctima del delito de desaparición forzada de personas durante el periodo de ocultamiento.
Medios	Ninguno
Circunstancias	<i>Tiempo:</i> durante el periodo de ocultamiento de la víctima
Bien jurídico	La vida y la integridad física del nacido de la víctima del delito de desaparición forzada de personas; y el derecho a ser integrado a su ámbito familiar
Objeto material	El nacido de la víctima del delito de desaparición forzada de personas

Normativos:

De valoración jurídica: Víctima del delito de desaparición forzada de personas, nacido, víctima

De valoración cultural: No lo requiere el tipo

Subjetivos: Dolo

Subjetivo específico: A sabiendas de que la víctima nació durante el periodo de ocultamiento de la desaparición forzada de personas.

Conjugación de supuestos hipotéticos

A quien omita entregar a **la autoridad** al nacido de una víctima del delito de desaparición forzada de personas durante el periodo de ocultamiento, a sabiendas de tal circunstancia.

A quien omita entregar a **los familiares** al nacido de una víctima del delito de desaparición forzada de personas durante el periodo de ocultamiento, a sabiendas de tal circunstancia.

Delito: Retenga o mantenga oculto a un recién nacido de una víctima de desaparición forzada de personas

Artículo 31. [segundo párrafo] Asimismo, se impondrá pena de veinticinco a treinta y cinco años de prisión a quien, sin haber participado directamente en la comisión del delito de desaparición forzada de personas, **retenga o mantenga oculto** a la niña o niño que nazca durante el periodo de desaparición de la madre, a sabiendas de tal circunstancia.

Elementos del tipo penal

Objetivos:

Conducta:	Retenga o mantenga oculto a la niña o niño que nazca durante el periodo de desaparición de la madre (acción)
Resultado	Material. Retenga o mantenga oculto a la niña o niño que nazca durante el periodo de desaparición de la madre
Sujeto activo	Calificado: Cualquier persona que no haya participado directamente en la comisión de desaparición forzada de personas.
Sujeto pasivo	Calificado: Niña o niño que nazca durante el periodo de desaparición de la madre
Medios	Ninguno
Circunstancias	<i>Tiempo:</i> durante el periodo de ocultamiento de la madre
Bien jurídico	La vida y la integridad física de la niña o niño que nazca durante el periodo de desaparición de la madre; así como el derecho a que sea integrado a su ámbito familiar
Objeto material	La niña o niño que nazca durante el periodo de desaparición de la madre

Normativos:

De valoración jurídica: Participado, desaparición forzada de niña o niño, nazca

De valoración cultural: Retenga o mantenga oculto

Subjetivos: Dolo

Subjetivo específico: A sabiendas de la desaparición forzada de personas

Conjugación de supuestos hipotéticos

A **quien sin haber participado directamente en la comisión del delito** de desaparición forzada de personas **retenga** al niño o la niña que nazca durante el periodo de desaparición de la madre, a sabiendas de tal circunstancia.

A quien sin haber participado directamente en la comisión del delito de desaparición forzada de personas **mantenga oculto** al niño o a la niña que nazca durante el periodo de desaparición de la madre, a sabiendas de tal circunstancia.

Delito: Desaparición cometida por particulares

Artículo 34. Incurre en el delito de desaparición cometida por particulares quien prive de la libertad a una persona con la finalidad de ocultar a la víctima o su suerte o paradero. A quien cometa este delito se le impondrá pena de veinticinco a cincuenta años de prisión y de cuatro mil a ocho mil días multa.

Elementos del tipo penal

Objetivos:

Conducta:	Prive de la libertad a una persona con la finalidad de ocultar a la víctima o su suerte o paradero (acción)
Resultado	Material. Mantener privado de la libertad a una persona con la finalidad de ocultar a la víctima o su suerte o paradero
Sujeto activo:	Cualquier persona
Sujeto pasivo	Cualquier persona
Medios	Ninguno
Circunstancias	Ninguna
Bien jurídico	La libertad deambulatoria, integridad física y moral; debida procuración de justicia; así como el derecho a conocer la verdad respecto del paradero de los desaparecidos
Objeto material	La víctima de desaparición forzada cometida por particulares

Normativos:

De valoración jurídica: Víctima, desaparición cometida por particulares, libertad, ocultar

De valoración cultural: Suerte o paradero

Subjetivos: Dolo

Subjetivo específico: Ninguno

Conjugación de supuestos hipotéticos

Quien **prive de la libertad** a una persona con la finalidad de ocultar a la víctima.

Quien prive de la libertad a una persona con la finalidad de ocultar la suerte de la víctima.

Quien prive de la libertad a una persona con la finalidad de ocultar el paradero de la víctima.

Delito: Omisión de entrega de recién nacido de una víctima de desaparición cometida por particulares

Artículo 35. Se impondrá pena de diez a veinte años de prisión y de quinientos a ochocientos días multa a quien omita entregar a la autoridad o familiares al nacido de una víctima del delito de desaparición cometida por particulares durante el periodo de ocultamiento, a sabiendas de tal circunstancia.

Elementos del tipo penal

Objetivos:

Conducta:	Omita entregar a la autoridad o a familiares (comisión por omisión u omisión impropia) al nacido de una víctima del delito de desaparición forzada de personas, durante el periodo de ocultamiento, a sabiendas de tal circunstancia
Resultado	Material. Omite entregar (no se entregue) al nacido de una víctima del delito de desaparición forzada de personas
Sujeto activo:	Cualquier persona
Sujeto pasivo	Nacido de una víctima del delito de desaparición cometida por particulares durante el periodo de ocultamiento
Medios	Ninguno
Circunstancias	<i>Tiempo:</i> durante el periodo de ocultamiento de la víctima
Bien jurídico	La vida y la integridad física del nacido de la víctima del delito de desaparición cometida por particulares; así como el derecho a que sea integrado a su ámbito familiar
Objeto material	El nacido de la víctima del delito de desaparición cometida por particulares.

Normativos:

De valoración jurídica: Familiares, autoridad, nacido, víctima, ocultamiento y desaparición cometida por particulares

De valoración cultural: No lo requiere el tipo

Subjetivos: Dolo

Subjetivo específico: A sabiendas de que la víctima nació durante el periodo de ocultamiento de la desaparición forzada de personas

Conjugación de supuestos hipotéticos

A quien omita entregar a **la autoridad** al nacido de una víctima del delito de desaparición cometida por particulares durante el periodo de ocultamiento, a sabiendas de tal circunstancia.

A quien omita entregar a **los familiares** al nacido de una víctima del delito de desaparición cometida por particulares durante el periodo de ocultamiento, a sabiendas de tal circunstancia.

Delito: Retenga o mantenga oculto a un recién nacido de una víctima de desaparición forzada de personas

Artículo 35. [segundo párrafo] Asimismo, se impondrá pena de diez a veinte años de prisión a quien, sin haber participado directamente en la comisión del delito de desaparición cometida por particulares, **retenga o mantenga oculto** a la niña o niño que nazca durante el periodo de desaparición de la madre, a sabiendas de tal circunstancia.

Elementos del tipo penal

Objetivos:

Conducta:	Retenga o mantenga oculto a la niña o niño que nazca durante el periodo de desaparición de la madre (acción), a sabiendas de tal circunstancia
Resultado	Material. Retenga o mantenga oculto a la niña o niño que nazca durante el periodo de desaparición de la madre (resultado material)
Sujeto activo:	Calificado: Cualquier persona que no haya participado directamente en la comisión de desaparición forzada de personas
Sujeto pasivo	Calificado: Niña o niño que nazca durante el periodo de desaparición de la madre
Medios	Ninguno
Circunstancias	<i>Tiempo:</i> durante el periodo de ocultamiento de la madre
Bien jurídico	La vida y la integridad física de la niña o niño que nazca durante el periodo de desaparición de la madre, así como el derecho a que sea integrado a su ámbito familiar
Objeto material	La niña o niño que nazca durante el periodo de desaparición de la madre

Normativos:

De valoración jurídica: Participado, desaparición forzada, niña o niño, nazca

De valoración cultural: Retenga o mantenga oculto

Subjetivos: Dolo

Subjetivo específico: A sabiendas de esa circunstancia

Conjugación de supuestos hipotéticos

A **quien sin haber participado directamente en la comisión del delito** de desaparición cometida por particulares **retenga** al niño o la niña que nazca durante el periodo de desaparición de la madre, a sabiendas de tal circunstancia.

A quien sin haber participado directamente en la comisión del delito de desaparición cometida por particulares **mantenga oculto** al niño o a la niña que nazca durante el periodo de desaparición de la madre, a sabiendas de tal circunstancia.

Delito: Ocultamiento o destrucción de cadáver
Artículo 37. A quien oculte, deseche, incinere, sepulte, inhume, desintegre o destruya, total o parcialmente, restos de un ser humano o el cadáver de una persona, con el fin de ocultar la comisión de un delito, se le impondrá pena de quince a veinte años de prisión y de mil a mil quinientos días multa.

Elementos del tipo penal	
Objetivos:	
Conducta:	Ocultar, desechar, incinerar, sepultar, inhumar, desintegrar o destruir, total o parcialmente, restos de un ser humano o el cadáver de una persona, con el fin de ocultar la comisión de un delito (acción)
Resultado	Material. Ocultamiento, desechamiento, incineración, sepultura, inhumación, desintegración o destrucción, total o parcial de restos de un ser humano o cadáver de una persona, con el fin de ocultar la comisión de un delito
Sujeto activo:	Cualquier persona
Sujeto pasivo	Cualquier persona (víctima de cualquier delito)
Medios	Ninguno
Circunstancias	No se requieren
Bien jurídico	Respeto a cadáveres y restos humanos, violación a las leyes de inhumación de restos humanos, debida procuración de justicia; así como el derecho a conocer la verdad respecto del paradero del desaparecido
Objeto material	Restos de un ser humano o cadáver de una persona
Normativos:	
De valoración jurídica: Deseche, ocultar, desintegre o destruya, incinere, sepulte, inhume, restos, cadáver	
De valoración cultural: Ninguno	
Subjetivos: Dolo	Subjetivo específico: Ocultar la comisión de un delito Es un tipo alternativamente formado en relación con la conducta

Conjugación de supuestos hipotéticos
A quien oculte totalmente el cadáver o los restos de un ser humano con el fin de ocultar la comisión de un delito.
A quien oculte parcialmente el cadáver o los restos de un ser humano con el fin de ocultar la comisión de un delito.
A quien deseche totalmente el cadáver o los restos de un ser humano con el fin de ocultar la comisión de un delito.
A quien deseche parcialmente el cadáver o los restos de un ser humano con el fin de ocultar la comisión de un delito
A quien incinere totalmente el cadáver o los restos de un ser humano con el fin de ocultar la comisión de un delito.
A quien incinere parcialmente el cadáver o los restos de un ser humano con el fin de ocultar la comisión de un delito.
A quien sepulte totalmente el cadáver o los restos de un ser humano con el fin de ocultar la comisión de un delito.
A quien sepulte parcialmente el cadáver o los restos de un ser humano con el fin de ocultar la comisión de un delito.
A quien inhume totalmente el cadáver o los restos de un ser humano con el fin de ocultar la comisión de un delito.
A quien inhume parcialmente el cadáver o los restos de un ser humano con el fin de ocultar la comisión de un delito.
A quien desintegre totalmente el cadáver o los restos de un ser humano con el fin de ocultar la comisión de un delito.
A quien desintegre parcialmente el cadáver o los restos de un ser humano con el fin de ocultar la comisión de un delito
A quien destruya totalmente el cadáver o los restos de un ser humano con el fin de ocultar la comisión de un delito.
A quien destruya parcialmente el cadáver o los restos de un ser humano con el fin de ocultar la comisión de un delito
Delito: Obstrucción de acceso a cualquier mueble o inmueble de instituciones públicas
Artículo 38. Se impondrá pena de dos a cinco años de prisión, de cien a trescientos días multa y destitución e inhabilitación hasta por el mismo lapso de la pena de privación de la libertad impuesta para desempeñar cualquier cargo, empleo o comisión público, al servidor público que impida injustificadamente el acceso previamente autorizado a las autoridades competentes

encargadas de la búsqueda de Personas Desaparecidas o de la investigación de los delitos establecidos en los artículos 27, 28, 31, 34 y 35 de la Ley a cualquier mueble o inmueble de las instituciones públicas.

Elementos del tipo penal

Objetivos:

Conducta:	Impedir injustificadamente el acceso previamente autorizado a las autoridades competentes encargadas de la búsqueda de Personas Desaparecidas o de la investigación de los delitos de desaparición forzada de personas, omisión de entregar al nacido de una víctima de desaparición forzada durante el periodo de ocultamiento, desaparición cometida por particulares, omisión de entregar al nacido de una víctima de desaparición cometida por particulares, a cualquier mueble o inmueble de las instituciones públicas (acción o comisión por omisión)
Resultado	Formal. Se impide injustificadamente el acceso previamente autorizado las autoridades competentes encargadas de la búsqueda de Personas Desaparecidas, de la investigación de los delitos de desaparición forzada de personas, a cualquier mueble o inmueble de las instituciones públicas
Sujeto activo:	Servidor público
Sujeto pasivo	La sociedad
Medios	Ninguno
Circunstancias	<i>Modo:</i> Sin que exista el ordenamiento jurídico que la justifique
Bien jurídico	Debida procuración de justicia
Objeto material	La sociedad

Normativos:

De valoración jurídica: Cargo, empleo público, comisión pública, servidor público, autoridad competente, mueble o inmueble

De valoración cultural: Ninguno

Subjetivos: Dolo

Subjetivo específico: Ninguno

Conjugación de supuestos hipotéticos

Al **servidor público** que impida injustificadamente el acceso previamente autorizado a las autoridades competentes encargadas de la búsqueda de Personas Desaparecidas a cualquier **mueble** de las instituciones públicas.

Al servidor público que impida injustificadamente el acceso previamente autorizado a las autoridades competentes encargadas de la búsqueda de Personas Desaparecidas a cualquier **inmueble** de las instituciones públicas.

Al **servidor público** que impida injustificadamente el acceso previamente autorizado a las autoridades competentes encargadas de la investigación del delito en el supuesto previsto en el **artículo 27** de la Ley General en la Materia a cualquier **mueble** de las instituciones públicas.

Al servidor público que impida injustificadamente el acceso previamente autorizado a las autoridades competentes encargadas de la investigación del delito en el supuesto previsto en el artículo 27 de la Ley General en la Materia a cualquier **inmueble** de las instituciones públicas

Al **servidor público** que impida injustificadamente el acceso previamente autorizado a las autoridades competentes encargadas de la investigación del delito en el supuesto previsto en el **artículo 28** de la Ley General en la Materia a cualquier **mueble** de las instituciones públicas.

Al servidor público que impida injustificadamente el acceso previamente autorizado a las autoridades competentes encargadas de la investigación del delito en el supuesto previsto en el artículo 28 de la Ley General en la Materia a cualquier **inmueble** de las instituciones públicas.

Al **servidor público** que impida injustificadamente el acceso previamente autorizado a las autoridades competentes encargadas de la investigación del delito en el supuesto previsto en el **artículo 31** de la Ley General en la Materia a cualquier **mueble** de las instituciones públicas.

Al servidor público que impida injustificadamente el acceso previamente autorizado a las autoridades competentes encargadas de la investigación del delito en el supuesto previsto en el artículo 31 de la Ley General en la Materia a cualquier **inmueble** de las instituciones públicas.

Al **servidor público** que impida injustificadamente el acceso previamente autorizado a las autoridades competentes encargadas de la investigación del delito en el supuesto previsto en el **artículo 34** de la Ley General en Materia a cualquier **mueble** de las instituciones públicas.

Al servidor público que impida injustificadamente el acceso previamente autorizado a las autoridades competentes encargadas de la investigación del delito en el supuesto previsto en el artículo 34 de la Ley General en la Materia a cualquier **inmueble** de las instituciones públicas.

Al **servidor público** que impida injustificadamente el acceso previamente autorizado a las autoridades competentes encargadas de la investigación del delito en el supuesto previsto en el **artículo 35** de la Ley General en la Materia a cualquier **mueble** de las instituciones públicas.

Al servidor público que impida injustificadamente el acceso previamente autorizado a las autoridades competentes encargadas de la investigación del delito en el supuesto previsto en el artículo 35 de la Ley General en la Materia a cualquier **inmueble** de las instituciones públicas.

Delito: Obstrucción de acciones de búsqueda

Artículo 39. Se impondrá pena de dos a siete años de prisión, de treinta a trescientos días multa y destitución e inhabilitación hasta por el mismo lapso de la pena de privación de la libertad impuesta para desempeñar cualquier cargo, empleo o comisión público, al servidor público que obstaculice dolosamente las acciones de búsqueda e investigación a que se refiere el artículo anterior.

Elementos del tipo penal

Objetivos:

Conducta:	Obstaculizar dolosamente las acciones de búsqueda a los que se refieren los artículos 27, 28, 31, 34 y 35 de la Ley en la materia (acción o comisión por omisión)
Resultado:	Material. Obstaculizar acciones de búsqueda de persona desaparecidas e investigación (resultado formal o material)
Sujeto activo:	Servidor público
Sujeto pasivo	La sociedad
Medios	Ninguno
Circunstancias	Ninguna
Bien jurídico	Debida procuración de justicia.
Objeto material	Las acciones de búsqueda e investigación de delitos establecidos en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas cometida por particulares y del SNBP

Normativos:

De valoración jurídica: Cargo, empleo público, comisión pública, servidor público, obstaculizar, dolosamente, investigación

De valoración cultural: Ninguno

Subjetivos: Dolo

La referencia en el tipo “dolosamente” constituye una circunstancia de modo.

Subjetivo específico: Ninguno

Conjugación de supuestos hipotéticos

Al **servidor público** que obstaculice dolosamente las acciones de búsqueda de personas desaparecidas.

Al servidor público que obstaculice dolosamente las acciones de investigación de los delitos en el supuesto previsto en el **artículo 27** de la Ley General en la Materia.

Al servidor público que obstaculice dolosamente las acciones de investigación de los delitos en el supuesto previsto en el **artículo 28** de la Ley General en la Materia.

Al servidor público que obstaculice dolosamente las acciones de investigación de los delitos en el supuesto previsto en el **artículo 31** de la Ley General en la Materia.

Al servidor público que obstaculice dolosamente las acciones de investigación del delito en el supuesto previsto en el **artículo 34** de la Ley General en la Materia.

Al servidor público que obstaculice dolosamente las acciones de investigación del delito en el supuesto previsto en el **artículo 35** de la Ley General en la Materia.

Delito: Negativa de proporcionar información sobre los delitos de los artículos 31 y 35

Artículo 40. Se impondrá pena de tres a siete años de prisión a quien, conociendo el paradero o destino final de una niña o niño a los que se refieren los delitos establecidos en los artículos 31 y 35 de la Ley, y a sabiendas de la misma, no proporcione información para su localización.

Elementos del tipo penal

Objetivos:

Conducta:	Conocer el paradero o destino final de una niña o niño a sabiendas de la desaparición forzada de personas o desaparición cometida por particulares y no proporcionar información para su localización (omisión simple)
Resultado	Formal. No proporcionar información para la localización de la niña o niño a sabiendas de su paradero o destino final
Sujeto activo:	Cualquier persona
Sujeto pasivo	La niña o niño nacidos durante el periodo de desaparición de la madre
Medios	Ninguno
Circunstancias	Ninguno
Bien jurídico	La vida y la integridad física de la niña o niño nacidos durante el periodo de desaparición de la madre; así como el derecho a que sea integrado a su ámbito familiar
Objeto material	La niña o niño nacidos durante el periodo de desaparición de la madre

Normativos:

De valoración jurídica: Paradero, destino final, niña, niño, conociendo, a sabiendas

De valoración cultural: Ninguno

Subjetivos: Dolo

Subjetivo específico: A sabiendas

Conjugación de supuestos hipotéticos

A quien, conociendo el **paradero** de un niño o una niña a las que se refiere el delito en el supuesto previsto en el **artículo 31** de la Ley de la Materia y a sabiendas de la misma, no proporcione información para su localización.

A quien, conociendo el paradero de un niño o una niña a las que se refiere el delito en el supuesto previsto en el **artículo 35** de la Ley de la Materia y a sabiendas de la misma, no proporcione información para su localización.

A quien, conociendo el **destino final** de un niño o una niña a las que se refiere el delito del supuesto previsto en el **artículo 31** de la Ley de la Materia y a sabiendas de la misma, no proporcione información para su localización.

A quien, conociendo el destino final de un niño o una niña a las que se refiere el delito del supuesto previsto en el **artículo 35** de la Ley de la Materia y a sabiendas de la misma, no proporcione información para su localización.

Delito: Falsificación o destrucción de documentos de las víctimas de los artículos 31 y 35
Artículo 41. Se impondrá pena de seis a doce años de prisión y de seiscientos a mil días multa a quien falsifique, oculte o destruya documentos que prueben la verdadera identidad de una niña o niño a los que se refieren los delitos establecidos en los artículos 31 y 35 de la Ley durante el periodo de ocultamiento, con conocimiento de dicha circunstancia.

Elementos del tipo penal	
Objetivos:	
Conducta:	Falsificar (acción) ocultar (omisión o comisión por omisión) o destruir (acción) documentos que prueben la verdadera identidad de una niña o niño, nacido durante el periodo de ocultamiento de la madre, con conocimiento de la desaparición forzada de personas o de la desaparición cometida por particulares
Resultado:	Material y/o Formal. Falsificar, ocultamiento o destrucción de documentos que prueben la verdadera identidad de una niña o niño, nacido durante el periodo de desaparición de la madre (resultado material)
Sujeto activo:	Cualquier persona
Sujeto pasivo	La niña o niño nacidos durante el periodo de desaparición de la madre
Medios	Ninguno
Circunstancias	<i>Tiempo:</i> durante el periodo de ocultamiento
Bien jurídico	La vida, integridad física y el desarrollo de la personalidad de la niña o niño nacidos durante el periodo de desaparición de la madre; así como el derecho a que sea integrado a su ámbito familiar.
Objeto material	La niña o niño nacidos durante el periodo de desaparición de la madre
Normativos:	
De valoración jurídica: Falsifique, oculte, destruya, documentos, identidad, niño, niña, ocultamiento	
De valoración cultural: Ninguno	
Subjetivos: Dolo	Subjetivo específico: Con conocimiento de dicha circunstancia
	Tipo de realización alternativa en relación con la conducta

Conjugación de supuestos hipotéticos
A quien falsifique documentos que prueben la verdadera identidad de un niño o una niña a las que se refieren los delitos del supuesto previsto en el artículo 31 de la Ley de la Materia durante el periodo de ocultamiento a sabiendas, con conocimiento de dicha circunstancia.
A quien falsifique documentos que prueben la verdadera identidad de un niño o una niña a las que se refieren los delitos del supuesto previsto en el artículo 35 de la Ley de la Materia durante el periodo de ocultamiento a sabiendas, con conocimiento de dicha circunstancia.
A quien oculte documentos que prueben la verdadera identidad de un niño o una niña a las que se refieren los delitos del supuesto previsto en el artículo 31 de la Ley de la Materia durante el periodo de ocultamiento a sabiendas, con conocimiento de dicha circunstancia.
A quien oculte documentos que prueben la verdadera identidad de un niño o una niña a las que se refieren los delitos del supuesto previsto en el artículo 35 de la Ley de la Materia durante el periodo de ocultamiento a sabiendas, con conocimiento de dicha circunstancia.
A quien destruya documentos que prueben la verdadera identidad de un niño o una niña a las que se refieren los delitos del supuesto previsto en el artículo 31 de la Ley de la Materia durante el periodo de ocultamiento a sabiendas, con conocimiento de dicha circunstancia.

A quien destruya documentos que prueben la verdadera identidad de un niño o una niña a las que se refieren los delitos del supuesto previsto en el **artículo 35** de la Ley de la Materia durante el periodo de ocultamiento a sabiendas, con conocimiento de dicha circunstancia.

Delito: Uso de documentos falsificados de las víctimas de los artículos 31 y 35

Artículo 41. [segundo párrafo] Se aplicarán las mismas penas a quien, dolosamente, utilice los documentos falsificados de una niña o niño a que se refiere el párrafo anterior, con el conocimiento de dicha circunstancia.

Elementos del tipo penal

Objetivos:

Conducta:	Utilizar los documentos falsificados de una niña o niño, nacido durante el periodo de ocultamiento de la madre, con conocimiento de la desaparición forzada de personas o de la desaparición cometida por particulares (acción)
Resultado	Formal. Se utilicen documentos falsificados que oculten la verdadera identidad de una niña o niño, nacido durante el periodo de desaparición de la madre)
Sujeto activo:	Cualquier persona
Sujeto pasivo	La niña o niño nacidos durante el periodo de desaparición de la madre
Medios	Ninguno
Circunstancias	<i>Tiempo:</i> durante el periodo de ocultamiento
Bien jurídico	La veracidad de la documentación de las niñas o niños nacidos en ese periodo
Objeto material	Documento falso

Normativos:

De valoración jurídica: Documentos falsificados, niño, niña

De valoración cultural: Ninguno

Subjetivos: Dolo

Subjetivo específico: Con el conocimiento de dicha circunstancia

Conjugación de supuestos hipotéticos

A quien, dolosamente, **utilice** los documentos falsificados de un niño o una niña a las que se refieren los delitos del supuesto previsto en el **artículo 31** de la Ley de la Materia con el conocimiento de esa circunstancia.

A quien, dolosamente, **utilice** los documentos falsificados de un niño o una niña a las que se refieren los delitos del supuesto previsto en el **artículo 35** de la Ley de la Materia con el conocimiento de esa circunstancia.

Glosario de elementos normativos de los tipos previstos en la Ley General

A	
Apoyo	-Protección, auxilio o favor. Fuente: <i>Diccionario de la Real Academia Española.</i>
Aquiescencia	-Asenso, consentimiento. Fuente: <i>Diccionario de la Real Academia Española.</i>
A sabiendas	1. De un modo cierto, a ciencia segura. 2. loc. adv. Con conocimiento y deliberación. Fuente: <i>Diccionario de la Real Academia Española.</i> El conocimiento específico sobre la falsedad del documento, esto es, el elemento subjetivo específico (...). Fuente: USO DE DOCUMENTO FALSO. PARA ACREDITAR ESTE DELITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 246, FRACCIÓN VII, DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, ES INNECESARIO SATISFACER LAS CONDICIONES OBJETIVAS DE PUNIBILIDAD REQUERIDAS PARA EL ILÍCITO DE FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS EN EL ARTÍCULO 245 DEL MISMO ORDENAMIENTO. Época: Décima Época, registro: 2002931, instancia: primera sala, tipo de tesis: jurisprudencia, fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVII, febrero de 2013, Tomo 1 Materia(s): Penal. Tesis: 1a. /J. 123/2012 (10a.), página: 759.
Autoridad	El concepto jurídico de autoridad indica que alguien está facultado jurídicamente para realizar un acto válido, presupone la posesión de capacidad o potestad para modificar válidamente la situación jurídica de los demás. El orden jurídico otorga a los individuos investidos como órganos del Estado, a los que se les denomina “autoridades”, la facultad de obligar (o permitir) a los demás mediante actos de voluntad. Fuente: <i>Diccionario jurídico mexicano</i> , 10ma. Ed. (Porrúa: México, 1997)
Autorización	Acto de una autoridad por el cual se permite a alguien una actuación en otro caso prohibida. Fuente: <i>Diccionario de la Real Academia Española.</i>

C	
Cadáver	Se entenderá por cadáver el cuerpo humano en el que se haya comprobado la pérdida de la vida. Fuente: <i>Ley General de Salud</i> , artículo 314 fracción II y Reglamento de la Ley General de Salud, artículo 6 fracción V.

D	
Delito	Es el acto u omisión que sancionan las leyes penales.

	Fuente: <i>Código Penal federal</i> , artículo 7.
Desaparición cometida por particulares	<p>Se considera desaparición forzada de personas la privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes.</p> <p><i>Convención Interamericana sobre desaparición forzada de personas</i>, artículo II.</p>
Desaparición forzada de personas	<p>Se considera desaparición forzada de personas la privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes.</p> <p>Fuente: <i>Convención Interamericana sobre desaparición forzada de personas</i>, artículo II.</p>
Desechar	<ol style="list-style-type: none"> 1.-tr. Excluir, reprobar. 2. Menospreciar, desestimar, hacer poco caso y aprecio. 3. Renunciar, no admitir algo. 4. Expeler, arrojar. 5. Deponer, apartar de sí un pesar, temor, sospecha o mal pensamiento. 6. Dejar un vestido u otra cosa de uso para no volverá servirse de ello. 7. Dar el movimiento necesario a una llave, a un cerrojo, etc., para abrir. <p>Fuente: <i>Diccionario de la Real Academia Española</i>.</p>
Desintegrar	<ol style="list-style-type: none"> 1. tr. Separar los diversos elementos que forman un todo 2. Destruir por completo 3. Perder cohesión o fortaleza <p>Fuente: <i>Diccionario de la Real Academia Española</i>.</p>
Destino final	<p>Se entiende por destino final: La conservación permanente, inhumación o desintegración, en condiciones sanitarias permitidas por la Ley y este Reglamento, de órganos, tejidos y sus derivados. Productos y cadáveres de seres humanos, incluyendo los de embriones y fetos.</p> <p>Fuente: <i>Reglamento de la Ley General de Salud en materia de control sanitario de la disposición de órganos, tejidos y cadáveres de seres humanos</i>, artículo 6 fracción VIII.</p> <hr/> <p>Se entiende por (...) destino final: a la conservación permanente, inhumación, incineración, desintegración e inactivación de órganos, tejidos, células y derivados, productos y cadáveres de seres humanos, incluyendo los de embriones y fetos, en condiciones sanitarias permitidas por esta Ley y demás disposiciones aplicables.</p> <p>Fuente: <i>Ley General de salud</i>, artículo 314 fracción V.</p>

Destruir	<ol style="list-style-type: none"> 1. Reducir a pedazos o a cenizas algo material, u ocasionarle un grave daño. 2. Deshacer o inutilizar algo no material. 3. Malgastar o malbaratar la hacienda. 4. Quitar alguien los medios con que se mantenía, o estorbarle que los adquiriera. 5. Dicho de dos cantidades iguales y de signo contrario: anularse mutuamente. <p>Fuente: <i>Diccionario de la Real Academia Española.</i></p>
F	
Falsificar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Falsear o adulterar algo. 2. Fabricar algo falso o falto de ley. <p>Fuente: <i>Diccionario de la Real Academia Española.</i></p> <p>El delito de falsificación de documentos se comete por alguno de los medios siguientes:</p> <p>I.- Poniendo una firma o rúbrica falsa, aunque sea imaginaria, o alterando una verdadera;</p> <p>II.- Aprovechando indebidamente una firma o rúbrica en blanco ajena, extendiendo una obligación, liberación o cualquier otro documento que pueda comprometer los bienes, la honra, la persona o la reputación de otro, o causar un perjuicio a la sociedad, al Estado o a un tercero;</p> <p>III.- Alterando el contexto de un documento verdadero, después de concluido y firmado, si esto cambiare su sentido sobre alguna circunstancia o punto substancial, ya se haga añadiendo, enmendando o borrando, en todo o en parte, una o más palabras o cláusulas, o ya variando la puntuación;</p> <p>IV.- Variando la fecha o cualquiera otra circunstancia relativa al tiempo de la ejecución del acto que se exprese en el documento;</p> <p>V.- Atribuyéndose el que extiende el documento, o atribuyendo a la persona en cuyo nombre lo hace: un nombre o una investidura, calidad o circunstancia que no tenga y que sea necesaria para la validez del acto;</p> <p>VI.- Redactando un documento en términos que cambien la convención celebrada en otra diversa en que varíen la declaración o disposición del otorgante, las obligaciones que se propuso contraer, o los derechos que debió adquirir;</p> <p>VII.- Añadiendo o alterando cláusulas o declaraciones, o asentando como ciertos hechos falsos, o como confesados los que no lo están, si el documento en que se asientan se extendiere para hacerlos constar y como prueba de ellos;</p> <p>VIII.- Expidiendo un testimonio supuesto de documentos que no existen; dándolo de otro existente que carece de los requisitos legales, suponiendo falsamente que los tiene; o de otro que no carece de ellos, pero agregando o suprimiendo en la copia algo que importe una variación substancia, y</p> <p>IX.- Alterando un perito traductor o paleógrafo el contenido de un documento, al traducirlo o descifrarlo.</p>

	<p>X.- Elaborando placas, gafetes, distintivos, documentos o cualquier otra identificación oficial, sin contar con la autorización de la autoridad correspondiente.</p> <p>Fuente: <i>Código Penal Federal</i>, artículo 244.</p>
	<p>El artículo 246, fracción VIII, del Código Penal Federal (...) establece que incurrirá en la pena señalada en el artículo 243 del propio código, el que a sabiendas hiciere uso de un documento falso o de copia, transcripción o testimonio del mismo, sea público o privado. Ahora bien, del precepto primeramente citado se advierte que los elementos del delito son: a) la existencia de una acción de cualquier persona, ya que el tipo penal no requiere una calidad específica del sujeto activo; b) el conocimiento específico sobre la falsedad del documento, esto es, el elemento subjetivo específico (...).</p> <p>Fuente: USO DE DOCUMENTO FALSO. PARA ACREDITAR ESTE DELITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 246, FRACCIÓN VIII, DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, ES INNECESARIO SATISFACER LAS CONDICIONES OBJETIVAS DE PUNIBILIDAD REQUERIDAS PARA EL ILÍCITO DE FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS EN EL ARTÍCULO 245 DEL MISMO ORDENAMIENTO. Época: Décima Época, registro: 2002931, instancia: Primera Sala, tipo de Tesis: Jurisprudencia, fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVII, febrero de 2013, Tomo 1, materia(s): Penal, tesis: 1a. /J. 123/2012 (10a.), página: 759.</p>

I	
Incinerar (como sinónimo de cremar)	<p>1. Reducir algo, especialmente un cadáver, a cenizas.</p> <p>Fuente: <i>Diccionario de la Real Academia Española</i>.</p>
	<p>Cremación: el proceso de incineración de un cadáver, de restos humanos o de restos humanos áridos.</p> <p><i>Reglamento de Cementerios del Distrito Federal</i>, artículo 11, fracción VII.</p>
Injustificadamente	<p>1. adv. De manera injustificada.</p> <p>Fuente: <i>Diccionario de la Real Academia Española</i>.</p>
	<p>Injustificado: <i>adj. No justificado</i></p> <p>Fuente: <i>Diccionario de la Real Academia Española</i>.</p>
Inmueble	<p>Son bienes inmuebles:</p> <ul style="list-style-type: none"> I. El suelo y las construcciones adheridas a él; II. Las plantas y árboles, mientras estuvieren unidos a la tierra, y los frutos pendientes de los mismos árboles y plantas mientras no sean separados de ellos por cosechas o cortes regulares; III. Todo lo que esté unido a un inmueble de una manera fija, de modo que no pueda separarse sin deterioro del mismo inmueble o del objeto a él adherido; IV. Las estatuas, relieves, pinturas u otros objetos de ornamentación, colocados en edificios o heredados por el dueño del inmueble, en tal forma que revele el propósito de unirlos de un modo permanente al fundo

	<p>V. Los palomares, colmenas, estanques de peces o criaderos análogos, cuando el propietario los conserve con el propósito de mantenerlos unidos a la finca y formando parte de ella de un modo permanente;</p> <p>VI. Las máquinas, vasos, instrumentos o utensilios destinados por el propietario de la finca directa y exclusivamente, a la industria o explotación de la misma;</p> <p>VII. Los abonos destinados al cultivo de una heredad, que estén en las tierras donde hayan de utilizarse, y las semillas necesarias para el cultivo de la finca;</p> <p>VIII. Los aparatos eléctricos y accesorios adheridos al suelo o a los edificios por el dueño de éstos, salvo convenio en contrario;</p> <p>IX. Los manantiales, estanques, aljibes y corrientes de agua, así como los acueductos y las cañerías de cualquiera especie que sirvan para conducir los líquidos o gases a una finca o para extraerlos de ella;</p> <p>X. Los animales que formen el pie de cría en los predios rústicos destinados total o parcialmente al ramo de ganadería; así como las bestias de trabajo indispensables en el cultivo de la finca, mientras están destinadas a ese objeto;</p> <p>XI. Los diques y construcciones que, aun cuando sean flotantes, estén destinados por su objeto y condiciones a permanecer en un punto fijo de un río, lago o costa;</p> <p>XII. Los derechos reales sobre inmuebles; XIII. Las líneas telefónicas y telegráficas y las estaciones radiotelegráficas fijas.</p> <p>Fuente: <i>Código Civil Federal</i>, artículo 750.</p>
--	--

L	
Libertad	<p>En sentido amplio la libertad sería la capacidad de hacer y no hacer todo lo que esté lícitamente permitido. En otras palabras, constituye el derecho de toda persona de organizar, con arreglo a la ley, su vida individual y social conforme a sus propias opciones y convicciones.</p> <p>Fuente: <i>Cuadernillo de jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos n° 8: libertad personal</i>, página 6.</p> <p>Derecho a la Libertad Personal:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal. 2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas. 3. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios. 4. Toda persona detenida o retenida debe ser informada de las razones de su detención y notificada, sin demora, del cargo o cargos formulados contra ella. 5. Toda persona detenida o retenida debe ser llevada sin demora, ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales, y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso. Su libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren su comparecencia en el juicio.

	<p>6. Toda persona privada de libertad tiene derecho a recurrir ante un juez o tribunal competente, a fin de que éste decida, sin demora, sobre la legalidad de su arresto o detención y ordene su libertad si el arresto o la detención fueran ilegales. En los Estados Partes cuyas leyes prevén que toda persona que se viera amenazada de ser privada de su libertad tiene derecho a recurrir a un juez o tribunal competente a fin de que éste decida sobre la legalidad de tal amenaza, dicho curso no puede ser restringido ni abolido. Los recursos podrán interponerse por sí o por otra persona.</p> <p>7. Nadie será detenido por deudas. Este principio no limita los mandatos de autoridad judicial competente dictados por incumplimientos de deberes alimentarios.</p> <p>Fuente: <i>Convención Americana sobre Derechos Humanos</i> “Pacto de San José de Costa Rica”, artículo 7.</p>
	<p>1. Facultad natural que tiene el hombre de obrar de una n manera o de otra, y de no obrar, por lo que es responsable de sus actos.</p> <p>2. Estado o condición de quien no es esclavo.</p> <p>3. Estado de quien no está preso.</p> <p>Fuente: <i>Diccionario de la Real Academia Española</i>.</p>

M

Mueble	<p>Son muebles por su naturaleza, los cuerpos que pueden trasladarse de un lugar a otro, ya se muevan por sí mismos, ya por efecto de una fuerza exterior.</p> <p>Son bienes muebles por determinación de la ley, las obligaciones y los derechos o acciones que tienen por objeto cosas muebles o cantidades exigibles en virtud de acción personal.</p> <p>Por igual razón se reputan muebles las acciones que cada socio tiene en las asociaciones o sociedades, aun cuando a éstas pertenezcan algunos bienes inmuebles.</p> <p>Las embarcaciones de todo género son bienes muebles.</p> <p>Los materiales procedentes de la demolición de un edificio, y los que se hubieren acopiado para repararlo o para construir uno nuevo, serán muebles mientras no se hayan empleado en la fabricación.</p> <p>Los derechos de autor se consideran bienes muebles.</p> <p>En general, son bienes muebles, todos los demás no considerados por la ley como inmuebles.</p> <p>Fuente: <i>Código Civil Federal</i>, artículos 753-759.</p>
---------------	---

N

Nacido	<p>Para los efectos legales, sólo se reputa nacido el feto que, desprendido enteramente del seno materno, vive veinticuatro horas o es presentado vivo al Registro Civil (...).</p> <p>Fuente: <i>Código Civil Federal</i>, artículo 337.</p>
---------------	--

O

Ocultamiento	<p>La voz ocultar, según el Diccionario para Juristas, editado por Mayo Ediciones, significa esconder, disfrazar, tapar, encubrir a la vista, callar advertidamente lo que se pudiera o debiera decir, o disfrazar la verdad. Así, el término ocultar que contiene el delito sujeto a estudio es un elemento normativo de intelección jurídica, es decir, que requiere de una valoración jurídica para ser comprendido o entendido; por ende, si falta este elemento, cuya función es hacer más comprensible la descripción objetiva de la conducta, entonces se estará ante la ausencia de uno de los elementos integrantes del ilícito (...).</p> <p>Así pues, debe afirmarse que el ocultamiento tiene dos matices: por un lado es de aspecto objetivo, cuando se refiere a disfrazar, tapar, encubrir a la vista; por otro lado, cuando se refiere a esconder, callar advertidamente lo que se pudiera o debiera decir, o disfrazar la verdad, resulta evidente que el ocultamiento deviene en subjetivo, el cual no necesita de medios físicos para actualizarse, sino situaciones que atañen al yo interno de las personas, y que se constituyen cuando la actividad del sujeto activo del delito se verifica en forma engañosa, en la que se advierta que se ha hecho uso de medios que encubran o protejan con mucho cuidado su actuar, para así conseguir violar la ley frente a las autoridades.</p> <p>Por tanto, el elemento normativo consistente en el ocultamiento debe entenderse en el sentido de llevar una cosa de manera escondida, disfrazada, tapada, encubierta a la vista, callando advertidamente lo que se pudiera o debiera decir, o disfrazando la verdad encubierta o secreta, para con ello evitar que sea detectada, ya sea por temor a la ley o con el fin de eludirla.</p> <p>Fuente: EXTRANJEROS INDOCUMENTADOS. ASPECTOS OBJETIVO Y SUBJETIVO DEL TÉRMINO "OCULTAMIENTO" PARA LOS EFECTOS DEL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 138 DE LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN. Época: Novena Época, registro: 182642, instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, tipo de tesis: jurisprudencia, semanario judicial de la federación y su gaceta, tomo XVIII, diciembre de 2003, materia(s): penal, tesis: XX.3o. J/1, Página: 1239.</p>
---------------------	--

P

Paradero	<p>-Lugar o sitio donde se para o se va a parar.</p> <p>-Fin o término de algo.</p> <p>Fuente: <i>Diccionario de la Real Academia Española.</i></p>
Persona detenida (detenido)	<p>Detención: La restricción de la libertad de una persona por parte de la policía, con el fin de ponerla a disposición de la autoridad competente.</p> <p>Fuente: <i>Protocolo Modelo del Uso Legítimo de la Fuerza de Secretaría de Gobernación</i>, p. 8.</p>
Privación	<p>Privar: despojar a alguien de algo que poseía.</p> <p>Fuente: <i>Diccionario de la Real Academia Española.</i></p>

R

Restos humanos	<p>Se entenderá por restos humanos, las partes de un cadáver o de un cuerpo humano;</p> <p>Fuente: <i>Reglamento de Cementerios del Distrito Federal</i>, artículo 11, fracción XXI.</p>
-----------------------	---

Retenga	<p>Impedir que algo salga, se mueva, se elimine o desaparezca.</p> <p>Fuente: <i>Diccionario de la Real Academia Española.</i></p>
----------------	---

S

Sepultar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Poner en la sepultura a un difunto o enterrarlo. 2. Sumir, esconder, ocultar algo como enterrándolo. U. t. c. prnl. 3. Dicho de un sentimiento o de un estado de ánimo: Hundir o abismar a una persona. <p>Fuente: <i>Diccionario de la Real Academia Española.</i></p>
	<p>Se entenderá por inhumar: sepultar un cadáver</p> <p>Fuente: <i>Reglamento de Cementerios del Distrito Federal</i>, artículo 11, fracción XV</p>
Servidor Público	<p>Se reputarán como servidores públicos a los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial de la Federación, los funcionarios y empleados y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión o en la Administración Pública Federal, así como a los servidores públicos de los organismos a los que esta Constitución otorgue autonomía, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones.</p> <p>Fuente: <i>Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos</i>, artículo 108 primer párrafo.</p>
	<p>Se entiende por servidor público: Las personas que desempeñan un empleo, cargo o comisión en los entes públicos, en el ámbito federal y local, conforme a lo dispuesto en el artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.</p> <p>Fuente: <i>Ley General de Responsabilidades Administrativas</i>, artículo 3 fracción XXV.</p>
Suerte	<ol style="list-style-type: none"> 1. Circunstancia de ser, por mera casualidad, favorable o adverso a alguien o algo lo que ocurre o sucede. 2. Aquello que ocurre o puede ocurrir para bien o para mal de personas o cosas. 3. Estado, condición. <p>Fuente: <i>Diccionario de la Real Academia Española.</i></p>

V

Víctima	<p>(...) Se considera víctima del delito al sujeto pasivo que resiente directamente sobre su persona la afectación producida por la conducta delictiva. Asimismo, se considerará ofendido a la persona física o moral titular del bien jurídico lesionado o puesto en peligro por la acción u omisión prevista en la ley penal como delito.</p> <p>Fuente: <i>Código Nacional de Procedimientos Penales</i>, artículo 108.</p>
	<p>Se denominarán víctimas directas aquellas personas físicas que hayan sufrido algún daño o menoscabo económico, físico, mental, emocional, o en general cualquiera puesta en peligro o lesión a sus bienes jurídicos o derechos como consecuencia de la comisión de un delito o violaciones a sus</p>

	<p>derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte.</p> <p>Son víctimas indirectas los familiares o aquellas personas físicas a cargo de la víctima directa que tengan una relación inmediata con ella.</p> <p>Son víctimas potenciales las personas físicas cuya integridad física o derechos peligren por prestar asistencia a la víctima ya sea por impedir o detener la violación de derechos o la comisión de un delito.</p> <p>La calidad de víctimas se adquiere con la acreditación del daño o menoscabo de los derechos en los términos establecidos en la presente Ley, con independencia de que se identifique, aprehenda, o condene al responsable del daño o de que la víctima participe en algún procedimiento judicial o administrativo.</p> <p>Son víctimas los grupos, comunidades u organizaciones sociales que hubieran sido afectadas en sus derechos, intereses o bienes jurídicos colectivos como resultado de la comisión de un delito o la violación de derechos.</p> <p>Fuente: <i>Ley General Víctimas</i>, artículo 4.</p>
	<p>Se entenderá por “víctimas”, las personas que, individual o colectivamente, hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal vigente en los Estados Miembros, incluida la que proscribe el abuso de poder.</p> <p>Fuente: <i>Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder</i>, punto A.1.</p>



Anexo IV. Criterios judiciales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

No.	Tema o concepto	Referencia	Extracto	Observaciones
1	<ul style="list-style-type: none"> • Deber del Estado de investigar los hechos • Debida diligencia • Garantía de no repetición 	Caso Ticona Estrada y otros vs. Bolivia, Corte Interamericana de Derechos Humanos, Sentencia de 27 de noviembre de 2008 (fondo, reparaciones y costas) Otras medidas de reparación, párr. 146, pág. 42	<p>“...la Corte considera que el Estado debe conducir eficazmente el proceso penal que se encuentra en trámite y los que se llegaren a abrir para determinar las correspondientes responsabilidades por los hechos y, si es pertinente, aplicar las consecuencias que la ley prevea, y con ello evitar que hechos como los del presente caso no vuelvan a repetirse...”</p>	<p>El párrafo citado se encuentra relacionado con las siguientes sentencias:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Caso Baldeón García Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de abril de 2006. Serie C No. 147, párr. 199; • Caso Heliodoro Portugal Vs. Panamá, supra nota 13, párr. 245; y • Caso Bayarri Vs. Argentina, supra nota 16, párr. 175. <p>Caso Bayarri Vs. Argentina, supra nota 16, párr. 175.</p>
2	<ul style="list-style-type: none"> • Deber del Estado de investigar. • Derecho de las víctimas a la verdad, justicia y a la reparación. • Exhaustividad de la investigación. • Reparación del daño inmaterial. 	Caso Ticona Estrada y otros vs. Bolivia Sentencia de 27 de noviembre de 2008 (fondo, reparaciones y costas) Otras medidas de reparación, párr. 155, Pág. 44	<p>“Como ha sido establecido en la presente Sentencia como parte del deber de investigar, el Estado debe realizar una búsqueda efectiva del paradero de la víctima (supra párr. 80), ya que el derecho de los familiares de conocer el destino o paradero de la víctima desaparecida¹²⁹ constituye una medida de reparación y por tanto una expectativa que el Estado debe satisfacer a éstos¹³⁰. Es de suma importancia para los familiares de la víctima desaparecida el esclarecimiento del paradero o destino final de la misma, ya que esto permite a los familiares aliviar la angustia y sufrimiento causados por la incertidumbre del paradero y destino de su familiar desaparecido.”</p>	<p>El párrafo citado se encuentra relacionado con las siguientes sentencias:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 129 Cfr. Caso Castillo Páez Vs. Perú, supra nota 113, párr. 90; Caso Goiburú y otros Vs. Paraguay, supra nota 74, párr. 171; y Caso La Cantuta Vs. Perú, supra nota 43, párr. 231. • 130 Cfr. Caso Neira Alegría y otros Vs. Perú. Supra nota 108, párr. 69; Caso Goiburú y otros Vs. Paraguay, supra nota 74, párr. 171; y Caso La Cantuta Vs. Perú, supra nota 43, párr. 231.
3	<ul style="list-style-type: none"> • Debida diligencia. • Obligación del Estado de investigar los hechos. 	Caso 19 comerciantes vs. Colombia Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos De 26 de junio de 2012 (Supervisión de cumplimiento de sentencia) Párr. 17, pág. 8.	<p>“...la Corte concluye que la medida de reparación relativa a la obligación de investigar los hechos del presente caso se encuentra pendiente de cumplimiento. En este sentido, considera imprescindible que, en el plazo establecido en el punto resolutivo segundo de esta Resolución, el Estado presente información actualizada, detallada y completa sobre la totalidad de las acciones emprendidas para el cumplimiento de esta medida de reparación, los resultados obtenidos, así como copia de la documentación que le sirva de respaldo, de manera tal que la Corte pueda verificar que las investigaciones se están llevando a cabo con debida diligencia, conforme al propósito que tiene esta medida de reparación.”</p>	<p>S. com.</p>
4	<ul style="list-style-type: none"> • Establecimiento de un “plan de búsqueda de restos”. • La recuperación de restos mortales como forma de reparación. 	Caso 19 comerciantes vs. Colombia Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos De 26 de junio de 2012 (Supervisión de cumplimiento de sentencia) Párr. 21, pág. 9	<p>La Corte recuerda que, en su Resolución de 8 de julio de 2009, consideró “de fundamental importancia la elaboración y desarrollo, a la mayor brevedad posible, de un plan de búsqueda de los restos, de conformidad con parámetros técnico-científicos especializados, pues el paso del tiempo dificulta la efectiva ejecución de esta medida de reparación”.</p>	<p>S. com.</p>
5	<ul style="list-style-type: none"> • Derecho de las víctimas a la verdad, justicia y reparación. 	Caso 19 comerciantes vs. Colombia Resolución de la Corte	<p>El Tribunal entiende las dificultades particulares que representa la localización de los restos mortales de las víctimas en el presente caso, “debido a la forma como fueron tratados los restos de los 19 comerciantes y a que al momento de</p>	<p>El párrafo citado se encuentra relacionado con las siguientes sentencias:</p>

<ul style="list-style-type: none"> • Deber a cargo del Estado de recuperar los restos mortales y entregarlos a la familia de las víctimas (víctimas indirectas). • Exhaustividad de la investigación (debida diligencia). 	<p>Interamericana de Derechos Humanos De 26 de junio de 2012 (Supervisión de cumplimiento de sentencia) Párr. 22 y 23, pág. 10 y 11</p>	<p>emisión de la Sentencia habían transcurrido más de dieciséis años desde su desaparición, por lo cual es muy probable que no se puedan hallar sus restos, ... ya que las omisiones estatales en la época en que aún era probable encontrar los restos de las víctimas han traído como consecuencia que [...] la localización de los restos sea una tarea muy difícil e improbable”17. Sin embargo, la Corte recuerda que en su Sentencia consideró probado que “Colombia no realizó una búsqueda seria de los restos de las víctimas”, por lo cual estimó justo y razonable ordenarle una medida en este sentido.</p> <p>La Corte considera que, si bien el Estado ha iniciado una primera fase de un plan de búsqueda de los restos de las víctimas, Colombia no ha cumplido con la medida ordenada por esta Corte, la cual consiste en “realizar todos los esfuerzos posibles para determinar con certeza lo ocurrido con los restos de las víctimas y, en caso de ser posible, para entregarlos a sus familiares”18.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 17 Caso 19 Comerciantes Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas, párr. 270. • 18 Caso 19 Comerciantes Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas, párr. 271. • 19 Cfr. Caso de la Masacre de las Dos Erres Vs. Guatemala. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, párr. 245, y Caso Blanco Romero y otros Vs. Venezuela. Supervisión de cumplimiento de sentencia y medidas provisionales. Resolución de la Corte de 22 de noviembre de 2011, Considerando 13.
---	---	---	--

A pesar de lo indicado por el Estado, en el sentido de que ha desplegado “todas las acciones tendentes a dar con el paradero de las víctimas”, la Corte considera que a más de veinticuatro años de los hechos y casi ocho años de la notificación de la Sentencia objeto de supervisión, no ha habido avances significativos en la implementación de esta medida de reparación. La Corte recuerda la importancia que el cumplimiento de esta medida tiene, puesto que supone una satisfacción moral y permite cerrar el proceso de duelo que han estado viviendo a lo largo de los años los familiares de las víctimas 19. En consideración de lo anterior, el Tribunal estima que esta obligación se encuentra pendiente de cumplimiento. Teniendo en cuenta que el paso del tiempo dificulta la efectiva ejecución de esta medida de reparación, el Estado debe adoptar, de forma inmediata, las medidas que sean necesarias para cumplir con esta medida de reparación de forma efectiva y diligente. Asimismo, a fin de que la Corte pueda supervisar su cumplimiento, el Estado deberá presentar información completa y actualizada, remitiendo copias de los documentos correspondientes, respecto de las medidas adoptadas para el efectivo y total cumplimiento de este punto en el plazo establecido en punto resolutivo segundo de esta Resolución.

6	<ul style="list-style-type: none"> • Obligación de investigar • Principio de debida diligencia • Reparación del daño material e inmaterial. • Principio de publicidad 	<p>Caso Bámaca Velásquez Vs. Guatemala, Corte Interamericana de Derechos Humanos, Sentencia de 22 de febrero de 2002 (Reparaciones y Costas) Párr. 73, pág. 33</p>	<p>73. De conformidad con el punto resolutivo octavo de la sentencia sobre el fondo dictada el 25 de noviembre de 2000, Guatemala debe realizar “una investigación para determinar las personas responsables de las violaciones de los derechos humanos a que se ha hecho referencia en [esa] Sentencia, así como divulgar públicamente los resultados de dicha investigación y sancionar a los responsables”76. De esta manera, dentro de las reparaciones que debe efectuar el Estado se encuentra necesariamente la de investigar efectivamente los hechos, sancionar a todos los responsables y divulgar los resultados de la investigación.</p>	<p>El párrafo citado se encuentra relacionado con las siguientes sentencias:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 76 Caso Bámaca Velásquez, supra nota 6, resolutive octavo.
---	---	---	--	---

- Derecho a la verdad.

- Obligación a cargo del Estado de investigar.

- Debita diligencia.

- Garantía de no repetición.

Caso Bámaca Velásquez Vs. Guatemala,
Corte Interamericana de Derechos Humanos,
Sentencia de 22 de febrero de 2002
(Reparaciones y Costas)
Párr. 74, pág. 33 y 34

74. Este Tribunal se ha referido en reiteradas ocasiones al derecho que asiste a los familiares de las víctimas de conocer lo que sucedió⁷⁷ y saber quiénes fueron los agentes del Estado responsables de los respectivos hechos⁷⁸. “[L]a investigación de los hechos y la sanción de las personas responsables, [...] es una obligación que corresponde al Estado siempre que haya ocurrido una violación de los derechos humanos y esa obligación debe ser cumplida seriamente y no como una mera formalidad”⁷⁹. Además, este Tribunal ha indicado que el Estado “tiene la obligación de combatir [la impunidad] por todos los medios legales disponibles ya que [ésta] propicia la repetición crónica de las violaciones de derechos humanos y la total indefensión de las víctimas y de sus familiares”⁸⁰. El Estado que dejara impune las violaciones de derechos humanos

El párrafo citado se encuentra relacionado con las siguientes sentencias:

- 76 Caso Bámaca Velásquez, supra nota 6, resolutive octavo.
- 77 Cfr. Caso Villagrán Morales y otros, Reparaciones, supra nota 5, párr. 100; Caso Paniagua Morales y otros, Reparaciones, supra nota 5, párr. 200; y Caso Aloeboetoe y Otros, Reparaciones, supra nota 40, párr. 109.
- 78 Cfr. Caso Cantoral Benavides, Reparaciones, supra nota 5, párr. 69; y Caso Paniagua Morales y otros, supra nota 5, párr. 200.
- 79 Cfr. Caso Cantoral Benavides, Reparaciones, supra nota 5, párr. 69; Caso Cesti Hurtado, Reparaciones, supra nota 5, párr. 62; Caso

estaría incumpliendo, adicionalmente, su deber general de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos de las personas sujetas a su jurisdicción 81.

Villagrán Morales y otros, Reparaciones, supra nota 5, párr. 100; y Caso Paniagua Morales y otros, Reparaciones, supra nota 5, párr. 200.

El párrafo citado se encuentra relacionado con las siguientes sentencias:

- 82 Caso Bámaca Velásquez, supra nota 6, párr. 201.
- 83 Cfr. Caso Caballero Delgado y Santana. Sentencia de 8 de diciembre de 1995. Serie C No. 22, párr. 58.
- 84 Véase, por ejemplo, United Nations Human Rights Committee, Quinteros v. Uruguay, Communication No. 107/1981, decision of 21 July 1983; Naciones Unidas, Comisión de Derechos Humanos, Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías, 49º período de sesiones, Informe final revisado acerca de la cuestión de la impunidad de los autores de violaciones de los derechos humanos (derechos civiles y políticos) preparado por L. Joinet, UN General Assembly Doc. E/CN.4/Sub.2/1997/20/Rev.1; Naciones Unidas, Comisión de Derechos Humanos, Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías, 45º período de sesiones, Estudio relativo al derecho de restitución, indemnización y rehabilitación a las víctimas de violaciones flagrantes de los derechos humanos y las libertades fundamentales, Informe definitivo presentado por Theo van Boven, Relator especial, E/CN.4/Sub.2/1993/8.
- 85 Cfr. Caso Cantoral Benavides, Reparaciones, supra nota 5, párr. 69; Caso Villagrán Morales y otros, Reparaciones, supra nota 5, párr. 100; y Caso Paniagua Morales y otros, Reparaciones, supra nota 5, párr. 200.
- 86 Cfr. Caso Castillo Páez, Sentencia de 3 de noviembre de 1997. Serie C No. 34, párr. 90; Caso Caballero Delgado y Santana. Reparaciones (art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Sentencia de 29 de enero de 1997. Serie C No. 31, párr. 58; y Caso Neira Alegría y Otros, Reparaciones, supra nota 38, párr. 69.
- 87 Cfr. Caso Castillo Páez, supra nota 6, párr. 90. En igual sentido cfr. Naciones Unidas, Comisión de Derechos Humanos, Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías, 49º período de sesiones, Informe final revisado acerca de la cuestión de la impunidad de los autores de violaciones de los derechos humanos (derechos civiles y políticos) preparado por L. Joinet, UN General Assembly Doc. E/CN.4/Sub.2/1997/20/Rev.1; y Naciones Unidas, Comisión de Derechos Humanos, Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías, 45º período de sesiones, Estudio relativo al derecho de restitución, indemnización y rehabilitación a las víctimas de violaciones flagrantes de los derechos humanos y las libertades fundamentales, Informe definitivo presentado por Theo van Boven, Relator especial, E/CN.4/Sub.2/1993/8.

8

- Derecho a la verdad.
- Deber a cargo del Estado de investigar.
- Recuperación de restos mortales como forma de reparación del daño.

Caso Bámaca Velásquez Vs. Guatemala,
Corte Interamericana de Derechos Humanos,
Sentencia de 22 de febrero de 2002
(Reparaciones y Costas)
Párr. 75 y 76, pág. 34

75. Asimismo, este Tribunal estableció, en su sentencia de fondo, que, por las características del caso en estudio, el derecho a la verdad se encontraba "subsumido en el derecho de la víctima o sus familiares a obtener de los órganos competentes del Estado el esclarecimiento de los hechos violatorios y las responsabilidades correspondientes, a través de la investigación y el juzgamiento que previenen los artículos 8 y 25 de la Convención"⁸². Como lo ha señalado este Tribunal, sólo si se esclarecen todas las circunstancias de las violaciones de que se trata se podrá considerar que el Estado ha proporcionado a la víctima y a sus familiares un recurso efectivo y ha cumplido con su obligación general de investigar ⁸³.

76. El derecho que toda persona tiene a la verdad ha sido desarrollado por el derecho internacional de los derechos humanos ⁸⁴, y, como sostuvo esta Corte en anteriores oportunidades, la posibilidad de los familiares de la víctima de conocer lo sucedido a ésta ⁸⁵, y, en su caso, dónde se encuentran sus restos ⁸⁶, constituye un medio de reparación y, por tanto, una expectativa que el Estado debe satisfacer a los familiares de la víctima y a la sociedad como un todo ⁸⁷.

9	<ul style="list-style-type: none"> • Respeto de restos mortales y su relación con el derecho a la dignidad humana. • Respeto de los usos y costumbres de pueblos y comunidades indígenas. • Deber del Estado de realizar la exhumación en presencia de la familia de las víctimas • Deber a cargo del Estado de trasladar y entregar los restos mortales. • Implementación de un “Programa Nacional de Exhumaciones” como medida de satisfacción. 	<p>Caso Bámaca Velásquez Vs. Guatemala, Corte Interamericana de Derechos Humanos, Sentencia de 22 de febrero de 2002 (Reparaciones y Costas) Párr. 81, 82 y 83, págs. 35 y 36</p> <p>81. Esta Corte considera que el cuidado de los restos mortales de una persona es una forma de observancia del derecho a la dignidad humana. Asimismo, este Tribunal ha señalado que los restos mortales de una persona merecen ser tratados con respeto ante sus deudos, por la significación que tienen para éstos 90. El respeto a dichos restos, observado en todas las culturas, asume una significación muy especial en la cultura maya, etnia mam, a la cual pertenecía el señor Efraín Bámaca Velásquez. Ya la Corte ha reconocido la importancia de tener en cuenta determinados aspectos de las costumbres de los pueblos indígenas en América para los efectos de la aplicación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Caso Mayagna (Sumo) Awas Tingni vs. Nicaragua) 91.</p> <p>82. En razón de todo ello la Corte considera que el Estado debe realizar las exhumaciones, en presencia de los familiares, para localizar los restos mortales de Efraín Bámaca Velásquez y entregar a ellos dichos restos. Asimismo, este Tribunal considera que Guatemala debe brindar las condiciones necesarias no sólo para determinar el paradero de los restos mortales de la víctima, sino además de trasladar dichos restos al lugar de elección de sus familiares, sin costo alguno para ellos.</p> <p>83. Por último, como una medida de satisfacción, la Corte considera que el Estado debe implementar, en caso de no existir en la actualidad, un programa nacional de exhumaciones como señaló el propio Estado en su escrito de observaciones a las reparaciones.</p>	<p>El párrafo citado se encuentra relacionado con las siguientes sentencias:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 90 Caso Blake. Sentencia de 24 de enero de 1998. Serie C No. 36, párr. 115. • 91 Cfr. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni, supra nota 7, párr. 149; y Caso Aloeboetoe y Otros, Reparaciones, supra nota 40, párr. 62.
10	<ul style="list-style-type: none"> • Entrega efectiva de restos mortales. 	<p>Caso Bámaca Velásquez Vs. Guatemala, Corte Interamericana de Derechos Humanos, Sentencia de 22 de febrero de 2002 (Reparaciones y Costas) Párr. 102, pág. 40</p> <p>102. Los representantes de las víctimas solicitaron al Tribunal que en el caso de que la entrega de los restos mortales de Efraín Bámaca Velásquez no se efectuase dentro del plazo de seis meses, el Estado de Guatemala tuviera que pagar una suma diaria hasta el momento de la entrega efectiva de los mismos a sus familiares (supra 92). La Corte para evaluar el grado de cumplimiento de estas obligaciones oportunamente tomará las providencias pertinentes para velar por el cumplimiento de esta medida.</p>	S. com.
11	<ul style="list-style-type: none"> • Derecho a la integridad personal de los familiares • Derecho a la verdad. • Deber a cargo del Estado de investigar. • Debida diligencia. 	<p>Caso Contreras y otros vs. El Salvador Corte Interamericana de Derechos Humanos Sentencia de 31 de agosto de 2011 (Fondo, Reparaciones y Costas) Párr. 123, pág. 46</p> <p>123. Por otra parte, la jurisprudencia de esta Corte ha establecido que la privación de la verdad acerca del paradero de una víctima de desaparición forzada acarrea una forma de trato cruel e inhumano para los familiares cercanos 182. Además, la constante negativa de las autoridades estatales de proporcionar información acerca del paradero de las víctimas o de iniciar una investigación eficaz para lograr el esclarecimiento de lo sucedido ha sido considerada, por este Tribunal, como una causa de acrecentamiento del sufrimiento de los familiares 183. Las circunstancias de este caso demuestran que las tres familias afectadas por las desapariciones de uno o más de sus hijos e hijas ven su sufrimiento agravado por la privación de la verdad tanto respecto de lo sucedido como del paradero de las víctimas, y por la falta de colaboración de las autoridades estatales a fin de establecer dicha verdad lo que, por ende, agravó la violación al derecho a la integridad personal de los familiares.</p>	<p>El párrafo citado se encuentra relacionado con las siguientes sentencias:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 182 Cfr. Caso Trujillo Oroza Vs. Bolivia. Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de febrero de 2002. Serie C No. 92, párr. 114; Caso Gelman, supra nota 16, párr. 133, y Caso Gomes Lund y otros (Guerrilha do Araguaia), supra nota 97, párr. 240. • 183 Cfr. Caso Blake Vs. Guatemala. Fondo. Sentencia de 24 de enero de 1998. Serie C No. 36, párr. 114; Caso Gelman, supra nota 16, párr. 133, y Caso Gomes Lund y otros (Guerrilha do Araguaia), supra nota 97, párr. 241.

12	<ul style="list-style-type: none"> • Debida diligencia • Deber de investigar. • Elementos a considerar para el desarrollo de la investigación. • Deber de establecer líneas de investigación claras y lógicas. 	<p>Caso Contreras y otros vs. El Salvador Corte Interamericana de Derechos Humanos Sentencia de 31 de agosto de 2011 (Fondo, Reparaciones y Costas) Párr. 145 y 150, pág. 55 y 57.</p>	<p>Los bienes jurídicos sobre los que recae la investigación obligan a redoblar esfuerzos en las medidas que deban practicarse para cumplir su objetivo, pues el paso del tiempo guarda una relación directamente proporcional con la limitación –y en algunos casos, la imposibilidad- para obtener las pruebas y/o testimonios, dificultando y aún tornando nugatoria o ineficaz, la práctica de diligencias probatorias a fin de esclarecer los hechos materia de investigación 231, identificar a los posibles autores y partícipes, y determinar las eventuales responsabilidades penales. Sin perjuicio de ello, las autoridades nacionales no están eximidas de realizar todos los esfuerzos necesarios en cumplimiento de su obligación de investigar 232.</p> <p>150. La Corte considera que en las investigaciones realizadas no se ha tenido en cuenta el contexto de los hechos, la complejidad de los mismos, los patrones que explican su comisión, la compleja estructura de personas involucradas ni la especial posición dentro de la estructura estatal, en esa época, de las personas que pudieran ser responsables. Sobre este punto, el Tribunal ha considerado que en hechos como los que se alegan en este caso dado el contexto y la complejidad de los mismos, es razonable considerar que existan diferentes grados de responsabilidad a diferentes niveles 241. Sin embargo, esto no se encuentra reflejado en las investigaciones. En consecuencia, tampoco se observa que las autoridades encargadas de las investigaciones hubieran seguido líneas de investigación claras y lógicas que hubieran tomado en cuenta esos elementos. Más aún, se observan manifiestas omisiones al recabar prueba. En tal sentido, la Corte considera que el Estado no ha sido diligente con esta obligación.</p>	<p>El párrafo citado se encuentra relacionado con las siguientes sentencias:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 231 Cfr. Caso Heliodoro Portugal, supra nota 112, párr. 150; Caso Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña, supra nota 100, párr. 167, y Caso Chitay Nech y otros, supra nota 98, párr. 196. • 232 Cfr. Caso Anzualdo Castro, supra nota 109, párr. 135; Caso Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña, supra nota 100, párr. 167, y Caso Radilla Pacheco, supra nota 25, párr. 215. • 241 Cfr. Caso Radilla Pacheco, supra nota 25, párr. 203, y Caso Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña, supra nota 100, párr. 171.
13	<ul style="list-style-type: none"> • Localización de víctimas con vida en casos de desaparición forzada. • Obligación a cargo del Estado para la atención psicosocial, identificación, restablecimiento de identidad, reencuentro y reunificación familiar. • Obligación a cargo del Estado de identificar los restos mortales, entregarlos a los familiares y cubrir gastos funerarios. 	<p>Caso Contreras y otros vs. El Salvador Corte Interamericana de Derechos Humanos Sentencia de 31 de agosto de 2011 (Fondo, Reparaciones y Costas) Parr. 192, pág. 70 y 71</p>	<p>192. En caso de que luego de las diligencias realizadas por el Estado las víctimas o alguna de ellas se encuentre con vida, el Estado deberá asumir los gastos de su identificación bajo métodos fehacientes, del reencuentro y de la atención psicosocial necesaria, disponer las medidas para el restablecimiento de su identidad y realizar los esfuerzos necesarios para facilitar la reunificación familiar, en caso de que así lo deseen. Si fueran encontradas sin vida, los restos previamente identificados deberán ser entregados a sus familiares a la mayor brevedad y sin costo alguno. Además, el Estado deberá cubrir los gastos fúnebres, en su caso, de común acuerdo con sus familiares 288.</p>	<p>El párrafo citado se encuentra relacionado con las siguientes sentencias:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 287 Cfr. Caso Neira Alegría y otros Vs. Perú. Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de septiembre de 1996. Serie C No. 29, párr. 69; Caso Gelman, supra nota 16, párr. 258, y Caso Gomes Lund y otros (Guerrilha do Araguaia), supra nota 97, párr. 261. • 288 Cfr. Caso Anzualdo Castro, supra nota 109, párr. 185; Caso Gomes Lund y otros (Guerrilha do Araguaia), supra nota 97, párr. 262, y Caso Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña, supra nota 100, párr. 242.

	<ul style="list-style-type: none"> • Principios rectores en investigaciones de muertes por ejecuciones extrajudiciales. • Debida diligencia • Análisis de restos humanos 	<p>Caso de la Comunidad Moiwana Vs. Suriname Corte Interamericana de Derechos Humanos Sentencia de 15 de junio de 2005</p> <p>(Excepciones Preliminares, Fondo,</p>	<p>149. En este sentido, el Tribunal ha especificado previamente los principios rectores que es preciso observar cuando se considera que una muerte pudo deberse a una ejecución extrajudicial. Las autoridades estatales que conducen una investigación deben intentar como mínimo, inter alia:</p> <p>a) identificar a la víctima;</p> <p>b) recuperar y preservar el material probatorio relacionado con la muerte, con el fin de ayudar en cualquier potencial investigación penal de los responsables;</p> <p>c) identificar posibles testigos y obtener sus declaraciones en relación con la muerte que se investiga;</p> <p>d) determinar la causa, forma, lugar y momento de la muerte, así como cualquier patrón o práctica que pueda haber causado la muerte; y</p> <p>e) distinguir entre muerte natural, muerte accidental, suicidio y homicidio 85. Además, la Corte hace notar que: a) se debe investigar exhaustivamente la escena del crimen, y b) profesionales competentes deben llevar a cabo autopsias rigurosamente, así como análisis de restos humanos, empleando los procedimientos más apropiados 86.</p>	<p>El párrafo citado se encuentra relacionado con las siguientes sentencias:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 85 Cfr. Caso Juan Humberto Sánchez, supra nota 78, párr. 127 y 132; y O.N.U., Manual sobre la Prevención e Investigación Efectiva de Ejecuciones Extrajudiciales, Arbitrarias y Sumarias, Doc. E/ST/CSDHA/.12 (1991). • 86 Cfr. Caso Juan Humberto Sánchez, supra nota 78, párr. 127 y 132; y O.N.U., Manual sobre la Prevención e Investigación Efectiva de Ejecuciones Extrajudiciales, Arbitrarias y Sumarias, Doc E/ST/CSDHA/.12 (1991).
--	---	--	--	--

15	<ul style="list-style-type: none"> • Localización y entrega de restos mortales. • Análisis de restos mortales. • Respeto de usos y costumbres de pueblos y comunidades. • Derecho a la verdad. 	<p>Caso de la Comunidad Moiwana Vs. Suriname Corte Interamericana de Derechos Humanos Sentencia de 15 de junio de 2005</p> <p>(Excepciones Preliminares, Fondo, reparaciones y Costas) Párr. 208, pág. 85</p>	<p>208. Finalmente, Suriname debe emplear todos los medios técnicos y científicos posibles – tomando en cuenta las normas pertinentes en la materia, tales como las establecidas en el Manual de Naciones Unidas sobre la Prevención e Investigación Efectiva de Ejecuciones Extrajudiciales, Arbitrarias y Sumarias – para recuperar con prontitud los restos de los miembros de la comunidad que fallecieron durante el ataque de 1986. Si el Estado encuentra los restos mortales, deberá entregarlos a la brevedad posible a los miembros de la comunidad sobrevivientes para que los fallecidos puedan ser honrados según los rituales de la cultura N’djuka. Asimismo, el Estado deberá concluir, en un plazo razonable, los análisis a los restos humanos encontrados en la fosa común en 1993 (supra párr. 86.31), y comunicar el resultado de dichos análisis a los representantes de las víctimas.</p>	<p>S. com.</p>
16	<ul style="list-style-type: none"> • Derecho a la verdad, • Reconocimiento de la dignidad de los restos mortales como otra forma de reparación. 	<p>17</p> <ul style="list-style-type: none"> • Determinación del paradero de las víctimas como forma de reparación. • Establecimiento de normatividad interna 	<p>Caso Goiburú y otros Vs. Paraguay Sentencia de 22 de septiembre de 2006 (Fondo, Reparaciones y Costas),</p> <p>(Medidas de satisfacción y garantías de no repetición),</p> <p>Inciso b) párrafos 171 y 172, pág. 92.</p>	<p>(“Guerrilha do Araguaia”) vs. Brasil Sentencia de 24 de noviembre de 2010</p>

Caso Gomes Lund y otros

Búsqueda y sepultura de los restos de los señores Agustín Goiburú Giménez, Carlos José Mancuello Bareiro y Rodolfo y Benjamín Ramírez Villalba.

171. El derecho de los familiares de los señores Agustín Goiburú Giménez, Carlos José Mancuello Bareiro y Rodolfo y Benjamín Ramírez Villalba de conocer dónde se encuentran los restos mortales de éstas 108, constituye una medida de reparación y por tanto una expectativa que el Estado debe satisfacer a los familiares de las víctimas 109. Asimismo, el Tribunal ha señalado que los restos mortales de una persona merecen ser tratados con respeto ante sus deudos, por la significación que tienen para éstos 110.

172. La Corte considera indispensable que, para efectos de las reparaciones, el Estado proceda de inmediato a la búsqueda y localización de los restos mortales de los señores Agustín Goiburú Giménez, Carlos José Mancuello Bareiro y Rodolfo y Benjamín Ramírez Villalba. Si se encuentran dichos restos mortales, el Estado deberá entregarlos a la brevedad posible a sus familiares, previa comprobación genética de filiación. Además, el Estado deberá cubrir los gastos de entierro de éstos, de común acuerdo con los familiares de las mismas.

261. Este Tribunal ha establecido que el derecho de los familiares de las víctimas de identificar el paradero de los desaparecidos y, en su caso, conocer donde se

encuentran sus restos constituye una medida de reparación y, por lo tanto, genera el deber correlativo para el Estado de satisfacer esa expectativa 377. Recibir los cuerpos de las personas desaparecidas es de suma importancia para sus familiares, ya que les permite sepultarlos de acuerdo con sus creencias, así

El texto citado se relaciona con las siguientes resoluciones:

- 108 Cfr. Caso de la Masacre de Pueblo Bello, supra nota 5, párrs. 270- 273; Caso 19 Comerciantes, supra nota 60, párr. 265, y Caso Juan Humberto Sánchez. Sentencia de 7 de junio de 2003. Serie C No. 99, párr. 187.
- 109 Cfr. Caso 19 Comerciantes, supra nota 60, párr. 265; Caso Juan Humberto Sánchez, supra nota 109, párr. 187, y Caso del Caracazo. Reparaciones (art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Sentencia de 29 de agosto de 2002. Serie C No. 95, párr. 122.
- 110 Cfr. Caso Baldeón García, supra nota 6, párr. 208; Caso Acevedo Jaramillo y otros, supra nota 2, párr. 315, y Caso López Álvarez, supra nota 75, párr. 214.

El texto citado se relaciona con las siguientes resoluciones:

- 377 Cfr. Caso Neira Alegría y otros Vs. Perú. Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de septiembre de 1996. Serie C No. 29, párr. 69; Caso Chitay Nech y otros, supra nota 25, párr. 240, y Caso Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña, supra nota 24, párr. 214.

	para la búsqueda e identificación de cuerpos y restos de víctimas.	identificación de los restos mortales y su valor como prueba de	(excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas) Párr. 261, 262 y 263, págs. 99 y 100	como cerrar el proceso de duelo que han estado viviendo a lo largo de estos años. Adicionalmente, el Tribunal considera que el lugar en el cual los restos sean encontrados puede proporcionar información valiosa sobre los autores de las violaciones o la institución a la que pertenecían 378.
18	<ul style="list-style-type: none"> • Obligación a cargo del Estado de buscar los restos mortales de la víctima y entregarlos a sus familiares. • Deber del Estado de trasladar los restos mortales de las víctimas de manera gratuita. • Respeto a los usos y costumbres de pueblos y comunidades. 		<p>Caso Gómez Palomino Vs. Perú</p> <p>Sentencia de 22 de noviembre de 2005 (Fondo, Reparaciones y Costas)</p> <p>Párr. 141, pág. 50</p>	<p>262. La Corte valora positivamente que Brasil haya adoptado medidas para avanzar en la búsqueda de las víctimas de la Guerrilha do Araguaia. En este sentido, es necesario que el Estado realice todos los esfuerzos posibles para determinar su paradero a la brevedad. El Tribunal destaca que los familiares han esperado esa información por más de 30 años. En su caso, los restos mortales de las víctimas desaparecidas que sean encontrados, previamente identificados, deberán ser entregados a sus familiares a la mayor brevedad y sin costo alguno para ellos, para que puedan sepultarlos de acuerdo con sus creencias. Además, el Estado deberá cubrir los gastos funerarios de común acuerdo con sus familiares 379. Por otra parte, el Tribunal toma nota de la creación del Grupo de Trabajo Tocantins que tiene por finalidad la búsqueda de las víctimas desaparecidas en el marco de la Acción Ordinaria y señala que el mismo debe contar con la participación del Ministerio Público Federal.</p>
19	<ul style="list-style-type: none"> • Obligación de localizar los restos de las víctimas como otra forma de reparación. • Investigar los hechos, identificar, juzgar y, en su caso, sancionar a los responsables materiales e intelectuales. • Localización e 		<p>Caso González Medina y familiares vs. República Dominicana</p> <p>Sentencia de 27 de febrero de 2012 (Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas)</p> <p>Párr. 287-291, págs. 89 y 90.</p>	<p>b) Obligación de buscar los restos mortales de la víctima y entregarlos a sus familiares</p> <p>141. Siguiendo su jurisprudencia 86 y en atención a lo solicitado por la Comisión y los representantes, este Tribunal considera indispensable que el Estado realice con la debida diligencia las actuaciones necesarias tendentes a localizar y hacer entrega de los restos mortales del señor Santiago Gómez Palomino a sus familiares, a fin de que éstos puedan realizar los ritos funerarios según sus costumbres y creencias. Además, el Estado debe brindar las condiciones necesarias para trasladar y dar sepultura a dichos restos en el lugar de elección de sus familiares, sin costo alguno para ellos.</p> <p>B.2) Determinación del paradero de Narciso González Medina</p> <p>287. La Comisión y los representantes solicitaron a la Corte que ordene al Estado realizar una investigación imparcial, diligente y efectiva del destino o paradero de Narciso González Medina. Asimismo, los representantes solicitaron que, en caso</p>

de fallecimiento, identifique sus restos mortales, ya sea dentro de la investigación penal o mediante otro procedimiento adecuado y efectivo. Asimismo, de encontrarse sus restos mortales, solicitaron que:

- a) sean entregados a sus familiares, a la mayor brevedad, “previa comprobación genética de filiación”, sin costo alguno y cubriéndose los gastos de sepultura, y
- b) se provea a la familia el acompañamiento psicológico y médico necesario.

288. En el presente caso ha quedado establecido que aún no se conoce el paradero del señor Narciso González Medina, por lo cual continúa desaparecido. El Tribunal resalta que la víctima desapareció hace diecisiete años y nueve

• 378 Cfr. Caso De la Masacre de las Dos Erres Vs. Guatemala, supra nota 6, r.245.

• 379 Cfr. Caso La Cantuta, supra nota 160, párr. 232; Caso Chitay Nech y otros, supra nota 25, párr. 241, y Caso Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña, supra nota 24, párr. 242.

• 380 Cfr. Caso Gomes Lund y otros (Guerrilha do Araguaia). Solicitud de Medidas Provisionales respecto de Brasil. Resolución de 15 de julio de 2009, Considerando 10.

18
pár

310; Caso de la Comunidad Moiwana, supra nota 3, párr. 208, y Caso 19 Comerciantes, supra nota 51, párr. 271.

El texto citado se relaciona con las siguientes resoluciones:

- 319 Cfr. Caso Neira Alegría y otros Vs. Perú. Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de septiembre de 1996. Serie C No. 29, párr. 69, y Caso Contreras y otros Vs. El Salvador, supra nota 51, párr. 190.
- 320 Cfr. Caso Masacre de las Dos Erres Vs. Guatemala, supra nota 166, párr. 245, y Caso Gomes Lund y otros (Guerrilha do Araguaia) Vs. Brasil, supra nota 53, párr. 261.
- 321 Cfr. Caso Masacre de las Dos Erres Vs. Guatemala, supra nota 166, párr. 245, y Caso Gomes Lund y otros (Guerrilha do Araguaia) Vs. Brasil, supra nota 53, párr. 261.
- 322 Cfr. Caso Contreras y otros Vs. El Salvador, supra nota 51, párr. 191.
- 323 Cfr. Caso Anzualdo Castro Vs. Perú, supra nota 150, párr. 185, y Caso Contreras y otros Vs. El Salvador, supra nota 51, párr. 192.

El texto citado se relaciona con las siguientes resoluciones:

• 86 Cfr. Caso de la Masacre de Mapiripán, supra nota 1, párrs. 305 y

lo sucedido.

- Práctica de comprobación genética de filiación a cargo del Estado.
- Obligación a cargo del Estado de realizar la búsqueda e identificación de la víctima, a la mayor brevedad, de manera sistemática y rigurosa con recursos humanos, técnicos y científicos adecuados e idóneos.
- Cooperación internacional para el cumplimiento de los objetivos.

meses, por lo cual es una expectativa justa de sus familiares que se identifique su paradero, lo que constituye una medida de reparación y, por lo tanto, genera el deber correlativo para el Estado de satisfacerla 319.

289. Recibir el cuerpo de una persona desaparecida forzosamente es de suma importancia para sus familiares, ya que les permite sepultarlo de acuerdo con sus creencias, así como cerrar el proceso de duelo que han estado viviendo a lo largo de estos años 320. Adicionalmente, el Tribunal considera que los restos son una prueba de lo sucedido y, junto al lugar en el cual sean encontrados, pueden proporcionar información valiosa sobre los autores de las violaciones o la institución a la que pertenecían 321.

290. En consecuencia, es necesario que el Estado efectúe una búsqueda seria por la vía judicial y administrativa adecuada, en la cual realice todos los esfuerzos para determinar el paradero de Narciso González Medina a la mayor brevedad, la cual deberá realizarse de manera sistemática y rigurosa, contar con los recursos humanos, técnicos y científicos adecuados e idóneos y, en caso de ser necesario, deberá solicitarse la cooperación de otros Estados. Las referidas diligencias deberán ser informadas a sus familiares y en lo posible procurar su presencia 322.

291. En caso de que luego de las diligencias realizadas por el Estado, la víctima se encontrara fallecida, los restos mortales deben ser entregados a sus familiares, previa comprobación genética de filiación, a la mayor brevedad posible y sin costo alguno para ellos. Además, el Estado deberá cubrir los gastos fúnebres, en su caso, de común acuerdo con sus familiares 323.

- Obligación a cargo del Estado de realizar la búsqueda e identificación de la víctima, a la mayor brevedad, de manera sistemática y rigurosa, con recursos humanos, técnicos y científicos adecuados e idóneos.
- Localización de restos mortales.
- Derecho a la verdad.
- Deber a cargo del Estado de cubrir los gastos funerarios.

Caso Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña Vs. Bolivia
Sentencia de 1 de septiembre de 2010 (Fondo, Reparaciones Y Costas)
Párr. 111 y 242, págs. 39 y 76

Detención y posterior desaparición del señor José Luis Ibsen Peña

111. En el marco de la búsqueda de los restos del señor José Luis Ibsen Peña, el 19 de abril de 2006, se llevó a cabo una inspección ocular en el lugar en el cual, de acuerdo con la declaración del señor Elías Moreno Caballero, quien figuraba como imputado en la causa penal actualmente abierta en relación con los hechos del presente caso 149 (infra párrs. 138 a 150), se encontraban los restos mortales del señor Ibsen Peña. Sin embargo, se llegó a la conclusión de que la descripción del lugar “era muy vaga, [...] y [porque dicho] lugar había sido modificado en su topografía por una riada” 150. Asimismo, el 22 de agosto de 2006 se encontraron en el cementerio de La Cuchilla, en la ciudad de Santa Cruz, unos restos óseos de cráneo, rótulas, húmeros, fémur y parte del maxilar inferior con cuatro dientes, a partir de una extracción realizada mediante un brazo mecánico retroexcavador dentado 151. El 5 de septiembre de 2006 se informó al Juzgado Séptimo de Partido en lo Civil y Comercial de Santa Cruz que los mencionados restos óseos se encontraban bajo estudio de confirmación de identidad en el Instituto de Investigaciones Forenses 152. La Corte constata que no obra en el expediente más información sobre las diligencias adelantadas para la búsqueda del paradero del señor José Luis Ibsen Peña.

Determinación del paradero de José Luis Ibsen Peña

242. Sobre este punto, la Corte valora positivamente que el Estado haya decidido dar prioridad a la búsqueda del señor José Luis Ibsen Peña. En este sentido, es necesario que el Estado efectúe una búsqueda seria, en la cual realice todos los esfuerzos posibles para determinar su paradero a la brevedad. El Tribunal resalta que el señor Ibsen Peña desapareció hace treinta y siete años, por lo cual es una expectativa justa de sus familiares que el Estado emprenda medidas eficaces para dar con su paradero. En caso de que luego de las diligencias realizadas por el Estado el señor Ibsen Peña fuera encontrado sin vida, los restos previamente identificados deberán ser entregados a sus familiares a la mayor brevedad y sin costo alguno. Además, el Estado deberá cubrir los gastos fúnebres, en su caso, de común acuerdo con sus familiares.

El texto citado se relaciona con las siguientes resoluciones:

- 149 El 21 de octubre de 2008 el abogado defensor del señor Elías Moreno Caballero informó al Juez Séptimo de Partido en lo Civil y Comercial de la Capital sobre el fallecimiento del imputado a causa de un infarto agudo extenso. Cfr. Certificado de defunción de Elías Moreno Caballero y escrito de 21 de octubre de 2008 (Expediente Judicial 37/2000, Cuerpo 27, folios 10593 a 10594 y 19394 a 19395).
- 150 Cfr. “Acta de audiencia pública, para verificar el lugar y ubicación donde supuestamente se encontraría[n] los restos mortales de José Luis Ibsen Peña” (Expediente Judicial 37/2000, Cuerpo 21, folios 8956, 8960, 17752 y 17756).
- 151 Cfr. Nota de prensa publicada el 23 de agosto de 2006 en La Prensa, “Hallan restos de un victimado”
- 268 Cfr. Caso Anzualdo Castro Vs. Perú, supra nota 44, párr. 185, y Caso Radilla Pacheco Vs. México, supra nota 8, párr. 241. (expediente de anexos al escrito de solicitudes y argumentos, PD-182, folio 2597), y nota de prensa publicada el 23 de agosto de 2006 en El Deber, “Hallaron restos óseos de una posible víctima de la dictadura” (expediente de anexos a la demanda, anexo 29, folio 2468).
- 152 Cfr. Escrito del Ministerio Público de Santa Cruz de la Sierra dirigido al Juzgado Séptimo de Partido en lo Civil y Comercial de Santa Cruz, de 1 de septiembre de 2006 (expediente de anexos ala demanda, anexo 24, folios 2251 a 2252).

- Modalidades empleadas para destruir evidencias.
- Concepto de "entierro secundario".
- Deber del Estado de identificar los restos mortales.
- Derecho de los familiares de conocer dónde se encuentran los restos mortales de las víctimas.
- Localización de restos mortales como forma de reparación.
- Trato respetuoso de restos mortales.

10. En cuanto a las "modalidades empleadas para destruir evidencias" de los crímenes cometidos, la Corte recuerda que la propia CVR indicó que éstas incluían, entre otras, "la mutilación o incineración" de los restos mortales de las víctimas (párr. 80(7)). En el presente caso de La Cantuta, la Corte dio por probado que los "restos óseos calcinados" encontrados en Cieneguilla correspondían a un "entierro secundario", por cuando ya "habían permanecido en otras fosas" y, luego de haber sido extraídos y quemados ("los cuerpos fueron quemados en estado de putrefacción"), fueron "depositados y enterrados en la zona de Chavilca" (párr. 85(34)). O sea, la violación del principio de la dignidad de la persona humana se dio tanto en la vida como en la pos-vida.

80.34. Los exámenes periciales concluyeron que los restos óseos calcinados encontrados en Cieneguilla correspondían a un entierro secundario, "lo que significa que estos restos anteriormente habían permanecido en otras fosas y que luego de haber sido extraídos y quemados fueron depositados y enterrados en la zona de Chavilca y que los cuerpos fueron quemados en estado de putrefacción".

b) Búsqueda y sepultura de los restos de las víctimas desaparecidas

229. En el presente caso ha quedado establecido que Hugo Muñoz Sánchez, Dora Oyague Fierro, Marcelino Rosales Cárdenas, Armando Richard Amaro Córdor, Robert Edgar Teodoro Espinoza, Heráclides Pablo Meza, Juan Gabriel Mariños Figueroa y Felipe Flores Chipana permanecen desaparecidos (supra párr. 80.16).

230. Asimismo, ha sido probado que durante las exhumaciones en Cieneguillas y Huachipa se encontraron algunos restos de huesos y pertenencias de algunas de las víctimas, aunque no consta que se hayan realizado las diligencias necesarias para identificar todos los restos encontrados en las fosas clandestinas. Tampoco consta que el Estado haya emprendido las demás diligencias pertinentes para buscar y en su caso identificar los restos de las víctimas desaparecidas, mencionadas en el párrafo anterior.

231. El derecho de los familiares de conocer dónde se encuentran los restos mortales de éstas 183 constituye una medida de reparación y por tanto una expectativa que el Estado debe satisfacer a los familiares de las víctimas 184. Asimismo, el Tribunal ha señalado que los restos mortales de una persona merecen ser tratados con respeto ante sus deudos, por la significación que tienen para éstos 185.

232. La Corte considera que el Estado deberá proceder de inmediato a la búsqueda y localización de los restos mortales de Hugo Muñoz Sánchez, Dora Oyague Fierro, Marcelino Rosales Cárdenas, Armando Richard Amaro Córdor, Robert Edgar Teodoro Espinoza, Heráclides Pablo Meza, Juan Gabriel Mariños Figueroa y Felipe Flores Chipana, ya sea mediante la identificación de los otros restos encontrados en Cieneguilla y Huachipa, o mediante las diligencias pertinentes para dichos efectos en ese o cualquier otro lugar en que haya indicios que se encuentren los mencionados restos. Si éstos se encuentran, el Estado deberá entregarlos a la brevedad posible a sus familiares, previa comprobación genética de filiación. Además, el Estado deberá cubrir los gastos de entierro de éstos, de común acuerdo con los familiares de los mismos.

El texto citado se relaciona con las siguientes resoluciones:

• 183 Cfr. Caso Goiburú y otros, supra nota 1, párr. 171; Caso de la Masacre de Pueblo Bello, supra nota 3, párrs. 270-273, y Caso 19 Comerciantes, supra nota 110, párr. 265.

• 184 Cfr. Caso Goiburú y otros, supra nota 1, párr. 171; Caso 19 Comerciantes, supra nota 110, párr. 265, y Caso Juan Humberto Sánchez, supra nota 98, párr. 187.

• 185 Cfr. Caso Goiburú y otros, supra nota 1, párr. 171; Caso Baldeón García, supra nota 163, párr. 208, y Caso Acevedo Jaramillo y otros, supra nota 16, párr. 315.

Caso La Cantuta Vs. Perú

Sentencia de 29 de noviembre de 2006
(Fondo, Reparaciones y Costas)
Párr. 10, 80.34, 229-232, pág. 3, 39, 110

- Obligación a cargo del Estado de realizar la búsqueda e identificación de la víctima, a la mayor brevedad posible.
- Localización de restos mortales.
- Derecho a la verdad.
- Deber a cargo del Estado de cubrir los gastos funerarios.
- Respeto de los usos y costumbres de pueblos y comunidades indígenas.

Caso Tiu Tojín Vs. Guatemala

Corte Interamericana de Derechos Humanos
Sentencia de 26 de noviembre de 2008
(Fondo, Reparaciones y Costas)

Párr. 103, pág 35.

103. La Corte ha establecido que María y Josefa Tiu Tojín se encuentran aún desaparecidas y su paradero se desconoce. La investigación efectiva de su paradero o de las circunstancias de su desaparición, constituye una medida de reparación y por tanto una expectativa que el Estado debe satisfacer. Por ello, el Estado deberá proceder de inmediato a la búsqueda y localización de María y Josefa Tiu Tojín mediante las diligencias pertinentes para dichos efectos, en particular, en el lugar donde fueron vistas por última vez con vida o en cualquier otro lugar en el cual existan indicios de su ubicación. En caso de que las víctimas fueran halladas sin vida, el Estado, en un tiempo breve, deberá entregar los restos a sus familiares, previa comprobación genética de filiación. Los gastos que dichas diligencias generen deberán ser cubiertos por el Estado. Asimismo, el Estado deberá cubrir, en su caso, los gastos fúnebres, respetando las tradiciones y costumbres de los familiares de las víctimas.

563. En el presente caso, ha quedado establecido que aún no se conoce el paradero de once de las víctimas desaparecidas, incluyendo a diez víctimas desaparecidas forzosamente y a Norma Constanza Esquerro. Este Tribunal resalta que han transcurrido 29 años desde las desapariciones objeto de este

El texto citado se relaciona con las siguientes resoluciones:

- 868 Cfr. Caso Neira Alegría y otros Vs. Perú. Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de septiembre de 1996. Serie C No. 29, párr. 69, y Caso Rocha Hernández y otros Vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones

- Obligación a cargo del Estado de realizar la búsqueda e identificación de la víctima, a la mayor brevedad posible.
- Localización de restos mortales.
- Derecho a la verdad.
- Deber a cargo del Estado de cubrir los gastos funerarios.
- Respeto de las costumbres de los familiares.
- Garantía de no repetición.
- Práctica de comprobación genética de filiación a cargo del Estado.
- Cooperación internacional para el cumplimiento de los objetivos.

Caso Rodríguez Vera y otros (Desaparecidos del Palacio de Justicia) Vs. Colombia

Sentencia De 14 de noviembre de 2014

(Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas) Párr. 563, 564, 565 y 576, pág. 193, 194 y 197.

(Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas) Párr. 563, 564, 565 y 576, pág. 193, 194 y 197

caso, por lo cual es una expectativa justa de sus familiares que se identifique su paradero, lo que constituye una medida de reparación y, por lo tanto, genera el deber correlativo para el Estado de satisfacerla 868. Recibir los cuerpos de sus seres queridos es de suma importancia para sus familiares, ya que les permite sepultarlos de acuerdo con sus creencias, así como cerrar el proceso de duelo que han estado viviendo a lo largo de estos años 869. Adicionalmente, la Corte resalta que los restos de una persona fallecida y el lugar en el cual sean encontrados pueden proporcionar información valiosa sobre lo sucedido y sobre los autores de las violaciones o la institución a la que pertenecían 870 particularmente tratándose de agentes estatales 871.

564. La Corte valora positivamente la voluntad manifestada por Colombia respecto de la búsqueda de víctimas desaparecidas y considera que es un paso importante para la reparación en el presente caso. En este sentido, es necesario que el Estado efectúe una búsqueda rigurosa por la vía judicial y administrativa pertinente, en la cual realice todos los esfuerzos para determinar, a la mayor brevedad, el paradero de las once víctimas cuyo destino aún se desconoce, la cual deberá realizarse de manera sistemática y contar con los recursos humanos, técnicos y científicos adecuados e idóneos y, en caso de ser necesario, deberá solicitarse la cooperación de otros Estados. Para las referidas diligencias se debe establecer una estrategia de comunicación con los familiares y acordar un marco de acción coordinada, para procurar su participación, conocimiento y presencia, conforme a las directrices y protocolos en la materia 872. Si las víctimas o alguna de ellas se encontrare fallecida, los restos mortales deberán ser entregados a sus familiares, previa comprobación fehaciente de identidad, a la mayor brevedad posible y sin costo alguno para ellos. Además, el Estado deberá cubrir los gastos fúnebres, en su caso, de común acuerdo con los familiares 873

565. Por otra parte, la Corte toma nota de la solicitud de los representantes para que se cree una comisión especial de búsqueda para las víctimas desaparecidas de este caso concreto. Este Tribunal no considera necesario ordenar la creación de una comisión especial, sino que estima pertinente que el Estado determine el medio por el cual realizará la búsqueda e identificación de las víctimas desaparecidas en el presente caso, en una forma tal que permita la participación de sus familiares y tome en cuenta las consideraciones realizadas en esta Sentencia.

y Costas. Sentencia de 14 de octubre de 2014. Serie C No. 285, párr. 196.

• 869 Cfr. Caso Masacre de las Dos Erres Vs. Guatemala. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, párr. 245, y Caso Osorio Rivera y Familiares Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de noviembre de 2013. Serie C No. 274, párr. 250.

• 870 Cfr. Caso Masacre de las Dos Erres Vs. Guatemala. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, párr. 245, y Caso Osorio Rivera y Familiares Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de noviembre de 2013. Serie C No. 274, párr. 250.

871 Cfr. Caso Masacres de Río Negro Vs. Guatemala. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de septiembre de 2012. Serie C No. 250, párr. 266, y Caso Gudiel Álvarez y otros ("Diario Militar") Vs. Guatemala. Fondo Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 noviembre de 2012 Serie C No. 253, párr. 333. 872 Cfr. Caso Contreras y otros Vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2011. Serie C No. 232, párr. 191, y Caso Osorio Rivera y Familiares Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de noviembre de 2013. Serie C No. 274, párr. 251. 873 Cfr. Caso Anzualdo Castro Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de septiembre de 2009. Serie C No. 202, párr. 185, y Caso Rochac Hernández y otros Vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 14 de octubre de 2014. Serie C No. 285, párr. 199.

• 880 Cfr. Caso Cantoral Benavides Vs. Perú. Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de diciembre de 2001. Serie C No. 88, párr. 81, y Caso Osorio Rivera y Familiares Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo,

576. La Corte valora positivamente las disculpas ofrecidas por el Estado durante la audiencia pública celebrada el 12 de noviembre de 2013, así como el reconocimiento parcial de responsabilidad, lo cual podría representar una satisfacción parcial para las víctimas frente a las violaciones declaradas en la presente Sentencia (supra párrs. 20, 21 y 26). Sin perjuicio de lo anterior, como lo ha hecho en otros casos 880, la Corte estima necesario, con el fin de reparar el daño causado a las víctimas y de evitar que hechos como los de este caso se repitan, disponer que el Estado realice un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional en Colombia, en relación con los hechos de este caso. En dicho acto se deberá hacer referencia a las violaciones de derechos humanos declaradas en la presente Sentencia. Asimismo, deberá llevarse a cabo mediante una ceremonia pública en presencia de altos funcionarios del Estado y las víctimas del caso. El Estado deberá acordar con las víctimas o sus representantes la modalidad de cumplimiento del acto público de reconocimiento, así como las particularidades que se requieran, tales como el lugar y la fecha para su realización. Para ello, el Estado cuenta con el plazo de un año, contado a partir de la notificación de la presente Sentencia.

Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de noviembre de 2013. Serie C No. 274, párr. 264.

- 24
- Obligación de localizar los restos de las víctimas como otra forma de reparación.
 - Investigar los hechos, identificar,

335. La Comisión solicitó a la Corte que ordene al Estado la localización del paradero del señor Radilla Pacheco o, en su defecto, la entrega de sus restos mortales a los familiares. Los representantes solicitaron a la Corte que el Estado

318 Cfr. Caso del Caracazo Vs. Venezuela. Reparaciones y Costas, supra nota 317, párr. 122; Caso Ticona Estrada Vs. Bolivia, supra nota 23, párr. 84, y Caso Anzualdo Castro Vs. Perú, supra nota 44, párr. 185.

juzgar y, en su caso, sancionar a los responsables materiales e intelectuales.

- Localización e identificación de los restos mortales y su valor como prueba de lo sucedido.
- Práctica de comprobación genética de filiación a cargo del Estado.
- Obligación a cargo del Estado de realizar la búsqueda e identificación de la víctima, a la mayor brevedad, de manera sistemática y rigurosa, con recursos humanos, técnicos y científicos adecuados

**Caso Radilla Pacheco
vs. Estados Unidos
Mexicanos**

Sentencia de 23 de
noviembre de 2009
(Excepciones
Preliminares, Fondo,
Reparaciones y Costas)
Párr. 335 y 336, pág. 91
Y 92

cumpla lo anterior, realizando las exhumaciones correspondientes en presencia de los familiares, sus peritos y representantes legales. El Estado, por su parte, informó que ha realizado ciertas diligencias para encontrar el paradero de la víctima o el de sus restos mortales (supra párrs. 207 a 208).

336. En el presente caso ha quedado establecido que el señor Rosendo Radilla Pacheco continúa desaparecido (supra párr. 158). En consecuencia, el Estado debe, como una medida de reparación del derecho a la verdad que tienen las víctimas 318, continuar con su búsqueda efectiva y localización inmediata, o de sus restos mortales, ya sea a través de la investigación penal o mediante otro procedimiento adecuado y efectivo. Las diligencias que realice el Estado para establecer el paradero del señor Radilla Pacheco o, en su caso, las exhumaciones para localizar sus restos mortales deberán realizarse en acuerdo con y en presencia de los familiares del señor Rosendo Radilla, peritos y representantes legales. Además, en el evento de que se encuentren los restos mortales del señor Radilla Pacheco, éstos deberán ser entregados a sus familiares previa comprobación genética de filiación, a la mayor brevedad posible y sin costo alguno. El Estado deberá cubrir los gastos funerarios, de acuerdo con las creencias de la familia Radilla Martínez y de común acuerdo con estos.

	<ul style="list-style-type: none"> • e idóneos. • Respeto de usos y costumbres de pueblos y comunidades. • Derecho a la verdad. 		
25	<ul style="list-style-type: none"> • Obligación a cargo del Estado de realizar la búsqueda e identificación de la víctima, a la mayor brevedad posible. • Localización de restos mortales. • <p>Establecimiento de un “plan de investigación y juzgamiento de hechos constitutivos de desaparición forzada de personas”.</p>	<p>Caso Radilla Pacheco vs. Estados Unidos Mexicanos</p> <p>Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Supervisión de cumplimiento de sentencia</p> <p>De 19 de mayo de 2011</p> <p>Párr. 1.9/1.12 y 10 pág. 1.</p>	<p>1.9. El Estado deberá continuar con la búsqueda efectiva y la localización inmediata del señor Rosendo Radilla Pacheco o, en su caso, de sus restos mortales, en los términos de los párrafos 335 a 336 de la [...] Sentencia.</p> <p>1.12. El Estado deberá implementar, en un plazo razonable y con la respectiva disposición presupuestaria, programas o cursos permanentes relativos al análisis de la jurisprudencia del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos en relación con los límites de la jurisdicción penal militar, así como un programa de formación sobre la debida investigación y juzgamiento de hechos constitutivos de desaparición forzada de personas, en los términos de los párrafos 345 a 348 de la [...] Sentencia.</p> <p>s.c om.</p>
26	<ul style="list-style-type: none"> • Alcances del Derecho de Acceso ala justicia de las víctimas. • Derecho a la verdad • Principio de plazo razonable y sus elementos para determinar la razonabilidad del plazo en el proceso penal 	<p>Caso de la masacre de Pueblo Bello vs. Colombia Sentencia de 31 de enero De 2005</p>	<p>171. En relación con la razonabilidad del plazo, este Tribunal ha señalado que el derecho de acceso a la justicia no se agota con el trámite de procesos internos, sino que éste debe además asegurar, en tiempo razonable, el derecho de las presuntas víctimas o sus familiares a que se haga todo lo necesario para conocer la verdad de lo sucedido y para que se sancione a los eventuales responsables</p> <p>229. Ciertamente la Corte ha establecido, respecto al principio del plazo razonable contemplado en el artículo 8.1 de la Convención Americana, que es preciso tomar en cuenta tres elementos para determinar la razonabilidad del plazo en el que se desarrolla obstante, la pertinencia de aplicar esos tres criterios para determinar la no. 60534/00, § 23, 24 May 2005; Panchenko v. Russia, no. 45100/98, razonabilidad del plazo de un proceso depende de las circunstancias de cada § 129, 8 February 2005, y Todorov v. Bulgaria, no. 39832/98, § 45, 18 caso 231. En efecto, dadas las particularidades del presente caso, la Corte January 2005.</p> <p>El párrafo citado se encuentra relacionado con las siguientes sentencias:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 229 Cfr. Caso de la “Masacre de Mapiripán”, supra nota 7, párr. 216; Caso de las Hermanas Serrano Cruz, supra nota 214, párr. 66, y Caso 19 Comerciantes, supra nota 192, párr. 188. • 230 Cfr. Caso García Asto y Ramírez Rojas, supra nota 10, párr. 166; Caso de la “Masacre de Mapiripán”, supra nota 7, párr. 217, y Caso de la Comunidad Moiwana, supra nota 7, párr. 160. En igual sentido cfr. European Court of Human Rights. Wimmer v. Germany, <p>En igual sentido, Caso García Asto y Ramírez Rojas, supra nota 10, párr. 167.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • Diligencias mínimas 	<p>a realizar en caso de muerte por</p>	<p>ejecución extrajudicial</p> <ul style="list-style-type: none"> • Las faltas cometidas en las diligencias de <p>búsqueda y exhumación de</p>

cadáveres suponen graves faltas al deber de investigar.

Caso de la masacre de Pueblo Bello vs.

Colombia Sentencia de 31 de enero De 2006

Párr. 177 y 178, págs.

119 y 120

177. En este sentido, con base en el Manual sobre la Prevención e Investigación

Efectiva de Ejecuciones Extrajudiciales, Arbitrarias y Sumarias de Naciones Unidas, este Tribunal ha especificado los principios rectores que es preciso observar cuando se considera que una muerte pudo deberse a una ejecución extrajudicial. Las autoridades estatales que conducen una investigación deben intentar como mínimo, inter alia:

- a) identificar a la víctima;
- b) recuperar y preservar el material probatorio relacionado con la muerte, con el fin de ayudar en cualquier potencial investigación penal de los responsables;
- c) identificar posibles testigos y obtener sus declaraciones en relación con la muerte que se investiga;
- d) determinar la causa, forma, lugar y momento de la muerte, así como cualquier patrón o práctica que pueda haber causado la muerte, y
- e) distinguir entre muerte natural, muerte accidental, suicidio y homicidio.

El párrafo citado se encuentra relacionado con las siguientes sentencias:

• 233 Cfr. Caso de la “Masacre de Mapiripán”, supra nota 7, párr. 224; Caso de la Comunidad Moiwana, supra nota 7, párr. 149, y Caso Juan Humberto Sánchez, supra nota 189, párr. 127 y 132. En igual sentido, Manual Sobre la Prevención e Investigación Efectiva de Ejecuciones Extrajudiciales, Arbitrarias y Sumarias de las Naciones Unidas, Doc. E/ST/CSDHA/12 (1991).

Además, es necesario investigar exhaustivamente la escena del crimen, se deben realizar autopsias y análisis de restos humanos, en forma rigurosa, por profesionales competentes y empleando los procedimientos más apropiados 233.

178. La negligencia de las autoridades judiciales encargadas de examinar las circunstancias de la masacre mediante la recolección oportuna de pruebas in situ, no puede ser subsanada con las tardías diligencias probatorias para buscar y exhumar restos mortales en el cementerio de San Antonio de Montería y en otras localidades, que la Fiscalía General de la Nación reinició a partir de febrero de 2003, es decir, más de 13 años después de ocurridos los hechos. Las insuficiencias señaladas pueden ser calificadas como graves faltas al deber de investigar los hechos, pues han afectado una efectiva o mejor identificación de los cuerpos encontrados y la determinación del paradero de 37 de las 43 presuntas víctimas que permanecen desaparecidas.

<p>28</p> <ul style="list-style-type: none"> • Empleo del Manual de Naciones Unidas sobre la Prevención e Investigación Eficaces de Ejecuciones Extralegales, Arbitrarias y Sumarias y el Informe del Secretario General sobre derechos humanos y ciencia forense, para la recuperación de restos de personas desaparecidas. • Entrega de restos mortales. • Respeto a las costumbres y creencias. • Deber a cargo del Estado en la entrega de restos mortales. 	<p>Caso de la masacre de Pueblo Bello vs. Colombia Sentencia de 31 de enero De 2006 Párr. 270-273, págs. 145 y 146</p>	<p>270. La Corte considera indispensable que, para efectos de las reparaciones, el Estado busque e identifique a las víctimas desaparecidas. Pese a que el Tribunal ha tomado en consideración las acciones emprendidas por el Estado para recuperar los restos de las personas desaparecidas, éstas no han sido suficientes ni efectivas. El Estado deberá completar dichas labores, así como cualquier otra que resulte necesaria, para lo cual deberá emplear todos los medios técnicos y científicos posibles, tomando en cuenta las normas pertinentes en la materia, tales como las establecidas en el Manual de Naciones Unidas sobre la Prevención e Investigación Eficaces de Ejecuciones Extralegales, Arbitrarias y Sumarias, así como en el Informe del Secretario General sobre derechos humanos y ciencia forense presentado de conformidad con la resolución 1992/24 de la Comisión de Derechos Humanos del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas.</p> <p>271. Independientemente de estas acciones específicas, el Estado debe garantizar que las entidades oficiales correspondientes hagan uso de estas normas como parte de su instrumental para efectos de la búsqueda e identificación de personas desaparecidas o privadas de su vida.</p> <p>272. Para hacer efectiva y viable la identificación de las víctimas desaparecidas de la masacre de Pueblo Bello, la recuperación de los restos de aquéllas y la entrega a sus familiares, el Estado deberá publicar en un medio de radiodifusión, uno de televisión y uno de prensa escrita, todos ellos de cobertura nacional y regional en los departamentos de Córdoba y Urabá, un anuncio mediante el cual se solicite al público que aporte información para estos efectos y se indiquen las autoridades encargadas de estas gestiones.</p> <p>273. Cuando se encuentren e identifiquen restos mortales el Estado deberá entregarlos a la brevedad posible a sus familiares, previa comprobación genética de filiación, para que puedan ser honrados según sus respectivas creencias. Además, el Estado deberá cubrir los gastos de entierro de éstas, de común acuerdo con los familiares de las mismas.</p>	<p>S. com.</p>
---	---	--	----------------

29	<ul style="list-style-type: none"> • Deber a cargo del Estado de investigar. 	<p>Caso del Caracazo Vs. Venezuela Sentencia de 29 de agosto de 2002 (Reparaciones y Costas) Párr. 118, pág. 106 y 107.</p>	<p>118. Es, pues, menester, que el Estado emprenda una investigación efectiva de los hechos de este caso, identifique a los responsables de los mismos, tanto materiales como intelectuales, así como eventuales encubridores, y los sancione administrativa y penalmente según corresponda. Los procesos internos de que se trata deben versar sobre las violaciones del derecho a la vida, del derecho a la integridad personal y del derecho a las garantías judiciales, el debido proceso y el acceso a un recurso efectivo, a las que se refiere la sentencia de fondo. También deberán referirse a la utilización de fosas comunes mediante inhumaciones irregulares y al encubrimiento de la utilización de la misma. Los familiares de las víctimas y las víctimas sobrevivientes deberán tener pleno acceso y capacidad de actuar, en todas las etapas e instancias de dichas investigaciones, de acuerdo con la ley interna y las normas de la Convención Americana. Los resultados de éstas deberán ser públicamente divulgados, para que la sociedad venezolana conozca la verdad.</p>	s.com.
30	<ul style="list-style-type: none"> • Atención a violaciones de derechos fundamentales en los procesos de derecho interno. • Deber del Estado de investigar inhumaciones irregulares. • Derecho de las víctimas a conocer ya acceder a las investigaciones. • Derecho a la verdad. • Entrega de restos mortales como acto de reparación. • Deber a cargo del Estado de entregar los restos mortales a los familiares de las víctimas • Deber a cargo del Estado de cubrir los gastos con motivo de traslado e inhumación de restos mortales. • Deber del Estado de utilizar las técnicas e instrumentos idóneos para para los procesos de exhumación e identificación. 	<p>Caso del Caracazo Vs. Venezuela Corte Interamericana de Derechos Humanos Sentencia de 29 de agosto de 2002 (Reparaciones y Costas) Párr. 122 - 126, págs. 107 y 108.</p>	<p>122. Este Tribunal ha señalado en reiteradas ocasiones que asiste a los familiares el derecho a saber dónde se encuentran los restos mortales de su ser querido. También ha afirmado que las demandas de aquéllos al respecto corresponden a "una justa expectativa que el Estado debe satisfacer con los medios a su alcance"194.</p> <p>123. La Corte considera que la entrega de los restos mortales constituye un acto de reparación en sí mismo porque conduce a dignificar a las víctimas, al hacerle honor al valor que su memoria tiene para los que fueron sus seres queridos y permitirles a éstos darles una adecuada sepultura 195.</p> <p>124. El Estado debe, en consecuencia, localizar, exhumar, identificar mediante el uso de técnicas e instrumentos sobre cuya idoneidad no exista sombra de duda, y entregar a los familiares, los restos de las víctimas a las que se ha hecho referencia en los párrafos inmediatamente anteriores. Los costos de la consiguiente inhumación, en el lugar escogido por los familiares deben correr a cargo del Estado. Los restos mortales de la señora Elsa Teotiste Ramírez Caminero, conforme al deseo de sus familiares, deben ser trasladados y sepultados, a costa del Estado, en la República Dominicana, que era el país de origen de la víctima.</p> <p>125. El Estado debe, además, localizar, exhumar, identificar y entregar a los familiares los restos de aquellas personas cuyas muertes no fueron imputadas al Estado en la sentencia de fondo, pero a cuyos familiares les asiste también el derecho a conocer el paradero de aquéllos. Las personas en mención son las siguientes: Jesús Salvador Cedeño, Jesús Rafael Villalobos, Abelardo Antonio Pérez y Andrés Eloy Suárez Sánchez, quienes son víctimas de la violación de los artículos 8 y 25 de la Convención.</p> <p>126. En orden a impulsar los procesos penales relacionados con los hechos, proporcionar garantías de no repetición de estos últimos, dar pasos en la lucha contra la impunidad, y avanzar en la localización de los restos mortales del conjunto de las víctimas a las que se ha hecho referencia, es pertinente que el Estado procure tomar las medidas necesarias para reanudar y llevar a su terminación, a la brevedad posible y con aplicación de técnicas e instrumentos idóneos, el proceso de exhumación e identificación de las personas inhumadas en el Sector "La Peste" del Cementerio General del Sur, de Caracas. En particular, debe reanudar y llevar a su conclusión el procedimiento de identificación de las personas cuyos cuerpos fueron exhumados en 1990 (supra párr. 66.7 y 66.8) y debe entregar los restos de las mismas a sus familiares, para que éstos les den una adecuada sepultura en el lugar de su elección.</p>	<p>El párrafo citado se encuentra relacionado con las siguientes sentencias:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 194 Caso Velásquez Rodríguez. Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C No. 4, párr. 181. Cfr. también, Caso Trujillo Oroza. Reparaciones, supra nota 2, párr. 113; y Caso Bámaca Velásquez. Reparaciones, supra nota 2, párr. 76. • 195 Caso Trujillo Oroza. Reparaciones, supra nota 2, párr. 115; Caso Bámaca Velásquez. Reparaciones, supra nota 2, párr. 81; y Caso Blake. Sentencia de 24 de enero de 1998. Serie C No. 36, párr. 115.

31	<ul style="list-style-type: none"> • Deber a cargo del Estado de investigar. • Derecho a la verdad. 	<p>Caso Durand y Ugarte Vs. Perú</p> <p>Corte Interamericana de Derechos Humanos Sentencia de 16 de agosto de 2000</p> <p>(Fondo) Párr. 143, pág. 43.</p>	<p>143. La Corte considera que el Estado está obligado a investigar los hechos que produjeron las violaciones. Inclusive, en el supuesto de que las dificultades del orden interno impidiesen identificar a los individuos responsables por los delitos de esta naturaleza, subsiste el derecho de los familiares de las víctimas a conocer el destino de éstas y, en su caso, el paradero de sus restos. Corresponde al Estado, por tanto, satisfacer esas justas expectativas por los medios a su alcance. A este deber de investigar se suma el de prevenir la posible comisión de desapariciones forzadas y de sancionar a los responsables de las mismas. Tales obligaciones a cargo del Estado se mantendrán hasta su total cumplimiento.</p>	s.c OM.
32	<ul style="list-style-type: none"> • Búsqueda y localización de restos mortales como forma de reparación. • Derecho a la verdad • Entrega de restos mortales a las familias de las víctimas como forma de reparación. • Deber del Estado de entregar los restos mortales. • Tratamiento respetuoso de restos mortales por la significación que tienen para sus deudos. • Deber a cargo del Estado de practicar comprobación genética de filiación a los restos mortales previa entrega y cubrir los gastos de inhumación. 	<p>Caso Goiburú y otros Vs. Paraguay</p> <p>Corte Interamericana de Derechos Humanos Sentencia de 22 de septiembre de 2006 (Fondo, Reparaciones y Costas)</p> <p>Párr. 171, 172, pág. 92</p>	<p>171. El derecho de los familiares de los señores Agustín Goiburú Giménez, Carlos José Mancuello Bareiro y Rodolfo y Benjamín Ramírez Villalba de conocer dónde se encuentran los restos mortales de éstas 108, constituye una medida de reparación y por tanto una expectativa que el Estado debe satisfacer a los familiares de las víctimas 109. Asimismo, el Tribunal ha señalado que los restos mortales de una persona merecen ser tratados con respeto ante sus deudos, por la significación que tienen para éstos 110.</p> <p>172. La Corte considera indispensable que, para efectos de las reparaciones, el Estado proceda de inmediato a la búsqueda y localización de los restos mortales de los señores Agustín Goiburú Giménez, Carlos José Mancuello Bareiro y Rodolfo y Benjamín Ramírez Villalba. Si se encuentran dichos restos mortales, el Estado deberá entregarlos a la brevedad posible a sus familiares, previa comprobación genética de filiación. Además, el Estado deberá cubrir los gastos de entierro de éstos, de común acuerdo con los familiares de las mismas.</p>	<p>El párrafo citado se encuentra relacionado con las siguientes sentencias:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 108 Cfr. Caso de la Masacre de Pueblo Bello, supra nota 5, párrs. 270-273; Caso 19 Comerciantes, supra nota 60, párr. 265, y Caso Juan Humberto Sánchez. Sentencia de 7 de junio de 2003. Serie C No. 99, párr. 187. • 109 Cfr. Caso 19 Comerciantes, supra nota 60, párr. 265; Caso Juan Humberto Sánchez, supra nota 109, párr. 187, y Caso del Caracazo. Reparaciones (art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Sentencia de 29 de agosto de 2002. Serie C No. 95, párr. 122. • 110 Cfr. Caso Baldeón García, supra nota 6, párr. 208; Caso Acevedo Jaramillo y otros, supra nota 2, párr. 315, y Caso López Álvarez, supra nota 75, párr. 214.
	<ul style="list-style-type: none"> • Derecho a la verdad. • La vulneración de derecho a la verdad como forma de trato cruel e inhumano para los familiares de la víctima. 	<p>33</p> <p>(fondo, reparaciones y costas)</p> <p>Párr. 301, pág. 107</p> <p>Caso Gudiel Álvarez y otros (“Diario Militar”) vs. Guatemala</p> <p>Corte Interamericana de Derechos Humanos Sentencia de 20 de noviembre de 2012.</p>		

301. La Corte ha considerado que los familiares de las víctimas de graves violaciones a derechos humanos y la sociedad tienen el derecho a conocer la verdad, por lo que deben ser informados de lo sucedido 358. Por otra parte, en particular sobre casos de desaparición forzada, la Corte ha establecido que el derecho a conocer la verdad es parte del “derecho de los familiares de la víctima de conocer cuál fue el destino de ésta y, en su caso, dónde se encuentran sus restos” 359. La Corte ha indicado que la privación de la verdad acerca del paradero de una víctima de desaparición forzada acarrea una forma de trato cruel e inhumano para los familiares cercanos 360, por lo cual dicha violación del derecho a la integridad personal puede estar vinculada a una violación de su derecho a conocer la verdad 361.

El párrafo citado se encuentra relacionado con las siguientes sentencias:

- 358 Cfr. Caso Bámaca Velásquez Vs. Guatemala. Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de febrero de 2002. Serie C No. 91, párr. 76 y 77, y Caso Masacres de El Mozote y lugares aledaños Vs. El Salvador, supra, párr. 298.

- 359 Cfr. Caso Velásquez Rodríguez. Fondo, supra, párr. 181, y Caso Gelman Vs. Uruguay, supra, párr. 243.

- 360 Cfr. Caso Trujillo Oroza Vs. Bolivia. Fondo. Sentencia de 26 de enero de 2000. Serie C No. 64, párr. 114, y Caso González Medina y familiares Vs. República Dominicana, supra, párr. 270.

- 361 Cfr. Caso Anzualdo Castro Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de septiembre de 2009. Serie C No. 202, párr. 113.

Los párrafos citados se encuentran relacionados con las siguientes sentencias:

- 409 Cfr. Caso Neira Alegria y otros Vs. Perú. Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de septiembre de 1996. Serie C No. 29, párr. 69, y Caso Masacres de el Mozote y lugares aledaños Vs. El Salvador, supra, párr. 331.
- 410 Cfr. Caso Masacre de las Dos Erres Vs. Guatemala, supra, párr. 245 y Caso Masacres de el Mozote y lugares aledaños Vs. El Salvador, supra, párr. 331.
- 411 Cfr. Caso Masacre de las Dos Erres Vs. Guatemala, supra, párr. 245 y Caso Masacres de el Mozote y lugares aledaños Vs. El Salvador, supra, párr. 331.
- 412 Cfr. Caso Masacres de Río Negro Vs. Guatemala, supra, párr. 266.
- 413 Cfr. Caso Contreras y otros Vs. El Salvador, supra, párr. 191, y Caso González Medina y familiares Vs. República Dominicana, supra, párr. 290.
- 414 Cfr. Caso Anzueto Castro Vs. Perú, supra, párr. 185, y Caso Masacres de Río Negro Vs. Guatemala, supra, párr. 270.
- 415 Al respecto, el Estado resaltó que "la Comisión de Finanzas y Monea, y recientemente la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales del Congreso de la República, rindieron dictámenes favorables a la iniciativa de Ley 3590, la cual pretende crear la Comisión para la Búsqueda de Personas Víctimas de Desaparición Forzada y Otras Formas de Desaparición".

331. La Comisión solicitó a la Corte que ordene al Estado adoptar las medidas necesarias para buscar a las víctimas desaparecidas y, una vez sean identificados sus restos mortales se entreguen a sus familiares y se cubra los gastos de entierro. Las representantes concidieron con la solicitud de la Comisión respecto de las 24 víctimas que aún se encuentran desaparecidas. Además, solicitaron la creación de una "Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Víctimas de Desaparición Forzada durante el conflicto armado interno" con el fin de fortalecer el proceso de búsqueda y localización de las víctimas. Por su parte, el Estado se comprometió a promover la búsqueda de los restos mortales de las víctimas de desaparición, lo cual realizaría en coordinación con el Instituto de Ciencias Forenses, así como la FAFG, en lo que correspondiera. Respecto de la creación de la referida "Comisión Nacional de la Búsqueda", señaló que existe una iniciativa de ley, la cual cuenta con dos "dictámenes favorables" en el Congreso de la República.

332. El Tribunal nota que los familiares de las víctimas manifestaron la necesidad de que se encuentren los restos de los desaparecidos y les sean entregados, para tener certeza de lo que pasó, honrar sus restos según sus creencias y cerrar el proceso de duelo. En ese sentido, el perito Berstein resaltó que la demanda más importante de los familiares se relaciona con conocer la verdad de lo sucedido, el destino final de sus seres queridos y encontrar sus restos 408.

333. En el presente caso ha quedado establecido que aún no se conoce el paradero de 24 de las víctimas desaparecidas. El Tribunal resalta que han transcurrido más de 29 años desde la primera desaparición forzada objeto de este caso, por lo cual es una expectativa justa de sus familiares que se identifique su paradero, lo que constituye una medida de reparación y, por lo tanto, genera el deber correlativo para el Estado de satisfacerla 409. Recibir los cuerpos de las personas desaparecidas forzosamente es de suma importancia para sus familiares, ya que les permite sepultarlos de acuerdo a sus creencias, así como cerrar el proceso de duelo que han estado viviendo a lo largo de estos años 410. Adicionalmente, el Tribunal resalta que los restos de una persona fallecida y el lugar en el cual sean encontrados, pueden proporcionar información valiosa sobre lo sucedido y sobre los autores de las violaciones o la institución a la que pertenecían 411, particularmente tratándose de agentes estatales 412.

334. La Corte valora positivamente el compromiso asumido por Guatemala respecto de la búsqueda de las víctimas desaparecidas. En ese sentido, es necesario que el Estado efectúe una búsqueda seria por la vía judicial y administrativa adecuada, en la cual realice todos los esfuerzos para determinar el paradero de las 24 víctimas cuyo paradero aún se desconoce a la mayor brevedad, la cual deberá realizarse de manera sistemática y rigurosa, contar con los recursos humanos, técnicos y científicos adecuados e idóneos y, en caso de ser necesario, deberá solicitarse la cooperación de otros Estados. Las referidas diligencias deberán ser informadas a sus familiares y en lo posible procurar su presencia 413. Si las víctimas o alguna de ellas se encontrare fallecida, los restos mortales deben ser entregados a sus familiares, previa comprobación genética de filiación, a la mayor brevedad posible y sin costo alguno para ellos. Además, el Estado deberá cubrir los gastos funebres, en su caso, de común acuerdo con sus familiares 414.

335. En cuanto a la creación de la referida "Comisión Nacional de Búsqueda", la Corte toma nota y valora los avances realizados por el Estado al respecto 415. En este sentido, el Tribunal insta al Estado a continuar adelantando todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean necesarias para cumplir con la referida Comisión. La Corte considera que una entidad de esta tipo contribuirá

- Establecimiento de una "Comisión Nacional de Búsqueda"
- Deber a cargo del Estado de búsqueda, identificación y entrega de restos mortales.
- Deber a cargo del Estado de promover la búsqueda de restos mortales de personas desaparecidas.
- Derecho a la verdad.
- Respeto de usos y costumbres.
- Localización de víctimas de desaparición o sus restos como forma de reparación.
- Importancia del lugar en el que son localizados restos mortales.

- Derecho de los familiares de las víctimas de la exhumación, identificación y entrega de restos mortales.
- Derecho a la localización de restos mortales como parte del derecho a la verdad.
- Deber a cargo del Estado de localizar los restos mortales de personas desaparecidas.
- Respeto a los usos y costumbres.
- Carácter de prueba de los restos mortales.
- Relevancia del lugar de localización de restos para la investigación ministerial.
- Deber a cargo del Estado de investigar.
- Debida diligencia.
- Deber a cargo del Estado de realizar todas las acciones necesarias para lograr la exhumación e identificación de restos mortales, así como el empleo de todos los medios técnicos y científicos necesarios.

Caso de la masacre de las dos erres vs. Guatemala

Corte Interamericana De Derechos Humanos
Sentencia de 24 de noviembre de 2009
(Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas)
Párr. 244-249, págs. 71 y 72.

336. El Tribunal recuerda que en los casos Molina Thiessen Vs. Guatemala 416 y Masacres de Río Negro Vs. Guatemala 417, ordenó al Estado la implementación y creación de un banco de información genética para resguardar la información, por un lado, de los restos óseos que se vayan encontrando y exhumando y, por el otro, de los familiares de las personas que fueron presuntamente ejecutadas o desaparecidas durante los hechos perpetrados en el marco del conflicto armado. En consecuencia, la Corte no considera necesario ordenar de nuevo dicha medida de reparación. No obstante, el Tribunal insta al Estado a que, en el cumplimiento de esa medida, establezca mecanismos de cooperación e intercambio de información con los distintos órganos y organizaciones que han recolectado datos de este tipo en Guatemala, a fin de no multiplicar esfuerzos en la creación e implementación de la referida medida.

244. La Corte hace notar que si bien las víctimas del presente caso no son las personas fallecidas en la masacre, sino sus familiares y dos sobrevivientes, la exhumación, identificación y entrega de los restos es un derecho que corresponde a los familiares de las víctimas como medida de reparación para éstas.

245. Este Tribunal ha establecido que el derecho de los familiares de las víctimas de conocer donde se encuentran los restos de sus seres queridos constituye, además de una exigencia del derecho a conocer la verdad, una medida de reparación, y por lo tanto hace nacer el deber correlativo para el Estado de satisfacer estas justas expectativas. Recibir los cuerpos de las personas que fallecieron en la masacre es de suma importancia para sus familiares, ya que les permite sepultarlos de acuerdo a sus creencias, así como cerrar el proceso de duelo que han estado viviendo a lo largo de estos años. Los restos son una prueba de lo sucedido y ofrecen detalles del trato que recibió, la forma en que fue ejecutada, el modus operandi. El lugar mismo en el que los restos son encontrados puede proporcionar información valiosa sobre los perpetradores o la institución a la que pertenecían.

246. Este Tribunal valora las acciones emprendidas por el Estado en los años 1994 y 1995 para recuperar los restos de las personas ejecutadas, quienes fueron enterradas en fosas comunes y en el pozo del Parcelamiento de Las Dos Erres, mediante las cuales se lograron encontrar 162 osamentas (supra párr. 86). No obstante, dichos esfuerzos, la Corte observa que desde ese entonces, no se han realizado otras diligencias con el fin de buscar y localizar a las demás personas que fallecieron en la masacre, ni se han efectuado diligencias para identificar las osamentas ya ubicadas.

247. En consecuencia, la Corte considera que el Estado, dentro de un plazo seis meses, contado a partir de la notificación del presente Fallo, deberá iniciar de manera sistemática y rigurosa, con los recursos humanos y técnicos adecuados, y en seguimiento de las labores ya emprendidas por la Comisión de Identificación y Localización de Víctimas y Familiares de la Masacre de Las Dos Erres, cualquier otra acción que resulte necesaria para la exhumación e identificación de las demás personas ejecutadas. Para esto deberá emplear todos los medios técnicos y científicos necesarios, tomando en cuenta las normas nacionales o internacionales pertinentes en la materia 259 y deberá concluir con el total de las exhumaciones en un plazo de dos años, contado a partir de la notificación de la presente Sentencia.

Los párrafos citados se encuentran relacionados con las siguientes sentencias:

- 259 Tales como las establecidas en el Manual de Naciones Unidas sobre la Prevención e Investigación Efectiva de Ejecuciones Extrajudiciales, Arbitrarias y Sumarias. Caso de la Masacre de Mapiripán Vs. Colombia, supra nota 19, párr. 305.
- 260 Cfr. Caso Bámaca Velásquez Vs. Guatemala. Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de febrero de 2002. Serie C No. 91, párrs. 81 y 82; Caso La Cantuta Vs. Perú, supra nota 235, párr. 232, y Caso Anzualdo Castro Vs. Perú, supra nota 28, párr. 185.

- Deber de entregar los restos mortales a las familias previa comprobación genética de filiación, con gastos a cargo del Estado.
- Inhumación de personas no identificadas.
- Áreas determinadas para la inhumación de personas no identificadas.

248. En caso de identificar los restos, deberán ser entregados a sus familiares, previa comprobación genética de filiación, a la mayor brevedad y sin costo alguno para dichos familiares. Además, el Estado deberá cubrir los gastos de transporte y sepultura, de acuerdo a las creencias de sus familiares 260. Si los restos no son reclamados por ningún familiar en un plazo de dos años contado a partir de la fecha en que así lo informen a los familiares, el Estado deberá sepultarlos de forma individualizada en el cementerio de Las Cruces. En el referido cementerio se deberá determinar un área específica reservada e identificable para sepultarlos y hacer referencia a que se trata de personas no reclamadas fallecidas en la masacre de Las Dos Erres.

249. Para hacer efectiva y viable la individualización de las personas exhumadas, el Estado deberá anunciar a los representantes de las víctimas, a través de comunicación escrita, sobre el proceso de identificación y entrega de los restos de las personas fallecidas en la masacre y, en su caso, requerir su colaboración para los efectos pertinentes. Las copias de dichas comunicaciones deberán ser presentadas a la Corte para que sean consideradas dentro de la supervisión del cumplimiento de esta Sentencia.

- 36
- Deber a cargo del Estado de localizar y entregar los restos mortales de las víctimas.
 - Respeto a los usos y costumbres.
 - Deber a cargo del Estado de cubrir los gastos del traslado de restos mortales.

Caso Molina Theissen Vs. Guatemala
Corte Interamericana de Derechos Humanos
Sentencia de 3 de julio de 2004
(Reparaciones y Costas)
Párr. 85, págs. 43 y 44.

85. En cuanto a las garantías de no repetición de los hechos del presente caso, la Comisión y los representantes de la víctima y sus familiares solicitaron a la Corte que ordene al Estado determinar el paradero de los restos de la víctima y entregarlos a su familia. Este Tribunal considera que el Estado debe localizar y hacer entrega de los restos mortales de Marco Antonio Molina Theissen a sus familiares, a fin de que reciban sepultura según sus costumbres y creencias. Además, el Estado debe brindar las condiciones necesarias para trasladar dichos restos al lugar de elección de sus familiares, sin costo alguno para ellos, y satisfacer los deseos de la familia en relación con la sepultura.

S. com.

- 37
- Deber a cargo del Estado de establecer un sistema de información genética.

Caso Molina Theissen Vs. Guatemala
Corte Interamericana de Derechos Humanos
Sentencia de 3 de julio de 2004
(Reparaciones y Costas)
Párr. 91, pág. 45.

91. A la luz de lo anterior, la Corte considera que el Estado debe adoptar en su derecho interno, de acuerdo con el artículo 2 de la Convención, las medidas legislativas, administrativas y de cualquier otra índole que sean necesarias para crear:

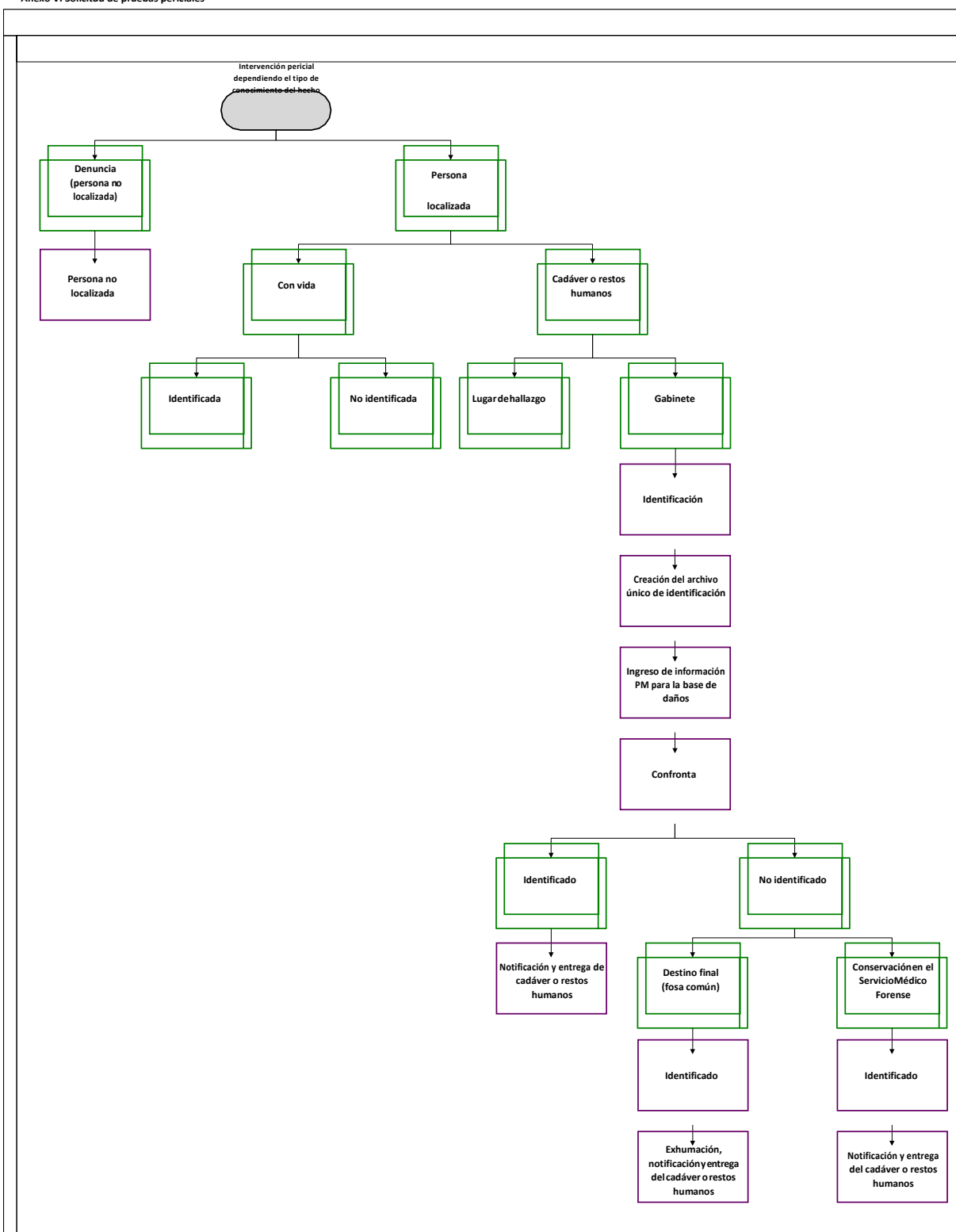
- a) un procedimiento expedito que permita obtener la declaración de ausencia y presunción de muerte por desaparición forzada, con fines de filiación, sucesión y reparación y demás efectos civiles relacionados con ella; y
- b) un sistema de información genética que permita la determinación y esclarecimiento de la filiación de los niños desaparecidos y su identificación.

s.com.

Anexo V. Solicitud de pruebas periciales

Protocolo de Investigación para los delitos de Desaparición forzada de personas y Desaparición cometida por particulares

Anexo V. Solicitud de pruebas periciales



Para la investigación de los delitos de desaparición forzada de personas o desaparición cometida por particulares y la posterior solicitud de diligencias básicas, es necesario atender la forma en que la/el AMP tiene conocimiento del hecho delictivo, es decir, si es que la investigación inicia conociendo el paradero de la

persona desaparecida (en caso de que haya sido localizada y se continúe la persecución del delito) ya sea con vida o sin vida; o que se desconozca su paradero.

Derivado de lo anterior, es necesario tener presente los supuestos de localización ante los cuales pudiera enfrentarse la/el AMP, ya que no basta tener presentes las actuaciones inmediatas para el tratamiento de la víctima directa con vida, pues previendo todos los posibles supuestos, quien investiga también debe estar preparado tanto para el tratamiento de un cadáver íntegro, como para el manejo de restos humanos. En todos los casos, se deberán emplear las técnicas forenses adecuadas para su recolección y conservación, lo cual permitirá la práctica de pruebas periciales idóneas y, a su vez, la obtención de datos de prueba pertinentes para el esclarecimiento del hecho.

Aunado a lo anterior, la práctica de pruebas periciales respecto a un cadáver o restos humanos localizados, también deberá aplicarse atendiendo al grado de descomposición de los mismos; pues pudieran localizarse cadáveres o restos humanos recientes y otros podrían llegar a presentar un alto grado de descomposición, incluso podría llegar a localizarse restos áridos; en estos casos el personal pericial indicará a quien investiga, cuáles son las pruebas o técnicas pertinentes y se continuará con la práctica de pruebas periciales en el mismo lugar del hallazgo o en gabinete. La importancia de la mención a estos diferentes supuestos de localización de la víctima, atiende a que a partir de ese descubrimiento quien investiga definirá la estrategia idónea para abordar cada caso en concreto. En esta actividad la/el AMP deberá atender las especificaciones que en lo particular contemplen los protocolos de la materia, relativos a la localización, conservación, identificación y entrega de cadáver, restos humanos u objetos que pertenecían a la víctima.

Para la solicitud de pruebas periciales es necesario que la/el AMP o Policías primero entablen comunicación con el personal de Servicios Periciales para asegurar la coordinación efectiva entre actores, y que se solicite la prueba pericial idónea que coadyuve a la investigación. Atendiendo al principio de inmediatez, el personal pericial promoverá la práctica, en el menor tiempo posible, de todas aquellas pruebas necesarias que contribuyan a la localización con vida de la persona desaparecida y con posterioridad, permitan el esclarecimiento de los hechos. En este sentido, es necesario que el solicitante, antes de solicitar la prueba pericial evalúe:

1. La especialidad requerida.
2. El lugar, fecha y hora dónde se deberá constituir la/el perita(o).
3. La definición de la hipótesis de investigación y como la prueba pericial contribuirá a su demostración.
4. El objetivo sobre el que contribuirá la prueba pericial.
5. El método o técnica que utilizará la/el perita(o) para realizar la prueba.
6. Las actividades que desarrollará la/el perita(o).

La gama de especialidades con las que cuentan los Servicios Periciales, así como el personal calificado a su disposición por cada una de estas, determinará el tipo de pruebas que pueden ser solicitadas durante la investigación. Se sugiere, como una buena práctica, elaborar un Catálogo de especialidades y de pruebas periciales en el que se detallen los servicios con los que cuenta la institución, los medios y procedimientos para la solicitud de pruebas, la estimación de los tiempos que toma realizar las pruebas, la disponibilidad de las/los peritas(os) con los que cuente la institución, así como la descripción de las materias en que se realizan las pruebas. Se recomienda consultar la Guía de Especialidades Periciales Federales (PGR: México, 2015), para una consulta de las diversas materias con las que cuenta la Coordinación General de Servicios Periciales de la Agencia de Investigación Criminal (Disponible en <https://bpo.sep.gob.mx/#/recurso/566>).

Además de la práctica de las pruebas pertinentes, los Servicios Periciales en el ámbito de sus facultades, contribuirán en la captura de los datos necesarios en el Registro Nacional, Registro de Personas fallecida y no identificada y todos los demás registros forenses que correspondan, de conformidad con la Ley General, lineamientos y manuales aplicables.

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL DIAGRAMA “Anexo V. Solicitud de pruebas periciales”.

La intervención de los servicios periciales se solicita dependiendo el tipo de conocimiento del hecho. Existen dos opciones:

Nota: La/el AMP antes de solicitar la intervención de servicios periciales podrá comunicarse a servicios periciales a efecto de coordinarse.

La/el AMP deberá señalar al momento de solicitar la intervención pericial lo siguiente: la especialidad (dependiendo las 26 especialidades), el lugar donde se deberá constituir la/el perita(o), así como la fecha y hora, el objetivo, especificar la actividad a desarrollar.

Las periciales son enunciativas más no limitativas.

- 1. Denuncia (Persona No Localizada)**
- 2. Noticia (Persona Localizada)**

1. Denuncia

- **Persona no localizada**

Periciales:

- ✓ Criminalística de campo
- ✓ Fotografía forense
- ✓ Química
- ✓ Genética
- ✓ Audio y video
- ✓ Ingeniería, informática y telecomunicaciones
- ✓ Dactiloscopia

2. Persona localizada

- **Existen dos opciones:**
 - a) **Con vida, existen dos modalidades:**

- **Identificada**

Periciales:

- ✓ Medicina forense
- ✓ Fotografía
- ✓ Audio y video
- ✓ Psicología
- ✓ Genética
- ✓ Química
- ✓ Dactiloscopia

- **No identificada**

Periciales:

- ✓ Medicina forense
- ✓ Antropología forense
- ✓ Genética
- ✓ Dactiloscopia
- ✓ Fotografía
- ✓ Audio y video
- ✓ Psicología

b) Cadáver o restos humanos, existen dos lugares:

Nota: El cadáver o restos humanos puede hallarse en un estado avanzado de descomposición o por muerte reciente, por lo que deberá tomarse en cuenta el Protocolo Nacional de Necropsia Médico Forense y el Protocolo para el Tratamiento e Identificación Forense².

- **Lugar de Hallazgo**

Periciales:

- ✓ Arqueología
- ✓ Antropología
- ✓ Criminalística de campo
- ✓ Fotografía
- ✓ Audio y video
- ✓ Topografía y/o arquitectura
- ✓ Medicina forense

² Dichos instrumentos serán presentados, comentados y aprobados en la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia

- **Gabinete**

Periciales:

- ✓ Medicina forense
- ✓ Antropología física
- ✓ Odontología forense
- ✓ Criminalística de campo
- ✓ Genética
- ✓ Dactiloscopia
- ✓ Fotografía
- ✓ Audio y video
- ✓ Química

- I. **Identificación**
- II. **Creación del archivo único de identificación**
- III. **Ingreso de información PM para la base de daños**
- IV. **Confronta, existen dos resultados:**

- **Identificado; Notificación y entrega del cadáver o restos humanos.**

Cuando derivado de la confronta se haya obtenido un resultado positivo y fuera posible la identificación del cadáver o restos humanos, el Agente del Ministerio Público procederá a la localización de los familiares de la persona o sus responsables, así mismo solicitará la participación de las áreas señaladas para la notificación de alto impacto emocional (PEAP, Peritos y Policía). De conformidad con dicho procedimiento, el PEAP concertará una reunión con los familiares de la víctima directa, quien únicamente les comunicará que: **el AMP tiene información relevante relacionada a la investigación (remitir al anexo de Atención psicosocial en las notificaciones de alto impacto emocional).**

Una vez que el PEAP considere que existen condiciones favorables para llevar a cabo la notificación de identificación del cadáver o restos humanos, se procederá con ello. Concluida la notificación, después de consultar a la víctima, se iniciará el trámite de entrega del cadáver o restos mortales.

El procedimiento de entrega a los familiares o personas responsables lo realizará el Servicio Médico Forense, a petición del AMP, atendiendo los Reglamentos y lineamientos aplicables disponibles en la materia.

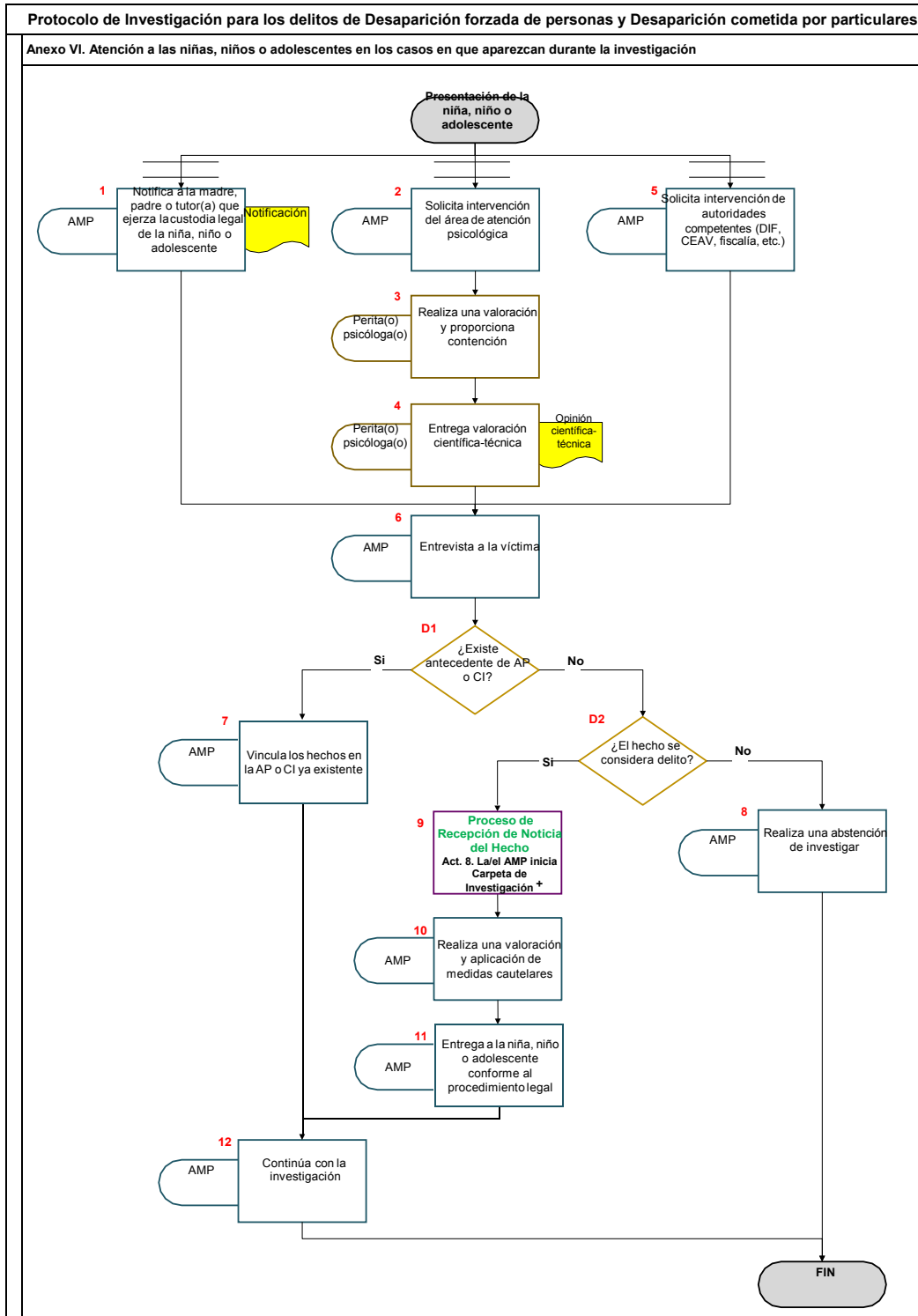
- **No identificado/ no reclamado:**

En todos los casos en los que no se haya logrado identificar el cadáver o en aquellos que, a pesar de haber logrado la identificación del cadáver o de restos mortales, no fuera posible localizar a los familiares o responsables de la víctima directa, e inclusive cuando se hubieran contactado y estos no hayan acudido a reclamar el cadáver o restos; el AMP se coordinará con el Servicio Médico Forense, para que éstos continúen con su preservación en las instalaciones óptimas disponibles, de conformidad con el Reglamento del Servicio Médico Forense que corresponda, así como los lineamientos aplicables relacionados a la materia.

En estos casos existen dos destinos:

- i. **Identificado**
 - ii. **Exhumación, notificación y entrega del cadáver o restos humanos**
- **Conservación en el Servicio Médico Forense**
 - i. **Identificado**

Anexo VI. Atención a las niñas, niños o adolescentes en los casos en que aparezcan durante la investigación



Atendiendo al ISN y la protección que el Estado mexicano debe a las niñas, niños y adolescentes, en caso de que, durante el curso de la investigación por los delitos de desaparición forzada de personas o desaparición cometida por particulares en su contra, se logre la localización de la víctima, es necesario que la/el AMP tome en consideración el siguiente proceso de notificación y de solicitud de atención psicosocial sobre el mismo.

Cabe señalar, que en los casos en los que ocurra la desaparición de la niña, niño o adolescente, conforme al artículo 7 de la Ley General, se iniciará la CI de manera inmediata y de la misma forma, se activarán las alertas de búsqueda y localización correspondientes.

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL DIAGRAMA” Anexo VI. Atención a las niñas, niños o adolescentes en los casos en que aparezcan durante la investigación”.

El proceso se detona con la presentación de la niña, niño o adolescente, por lo que se tienen tres caminos los cuales se deben de realizar paralelamente:

1. **La/el AMP notifica a la madre, padre o tutor(a) que ejerza la custodia legal de la niña, niño o adolescente.**

Nota: Genera una Notificación.

2. **La/el AMP solicita intervención del área de atención psicológica.**

3. **La/el Perita(o) psicóloga(o) realiza una valoración y proporciona contención.**

Nota: Determina el grado de afectación de la persona.

4. **La/el Perita(o) psicóloga(o) entrega valoración científica-técnica.**

Nota: Genera Opinión científica-técnica.

5. **La/el AMP solicita intervención de autoridades competentes (DIF, CEAV, fiscalía, etc.).**

Nota: A efecto de realizar una valoración integral de la víctima.

6. **La/el AMP entrevista a la víctima.**

D1. ¿Existe antecedente de AP o CI?

- **Si existen antecedente**

7. **La/el AMP vincula los hechos en la AP o CI ya existentes.**

Continúa en la actividad 12. “La/el AMP continúa con la investigación”.

- **No existen antecedentes**

D2. ¿El hecho se considera delito?

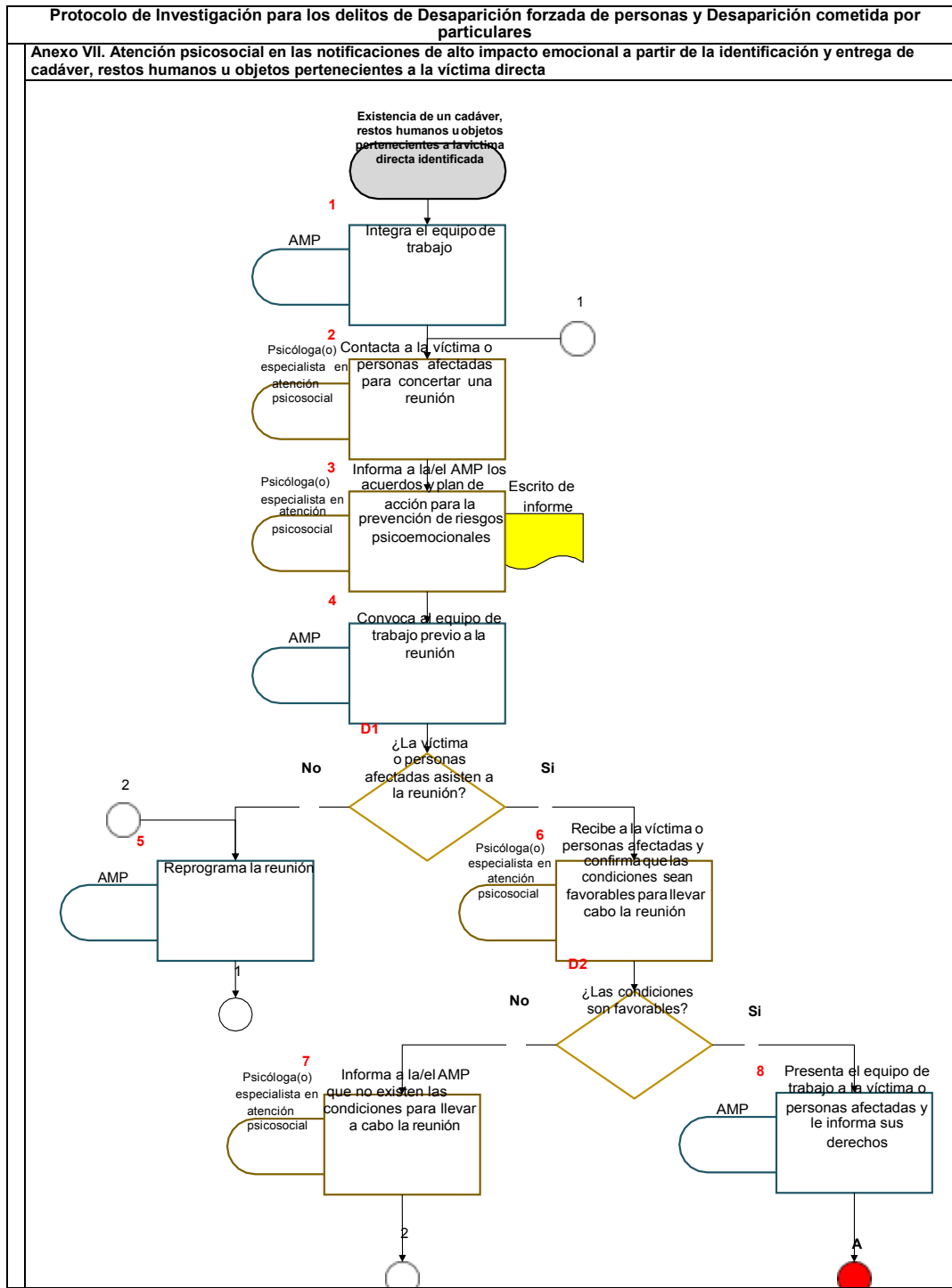
- 8. La/el AMP realiza una abstención de investigar.**

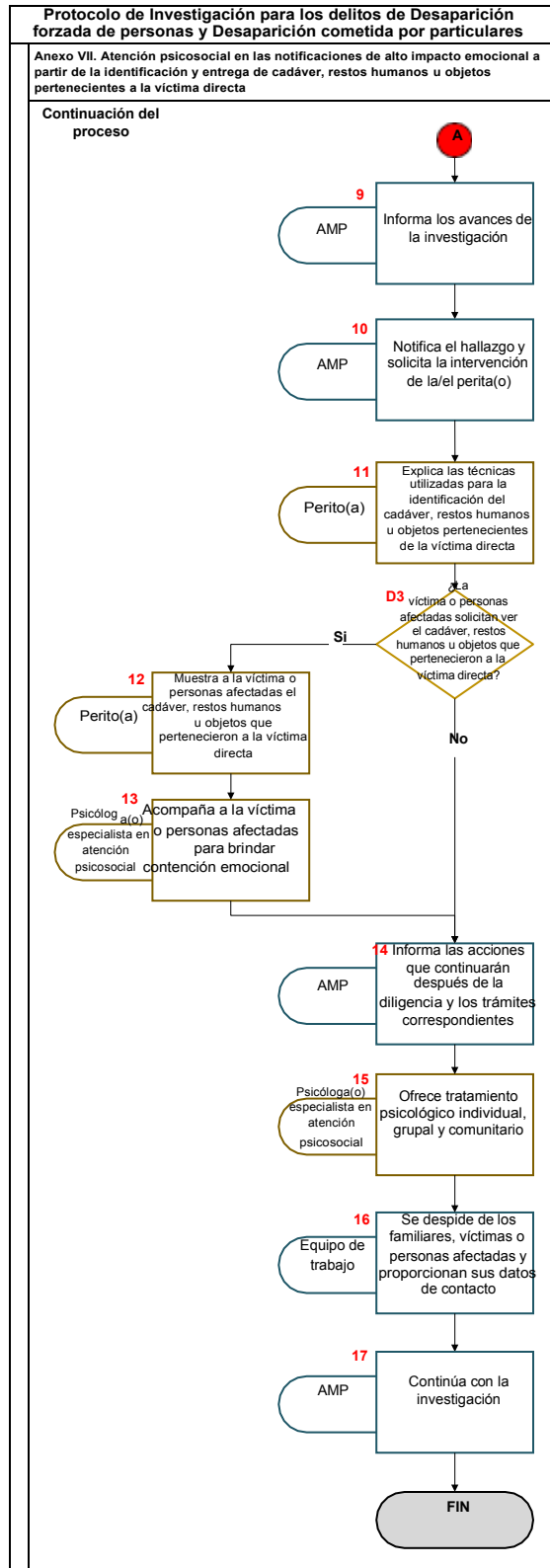
Fin del proceso

9. Continúa en la actividad 8. “La/el AMP inicia Carpeta de Investigación”, del Proceso de Recepción de Noticia del Hecho.
10. La/el AMP realiza una valoración y aplicación de medidas cautelares.
11. La/el AMP entrega con su madre, padre o Tutor que ejerza la custodia legal, a la niña, niño o adolescente conforme al procedimiento legal.
12. La/el AMP continúa con la investigación.

Fin del proceso

Anexo VII. Atención psicosocial en las notificaciones de alto impacto emocional a partir de la identificación y entrega de cadáver, restos humanos u objetos pertenecientes a la víctima directa





La notificación de alto impacto emocional es un procedimiento que lleva a cabo la/el AMP para dar a conocer información relevante a las víctimas o personas afectadas respecto a los hallazgos o resultados de la investigación relacionados con la identificación del cadáver, restos humanos u objetos pertenecientes a la víctima directa y su respectiva entrega.

La/el PEAP asume la función de auxiliar a la/el AMP para la coordinación de dichas diligencias, ya que la información que se comunica a las víctimas o personas afectadas puede resultar dolorosa y generar afectaciones físicas y psicológicas. El procedimiento de notificación se basa en tres principios fundamentales: Atención, Contención y Acompañamiento, los cuáles se dan de manera paralela, alternada y transversal durante la diligencia.

Dichos conceptos serán entendidos de la siguiente manera:

- **Atención:** Acciones encaminadas a preservar la salud psicoemocional de las víctimas o personas afectadas al recibir notificaciones de alto impacto emocional.
- **Contención:** Acciones llevadas a cabo por el profesional para facilitar que las víctimas expresen de manera asertiva y clara sus emociones, así como disminuir o en su caso suprimir las alteraciones del estado de ánimo o comportamentales que afecten su bienestar o el de quienes le rodean y que puedan provocar conductas agresivas o autodestructivas.
- **Acompañamiento:** Acciones que permiten establecer confianza en los procesos institucionales, evitar la victimización secundaria, garantizar el respeto a la dignidad y los derechos de las víctimas o personas afectadas, así como empoderarlas para vivir el proceso y los eventos posteriores a éste con mayor seguridad.

DESARROLLO DE LA NOTIFICACIÓN

La notificación se desarrolla en tres fases:

1. **Fase de preparación.** Implica los aspectos preparatorios, tales como la integración del equipo de trabajo, la definición de la hora y el lugar de la diligencia, el contacto inicial con las víctimas o personas afectadas, el conocimiento del caso y el contexto que les rodea, así como aquello que deban considerar las autoridades participantes para que ejecuten sus funciones con una óptima coordinación institucional y profesionalismo.
2. **Fase de ejecución.** Contempla la logística general que deberá llevarse a cabo el día de la diligencia, las acciones que deben realizarse para dar una adecuada atención a las víctimas o personas afectadas desde el momento de su recepción, durante la notificación y al término de la misma.
3. **Fase de seguimiento.** Corresponde a las acciones que deben realizar los especialistas posteriores a la notificación, particularmente la/el AMP y la/el PEAP.

FASE DE PREPARACIÓN

Participan: AMP, Policía, Perita(o), PEAP y Médica(o).

Interactúan con la víctima o personas afectadas: AMP y PEAP.

1. Para la integración del equipo de trabajo, la/el AMP habrá de solicitar vía oficio a las áreas correspondientes, la participación e intervención de la/el PEAP, Peritas(os), Médicas(os) y Policías, al menos siete días antes de la diligencia de notificación.
2. La solicitud deberá expresar claramente fecha, hora, lugar de la notificación y funciones a desempeñar, para que cada área determine el personal requerido o a designar.
3. Cada área solicitada deberá dar respuesta por escrito indicando nombre del personal que participará y sus datos de contacto.
4. A partir de la respuesta emitida por las áreas participantes, la/el AMP deberá proporcionar específicamente a la/el PEAP, los datos de las víctimas o personas afectadas para el establecimiento del contacto inicial.
5. El aviso de notificación a las víctimas o personas afectadas estará a cargo de la/el PEAP quien deberá contactarlas para concertar una reunión que tenga como objetivo: a) indicar que la/el AMP les comunicará información relevante referente a la investigación, b) conocer las condiciones y contexto de las víctimas o personas afectadas y c) preparar a las víctimas o personas afectadas para la diligencia tomando en cuenta los escenarios que podrían enfrentar.
6. Una vez que se ha llevado a cabo el contacto inicial con las víctimas o personas afectadas, el tiempo máximo estimado para llevar a cabo la notificación será de siete días, el tiempo mínimo puede ser de tres horas.
7. La/el PEAP informará por escrito a la/el AMP los acuerdos a los que ha llegado con las víctimas o personas afectadas, así como el plan de acción para la prevención de riesgos psicoemocionales.
8. Quienes participen deberán estar atentos a lo siguiente:
 - El sufrimiento es inevitable.
 - Una persona que recibe una noticia de alto impacto emocional puede reaccionar: con tristeza, enojo, agresividad o violencia; esas reacciones son normales y esperadas, dependen de su personalidad, temperamento y carácter.
 - Las reacciones emocionales son más fuertes cuando existe miedo a la noticia por predicciones de la situación que la persona afectada ha realizado.
 - Puede ser que exista negación ante la información y la víctima o persona afectada podría no creer lo que se le está diciendo o rechazar los resultados.
 - Responsabilizar a quienes participan en la reunión, haciéndoles reclamos y rechazándolos. Son reacciones que se presentan frecuentemente.
 - La víctima o persona afectada puede presentar desórdenes temporales en el sentido psicoemocional.
 - Respetar la voluntad de las víctimas o personas afectadas en todo momento, consultarles o sugerirles aquellas acciones que considere pertinentes para resguardar su bienestar.

- En los casos en que sólo haya restos humanos de la víctima directa, no es posible confirmar la muerte, por lo tanto, la/el AMP deberá permitir la intervención de la/el PEAP para que éste utilice las técnicas más adecuadas de comunicación con las víctimas o personas afectadas.

Fase de ejecución

Participan: AMP, Policía, Perita(o), PEAP y Médica(o).

Interactúan con la víctima o persona afectada: AMP, Perita(o), PEAP, Médica(o).

1. Logística general

- a) Las funciones de quienes participan serán las siguientes:
 - La/el AMP coordina las acciones generales de la notificación.
 - La/el PEAP coordinará el proceso de atención y comunicación con las víctimas o personas afectadas y el personal que participará, recibirá a las víctimas o personas afectadas y las acompañará ante la/el AMP y durante todo el procedimiento de notificación, así como hasta el momento de su partida. Asimismo, tendrá la facultad de invitar al personal participante a que hagan presencia únicamente cuando se requiera y, en determinado caso, establecer el número de representantes necesarios por área dentro de la sala de notificación; esto en el ejercicio de su función como responsable de la salud psicoemocional de la víctima o personas afectadas.
 - La/el perita(o) será quien exponga los datos técnicos relacionados con el dictamen emitido y responderá las dudas que las víctimas o personas afectadas tengan respecto al área, en un lenguaje formal y entendible para las víctimas o personas afectadas, sin emplear términos coloquiales.
 - La/el médica(o) estará pendiente en caso de ser requerida su intervención de acuerdo con las necesidades de las víctimas o personas afectadas, antes, durante o después de la notificación.
- b) Quienes participen se reunirán una hora antes de la diligencia, para recibir información por parte de la/el PEAP respecto a los datos obtenidos durante la fase de preparación con las víctimas o personas afectadas. Asimismo, las/los peritas(os) comunicarán cualquier dato relevante respecto al dictamen que darán a conocer o al estado en que se encuentran los restos humanos. Además, el equipo verificará que los datos que se proporcionarán a las víctimas o personas afectadas sean correctos y correspondan al caso.
- c) La/el PEAP deberá emitir a quienes participen las recomendaciones protocolarias para la atención psicosocial durante la diligencia de notificación.
- d) La comunicación y el trabajo en equipo son una constante durante la diligencia, toda situación que altere o afecte el plan general de intervención o que interfiera en el bienestar de las víctimas o personas afectadas, deberá ser informada de manera inmediata a la/el AMP y a la/el PEAP.
- e) La sala programada para llevar a cabo la notificación deberá estar en condiciones adecuadas para las víctimas o personas afectadas.

- f) Destinar un lugar especial para el servicio médico, ubicado cerca de donde se llevará a cabo la notificación.
- g) En caso necesario, adecuar un área para la atención infantil.
- h) Verificar que no existan peligros para las víctimas o personas afectadas y los demás participantes (zona de riesgo, armas blancas o de fuego, etcétera).

2. Recepción de las víctimas

- a) La/el PEAP asignada(o) recibirá a las víctimas o personas afectadas y las acompañará a la sala de notificación, donde la/el AMP llevará a cabo la diligencia.
- b) La/el PEAP preguntará a las víctimas o personas afectadas cómo se encuentran en ese momento, indagando sobre su estado de salud para determinar si es necesaria la intervención de la/el médica(o) antes de la notificación.
- c) En caso de que alguna de las víctimas o personas afectadas sea de la tercera edad, se encuentre embarazada, indique malestar, debilidad o algún padecimiento crónico, será canalizada con la/el médica(o) para una revisión protocolaria con la finalidad de descartar riesgos para su salud durante la diligencia. Atendiendo la gravedad del estado de salud de la persona, la/el AMP podrá solicitar la atención hospitalaria correspondiente.
- d) La/el PEAP acompañará a la víctima o personas afectadas a dicha revisión dando en todo momento apoyo emocional.
- e) Si la/el médica(o) indica que la persona no se encuentre en condiciones de participar, la/el PEAP deberá informar dicha recomendación a la víctima o personas afectadas.
 - En caso de que la víctima o personas afectadas se encuentren solas, se dará el tiempo necesario para que la/el médica(o) la estabilice, de lo contrario se podrá considerar reprogramar la diligencia dando prioridad a la salud de la persona afectada.
 - Si la víctima o personas afectadas se encuentra con familiares, deberán determinar quién de los presentes dará seguimiento a la diligencia de notificación.
- f) En caso de que las víctimas o personas afectadas vayan acompañadas de niñas, niños o adolescentes, se sugiere que alguna persona adulta los acompañe al área infantil, donde permanecerán durante la diligencia.
 - Se debe evitar separar a la niña, niño o adolescente de sus padres o personas adultas que los acompañan.
 - En caso de que la niña, niño o adolescente sea la única persona que acompaña a la víctima o personas afectadas, se deberá acordar que permanezca en el área infantil con un profesional durante la diligencia.
 - En caso de que la niña, niño o adolescente no acepte separarse de la persona adulta o que el adulto no lo quiera dejar en el área infantil, se sugerirá o se valorará la reprogramación de la diligencia.

- g) La/el PEAP apoyará a las víctimas o personas afectadas en el establecimiento de acuerdos, cuando se lleven a cabo las acciones de los incisos e-f e informará a la/el AMP las decisiones tomadas para los efectos procedentes.
- h) La/el PEAP informará a la/el AMP sobre el estado físico y emocional de las víctimas o personas afectadas. Si ha sido necesario tomar acuerdos, los dará a conocer.
- i) La/el AMP indicará a su equipo que dará inicio la diligencia; todos deberán estar presentes y preparados para ejecutar las funciones que les han sido asignadas.

3. La notificación

- a) La/el AMP se presentará y presentará al equipo de trabajo que atenderá a las víctimas o personas afectadas durante la diligencia, asimismo las invitará para que se presenten con su nombre e indiquen su relación con la víctima directa.
- b) La/el AMP informará a las víctimas o personas afectadas cuáles son sus derechos y cuál será el procedimiento a seguir.
- c) Les explicará que, si les resulta difícil asimilar la información que se les está proporcionando, podrán hacer una pausa y esperar a que se encuentren en mejores condiciones para continuar; todo ello con la intervención de la/el PEAP. Les expondrá también que en caso de que la información no sea comprensible se replanteará las veces que sea necesario, alentando a las víctimas o personas afectadas a que hagan los cuestionamientos que les permita aclarar todas sus dudas.
- d) La/el AMP procederá a informar a las víctimas o personas afectadas sobre los hallazgos en la investigación y los resultados de los dictámenes periciales.
- e) La/el PEAP valorará si es necesario hacer una pausa para permitir a las víctimas o personas afectadas asimilar la noticia. De lo contrario, se continuará con la diligencia.
- f) La/el AMP y Peritas(os) habrán de concentrar la explicación en las técnicas utilizadas o procedimientos implementados por los expertos para la identificación.
- g) Para describir con mayor precisión detalles o técnicas utilizadas, la/el AMP indicará a la/el Perita(o) que intervenga, a fin de clarificar a las víctimas o personas afectadas cualquier duda que pueda surgir.
- h) Las/los Peritas(os) deberán expresar sus conocimientos con un lenguaje formal y comprensible para las víctimas o personas afectadas, evitando utilizar diminutivos (*ejemplo: Su esposo tenía una manita rota*) o lenguaje coloquial (*ejemplo: Pues es que así es como actúan los delincuentes*).
- i) Durante la narrativa de los hallazgos, procedimientos y resultados de los dictámenes periciales, la/el AMP y Peritas(os) deberán considerar:
 - *El impacto que la información puede generar en las víctimas o personas afectadas.*
 - *Cuáles son los detalles que pueden afectarlas de manera transitoria o permanente y, en su caso, valorar mencionarlo o no.*
 - *Qué tanto quieren conocer las víctimas o personas afectadas respecto a los detalles de la investigación. Permitir que ellas elijan hasta dónde quiere saber.*

- *Consultar con las víctimas o personas afectadas la información que puede ser perturbadora, a fin de advertirla sobre las lesiones psíquicas o secuelas emocionales que les podrían generar.*
 - *Ponderar cuando las víctimas o personas afectadas quieran saber todos detalles y su estado emocional no sea el óptimo.*
 - *Prestar especial atención en la protección psicoemocional de las víctimas o personas afectadas y dar la opción de que los detalles del hecho puedan proporcionarse en otro momento cuando se encuentren más estables.*
- j) La/el PEAP observará de manera permanente el estado emocional de las víctimas o personas afectadas, prestando atención a la comunicación no verbal para identificar malestares físicos o emocionales derivados de la información recibida.
- k) En caso de detectar algún malestar en las víctimas o personas afectadas podrá sugerir a la/el AMP que se haga una pausa para atenderlas y posteriormente continuar con la diligencia.
- l) Si los restos humanos u objetos que pertenecían a la víctima directa están dispuestos para mostrarlos a las víctimas o personas afectadas, la/el AMP les informará que pueden verlos, si ese es su deseo.
- m) Si las víctimas o personas afectadas deciden ver los restos humanos u objetos que le pertenecían a la víctima directa, se les deberá advertir sobre el impacto que esto podría ocasionarles y se les deberá hacer una invitación para mantener un mejor recuerdo de su familiar.
- n) La decisión que tomen deberá respetarse. En caso de que decidan verlos, la/el PEAP los acompañará en todo momento y estará pendiente de las necesidades de contención emocional.

4. Cierre de la notificación

- a) Una vez concluido el procedimiento de la notificación, la/el AMP dedicará un tiempo para explicar a las víctimas o personas afectadas los trámites relacionados a la entrega del cadáver, restos humanos u objetos que pertenecían a la víctima directa; así como para indicarles las acciones que continuarán después de la diligencia. La entrega se realizará de conformidad con el Protocolo Nacional de Necropsia Médico Forense y el Protocolo de tratamiento e identificación.
- b) La/el PEAP ofrecerá a las víctimas o personas afectadas los servicios de atención psicológica posterior, que consisten en tratamiento psicológico individual, grupal y comunitario.
- c) Si la víctima o personas afectadas aceptan el tratamiento, en ese momento se les propondrá una fecha para contactarlas, a fin de acordar la agenda del trabajo terapéutico.
- d) La/el AMP y la/el PEAP proporcionarán a las víctimas o personas afectadas una tarjeta con sus datos de contacto, a fin de permanecer en comunicación para el seguimiento.
- e) La/el PEAP acompañará a las víctimas o personas afectadas a la salida del lugar y les reiterará que la comunicación queda abierta si lo requieren. Asimismo, valorará en conjunto con las víctimas o personas afectadas la pertinencia de realizar un acompañamiento comunitario durante los rituales funerarios a fin de facilitar que la familia los lleve a cabo, apegada a sus creencias y costumbres.
- f) Posteriormente, cada participante realizará un informe para su superior jerárquico.

Fase de Seguimiento

Participan: AMP, Policía, Perita(o), PEAP y Médica(o).

Interactúan con la víctima o persona afectada: AMP y PEAP.

- a) La/el AMP llevará a cabo el seguimiento del caso de acuerdo a sus atribuciones. Cuando la investigación continúe abierta, podrá auxiliarse de la/el PEAP para brindar acompañamiento a las víctimas en las diligencias subsecuentes en las que participen.
- b) La/el PEAP deberá llevar a cabo las acciones correspondientes a su protocolo de actuación; éstas consisten en iniciar, o bien, dar continuidad al tratamiento psicológico individual, grupal y comunitario, así como el acompañamiento durante las diligencias subsecuentes en las que participen, por el tiempo que la investigación continúe abierta.

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL DIAGRAMA “Anexo VII. Atención psicosocial en las notificaciones de alto impacto emocional a partir de la identificación y entrega de cadáver, restos humanos u objetos pertenecientes a la víctima directa”.

El proceso de notificaciones de alto impacto emocional de identificación y entrega, se detona cuando existe un cadáver, restos humanos u objetos que pertenecieron a la víctima directa:

1. La/el AMP integra el equipo de trabajo.

Nota: Lo integra la/el psicóloga(o) especialista en atención psicosocial, peritas(os), médicas(os) y policías.

2. La/el Psicóloga(o) especialista en atención psicosocial contacta a la víctima o personas afectadas para concertar una reunión.

3. La/el Psicóloga(o) especialista en atención psicosocial informa a la/el AMP los acuerdos y plan de acción para la prevención de riesgos psicoemocionales.

Nota: Genera Escrito de informe.

4. La/el AMP convoca al equipo de trabajo previo a la reunión.

D1. ¿La víctima o personas afectadas asisten a la reunión?

- **No asisten a la reunión**

5. La/el AMP reprograma la reunión.

Continúa en la actividad 2. “La/el Psicóloga(o) especialista en atención psicosocial contacta a la víctima o personas afectadas para concertar una reunión”.

6. La/el Psicóloga(o) especialista en atención psicosocial recibe a la víctima o personas afectadas y confirma que las condiciones sean favorables para llevar a cabo la reunión.

D2. ¿Las condiciones son favorables?

- No son favorables

7. La/el Psicóloga(o) especialista en atención psicosocial informa a la/el AMP que no existen las condiciones para llevar a cabo la reunión.

Continúa en la actividad 5. “La/el AMP reprograma la reunión”.

- Si son favorables

8. La/el AMP presenta el equipo de trabajo a la víctima o personas afectadas y le informa sus derechos.

9. La/el AMP informa los avances de la investigación.

10. La/el AMP notifica el hallazgo y solicita la intervención de la/el perita(o).

11. La/el Perita(o) explica las técnicas utilizadas para la identificación del cadáver, restos humanos u objetos pertenecientes de la víctima directa.

D3. ¿La víctima o personas afectadas solicitan ver el cadáver, restos humanos u objetos que pertenecieron a la víctima directa?

- Si lo solicita

12. La/el Perita(o) muestra a la víctima o personas afectadas el cadáver, restos humanos u objetos que pertenecieron a la víctima directa.

13. La/el Psicóloga(o) especialista en atención psicosocial acompaña a la víctima o personas afectadas para brindar contención emocional.

14. La/el AMP informa las acciones que continuarán después de la diligencia y los trámites correspondientes.


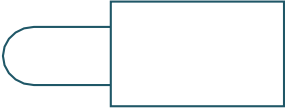
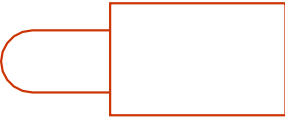
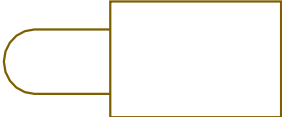
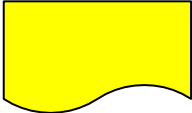


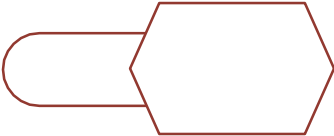
15. La/el Psicóloga(o) especialista en atención psicosocial ofrece tratamiento psicológico individual, grupal y comunitario.






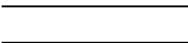


16. El equipo de trabajo se despide de la víctima o personas afectadas y proporcionan sus datos de contacto.

17. La/el AMP continúa con la investigación.

Fin del proceso

Anexo VIII. Simbología empleada en los diversos diagramas del presente Protocolo.

Símbolo	Nombre	Descripción
	Inicio Fin	Muestra el inicio o entradas y fin del proceso.
	Responsable y actividad	Indica la realización de una actividad sustantiva realizada por la/el AMP.
	Responsable y actividad	Indica la realización de una actividad sustantiva realizada por la/el agente de la Policía.
	Responsable y actividad	Indica la realización de una actividad sustantiva realizada por la/el Perita(o).
	Documento	Representa la generación de un documento en el desarrollo de una actividad.
	Decisión	Consiste en una pregunta o condición, cuya respuesta indica el camino que debe tomarse.
	Subproceso	Indica la ejecución de un subproceso dentro del flujo.
	Actividad externa	Indica la realización de una actividad externa en el proceso.

Símbolo	Nombre	Descripción
	Conector de actividad	Representa el enlace de dos actividades dentro de la misma página.
	Conector de página	Representa el enlace entre páginas.
	Registro	Representa la generación del registro de búsqueda.
	Registro	Representa la generación del registro de la CI.
	Opción múltiple	Permite elegir uno o varios caminos con actividades distintas entre ellos.
	Paralelismo	Indica la ejecución simultánea de las figuras que precede.
 Tiempo	Plazos	Indica el lapso de tiempo en el que se debe realizar una actividad.
	Dirección de flujo o línea de unión	Conecta símbolos y muestra la dirección del flujo del proceso. Se acompañan.

Símbolo	Nombre	Descripción
<pre> graph TD Entrada[Entrada] --> SP1[Subproceso de x] SP1 --> SP2[Subproceso de x2] SP2 --> Salida[Salida] </pre> <p>El diagrama muestra un flujo de trabajo con dos subprocesos. El flujo comienza con 'Entrada' (marcado con un # rojo), seguido de 'Subproceso de x' (con un '+' a la derecha), luego '(Salida de x1/entrada de x2)' (marcado con un # rojo), seguido de 'Subproceso de x2' (con un '+' a la derecha), y finalmente 'Salida'.</p>	Entradas y Salidas	Se escriben sobre las líneas de dirección de flujo que entran a un subproceso o salen de él a fin de señalar los detonantes y productos de los mismos.

Entregas Vigiladas y Operaciones Encubiertas

Facilitar la investigación de delitos de delincuencia organizada, precisando los alcances y limitaciones de la función de las policías encubiertas con la finalidad de aportar elementos de prueba para la teoría del caso.



PROTOCOLO DE ENTREGAS VIGILADAS Y OPERACIONES ENCUBIERTAS

Contenido

Presentación	3
Marco jurídico.....	5
Objetivos	8
General	8
Específicos.....	8
Principales roles de los participantes.....	9
Políticas de operación	11
Descripción del procedimiento	12
Diagrama de Flujo	15
Simbología	16

Presentación

Desde hace ya varias décadas, sociedades de todo el mundo padecen el fenómeno del crimen organizado, que de manera permanente, orquestada y sistemática, con ánimo de lucro y en detrimento de personas, familias y comunidades enteras, lleva a cabo múltiples ilícitos, permea y fragmenta el tejido social y coarta la vigencia del estado de derecho.

A nivel global se han emprendido múltiples esfuerzos para hacer frente a la amenaza que estas redes delincuenciales suponen. En el año 2000 se suscribió la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Trasnacional (Convención de Palermo) con el propósito de establecer un marco convencional para la lucha contra el crimen.

Entre las medidas previstas en la Convención para hacer frente a la amenaza que supone el crimen, se consideró la realización de técnicas especiales de investigación como las entregas vigiladas y operaciones encubiertas, para combatir eficazmente la delincuencia organizada como lo establece el artículo 11 Bis 1 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada.

Asimismo, el Código Nacional de Procedimientos Penales, en su artículo 251, fracción IX, contempla dichos actos de investigación, además que el artículo décimo primero transitorio del mismo ordenamiento establece la obligación de contar con protocolos de investigación y de actuación de personal sustantivo.

La ejecución de tales operaciones encubiertas y entregas vigiladas supone la construcción de realidades simuladas, paralelas o alternas, donde el estado articula de manera artificial, actividades delictivas. Un factor preponderante en la conformación de estas realidades es la generación de identidades simuladas para los agentes que participan en ellas, motivo por el cual se crea el presente

documento basado en las experiencias internacionales, modelo de operación de ambas figuras, atendiendo a las necesidades que el fenómeno delictivo presenta y las condiciones que posibilita el marco jurídico en la materia.

DOCUMENTO CONTROLADO

Marco jurídico

Normas Internacionales

- Convención Americana sobre Derechos Humanos.
- Convención Contra la Tortura y otros Tratados o Penas Cruelles Inhumanos o Degradantes.
- Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional.
- Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados.
- Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.
- Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial.
- Convención Interamericana para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Belem Do Pará) y su protocolo facultativo.
- Convenio Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
- Convenio Internacional sobre Derechos Sociales, Económicos y Culturales.
- Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción.
- Convención de las Naciones Unidas Contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas.
- Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.
- Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delito de Abuso de Poder.
- Declaración Universal sobre los Derechos Humanos.
- Guías de Santiago sobre Protección de Víctimas y Testigos.
- Manual para la Investigación y Documentación Eficaces de la Tortura y otros Tratos y Penas Cruelles, Inhumanos y Degradantes.
- Manual Sobre la Prevención e Investigación Eficaces de las Ejecuciones Extra Legales Arbitrarias o Sumarias.
- Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
- Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos.
- Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

- Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos.
- Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de las Personas Especialmente Mujeres y Niños, que contemplan la Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional.
- Protocolo Contra el Tráfico Ilícito de Inmigrantes por Tierra, Mar y Aire, que contempla la Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional.
- Reglas de Brasilia Sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad.
- Código de Conducta para los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 17 de diciembre de 1979.
- Convenio relativo a la Asistencia Judicial en Materia Penal entre los Estados miembros de la Unión Europea, mayo 2000 Conferencia Ministerial Mundial Contra la Delincuencia Transnacional Organizada.
- Convenio Europeo de Asistencia Judicial en Materia Penal.
- Acuerdo de Schengen relativo a la Supresión de Controles en las Fronteras Comunes.
- Convenio de Aplicación del Acuerdo Schengen.
- Las Recomendaciones del GAFI, Estándares internacionales sobre la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo y la proliferación.
- Metodología para evaluar el cumplimiento técnico con las Recomendaciones del GAFI y la efectividad de los sistemas ALA/CFT.
- Medidas anti lavado y contra la financiación del terrorismo. México. Informe de Evaluación Mutua. Enero de 2018.

Normas Nacionales

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
- Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
- Ley General de Víctimas.
- Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.
- Código Penal Federal.
- Código Nacional de Procedimientos Penales.
- Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y su Reglamento.

- Acuerdo A/173/16, por el que se delegan en los servidores públicos que se indican, facultades previstas en diversas leyes.
- Acuerdo A/101/13, por el que se crea la Agencia de Investigación Criminal y se establecen sus facultades y organización.
- Acuerdo A/126/10, por el que se crea el Sistema de Registro de Detenidos relacionados con delitos de competencia de la Procuraduría General de la República (SIRED).
- Acuerdo A/80/12, por el que se establecen las directrices que deberán observar los agentes de la policía federal ministerial para el uso legítimo de la fuerza.
- Acuerdo A/176/12, por el que se establece la obligación del personal sustantivo de la Procuraduría General de la República para el uso de los protocolos de actuación.
- Oficio circular C/001/2016, por el que se instruye a los titulares de las subprocuradurías; fiscalías especializadas y especiales; Visitaduría General; Agencia de Investigación Criminal, unidades especiales y especializadas; delegaciones estatales u órganos equivalentes, y demás titulares de unidades administrativas y órganos desconcentrados de la Procuraduría General de la República que participen en la operación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio.
- Acuerdos de la Conferencia Nacional del Sistema de Seguridad Pública, aprobados en la XXXVIII Sesión Ordinaria de fecha 21 de agosto de 2015, en su Acuerdo 4/XXXVIII/15, respecto de los protocolos de:
 - Protocolo Nacional de Primer Respondiente.
 - Protocolo Nacional de Policía con Capacidades para Procesar.
 - Guía Nacional de Cadena de Custodia.
 - Protocolo Nacional de Traslados.

Objetivos

General

Establecer el procedimiento para llevar a cabo los actos de investigación de entregas vigiladas y operaciones encubiertas, a fin de identificar el modus operandi, activos financieros y no financieros, recursos materiales y tecnológicos, así como el personal que integran las estructuras de las organizaciones delictivas, con la finalidad de aportar elementos de prueba para la teoría del caso.

Específicos

Homologar el procedimiento de los actos de investigación de entregas vigiladas y operaciones encubiertas.

Fortalecer el desarrollo de las técnicas de investigación.

Orientar la actuación de los servidores públicos que participan en los actos de investigación.

Coordinar con autoridades extranjeras los actos de investigación de entregas vigiladas y operaciones encubiertas.

Principales roles de los participantes

Genéricos

- A. Servidor Público Facultado: Autoriza la entrega vigilada y operación encubierta.
- B. Agente del Ministerio Público de la Federación: Conduce jurídicamente la investigación penal de forma científica y metodológica para esclarecer los hechos y resolver sobre el ejercicio de la acción penal.
- C. Titular de la Unidad: Propone al Policía Federal Ministerial realizar el acto de investigación y designa el rol de los servidores públicos que participan.
- D. Agente Encubierto: Desarrolla la investigación a través de la generación de líneas de investigación para la comprobación de la teoría del caso.
- E. Analista de Información Criminal: Aporta elementos para la planeación y desarrollo de la operación.

Específicos

- A. Agente del Ministerio Público de la Federación: Solicita la entrega vigilada y la operación encubierta, además de validar los documentos que requiera el Policía Federal Ministerial para realizar los actos de investigación.
- B. Titular de la Unidad: Planea la logística operativa en coordinación con el Agente Encubierto, da seguimiento al desarrollo del acto de investigación, mantiene comunicación constante con el agente del Ministerio Público e informa los resultados.
- C. Agente Encubierto: Acepta de manera voluntaria realizar el acto de investigación, elabora la logística de la entrega vigilada y operación en cubierta en coordinación con el Titular de la Unidad, lleva a cabo el acto de

investigación, reúne la información necesaria para la investigación e informa los avances y resultados al Titular de la Unidad.

- D. Analista de Información Criminal:** Aporta antecedentes en la investigación, elabora productos de inteligencia y propone la utilización de servicios de inteligencia para su análisis y seguimiento durante el desarrollo de la misma.

DOCUMENTO CONTROLADO

Políticas de operación

- A.** La Agencia de Investigación Criminal podrá cooperar con autoridades extranjeras, para la realización de actos conjuntos de operaciones encubiertas y entregas vigiladas, a efecto de investigar hechos delictivos cometidos en territorio nacional o que tengan un componente transnacional, en los términos del presente Protocolo.
- B.** Debe ser confidencial el manejo de la información por parte de los servidores públicos que participen en el acto de investigación.
- C.** Realizar el acto de investigación apegado a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez, lealtad y respeto a los derechos humanos.
- D.** Agregar al informe todos aquellos datos obtenidos durante la investigación de manera clara.
- E.** Reservar la identidad de los servidores públicos que participan en los actos de investigación de entrega vigilada y operación encubierta.
- F.** El Titular de la Unidad debe velar por la seguridad e integridad de los servidores públicos que participan en los actos de investigación.
- G.** Proporcionar todos los medios materiales y humanos necesarios al Agente Encubierto para realizar el acto de investigación.
- H.** Abstenerse de llevar a cabo la entrega vigilada u operación encubierta, cuando se encuentre en riesgo la vida de la víctima o terceras personas.

Descripción del procedimiento

La entrega vigilada es una técnica de investigación que permite que un bien, recurso, mercancía o remesa ilícita pueda llegar a su lugar de destino sin ser interceptada, pero siempre bajo la vigilancia del Agente Encubierto, con la finalidad de identificar a los partícipes del delito, redes de distribución, flujos financieros, estructuras corporativas y rutas de transportes.

La operación encubierta es una técnica de investigación que detecta y controla actividades ilegales con la finalidad de identificar a los organizadores, transportadores, compradores y demás participantes de los hechos punibles.

Las técnicas de investigación antes referidas se utilizan para la investigación de delitos de competencia federal contemplados en el Código Penal Federal, Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada y el Código Nacional de Procedimientos Penales.

El presente documento establece los pasos que deben seguir los servidores públicos que participan en las entregas vigiladas y operaciones encubiertas.

El agente del Ministerio Público de la Federación convoca al personal de la Agencia de Investigación Criminal a Sala de Mando Ministerial, una vez reunidos expone los hechos del caso que se está investigando.

Una vez analizados los hechos, el personal de la Agencia de Investigación Criminal (Policía Federal Ministerial y Analista de Información Criminal) propone realizar el acto de investigación de entrega vigilada u operación encubierta, así como la elaboración de productos o la aplicación de servicios de inteligencia.

El agente del Ministerio Público de la Federación, el Policía Federal Ministerial y el Analista de Información Criminal, establecen la estrategia a realizar y determinan el plan de investigación.

El agente del Ministerio Público de la Federación solicita al Servidor Público Facultado la autorización para realizar la técnica de investigación de entrega vigilada u operación encubierta, de conformidad con el acuerdo A/173/16.

Dicha petición debe ir acompañada del informe ejecutivo donde se establecen los motivos que originan la solicitud.

El Servidor Público Facultado autoriza e informa al agente del Ministerio Público de la Federación en un plazo de 72 horas.

El agente del Ministerio Público de la Federación solicita a la Agencia de Investigación Criminal realice la técnica de investigación de entrega vigilada u operación encubierta, en su caso.

Anexa la autorización a la solicitud.

La Agencia de Investigación Criminal recibe la solicitud y designa a la Unidad responsable de atender dicha petición.

El Titular de la Unidad responsable de llevar acabo el acto de investigación, analiza la información contenida en la solicitud para proponer al Agente Encubierto responsable de realizar la entrega vigilada u operación encubierta, en su caso.

El Agente Encubierto acepta de manera voluntaria, realizar el acto de investigación e inicia con la planeación de la operación, a fin de determinar los recursos necesarios para su ejecución, para lo cual solicita al Analista de Información Criminal la elaboración y/o aplicación de un producto o servicio de inteligencia.

El Analista de Información Criminal elabora y/o aplica el producto o servicio de inteligencia y explica el resultado al Agente Encubierto.

El Agente Encubierto y el Titular de la Unidad analizan la información contenida en la solicitud y el resultado del producto o el servicio de inteligencia para establecer la estrategia y determinar el plan de acción.

Una vez definido el plan de acción, el Agente Encubierto realiza el acto de investigación conforme a la planeación establecida y registra los pormenores que se susciten durante el desarrollo del acto de investigación, así como los resultados obtenidos.

El Titular de la Unidad da seguimiento al acto de investigación que se está realizando e informa al agente del Ministerio Público de la Federación de los avances y las necesidades que se vayan dando durante la investigación.

En caso de que se pierda contacto con el Agente Encubierto, el Titular de la Unidad realiza las gestiones necesarias para iniciar las actividades de búsqueda y localización.

En el supuesto que no se pierda contacto con el Agente Encubierto, el Titular de la Unidad informa los resultados al agente del Ministerio Público de la Federación.

Cuando los resultados no son suficientes, el Titular de la Unidad replantea el plan de acción y le informa al Agente Encubierto la nueva estrategia.

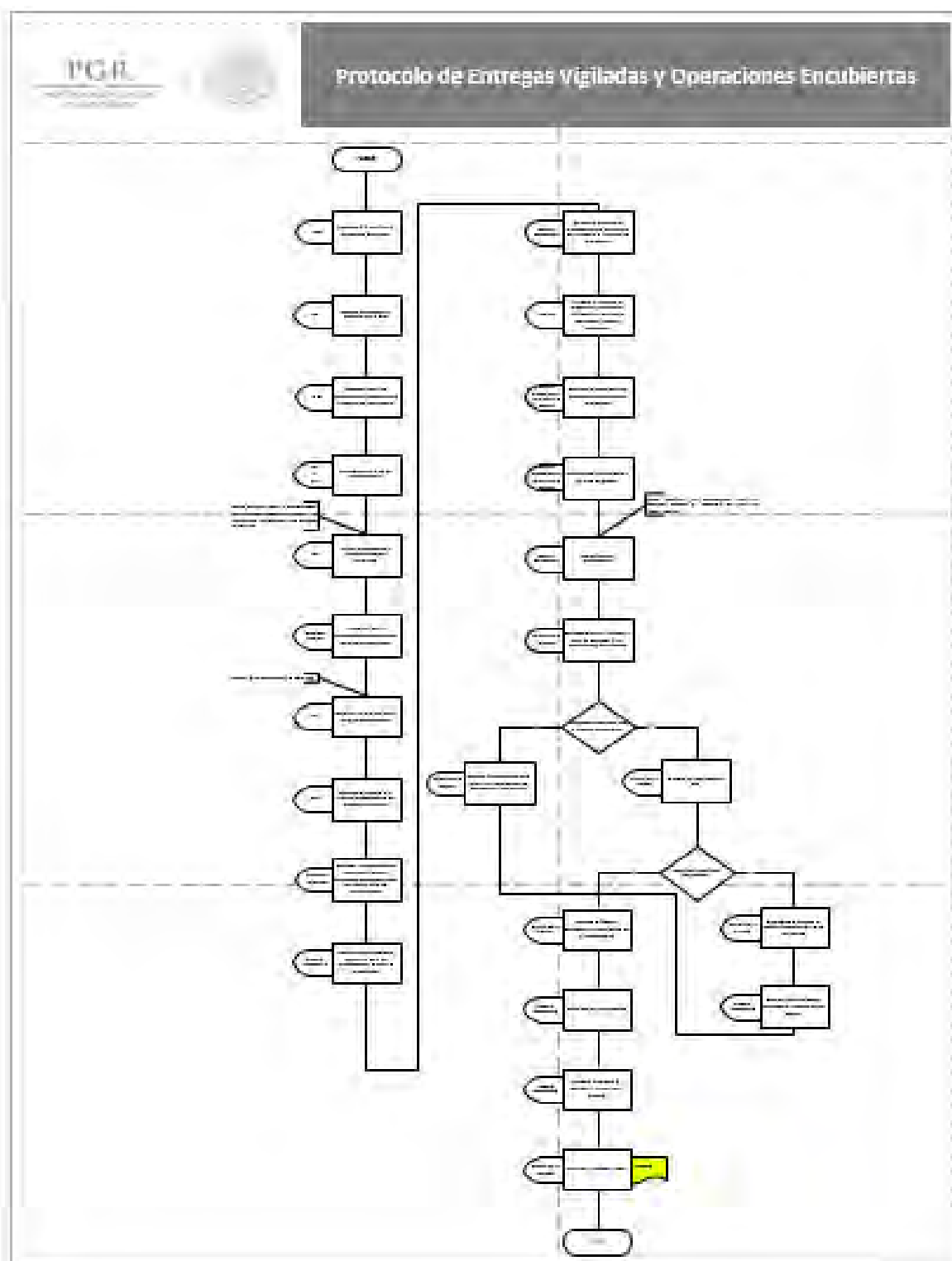
El Agente Encubierto realiza las actividades conforme al nuevo plan de acción.

Cuando los resultados obtenidos durante la investigación son suficientes, el Titular de la Unidad informa al Agente Encubierto la conclusión de la investigación, por lo que concluye su intervención y realiza el informe de su participación, posteriormente entrega el documento al Titular de la Unidad.

El Titular de la Unidad, remite el informe al agente del Ministerio Público de la Federación, con lo que concluye el procedimiento.

DOCUMENTO CONTROLADO

Diagrama de Flujo



Simbología



Inicio y fin(muestra el inicio y final del diagrama)



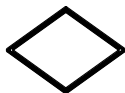
Actividad sustantiva (indica la realización de una actividad sustantiva)



Responsable sustantivo (indica quien es el responsable de la ejecución de una actividad sustantiva)



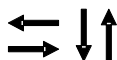
Documento (hace referencia a la generación o consulta de un documento)



Decisión (consiste en una pregunta, cuya respuesta indica el camino que debe tomarse)



Texto(relaciona una nota con una actividad)

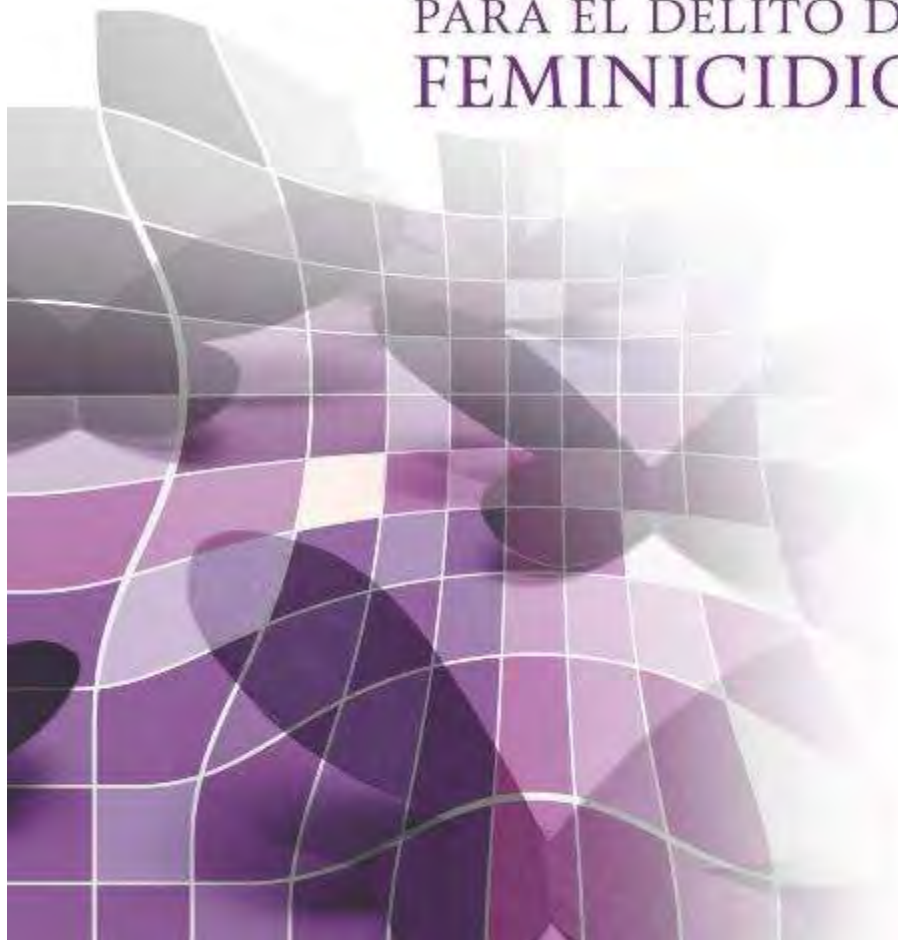


Flujo (muestra la dirección del flujo del proceso)

Investigación Ministerial, Policial y Pericial con Perspectiva de Género para el Delito de Femicidio.

Herramienta estándar y efectiva en la investigación de la violencia feminicida, cometido en agravio de las mujeres y niñas, para que se realicen con visión de género y estricto cumplimiento al principio de debida diligencia.

PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN MINISTERIAL, POLICIAL Y PERICIAL CON PERSPECTIVA DE GÉNERO PARA EL DELITO DE FEMINICIDIO



ÍNDICE

CAPÍTULO I. SOBRE EL PROTOCOLO..... 4

 A. Introducción. 4

 B. Alcances. 7

CAPÍTULO II. CONCEPTOS..... 14

 A. La perspectiva de género y la interseccionalidad. 15

 B. Mujeres en situación especial de vulnerabilidad 20

 C. El delito de feminicidio..... 24

 C.1 Concepto y análisis del feminicidio. 24

 C.2 El tipo penal en el Código Penal Federal..... 25

 C.3 Análisis de género sobre las hipótesis del tipo penal..... 27

CAPÍTULO III. DE LA INVESTIGACIÓN MINISTERIAL, POLICIAL Y PERICIAL CON
PERSPECTIVA DE GÉNERO PARA EL DELITO DE FEMINICIDIO 35

 A. Reglas mínimas para la investigación ministerial..... 36

 A.1 Factores que afectan la investigación con debida diligencia en un caso de
feminicidio..... 36

 A.2 Bases de actuación para el inicio de la investigación:..... 37

 A.3 El feminicidio de niñas..... 40

 A.4 Orientación de la investigación conforme el enfoque de género. 42

 A.5 El Componente fáctico..... 44

 A.6 El Componente jurídico. 45

 A.7 El componente probatorio..... 45

 A.8 Diligencias ministeriales básicas para el delito de feminicidio, de forma
enunciativa más no limitativa las siguientes:..... 46

 A.9 El levantamiento del cadáver en la escena del hallazgo y su posterior necropsia
médico legal. 47

 A.10 Víctima no identificada..... 49

 B. Reglas mínimas para la investigación policial..... 50

 B.1 Procedimientos en la investigación a cargo de la policía 50

B.2 Responsabilidades del personal policial en las investigaciones	51
B.3 Líneas de investigación en caso de feminicidio.....	52
C. Reglas mínimas para la investigación pericial	53
C.1 Objeto de las diligencias periciales en la investigación del delito de feminicidio.....	55
C.2 Peritajes con Perspectiva de Género.....	56
C.3 Medicina forense	57
C.4 Genética forense	62
C.5 Antropología forense	63
C.6 Antropología social.....	67
C.7 Psicología forense.....	70
COLOFÓN.....	75
GLOSARIO.....	77
BIBLIOGRAFÍA.....	81

CAPÍTULO I. SOBRE EL PROTOCOLO.

A. Introducción.

La violencia contra las niñas y mujeres es la máxima expresión de la desigualdad y discriminación; en México como en todos los países, los principales factores determinantes de la violencia de género son las condiciones estructurales inequitativas en donde se desarrollan las relaciones sociales, familiares y culturales desiguales entre hombres y mujeres; esta violencia tiene graves repercusiones en la salud, la libertad, la seguridad, el patrimonio y la vida de las niñas y mujeres, por lo que constituyen serias violaciones a sus derechos humanos que, además, merman el avance del desarrollo de los países y compromete la responsabilidad internacional de los gobiernos cuando no garantizan para las mujeres el acceso a la justicia.

En los últimos años, el Sistema Interamericano de Defensa y Protección de los Derechos Humanos, integrado por la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), se ha ocupado de la situación que prevalece en México con respecto a casos de violencia de género; el Estado mexicano recibió en 2009 y 2010, tres sentencias emitidas por la CoIDH¹, que versan sobre casos de violencia contra niñas y mujeres, la primera sentencia relativa al caso *González y otras vs Estado mexicano* (Campo Algodonero), por la desaparición y muerte de jóvenes mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua y, las sentencias de los casos de Inés Fernández Ortega² y Valentina Rosendo Cantú³, por tortura y violación sexual en agravio de una mujer y una niña, ambas indígenas en el estado de Guerrero.

En estas sentencias la CoIDH, responsabilizó al Estado de incumplir su deber de investigar esta violencia y con ello su deber de garantizar, los derechos a la vida, integridad y libertad personal de las víctimas y su derecho de acceso a la justicia.

El Estado mexicano ha sido receptivo de los criterios vinculantes que contienen estas sentencias, particularmente a partir del pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al analizar el cumplimiento de la sentencia emitida por la CoIDH en el caso del señor Rosendo Radilla Pacheco contra el Estado mexicano⁴, se ha impulsado una trascendente transformación del espectro de protección de los derechos humanos, al ampliar el tradicional arquetipo constitucional, adicionando los parámetros vinculantes del derecho internacional de los derechos humanos, se identificaron los criterios de interpretación y se

¹ En ejercicio de su soberanía, México aceptó la jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en febrero de 1999

² Caso Fernández Ortega y otros VS. México, Sentencia de 30 de Agosto de 2010

³ Caso Rosendo Cantú y otra VS. México, Sentencia de 31 de Agosto de 2010.

⁴ Caso Rosendo Radilla Pacheco (23 de noviembre de 2010), la Suprema Corte de Justicia de la Nación analizó en el cuaderno de “varios 212/2010”, al resolver el cumplimiento de la sentencia emitida por la Corte IDH.

reformularon las obligaciones de las y los operadores jurídicos; a partir de la reforma de junio de 2011⁵, es un mandato constitucional que las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

Esta reforma constitucional ha redimensionado el concepto de las obligaciones de las autoridades, quienes de conformidad con el ámbito de sus actuaciones tienen como responsabilidad prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos que constituyen delitos.

Uno de los señalamientos más significativos que aportaron estas sentencias, así como las recomendaciones de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), *Observaciones finales del Comité de la CEDAW 52º período de sesiones-CEDAW/C/MEX/CO/7-8*, Informe emitido el 7 de agosto de 2012; es que las instituciones de procuración de justicia cuenten con protocolos de investigación con perspectiva de género en los ámbitos ministerial, policial y pericial para casos de feminicidios y violencia sexual, primordialmente.

En consonancia, el Estado mexicano a fin de atender los compromisos internacionales en la materia, diseñó una serie de directrices nacionales en materia de procuración de justicia entre las que destacan:

- La Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; que en su artículo 5 establece la obligación a la PGR, de elaborar y aplicar protocolos de investigación de delitos con perspectiva de género, entre otros para la investigación de los delitos de feminicidio, contra la libertad y normal desarrollo psicosexual,
- El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, en su Meta Nacional “México en Paz”, en el Objetivo 1.4. “Garantizar un Sistema de Justicia Penal eficaz, expedito, imparcial y transparente”, específicamente con las Estrategia 1.4.1 “Abatir la impunidad” que en su línea de acción Diseñar y ejecutar las adecuaciones normativas y orgánicas en el área de competencia de la Procuraduría General de la República, para investigar y perseguir el delito con mayor eficacia; y Estrategia 1.4.2. “Lograr una procuración de justicia efectiva”, señala como línea de acción mejorar la calidad de la investigación de hechos

⁵ Decreto por el que se modificó la denominación del Capítulo I del Título Primero y reformó diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Publicado en el Diario Oficial de la Federación del viernes 10 de junio de 2011, entró en vigor el día siguiente.

delictivos para generar evidencias sólidas que, a su vez, cuenten con soporte científico y sustento legal.

- El Programa Nacional de Procuración de Justicia 2013-2018 (PNPJ), incluye los casos de violencia contra las mujeres como delitos de alto impacto cuya atención es prioritaria para el Estado mexicano, así como la responsabilidad de sensibilizar a todo el personal respecto a la atención y protección adecuada de las víctimas del delito y proveer garantías efectivas para que las mujeres denuncien actos de violencia.

- Establece una nueva cultura organizacional basada en la responsabilidad, vocación de servicio, ética, valores y el respeto a los derechos humanos en apego a la reforma constitucional de 2011, para tal fin incluye como línea de acción, diseñar y actualizar protocolos para los procedimientos que apoyen la operación sustantiva, apegados a derechos humanos y perspectiva de género, que actualice, sensibilice y estandarice los niveles de conocimiento y práctica de las y los servidores públicos.

Por lo anterior, en la Procuraduría General de la República, se diseñó el **Protocolo de Investigación Ministerial, Policial y Pericial con Perspectiva de Género para el Delito de Femicidio**, herramienta que establece las obligaciones que deben cumplir las y los servidores públicos como agentes del Estado.

Este protocolo deriva de ese propósito, proporcionar una herramienta metodológica estándar y efectiva en la investigación de la violencia feminicida, competencia de la Procuraduría General de la República, cometidos en agravio de las mujeres y niñas, para que se realicen con visión de género y estricto cumplimiento al principio de debida diligencia.

Implica un conjunto de procedimientos específicos, dirigidos a regular y unificar el actuar del personal sustantivo de la institución, bajo tres niveles de especialización, como lo son el ministerial, policial y pericial, para garantizar en su actuar el cabal cumplimiento y protección de los derechos humanos y evitar la discrecionalidad, para que la actuación sea coordinada y orientada.

La capacitación sobre los derechos de las mujeres y la procuración de justicia con perspectiva de género, será la medida para alcanzar la profesionalización de las y los funcionarios encargados de procurar justicia, que con voluntad de superación, esfuerzo, responsabilidad y sensibilidad se impongan de este instrumento y lo apliquen en todas sus investigaciones; es una acción que proyecta el mensaje de que esta violencia no se tolera por parte del

Estado.

La aplicación de este Protocolo de Investigación Ministerial, Policial y Pericial con Perspectiva de Género para el delito de Feminicidio, no sólo significa el cumplimiento a la normatividad interna y de las sentencias y criterios de la Corte Interamericana, sino la convicción de la institución de combatir la impunidad en los delitos de violencia de género y afianzar los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia, con lo que se acrecentará la confianza de la sociedad en las instituciones de procuración de justicia.

B. Alcances.

El alcance y aplicación de este protocolo como guía de actuación está destinado a fortalecer la capacidad y habilidades del personal sustantivo en las investigaciones que se realicen desde el enfoque de la perspectiva de género y la debida diligencia para el delitos de feminicidio a cargo de la Procuraduría General de la República.

Esta capacidad incluye que las y los operadores deben ser agentes sensibles a los factores sociales y estructurales en el que se generan las desigualdades de género que provocan los actos de violencia misógina⁶; en ese marco de referencia, enfocar los hechos desde una perspectiva de género es distinguir cómo las asimetrías en el ejercicio del poder y de derechos afecta de manera grave a las mujeres y conforman las razones de género que pueden motivar una violencia que se ensaña particularmente en contra del cuerpo de las niñas o mujeres, con una intensidad cruel y brutal.

Ninguna investigación de casos de violencia sexual debe ser influenciada por razonamientos o estereotipos discriminatorios que orienten de manera negativa a la o el investigador, esto significaría la ineficacia ministerial y generaría patrones de impunidad o permisividad de esta violencia que no son acordes con la misión de la PGR y que pueden comprometer la responsabilidad internacional del Estado mexicano. La debida aplicación de este protocolo de actuación pretende evitar conductas de servidoras y servidores públicos que constituyan re- victimización⁷, por indiferencia, maltrato, culpabilización y el silenciamiento que algunas veces se impone a las mujeres víctimas. Las consecuencias negativas de la violencia feminicida se produce no sólo por efecto del episodio en sí mismo, sino también a causa de la respuesta desfavorable del entorno.

Al respecto, resulta oportuno señalar que en casos de violencia de género, la CoIDH⁸ determinó que las investigaciones deben:

⁶Que odia a las mujeres, manifiesta aversión hacia ellas, hacia lo femenino. Diccionario Esencial de la Lengua Española. Real Academia Española, Editorial Espasa.

⁷La victimización suele ser actuaciones de la autoridad fuera de toda proporción: los interrogatorios abusivos, revisiones médicas reiteradas sin el cuidado necesario, incredulidad de quien interroga, interpretaciones y opiniones inoportunas, cuestionamientos que inculpan a la víctima, etc.

⁸Sentencia González y Otras vs estado mexicano (*Campo Algodonero*), Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2009, párr. 455

- I. Remover todos los obstáculos de *jure* o de *facto* que impidan la debida investigación de los hechos y el desarrollo de los respectivos procesos judiciales y usar todos los medios disponibles para hacer que las investigaciones y procesos judiciales sean expeditos a fin de evitar la repetición de hechos iguales o análogos a los del presente caso;
- II. La investigación deberá incluir una perspectiva de género; emprender líneas de investigación específica violencia, para lo cual se deben involucrar las líneas de investigación sobre los patrones respectivos en la zona; realizarse conforme a protocolos y manuales que cumplan con los lineamientos de dicha sentencia; proveer regularmente de información a los familiares de las víctimas sobre los avances en la investigación y darles pleno acceso a los expedientes, y realizarse por funcionario/as altamente capacitados en casos similares y en atención a víctimas de discriminación y violencia por razón de género;
- III. Deberá asegurarse que los distintos órganos que participen en el procedimiento de investigación y los procesos judiciales cuenten con los recursos humanos y materiales necesarios para desempeñar las tareas de manera adecuada, independiente e imparcial, y que las personas que participen en la investigación cuenten con las debida garantías de seguridad, y;
- IV. Los resultados de los procesos deberán ser públicamente divulgados para que la sociedad mexicana conozca los hechos objeto del presente caso.

La investigación con perspectiva de género se refiere a un estándar de derecho internacional de protección de los derechos humanos de las mujeres que se traduce en que la investigación tiene alcances adicionales cuando la víctima es una mujer que sufre muerte, maltrato o afectación a su libertad personal en el marco de un contexto general de violencia contra las mujeres⁹.

El deber de investigar es una obligación de medio y no de resultado, que debe ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa. La obligación del Estado de investigar debe cumplirse diligentemente para evitar la impunidad y que este tipo de hechos vuelvan a repetirse. En este sentido, la Corte recuerda que la impunidad fomenta la repetición de las violaciones de derechos humanos¹⁰.

⁹ Caso González y otras ("Campo Algodonero") vs. México, 2009, párr. 293.

¹⁰ Citado en la Sentencia de González y Otras vs Estado mexicano, *Campo Algodonero*, párr. 289, p. 76: Caso Anzualdo Castro Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de Septiembre de 2009. Serie C No. 202, párrs. 123 y 179 y Caso Garibaldi Vs. Brasil. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de septiembre de 2009. Serie C No. 203 Caso Garibaldi Vs. Brasil, párr. 141

Aunado a lo anterior, las investigaciones deben realizarse bajo el principio de la debida diligencia que se constituye como la obligación de las y los operadores del sistema de justicia para realizar todas las actuaciones necesarias dentro de un tiempo razonable para lograr identificar a los responsables, practicar exhaustivamente todas las diligencias correspondientes al caso, conocer la verdad de los hechos y procurar la reparación integral del daño causado.

Esta obligación está considerada en la Ley General de Víctimas (artículo 5), y en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém Do Pará)¹¹, especialmente artículo 7.b y 7.c, obligan a los agentes del Estado mexicano a investigar con la debida diligencia para investigar y sancionar la violencia contra las mujeres, en consecuencia, el Estado deberá remover los obstáculos que impidan el acceso real y efectivo de las víctimas a la justicia, realizar prioritariamente acciones encaminadas al fortalecimiento de sus derechos, contribuir a su recuperación como sujetos en ejercicio pleno de sus derechos y deberes.

El método y acciones que se contienen en este protocolo parten de la obligación del Estado de adoptar acciones tendientes a erradicar y combatir los patrones socioculturales que discriminan a las mujeres por el hecho de serlo, en la medida en que influye nocivamente en las y los operadores del sistema de justicia en el procesamiento de los casos. Es así que afecta en forma negativa la investigación de los hechos y la valoración de la prueba, puede verse marcada por nociones estereotipadas sobre cuál debe ser el comportamiento de las mujeres en sus relaciones interpersonales, así lo afirma la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su informe temático sobre “Acceso a la Justicia para Mujeres Víctimas de Violencia”.¹²

“...la influencia de patrones socioculturales discriminatorios puede dar como resultado una descalificación de la credibilidad de la víctima durante el proceso penal en casos de violencia y una asunción tácita de responsabilidad de ella por los hechos, ya sea por su forma de vestir, por su ocupación laboral, conducta sexual, relación o parentesco con el agresor, lo cual se traduce en inacción por parte de los fiscales, policías y jueces ante denuncias de hechos violentos”¹³

¹¹ Publicada Diario Oficial de la Federación, el 19 de enero de 1999.

¹² Consultada el 10 de noviembre de 2014 en página internet <http://www.cidh.org/women/Accesso07/indiceacceso.htm>;

¹³ Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), documento de la Relatoría de Derechos de las Mujeres de la CIDH: *Acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia en las Américas*, OEA/Ser.L/V/II. Doc. 68, Deficiencias en el juzgamiento y sanción de los casos de violencia contra las mujeres; punto 155, p.66, 20 enero 2007

Asimismo, se consideró lo dispuesto por el Modelo de Protocolo Latinoamericano de Investigación de las Muertes de Mujeres por Razones de Género (2013), de la Oficina Regional para América Central del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), con el apoyo de la Oficina Regional para las Américas y el Caribe de la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres); que señala, que entre las múltiples causas de la impunidad imperante en los casos de feminicidio se encuentra que, al no ser analizados como un problema social grave sino como “casos aislados”, no se ponen en marcha los mecanismos y los medios necesarios para elucidar de manera adecuada dichos actos criminales. Por lo que es necesario que los/las operadores/as de justicia cuenten con una serie de referencias comunes para orientar la investigación de los feminicidios hasta su correcta conclusión.

*Los feminicidios no deben ser vistos como **casos aislados o esporádicos** de violencia machista. En primer lugar, la experiencia advierte que el feminicidio, especialmente ocurrido en el ámbito privado, es con frecuencia la culminación de un continuo de violencia que, por su naturaleza, tiene elementos distintivos. En segundo lugar, la muerte por razones de género, que sea en el ámbito público o privado, es una de las **manifestaciones de violencia contra la mujer en la que se observa la interrelación entre las normas culturales y el uso de la violencia en la subordinación de la mujer**¹⁴.*

En la realidad, el personal investigador no podrá conocer si el reporte del hallazgo de un cuerpo de una mujer constituye violencia feminicida, hasta en tanto no se inicie la ruta de la investigación y se encuentre en la escena de los hechos, ante estas circunstancias, es aconsejable que este instrumento sirva de guía, en principio, para la investigación de todos los casos de muertes violentas de mujeres, culposos o dolosos, hasta en tanto no se descarte la existencia de las razones de género de esa violencia, de manera científica y cierta, aunque al inicio no haya sospecha de criminalidad, como pueden ser:

¹⁴ El Modelo de Protocolo Latinoamericano de Investigación de las Muertes de Mujeres por Razones de Género (2013) de la Oficina Regional para América Central del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) con el apoyo de la Oficina Regional para las Américas y el Caribe de la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres), párr. 100, pág. 36

- **Suicidios de mujeres**, los feminicidas pueden simular que la víctima cometió suicidio o muerte accidental; ocurre también que las mujeres pueden cometer suicidio como la culminación de haber sufrido violencia de género.

Finalmente, se tiene que estar alerta para que esto no sea un argumento invocado por las personas a cargo de la investigación criminal para no indagar la violencia feminicida y las razones de género y archivar el caso como suicidio¹⁵.

- **Muertes de mujeres aparentemente culposos¹⁶ y accidentales**, en ningún caso su aplicación impide la investigación general de los hechos sino que, por el contrario, permite identificar los hechos y asociarlos a un eventual contexto feminicida, en el que el autor podría haber condicionado los hechos para aparentar un accidente.

- En suma, en **casos de muerte no reciente**, nunca se debe descartar la evidencia de violencia por razones de género¹⁷.

De ninguna manera y en ningún caso se propone que el hecho de que los elementos que se aportan en este protocolo y que se detecten en un hombre infiera en consecuencia que se trata de un agresor feminicida, sino que son evidencias y rasgos que integran la violencia de género que debe investigar y acreditar la autoridad en los casos de feminicidios.

Estos elementos parten de los factores generales del contexto social y cultural que cada agresor hace suyos para justificar la violencia y para expresarla atendiendo a sus ideas y a las circunstancias que lo rodean. Son elementos comunes que deben aplicarse a un contexto particular caracterizado por un agresor, una víctima y unas circunstancias.

En ningún caso se trata de demostrar la autoría de unos hechos a través de la presencia de estos elementos, ni de substituir los procedimientos ordinarios de investigación, sino

¹⁵ El Código Penal Federal en su artículo 325 que tipifica el Feminicidio, advierte en su último párrafo que: *Al servidor público que retarde o entorpezca maliciosamente o por negligencia la procuración o administración de justicia se le impondrá pena de prisión de tres a ocho años y de quinientos a mil quinientos días multa, además será destituido e inhabilitado de tres a diez años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.*

¹⁶ No es ocioso recordar que el delito de feminicidio es eminentemente doloso: Época: Décima Época; Registro: 2007828; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la Federación; Publicación: viernes 31 de octubre de 2014 11:05; Materia(s): (Penal); Tesis: I.6o.P.59 P (10a.) FEMINICIDIO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL). El feminicidio es un tipo penal autónomo en relación con el delito de homicidio, pues si bien la vida también es el bien jurídico tutelado por la norma que establece el artículo 148 Bis del Código Penal para el Distrito Federal, el sujeto pasivo siempre será una mujer, y su comisión se realiza por razones de género con independencia del sentimiento que pueda tener el sujeto activo (odio, desprecio, o algún otro), pero que, en todo caso, se traduce en violencia de género, que puede manifestarse en abuso de poder del hombre sobre la víctima, ya sea ejerciendo violencia sexual contra ella, causándole lesiones infamantes, degradantes o mutilaciones, o habiéndola incomunicado previamente a la privación de la vida, o en cualquiera de los otros supuestos señalados por el citado numeral. Por otra parte, dada su naturaleza, sólo puede realizarse dolosamente, porque la exigencia de que la privación de la vida de la mujer sea por razones de género, encierra la idea de que el sujeto activo actúa con conocimiento de esa circunstancia y lo hace por odio o desprecio hacia el género femenino, lo que sólo puede concretarse de manera dolosa; además de que el párrafo tercero del artículo 76 del código mencionado, que establece el catálogo de delitos culposos, no incluye al feminicidio. SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo en revisión 95/2014. 3 de julio de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: María Elena Leguizamón Ferrer. Secretario: Gilberto Vázquez Pedraza. Esta tesis se publicó el viernes 31 de octubre de 2014 a las 11:05 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

¹⁷ Modelo, op cit., párrs. 21-24, p. 6

fortalecerlos y darles la orientación hacia la incorporación de la perspectiva de género la debida diligencia y el análisis interseccional, conforme parámetros y estándares de DIDH. El objetivo es contextualizar el crimen como un feminicidio para que la investigación parta de estas referencias y llegue a culminarse con éxito. El establecimiento de la autoría, imputación y demás elementos policiales y judiciales se hará por los procedimientos establecidos.

Los elementos que proporciona este instrumento no buscan concluir que su presencia en un hombre indican que es el victimario, sino aportar componentes y conocimiento que impulsen razonamientos para entender que son compatibles con un contexto feminicida, y que la investigación debe avanzar sin descartar esa hipótesis para localizar e integrar el resto de los elementos que se pueden encontrar en otros escenarios¹⁸.

Este protocolo está dirigido a las y los Agentes del Ministerio Público de la Federación personal policial y pericial de la PGR, cumpliendo entre otros los lineamientos de la fracción XV del artículo 5º de la Ley Orgánica de la PGR, por ello, a continuación se definen los objetivos de este instrumento:

Objetivo general. Establecer lineamientos de actuación para incorporar la perspectiva de género y promover la aplicación de estándares de derecho internacional de derechos humanos de las mujeres y las niñas en las investigaciones ministerial, policial y forense en caso de feminicidio; y en consecuencia, lograr se consiga una investigación, seria, imparcial, efectiva y orientada a la obtención de la verdad con la debida diligencia.

Objetivos específicos.

- I. Privilegiar el principios de la debida diligencia en las investigaciones;
- II. Proveer herramientas cognitivas y de sensibilidad para detectar los factores y circunstancias de contexto que perpetúan y normalizan la desigualdad entre mujeres y hombres;
- III. Prevenir que patrones y estereotipos socioculturales discriminatorios por género que influyan en las actuaciones e investigación ministerial, policial y pericial;
- IV. Homologar criterios con perspectiva de género y enfoque de derechos humanos para optimizar el trabajo en equipo entre el personal ministerial, policial y pericial;
- V. Actualizar los conocimientos de las y los operadores de este protocolo sobre el DIDH;

¹⁸ Modelo, op. cit. párrs, 238-240, p.76

- VI. Evitar la discrecionalidad del personal ministerial, policial y pericial en la investigación de violencia feminicida; y
- VII. Cumplir con la responsabilidad del Estado mexicano ante el DIDH de las mujeres, el Plan Nacional de Desarrollo, el Programa Nacional de Derechos Humanos y el Programa Nacional de Procuración de Justicia 2013-2018.

CAPÍTULO II. CONCEPTOS

Para los fines de este protocolo es importante reconocer, en primer lugar, el concepto de violencia contra las mujeres que contiene la **Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia** que en su artículo 5 fracción IV, define:

Definición ampliada que se armoniza con la respectiva del artículo primero de la **Convención**

Violencia contra las Mujeres: Cualquier acción u omisión, basada en su género, que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito privado como en el público

Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer¹⁹, conocida como Convención Belém Do Pará.

Por otra parte, la **Declaración de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer**²⁰ desarrolla este concepto de la violencia contra la mujer como:

“...todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada”.

De conformidad con la LGAMVLV (artículo 21), la Violencia Feminicida es:

Es la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres

La violencia dirigida contra la mujer, porque es mujer, o que la afecta en forma desproporcionada, incluye actos que infligen daños o sufrimientos de índole física, mental o sexual, amenazas de cometer esos actos, coacción y otras formas de privación de la libertad²¹.

19. **Convención**, Artículo 1: “cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado”.

²⁰ Asamblea General de las Naciones Unidas, Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Resolución 48/104 del 20 de diciembre de 1993, A/RES/48/104.

²¹ Así lo determina la Recomendación General número 19 del Comité de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW).

Es interesante resaltar que esta gama de afectaciones están recogidos en las hipótesis normativas del tipo penal de *feminicidio* del Código Penal Federal.

A. La perspectiva de género y la interseccionalidad.

La violencia contra las mujeres se genera dentro de un contexto socio-cultural en el que persiste y se mantiene la subordinación de las mujeres por el dominio de los hombres en todos los espacios y órdenes de la vida. Esto produce un desequilibrio de derechos y oportunidades que afecta de manera directa y primordial sólo a las mujeres, que se refleja en las estructuras de la vida social, política y económica que son valoradas de manera androcéntrica²² y que se legitiman en la aparente superioridad masculina vinculada a su constitución física o características biológicas, lo que produce que se les asigne a unas y a otros diferentes roles en la vida y con ello diferentes actividades, oficios, atributos lo que históricamente ha generado no sólo desigualdad y discriminación sino injusticias y violencia contra las mujeres.

Si se analiza esa construcción socio-cultural se comprueba que la cultura establece un orden para articular la convivencia y las relaciones permitiendo que estas transcurran dentro de las pautas dadas, hasta el punto de configurar la “normalidad” de esa sociedad. A partir de esa normalidad, se establece una serie de roles y funciones para hombres y mujeres de manera que todo transcurra dentro del orden establecido. Según esa construcción, cuando se produce una desviación de las expectativas patriarcales en aquellas personas que están sometidas al control o supervisión de otras (por ejemplo, cuando las mujeres cuestionan e impugnan este orden autoritario y patriarcal, o cuando sus acciones no encajan en el ámbito de lo aceptable por las visiones del mundo que son dominantes)²³, están obligadas a corregir su conducta, en su defecto, los hombres asumen su autoridad para corregir y castigar a través de la discriminación y la violencia de género. De ahí que se encuentre comúnmente la sociedad pueda justificar esta reacción correctiva masculina aduciendo que la violencia ejercida por el marido o pareja son “conflictos de pareja”, o que las mujeres provocaron la violencia por su actitud agresiva, trasgresora de las costumbres familiares o sociales, o atentadora por su forma de vestir, por celos, etc.

Se cree sin fundamento alguno que hombres y mujeres viven las mismas causas y consecuencias de la violencia y por lo tanto los procedimientos de investigación y la ley misma deben aplicar por igual a unas que a otros, la realidad nos descubre un mundo dual en cuya realidad las oportunidades y derechos no se ejercen ni se gozan igual para todos los hombres, ni para todas las mujeres; pero en el caso de las mujeres, la brecha de desigualdad en comparación con la generalidad de los hombres es inmensamente mayor. Los estudios y

²² Descripción de la vida sólo desde el punto de vista masculino.

²³ Modelo de Protocolo, op. cit., párr.106, p. 39

estadísticas en cualquier parte del mundo indican, en cualquier época de la historia humana que la población que más sufre violación a sus derechos humanos, son las mujeres. De ahí que con el avance progresivo del derecho nacional e internacional, se ha constituido la perspectiva de género como un método para combatir esta desigualdad y promover el acceso a la justicia para las mujeres en igualdad sustantiva.

Para los fines de este protocolo, es importante que la o el operador distinga entre: “género” y “sexo”. Género es una categoría social, mutable, construible y asignada socialmente desde que nacemos como las características, virtudes, roles, actividades, espacios que son “propias” para las mujeres y qué es propio para los hombres; a diferencia de “sexo” que es una categoría biológica con la cual se nace con características genéticas relativas a la anatomía de hombre o mujer, con constituciones genitales, hormonales, entre otras diferencias naturales; esta realidad es inmutable, al menos biológicamente. En cambio, género es una asignación de identidades y atributos construidos social y culturalmente que no varía en esencia entre sociedades, comunidades o países, tradicionalmente en todas las culturas y naciones se reconocen cuáles las actividades y espacios asignados socialmente a las mujeres y cuales a los hombres, haciendo una distinción jerárquica en favor de la población masculina que genera desigualdad en la vigencia y acceso a los derechos humanos de las mujeres y que provoca que éstas, en términos universales, vivan en situaciones inequitativas de acceso al poder y desarrollo, social, político²⁴.

Perspectiva de Género²⁵: Es una visión científica, analítica y política sobre las mujeres y los hombres. Se propone eliminar las causas de la opresión de género como la desigualdad, la injusticia y la jerarquización de las personas basada en el género. Promueve la igualdad entre los géneros a través de la equidad, el adelanto y el bienestar de las mujeres; contribuye a construir una sociedad en donde las mujeres y los hombres tengan el mismo valor, la igualdad de derechos y oportunidades para acceder a los recursos económicos y a la representación política

Por visión científica, se debe entender la aplicación de un enfoque objetivo y de precisión como método de investigación propio de las ciencias científicas, que contenga: observación, análisis, elaboración de hipótesis y confrontación de resultados para obtener conclusiones; este análisis se debe complementar con un enfoque de *interseccionalidad*.

En las investigaciones no debe perderse de vista que las víctimas proceden de variados contextos, entornos y orígenes, que las mujeres no son de perfil homogéneo (igual que los

²⁴ Para entender estos conceptos es importante establecer que el género como categoría sociológica se ocupa de describir las generalidades de las relaciones sociales y humanas, que se generan en forma desigual en perjuicio de las mujeres, no estudia las particularidades; no es que se universalice la condición de las mujeres, sino que en su inmensa mayoría, en todas las sociedades ocurren desigualdades y discriminación contra las mujeres que generan violencia, eso es lo que trata de ubicar la perspectiva de género.

²⁵ Fracción IX del artículo 5 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia²⁵

hombres), y que en el caso de las mujeres víctimas de violencia se cruzan no sólo la circunstancia de ser mujer sino otras variables que pueden o pudieron aumentar el grado de vulnerabilidad, como puede ser su origen, contexto, cultura y estatus social, implica reconocer los factores que, además de las razones de género, afectan la vigencia de los derechos humanos (tanto de hombres como de mujeres), como la situación económica, la salud, las creencias religiosas o de otra índole, la pertenencia a grupos minoritarios como indígenas, personas en reclusión, homosexuales, lesbianas, la edad, entre otros componentes.

El análisis interseccional resulta imprescindible para realizar el estudio de las formas de violencia que pudieron haber afectado a la víctima de un feminicidio, antes, durante o después del hecho delictivo; las diferentes formas en las que las discriminaciones (raciales, de género, de sexualidad, de origen rural, etc.) interactúan con otros múltiples y complejos factores de exclusión, sin subordinar o matizar uno en favor del otro, sino tomándolos como componentes que permiten hacer visibles los impactos diferenciados de las violencias contra las mujeres. Esta interseccionalidad de factores que se cruzan y conviven en una misma mujer se

Las investigaciones ministeriales que incorporan la perspectiva de género, se debe tener en cuenta en la elaboración de la teoría del caso que la violencia dirigida contra las mujeres, no es ejercida por personas excepcionalmente enfermas o perversas o con afectaciones psicológicas singulares, sino que es cometida por hombres formados en una sociedad que permite la discriminación de las mujeres por el hecho de serlo, se debe entender esta violencia como consecuencia de violaciones estructurales a los derechos de las niñas y las mujeres.

La argumentación que se invoque para iniciar una investigación de un hecho de violencia contra una mujer debe tener en cuenta invariablemente las disposiciones de la Convención **para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres**²⁷ (CEDAW), en cuanto a considerar que la violencia contra las mujeres, en todas sus formas, menoscaba o anula el goce de los derechos humanos y libertades fundamentales, constituye discriminación que viola el principio de igualdad de derechos entre hombres y mujeres y vulnera el respeto de la dignidad humana de las mujeres²⁸.

Así como el concepto de la fracción IX del artículo 5 de la LGAMVLV²⁹:

Perspectiva de Género: Es una visión científica, analítica y política sobre las mujeres y los hombres. Se propone eliminar las causas de la opresión de género

²⁶ Modelo de, párr.120, p. 43

²⁷ CEDAW, publicación en el Diario Oficial de la Federación el 12 mayo de 1981

²⁸ Recomendación General número 19 la CEDAW, 11º Período de sesiones, 1992, párrs.1

²⁹ Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de febrero de 2007.

como la desigualdad, la injusticia y la jerarquización de las personas basada en el género. Promueve la igualdad entre los géneros a través de la equidad, el adelanto y el bienestar de las mujeres; contribuye a construir una sociedad en donde las mujeres y los hombres tengan el mismo valor, la igualdad de derechos y oportunidades para acceder a los recursos económicos y a la representación política y social en los ámbitos de toma de decisiones;

La visión de la perspectiva de género que implica visibilizar la realidad de las mujeres es una de las razones por las que el legislador reformó los códigos penales para introducir el tipo penal de feminicidio, cuyos elementos son muy distintos al homicidio, implica reconocer que es un ilícito en el cual sólo las mujeres pueden ser sujetas pasivas por razones de género.

La perspectiva de género y la debida diligencia son conceptos que permean como requisitos de forma y fondo para el procesamiento de las investigaciones de los delitos ejecutados con violencia de género que lesionan a niñas y a mujeres. Su importancia va más allá de investigar e identificar a los presuntos responsables, sino que se trata de un deber del Estado mexicano que se traduce en prevenir esta violencia al combatir la impunidad.

Ninguna investigación de la violencia feminicida debe ser influenciada por razonamientos o estereotipos discriminatorios por razones de género que orienten de manera negativa a la o el investigador, esto significaría la ineficacia ministerial y generaría patrones de impunidad o permisividad de esta violencia que no son acordes con la misión de la PGR y que pueden comprometer la responsabilidad internacional del Estado mexicano.

De ahí la importancia de diseñar un protocolo de actuación que aporte lineamientos sobre como incorporar la perspectiva de género a las investigaciones y que genere conocimiento para quienes lo van a operar.

La perspectiva de género se encarga de enfocar y desentrañar las diferencias y desigualdades por razones de género, que en términos generales discriminan a las mujeres, sumando a este enfoque el análisis interseccional, la o el AMPF deberá advertir e identificar cómo es que el lugar que la mujer y el hombre ocupan en la sociedad depende de factores políticos, económicos, culturales, sociales, religiosos, ideológicos y ambientales que la cultura, la sociedad y la comunidad pueden cambiar³⁰. Estas circunstancias específicas de la víctima con relación al agresor puede ser la descripción de las motivaciones desencadenantes del feminicidio.

³⁰ Recomendación 28 del Comité de la CEDAW, CEDAW/C/GC/28, Diciembre 2010, párr. 5, p.2

El análisis interseccional parte de que la discriminación contra las mujeres está unida de manera indivisible a otros factores que afectan a la mujer, como la raza, el origen étnico, la religión o las creencias, la salud, el estatus, la edad, la clase, la casta, la orientación sexual y la identidad de género, y en ese sentido, es entendible que la discriminación por motivos de sexo o género puede afectar a las mujeres de algunos grupos en diferente medida o forma que a los hombres³¹.

El enfoque de interseccionalidad, conforme a la CEDAW, es un concepto básico para comprender el alcance de las obligaciones generales de los Estados partes prevenir y erradicar esta violencia, es útil para distinguir los alcances de la reparación del daño y para elaborar la teoría del caso. Aun cuando se distingan las razones de género en un feminicidio, es imposible homogenizar el perfil de las mujeres víctimas de violencia, se deberá contextualizar la vida y el entorno de la víctima, ante la multitud de variables presentes en la vida de las mujeres, la investigación tendrá que ser distinta para cada caso, por ejemplo, no viven igual la discriminación y marginación social una mujer indígena que una que vive en entornos urbanos, aun cuando ambas hayan sido sometidas a vejaciones y maltratos. No sufren la misma violencia una mujer a manos de su marido o pareja que aquella que está detenida privada de su libertad por agentes de seguridad pública o integrantes del ejército, o por el mismo agresor feminicida; habrá que establecer los contextos donde se ubican las distintas formas o tipos de violencia que pudieron haber afectado a la víctima de un feminicidio³², antes, durante o después del hecho delictivo.

Así, es diferente el análisis del contexto de violencia que rodea al entorno de una mujer heterosexual, casada, adulta mayor y/o ejerciendo los roles normativos del ser mujer y que pudo ser asesinada por violencia patrimonial, con el análisis que debe realizarse en el caso de la muerte violenta de una mujer joven, lesbiana, bisexual o transgenerista que subvertía el orden normativo. En este último caso se hace más relevante la relación entre la víctima y el feminicida, como un posible factor desencadenante del asesinato³³.

En los casos de las mujeres de indígenas, es más palpable su vulnerabilidad ante los sistemas de justicia, las variables de analfabetismo, usos y costumbres, pobreza, salud, las colocan en situaciones muy complejas para que accedan al ejercicio y goce de sus derechos humanos, se deben diseccionar estos cruzamientos de factores de vulnerabilidad, sumado al hecho de ser mujer, para aportar herramientas y conocimientos que hacen visibles esas diferencias, no sólo frente al hombre indígena, sino con el resto de las mujeres.

³¹ Ibid, párr.18

³² Modelo de Protocolo, op. cit., párr. 109, p. 43

³³ Ibid, párr. 121.

Las y los operadores del sistema de justicia deben reconocer y analizar en sus actuaciones estas formas entrecruzadas de discriminación y su impacto negativo combinado en las mujeres víctimas a fin de poner en práctica medidas para que esos factores de discriminación no afecten el procedimiento de la investigación, ni la acreditación de los ilícitos y, sobre todo se contengan en la petición de la reparación del daño con perspectiva de género y enfoque interseccional en beneficio de las víctimas.

En el análisis interseccional resulta útil la **antropología social** que permite hacer visible las diferencias de contexto de las víctimas y de las prácticas victimizantes contra las mujeres. Para ello, la investigación puede apoyarse en un **peritaje antropológico social**, que deberá describir los factores sociales y culturales que la o el AMPF analizará para construir su teoría del caso en una investigación de feminicidio, por ejemplo: es útil en el caso de los pueblos indígenas y de otros grupos étnicos, analizar los hechos e identificar los factores culturales que han podido potenciar, permitir o generar el acto delictivo o simplemente analizar e identificar el contexto del delito³⁴, de otra manera, para las personas que no conocen las culturas indígenas es difícil entender e identificar estas formas que pueden acarrear discriminación y sumar un factor de vulnerabilidad a las víctimas de delitos.

Investigar desde la perspectiva de género la comisión de un feminicidio implica necesariamente identificar si antes o durante la comisión del ilícito, se pueden identificar situaciones de poder que por razones de género den cuenta de un desequilibrio entre feminicida y víctima, analizar detenidamente las posibilidades que el tipo penal enumera para encuadrar los hechos que se investigan desde el punto de vista de la violencia, sumisión, o qué relaciones de poder vivió la víctima antes de la privación de la vida.

B. Mujeres en situación especial de vulnerabilidad³⁵

Las mujeres pueden transitar por procesos especialmente difíciles, como la migración, desempleo, exclusión social, o vivir en un medio rural, ejercicio de la prostitución, embarazo, contar con edad avanzada; condicionantes de salud como la discapacidad, la enfermedad mental, entre otras circunstancias que las ubican en condiciones de vulnerabilidad:

Embarazo. En el contexto de una relación de violencia de género, el embarazo es una etapa de especial vulnerabilidad y riesgo. En ocasiones, es en esta etapa cuando la violencia se detona o se torna más evidente, por parte de la pareja, incluida la violencia física y sexual.

³⁴ Modelo de, op. cit., párr.123, p.44

³⁵ Fuente: *Protocolo Común para la Actuación Sanitaria ante la Violencia de Género*, 2012, Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Madrid, España

Los embarazos en una mujer que sufren violencia, podrían considerarse de alto riesgo, lo que significa un aumento de la mortalidad materna y perinatal, cuadros de estrés, infecciones, anemias, abortos espontáneos, amenaza de parto, recién nacidos de bajo peso, por mencionar algunos.

Discapacidad. Las mujeres con alguna discapacidad física, sensorial, psicológica o psiquiátrica se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad a la violencia física, sexual y psicológica, por presentar:

- Menor capacidad para defenderse;
- Mayor dificultad para expresarse;
- Menor credibilidad en su relato, especialmente en mujeres con trastorno mental grave;
- Menor acceso a la información, asesoramiento y a los recursos de forma autónoma;
- Mayor dependencia de terceras personas;
- Más dificultades de acceso al trabajo remunerado y a la educación;
- Menor autoestima y menosprecio de su propia imagen;
- Miedo a perder los vínculos que le proporcionan cuidados; o
- Menor independencia y mayor control económico.

Migrantes. En las mujeres migrantes, pueden confluir condiciones que determinan una especial vulnerabilidad:

- La precariedad económica;
- Poco o nulo dominio del idioma español;
- Sufrir extorsión de parte de las autoridades y amenazas a ser expulsadas del país;
- Mayores dificultades de comunicación y expresión debido a las barreras idiomáticas, aunado a la escasez de intérpretes con formación en violencia de género;
- Mayor dificultad de acceso a los servicios de salud;
- En algunos casos, la posibilidad de haber sufrido además, otras formas de violencia a lo largo de su vida y su proceso migratorio (abusos y agresiones sexuales, trata de personas, conflictos bélicos, cárcel y tortura, etc.);

- Ausencia o escasa red de apoyo familiar y social, especialmente en mujeres recién llegadas al país;
- Desconocimiento de sus derechos y de los apoyos disponibles para ellas; o
- Prejuicios, actitudes discriminatorias y desconfianza de profesionales de diversos ámbitos.

Adultas mayores. Su edad aumenta su vulnerabilidad ante quienes le rodean de quienes tiene dependencia, lo que dificultan las posibilidades de poner fin a una relación de maltrato:

- Pueden tener una historia de maltrato, aún sin ser conscientes de ello, desarrollando sentimientos de indefensión, incapacidad e impotencia que les impiden plantearse alternativas a su situación;
- En la etapa de la jubilación, el número de horas de convivencia con la pareja aumenta, y algunos hombres tratan de tener un mayor control sobre el tiempo, las actividades y relaciones de las mujeres, exigiendo, con violencia, su disponibilidad y presencia para acompañarles y atenderles;
- Es frecuente la dependencia económica de la pareja e ingresos escasos procedentes de pensiones, que impiden que las mujeres se planteen como posibilidad la separación de la pareja y el inicio de una vida autónoma e independiente;
- En esta etapa de la vida, hay mujeres que pierden el apoyo cotidiano de sus hijos o hijas cuando éstos/as se independizan, e incluso cambiar de ciudad, lo que las enfrenta a la soledad o a vivir la violencia sin testigos ni mediación;
- Algunas mujeres se ven en la circunstancia de tener que cuidar a su pareja, de la que han recibido y continúan recibiendo malos tratos, por encontrarse ésta en situación de dependencia y/o enfermedad crónica;
- El deterioro de su salud afecta su movilidad, libertad y la capacidad de tomar decisiones.

Mujeres en situación de exclusión social. La pobreza conduce a las mujeres, más que a los hombres, a experimentar situaciones de exclusión social. Pueden ser mujeres solas con cargas familiares, mujeres que están en prisión o han salido de ella, mujeres que ejercen el trabajo sexual, mujeres con adicciones graves.

Habitualmente acumulan varios factores de desventaja social, que contribuyen no sólo a una mayor vulnerabilidad a sufrir violencia de género, sino a aumentar las dificultades para salir de ella, tales como:

- El analfabetismo o niveles muy bajos de instrucción académica, escasa o nula cualificación laboral, carecer o tener muy limitada la autonomía económica;
- Tener en la práctica, menor acceso a los servicios de apoyo, de salud, de orientación para el acceso a la justicia;
- Ausencia de redes de apoyo o vínculos demasiado precarios.

Mujeres indígenas. Pertenecientes a grupos indígenas enfrentan mayores dificultades para hacer visible la violencia que suelen sufrir por:

- Poco o nulo dominio del idioma español;
- Escasa información acerca de sus derechos;
- Dificultades de acceso a los recursos por su dispersión y lejanía en sus comunidades;
- Mayor control social, por usos y costumbres. El hecho de denunciar puede tener repercusiones en las relaciones con la comunidad;
- Mayores dificultades para la protección;
- Mayor riesgo de inhibición profesional por el control social;
- Menor posibilidad de independencia económica;

Mujeres con infección de VIH (Virus de Inmunodeficiencia Adquirida).

Tener infección por el VIH puede ser un factor de riesgo ante la violencia de género. Las mujeres con esta infección por el VIH pueden estar en riesgo de sufrir episodios de violencia, desde insultos hasta agresiones físicas y sexuales, o vivir constante violencia psicológica, tras comunicar su estado serológico a sus parejas. Aunque distintos estudios indican que los índices de violencia de género que sufren las mujeres con el VIH son similares a los que sufren las mujeres que no están infectadas, su intensidad y gravedad parece ser más severa para las primeras. Por otro lado, en las mujeres que se encuentran en una relación abusiva aumenta considerablemente el riesgo de infección por VIH, debido al miedo a las consecuencias de oponerse a una relación sexual no deseada, al temor al rechazo si intenta negociar relaciones sexuales más seguras, y a la propia coerción y manipulación emocional a la que se ven sometidas.

C. El delito de feminicidio.

C.1 Concepto y análisis del feminicidio.

El feminicidio es un delito de alto impacto para la sociedad, por lo que es necesario el establecimiento de lineamientos específicos para su investigación con perspectiva de género y el enfoque de derechos humanos.

Antes de pensar en la construcción jurídica del término, es importante conocer cómo se gestó el concepto de feminicidio, la primera vez que se registra su utilización es en el idioma inglés, en la década de los 70's como "femicide", definido como la muerte violenta de una mujer por ser mujer; se le atribuye a la investigadora Diana Russell quien lo invoca en una declaración ante el Tribunal Internacional sobre Crímenes contra Mujeres en Bruselas en 1976³⁶. Surge como alternativa al término pretendidamente neutro de homicidio, con el fin político de reconocer y visibilizar la discriminación, la opresión, la desigualdad y la violencia sistemática contra la mujer que, en su forma más extrema, culmina en la muerte. De acuerdo con la definición de Russell³⁷ se aplica a todas las formas de asesinato sexista, esto es, "los asesinatos realizados por varones motivados por un sentido de tener derecho a ello o superioridad sobre las mujeres, por placer o deseos sádicos hacía ellas, o por la suposición de propiedad sobre las mujeres"³⁸.

³⁶ Diana Russell, (Sudáfrica, 1948) académica, psicóloga social y feminista, utilizó en el término en 1976.

³⁷ En 1992, Diana Russell y Jill Radford lo definieron como: "el asesinato misógino de mujeres cometido por hombres". Señalan que estos actos violentos que acaban con el asesinato o muerte de las mujeres son femicidios Radford, Jill; y Russell, Diana E. H. (1992), (eds.), *Femicide: The Politics of Woman Killing*, Nueva York, Twayne, Russell D. E., 2006, págs. 77 y 78. Citado por el Modelo de Protocolo Latinoamericano.

³⁸ Citado en el Modelo, Capítulo I.

El concepto explica que el feminicidio es el resultado de la relación inequitativa entre los géneros; refiere la estructura de poder y el control que tienen los hombres sobre las niñas y mujeres que les permite disponer sobre sus vidas y sus cuerpos, decidiendo ellos el momento de la muerte. En legislaciones latinoamericanas³⁹ se utiliza tanto el femicidio como el feminicidio, ambos se refieren a la privación de la vida de una mujer por razones de género.

En suma, en el contexto jurídico y sociológico no es exacto utilizar el término homicidio para aplicarlo a asesinatos en contra de mujeres y niñas por razón de género, de acuerdo con nuestra legislación el feminicidio es la privación de la vida de una mujer de manera violenta y por razones de género. El feminicidio constituye la forma más extrema de la violencia contra las mujeres.

La CorteIDH, en la sentencia del Campo Algodonero (2009), incluyó en sus argumentaciones que los feminicidios son “los homicidios de mujeres por razones de género”, considerando que son resultado de una situación estructural y de un fenómeno social y cultural enraizado en las costumbres y mentalidades y que estas situaciones de violencia están fundadas en una cultura de violencia y discriminación basada en el género”.

C.2 El tipo penal en el Código Penal Federal.

Los componentes de este tipo penal, tienen que ver con las razones de género: la motivación de los agresores engendrada en los patrones de conducta y valores que culturalmente han sido asignados a lo que se ha entendido como el significado ser mujer: subordinación, debilidad, sentimientos, delicadeza, feminidad, etc., para contextualizar el feminicidio se investigará si el agente feminicida y su modo de operar reúne alguno o algunos patrones culturales arraigados en ideas misóginas de superioridad del hombre, de discriminación contra la mujer y de desprecio contra ella, que le hacen creer que detenta el poder y decisión para determinar la vida, controlar y poseer el cuerpo de las mujeres y en ese sentido su destino y voluntad. El equipo de investigación deberá tener en cuenta que esta violencia tiene un origen estructural, que tiene que ver con la asignación de roles, la prevalencia de estereotipos en un determinado contexto en el que vivió la víctima y que se comete inmersa en un entorno cultural que lo permite.

³⁹ El Consejo Centroamericano de Procuradores de Derechos Humanos y el Instituto Interamericano de Derechos Humanos definieron en 2006 el feminicidio como la muerte violenta de mujeres, por el hecho de ser mujeres, y agregaron que éste constituye la mayor violación a los derechos humanos de las mujeres y el más grave delito de violencia contra las mismas.

En la investigación del feminicidio, la teoría del caso deberá atender a los elementos que describen el tipo penal que contiene el Código Penal Federal⁴⁰:

Capítulo V Feminicidio

Artículo 325. *Comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género. Se considera que existen razones de género cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:*

- I. La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo;*
 - II. A la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia;*
 - III. Existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar, del sujeto activo en contra de la víctima;*
 - IV. Haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza;*
 - V. Existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima;*
 - VI. La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la vida;*
 - VII. El cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público.*
- A quien cometa el delito de feminicidio se le impondrán de cuarenta a sesenta años de prisión y de quinientos a mil días multa.*

En esta tipificación encontramos muy bien distinguidos los siete supuestos normativos que se deben atender para acreditar el elemento de: razones de género, en el ilícito de feminicidio.

⁴⁰ La definición más actualizada a nivel internacional sobre el Feminicidio la encontramos en la *Declaración sobre el Femicidio del Comité de Expertas/os* (MESECVI/CEVI/DEC. 1/08), del 15 de agosto de 2008, punto 2. El Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, MESECVI, que es una metodología de evaluación multilateral sistemática y permanente, fundamentada en un foro de intercambio y cooperación técnica entre los Estados Parte de la Convención y un Comité de Expertas, que analiza el impacto de la Convención en la región, sus logros en materia de prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, y los desafíos existentes en la implementación de políticas públicas en la materia y es la siguiente: *es la muerte violenta de mujeres o de personas con identidad de género femenina, por razones de género, ya sea que tenga lugar dentro de la familia, unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, en la comunidad, por parte de cualquier persona, o que sea perpetrada o tolerada por el Estado y sus agentes, por acción u omisión.*

Con el objetivo de resaltar los componentes de cada fracción del tipo penal del feminicidio, se aporta el siguiente análisis de las características que desde el enfoque de género infiere la o las conductas que despliega el feminicida y que se pueden encontrar previas o concomitantes con la privación de la vida, entendiendo que la conducta de los victimarios obedece a sus motivaciones y al significado que él le da al hecho de agredir y matar a una mujer:

C.3 Análisis de género sobre las hipótesis del tipo penal.

No se trata de explicar el feminicidio por las características del agresor, sino de encontrar al agresor por las características del feminicidio, a través del análisis de género.

Las razones de género permiten crear una concepción de las mujeres sobre dos polos fundamentales: la mujer como posesión, como alguien que tiene dueño, y la mujer como objeto, como una “cosa” que puede ser usada por los hombres de la manera que decidan, y luego deshacerse de ella cuando y como consideren oportuno. Estas construcciones culturales no son impuestas, es decir, no obligan a todos los hombres a asumirlas y admitirlas, pero sí permiten que aquellos que inicien el camino en cualquiera de los sentidos señalados encuentren referencias para continuar con sus propósitos hasta conseguirlos⁴¹.

Conforme a cada fracción del tipo penal:

La víctima presenta signos de violencia sexual de cualquier tipo (I), entre las manifestaciones de violencia física contra mujeres y niñas, la sexual en el feminicidio es una representación propia de violencia de género, ya que va dirigida y su objeto es la posesión del cuerpo femenino, en cuya agresión física se patentiza la superioridad del victimario sobre la mujer, subyace alguna modalidad de asimetrías de poder y la satisfacción violenta de una posesión sexual. La violencia sexual también es empleada como satisfacción de fantasías sexuales depravadas o sádicas, las cuales, evidentemente, se cometen sin consentimiento de la mujer.

Al feminicidio le puede anteceder una amplia variedad de actos de naturaleza sexual cometidos de manera violenta contra la persona sometida que no necesariamente se limitan a la introducción del miembro viril o de cualquier elemento o instrumento distinto a dicho miembro, por medio de la violencia física o moral, en el cuerpo de la víctima, por vía vaginal, anal u oral; sino también cualquier contacto sexual, manoseo u obligarla a participar en un acto sexual, mutilación genital, hostigamiento sexual, iniciación sexual forzada, la trata de personas, con fines sexuales, entre otros, puede o no ir acompañada de violencia física o moral evidente.

⁴¹ Modelo, op. cit. párrs.132 y 133, p.46

La experiencia ha demostrado que un gran número de muertes violentas de mujeres y niñas están relacionadas con prácticas sexuales extremas, en donde la finalidad del victimario es consumir la violación y privar de la vida a la víctima como corolario; obtienen su gratificación psicosexual a través de rituales relacionados con sus fantasías y conductas de dominación y control de las víctimas. Estas formas de agresión deben ser consideradas como una forma de tortura previa, en donde se provoca, además dolor, sufrimiento y humillación.

Al respecto, la Convención de las Naciones Unidas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes establece que:

«Se entenderá por el término tortura todo acto por el cual se inflija intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación»

El componente sexual en los feminicidios, se impone para castigar, demostrar el control absoluto del agresor sobre quien considera inferior, un objeto de uso y deshecho, es un acto de discriminación, que conlleva intención de humillar, poseer, anular a la persona; el conjunto de esta violencia la física, sexual y psicológica generará un estado de shock en la víctima que probablemente le impedirá defenderse, lo que aprovecha el feminicida causándole dolores y sufrimientos crueles e inhumanos mediante conductas degradantes de índole sexual, previos a su muerte, lo que puede constituir una forma de tortura.

La violencia sexual puede inferirse si:

- I. El cuerpo está desnudo o semi desnudo;
- II. El acomodo del cuerpo lo indica, posición de piernas abiertas; el cuerpo encontrado en una posición que resalta genitales, mamas o glúteos o en posición ginecológica;
- III. El acomodo de la ropa, desnudo de la cintura hacía abajo, o la ropa hasta las rodillas o tobillos, ropa superior del cuerpo arriba de la zona de las mamas;
- IV. Signos de mordidas en senos, *sugilaciones*, u otras evidencias físicas similares;
- V. Si no cuenta con ropa interior; o
- VI. Si presenta signos de agresión o mutilación en senos u órganos genitales.

De este acto pueden desprenderse las motivaciones del feminicida:

- I. Que el cuerpo de la mujer es posesión de los hombres;
- II. Que las mujeres no tienen derecho a limitar a los hombres en cuanto su satisfacción sexual;
- III. Que el agresor/violador está respondiendo a su género de dominante, controlador;
- IV. Que fue provocado por la víctima, por su vestimenta, por sus actitudes; o
- V. Responsabilizar a la víctima porque estuvo en un lugar no propio por ser mujer, que debió evitar.

Estos son los estereotipos o razonamientos machistas que, en el caso que nos ocupa, puede mover al agresor y que la o el investigador debe identificar en los casos de feminicidio. No hay que olvidar que la superioridad física e incluso la destreza para provocar una agresión es un rasgo que se aprende como un componente de lo que tradicionalmente es considerado masculino.

A la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia (II), el tratamiento degradante o destructivo del cuerpo de la mujer previo y después de la privación de la vida, ha sido una constante en los feminicidios.

Esta fracción hace referencia a agresiones graves, infamantes o degradantes, cuyo origen bien puede ser el odio que le representa al agresor el cuerpo femenino. El misógino es el hombre que aborrece todo lo que signifique ser mujer. En cuanto a la corporeidad femenina, el agresor o agresores feminicidas pueden llegar a inferir lesiones graves al cuerpo de la mujer en las partes que considera signo de su feminidad o que representa su rol de mujer, o madre, o amante, como pueden ser los senos; el vientre; la vulva; o incrementando la violencia a zonas conocidas como erógenas como pueden ser: el lóbulo de la oreja, el cuello, las nalgas, la espalda, la boca, etc.

La violencia feminicida es dirigida no sólo a privar de la vida a la víctima, sino hacerla sufrir antes de morir, torturar el cuerpo (acompañada o no de tortura psicológica).

El sufrimiento que impone el agresor a la víctima es representativo de castigo a la mujer por ser como es (o como fue), desde la posición del hombre como controlador y dominante en un sistema patriarcal que priva en las convivencias sociales o familiares (el agresor se coloca como juez y dictaminador natural por sobre el comportamiento de su víctima: “porque se lo

merece”, porque la víctima no se comportó conforme estereotipos de género). En este supuesto caben las hipótesis de feminicidios de mujeres por su orientación sexual.

En este contexto el agresor feminicida, busca ocasionar el mayor daño y dolor posible a su víctima, en consecuencia suele infligir mutilaciones infamantes⁴² o degradantes que buscan deshonrar a su víctima; esta creencia radica en la cultura patriarcal que mantiene estructuras que privilegian las características que debe poseer lo que se ha considerado socialmente como una mujer, decente o con honra, prudencia, casta y que se debe guardar virgen; en consecuencia, cuando sale de ese estereotipo, es motivo suficiente para que el agresor cause lesiones físicas degradantes, parte de la creencia de que al mutilarle los senos (por ejemplo) le está causando una infamia a la mujer, ya que una mujer sin senos se le priva (de acuerdo a la mente y motivación del agresor) de su feminidad que en la *cultura* del agresor significaría una deshonra. De su capacidad para ser atractiva para otros (estereotipo) o de amamantar en su rol de madre (roles).

Esta acción de naturaleza cruenta, va invariablemente acompañada de exhibición del cuerpo desnudo de la mujer (fracción VII), lo que en la mente del feminicida puede jugar como maximizar la humillación de su víctima. En estos casos el agresor reivindica la violencia contra las mujeres como un mecanismo de control y resolución de conflictos.

A la o el operador de justicia le corresponde argumentar, incorporando la perspectiva de género, porqué las lesiones que advierte en el cuerpo de la víctima se manifiestan con características “infamante o degradante” en razón del género, para ello se puede apoyar en la tesis aislada con número de registro del IUS 179375, emitida por el Quinto Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito, en el Amparo Directo 310/2004, visible en la página 1643, Tesis XVI.5º.10P, del Tomo XXI, Febrero 2005, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época; que en lo que nos ocupa, interpretó que una lesión adquiere el carácter de infamante cuando produce perjuicios permanentes y no temporales, por lo cual son castigadas de manera especial.⁴³

Existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar, del sujeto activo en contra de la víctima (III), los actos feminicidas, muchas veces son la culminación de un continuo de violencia de género que pueden sufrir las mujeres en toda su vida, donde la muerte representa el último acto de violencia ejercida en contra de una víctima que lo fue por tiempo atrás.

⁴² *Que causa deshonra*: Diccionario Esencial de la Lengua Española de la Real Academia Española. Editorial Espasa (2006),

⁴³ Tomado del *Protocolo de investigación ministerial, policial y pericial del delito de feminicidio* del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 25 octubre del 2011.

Para acreditar esta fracción, es importante investigar la personalidad de la víctima y cómo vivía sus relaciones sociales, familiares, laborales o escolares, sin abordar aspectos íntimos de su vida o cuestionando su comportamiento, en este aspecto resulta muy útil un peritaje de antropología social.

Es muy común encontrar antecedentes de discriminación, acoso, violencia de género, que sufrió la víctima como antecedente a la muerte. En consecuencia, este elemento, no sólo proporciona un contexto misógino, sino una causa que explique el *modus operandi* y la motivación del agresor que idea su concepto de masculinidad a la autoridad, el honor y la agresión.

Los antecedentes se deben interpretar como actos coercitivos, amenazas, acoso, hostigamiento, persecución, comunicados del agresor a la víctima, cartas, llamadas, recados; en el ámbito, familiar, laboral o escolar; en cualquier espacio público o privado; del sujeto activo en contra de la víctima, por lo que la persona que investigue deberá tener en cuenta que los datos y antecedentes no necesariamente figuran en una denuncia, queja o instancia previa; por lo que se deben considerar testimonios y declaraciones para acreditar este supuesto. Aquí caben perfectamente los feminicidios de mujeres dedicadas al trabajo sexual, a manos de sus clientes o tratantes.

El impacto de estos factores se refleja, por ejemplo, en las relaciones laborales subordinadas y desiguales del jefe varón con la subalterna mujer, en actividades feminizadas y que pueden conducir a prácticas abusivas o a manifestaciones de violencia.

El impacto también se refleja en las relaciones escolares, en las que se producen prácticas de normalización de la violencia y de subordinación femenina, que generan el ambiente para prácticas de acoso escolar y otras formas de agresión o discriminación contra las niñas o adolescentes.

Haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza (IV); existe una gran incidencia de feminicidios en el contexto de una relación íntima o sentimental, de pareja, noviazgo, amistad, actual o como antecedente, en la cual se supondría están más protegidas las mujeres y por el contrario es en las que son objeto de esta violencia; son múltiples causas con las que la pareja o ex pareja motiva y justifica su acción: por celos, acoso, venganza, infidelidad o por manifestar poder de parte del agresor, como en la violencia patrimonial, disputa de bienes compartidos.

En el caso de mujeres embarazadas usualmente los feminicidios se generan después de una discusión que el agresor provoca reclamando la paternidad o la decisión de la mujer de lograr su embarazo.

La vinculación entre el activo y la víctima, deben ser considerados por el órgano investigador, porque es un elemento que implica cercanía, confianza o subordinación, dependiendo del rol o estereotipo que el investigador ministerial pueda acreditar que existió entre ambos, y que apuntalará su teoría del feminicidio.

Existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima (V), el comportamiento de los agresores, regularmente incluye el antecedente de la expresión de amenazas y acoso (hostigamiento sexual en el ámbito laboral).

Estas amenazas o acoso derivan de la posición desequilibrada de poder entre un hombre y una mujer, habría que analizar el contenido de la amenaza para determinar el mensaje de discriminación que encierran, los estereotipos y roles socialmente establecidos a mujeres y hombres que utiliza al agresor para crear su amenaza desde su posición de poder masculino, para proferir agresiones verbales a la mujer, amenazas o sustentar el hostigamiento o las lesiones inferidas; para ello resulta importante recabar testimonios de la relación o antecedentes de denuncias de la víctima contra el agresor que incluso pudieron desencadenar la conducta del agresor.

El acoso o la violencia feminicida se basan en la noción de masculinidad ligada a la dominación, en la que se exalta la capacidad de doblegar a la otra persona y sobre todo en la exigencia a someterla a su voluntad, reduciendo a la otra persona como objeto de posesión. Conceptos de subordinación, masculinidad y dominación que la sociedad promueve y permite por ejemplo a través de los medios de comunicación, la publicidad donde el cuerpo de la mujer aparece como atractivo para llamar la atención a cautivos compradores hombres, es para todos, se usa y se desecha.

En cuanto a las lesiones inflingidas, el investigador tendrá que identificar a través de las periciales conducentes aquellas lesiones derivadas de la violencia de género y las que son evidencia del empleo desmedido o del grado de fuerza variable para vencer la resistencia de la víctima, por ejemplo; cuáles son simbólicas, para demostrar poder, dominación o algún mensaje (como en el tema de lesiones mutilantes o infamantes) y cuáles fueron ocasionadas por el placer de lesionar o en modo de tortura, por su brutalidad, número, zona lesionada o intensidad, por mencionar algunas.

En este aspecto no hay que olvidar que el feminicidio puede producirse después de una vida continua de violencia, por lo que la historia de vida de las víctimas es sumamente trascendente para resolver adecuadamente las líneas de investigación.

La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la vida (VI), este supuesto responde a la grave incidencia de casos en los que la violencia feminicida se ejecuta en el contexto de una privación ilegal de la libertad o secuestro, pero también incluye privación de todo contacto con el exterior, o imposición de condiciones que les impide convivir y establecer sus redes familiares y sociales, como una muestra de poder y control masculino.

El agresor incomunica a la víctima como una forma de poder y control de la situación; con la finalidad de incrementar su vulnerabilidad, minar sus defensas, impedir que se manifieste, pueda pedir auxilio o que alguien más tenga conocimiento de las agresiones.

Muchas veces, la víctima adopta ella misma la incomunicación de manera coaccionada, ante el temor que siente o porque manifiesta una indefensión que aprovecha el agresor.

Cuando la víctima es niña o adolescente permanece en la incomunicación muchas veces por el rol que le han impuesto o porque no encuentra opciones de apoyo; la propia víctima es incapaz de externar o comunicarse con su entorno, cuando está amenazada o el agresor detenta un control extremo sobre ella; por lo que el aislamiento puede ser forzado física o psicológicamente; por ello la o el AMPF deberá fijarse entre otras metas la identificación de los elementos de coerción psicológica o intimidación, para demostrar que la incomunicación puede haberse dado sin que la víctima estuviera privada de su libertad.

El cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público (VII), en algunos casos de feminicidio los cuerpos de la víctima puede ser arrojado a la vía pública, letrinas, desierto, predios baldíos en una exposición dolosa e intencional de denigrar el cuerpo de la víctima. Los antecedentes de la violencia contra las mujeres denotan que el o los victimarios tienen la predilección de exhibir el cuerpo masacrado de sus víctimas, sin ningún pudor o temor a la acción del Estado; una especie de escarnio hacia la víctima por lo que representó en vida o un mensaje que presuma su superioridad sobre la misma y, en todo caso, es el efecto de la impunidad en la violencia feminicida.

La violencia contra las mujeres es un acto de desprecio y muestra de control que se genera en un contexto cultural y socialmente machista, por lo que la exhibición del cadáver de una mujer (se entiende que desnudo o no; tirado, expuesto, abandonado en un lugar público y visible), constituye un síntoma más del control que ejerció el agresor y lo desechable que representa para él su cuerpo. Estos son los significados que se pueden inferir desde la perspectiva de género, aun considerando que la desnudez de un cadáver arrojado a la vía pública es en sí, un atentado a la dignidad de las víctimas.

El exponer el cuerpo de la víctima, proporciona al agresor otra satisfacción, el mostrar al público su obra criminal, la detentación de su poder que tiene que ver con una cultura de

discriminación por género en la que el victimario muestra la violencia extrema que infligió a la mujer que es coronada al abandonar el cuerpo inerte que tiene doble representación, la prueba de su dominio como hombre y su libertad para actuar apropiándose de los espacios públicos (propios de la actividad masculina, entendido así desde los roles de género tradicionales) para exponer el cuerpo de su víctima.

CAPÍTULO III. DE LA INVESTIGACIÓN MINISTERIAL, POLICIAL Y PERICIAL CON PERSPECTIVA DE GÉNERO PARA EL DELITO DE FEMINICIDIO

Las directrices de la procuración de justicia han evolucionado para incorporar la obligación de que toda investigación de los casos de violencia contra las mujeres debe practicarse a través de la perspectiva de género; como ha se dicho, con este enfoque es posible identificar las desigualdades existentes entre los hombres y las mujeres, las asimetrías de poder y la forma en que las desigualdades de género permean y motivan la violencia contra las mujeres; los roles, las normas, las prácticas y las significaciones culturales que la sociedad ha establecido de manera diferente para unos y otras que generan discriminación, cómo es que las tradiciones y las costumbres asignan estos roles y construyen las relaciones de poder entre mujeres y hombres.

La CorteIDH⁴⁴ estableció que la eficiente determinación de buscar la verdad en el marco de la obligación de investigar una muerte, debe mostrarse desde las primeras diligencias con toda acuciosidad.

Asimismo, señala esencialmente que los principios rectores en una investigación cuando se está frente a una muerte violenta de una mujer son:

- I. Identificar a la víctima;
- II. Recuperar y preservar el material probatorio relacionado con la muerte, con el fin de ayudar en cualquier investigación penal de los responsables;
- III. Identificar posibles testigos y obtener sus declaraciones en relación con la muerte que se investiga;
- IV. Determinar la causa, forma, lugar y momento de la muerte, así como cualquier patrón o práctica que la pueda haber causado;
- V. Distinguir entre muerte natural, muerte accidental, suicidio y homicidio.
- VI. Investigar exhaustivamente la escena del crimen; y
- VII. Realizar autopsias y análisis de restos humanos, en forma rigurosa, por profesionales competentes y empleando los procedimientos más apropiados.

Los estándares internacionales señalan que, en relación con la escena del crimen, el personal a cargo de las investigadores deben, como mínimo, fotografiar la escena, cualquier otra evidencia física y el cuerpo como se encontró y después de moverlo; todas las muestras de sangre, cabello, fibras, hilos u otras pistas deben ser recogidas y conservadas; examinar el área en busca de huellas de zapatos o cualquier otra que tenga naturaleza de evidencia, y hacer un informe detallado de las diligencias, de las acciones de los investigadores y la disposición de toda la evidencia recolectada. El Manual sobre la Prevención e Investigación Efectiva de Ejecuciones Extrajudiciales, Arbitrarias y Sumarias, de Naciones Unidas;

establece, entre otras obligaciones, que al investigar una escena del crimen se debe cerrar la zona contigua al cadáver, y prohibir, salvo para el equipo investigador, el ingreso a la misma.

A. Reglas mínimas para la investigación ministerial

A.1 Factores que afectan la investigación con debida diligencia en un caso de feminicidio⁴⁵.

El conocimiento de las deficiencias en las investigaciones es sustancial para establecer estrategias que eviten caer en estas irregularidades. En el caso de feminicidios se pueden encontrar como omisiones de las y los operadores del sistema de justicia, entre otras las siguientes:

- I. Presencia de estereotipos y prejuicios de género en quienes investigan y emiten peritajes;*
- II. Justificación social de las causas de la violencia contra las mujeres, invocando costumbres, tradiciones culturales, religiosas que naturalizan las agresiones y el acoso;*
- III. Carencia de una respuesta inmediata y coordinada desde el primer momento de la desaparición de las víctimas, dificultades en la interposición de denuncias de la desaparición e investigación de los hechos;*
- IV. Insuficiente asistencia jurídica y ayuda legal gratuita para las víctimas indirectas;*
- V. Ignorancia del contexto de las estructuras sociales de violencia, en el que se produjeron los hechos;*
- VI. Prácticas de revictimización de las y los familiares de las víctimas, incluyendo fenómenos de revictimización post mortem;*
- VII. Prácticas erróneas que impiden el logro de la exhaustividad en la recolección de las pruebas y conllevan una valoración arbitraria, parcial o segmentada de la prueba;*

⁴⁵ Guía de Recomendaciones para la Investigación Eficaz del Crimen de Feminicidio, pp. 15-19. Madrid 2014

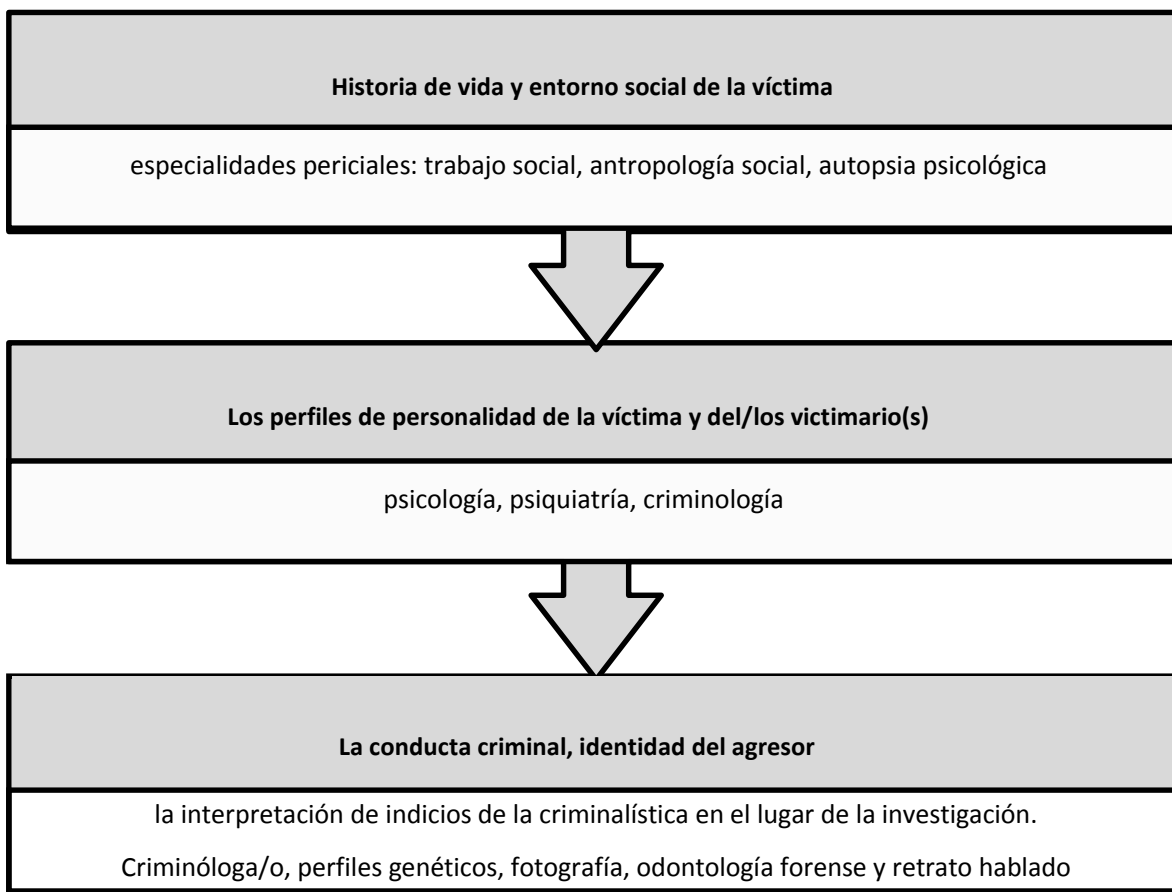
- VIII. Omisiones en los procedimientos científicos de investigación desde las primeras actuaciones en el lugar de hechos, autopsias, recolección y envío de muestras a laboratorios para estudios complementarios en la interpretación de resultados y la elaboración de los informes periciales;*
- IX. Deficiencias en la obtención de evidencia biológica, registro y resguardo de la cadena de custodia. Pérdida de evidencias y contaminación de la escena;*
- X. Omisiones en las necropsias o informes de autopsia que carecen de objetivos claros con omisión de datos trascendentales en la resolución de la causa de la muerte y las circunstancias en las que se produjo el feminicidio; o*
- XI. Descoordinación en el registro y aprovechamiento de bases de datos sobre las investigaciones y evidencia.*

A.2 Bases de actuación para el inicio de la investigación:

Una vez que se tiene conocimiento de un hecho delictivo como es la muerte violenta de una mujer, la o el AMPF tiene la obligación de iniciar de oficio y sin dilación, con apego a la debida diligencia, una investigación seria, imparcial y efectiva por todos los medios legales disponibles y orientada a la determinación de la verdad, a la persecución, captura, enjuiciamiento y castigo de el/los autor(es)⁴⁶.

En la investigación del feminicidio es necesario recabar información en tres áreas fundamentales:

⁴⁶ Corte IDH, Caso González y Otras ("Campo Algodonero"), párrs. 40 y 41



Una vez iniciado el proceso de la investigación, éste debe desarrollarse de modo urgente y continuado. Su práctica no se debe delegar, aunque sea de modo informal, en la víctima o en sus familiares ni siquiera en lo que se refiere a la búsqueda y aportación de medios de prueba.

La identificación, recolección y resguardo de las evidencias es parte fundamental de estas investigaciones.

El plan de investigación en un caso de feminicidio conforme al tipo penal, debe perseguir fundamentalmente acreditar las “razones de género” con que el agresor ejecutó el ilícito; la indagación de estos elementos debe ser cuidadosa, metodológica y exhaustiva y no debe circunscribirse únicamente a la investigación de la escena del delito sino a las circunstancias y el entorno social que desencadenaron la conducta delictiva. Aunque es imposible universalizar a un agresor, algunos de los factores de riesgo que se deben observar son la presencia de antecedentes de conductas violentas; aspectos de personalidad; conductas adictivas o situaciones de crisis individual, entre otros.

La o el AMPF debe tener en cuenta en todo momento que los feminicidios, presentan

características comunes: “ocurren en una cultura de violencia y discriminación basada en el género”⁴⁷, que “tiene sus raíces en conceptos referentes a la inferioridad y subordinación de las mujeres”⁴⁸ y que en consecuencia, no se trata de “casos aislados, esporádicos o episódicos de violencia, sino de una situación estructural y de un fenómeno social y cultural enraizado en las costumbres y mentalidades”⁴⁹. El uso del concepto de feminicidio y su diferencia con el homicidio permite visibilizar la expresión extrema de violencia resultante de la posición de subordinación, marginalidad y riesgo en el cual se encuentran las mujeres.

La autoridad que intervenga en un caso de feminicidio, deberá cumplir con los siguientes lineamientos:

- I. Respeto a la dignidad de las víctimas, sobrevivientes y sus familiares, evitar su revictimización;
- II. Tratar con respeto y dignidad los restos de niñas o mujeres fallecidas; esto incluye que la autoridad garantice la preservación y respeto al cadáver o restos humanos, a fin de evitar que se cometan conductas ulteriores destinadas a ocultar, destruir, mutilar, sepultar o profanar el cadáver de la víctima⁵⁰;
- III. Establecer un nexo de confianza entre la autoridad ministerial, sobre todo el personal pericial, con las y los familiares de la víctima;
- IV. Las investigaciones no comprenderán aspectos de la vida privada de las víctimas, ni de sus familiares que no tengan relación con el hecho investigado;
- V. Instrumentar todas las medidas posibles para garantizar la recuperación del cadáver y objetos personales, los cuales de ser posible, serán devueltos a sus familiares, conforme a la normatividad aplicable (cadena de custodia);
- VI. En caso de mujeres no identificadas víctimas de feminicidio, es responsabilidad del personal investigador, como una de las primeras diligencias, ordenar a servicios periciales la extracción de muestras biológicas para obtener su código genético y su incorporación a la base de datos CODIS de la institución⁵¹;
- VII. Para el caso de las muestras biológicas, supervisar el inicio y transmisión de la cadena de custodia, para no extraviar ni poner en riesgo la viabilidad de las muestras y solicitar las instancias de procuración de justicia estatales su confronta con base de datos existentes.

48 Citado en el Modelo, parr.40, p.14: CIDH, Situación de los derechos de la mujer en Ciudad Juárez (citando carta del Secretario de Gobierno de Chihuahua a la Relatora Especial de 11 de febrero de 2002).

49 Comité CEDAW, Informe de México producido por el Comité CEDAW bajo el Artículo 8 del Protocolo Facultativo de la Convención y respuesta del Gobierno de México, CEDAW/C/2005/OP.8/MEXICO, párr. 159.

⁵⁰ Tomar en cuenta las disposiciones de los artículos 280 y 281 del Código Penal Federal –Delitos en materia de inhumaciones y exhumaciones–.

⁵¹ Bases de Colaboración en Materia de Intercambio de Información Genética a través del Sistema CODIS (Combined DNA Index System), que opera la Procuraduría General de la República. Es una base de datos que permite almacenar perfiles genéticos y darles una trazabilidad. Así mismo, proporciona datos estadísticos para la identificación de personas.

- VIII. La o el AMPF, tendrá a su disposición el cuerpo o los restos de la víctima de feminicidio, esté o no identificada, de tal manera que no puede autorizar su inhumación o incineración bajo ninguna circunstancia; sin que se hayan agotado exhaustivamente la examinación y peritajes que permitan identificar a la víctima, al probable responsable o al esclarecimiento de los hechos;
- IX. En el caso de exhumaciones, las y los familiares directos tienen derecho a estar presentes y a que no se les oculten los restos de la víctima;
- X. Proveer a los familiares directos de información básica antes, durante y después de las labores forenses, informándoles acerca de todos los resultados posibles de la investigación (por ejemplo, si los restos se podrán localizar e identificar o no) teniendo siempre presentes sus expectativas;
- XI. Considerar y atender las preocupaciones, dudas, preguntas y objeciones de las y los familiares directos; y
- XII. En todo momento las y los AMPF y sus auxiliares, respetarán el derecho que las y los familiares de recuperar los restos de la víctima y darle sepultura bajo los ritos de la cultura o religión que profesen; siempre que ello no afecte el curso de la investigación o se contravengan las normas sanitarias.

A3 El feminicidio de niñas.

Usualmente ocurre en 3 escenarios:

- I. En medio de violencia familiar, contra la madre e hijos e hijas, en ocasiones de forma más violenta contra ellas al identificarlas con la madre;
- II. Como víctimas de abuso sexual, por parte del padre, padrastro o alguna persona de su entorno; con o sin conocimiento de la madre, familiares, amigos o vecinos.
- III. En situación de violencia contra la mujer tras la separación de pareja. En estos casos algunos victimarios deciden acabar con la vida de los hijos e

hijas como forma de ocasionarle un daño a la madre. Estos feminicidios es común el suicidio del agresor.

En esos casos es importante elaborar una línea de investigación sobre los antecedentes de maltrato previo contra la madre (o ascendiente en la vía materna que la haya tenido a su cargo) y contra la niña.

La crueldad aplicada en la violencia de la que son objeto, están relacionadas con la desproporción de fuerzas entre el agresor y la víctima, sobre todo en niñas de pocos años, lo cual hace que a esa temprana edad predominen mecanismos de muerte como la estrangulación, sofocación, sumersión y los traumatismos. Conforme a la edad el componente de violencia suele ser más intenso, aumentando la fuerza de los traumatismos y utilizando armas punzocortantes (apuñalamiento o degüello) y de manera más excepcional, armas de fuego⁵².

Cuando niñas o niños, sean testigos de actos relacionados con el feminicidio debe considerarse lo siguiente:

- Asegurar que la persona menor de edad cuente con el apoyo de personal especializado que le atiendan, para que sientan seguridad y sean reconfortados durante cualquier diligencia.
- Tener en cuenta que en lo que respecta al trauma, con frecuencia la persona menor de edad no expresa sus pensamientos y emociones verbalmente sino más bien en su comportamiento. El grado en que los y las niños/as puedan verbalizar sus pensamientos y afectos depende de su edad, su grado de desarrollo y otros factores, como la dinámica familiar, las características de la personalidad y las normas culturales.
- En el desarrollo de las investigaciones se deberán evitar los contactos entre las víctimas sobrevivientes y el presunto agresor. Se recomienda la utilización de medios tecnológicos como la videoconferencia, circuito cerrado o la *Cámara Gesell*.
- En caso de niñas o mujeres pertenecientes a comunidades indígenas, se tendrá en cuenta el artículo Primero de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que reconoce que los indígenas tienen derecho, como pueblo o como personas, al disfrute pleno de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales reconocidos por la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos y la normativa internacional de los derechos humanos. Por otra parte, el Convenio 169 en el artículo 8.2 y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en su artículo 34 definen a los

51 Modelo, op. cit., párr.145, p.50

derechos fundamentales y los derechos humanos internacionalmente reconocidos como límites de la aplicación del sistema jurídico indígena. Es decir, que en la normativa internacional los derechos humanos son al mismo tiempo el marco y el límite de la jurisdicción indígena.

A4 Orientación de la investigación conforme el enfoque de género.

Orientar la investigación desde la perspectiva de género, en términos de las hipótesis a comprobar, significa:

- I. Examinar el hecho como un crimen de odio, cuyas raíces se cimentan en las condiciones históricas de la violencia de género. De este modo quienes forman parte del equipo investigador deben partir de la pregunta sobre si la intensidad de la ejecución de las lesiones, la fuerza y violencia excesiva aplicada, los mecanismos feminicidas que se aprecian en el cuerpo de la víctima denotan odio hacia lo que el cuerpo femenino le representa al agresor;
- II. Abordar la muerte violenta de las mujeres no como un hecho coyuntural y circunstancial, sino como un crimen propiciado por el contexto socio-cultural que proyecta el mensaje de que lo femenino para una sociedad es accesorio e importa menos que los valores e intereses masculinos;
- III. Diferenciar las muertes violentas de mujeres a manos de su pareja, ex pareja, progenitor, hermano o por alguien que se acredite que la acosaba u hostigaba, desde el enfoque de género que permite entender y ubicar cuáles actos son ejecutados por los hombres desde su posición social-familiar de dominación, aprovechando las relaciones desiguales de poder, lo que hace evidentemente diferentes los feminicidios de otro tipo de muertes, o distinguir si en la ejecución de otro tipo de delitos, la víctima mujer, fue objeto de violencia feminicida.
- IV. En definitiva, identificar los criterios que permiten diferenciar las distintas manifestaciones de privación de la vida de las que puede ser víctima una mujer por razones de género.
- V. Lo primero que debe preguntarse la o el investigador es si el diseño de la investigación debe plantearse asumiendo o no la hipótesis de un feminicidio, ¿Cuál es el elemento normativo del tipo penal al que obedece la actuación delictiva? ¿Cuáles son los indicios, los signos o la evidencia física que permiten demostrarla?
- VI. Identificar las formas en que la víctima pudo haber vivido la desigualdad o las

asimetrías de poder en su contexto familiar, laboral, vecinal, o en las relaciones que sostuvo con su agresor antes del feminicidio.

- VII. Evitar juicios de valor sobre las conductas o el comportamiento anterior de la víctima y romper con la carga cultural y social que responsabiliza a la víctima por lo que le pasó: “algo haría”, “ella se lo buscó”, “quizá ella lo provocó”. En consecuencia, la o el agente del ministerio público deben preguntarse: ¿Existen antecedentes de violencia o malos tratos por parte del agresor? ¿Ha sido objeto de medidas de alejamiento o protección en favor de la víctima?, ¿La víctima estuvo buscando ayuda médica o psicológica o jurídica?⁵³
- VIII. No justificar las agresiones y la violencia ejercida sobre la víctima con planteamientos o hipótesis que naturalizan la violencia porque el agresor estaba “celoso” “enfermo” o “fuera de control” o sufría de alguna patología, se requiere ampliar la visión de la investigación para no limitarla con esta hipótesis que pretende minimizar los actos de violencia por cuestión de “crímenes pasionales” o “líos de faldas”.
- IX. La o el investigador deben ser profesionales y encauzar las diligencias para acreditar los motivos del feminicidio desde la perspectiva de género que implican que debe plantearse como interrogantes: ¿El agresor ejerció contra la víctima violencia física, psicológica o patrimonial con anterioridad? ¿Cómo era la relación entre ambos?, ¿La víctima gozaba de libertad de decisión, libre tránsito?
- X. En cuanto se tenga conocimiento del hecho, la o el AMPF deberá formular la guía de su investigación, planearse y ejecutarse desde la perspectiva de género, para ello es un presupuesto fundamental que el personal que participará cuente con capacidad y sensibilidad en el tema. Es importante que la o el servidor público tenga un planteamiento claro sobre la forma en que asentará la información inicial, cómo tuvo conocimiento del hecho, quien lo informa y demás datos circunstanciales de modo, tiempo, lugar (deberá seguir la legislación aplicable así como la normatividad institucional correspondiente), abundando a los requerimientos de las diligencias previas de investigación ordenadas en el Código Federal de Procedimientos Penales⁵⁴.
- XI. Una vez iniciada la investigación trazará la ruta y solicitará la correspondiente intervención del personal pericial en las especialidades necesarias, quienes deberán estar

⁵³ Modelo, op. cit., párr.102, p. 37

⁵⁴ O el Código Nacional de Procedimientos Penales, dependiendo los tiempos de vigencia que determina el Artículo Segundo Transitorio del mismo.

capacitados y sensibilizados en la perspectiva de género y practicarán los peritajes que se requieran desde ese enfoque para darle mayor profundidad a la investigación.

Dentro de los objetivos estratégicos de la investigación de los feminicidios, se ubican, entre otros, los siguientes:

- a) Identificar las conductas que causaron la muerte y otros daños o sufrimientos, físico, psicológicos, sexuales a la mujer, ante y post mortem
- b) Verificar la ausencia o presencia de motivos de razones de género que originan y explican el feminicidio, mediante la identificación en particular ⁵⁵:
 - 1. del contexto de la muerte;
 - 2. de las circunstancias de la muerte y la disposición del cuerpo;
 - 3. de los antecedentes de violencia entre la víctima y el victimario;
 - 4. del *modus operandi* y del tipo de violencia ante y post mortem;
 - 5. de las relaciones familiares, de intimidad, interpersonales, comunitarias, laborales;
 - 6. educativas, o sanitarias que vinculan a la víctima y el/los victimario/s;
 - 7. de la situación de riesgo o vulnerabilidad de la víctima al momento de la muerte, y
 - 8. de las desigualdades de poder existentes entre la víctima y el/los victimario/s.

A.5 El Componente fáctico.

El primer aspecto a consideración del equipo de trabajo encargado de la investigación, encabezado por el AMPF, deberá ser establecer la base fáctica del caso, considerando entre otros⁵⁶:

- I. Las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se produjeron los hechos que son objeto de investigación, los protagonistas de los mismos;
- II. La manera cómo ocurrieron;
- III. Las acciones desplegadas o ejecutadas;
- IV. Los elementos utilizados y sus consecuencias y
- V. Elaborar proposiciones fácticas que permitan, por un lado, conocer en detalle el suceso materia de imputación penal y, por otro lado, identificar los hechos relevantes que permitirán establecer la responsabilidad del imputado.

Esto tiene un correlato procesal con el principio de congruencia que será de mucha relevancia para la acusación, en la medida en que la base fáctica del caso determinará el objeto del proceso, y limitará el posible ámbito de debate en el juicio a los hechos contenidos en la acusación.

⁵⁵ Modelo, op cit., p.37

⁵⁶ Ibidem, párr.183, p.60; 187 al 190 p.6

A.6 El Componente jurídico.

El segundo aspecto que debe considerar, particularmente el o la AMPF, está relacionado con la calificación jurídica provisional que se hace de los hechos. El componente jurídico establece la forma como se encuadra la historia fáctica en la tipificación penal aplicable al hecho, del análisis jurídico de los hechos con las disposiciones legales sustantivas y de procedimiento. El fundamento de este componente es la valoración jurídica de los hechos.

No es posible construir una hipótesis delictiva sin la adecuación de los hechos del caso en un tipo penal. Su importancia radica en que a partir de la adecuación típica se plantea un objetivo principal o general de la investigación - recabar la información para probar el feminicidio - y unos objetivos específicos - la información que sirva para demostrar cada uno de los elementos estructurales de estos tipos penales.

Como punto de partida, se debe examinar la viabilidad o no de adecuar típicamente los hechos y eventualmente imputar la responsabilidad del/de los sujeto/s activo/s, asumiendo como hipótesis principal que este/os ha/n incurrido en el delito de feminicidio por razones de género, según lo dispone el artículo 325 CPF.

Como hipótesis derivadas debe estudiarse si, a la luz de los hechos y la evidencia recaba hasta el momento, es posible considerar otras alternativas para la imputación del resultado, o considerar la imputación de un concurso de conductas punibles con otros tipos penales, tales como secuestro, desaparición forzada, tortura, violencia sexual, porte ilegal de armas, entre otros.

En todos los casos, se debe evitar la aplicación de circunstancias modificatorias de la responsabilidad criminal que puedan justificar la conducta del presunto agresor o culpabilizar a la víctima de lo sucedido.

A.7 El componente probatorio.

El tercer aspecto fundamental está relacionado al sustrato probatorio del caso, a los medios de prueba y elementos materiales probatorios que se requieren para sustentar la teoría fáctica y jurídica planteada, atendiendo a su cantidad y calidad; así como los medios o elementos de convicción pertinentes que permitan establecer la ocurrencia del hecho, la conducta punible que se plantea y la responsabilidad del/los responsable/s, probando ante el juez o la jueza la consistencia de la teoría del caso formulada.

El/la AMPF y su equipo deben formular un juicio de pertinencia, necesidad y conducencia de los medios probatorios recaudados y de los que deben recabarse como pruebas anticipadas o producirse en el juicio oral, a efectos de la demostración judicial de la muerte violenta de la mujer y de los motivos o razones de género⁵⁷.

A.8 Diligencias ministeriales básicas para el delito de feminicidio, de forma enunciativa más no limitativa las siguientes:

Recibida la noticia *criminis*, iniciar la carpeta de investigación, solicitando la intervención de sus auxiliares directos.

En el caso del personal pericial, la solicitud se formulará de acuerdo perfil o especialidad que se requiera, puntualizando el objeto de su intervención del peritaje, mencionará específicamente qué desea saber de acuerdo a la especialización del perito/a⁵⁸. Si es necesario, deberá mantener cercanía con el personal pericial a fin de resolver dudas o ampliar la observación profesión. La intervención pericial, será exhaustiva debiendo observar puntualmente los procedimientos de la cadena de custodia.

En las investigaciones de delitos cometidos con violencia de género, es indispensable que el o la AMPF se auxilie con especialistas en antropología social, que tengan capacitación en la investigación con perspectiva de género para conocer los antecedentes de las causas de la violencia y ubicar las vulnerabilidades que por cuestiones de género sufrió la víctima.

La investigación policial incluirá la intervención en campo, inspecciones, entrevistas con testigos, recabar información de instituciones públicas o privadas, entre otras diligencias dirigidas por la o el AMPF; será su responsabilidad obrar con profesionalismo y debida diligencia; no obstante esta iniciativa, el personal ministerial a cargo, puede definir por escrito de manera clara y específicamente lo que van a buscar, para ello es necesario que el personal de investigación tenga acceso a los expedientes o carpetas de investigación.

En casos de feminicidio sexual puede ser fundamental la reconstrucción detallada de lo realizado por la víctima las 24 horas previas al ataque, pues, en ciertos casos, es en ese tiempo en el que el agresor ha decidido elegirla y llevar a cabo el feminicidio⁵⁹.

⁵⁷ Modelo, op. cit., párrs. 87-191, p.63

⁵⁸ Por ejemplo, cuando se observen mordidas en el cuerpo de la víctima se solicitará la intervención del área de Odontología y Fotografía Forense. Es muy importante contar con periciales en genética forense para extraer muestras del cuerpo para identificación o para detección de semen.

En su caso, solicitar las medidas cautelares que resulten procedentes como el cateo intervención de comunicaciones.

En los casos de delito flagrante, recibir a la persona detenida y proceder a la determinación de su situación jurídica.

Buscar y recuperar toda la información relacionada con los hechos que precedieron o fueron concomitantes al feminicidio tales como el registro de denuncias de violencia previa ante autoridades de policía, administrativas o judiciales; las grabaciones de cámaras de seguridad de los lugares de residencia de la víctima o del victimario, de estacionamientos, centros comerciales, parques públicos; los hallazgos sobre la manipulación, el ejercicio de la fuerza o la intromisión arbitraria y la afectación de la libertad o intimidad de la víctima a través de medios electrónicos, redes sociales, telefonía fija o celular, por mencionar algunos⁶⁰.

A.9 El levantamiento del cadáver en la escena del hallazgo y su posterior necropsia médico legal.

Los agentes investigadores que arriben primero al lugar de los hechos deberán cerciorarse inmediatamente de la ausencia de vida de la víctima, en caso contrario, sin dilación, brindará los auxilios correspondientes y ordenará el inmediato traslado a la institución de salud que corresponda, cuidando en todo momento resguardar la escena del crimen.

El personal investigador debe ubicar el área geográfica o lugar en donde tuvo lugar la conducta delictiva, el nivel socioeconómico de la zona y el tipo de comunidad; en caso de comunidades rurales, se deberá tomar en cuenta en su investigación si prevalecen los usos y costumbres que legitiman la discriminación y violencia contra las mujeres (concepto de la criminalística aplicado con visión de género).

Una vez acordonado el lugar para su preservación, el personal investigador debe realizar una inspección en la escena de los hechos. Deberán intervenir de manera preferente peritos en criminalística, medicina forense, fotografía, química, antropología física, entre otros.

Por respeto a la dignidad de la persona, fundamento de los derechos humanos, se evitará fotografiar o videografiar el cuerpo de la víctima, salvo para efectos periciales o de investigación que deban constar en la carpeta de investigación, quedando estrictamente prohibida su difusión en los medios de comunicación; es responsabilidad de la autoridad a cargo del cual está el resguardo del escenario el tomar las acciones necesarias para evitar, en

la medida de lo posible, que terceras personas fotografíen o videograben el cuerpo de la víctima.

Las y los investigadores deberán tener presente que los feminicidios también pueden ocurrir como parte de fenómenos delincuenciales relacionados con la explotación sexual, la trata de personas, el narcomenudeo, el pandillerismo y la delincuencia organizada, entre otros.

Es por esto importante especificar el espacio físico y las circunstancias que rodean el hecho considerando que se trata de una mujer. Es decir, si el ilícito tuvo lugar en una casa habitación, éste puede estar relacionado con violencia familiar, sin descartar que este tipo de violencia también puede generarse en otros espacios físicos, para lo cual se debe indagar la relación que pudo sostener el agresor con la víctima. En estos escenarios es útil describir, la rotura de muebles, retratos, fotografías, máquinas de coser, equipo de cocina u objetos que hayan representado algún significado o utilidad para la víctima en vida, o maltrato a sus mascotas.

Por otra parte, si el delito ocurrió en lugares públicos, como bares, prostíbulos y hoteles, entre otros, es posible relacionarlo con el comercio o la explotación sexual de mujeres, delincuencia organizada, y dirigir la investigación por esa ruta.

Considerar que la agresión sexual por mencionar este tipo de violencia previa, el feminicidio y el abandono del cuerpo se suelen producir en diferentes fases y se desarrollan en distintos lugares. Estos elementos van a dejar una serie de signos e indicios en el lugar o lugares relacionados con el feminicidio caracterizados por las huellas de la violencia, la presencia de instrumentos o materiales utilizados para atacar, dominar, someter y controlar a la víctima, la localización de objetos que formen parte de la escenificación de las fantasías, etc.

Es importante destacar que los hallazgos de estos elementos pueden ser “en positivo” (cuando se encuentran en el lugar de los hechos), o “en negativo” (cuando las características de los hallazgos, por ejemplo las lesiones sobre el cuerpo, no se justifican con las características del lugar donde aparece, ni con los objetos que aparecen a su alrededor, indicando que se han producido en otro lugar o que el propio agresor se los ha llevado, lo cual a su vez refleja una cierta planificación del feminicidio y el perfil organizado de feminicida⁶¹.

El personal investigador debe ser minucioso en la inspección que se realice, se anotará la hora de llegada, la temperatura y las condiciones climáticas del lugar, que permitan establecer o considerar acciones necesarias respecto a la actualización de los supuestos del feminicidio o considerar algunas variables independientes que influyen en la preservación de indicios y en lo relativo a establecer la data de muerte o diagnóstico cronotanato, entre otros datos de la pesquisa que describen los protocolos de investigación científica que dispone la PGR.

De tal manera que, partiendo de esta gama de posibilidades, el personal investigador deberá, desde una visión de género, ampliar sus líneas de investigación.

Someter a una rigurosa cadena de custodia la recolección de todas las evidencias, incluidas aquellas que sean tomadas o producidas por medios electrónicos como cámaras fotográficas, de video, teléfonos celulares, tabletas, por mencionar algunas.

A.10 Víctima no identificada.

La evidencia científica en los casos de feminicidios adquiere un valor indispensable. Cuando se trate de cadáveres no identificados o que no puedan ser reconocidos, deberá realizarse bajo los protocolos científicos institucionales la obtención de muestra biológica y un estudio para determinar los perfiles genéticos, que se integrará al banco de datos de información genética del Sistema CODIS.

Se deberá conservar un registro fotográfico de la víctima, de la descripción de sus lesiones, objetos y vestimenta con que haya sido encontrada que servirá para integrar la investigación pericial, ministerial y policial; sin olvidar recoger evidencia biológica en el registro del cuerpo

B. Reglas mínimas para la investigación policial.

La Ley Orgánica de la PGR dispone que en la investigación de los delitos, las policías actuarán bajo la conducción y el mando del Ministerio Público de la Federación, en términos de lo dispuesto por el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las disposiciones aplicables y los protocolos de actuación que se establezcan al respecto.

El personal de la policía, debe estar debidamente capacitado en la perspectiva de género y conocer elementos de generación de la violencia contra las mujeres como es el ciclo de la violencia, entre otras materias, a fin de que su trabajo sea efectivo y con respeto a los derechos humanos.

Las investigaciones que desarrollen los elementos investigadores de la policía deben realizarse con apego a la legalidad, eficiencia, profesionalismo, honradez que su encargo demanda y con estricto respeto a sus derechos humanos. La policía forma un equipo de investigación con el personal pericial bajo la coordinación del ministerio público.

B.1 Procedimientos en la investigación a cargo de la policía⁶²:

- I. Conocimiento del hecho (realizar bitácora incluyendo todos los datos circunstanciales);
- II. Actuaciones policiales operativas para la recopilación de datos y elementos que apoyen la investigación de delitos relacionados con el feminicidio: determinar la ausencia de vida de la víctima, y en caso contrario brindar los

- auxilios correspondientes
- III. Recopilación y cotejo de la investigación policial con personal de servicios periciales que participan en la investigación;
 - IV. Inspección de lugares y personas, es importante fijar imágenes;
 - V. Entrevista a personas testigos, ofendidas y/o personas con interés legítimo, el personal que realice ésta deberá informarles sobre las consecuencias o responsabilidades que puede tener el que formen parte de la investigación y también sobre cualquiera otra cosa que pudiera pasar en relación con el caso y que pudiera afectarles. Las entrevistas deben tener lugar lo antes posible y deben escribirse o grabarse en cinta magnetofónica, en este supuesto, deben transcribirse y conservarse.

De igual manera, se debe entrevistar a las personas involucradas individualmente y proporcionarles seguridad de que se usarán todos los medios posibles para proteger su seguridad antes, durante y después de los procedimientos cuando así se requiera

- a. Búsqueda, fijación, levantamiento, y embalaje de indicios y/o evidencias en el lugar del hecho y/o del hallazgo;
- b. Iniciar, si procede, la cadena de custodia;
- c. Elaboración del informe policial;

B.2 Responsabilidades del personal policial en las investigaciones⁶³:

- I. Recibir la denuncia de hechos presentada por cualquier persona por la probable comisión del delito de feminicidio, a efecto de iniciar de manera inmediata la investigación respectiva.;
- II. Atender a la persona denunciante o personas ofendidas con dignidad, respeto, diligencia, imparcialidad y rectitud;
- III. Informar a la persona denunciante o personas ofendidas sobre la posibilidad de presentar su denuncia en cualquier agencia del Ministerio Público, en forma oral o escrita;
- IV. Trasladarse inmediatamente al lugar de los hechos o del hallazgo, para estar en posibilidad de determinar la situación de la víctima, localizar testigos, objetos y datos de utilidad para la investigación;
- V. Determinar el estado civil de la víctima, su empleo y/o actividad. Si es posible establecer el último lugar donde se le vio con vida, en compañía de quién o

quienes estaba, y qué hacía, con la finalidad de poder ubicar a su pareja sentimental actual o anteriores, compañeros de trabajo, de escuela y testigos aun de vida, para entrevistarlos de forma inmediata, y evitar que se olviden o pierdan datos importantes sobre la víctima y los hechos que se investigan;

VI. Deberá recabar en la investigación evidencias con los siguientes elementos:

- Identificación y relación de los hechos que motivaron la investigación del feminicidio;
- Relación de los indicios y/o evidencias encontrados en el lugar del hecho y/o del hallazgo, para cotejarlos con los obtenidos por servicios periciales y aquellos que consten en el expediente;
- Determinación del tiempo, lugar y modo, el antes, durante y después del hecho delictivo;
- Relación de los elementos que acrediten la exhaustividad de la investigación y el haber agotado todas las líneas de investigación aplicables al caso en el informe de investigación policial;
- Participación de la persona en calidad de probable responsable en el delito y los elementos probatorios recabados;
- Establecer los elementos que permitan lograr la acreditación y el sustento de la fundamentación jurídica para el tipo de feminicidio y su comisión por razones de género;
- El destino legal de los indicios y/o evidencias relacionados con la investigación;
- Las pruebas adicionales que puedan aportarse como resultado de la intervención policial;

B.3 Líneas de investigación en caso de feminicidio.

Deben establecerse y registrarse las líneas de investigación de acuerdo a los indicios y/o evidencias encontradas, la información obtenida de la persona denunciante, testigos, pareja de la víctima o de todo aquel que aporte información vital y relevante, asimismo se realizarán los peritajes necesarios que lleven a determinar si la muerte se produjo con violencia de género y si existe algún dato en razón de las circunstancias específicas, que puedan establecer un feminicidio y determinar el móvil del delito.

La búsqueda de indicios clave debe ser cuidadosa, metodológica y exhaustiva y no debe circunscribirse únicamente a la investigación de la escena del delito sino a las circunstancias y el entorno social que desencadenaron la conducta delictiva. Es decir, en la investigación del feminicidio es necesario recabar información en tres áreas fundamentales:

A) Historia de vida y entorno social:

- I. ¿Qué evidencias hay de que es un feminicidio? Distinguir entre muerte natural, suicidio, accidental culposa. Buscar elementos que cuadren con las hipótesis del tipo penal.
 - II. ¿Hay alguna prueba de tortura?
 - III. ¿Qué arma o medios se utilizaron y de qué manera?
 - IV. ¿Cuántas personas participaron en el feminicidio?
 - V. ¿Qué otro delito se cometió durante el feminicidio o en asociación con éste, y cuáles son sus detalles exactos?
 - VI. ¿Cuál era la relación entre los sospechosos de feminicidio y la víctima antes del feminicidio?
 - VII. ¿La víctima formaba parte de alguna agrupación política, religiosa, étnica o social, y podría haber sido éste un motivo del feminicidio?
 - VIII. Ubicar antecedentes sobre agresiones anteriores que haya sufrido la víctima, la línea de investigación deberá incluir entrevistas a familiares, vecinos, amistades o cualquier otra persona que haya conocido o no a la víctima, para conocer el tipo de relación existente entre la persona agresora y la víctima, indagando si se han observado hechos de violencia de género o cuál era la personalidad de la víctima⁶⁴.
- B) Los perfiles de personalidad de la víctima y del (o los) victimario(s), y,
C) La conducta criminal, esto es, la interpretación de indicios de la criminalística en el lugar de la investigación

Para este fin es importante tener en cuenta las siguientes cuestiones:

- La víctima hubiera buscado asistencia médica o hay antecedentes de ingresos a hospitales, solicitar el expediente clínico al centros de salud públicos o nosocomios privados.
- Es importante rastrear informes de la policía en las comunidades donde residía la víctima, en el caso de que haya noticia que en hechos anteriores hubiera hecho una llamada o reporte a la policía;
- Solicitar informes a centros de atención, refugios, albergues, sobre ingresos;
- Búsqueda en bases de datos sobre denuncias, reportes, medidas de protección solicitadas por la víctima en otras instancias, en otros estados etc.

C. Reglas mínimas para la investigación pericial

Este protocolo conforma una guía que aporta componentes cognitivos para incorporar la

perspectiva de género a la actividad pericial en caso de investigación de feminicidios, no se trata de un protocolo técnico-científico de ciencias periciales, por lo que la actuación del personal pericial debe ser siempre apegada a sus protocolos o manuales técnicos de su especialidad, aplicando las recomendaciones de este protocolo como responsabilidades complementarias en los casos de víctimas de feminicidio; por lo que aquí se vierten diligencias de forma enunciativa y limitativa.

El personal pericial deberá actuar conforme a criterios de objetividad y de rigor científico. Las especialidades forenses que intervendrán y los tipos de intervención que se realizarán, dependerán de las necesidades y circunstancias del caso en concreto, sin dejar de tomar en cuenta los aspectos antropológicos, sociales y culturales sobre la violencia de género.

Todo el personal pericial que intervenga deberá tener como primer paso imponerse del expediente de investigación ministerial y, si es necesario, reunirse con la o el ministerio público para dialogar sobre la diligencia pericial que practicará.

Este protocolo parte de que la actitud científica y perspectiva de género del personal de servicios periciales, tiene como características: ser analítica, científica, inquisitiva, objetiva, rigurosa, crítica, probabilística. Orientada a recabar la información necesaria para fortalecer la investigación del delito de homicidio de mujeres por razones de género⁶⁵; tomando en cuenta los aspectos antropológicos, sociales y culturales sobre la violencia de género.

En toda intervención el personal de servicios periciales deberá tomar en consideración su responsabilidad frente a las y los familiares de las víctimas de feminicidios:

- Proveer de información básica antes, durante y después de las labores forenses, informándoles acerca de todos los resultados posibles de la investigación (por ejemplo, si los restos se podrán localizar e identificar o no), teniendo siempre presentes sus expectativas;
- Tener en cuenta sus preocupaciones, dudas, preguntas y objeciones;
- Sin hacer a un lado sus conocimientos científicos y técnicos y su profesionalidad, las y los peritos que intervengan deberán, en todo momento, observar una conducta, lenguaje y visión con apego a la perspectiva de género;
- Independientemente de que exista una orden de autoridad ministerial para la exhumación, cuando se conozca la identidad de los cadáveres, las y los peritos forenses deberán tener en cuenta que una medida de acercamiento y entablar confianza con las y los familiares es buscar su aprobación informada antes de llevar a cabo las exhumaciones y respetar los ritos funerarios tanto religiosos como culturales. Si no se observan estas precauciones antes de llevar a cabo el trabajo forense, los objetivos pueden no conseguirse y producir más dolor

y sufrimiento a las personas que se está tratando de ayudar, seguir este procedimiento evita violaciones a derechos humanos, pues el trabajo de quienes intervienen con los cadáveres, contribuye a cerrar duelos⁶⁶, lo que también es parte de las responsabilidades de respetar los derechos humanos de las víctimas indirectas.

⁶⁵ Lineamientos, op. cit., p. 161

⁶⁶ Referencias del Equipo Argentino de Antropología Forense.

C.1 Objeto de las diligencias periciales en la investigación del delito de feminicidio

La investigación técnico pericial del lugar de los hechos en un caso de feminicidio no difiere en gran medida de otras formas de investigación de muertes violentas o dolosas, sin embargo los datos que se obtienen en la escena del crimen de un feminicidio tienen, en todos los casos, un máximo valor en los resultados efectivos de la investigación.

En el caso de la intervención del personal pericial en materia de medicina forense, debe tener especial atención en evaluar todas las evidencias para determinar si la occisa presenta signos o indicios criminalísticos de maltrato crónico anterior a su muerte.

Las y los peritos evaluarán técnica y científicamente, la existencia de indicios y/o evidencias que relacionen a la mujer con su victimario o victimarios, mediante su localización, fijación, levantamiento y embalaje en el lugar de los hechos y/o hallazgo; los cuales, previo estudio, permitirán la reconstrucción del evento y la identificación del victimario o victimarios.

Las actuaciones periciales deben ir encaminadas a analizar información e interpretar resultados, en consecuencia, la intervención pericial debe consistir en elaboración de (enunciadas sin limitar):

- Expedientes.
- Dictamen criminalístico de campo.
- Protocolo de necropsia.
- Resultado químico toxicológico e histopatológico.
- Examen de material genético.
- Dictamen de mecánica de lesiones.
- Dictamen de mecánica de hechos.
- Secuencias fotográficas.
- Secuencias de video.
- Dictámenes complementarios.
- Antropométrico comparativo.
- Antropología social (con perspectiva de género).
- Perfiles de personalidad.
- Retrato hablado.
- Odontología forense.
- Perfil criminológico víctima/victimario (con perspectiva de género).
- Estudios de laboratorio e investigación criminalística, entre otros.

C.2 Peritajes con Perspectiva de Género.

La petición ministerial a la Coordinación General de Servicios Periciales, debe incluir la especificación de qué tipo de especialidades y para qué efectos se requieren en la investigación del caso de feminicidio.

En la investigación con perspectiva de género, son útiles la aplicación de estudios y evaluaciones a través de peritajes de antropología social, de psicología que elaboren dictámenes que evidencien el entorno psico-social y socio-económico a través de trabajo social; que realicen los estudios a través de un análisis interseccional permiten hacer visibles las diferencias de contexto de las víctimas y de las prácticas victimizantes contra las mujeres.

Eso permite, en el caso de los pueblos indígenas y de otros grupos étnicos, analizar los hechos e identificar los factores culturales que han podido potenciar, permitir o generar el acto delictivo o simplemente analizar e identificar el contexto del delito⁶⁷.

En la planificación del feminicidio, el victimario ejecuta el crimen desde la interpretación y concepción que tiene del comportamiento de las mujeres. Esta interpretación unida a los factores contextuales presentes⁶⁸ en el momento de llevar a cabo la agresión, constituye los diferentes elementos asociados a los feminicidios hacia los cuales debe dirigirse el desarrollo de las hipótesis y las líneas de investigación del caso.

En el contexto de esta violencia, resalta la importancia de elaborar un estudio comparativo entre la víctima y el presunto agresor para determinar la posible ventaja física entre ambos, con el fin de acreditar el marco de desigualdad y de poder en el que se ejerció la violencia letal⁶⁹.

La búsqueda de signos e indicios relacionados con la situación anterior de la mujer víctima de un posible feminicidio nunca deben contener información que la prejuzgue o la responsabilice de lo ocurrido. Su análisis está dirigido a detectar los elementos de vulnerabilidad, accesibilidad y oportunidad respecto a un agresor que está planificando llevar a cabo la agresión sexual y el feminicidio, o a determinar unas circunstancias que, desde el punto de vista social y cultural, lo llevan a justificar la agresión⁷⁰.

⁶⁷ Modelo, op. cit., párr. 123, p.44

⁶⁸ Modelo, op. cit., párr.127, p.45

⁶⁹ Modelo, op. cit., párr. 184, p.65

⁷⁰ Modelo, op. cit., párr., 282, p. 84

En casos de feminicidio sexual puede ser fundamental la reconstrucción detallada de lo realizado por la víctima las 24 horas previas al ataque, pues, en ciertos casos, es en ese tiempo en el que el agresor ha decidido elegirla y llevar a cabo el feminicidio.

C.3 Medicina forense.

Objetivo de la medicina forense en la investigación del delito de feminicidio.

Establecer el diagnóstico diferencial feminicida, suicida o accidental. Con esta intervención, por medio de la autopsia, se establecerá la causa de la muerte y la forma o manera de producción de la misma.

La técnica de autopsia médico-forense en un caso de sospecha de feminicidio debe ser en todo semejante a cualquier otra investigación pericial, sólo haciendo énfasis y describiendo detalladamente las evidencias y lesiones presentes en el cuerpo de la occisa y que por su tipo, características, número, dimensiones o ubicación pueden ser útiles para las inferencias y conclusiones del investigador ministerial para advertir razones de género. El examen del cadáver debe ser minucioso, cuidado, sistemático y completo. El personal médico pericial o médico legal, nunca debe actuar con prisa ni bajo presión.

Para la realización de la autopsia, se deberá apegar a lo establecido en el *Protocolo Modelo de Exhumación y Análisis de Restos Óseos (ONU, 1991)*, el cual se desarrolla en el *Manual sobre la Prevención e Investigación Eficaces de las Ejecuciones Extralegales, Arbitrarias o Sumarias*.

El personal forense (a través de la autopsia) y el ministerio público al solicitar el procedimiento pericial, deben hacerse énfasis en los siguientes hallazgos⁷¹:

- El empleo de una violencia excesiva, intensidad, multiplicidad de las heridas (y muchas veces innecesarias para el fin de privar de la vida).
- La ubicación de las lesiones alrededor de las zonas vitales o zonas reconocidas como “erógenas”.
- Evidencia de violencia sexual.
- Evidencia de tortura⁷².
- Rasgos de malnutrición, como evidencia de maltrato.
- El uso de utensilios domésticos utilizados como armas.
- La utilización de las manos como arma.

- Vestigios de violencia anteriores a la época del feminicidio.
- Signos de maltrato con los que haya vivido la víctima.
- Determinar las posibles enfermedades, afectaciones en la salud de la víctima, consecuencia de la violencia anterior.
- Heridas o lesiones posteriores a su fallecimiento.
- Existencia de tatuajes.

En caso de mujeres con posible embarazo. Dependiendo de la edad de la mujer fallecida violentamente, se deberá tener en cuenta la posibilidad de que exista una gestación en curso. Durante examen externo del cadáver de una mujer gestante que haya muerto de forma violenta, entre otras cuestiones generales propias de la autopsia, se debe documentar la posible existencia de signos externos propios de la gestación y, en su caso, la presencia de sangrado activo genital. Este examen externo incluirá una descripción pormenorizada de la totalidad de signos lesivos generales y, particularmente, de todas aquellas lesiones que se localicen a nivel genital y paragenital. En caso de existir embarazo, en la medida de lo posible, se determinará la edad gestacional del producto mediante un análisis clínico; si esto no es posible, se deberá esperar el estudio de la necropsia y el estudio histopatológico complementario para establecer con precisión la edad del producto, así como la causa de muerte, por obvia que pudiera parecer. Durante estas exploraciones, es obligatorio hacer un peinado púbico y tomar muestras de las cavidades oral, vaginal y anal, con la finalidad de confirmar o descartar la presencia de líquido seminal.

⁷¹ Modelo, op. cit., p.73

⁷² Las lesiones factibles de corresponder a tortura o abuso físico pueden ser:

- lesiones de apaleamiento
- lesiones por quemaduras
- lesiones por arma blanca
- lesiones por arma de fuego
- lesiones por asfixia mecánica
- lesiones por acción de la electricidad
- suspensión
- lesiones por abuso sexual
- muerte por inanición. *Protocolo Modelo para la Investigación Forense de Muertes sospechosas de haberse producido por Violación de los Derechos Humanos, Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas; Proyecto MEX/00/AH/10; Primera Fase del Programa de Cooperación Técnica para México, mayo 2001; p.21 y adelante*

Estudio de ropas o vestimentas. Descripción metódica y sistemática de la vestimentas que suelen tener un gran interés desde el punto de vista de la identificación, y sobre todo en casos de niñas o mujeres para las inferencias de violencia feminicida o sexual; por lo que, se deben conservarse cuidadosamente por si pudiesen ser identificadas por personas allegadas. En todo caso, el médico hará una descripción acuciosa y minuciosa de los vestidos, anotando todos sus caracteres, como el tipo y marca de prenda, de tejido, el color y dibujo, la calidad, la talla de la prenda y el estado de conservación (por ejemplo: rasgada, rota, maculada, desgarrada por roedores, entre otros). De ser posible los vestidos deben ser fotografiados en color para unir la fotografía al expediente, así como los videos que se hubieren grabado, si es el caso.

Los feminicidas sexuales sádicos en ocasiones eyaculan sobre diferentes partes del cuerpo sin significado sexual general como parte de sus fantasías, por lo que la búsqueda de estos indicios debe extenderse a todo el cuerpo de la víctima y a todas sus ropas⁷³.

Estudio de objetos o pertenencias. De la misma manera que con los vestidos, debe prestarse el máximo de atención a todos los objetos que lleve el cadáver sobre sí: cartera, monedero, documentos, joyas, papeles, boletos de transporte, así como cualquier material o sus restos que se encuentren en sus bolsillos.

Toma de muestras biológicas. Se llevará a cabo el correspondiente análisis en la búsqueda de fosfatasa ácida, enzima presente en el líquido seminal.

Lo anterior se complementa con el correspondiente estudio de ADN, en los casos que se requiera llevar a cabo la identificación del victimario mediante su perfil genético. Los antígenos ABO pueden estar presentes en fluidos corporales como la saliva, el moco intestinal y el semen; su detección en los sujetos secretores establece su grupo sanguíneo, sin necesidad de una muestra de sangre. Estos resultados permiten excluir a los sujetos involucrados en un hecho delictivo cuando éstos tienen un grupo sanguíneo distinto al detectado en las muestras biológicas tomadas del cadáver.

Ya se advirtió que se debe buscar en ropa, cabello y cuerpo cualquier evidencia biológica semen, sangre y orines.

Examen externo e identificación y descripción de lesiones. Es muy importante describir fielmente las lesiones en profundidad y número. Describir lesiones innecesarias para causar la muerte o mutilaciones en el cuerpo, lesiones con características de forcejeo o lucha, tipo de lesiones, posibles armas empleadas, entre otros elementos de información.

Mecanismo productor⁷⁴.

Feminicidas.

Únicas o múltiples localizadas en diferentes partes del cuerpo que tienen significado sexista (poner especial atención en describir las heridas en senos, cuellos, lóbulo de oreja, vientre, vulva, nalgas) o se consideran son zonas erógenas, verificando su grado de intencionalidad, intensidad, fuerza y dirección.

Suicidas.

Localizadas en su mayoría a la altura de los principales vasos del cuello, pliegue de los codos, muñecas, etcétera. Pueden ser únicas o múltiples siguiendo más o menos la misma trayectoria y siendo profunda la que causa la muerte.

Accidental.

Localizadas en la mayoría de los casos en antebrazos, manos y región plantar, sobre todo en accidentes de trabajo.

Por vacilación o manipulación.

Superficiales y paralelas producidas comúnmente por instrumentos cortantes, localizadas principalmente en las caras antero laterales del cuello (izquierda para los diestros y derecho para los zurdos), pliegue de los codos y muñecas.

Mecánica de lesiones.

En la investigación de hechos donde se producen lesiones y hasta pérdida de la vida, se puede establecer en forma criminalística si existió previamente o durante la consumación, forcejeo, lucha o defensa, con el estudio de las ropas y superficies corporales de los participantes en la comisión de los mismos.

Para ello, se deben reconocer claramente los signos, indicios y/o evidencias que muestren específicamente algunas de las tres maniobras señaladas, si es que existe alguna de ellas.

Forcejeo.

Los signos de forcejeo incluyen generalmente desgarros, descosaduras, desabotonaduras y desorden violento de las ropas superiores principalmente, que visten los participantes de un hecho, víctima y/o imputado. Estos signos, pueden estar acompañados de muy ligeras

⁷⁴ Lineamientos, op. cit., p. 155 y adelante.

excoriaciones o estigmas ungueales producidas por las uñas de los dedos de las manos, así como pequeñas zonas equimóticas en los brazos, antebrazos y muñecas de las manos por compresión o sujeción violenta de las mismas, todo ello efectuado con las manos de uno y otro participante.

Lucha.

Los signos de lucha incluyen a los señalados en la primera parte de lo anterior, pero además hay presencia de lesiones más graves, como escoriaciones de mayor profundidad y dimensiones, heridas cortantes, punzantes, punzo-cortantes, contusas, corto-contusas, mutilaciones, quemaduras, etcétera, diseminadas sobre la superficie corporal de los participantes con predominio en la región facial, brazos, antebrazos, incluyendo hematomas en cráneo por puñetazos, así como en las caras anteriores del tórax y abdomen, hombros y región púbica, lesiones innecesarias en áreas donde se ejerce la fuerza muscular.

Se encuentran también cabellos con bulbos completos y con restos de epidermis en los espacios interdigitales de las manos o adheridos con sangre cuando ésta se encuentra en las ropas o en cualquier área descubierta de la superficie corporal, así como en el lugar de los hechos. Estos signos o indicios igualmente corresponden a riñas en plenitud y violaciones con resistencia plena.

Defensa.

Los signos de defensa incluyen especialmente heridas cortantes, punzantes, punzo-cortantes, contusas, corto contusas, zonas equimóticas por golpes y escoriaciones de consideración sobre los antebrazos y muñecas de las manos y, principalmente, sobre las regiones dorsales y palmares de las manos, incluyendo los dedos.

Todas ellas producidas durante las maniobras defensivas de la víctima. Se debe tener presente que lo anteriormente mencionado puede estar relacionado con un evento criminal con expresiones de violencia extrema y misoginia en contra de mujeres y niñas que culmina con la privación de la vida por el hecho de serlo.

Signos constantes de asfixias en general.

Descripción metódica y sistemática (por orden) de signos internos y externos. Mayor intensidad de las livideces cadavéricas. Sobre todo en los miembros inferiores en los casos de muerte por ahorcamiento.

Tatuajes.

La importancia médico-legal de los tatuajes se basa en los siguientes motivos:

- Constituyen un medio muy importante de identificación, en vivos como en cadáveres, puesto que resisten muchísimo a la putrefacción;
- Los intentos de borrado de los tatuajes son, por si mismos, elementos identificativos; y
- Desde el punto de vista sociológico y psicológico, el tatuaje permite caracterizar a la persona, englobándola en determinados grupos socio-culturales o explicando ciertos comportamientos⁷⁵.

C.4 Genética forense

Objetivo de la Genética forense en la investigación del delito de feminicidio.

Establecer a través de la confronta y análisis estadístico en el CODIS, los perfiles genéticos del ADN y la identidad de la víctima con un grado de confiabilidad absoluta.

Identificación de la víctima.

De las muestras biológicas como son cabello, sangre, saliva, tejido, diente o hueso de la víctima, se obtienen perfiles genéticos (alfanuméricos) del ADN, éstos se confrontan con los de sus familiares biológicos ascendentes y descendentes. Los perfiles genéticos se conforman de patrones que la persona hereda de su madre y padre biológicos, así como los que hereda a sus hijos. Al confrontar y analizar que la víctima presenta la herencia genética de padre o madre, se establece la identidad. Dicho estudio se lleva a cabo a través de estudio estadístico con el software denominado CODIS dando valores de confiabilidad en la identificación.

⁷⁵ *Protocolo Modelo para la Investigación Forense de Muertes sospechosas de haberse producido por Violación de los Derechos Humanos*, Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas; Proyecto MEX/00/AH/10; Primera Fase del Programa de Cooperación Técnica para México, elaborado por el Equipo Argentino de Antropología Forense, 2001; p. 14 y adelante.

Identificación de la persona en calidad de imputado.

En el lugar de los hechos y/o hallazgo y en la víctima se localizan indicios y/o evidencias biológicos ajenos a la víctima. De éstos se obtiene el perfil genético de la persona en calidad de imputado. Dicho perfil genético se archiva en el CODIS para posteriores confrontas, con perfiles genéticos de probables responsables que el Ministerio Público requiera.

Identificación de relación de parentesco genético.

La relación de parentesco genético de víctimas se establece a través de sus perfiles genéticos y la de sus familiares biológicos genéticos como son padre, madre, hijas, hijos, hermanas, tías, primas y abuela en línea materna. Estos perfiles se cargan y archivan en el CODIS que los procesa y analiza estadísticamente para obtener la información referente a su relación de parentesco que presente con la familia que se relaciona. El personal de servicios periciales solicita a los familiares su consentimiento por escrito para obtener la muestra biológica para el estudio en genética. Así también solicita a la autoridad la cadena de custodia de las muestras biológicas de la víctima y familiares.

C.5 Antropología forense.

Objetivo de la Antropología Forense en la investigación del delito de feminicidio.

El trabajo del personal de antropología forense tiene que ver con ubicar el lugar del hallazgo del cuerpo o restos, sea individual o mezclado, aislado o adyacente, primario o secundario, alterado o inalterado; contribuir a identificar a la persona muerta y determinar la posible causa de la muerte; estimar, en lo posible, el momento de la muerte y recolectar la evidencia física que permita fundamentar las conclusiones.

En caso de realizar las acciones en fosas, deberán seguirse, además de los procedimientos normativos aplicables en la materia, los mencionados en el *Protocolo de Minnesota*, los cuales señalan que el objeto de una investigación antropológica es el mismo que el de una investigación médico legal de una persona recién muerta. La diferencia radica en el tipo de material que ha de examinarse. La o el perito médico examina cadáveres, en tanto que el personal de antropología examina esqueletos. Aquel se concentra en la información obtenida a partir de tejidos blandos, en tanto que éste se centra en los datos procedentes de restos óseos. La o el odontólogo y el radiólogo forense deben ser los otros integrantes del equipo. La o el antropólogo debe reunir información que determine la identidad de la occisa, la hora y el lugar de la muerte, la causa de la muerte y la manera o el modo en que ésta ocurrió (feminicidio, suicidio, accidente o natural). La pericial en antropología forense examina un esqueleto con información procedente de tejidos duros⁷⁶.

Como la descomposición en los cuerpos es un proceso continuo, el trabajo de antropología forense y el de medicina legal puede superponerse.

En algunas circunstancias puede ser necesario el uso tanto del protocolo de exhumaciones como el del protocolo modelo de autopsia para obtener la mayor cantidad posible de información. El grado de descomposición del cadáver impondrá el tipo de investigación y, por lo tanto, del protocolo o protocolos que han de seguirse.

Exhumación.

Descripción metódica y sistemática con el fin de obtener el cadáver, osamenta o restos biológicos. Al igual que en el caso de la autopsia el Protocolo de Minnesota, aporta el Modelo de Exhumación y Análisis de Restos Óseos, que se debe consultar para esta diligencia.

En general, los especialistas que realizan la exhumación no son los mismos que en el laboratorio realizarán el análisis del cuerpo o los restos, lo que produce que importante información tafonómica⁷⁷ se pierda. Esto redundará en que, por ejemplo, se interpreten como lesiones peri mortem alteraciones que pueda haber sufrido durante su permanencia en tierra (acción de roedores) o durante el proceso de exhumación (fracturas producidas por palas).

Los fines de la exhumación son:

- la recuperación de los restos para su examen y análisis físicos con fines de identificación;
- la documentación de las lesiones y otras pruebas para utilizarlas en los procedimientos judiciales y desvelar violaciones de derechos humanos;
- búsqueda de indicios que puedan contribuir a la reconstrucción histórica de los hechos y revelaciones para concientizar a la población; y
- entrega de los restos a familiares, entender que esto es indispensable para la recuperación emocional de las víctimas indirectas.

Este procedimiento, se debe asegurar que será realizado por personal calificado, quien deberá emitir un dictamen definitivo que establezca con la debida diligencia, la identidad del cadáver

⁷⁶ Protocolo modelo para investigación forense, op. cit., p.53

⁷⁷ Tafonomía: El estudio de los procesos que causan una preservación diferencial del material. Literalmente significa "las leyes del entierro" (del griego tafo = entierro, nomos = leyes). Protocolo Modelo de Investigación forense; op.cit. p. 50

o restos humanos y la causa de la muerte. Asimismo, se deben tomar en cuenta principios de respeto a los derechos humanos de las víctimas, que consisten en lo siguiente:

- En todo tiempo, los restos de las mujeres fallecidas deben tratarse con respeto y dignidad. De igual manera, deben tenerse en cuenta las creencias religiosas y las opiniones que en vida manifestaron y las de sus familiares, se mantendrá informados a los familiares de las decisiones tomadas en relación con las exhumaciones y los exámenes postmortem, así como de los resultados de esos exámenes. Cuando las circunstancias lo permitan, debe considerarse la posibilidad de que familiares o representantes de éstos estén presentes.
- La identidad del cadáver y de los restos humanos y la causa de la muerte deben establecerse con la debida diligencia y debe recopilarse toda la información posible antes de disponer de éstos. Se designará a un forense profesional, para que realice los exámenes postmortem y determine la identidad de la persona y la causa de la muerte.
- En caso de que el cadáver o los restos correspondan a una mujer reportada como desaparecida, tras el examen postmortem, deben devolverse a los familiares con la mayor brevedad posible, ya que para éstos la entrega del cadáver para su entierro suele ser el primer paso para que se haga justicia y se pueda iniciar el proceso de duelo, sin embargo, si no fuere posible entregarlos se debe asegurar un entierro adecuado.
- Cuando se lleve a cabo una exhumación es fundamental recopilar toda la información con miras a una identificación.
- La identificación forense de restos esqueléticos a partir del análisis genético es de nodal importancia a través del estudio del ácido desoxirribonucleico (ADN). El método consiste en la recuperación de ADN mitocondrial o nuclear de huesos y dientes y su comparación con el ADN extraído de la sangre, saliva o cabellos de los presuntos familiares de la víctima, por ello es importante conservar, sobre todo los dientes de los cadáveres, este análisis y su resultado constituyen las pruebas que puedan permitir la identificación y que pudieran servir para instruir una causa penal.
- Dependiendo de las circunstancias aparentes de la muerte o muertes de que se trate, la responsabilidad general de proteger y recuperar los restos se

atribuirá al ministerio público, que colaborará con otras autoridades cuando proceda. De ese modo, hay más posibilidades de que se establezca una cadena clara de responsabilidad, autoridad y rendición de cuentas. Debe existir una forma clara de autorización de las labores de recuperación, así como normas adecuadas de seguridad e higiene.

Ubicación y delimitación del área a excavar⁷⁸.

Una vez localizado el sitio se procede a establecer un área de trabajo exclusiva para peritos y una zona de resguardo policial. Las dimensiones de la misma estarán relacionadas con el tipo de estructura observada en el terreno. Cuando no hay indicios y/o evidencias claras en la superficie y el área a investigar es acotada, una de las técnicas más utilizadas es el cuadrículado total del terreno. Se elabora un plan de excavación con el fin de establecer las dificultades del terreno y a su vez determinar las necesidades de embalaje y transporte especial del cuerpo o restos.

Excavación con técnicas arqueológicas.

Etapa crítica, pues a medida que el personal pericial va excavando, el contexto original se va alterando y destruyendo. La remoción de la tierra debe realizarse con herramientas pequeñas. Incidentalmente y en los niveles superiores pueden utilizarse herramientas más grandes. Toda la tierra que se remueva de la fosa debe ser pasada por una criba o tamiz, de modo a estar seguros que no se pierdan elementos pequeños. Las personas que realicen la tarea de excavación deben trabajar de afuera hacia adentro de la fosa, de modo de no perturbar la estructura original. En los casos en que los restos se localicen demasiado profundos, pueden cruzarse tabloncillos de madera sobre el área de excavación y trabajar colgados sobre ellos. Poco a poco se debe ir dejando al descubierto el o los esqueletos y cualquier evidencia asociada. Todos los restos deben ir quedando in situ, es decir no deben ser levantados ni removidos. Lo que se está tratando es de reconstruir la posición exacta en que el cuerpo fue depositado y la ubicación de las evidencias.

Las actuaciones posteriores son:

- I. Registro y levantamiento.
- II. Embalaje y etiquetado.
- III. Traslado al laboratorio o anfiteatro.
- IV. Trabajo en laboratorio, preparación de los restos.
- V. Estudio y aplicar las técnicas de identificación: odontológica y radiológica (incluyendo extracción ADN).
- VI. Elaboración del dictamen.

⁷⁸ Lineamientos, op. cit. p. 163 y adelante

C.6 Antropología social.

Objetivos de la Antropología social en la investigación del delito de feminicidio.

Con base al análisis antropológico forense se detectarán y derivarán las investigaciones al análisis antropológico social de feminicidios, con el objetivo de conocer el entorno social y contexto cultural donde se llevaron a cabo los hechos que sirvan como herramienta científica social; implica identificar las variables del entorno que afectan negativamente a las mujeres y las niñas por la influencia de las instituciones y estructuras androcéntricas, discriminadoras, en que vivió o vive la víctima y sus familiares.

Se toman en cuenta los antecedentes de investigación derivados de otras ciencias forenses tales como: Medicina Forense, Criminalística de Campo, Psicología, Criminología y Trabajo social.

Se deberán realizar las acciones tendientes a obtener lo siguiente:

- Datos generales de la víctima;
- Causa de muerte de la víctima;
- Evaluación criminalística del lugar de los hechos o lugar del hallazgo;
- Datos generales de la persona en calidad de imputado; y
- Evaluación médica de la persona en calidad de imputado.

Ubicar en un contexto social a la víctima y del imputado.

Se deberá conocer, describir el entorno social y cultural, y la situación de violencia de género contra la mujer. El entorno social de la víctima y de la persona en calidad de imputado está formado por sus condiciones de género, y los diferentes roles sociales que desempeña en su vida cotidiana, laboral, los estudios que ha cursado, el nivel socioeconómico de la comunidad en la que forma parte (contexto social y cultural).

Dichas características y circunstancias de **ninguna manera permitirán establecer prejuicios, estereotipos o predisposiciones sobre la vida, honorabilidad y comportamiento de la víctima, por el contrario, la perspectiva de género es una herramienta que ayudará al especialista a dictaminar cómo la privación de la vida resulta de la violación sistemática de derechos humanos, en un contexto generalizado de violencia, discriminación y desigualdad, en un lugar y tiempo determinado.**

Los peritajes en psicología social, trabajo social o antropología social son aplicables con el fin de determinar las siguientes circunstancias:

- La relación previa entre víctima y presunto agresor;
- Los actos de violencia y maltrato previos a la muerte
- La presencia en el presunto agresor de patrones culturales misóginos o de discriminación e irrespeto a las mujeres, a través de un perfil de personalidad.

El ministerio público deberá solicitar:

- 1) Un estudio comparativo entre la víctima y el presunto agresor para determinar la posible ventaja física entre ambos, con el fin de acreditar el marco de desigualdad y de poder en el que se ejerció la violencia letal.
- 2) Un estudio sobre el entorno social y un mapa de relaciones de la víctima y sus familiares, teniendo en cuenta un enfoque de discriminación interseccional, con el fin de identificar de qué forma los factores estructurales, institucionales, interpersonales e individuales de las relaciones sociales en las que se ubicaba la víctima, le hicieron más o menos vulnerable a las formas de violencia que la afectaron (como por ejemplo, ser menor de edad, la situación socioeconómica precaria, el origen rural, el nivel educativo, la maternidad, la actividad laboral, etc.). Estos factores pueden incluso afectar el acceso a la justicia de las víctimas y el desarrollo de las propias investigaciones judiciales, por la presencia de estereotipos y prácticas discriminatorias en las y los operadores del sistema.

Frente a la vigencia del sistema penal acusatorio y conforme al CNPP, se debe considerar, cuando las circunstancias de los hechos lo ameriten, pruebas anticipadas o anticipos jurisdiccionales de prueba, en el caso de testigos amenazados, enfermos, o en riesgo extremo o extraordinario de seguridad e integridad personal⁷⁹.

Explorar información de los lugares de convivencia.

Lugares de convivencia y los diferentes roles sociales que desempeña la víctima y de la persona en calidad de imputado en un espacio público y privado en un contexto social determinado.

⁷⁹ Modelo de Protocolos, op. cit. p.66

Establecer la posición económica.

El estudio socioeconómico establecerá el nivel de ingresos de la víctima colocando a ésta en un estatus socioeconómico y con ello, poder determinar si existió una posición de subordinación o sometimiento de la víctima en sus diferentes roles sociales (espacio público y privado), con respecto a la persona en calidad de probable responsable.

Ubicar el desarrollo académico.

El nivel de alfabetización, grado de escolaridad o estatus profesional establecerá el nivel intelectual de la víctima colocando a ésta en un estatus superior y/o inferior con respecto a la persona en calidad de probable responsable.

Conocer y describir el tipo de actividades de esparcimiento.

Se conocerá y describirá el contexto cultural observando el espacio público y privado de la víctima y de la persona en calidad de imputado enfocando así la atención en los espacios de esparcimiento o recreación, los cuales pueden ser propicios o influir en la comisión del delito.

Informar y describir sobre el tipo, forma, modo de las relaciones con el agresor y afectivas con otras personas.

El tipo de redes paralelas y laterales establecerán la forma en la cual interactúan, conviven y se organizan socialmente la víctima y el agresor. Se deberá realizar un análisis del entorno familiar de la víctima y de la persona en calidad de imputado. En caso de mujeres pertenecientes a un pueblo o comunidad indígena, se tomarán en cuenta los factores culturales necesarios.

Trabajo de campo.

Las acciones a desarrollar en el trabajo de campo son:

- Conocidos los antecedentes del caso, el personal de servicios periciales especialista en antropología social, trabajará en un primer momento elaborando guías de entrevista a profundidad, utilizando técnicas específicas de su área, entre ellas las denominadas “autopsias verbales o psicológicas” que se aplicarán a las personas más cercanas a la víctima (familiares y amigos).
- Paralelamente se llevará a cabo la revisión bibliográfica, estadística y documental reciente del lugar donde se llevaron a cabo los hechos por fuentes escritas oficiales, opiniones de Psicología forense, Psiquiatría, y Criminología para conocer los perfiles de personalidad de la víctima y conocer la conducta propiamente dicha de la persona en calidad de probable responsable.
- En un segundo momento, se recabará la información etnográfica del contexto sociocultural con la finalidad de conocer el entorno social de la víctima y se

realizarán las entrevistas correspondientes.

- En un tercer momento se llevará a cabo el análisis documental, cualitativo y comparativo cruzando la información recabada bajo una perspectiva de género con la finalidad de dar a conocer el entorno social y contexto cultural de la víctima.

Elaboración del dictamen.

Con base en un análisis cualitativo derivado de la investigación antropológica social, se desarrollará el peritaje de antropología social desde una perspectiva de género.

C.7 Psicología forense⁸⁰.

Objetivo de la Psicología Forense en la investigación del delito de feminicidio.

El objetivo consiste en identificar los factores psicodinámicos internos y de relación con su entorno previos al deceso; desarrollar un perfil psicodinámico que describa las condiciones de relación y psicológicas de la víctima previas al deceso con el fin de obtener la mayor información posible mediante entrevistas realizadas a familiares, amigos y vecinos, análisis del entorno físico y de interacción, así como de documentos, objetos personales, etcétera; revisar y analizar las documentales contenidas en el expediente y/o cualquier otra fuente documental; y buscar elementos contenidos en documentos, que brinden información de personas involucradas en el hallazgo del cuerpo, versiones de testigos, familiares, amigos, etcétera.

Las y los especialistas deberán estar capacitados en perspectiva de género a fin de que realicen su labor sin interferencia de estereotipos, prejuicios discriminadores por género; los datos de la vida privada de la víctima deberá ser resguardados y no utilizada en su perjuicio; en los casos de entrevistas con las y los familiares, se debe tener sumo cuidado de cumplir con las directrices aquí contenidas en cuanto al abordaje, presentación del personal pericial, brindar la información oportuna y suficiente con calidad y calidez para obtener la apertura de los entrevistados, siempre respetando sus derechos humanos.

Necropsia Psicológica.

El estudio o análisis de personalidad de la víctima se lleva a cabo mediante la llamada necropsia psicológica, un concepto novedoso en el campo pericial, cuya aplicación consta de un trabajo de campo y un interrogatorio indirecto (semiestructurado) de personas relacionadas con la niña o mujer víctima para conocer cuál era su comportamiento, el tipo de conductas que manifestaba; la situación vital de la víctima antes del feminicidio, destacando la psicobiografía y su estado vivencial previo, su evolución en los últimos meses, así como el estado de salud mental y las alteraciones por la violencia sufrida, En ningún caso se abordarán temas de su vida íntima, sexual o datos que la agraven o afecten su dignidad. De esta manera se pueden brindar elementos para determinar, en la medida de lo posible, si la víctima sufría violencia de género o violencia familiar y, así, presumir que padecía del

Síndrome de Indefensión Aprendida o del Síndrome de Estocolmo, que produce en la víctima una sumisión total al agresor e incluso una justificación de su conducta.

Psicodinamia Retrospectiva.

En esta intervención, toda la información que se recabe para la elaboración del proyecto de Psicodinamia Retrospectiva, se utilizará para auxiliar la investigación. De ninguna forma se puede usar información personal y privada de la víctima en forma discriminatoria, especialmente lo referente a su vida sexual, su profesión o sus preferencias de cualquier tipo.

Observación del entorno físico y hábitat de la víctima.

Examinar el contexto ordinario de la víctima, a fin de representar el estilo de vida de la misma.

Historia personal de la víctima.

Reconstruir la biografía de la víctima a través de entrevistas, conociendo sus principales logros, las habilidades que poseía y las estrategias de afrontamiento.

Historia Familiar.

Conocer la posición jerárquica dentro del núcleo familiar, sus obligaciones y responsabilidades, identificación con el grupo, estilos de afrontamiento como familia, así como las interacciones con cada miembro.

Probable dinámica del evento.

Hipótesis del desarrollo del evento, conjugando los elementos desencadenantes que precedieron el deceso, aspectos emocionales y cognitivos de la víctima, así como de su probable agresor antes y durante la interacción, todo esto en relación con el espacio físico y los medios materiales que se encontraban ahí presentes.

Análisis de objetos y documentos personales de la víctima.

Observación de las pertenencias de la víctima que pudieran sugerir los principales intereses, valores y estilo de vida de la víctima.

Historia de vínculos sentimentales de la víctima (relaciones de pareja).

Conocer el número, frecuencia, duración, profundidad y tipo de relaciones de contenido sentimental de la víctima, así como las pautas de interacción incluyendo los problemas y principales motivos de ruptura.

Modelos familiares de reacción frente al estrés.

Estilo de afrontamiento del grupo familiar introyectado por la víctima, a fin de conocer

particularmente su manera de adaptación.

Tensiones recientes o problemas del pasado.

Vislumbrar los eventos cruciales anteriores al deceso que no fueron superados, así como conocer la capacidad de tolerancia a la frustración, a fin de relacionar dichos problemas con el deceso, en caso de que los hubiera.

Historia de uso o abuso de alcohol y drogas en la dinámica familiar.

Considerar la dependencia a sustancias estimulantes cuyo papel pudiera ser paliativo en la resolución de problemas o coadyuvante del deceso.

Relaciones interpersonales.

Conocer las redes de apoyo y la probable percepción que la víctima tenía de ellas.

Probables relaciones de vinculación críticas de género.

Señalar cualquier problemática que en vida enfrentó la víctima por su condición de ser mujer.

Historia previa de violencia por razones de género.

Eventos anteriores en los que fue victimizada con cualquier tipo de violencia, ejercido en cualquier ámbito y que se haya originado por estereotipos y relaciones desiguales basados en el género.

Cambios en los hábitos, aficiones, alimentación, conducta sexual y otras rutinas previas al deceso.

Identificar todos aquellos indicadores de posibles alteraciones psicológicas que a través de cambios en los patrones conductuales expresen la existencia de conflictos internos, angustia, estrés, trastornos mentales o algún daño psicológico como resultado de conflictos de relación, agresiones o violencia por razones de género que pudieran tener relación directa con el deceso.

Fantasías, sueños, presentimientos y pensamientos frente a la muerte, suicidio o accidentes que precedieron a la muerte.

Descartar o identificar, en su caso, todos aquellos aspectos que sustenten la existencia de un estado psicológico predisponente o de crisis, que pudiera haber inducido a la víctima a realizar conductas carentes de autocuidado o de franca autoagresión como resultado de algún conflicto interno o de relación.

Planes, fracasos o proyectos de vida previos al deceso.

Efectuar una exhaustiva investigación de todos aquellos elementos que pudieran indicar la

confianza y expectativas de desarrollo sustentable en la víctima, en relación a un futuro inmediato que permitan descartar o confirmar, la existencia de aspectos de esperanza de vida y/o autorrealización que eliminen la hipótesis de autoagresión o la confirmen.

Desarrollo del perfil de personalidad.

Integrar el total de probables rasgos de personalidad que permitan conocer los patrones conductuales básicos de la víctima y su forma de interacción con el medio.

Valorar los factores de riesgo suicida, riesgo autolesivo o riesgo de accidentalidad.

Con base en sus particulares rasgos de personalidad identificar o descartar la proclividad a desarrollar conductas que pudieran llevarle a atentar contra su propia vida.

Valorar el estilo de vida previo al deceso.

Estructurar el posible modelo de costumbres, hábitos, actitudes, formas de relación, preferencias y comportamientos en su cotidianidad que permitan comprender e identificar agresores potenciales o condiciones de vida de riesgo por razones de género. El objetivo de lo anterior no será realizar juicios de valor respecto del modo de vida de la víctima sino contribuir a la generación de posibles líneas de investigación.

Valorar el probable estado mental cotidiano previo al evento.

Deducir mediante la información recabada todos los factores que integran el probable estado mental que comúnmente presentaba la víctima, previo al deceso, a fin de identificar o descartar la existencia de algún trastorno de tipo mental que pudiera tener relación con el deceso o que implicara un potencial riesgo de victimización.

Establecer las áreas de conflicto y los factores motivacionales.

Analizar cada una de las áreas de vida y desarrollo, con el fin de identificar aquellas en las que pudieran existir conflictos existenciales y las motivaciones consecuentes que pudieran reflejar una correlación dinámica con el deceso o con agresores potenciales.

Esclarecer si existían señales de presunción suicida.

Descartar todos los posibles indicadores de conflictos de relación o de tipo depresivo que permitan deducir una tendencia de tipo suicida antecedente a la muerte.

Esclarecer si existía un estado psicológico pre suicida.

Integrar todos aquellos indicadores que permitan descartar un probable estado psicológico tendiente al suicidio como resultado de fracasos sentimentales, conflictos familiares, crisis mentales o económicas, frustraciones, problemas de integración, amenazas, violencia por razones de género, etcétera.

Desglose e integración de inferencias.

Emitir un resultado como hipótesis presuntiva lo más claro conciso y específico que sea posible en función sólo de los aspectos de mayor sustentabilidad.

COLOFÓN.

DILIGENCIAS	OPERATIVIDAD	PROCEDIMIENTO
El levantamiento del cadáver en la escena del hallazgo	Personal pericial en criminalística, medicina, fotografía, químico, antropología	Protocolo Peritas/os oficiales o particulares
Necropsia médicolegal	Médico forense	Protocolos médico forense para feminicidios
Acordonamiento del lugar de los hechos	Policía/personal pericial	Protocolo Inspección, fijación con fotografías y video
Recolección de evidencias: Ropa, muestras biológicas: cabello, pelo, sangre, semen; huellas, muebles, objetos	Policía /personal pericial	Por medios electrónicos, fotografías, tabletas, teléfono celular Procedimiento riguroso cadena de custodia Protocolos periciales técnico-científicos Reunión equipo de investigación

<p>Elaborar líneas de investigación</p> <p>Ejecución del plan de acción</p> <p>Teoría del caso Hipótesis fáctica Hipótesis Jurídica Hipótesis Probatoria</p>	<p>AMPF, Policía/Personal pericial</p>	<p>Trabajo en equipo; ubicar, organizar las ideas de las líneas de investigación para identificar y asegurar los medios cognoscitivos, elementos materiales probatorios y evidencia física necesarios; basado en indagar e identificar las razones de género que motivaron su realización (contexto), del nexo causal entre la acción delictiva y el resultado de la muerte, y de la responsabilidad de los autores o partícipes del hecho punible</p> <p>Protocolo Investigación Ministerial, Policial y Pericial con Perspectiva de Género para el Delito de Femicidio de la PGR</p>
--	--	--

<p>Entrevista testigos de la escena, vecino/as, amiga/os, familiares, compañero/as de trabajo, jefe/as, parejas, ex parejas,</p>	<p>Policía/personal pericial</p>	<p>Protocolos de entrevistas/interrogatorios con perspectiva de género y análisis interseccional Contar con una guía de preguntas conforme líneas de investigación Reunión equipo de investigación</p>
<p>Estudios y dictámenes en materia de antropología social, trabajo social, psicología,</p>	<p>Personal pericial</p>	<p>Protocolos con perspectiva de género, análisis interseccional Reunión equipo de investigación</p>

GLOSARIO.

Androcentrismo.

Sistema de pensamiento que pone al hombre como centro del universo, como medida de todas las cosas. Deriva del griego: *andros* (hombre); implica la prevalencia de la mirada masculina, centrada en la consideración de que el hombre (los hombres) son el modelo, la medida y la representación de la humanidad.

Antropología social

La antropología social o antropología cultural, es la rama de la antropología que centra su estudio en el conocimiento del ser humano por medio de sus costumbres, relaciones parentales, estructuras políticas y económicas, urbanismo, medios de alimentación, salubridad, mitos, creencias y relaciones de los grupos humanos con el ecosistema

Cámara de Gesell

Fue creada por el psicólogo estadounidense Arnold Gesell (1880 – 1961), quien se dedicó a estudiar las etapas del desarrollo de niñas y niños. Se refiere a un mecanismo que consiste en dos habitaciones con una pared divisoria y un vidrio de gran tamaño que permite ver desde una de las habitaciones lo que ocurre en la otra, pero no al revés. Particularmente, en el caso de menores de edad, el fin es observar su conducta, sin que éstos se sintieran presionados por la mirada de una/un observador. Se utiliza para recibir declaraciones de víctimas o testigos y filmarlas, con su consentimiento informado, sin que la presencia de las cámaras sea intimidante para las personas, lo que persigue es no re victimizarlas.

CoIDH.

Corte Interamericana de Derechos Humanos

DIDH.

Derecho Internacional de Derechos Humanos

Debida diligencia.

El Estado deberá realizar todas las actuaciones necesarias dentro de un tiempo razonable en especial la prevención, ayuda, atención, asistencia, derecho a la verdad, justicia y reparación integral a fin de que la víctima sea tratada y considerada como sujeto titular de derecho. El Estado deberá remover los obstáculos que impidan el acceso real y efectivo de las víctimas, realizar prioritariamente acciones encaminadas al fortalecimiento de sus derechos, contribuir a su recuperación como sujetos en ejercicio pleno de sus derechos y deberes, así como evaluar permanentemente el impacto de las acciones que se implementen

a favor de las víctimas. Los principios generales de la debida diligencia son: Oficiosidad, Oportunidad, Competencia, Independencia e imparcialidad, Exhaustividad y Participación de las víctimas y sus familiares.

Estrés post violación sexual.

Se refiere al síndrome o trastorno de estrés postraumático fue catalogado como un trastorno de ansiedad que tiene características singulares. Básicamente, lo padecen personas que son víctimas de sucesos aversivos e inusuales de forma brusca, puede causar unas repercusiones psicológicas muy negativas en la estabilidad emocional de las personas afectadas, especialmente en el caso de las víctimas de violación. Se manifiesta en: ansiedad, pánico, ira, inseguridad, incredulidad, llanto incontrolado, sollozos, risas, insomnio, tensión muscular, irritabilidad, desconfianza y temor hacia todo lo que le rodea. También sentimientos de humillación, vergüenza, fuertes deseos de venganza, impotencia, auto culpabilidad, vulnerabilidad e indefensión.

Feminicidio.

La privación de la vida de una mujer por razones de género.

Género.

Conjunto de ideas, creencias y atribuciones sociales, construidas en cada cultura y momento histórico, tomando como base la diferencia sexual; a partir de ello se construyen los conceptos de “masculinidad” y “feminidad”, los cuales determinan el comportamiento, las funciones, oportunidades, valoración y las relaciones entre mujeres y hombres.

Son construcciones socioculturales que pueden modificarse, dado que han sido aprendidas.

Interseccionalidad.

Es una herramienta para el análisis, el trabajo de abogacía y la elaboración de políticas, que aborda múltiples discriminaciones y nos ayuda a entender la manera en que conjuntos diferentes de identidades influyen sobre el acceso que se pueda tener a derechos y oportunidades. Es útil para analizar y estudiar, entender y responder a las maneras en que el género, se cruza con otras identidades y cómo estos cruces contribuyen a experiencias únicas de opresión y privilegio. El análisis interseccional tiene como objetivo revelar las variadas identidades de las personas, exponer los diferentes tipos de discriminación y desventaja que se dan como consecuencia de la combinación de identidades.

LGAMVLV.

Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

Misoginia.

Son conductas de odio hacia la mujer y se manifiesta en actos violentos y crueles contra ella por el hecho de ser mujer

Perspectiva de Género.

Concepto que se refiere a la metodología y a los mecanismos que permiten identificar, cuestionar y valorar la discriminación, la desigualdad y la exclusión de las mujeres que pretende justificar con base en las diferencias biológicas entre mujeres y hombres, así como las acciones que deben emprenderse para actuar sobre los factores de género que permitan avanzar en la construcción de la equidad de género.

Sexo.

Diferencias y características biológicas, anatómicas, fisiológicas y cromosómicas de los seres humanos que los definen como hombres o mujeres.

Principio Pro Persona.

La aplicación del derecho que proporcione mayor protección a la persona; significa que las autoridades están obligadas a interpretar las normas de derechos humanos de manera que favorezcan la mayor protección para la persona. Este principio fue integrado en nuestro ordenamiento jurídico a través de la reforma constitucional publicada el 10 de junio de 2011.

Protocolos de Actuación.

Instrumentos normativos que describen de manera clara, detallada y ordenada el procedimiento que debe seguirse para la ejecución de un proceso y al mismo tiempo, aportan un conjunto de elementos que permiten orientar y acotar la actuación del personal sustantivo con fundamento legal y sustento en la operación, y

Personal sustantivo.

Los Agentes del Ministerio Público de la Federación, sus auxiliares directos y demás servidores públicos de la Procuraduría General de la República que desempeñen las funciones de las áreas sustantivas o responsables.

Transversalidad

La transversalidad de la perspectiva de género ha sido el término que, en español, se le ha dado a la noción que en inglés se conoce como *gender mainstreaming*. Este concepto fue definido por primera vez en la III Conferencia Internacional de la Mujer celebrada en Nairobi, y adoptado como una estrategia generalizada de acción en la IV Conferencia Internacional celebrada en Beijing en 1995.

El sentido principal otorgado a esta noción, ha sido incorporar la perspectiva de la igualdad de género en los distintos niveles y etapas que conforman el proceso de formulación, ejecución y evaluación de las políticas públicas, de manera que las mujeres y los hombres puedan beneficiarse del impacto de la distribución de los recursos y no se perpetúe la desigualdad de género.

SCJN.

Suprema Corte de Justicia de la Nación

Síndrome.

Conjunto de síntomas y signos que caracterizan una enfermedad o que tienen significación clínica determinada, pueden obedecer a más de una causa.

Sugilación.

Comúnmente llamada chupetón, chupón, chuponaso, chupado, moretón, chupete o chupetazo, es un tipo de hematoma llamado equimosis que es causado por una fuerte succión con la boca.

Violación sexual.

De conformidad con la disposición del artículo 265 del Código Penal Federal: este concepto se refiere a ejecutar la cópula, entendida como la introducción del miembro viril (o cualquier elemento o instrumento distinto),vía vaginal, anal u oral, en el cuerpo de una persona de cualquier sexo, por medio de la violencia física o moral.

BIBLIOGRAFÍA.

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
- Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
- Ley General de Víctimas.
- Ley de Protección para Niñas, Niños y Adolescentes.
- Código Federal Penal.
- Código Nacional de Procedimientos Penales.
- Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.
- Programa Nacional de Procuración de Justicia 2013-2018.

- *Acuerdo A/002/10, emitido por el Procurador General de la República, que establece los lineamientos que deberán observar todos los servidores públicos para la debida preservación y procesamiento del lugar de los hechos y/o del hallazgo, y de todos los indicios y/o evidencias relacionados con el hecho delictuoso, en congruencia con lo dispuesto por el artículo 123 Bis del Código Federal de Procedimiento Penales.* Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de febrero-2010, México.

- *Procedimientos de Investigación Ministerial, Policial y Pericial en el Delito de Femicidio doloso cometido en contra de mujeres por razones de género.* Acuerdo A/001/2012 del Procurador General de Justicia del Estado de Campeche.

- *Protocolo de Investigación de los delitos de feminicidio hacia mujeres* del Estado de Tlaxcala.

- *Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género*, SCJN (2013).

- Criterios jurisprudenciales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2014.

- *Sentencia del Caso González y otras ("Campo*

algodonero”) contra México, sentencia de 16 de noviembre 2009, San José, Costa Rica. Corte IDH.

• *Leyes generales. Interpretación del artículo 133 constitucional; Supremacía constitucional y la Ley Suprema de la Unión. Interpretación del artículo 133 constitucional; Tratados internacionales. Son parte integrante de la Ley Suprema de la Unión y se ubican jerárquicamente por encima de las leyes generales, federales y locales. Interpretación del artículo 133 constitucional*”, Ejecutoria, Novena época, Pleno, en *Semanario Judicial de la Federación*, Tomo XXIX, México. Suprema Corte de Justicia de la Nación (2009).

• *Protocolo de investigación ministerial, policial y pericial del delito de feminicidio*. Gaceta Oficial del Distrito Federal. 25 octubre del 2011.

• *Lineamientos Generales para la Estandarización de Investigaciones de los Delitos Relacionados con Desapariciones de Mujeres, del Delito de Violación de Mujeres y del Delito de Homicidio de Mujeres por Razones de Género*. Instituto Nacional de Ciencias Penales. proyecto de 2010.

• *Recomendación General 16*. 21 de mayo de 2009. Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

• *Modelo de Protocolo Latinoamericano de Investigación de las Muertes Violentas de Mujeres por Razones de Género (femicidio/feminicidio)*. ONU Mujeres, Oficina Regional para América Central del Alto Comisionado para América Latina, 2013.

• *Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes* (Protocolo de Estambul), Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Naciones Unidas, Ginebra, Suiza (2001).

• *Convención para la Eliminación de Todas las Formas*

de *Discriminación contra las Mujeres* (CEDAW), Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de marzo de 1981.

- *Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer "Convención de Belém do Pará"*. DOF enero 1999.

- *Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, aprobada mediante Resolución de la Asamblea General 48/104 del 20 de diciembre del año citado*, Nueva York. (ONU, 1993), Consultada (junio 2014) en el link:

[http://www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/\(Symbol\)/A.RES.48.104.Sp?Opendocument](http://www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/(Symbol)/A.RES.48.104.Sp?Opendocument)

- *Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación en Contra de la Mujer. Recomendación General No. 19 sobre la violencia contra la mujer*, Nueva York. (ONU, 1992), Consultada (junio 2014) en el link:

http://www.equidad.scjn.gob.mx/IMG/pdf/VI-A-1-a-19-Recomendacion_General_No-19-La_violencia_contra_la_mujer-.pdf

- *Informe de México producido por el Comité CEDAW* bajo el Artículo 8 del Protocolo Facultativo de la Convención y respuesta del Gobierno de México, CEDAW/C/2005/OP.8/MEXICO, párr. 159.

- *Recomendación General número 19, La violencia contra la mujer, del 11 Periodo de sesiones año 1992 del Comité CEDAW.*

- *Recomendación 28* relativa al artículo 2º de la CEDAW, 6 Diciembre 2010.

- *Manual sobre Prevención e Investigación Eficaces de las Ejecuciones Extralegales, Arbitrarias o Sumarias (Protocolo de Minnesota)*, ONU 1991, Nueva York.

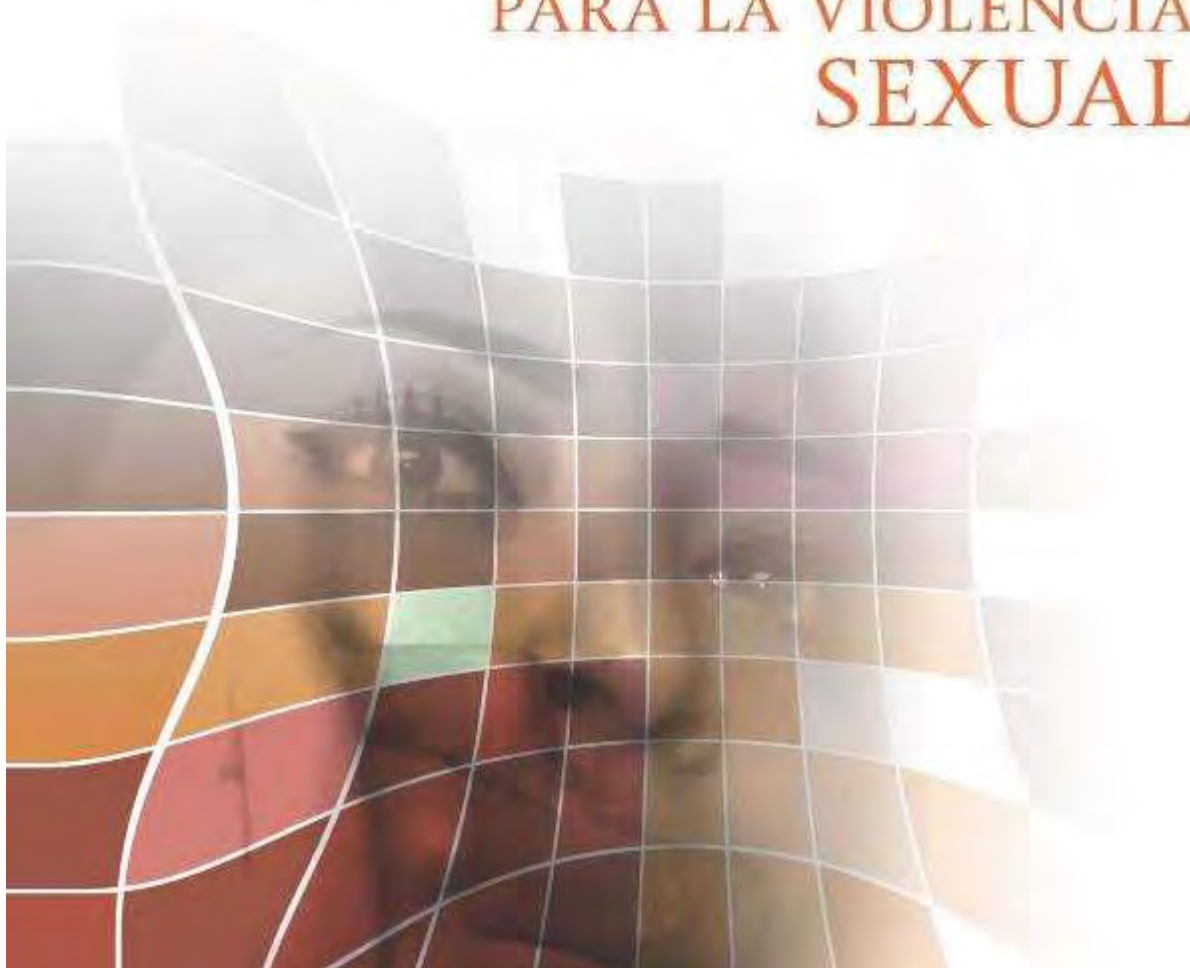
- *Convención sobre los Derechos del Niño*, adoptada Asamblea General ONU en su resolución 44/25 de 20 de noviembre de 1989. DOF 25 enero 1991.
- *Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes*¹, DOF 6 marzo 1986.
- *Código de Conducta para funcionarios encargados de cumplir la ley*, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 34/169, de 17 de diciembre de 1979.
- *Guía de Recomendaciones para la Investigación Eficaz del Crimen de Feminicidio*, Oficina de Derechos Humanos. Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Gobierno de España. Universidad Carlos III. Madrid, mayo 2014.
- *Manual sobre Investigación para Casos de Violencia de Pareja y Feminicidios en Chile*, Fiscalía Nacional. Ministerio Público de Chile. Santiago de Chile 2012.
- *Elementos de análisis del feminicidio sexual sistémico en Ciudad Juárez para su viabilidad jurídica*. Julia Monárrez; Ponencia presentada en el Seminario Internacional: Feminicidio, Derecho y Justicia, México, D. F., diciembre 8 y 9, 2004, consultada en julio 2014 en http://www.feminicidio.net/images/documentacion/monarez2004_elementos_feminicidio_sexual_sistemico.pdf.
- *Guía de Recomendaciones para la Investigación Eficaz del Crimen de Feminicidio*, Edita: Oficina de Derechos Humanos. Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Gobierno de España, Universidad Carlos III Madrid. Madrid 2014.
- *Protocolo Común para la Actuación Sanitaria ante la Violencia de Género*, 2012, Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Madrid, España.

- *Protocolo Modelo para la Investigación Forense de Muertes sospechosas de haberse producido por Violación de los Derechos Humanos*, Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas; Proyecto MEX/00/AH/10; Primera Fase del Programa de Cooperación Técnica para México, elaborado por el Equipo Argentino de Antropología Forense, 2001 Equipo Argentino de Antropología Forense, México, D.F., mayo 2001.
- *Diccionario Esencial de la Lengua Española de la Real Academia Española*. Editorial Espasa (2006).

Investigación Ministerial, Pericial y Policial con Perspectiva de Género para la Violencia Sexual.

Constituye una serie de bases para llevar a cabo una investigación con perspectiva de género en todos los delitos relacionados con la violencia sexual cometidos en contra de mujeres y niñas, con el objeto de evitar su revictimización.

PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN MINISTERIAL, PERICIAL Y POLICIAL CON PERSPECTIVA DE GÉNERO PARA LA VIOLENCIA SEXUAL



ÍNDICE

CAPÍTULO I. SOBRE EL PROTOCOLO

CAPÍTULO I. SOBRE EL PROTOCOLO.....	4
A. Introducción.....	4
B. Alcances	8
1. La perspectiva de género y la interseccionalidad.....	10
2. Mujeres en situación especial de vulnerabilidad	16
CAPITULO II. PRINCIPIOS BÁSICOS DE ACTUACIÓN PARA PERSONAL MINISTERIAL, POLICIAL Y PERICIAL	21
1. Respeto a los derechos humanos de las mujeres víctimas de violencia de género	21
2. Obligaciones de las y los servidores públicos para con las víctimas de violencia sexual	22
3. Mensajes clave para lograr la confianza y estabilidad de las víctimas en las primeras entrevistas	25
4. Consideraciones cuando la víctima fuere niña o adolescente.	26
CAPITULO III. ANÁLISIS CONCEPTUAL DE LA VIOLENCIA SEXUAL	27
1. Manifestaciones de daño ante el impacto de la violencia sexual	30
2. Consideraciones sobre la motivación de los agresores.	33
CAPITULO IV. DE LA COMISIÓN DE LA VIOLENCIA SEXUAL.....	34
1. Violación sexual	34
2. Violencia psicológica.....	35
3. La violación sexual como tortura.....	36
4. Características de la tortura sexual	38
CAPITULO V. DE LA INVESTIGACION DE LA VIOLENCIA SEXUAL	39
1. Consideraciones para analizar objetivamente los casos de violencia contra las mujeres desde la perspectiva de género.....	40
2. Reglas mínimas para la investigación ministerial	41
2.1 Niñas o adolescentes o personas que no comprendan el significado del hecho o no puedan resistirlo.....	43
2.2 Reserva de datos	45

2.3 El formato de reserva de datos personales debe contener los siguientes aspectos:	45
2.4 Sobre las medidas de protección, providencias precautorias y medidas cautelares	45
2.5 Medidas de apoyo asistencial	46
2.6 Sobre protección de testigos	47
2.7 Obligación del Ministerio Público de verificar la ejecución de la cadena de custodia	47
2.8 Establecimiento de la teoría del caso	48
2.9 Caso de denuncias extemporáneas (no inmediatas)	49
2.10 Las pruebas indiciarias	50
2.11 En el caso de que las víctimas no deseen declarar	50
2.12 Entrevista a través de la Cámara de Gesell	51
2.13 Actuaciones básicas con respecto al probable responsable	52
2.14 Investigación del lugar del hecho y/o del hallazgo	54
3. Reglas mínimas para la investigación policial	54
3.1 Obligaciones de la policía de investigación	55
3.2 Conocimiento del hecho.	55
3.3 Preservación y conservación, inmediata del espacio físico denominado: lugar del hecho	56
3.4 Disposiciones policiales de carácter operativo en la investigación.	56
4. Reglas mínimas para la intervención pericial.	57
4.1 Requisitos básicos de la presentación del personal de servicios periciales	59
4.2 Acciones médicas complementarias necesarias en caso de violación	61
4.3 Psicología forense	62
4.4 Otras especialidades.	65
ANEXO 1. Entrevista inicial a la víctima de agresión sexual.	66
9. Entrevista que realiza el personal ministerial a la víctima de agresión sexual	66
10. BIBLIOGRAFÍA:	70

CAPÍTULO I. SOBRE EL PROTOCOLO

A. Introducción

La violencia contra las niñas y mujeres es la máxima expresión de la desigualdad y discriminación; en México como en todos los países, los principales factores determinantes de la violencia de género son las condiciones estructurales inequitativas en donde se desarrollan las relaciones sociales, familiares y culturales desiguales entre hombres y mujeres; esta violencia tiene graves repercusiones en la salud, la libertad, la seguridad, el patrimonio y la vida de las niñas y mujeres, por lo que constituyen serias violaciones a sus derechos humanos que, además, merman el avance del desarrollo de los países y compromete la responsabilidad internacional de los gobiernos cuando no garantizan para las mujeres el acceso a la justicia.

En los últimos años, el Sistema Interamericano de Defensa y Protección de los Derechos Humanos, integrado por la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), se ha ocupado de la situación que prevalece en México con respecto a casos de violencia de género; el Estado mexicano recibió en 2009 y 2010, tres sentencias emitidas por la Corte IDH¹, que versan sobre casos de violencia contra niñas y mujeres, la primera sentencia relativa al caso *González y otras vs Estado mexicano* (Campo Algodonero), por la desaparición y muerte de jóvenes mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua y, las sentencias de los casos de Inés Fernández Ortega² y Valentina Rosendo Cantú³, por tortura y violación sexual en agravio de una mujer y una niña, ambas indígenas en el estado de Guerrero. En estas sentencias la Corte IDH, responsabilizó al Estado de incumplir su deber de investigar esta violencia y con ello su deber de garantizar, los derechos a la vida, integridad y libertad personal de las víctimas y su derecho de acceso a la justicia.

¹ En ejercicio de su soberanía, México aceptó la jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en febrero de 1999

² Caso Fernández Ortega y otros VS. México, Sentencia de 30 de Agosto de 2010

³ Caso Rosendo Cantú y otra VS. México, Sentencia de 31 de Agosto de 2010.

En casos de violencia sexual, la Corte IDH⁴ determinó que las investigaciones deben:

- 1) Incluir una perspectiva de género.
- 2) Remover todos los obstáculos de *jure o de facto* que impidan la debida investigación de los hechos y el desarrollo de los respectivos procesos judiciales.
- 3) Empezar líneas de investigación específicas respecto a este tipo de violencia.
- 4) Involucrar las líneas de investigación sobre los patrones respectivos en la zona de ocurrencia de los hechos.
- 5) Proveer regularmente de información a los familiares de las víctimas sobre los avances en la investigación y darles pleno acceso a los expedientes.
- 6) Realizarse por funcionario/as altamente capacitados en casos similares y en atención a víctimas de discriminación y violencia por razón de género.

“...la influencia de patrones socioculturales discriminatorios puede dar como resultado una descalificación de la credibilidad de la víctima durante el proceso penal en casos de violencia y una asunción tácita de responsabilidad de ella por los hechos, ya sea por su forma de vestir, por su ocupación laboral, conducta sexual, relación o parentesco con el agresor, lo cual se traduce en inacción por parte de los fiscales, policías y jueces ante denuncias de hechos violentos”.⁵

El Estado mexicano ha sido receptivo de los criterios vinculantes que contienen estas sentencias, particularmente a partir del pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al analizar el cumplimiento de la sentencia emitida por la Corte IDH en el caso del señor Rosendo Radilla Pacheco contra el Estado mexicano⁶, se ha impulsado una trascendente transformación del espectro de protección de los derechos humanos, al ampliar el tradicional arquetipo constitucional, adicionando los parámetros vinculantes del derecho internacional de los derechos humanos, se identificaron los criterios de interpretación y se reformularon las obligaciones de las y los operadores jurídicos; a partir de la reforma de junio de 2011⁷, es un mandato constitucional que las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

⁴ Sentencia González y Otras vs Estado mexicano (*Campo Algodonero*), Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2009. párr. 455

⁵ Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), documento de la Relatoría de Derechos de las Mujeres de la CIDH: *Acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia en las Américas*, OEA/Ser.L/V/II. Doc. 68, Deficiencias en el juzgamiento y sanción de los casos de violencia contra las mujeres; punto 155, p.66, 20 enero 2007

⁶ Caso Rosendo Radilla Pacheco (23 de noviembre de 2010), la Suprema Corte de Justicia de la Nación analizó en el cuaderno de “varios 212/2010”, al resolver el cumplimiento de la sentencia emitida por la Corte IDH.

⁷ Decreto por el que se modificó la denominación del Capítulo I del Título Primero y reformó diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Publicado en el Diario Oficial de la Federación del viernes 10 de junio de 2011, entró en vigor el día siguiente.

Esta reforma constitucional ha redimensionado el concepto de las obligaciones de las autoridades, quienes de conformidad con el ámbito de sus actuaciones tienen como responsabilidad prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos que constituyen delitos.

Uno de los señalamientos más significativos que aportaron estas sentencias, así como las recomendaciones de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), *Observaciones finales del Comité de la CEDAW 52º período de sesiones-CEDAW/C/MEX/CO/7-8*, Informe emitido el 7 de agosto de 2012; es que las instituciones de procuración de justicia cuenten con protocolos de investigación con perspectiva de género en los ámbitos ministerial, policial y pericial para casos de feminicidios y violencia sexual, primordialmente.

Por otra parte, la **Declaración de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer**⁸ desarrolla este concepto de la violencia contra la mujer como:

“...todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada”

La violencia dirigida contra la mujer, porque es mujer, o que la afecta en forma desproporcionada, incluye actos que infligen daños o sufrimientos de índole física, mental o sexual, amenazas de cometer esos actos, coacción y otras formas de privación de la libertad⁹.

En consonancia, el Estado Mexicano a fin de atender los compromisos internacionales en la materia, diseñó una serie de directrices nacionales en materia de procuración de justicia entre las que destacan:

⁸ Asamblea General de las Naciones Unidas, Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Resolución 48/104 del 20 de diciembre de 1993, A/RES/48/104.

⁹ Así lo determina la Recomendación General número 19 del Comité de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW). Ratificada por el Senado de la República el 23 de marzo del 1981, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de marzo de 1981, párr.1. Es interesante resaltar que esta gama de afectaciones están recogidos en las hipótesis normativas del tipo penal de feminicidio del Código Penal Federal.

- La Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; que en su artículo 5 establece la obligación a la PGR, de elaborar y aplicar protocolos de investigación de delitos con perspectiva de género, entre otros para la investigación de la violencia sexual, contra la libertad y normal desarrollo psicosexual,
- El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, en su Meta Nacional “México en Paz”, en el Objetivo 1.4. “Garantizar un Sistema de Justicia Penal eficaz, expedito, imparcial y transparente”, específicamente con las Estrategia 1.4.1 “Abatir la impunidad” que en su línea de acción Diseñar y ejecutar las adecuaciones normativas y orgánicas en el área de competencia de la Procuraduría General de la República, para investigar y perseguir el delito con mayor eficacia; y Estrategia 1.4.2. “Lograr una procuración de justicia efectiva”, señala como línea de acción mejorar la calidad de la investigación de hechos delictivos para generar evidencias sólidas que, a su vez, cuenten con soporte científico y sustento legal.
- El Programa Nacional de Procuración de Justicia 2013-2018 (PNPJ), incluye los casos de violencia contra las mujeres como delitos de alto impacto cuya atención es prioritaria para el Estado mexicano, así como la responsabilidad de sensibilizar a todo el personal respecto a la atención y protección adecuada de las víctimas del delito y proveer garantías efectivas para que las mujeres denuncien actos de violencia.
- Establece una nueva cultura organizacional basada en la responsabilidad, vocación de servicio, ética, valores y el respeto a los derechos humanos en apego a la reforma constitucional de 2011, para tal fin incluye como línea de acción, diseñar y actualizar protocolos para los procedimientos que apoyen la operación sustantiva, apegados a derechos humanos y perspectiva de género, que actualice, sensibilice y estandarice los niveles de conocimiento y práctica de las y los servidores públicos.

Por lo anterior, en la Procuraduría General de la República, se diseñó el **Protocolo de Investigación Ministerial, Policial y Pericial con Perspectiva de Género para la Violencia Sexual**, herramienta que establece las obligaciones que deben cumplir las y los servidores públicos como agentes del Estado.

Este protocolo deriva de ese propósito, proporcionar una herramienta metodológica estándar y efectiva en la investigación de la violencia sexual, competencia de la Procuraduría General de la República, cometidos en agravio de las mujeres y niñas, para que se realicen con visión de género y estricto cumplimiento al principio de debida diligencia.

Implica un conjunto de procedimientos específicos, dirigidos a regular y unificar el actuar del personal sustantivo de la institución, bajo tres niveles de especialización, como lo son el ministerial, policial y pericial, para garantizar en su actuar el cabal cumplimiento y protección de los derechos humanos y evitar la discrecionalidad, para que la actuación sea coordinada y orientada.

La capacitación sobre los derechos de las mujeres y la procuración de justicia con perspectiva de género, será la medida para alcanzar la profesionalización de las y los funcionarios encargados de procurar justicia, que con voluntad de superación, esfuerzo, responsabilidad y sensibilidad se impongan de este instrumento y lo apliquen en todas sus investigaciones; es una acción que proyecta el mensaje de que esta violencia no se tolera por parte del Estado.

La aplicación de este Protocolo de Investigación Ministerial, Policial y Pericial con Perspectiva de Género para la Violencia Sexual, no sólo significa el cumplimiento a la normatividad interna y de las sentencias y criterios de la Corte Interamericana, sino la convicción de la institución de combatir la impunidad en los delitos de violencia de género y afianzar los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia, con lo que se acrecentará la confianza de la sociedad en las instituciones de procuración de justicia.

B. Alcances

El alcance y aplicación de este protocolo como guía de actuación, está destinado a transmitir al personal sustantivo, la necesidad de actuar con una perspectiva de género, fortalecer la capacidad y habilidades en las investigaciones que se realicen desde el enfoque de la perspectiva de género y la debida diligencia para todos los delitos relacionados a la violencia sexual cometidos en contra de mujeres y niñas a cargo de la Procuraduría General de la República.

Esta capacidad incluye que las y los operadores deben ser agentes sensibles a los factores sociales y estructurales en el que se generan las desigualdades de género que provocan los actos de violencia misógina¹⁰; en ese marco de referencia, enfocar los hechos desde una perspectiva de género es distinguir cómo las asimetrías en el ejercicio del poder y de derechos afecta de manera grave a las mujeres y conforman las razones de género que pueden motivar una violencia que se ensaña particularmente en contra del cuerpo de las niñas o mujeres, con una intensidad cruel y brutal.

¹⁰Que odia a las mujeres, manifiesta aversión hacia ellas, hacía lo femenino. Diccionario Esencial de la Lengua Española. Real Academia Española, Editorial Espasa.

Ninguna investigación de casos de violencia sexual debe ser influenciada por razonamientos o estereotipos discriminatorios que orienten de manera negativa a la o el investigador, esto significaría la ineficacia ministerial y generaría patrones de impunidad o permisividad de esta violencia que no son acordes con la misión de la PGR y que pueden comprometer la responsabilidad internacional del Estado mexicano.

La debida aplicación de este protocolo de actuación pretende evitar conductas de servidoras y servidores públicos que constituyan re-victimización¹¹, por indiferencia, maltrato, culpabilización y el silenciamiento que algunas veces se impone a las mujeres víctimas. Las consecuencias negativas de la violencia sexual se producen no sólo por efecto del episodio en sí mismo, sino también a causa de la respuesta desfavorable del entorno.

Ante la vigencia del Código Nacional de Procedimientos Penales (en adelante CNPP), cabe destacar que este instrumento adiciona su alcance a los principios y disposiciones procedimentales del nuevo sistema penal acusatorio.

Es importante anotar que la entrada en vigor de la reforma penal de corte acusatorio irroga nuevas atribuciones al Ministerio Público, particularmente la de ejercer facultades discrecionales respecto a la aplicación de soluciones alternas, formas de terminación anticipada y criterios de oportunidad¹² para la omisión o renuncia del ejercicio de la acción penal.

En cuanto a la aplicación de los criterios de oportunidad, son improcedentes cuando el delito se haya cometido con violencia, en los casos de delitos contra el libre desarrollo de la personalidad o violencia familiar de conformidad con las disposiciones del artículo 256 del CNPP.

En el supuesto de los acuerdos reparatorios en los casos de delitos de hostigamiento sexual, abuso y estupro, se deben considerar inviables atendiendo a la disposición del último párrafo del artículo 190 del CNPP que determina que para que procedan los acuerdos reparatorios las partes deben estar en condiciones de igualdad para negociar y que no hayan actuado bajo condiciones de intimidación, amenaza o coacción, circunstancias que son propias de la naturaleza de la violencia contra las mujeres, porque la violencia sexual es cometida eminentemente por razones de género, lo que implica una reducción de las capacidades de decisión de la víctima por la dominación del agresor que no sólo se manifiesta en la comisión del ilícito sino como efecto de la violencia sexual.

¹¹ La victimización suele ser actuaciones de la autoridad fuera de toda proporción: los interrogatorios abusivos, revisiones médicas reiteradas sin el cuidado necesario, incredulidad de quien interroga, interpretaciones y opiniones inoportunas, cuestionamientos que inculpan a la víctima, etc.

¹² Arts. 183 al 202 y del 253 al 256, CNPP

Las víctimas no se ubican en un plano de igualdad ante su agresor a la luz del principio que inspiró la disposición de la fracción IV del artículo 5º de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (en adelante LGAMVLV), que se refiere a evitar procedimientos de mediación y conciliación por ser inviables en una relación de desigualdad de poder entre el agresor y la víctima.

A este planteamiento abona la disposición de la Ley General de Víctimas que determina que:

- No podrá llevarse la conciliación ni la mediación a menos de que quede acreditado a través de los medios idóneos, que la víctima está en condiciones de tomar esa decisión.
- El AMPF y las procuradurías de las entidades federativas llevarán un registro y una auditoría sobre los casos en que la víctima haya optado por alguna de las vías de solución alterna de conflictos
- Notificar, en todo caso a las instancias de protección a la mujer, a fin de que se cercioren que la víctima tuvo la asesoría requerida para la toma de dicha decisión.
- Se sancionará a las y los servidores públicos que conduzcan a las víctimas a tomar estas decisiones sin que éstas estén conscientes de las consecuencias que conlleva

1. La perspectiva de género y la interseccionalidad.

La violencia contra las mujeres se genera dentro de un contexto socio-cultural en el que persiste y se mantiene la subordinación de las mujeres por el dominio de los hombres en todos los espacios y órdenes de la vida (patriarcado). Esto produce un desequilibrio de derechos y oportunidades que afecta de manera directa y primordial sólo a las mujeres, que se refleja en las estructuras de la vida social, política y económica que son valoradas de manera androcéntrica¹³ y que se legitiman en la aparente superioridad masculina vinculada a su constitución física o características biológicas, lo que produce que se les asigne a unas y a otros diferentes roles en la vida y con ello diferentes actividades, oficios y atributos lo que históricamente ha generado no sólo desigualdad y discriminación sino injusticias y violencia contra las mujeres.

Si se analiza esa construcción socio-cultural se comprueba que la cultura establece un

orden para articular la convivencia y las relaciones permitiendo que estas transcurran dentro de las pautas dadas, hasta el punto de configurar la “normalidad” de esa sociedad. A partir de esa normalidad, se establece una serie de roles y funciones para hombres y mujeres de manera que todo transcurra dentro del orden establecido. Según esa construcción, cuando se produce una desviación de las expectativas patriarcales en aquellas personas que están sometidas al control o supervisión de otras (por ejemplo, cuando las mujeres cuestionan e impugnan este orden autoritario y patriarcal, o cuando sus acciones no encajan en el ámbito de lo aceptable por las visiones del mundo que son dominantes)¹⁴, están obligadas a corregir su conducta, o en su defecto, los hombres asumen su autoridad para corregir y castigar a través de la discriminación y la violencia de género. De ahí que se encuentre comúnmente que la sociedad pueda justificar esta reacción correctiva masculina aduciendo que la violencia ejercida por el marido o pareja son “sólo conflictos de pareja” o “asuntos privados”, que las mujeres incitan la violencia por su propia actitud” ellas se lo buscan”, trasgreden las costumbres familiares o sociales, son provocadoras por su forma de vestir, por celos, etc.

Se cree, sin fundamento alguno que hombres y mujeres viven las mismas causas y consecuencias de la violencia y por lo tanto los procedimientos de investigación y la ley misma deben aplicar por igual a unas que a otros; la realidad nos descubre un mundo dual en cuya realidad las oportunidades y derechos no se ejercen ni se gozan igual para todos los hombres, ni para todas las mujeres; pero en el caso de las mujeres, la brecha de desigualdad en comparación con la generalidad de los hombres¹⁵ es inmensamente mayor. Los estudios y estadísticas en cualquier parte del mundo indican, en cualquier época de la historia humana que la población que más sufre violación a sus derechos humanos, son las mujeres. De ahí que con el avance progresivo del derecho nacional e internacional se ha constituido la perspectiva de género como un método para combatir esta desigualdad y promover el acceso a la justicia para las mujeres en igualdad sustantiva¹⁶.

¹⁴Modelo de Protocolo Latinoamericano de Investigación de las Muertes Violentas de Mujeres por Razones de Género (femicidio/feminicidio), 2013, ONU Mujeres, Oficina Regional para América Central del Alto Comisionado para América Latina, párr.106, p. 39

¹⁵Tradicionalmente las mujeres son objeto de violencia primero, por ser mujeres y después por una suma de variables que tienen que ver con su contexto de vida; los hombres, generalmente, viven la violencia propia de la inseguridad pública o por otras causas que ninguna tiene que ver con razones de género, excepto si su identidad de género es femenina.

¹⁶La visión de la realidad con perspectiva de género es una de las razones por las que el legislador reformó los códigos penales para introducir el tipo penal de feminicidio, cuyos elementos son muy distintos al homicidio, implica reconocer que es un ilícito en el cual sólo las mujeres pueden ser sujetas pasivas por razones de género.

El análisis de género permite abordar el hecho delictivo de manera integral, ponerlo en contexto y comprender la situación de violencia ejercida contra la mujer mediante una consideración de aquellos motivos que podrían estar asociados a la manifestación de la violencia¹⁷ y que se encuentran en el entorno social que influyen en el comportamiento del agresor y de la víctima.

La argumentación para el inicio de una investigación de un hecho de violencia contra las mujeres debe tener en cuenta invariablemente las disposiciones de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres (CEDAW), en cuanto a considerar que la violencia contra las mujeres, en todas sus formas, menoscaba o anula el goce de los derechos humanos y libertades fundamentales, constituye discriminación que viola el principio de igualdad de derechos entre hombres y mujeres y vulnera el respeto de la dignidad humana de las mujeres¹⁸.

En las investigaciones ministeriales que incorporan la perspectiva de género, se debe tener en cuenta para la elaboración de la teoría del caso que la violencia dirigida contra las mujeres, no es ejercida por personas excepcionalmente enfermas o perversas o con afectaciones psicológicas singulares, sino que es cometida por hombres formados en una sociedad que permite la discriminación de las mujeres por el hecho de serlo, se debe entender esta violencia como consecuencia de violaciones estructurales a los derechos de las niñas y las mujeres. El personal investigador debe tener muy en cuenta que la violencia contra las mujeres tiende a nulificarlas como personas e impide gravemente el goce de derechos y libertades.

La investigación con perspectiva de género se refiere a un estándar de derecho internacional de protección de los derechos humanos de las mujeres que se traduce en que la investigación tiene alcances adicionales cuando la víctima es una mujer que sufre muerte, maltrato o afectación a su libertad personal en el marco de un contexto general de violencia contra las mujeres¹⁹.

¹⁷ Modelo de, op. cit. párr. 108, p. 40

¹⁸ Recomendación General Número 19 de la CEDAW, op. cit.

¹⁹ Caso González y Otras, párr. 293.

“El deber de investigar es una obligación de medio y no de resultado, que debe ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa. La obligación del Estado de investigar debe cumplirse diligentemente para evitar la impunidad y que este tipo de hechos vuelvan a repetirse. En este sentido, la Corte recuerda que la impunidad fomenta la repetición de las violaciones de derechos humanos”.²⁰

Para fines de este protocolo es importante reconocer, en primer lugar, el concepto de violencia contra las mujeres que la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia establece en su artículo 5º fracción IV, en los términos siguientes:

Violencia contra las Mujeres: Cualquier acción u omisión, basada en su género, que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito privado como en el público.

La perspectiva de género y la debida diligencia son conceptos que permean como requisitos de forma y fondo para el procesamiento de las investigaciones de los delitos ejecutados con violencia de género que lesionan a niñas y a mujeres. Su importancia va más allá de investigar e identificar a los presuntos responsables, sino que se trata de un deber del Estado mexicano que se traduce en prevenir esta violencia al combatir la impunidad.

Para los fines de este protocolo, es importante que la o el operador distinga entre: “sexo” y “género”; por lo tanto podemos entender que, “sexo” es una categoría biológica con la cual se nace con características genéticas relativas a la anatomía de hombre o mujer, con constituciones genitales, hormonales, entre otras diferencias naturales; esta realidad es inmutable, al menos biológicamente; y “género”, es una categoría social, mutable, construible como las características, virtudes, roles, identidades, atributos y funciones asignadas social y culturalmente desde que nacemos, las cuales no varían en esencia entre sociedades, comunidades o países, tradicionalmente en todas las culturas y naciones se reconocen cuáles son las actividades y espacios asignados socialmente, cuales son propias para las mujeres y cuales para los hombres, haciendo una distinción jerárquica en favor de la población masculina que genera desigualdad en la vigencia y acceso a los derechos humanos de las mujeres y que provoca que éstas, en términos universales, vivan en situaciones inequitativas de acceso al poder y desarrollo, social, político²¹.

²⁰ Citado en la Sentencia de González y Otras vs Estado mexicano, *Campo Algodonero*, párr. 289, p. 76: Caso Anzualdo Castro Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de Septiembre de 2009. Serie C No. 202, párrs. 123 y 179 y Caso Garibaldi Vs. Brasil. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de septiembre de 2009. Serie C No. 203 Caso Garibaldi Vs. Brasil, párr. 141

²¹ Para entender estos conceptos es importante establecer que el género como categoría sociológica se ocupa de describir las generalidades de las relaciones sociales y humanas, que se generan en forma desigual en perjuicio de las mujeres, no estudia las particularidades; no es que se universalice la condición

Perspectiva de Género: Es una visión científica, analítica y política sobre las mujeres y los hombres. Se propone eliminar las causas de la opresión de género como la desigualdad, la injusticia y la jerarquización de las personas basada en el género. Promueve la igualdad entre los géneros a través de la equidad, el adelanto y el bienestar de las mujeres; contribuye a construir una sociedad en donde las mujeres y los hombres tengan el mismo valor, la igualdad de derechos y oportunidades para acceder a los recursos económicos y a la representación política y social en los ámbitos de toma de decisiones.²²

Por visión científica, se debe entender la aplicación de un enfoque objetivo y de precisión, es decir, se requiere la aplicación de un método científico, constituido por las etapas siguientes: observación, análisis, elaboración de hipótesis y confrontación de resultados para obtener conclusiones; este análisis se debe complementar con un enfoque de *interseccionalidad*.

En las investigaciones no debe perderse de vista que las víctimas proceden de variados contextos, entornos y orígenes, que las mujeres no son de perfil homogéneo (igual que los hombres), y que en el caso de las mujeres víctimas de violencia se cruzan no sólo la circunstancia de ser mujer, sino otras variables que pueden o pudieron aumentar el grado de vulnerabilidad, como puede ser su cultura o estatus social, entre otros, lo cual implica reconocer los factores que, además de las razones de género, afectan la vigencia de los derechos humanos (tanto de hombres como de mujeres), como la situación económica, la salud, las creencias religiosas o de otra índole, la pertenencia a grupos minoritarios como indígenas, personas en reclusión, homosexuales, lesbianas, la edad, entre otros componentes.

El análisis interseccional resulta imprescindible para realizar el estudio de las formas de violencia que pudieron haber afectado a la víctima de violencia sexual; las diferentes formas en las que las discriminaciones (raciales, de género, de sexualidad, de origen rural, etc.) interactúan con otros múltiples y complejos factores de exclusión, sin subordinar o matizar uno en favor del otro, sino tomándolos como componentes que permiten hacer visibles los impactos diferenciados de las violencias contra las mujeres. Esta interseccionalidad de factores que se cruzan y conviven en una misma mujer se deben comprender como parte de una estructura global de dominación.²³

de las mujeres, sino que en su inmensa mayoría, en todas las sociedades ocurren desigualdades y discriminación contra las mujeres que generan violencia, eso es lo que trata de ubicar la perspectiva de género.

²² Fracción IX del artículo 5 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (en adelante, LGAMVLV)

²³ Modelo de Protocolo, op. cit., párr.120, p. 43

El análisis interseccional parte de que la discriminación contra las mujeres está unida de manera indivisible a otros factores que afectan a la mujer, como la raza, el origen étnico, la religión o las creencias, la salud, el estatus, la edad, la clase, la casta, la orientación sexual y la identidad de género, y en ese sentido, es entendible que la discriminación por motivos de sexo o género puede afectar a las mujeres de algunos grupos en diferente medida o forma que a los hombres²⁴.

El enfoque de interseccionalidad, conforme a la CEDAW, es un concepto básico para comprender el alcance de las obligaciones generales de los Estados partes para prevenir y erradicar esta violencia y para distinguir los alcances de la reparación del daño con perspectiva de género.

Habrà de contextualizar el entorno de la víctima. Ante la multitud de variables presentes en la vida de las mujeres, la investigación tendrá que ser distinta para cada caso, por ejemplo, no viven igual la discriminación y marginación social una mujer indígena que una que vive en entornos urbanos, aun cuando ambas hayan sido sometidas a vejaciones y maltratos. No sufren la misma violencia una mujer a manos de su marido o pareja que aquella que está detenida privada de su libertad por agentes de seguridad pública o integrantes del ejército, o por el mismo agresor; habrá que establecer los contextos donde se ubican las distintas formas o tipos de violencia que pudieron haber afectado a la víctima²⁵, antes, durante o después del hecho delictivo.

Así, es diferente el análisis del contexto de violencia que rodea al entorno de una mujer heterosexual, casada, adulta mayor y/o ejerciendo los roles normativos del ser mujer, con el análisis que debe realizarse en el caso de mujeres jóvenes, lesbianas o bisexuales²⁶.

En los casos de las mujeres indígenas, es más palpable su vulnerabilidad ante los sistemas de justicia, las variables de analfabetismo, usos y costumbres, pobreza, salud, las colocan en situaciones muy complejas para que accedan al ejercicio y goce de sus derechos humanos, se debe diseccionar estos cruzamientos de factores de vulnerabilidad, sumado al hecho de ser mujer, para aportar herramientas y conocimientos que hacen visibles esas diferencias, no sólo frente al hombre indígena, sino con el resto de las mujeres.

Las y los operadores del sistema de justicia deben reconocer y analizar en sus actuaciones estas formas de discriminación y su impacto negativo en las mujeres víctimas, a fin de poner en práctica medida para la no discriminación y exclusión, y así evitar que afecten la investigación.

²⁴ Recomendación 28 del Comité de la CEDAW, CEDAW/C/GC/28, Diciembre 2010, párr.18

²⁵ Modelo de Protocolo, op. cit. párr. 109, p. 43

²⁶ Ibid, párr. 121.

En el análisis interseccional resulta útil el peritaje en **antropología** social, que permite hacer visibles las diferencias de contexto de las víctimas y de las prácticas victimizantes contra las mujeres. Este peritaje deberá describir todos esos factores y componentes que el AMPF analizará para construir su teoría del caso en una investigación de violencia sexual, por ejemplo: es útil en el caso de los pueblos indígenas y de otros grupos étnicos, analizar los hechos e identificar los factores culturales que han podido potenciar, permitir o generar el acto delictivo o simplemente analizar e identificar el contexto del delito²⁷, de otra manera, para él o la AMPF que no cuenta con una visión de género, ni realiza un análisis interseccional, es difícil entender e identificar estas formas que pueden acarrear discriminación y sumar un factor de vulnerabilidad a las víctimas de delitos.

El método de la perspectiva de género exige que en ningún momento el personal investigador haga uso de visiones estereotipadas de la víctima ni argumente contenidos de la vida personal, su forma de vestir o de relacionarse, en perjuicio de la propia víctima, así como el empleo de un lenguaje no sexista.

2. Mujeres en situación especial de vulnerabilidad²⁸

Las mujeres pueden transitar por procesos especialmente difíciles que las ubican en condiciones de vulnerabilidad, tales como:

Embarazo

En el contexto de una relación de violencia de género, el embarazo es una etapa de especial vulnerabilidad y riesgo. En ocasiones, es en esta etapa cuando la violencia se detona o se torna más evidente, por parte de la pareja, incluida la violencia física y sexual. A su vez, el embarazo añade dificultad a las posibilidades de separarse de la pareja.

Un embarazo en una mujer que sufre malos tratos, podría considerarse de alto riesgo, lo que significa un aumento de la mortalidad materna y perinatal, cuadros de estrés, infecciones, anemias, abortos espontáneos, amenaza de parto, recién nacidos de bajo peso, estrés o muerte fetal, por mencionar algunos.

²⁷ Ibidem, párr.123, p.44

²⁸Fuente: *Protocolo Común para la Actuación Sanitaria ante la Violencia de Género*, 2012, Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Madrid, España.

Discapacidad

Las mujeres con alguna discapacidad física, sensorial, psicológica o psiquiátrica se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad a la violencia física, sexual y psicológica, por presentar, con mayor probabilidad:

- Menor capacidad para defenderse.
- Mayor dificultad para expresarse.
- Menor credibilidad en su relato, especialmente en mujeres con trastorno mental grave.
- Menor acceso a la información, asesoramiento y a los recursos de forma autónoma.
- Mayor dependencia emocional y económica de terceras personas.
- Más dificultades de acceso al trabajo remunerado y a la educación.
- Menor autoestima y menosprecio de su propia imagen.
- Miedo a perder las redes de apoyo que le proporcionan cuidados.
- Menor independencia y mayor control económicos.

Migrantes

En las mujeres migrantes, además de sufrir violencia y asaltos en su trayecto, pueden confluir condiciones que determinan una especial vulnerabilidad:

- La precariedad económica.
- Sufrir extorsión de parte de las autoridades, miedo a ser expulsadas del país.
- Mayores dificultades de comunicación y expresión debido a las barreras idiomáticas. Escasez de intérpretes con formación en violencia de género.
- Mayor dificultad de acceso a los recursos socio sanitarios.
- En algunos casos, la posibilidad de haber sufrido además, otras formas de violencia a lo largo de su vida y su proceso migratorio (abusos y agresiones sexuales, explotación sexual y trata, conflictos bélicos, cárcel y tortura, etc.).
- Ausencia o escasa red de apoyo familiar y social, especialmente en mujeres recién llegadas al país.
- Desconocimiento de sus derechos y de los recursos disponibles para ellas.
- Prejuicios, actitudes discriminatorias y desconfianza de profesionales de diversos ámbitos.
- No cuentan con documentos de identidad.

- Aislamiento social.

Mujeres adultas

Su edad aumenta su vulnerabilidad ante quienes le rodean y de quienes tiene dependencia, lo que dificulta las posibilidades de poner fin a una relación de maltrato:

- Pueden haber estado sufriendo maltrato durante muchos años, aún sin ser conscientes de ello, desarrollando sentimientos de indefensión, incapacidad e impotencia que les impiden plantearse alternativas a su situación.
- En la etapa de la jubilación, el número de horas de convivencia con la pareja aumenta, y algunos hombres tratan de tener un mayor control sobre el tiempo, las actividades y relaciones de las mujeres, exigiendo, con violencia, su disponibilidad y presencia para acompañarles y atenderles.
- Es frecuente la dependencia económica de la pareja e ingresos escasos procedentes de pensiones, que impiden que las mujeres se planteen como posibilidad la separación de la pareja y el inicio de una vida autónoma e independiente.
- En esta etapa de la vida (nido vacío), las mujeres que pierden el apoyo cotidiano de sus hijos o hijas cuando éstos/tas se independizan, e incluso migran de ciudad, lo que las enfrenta a la soledad o a vivir la violencia sin testigos ni mediación.
- Algunas mujeres se ven en la circunstancia de tener que cuidar a su pareja, de la que han recibido y continúan recibiendo malos tratos, por encontrarse ésta en situación de dependencia y/o enfermedad crónica.
- El deterioro de su salud afecta su movilidad, libertad y la capacidad de tomar decisiones.

Mujeres en situación de exclusión social

La pobreza conduce a las mujeres, más que a los hombres, a experimentar situaciones de exclusión social. Pueden ser mujeres solas con cargas familiares, mujeres que están en prisión o han salido de ella, mujeres que ejercen la prostitución, mujeres con adicciones graves.

Habitualmente acumulan varios factores de desventaja social, que contribuyen no sólo a una mayor vulnerabilidad a sufrir violencia de género, sino a aumentar las dificultades para salir de ella:

- Analfabetismo o niveles muy bajos de instrucción social, escasa o nula cualificación laboral, carecer o tener muy limitada la autonomía económica.
- Tener asociadas otras circunstancias adversas: problemas importantes de salud o discapacidades, baja autoestima, sentimientos de rechazo social, vergüenza, impotencia, desesperanza, carencia de habilidades sociales, que disminuyen la capacidad de autodeterminación.
- Tener en la práctica, menor acceso a los servicios de ayuda.
- Ausencia de redes sociales de apoyo o vínculos demasiado precarios.

Mujeres indígenas

Las niñas y mujeres pertenecientes a grupos indígenas enfrentan mayores dificultades para hacer visible la violencia física, psicológica, comunitaria y de otro orden que suelen sufrir por:

- Poco o nada dominan el idioma español
- Escasa información acerca de sus derechos
- Dificultades de acceso a los recursos por su dispersión y lejanía en sus comunidades
- Mayor control social, usos y costumbres patriarcales. El hecho de denunciar puede tener repercusiones en las relaciones con la comunidad.
- Mayores dificultades para la protección.
- Menor acceso a oportunidades educativas.
- Menor posibilidad de independencia económica.
- Carencia de habilidades sociales, control patriarcal en sus redes familiares y sociales

Mujeres con infección de VIH

Tener infección por el VIH puede ser un factor de riesgo ante la violencia de género. Las mujeres infectadas por el VIH pueden estar en riesgo de sufrir episodios de violencia, desde insultos hasta agresiones físicas y sexuales, o vivir constante violencia psicológica, tras comunicar su estado serológico a sus parejas. Aunque distintos estudios indican que los índices de violencia de género que sufren las mujeres con el VIH son similares a los que sufren las mujeres que no están infectadas, su intensidad y gravedad parece ser más severa para las primeras. Por otro lado, en las mujeres que se encuentran en una relación abusiva aumenta considerablemente el riesgo de infección

por VIH, debido al miedo a las consecuencias de oponerse a una relación sexual no deseada, al temor al rechazo si intenta negociar relaciones sexuales más seguras, y a la propia coerción y manipulación emocional a la que se ven sometidas.

Objetivo general

Proporcionar las bases teórico-metodológicas sobre la incorporación de la perspectiva de género en la procuración de justicia, definiendo bases mínimas para el tratamiento o encausamiento de la investigación ministerial, policial y pericial en casos de violencia sexual en que la víctima sea una mujer y bajo estándares de derechos humanos; con la finalidad principal de que la o el operador del sistema de justicia identifique y evalúe los impactos diferenciados de la ejecución y efecto de los delitos cuando está presente la violencia por razones de género y en consecuencia, inicie desde esa perspectiva una investigación seria, imparcial, efectiva y orientada a la obtención de la verdad con la debida diligencia.

Objetivos específicos

- Incorporar la perspectiva de género y los principios de la debida diligencia en las investigaciones de la violencia sexual en contra de niñas y mujeres.
- Prevenir que patrones y estereotipos socioculturales discriminatorios por género influyan en la investigación del delito y en las actuaciones ministeriales, policiales y periciales.
- Establecer, dentro de la ruta de investigación la atención de niñas y mujeres víctimas a través del enfoque diferenciado de género.
- Promover la aplicación del DIDH en la actuación del AMPF y sus auxiliares.
- Evitar la discrecionalidad del personal de investigación en casos de violencia sexual.
- Brinda insumos para lograr seguridad jurídica para las víctimas.
- Cumplir con los lineamientos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo, el Programa Nacional de Derechos Humanos y el Programa Nacional de Procuración de Justicia, sobre el diseño de protocolos con perspectiva de género.
- Alinearse a los compromisos internacionales que México ha asumido al aceptar la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
- Impulsar el trabajo que realiza la PGR en el tema de los derechos humanos.

CAPITULO II. PRINCIPIOS BÁSICOS DE ACTUACIÓN PARA PERSONAL MINISTERIAL, POLICIAL Y PERICIAL

Las autoridades encargadas de desarrollar la investigación de los delitos se regirán por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez, lealtad y respeto a los derechos humanos reconocidos por la Constitución y en los tratados internacionales de los que México sea parte.

1. Respeto a los derechos humanos de las mujeres víctimas de violencia de género

El AMPF, inmediatamente²⁹ que conozca de hechos probablemente constitutivos de un delito que implique violencia sexual contra las mujeres o niñas, deberá adoptar en todo momento, medidas dirigidas a proporcionar seguridad y protección a su bienestar físico y psicológico e intimidad de conformidad con las responsabilidades establecidas en este rubro para las autoridades en los artículos 1º y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Víctimas, el CNPP y los instrumentos internacionales en materia derechos humanos de las mujeres.

Los principios para la vigencia del derecho de las niñas y mujeres a una vida libre de violencia, son:

- I.** La igualdad jurídica entre la mujer y el hombre;
- II.** El respeto a la dignidad humana de las mujeres;
- III.** La no discriminación, y
- IV.** La libertad de las mujeres.

Para efectos del cumplimiento y vigencia de los derechos de las víctimas, las autoridades que apliquen este protocolo deberán tener en cuenta su obligación de cumplir con los derechos de la víctima y ofendido/as que contiene el artículo 109 del CN PP³⁰, considerando su aplicación bajo el principio de la máxima protección de las víctimas de delito, como define el artículo 7 de la Ley General de Víctimas:

“Artículo 7. Los derechos de las víctimas que prevé la presente ley son de carácter enunciativo, y deberán ser interpretados de conformidad con lo dispuesto en la

²⁹ El concepto de inmediato debe entenderse en la actuación ministerial-vinculado a la debida diligencia- como “sin dilación”. El *Diccionario Esencial de la Lengua Española de la Real Academia Española. Editorial Espasa (2006)*, lo define como: contiguo o muy cercano a algo [...]; que sucede enseguida, sin tardanza [...] relacionado con algo directamente.

³⁰ Aplicación en cuanto cobre vigencia el CNPP

Constitución, los tratados y las leyes aplicables en materia de atención a víctimas, favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia de sus derechos”.

Los objetivos de este protocolo están basados en la disposición del artículo 6 de la Convención de Belém Do Pará en el sentido de considerar como prioritario el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, que incluye, entre otros:

- a. No ser objeto de discriminación, y*
- b. Ser valorada libre de patrones estereotipados de comportamiento y prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinación.*

2. Obligaciones³¹ de las y los servidores públicos para con las víctimas de violencia sexual

Al respecto, la capacitación y sensibilidad que las y los AMPF deben desarrollar para incorporar la perspectiva de género en las investigaciones de casos de violencia sexual, se encuentra contenida como responsabilidad de la institución en el artículo 5, fracción XV de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República:

“Artículo 5º. Corresponde a la Procuraduría General de la República:

XV. Especializar a las y los agentes del Ministerio Público, peritos, policías federales ministeriales y en general al personal que atiende a víctimas de delitos, a través de programas y cursos permanentes en:

- a) Derechos humanos y género;***
- b) La aplicación de la perspectiva de género en la debida diligencia, la conducción de averiguaciones previas y procesos judiciales relacionados con discriminación, violencia de género y feminicidios;***
- c) Incorporación de la perspectiva de género en los servicios periciales;***
- d) Eliminación de estereotipos sobre el rol social de las mujeres;”***

Con base en esta responsabilidad, las obligaciones que deben cumplir en la investigación serán:

- Capacitarse en perspectiva de género.

³¹ Consultar la disposición del artículo 131 CNPP sobre las obligaciones de la figura del ministerio público, cuya aplicación será obligatoria en el inicio de su vigencia.

- Identificar las necesidades de las víctimas, Prestar atención a las características y gravedad del caso.
- Cuando comparezca a una víctima de violencia sexual, la o el AMPF debe tener en cuenta que la víctima puede transitar por un estado de shock o manifestar un síndrome de estrés pos violación y que ello se caracteriza por desorganización en todos los aspectos de su vida y de sus pensamientos, que en esas condiciones no desea ser cuestionada, ni recordar los hechos.
- Por ello, el personal deberá actuar con paciencia y calma, hablar con lenguaje claro, sencillo y mostrar interés por lo que manifiesta la víctima. Dar oportunidad a que la víctima vaya comprendiendo lo que se le dice y haga preguntas.
- Respetar el derecho que tiene la víctima de interrumpir su declaración cuantas veces sea necesario, reiniciándose cuando esté lista para contestar.
- No coaccionar a la víctima por las declaraciones vertidas.
- Entrevistar a las víctimas en un lugar privado y procurar que esté siempre acompañada de la persona que ella elija.
- Brindar de inmediato apoyo y contención. En circunstancias como las señaladas en el párrafo anterior, el personal actuante deberá hacer uso de los servicios institucionales de contención y manejo de crisis, brindar a las víctimas sin ninguna dilación los apoyos del personal en psicología especializado y consejería médica, considerando que es prioritario este aspecto antes de que comparezca ante el AMPF, en estos casos siempre es importante actuar conforme la decisión informada de la víctima.
- Actitud del personal en el primer contacto. En el primer contacto con la víctima, el personal ministerial, policial y pericial deberá mostrar respeto, presentarse debidamente con nombre, identificarse y explicar cuál es el motivo de la intervención o diligencia, cómo lo hará, cuál es el valor de esa diligencia para la investigación y en todo caso reiterar que está para servir y apoyar a las víctimas.
- Es necesario obtener su consentimiento para todas las diligencias a realizar, por lo que es importante que la estrategia de investigación incluya un método en el que la víctima no repita una y otra vez los hechos de la violencia sexual que vivió, es responsabilidad del AMPF establecer las condiciones para que la narración de los hechos se realice sólo una vez.
- El personal ministerial, policial y pericial deberá comprender que todas sus actuaciones, expresiones, lenguaje y actitudes en presencia de la víctima deben ser cuidadas con el fin de ayudarle a recuperar la perspectiva de la

experiencia sufrida y aporte información necesaria para la investigación.

- Por eso es que se debe de garantizar la declaración y presencia de la víctima en las diligencias en condiciones especiales de protección y cuidado.
- Decretar las medidas emergentes, de protección o cautelares, conforme a la Ley General de Víctimas.

Informar y orientar. Proporcionar toda la información conducente para dar seguridad a las víctimas sobre el proceso, recursos y perspectiva de la investigación.

Informar a las víctimas que es su derecho ser atendidas por personal del mismo sexo³², experto y capacitado en derechos de las mujeres víctimas, perspectiva de género, derecho que se debe respetar en la medida de lo posible.

Extender inmediatamente, si la víctima lo solicita o su representante jurídico, copia de requerimiento, denuncia, reconocimiento médico legal o de cualquier otro documento de interés para la mujer que enfrenta hechos de violencia, siempre y cuando represente un beneficio para ella y no ponga en riesgo la investigación

Ante el enjuiciamiento penal acusatorio, informarle de los derechos que cuenta de conformidad con el artículo 109 del CNPP, incluyendo el de intervenir en el proceso penal por sí o por medio de la coadyuvancia.

Servicios médicos de emergencia. Le corresponde al AMPF informar a la víctima de violación sexual los medios y recursos disponibles para el acceso a los servicios de anticoncepción de emergencia, suministro de la pastilla de anticoncepción de emergencia y, en su caso, a la interrupción del embarazo, con absoluto respeto a la voluntad de la víctima; asimismo; en particular, se considerará prioritario informarle sobre la detección y seguimiento infecciones de transmisión sexual y del Virus de Inmunodeficiencia Humana³³, así como de hepatitis.

La o el AMPF facilitará todo el apoyo y deberá solicitar por oficio los servicios de atención médica a las unidades de salud pública que se encuentren al alcance, en caso de que la víctima de manera informada opte por la interrupción del embarazo de acuerdo a los artículos 333 del Código Penal Federal, 29³⁴ y 5 y 30 fracciones IX y X de la LGV.

³²La necesidad de esta directriz es entender que las víctimas sobreviven a un episodio de violencia física, psicológica y sexual muy grave a manos de agresores masculinos, y por lo tanto, es su derecho no interactuar con personas del mismo sexo que el agresor, como una manera de no provocarles una posible evocación de lo sucedido.

³³ Artículo 35 LGV

³⁴ Artículo 29. Las instituciones hospitalarias públicas del Gobierno Federal, de los estados, del Distrito Federal y de los municipios tienen la obligación de dar atención de emergencia de manera inmediata a las víctimas que lo requieran, con independencia de su capacidad socioeconómica o nacionalidad y sin exigir condición previa para su admisión.

Es importante que el AMPF tenga en cuenta que la ley determina la calidad de víctima, con independencia de que se identifique, aprehenda, o condene al responsable del daño o de que la víctima participe en algún procedimiento judicial o administrativo, por lo que este derecho no puede ser condicionado.

Designar intérprete. Se deberá prestar atención a que la o el intérprete cumpla con su función sin prejuicios de género o de cualquier tipo; en caso de personas pertenecientes a una comunidad indígena, se les deberá explicar que puede estar acompañada en las diligencias por una persona elegida por ella que la apoye con la interpretación de la lengua. En caso de víctimas extranjeras, la o el AMPF debe dar inmediato aviso a las representaciones diplomáticas para la asistencia consular que corresponda.

Cuando se trate de personas con discapacidad, que no puedan hablar o escribir, será necesaria la intervención de peritos que auxilien a la víctima a relatar los hechos

Cuidar la confidencialidad y proteger la intimidad³⁵. Preservar en todo momento la intimidad y privacidad de las víctimas, manteniendo la confidencialidad de la información sobre su residencia, teléfono, lugar de trabajo o estudio, entre otros aspectos.

No revictimizar con juicios de valor en base a discriminación por género. Abstenerse de utilizar conceptos basados en estereotipos ni prejuicios discriminatorios por género, de ninguna manera la guía de la investigación comprenderá supuestos de “provocación” de la víctima al agresor, o causas propiciatorias, por su modo de vestir, su presencia en ciertos lugares a determinadas horas, las respuestas que la víctima le dio al agresor, su comportamiento o la ausencia de evidencias de violencia física.

La o el AMPF y sus auxiliares no deberán cuestionar o exponer la vida sexual, el comportamiento de las víctimas o su forma de vestir o vivir, para justificar, minimizar o relativizar el daño causado.

3. Mensajes clave para lograr la confianza y estabilidad de las víctimas en las primeras entrevistas

Se reitera que es responsabilidad del personal actuante cumplir con los derechos humanos de las mujeres víctimas de delito, para ello es menester que quien reciba a la víctima, logre un acercamiento que establezca las bases de confianza en la institución que interviene para que la víctima que ha pasado por el trauma de una violencia sexual se acoja a la buena fe de la autoridad y pueda cooperar con la investigación.

³⁵ Art. 109, fracción XXVI del CNPP.

Para ello es indispensable que la o el servidor público, la primera vez que esté presente ante la víctima, se presente con nombre y cargo, escoja un lugar privado y lo más tranquilo posible, en donde le explique con voz pausada, con cortesía y respeto, cuál es el motivo de su presencia, en qué lugar/oficina/unidad se encuentra de la institución, cuidando que el lenguaje verbal y no verbal sea de respeto a la dignidad de la víctima.

4. Consideraciones cuando la víctima fuere niña o adolescente.

Garantizar el acompañamiento por parte de su madre, padre, tutor y/o persona de confianza, en caso de no existir quien acompañe, designar a personal especializado del mismo sexo que la víctima: No obstante, en este momento, el personal actuante debe estar muy alerta, considerando que el agresor puede haber sido alguien (familiar o no) muy cercano a la víctima, por lo que deberá tomar precauciones en este acompañamiento;

En el supuesto anterior, se debe considerar también que víctima y abusador pueden pertenecer al mismo grupo familiar, cuestión que agrava la victimización, pues el agresor convive cotidianamente con el niño o niña y tiene acceso inmediato a los lugares donde se supondría está protegido. Los vínculos afectivos que lo unen al familiar que lo abusa tendrá a la menor de edad en un estado de confusión, pues suponía que era alguien que le quería y cuidaba; romper el silencio significa para él o ella, destruir a la familia y eso agrava la situación, ya que se asume como culpable de lo que le sucedió y también como responsable de lo que pueda suceder al agresor si lo denuncia;

Que en las decisiones que se tomen en el procedimiento se tenga en cuenta el interés superior de la niñez;

Que se reconozca su vulnerabilidad y derecho a la confidencialidad durante el procedimiento de investigación y proceso penal;

Que se le brinden facilidades para la rendición de su testimonio, siempre apoyado por personal especializado, evitar la confrontación con el imputado y de considerarse necesario, por medio de circuito cerrado o videoconferencia, que se grabe su testimonio para facilitar su reproducción (emplearse la *Cámara Gesell*);

En caso de que se trate de personas que no tengan la capacidad de comprender el significado del hecho o no puedan resistirlo, es necesaria la intervención de personal pericial especialista en psiquiatría y medicina legal para acreditar el estado físico y mental de la víctima;

Entender que las víctimas de un abuso sexual, en general, experimentan vergüenza y culpa, piensan que lo que les sucedió quizá fue motivado por su conducta, lo que les

provoca depresión e inseguridad, tienden a guardar silencio y no quieren relatar lo ocurrido;

Cuando se trata de menor de edad, el impacto del abuso sexual puede ser aún mayor, ya que este tipo de experiencias difícilmente serán relatadas por los niños o niñas que las sufren, sino muchos años después cuando pueden verbalizar lo que padeció y cuando toman conciencia de lo sucedido; no alcanzan a comprender que lo que les pasó es un acto castigable;

Toda la participación de la menor de edad, debe abordarse desde una premisa de máximas cautelas, con salvaguarda de su identidad, imagen e intimidad. Al estar vigente el sistema penal acusatorio, es prudente considerar el empleo de la prueba anticipada para evitar cualquier riesgo de victimización secundaria o retractación posterior de la víctima por influencias externas³⁶;

En el caso de niñas o adolescentes embarazadas, la autoridad ministerial y personal médico que intervengan deberán considerar la presunción de violencia sexual; en todo caso solicitar los servicios médicos de inmediato, sin necesidad de presentación previa de denuncia o inicio de la averiguación previa o integración de la carpeta de investigación (como corresponda), para el tema de que la víctima manifieste problemas físicos, dolores, infecciones o hemorragias o alguna alteración

CAPITULO III. ANÁLISIS CONCEPTUAL DE LA VIOLENCIA SEXUAL

Para la investigación, valoración, atención y sanción de la violencia sexual, es necesario que las y los operadores del sistema de justicia, policías y peritos dominen el marco conceptual del tema, no se trata de meras definiciones, sino descripciones y análisis a la luz de los principios constitucionales de interpretación del derecho internacional de los derechos humanos, en este caso, de las mujeres, aplicados a la investigación y al procesamiento judicial de los casos.

La violencia sexual implica un atentado a la libertad y dignidad de las mujeres que puede manifestarse de varias formas, desde los piropos, chiflidos e insinuaciones (que pueden constituir además violencia comunitaria), hasta la conducta sancionada por los tipos penales.

La gama de actos que implican violencia con fines sexuales pasa por matrimonios o cohabitación forzada, prostitución forzada, mutilación genital, inspecciones para comprobar virginidad, pornografía infantil, trata con fines de explotación sexual, turismo sexual, lenocinio, pederastia e incesto. Puede incluir, entre otras, la exhibición, observación e imposición de prácticas sexuales no consentidas, sin importar si el agresor

mantiene o ha mantenido algún tipo de relación de pareja, afectiva o de parentesco con la víctima y sin importar que el agresor tenga o no contacto físico con las víctimas.

³⁶ Artículo 304, fracciones II y III del CNPP.

De acuerdo a la fracción V, del artículo 6º de la LGAMVLV, la violencia sexual se define como:

Cualquier acto que degrada o daña el cuerpo y/o la sexualidad de la víctima y que por tanto atenta contra su libertad, dignidad e integridad física. Es una expresión de abuso de poder que implica la supremacía masculina sobre la mujer, al denigrarla y concebirla como objeto.

Como se advierte, la LGAMVLV no constriñe la violencia sexual a la penetración. La Convención de Belém do Pará, incluye la violencia sexual en su descripción de las formas y modalidades de violencia contra las mujeres (artículos 1 y 2), entendiendo:

- a) Que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer, y que comprende, entre otros, violación, maltrato y abuso sexual;
- b) Que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona y que comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo, así como en instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar, y
- c) Que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, dondequiera que ocurra (artículo 2).

Es importante reconocer que la violencia sexual siempre va acompañada de violencia psicológica³⁷, en tanto que es un acto de violencia de género por excelencia. Por lo que las mujeres, por el hecho de ser mujeres, se enfrentan en el transcurso de toda su vida y en general a diferentes formas de violencia sexual, que no necesariamente están tipificadas en los códigos penales:

- ***Violencia sexual con contacto corporal***

Se impone mediante la fuerza, violencia psicológica, chantaje o amenazas un comportamiento sexual contra su voluntad, se produzca por parte de su pareja o por personas conocidas o no. Incluye no sólo la cópula o la introducción de un objeto³⁸ la imposición de relaciones sexuales o prácticas no deseadas, obligar a adoptar posturas que la mujer considera degradantes; tocamientos.

- ***Violencia sexual que no implica contacto corporal***

Exhibicionismo, forzar a ver material pornográfico, mensajes obscenos por correo

electrónico o telefónicos, gestos y palabras obscenos, insultos sexistas, hostigamiento sexual, proposiciones sexuales no deseadas, voyeurismo.

El **hostigamiento sexual**³⁹. Se produce a través de comportamientos verbales y no verbales o físicos, de índole sexual no deseados por la mujer, que tengan como objeto o produzcan el efecto de atentar contra su dignidad, o generen un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante, ofensivo o molesto a fin de obtener de ella un intercambio sexual y produce daño en la víctima. El hostigamiento sexual puede generarse en el ámbito de una relación laboral⁴⁰, docente o de prestación de servicios, en algunas legislaciones se identifica como acoso sexual.

- *Violencia contra los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres*

Incluye cualquier acto que restrinja a las mujeres el libre ejercicio de su sexualidad, a su salud sexual y reproductiva, afectando su libertad para disfrutar de una vida sexual sin riesgos para su salud, así como ejercer libremente su derecho a la maternidad y la esterilización no consentida ni informada.

³⁷LGAMVLV, artículo 6, Fracción I. **La violencia psicológica.**- Es cualquier acto u omisión que dañe la estabilidad psicológica, que puede consistir en: negligencia, abandono, descuido reiterado, celotipia, insultos, humillaciones, devaluación, marginación, desamor, indiferencia, infidelidad, comparaciones destructivas, rechazo, restricción a la autodeterminación y amenazas, las cuales conllevan a la víctima a la depresión, al aislamiento, a la devaluación de su autoestima e incluso al suicidio;

³⁸ Conforme el tipo penal de violación.

³⁹ Art. 259 Bis CPF. Al que con fines lascivos asedie reiteradamente a persona de cualquier sexo, valiéndose de su posición jerárquica derivada de sus relaciones laborales, docentes, domésticas o cualquiera otra que implique subordinación, se le impondrá sanción hasta de cuarenta días multa.

⁴⁰ En términos generales también, las mujeres pueden vivir un ambiente de acoso de índole sexual, en las pandillas, grupos de amigos y amigas, a nivel familiar o de vecindario.

La mutilación genital femenina, los matrimonios, embarazos forzados, la explotación sexual en todas sus formas de comisión también es una forma de violencia sexual. La trata de personas con fines de explotación sexual y el hostigamiento sexual, debido a sus especiales características requieren de un protocolo específico⁴¹.

El Código Penal Federal describe las conductas que implican violencia sexual en los artículos del 259 Bis al 262 de los *Delitos contra la Libertad y el Normal desarrollo Psicosexual*, y contiene: hostigamiento sexual, abuso sexual, estupro, violación y violación equiparada.

Este protocolo no se ocupa individualmente de cada delito, sino que hace énfasis de la metodología para incorporar la perspectiva de género en causas y efectos de la violencia sexual; hace referencia más cercana a la violación sexual, por su gravedad e incidencia, pero sin dejar de lado que cualquier niña o mujer víctima de violencia sexual, sea cual fuere la tipificación del delito requiere de un abordaje diferenciado encausado en la calidad y calidez con que las y los servidores públicos deben actuar a la luz de la debida diligencia atendiendo a las vulnerabilidades que sufren las víctimas de violencia sexual y aplicando un análisis interseccional para considerar la reparación del daño.

1. Manifestaciones de daño ante el impacto de la violencia sexual⁴²

Este apartado, se refiere a reacciones, alteraciones, daño, secuelas psicológicas y trastornos ante el impacto de la violencia sexual de acuerdo a la temporalidad del evento y la fecha de intervención. El trato a las supervivientes de la violencia sexual, en todas sus manifestaciones, exige una formación psicológica especial. Las y los operadores del sistema de justicia deben conocer las disposiciones de DIDH que se refieren a la atención, prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres.

Como mera referencia para el conocimiento de las y los investigadores y quienes atienden a víctimas de violencia sexual, se hace una breve relación de las manifestaciones de daño a través de la identificación síntomas conocidos en la generalidad. Hay manifestaciones frecuentes que presentan las víctimas de violencia sexual, sin soslayar que la sintomatología que presente la víctima puede depender de la dimensión de la agresión, de que sea uno o mas agresores, de la verdad de la víctima, de la capacidad y recursos que sea uno o más agresores, de la edad de la víctima, de la capacidad y recursos que ella tenga de enfrentarlo

⁴¹ Consultar el Modelo de Intervención para Prevenir, Atender y sancionar el Hostigamiento y Acoso Sexuales en la PGR, elaborado por la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad.

⁴² Basado en el Protocolo de Investigación de los Delitos de Violencia Sexual hacia Mujeres de Estado de Tlaxcala.

<p>ESTRÉS POS VIOLACIÓN</p>	<p>Se reconocen dos momentos en este síndrome y hay un periodo de dos a tres semanas entre una y otra a partir de la violación.</p> <p>La fase aguda inicia inmediatamente después de un ataque y puede prolongarse semanas. Se caracteriza por una desorganización en todos los aspectos de la vida. Se manifiesta en: ansiedad, pánico, ira, inseguridad, incredulidad, llanto incontrolado, sollozos, risas, insomnio, tensión muscular, irritabilidad, desconfianza y temor hacia todo lo que le rodea. También sentimientos de humillación, vergüenza, fuertes deseos de venganza, impotencia, auto culpabilidad, vulnerabilidad e indefensión.</p> <p>La fase de reorganización consiste en un visible aumento de actividad motora, sentimiento y necesidades de cambio, búsqueda de alternativas que le permitan a la persona reiniciar su vida en condiciones de mayor seguridad. Hay una tendencia a buscar ayuda profesional, o al menos la retroalimentación de alguien de su confianza capaz de escucharle y de disminuir sus sentimientos de culpa.</p> <p>El tiempo como tal no parece ser el factor predominante de la recuperación.</p> <p>La ansiedad fue mayor en los casos en los que la mujer fue golpeada durante la violación.</p>
<p>SECUELAS PSICOLÓGICAS EN VÍCTIMAS ADULTAS DE ABUSO SEXUAL EN LA INFANCIA</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Físicas: dolores crónicos generales, hipocondría, pesadillas, problemas gastro intestinales, desórdenes alimenticios. • Conductuales: intentos de suicidio, consumo de drogas y/o alcohol, trastornos disociativo de identidad. • Emocionales: depresión, ansiedad, baja autoestima, desconfianza y miedo de los hombres, dificultad para expresar sentimiento, trastornos de la personalidad. • Sexuales: fobias o aversiones sexuales, falta de satisfacción sexual, alteraciones en la motivación sexual, trastorno de la activación sexual y del orgasmo. • Sociales: problemas en las relaciones interpersonales, aislamiento, dificultades en la educación de los hijos.

<p>TRASTORNO DE ESTRÉS POSTRAUMÁTICO</p>	<p>La aparición del trastorno de estrés postraumático está estrechamente relacionada con los recursos personales de quienes enfrentan la situación traumática, las características del evento y el apoyo social que reciben ante esta circunstancia.</p> <p>Factores que predisponen la aparición de este trastorno:</p> <ul style="list-style-type: none"> • La edad de la persona, los rasgos de personalidad, los antecedentes familiares, las experiencias durante la etapa infantil y trastornos mentales preexistentes. • La magnitud y frecuencia de los eventos de violencia, la identidad del personas agresoras, la presencia de lesiones, infecciones de transmisión sexual o embarazo. • El apoyo familiar, las relaciones afectivas y la calidad de la atención recibida. <p>Si el evento es vivido extremadamente traumático, el trastorno de estrés postraumático se presentará aún sin la presencia de dichos factores.</p> <p>Este trastorno se caracteriza por la experimentación persistente del acontecimiento traumático a través de una o más de las siguientes formas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Recuerdos recurrentes e intrusivos del acontecimiento, que provocan malestar y en los que se incluyen imágenes o percepciones. • Sueños recurrentes sobre el acontecimiento. • Sensación de que el acontecimiento traumático está ocurriendo. • Malestar psicológico intenso al exponerse a estímulos internos o externos que simbolizan o recuerdan un aspecto del acontecimiento traumático. • Respuestas fisiológicas al exponerse a estímulos internos o externos que simbolizan o recuerdan un aspecto del acontecimiento traumático. • Evasión persistente de estímulos asociados al trauma y disminución de la capacidad de reacción, reflejado en la sensación de un futuro desolador. • Sistemas persistentes de aumento de la activación como son: dificultades para conciliar o mantener el sueño, irritabilidad o ataques de ira, dificultades para concentrarse, hipervigilancia y respuestas exageradas
---	--

	de sobresalto.
--	----------------

2. Consideraciones sobre la motivación de los agresores.

La violencia sexual representa para el agresor más que un acto para obtener placer, una expresión de “ejercer poder” sobre las víctimas; en el acto de violencia se pueden encontrar una variable de motivaciones:

- a) El agresor experimenta sentimientos de odio, coraje, celos, sospechas, desprecio, venganza; o como expresión de dominio;
- b) A través del ataque sexual pretende que la pareja lo obedezca y permanezca bajo su control; o busca satisfacer o vengar lo que considera un ataque a su autoridad, porque la mujer se salió de su control;
- c) Persigue infligir una humillación a la mujer; pretende castigarla por su conducta transgresora a los parámetros machistas o androcentricos;
- d) Busca reivindicar su “hombría” reforzada en su significado socio-cultural que justifica esa violencia de género; marcar como de su *propiedad* el cuerpo de su víctima;
- e) Satisfacer alguna fantasía a través del sometimiento o el anonimato que como hombre individual y social no puede lograr con el consentimiento de la otra persona;
- f) La violencia física o psicológica que es utilizada para reducir a la víctima, puede ser parte de la satisfacción del agresor compulsivo, ser la fuente principal de excitación;
- g) Y en otros casos, sumado a un asalto o robo, el agresor se aprovecha de la situación de poder que tiene sobre su víctima atemorizada para, además, obtener un acceso carnal al cuerpo de la mujer, acto que de otra forma no hubiera planeado ejecutar si se tratara de un varón.

La Corte IDH en la sentencia de Inés Fernández⁴³, destaca cómo es que el análisis interseccional y de género puede apoyar las inferencias en un caso de violación sexual, donde se denota la motivación de los agresores:

“Además de la agresión sexual cometida por el perpetrador directo, la señora Fernández Ortega fue víctima de otro tipo de agresión sexual por los otros dos militares presentes en el lugar de los hechos[,] en la medida en que su presencia aseguraba un mayor grado de control del autor material, pero también porque permanecieron observando lo que ocurría. La violación

sexual es un tipo especialmente grave de violencia sexual que “fue utilizada como una forma de manifestar dominación por parte de los militares”. Además, la violación sexual “fue una manifestación profunda de discriminación [...] por su condición de indígena y por su condición de mujer” y buscaba “humillar, causar terror y mandar un mensaje de advertencia a la comunidad”. Estos factores “afectaron profundamente la integridad física y psicológica de [la presunta víctima, y] constituyeron claros actos de violencia contra la mujer”.

CAPITULO IV. DE LA COMISIÓN DE LA VIOLENCIA SEXUAL

1. Violación sexual

La violación sexual, usualmente, la única violencia sexual que permanece en el conocimiento colectivo, ante ello, tradicionalmente las pruebas se centraban en la introducción del miembro viril en el cuerpo de la víctima por vía vaginal, anal u oral; eso no ocurre ya en nuestra legislación penal, el personal ministerial debe tener en cuenta toda la gama de violencia sexual que sufren las niñas y mujeres y sus repercusiones.

En el caso de la violación, no siempre precede violencia física para cometerla o someter a las víctimas por parte del agresor o agresores; el requisito de acreditar el uso de la fuerza física y violencia ha evolucionado al requisito de ausencia de consentimiento de la víctima. En la investigación para demostrar la falta de esta voluntad, el personal sustantivo debe tener mucho cuidado en no revictimizar a la víctima con sus preguntas, por lo que es importante reunir todas las presunciones probatorias, circunstanciales, indiciarias y conclusivas de los hechos, por tratarse de un delito de oculta realización, la declaración de la víctima adquiere una relevancia especial, y partir de que está diciendo la verdad, sin cuestionarla, juzgarla o dudar de su dicho.

Esta evolución en el concepto de violación, es resultado de los estudios que demuestran que las víctimas usualmente no presentan resistencia física al momento de ser violadas y de la intención de las sociedades de lograr un efectivo y equitativo respeto hacia la autonomía sexual individual. Por ello, cualquier aproximación rígida en la investigación de los delitos sexuales, tal como requerir resistencia física por parte de la víctima, tiene como consecuencia que algunas violaciones queden impunes, poniendo así en riesgo la protección de la autonomía sexual de las personas⁴⁴.

⁴⁴ *Lineamientos Generales para la Estandarización de Investigaciones de los Delitos Relacionados con Desapariciones de Mujeres, del Delito de Violación de Mujeres y del Delito de Homicidio de Mujeres por Razones de Género*. Instituto Nacional de Ciencias Penales. INACIPE, Apartado B; I. Investigación Ministerial. 1. Objeto de la investigación y obligación de debida diligencia en relación

En la práctica puede ser difícil de probar la falta de consentimiento con la ausencia de prueba “directa” en casos de violación, como pueden ser testigos directos o evidencia física de violencia, por tal motivo el AMPF debe explorar todos los hechos y decidir con base en las circunstancias del caso concreto. Adicionalmente, debe ponderar sobre las condiciones de vulnerabilidad (análisis transaccional y de género) de la víctima, los factores psicológicos y los elementos coercitivos derivados de las circunstancias⁴⁵.

Existe jurisprudencia en el sentido de que no necesariamente la violencia física tiene que presentar alteraciones en el cuerpo de la víctima, sino también puede constituirse a través de otro tipo de acciones que revelen un dominio material sobre la víctima;

EL ELEMENTO VIOLENCIA NO FORZOSAMENTE TIENE QUE OCASIONAR ALTERACIONES FÍSICAS AL PASIVO SINO CUALQUIER TIPO DE ACCIONES QUE IMPLIQUE UN DOMINIO MATERIAL.- En el delito de violación, el elemento violencia física no forzosamente implica que se ocasionen alteraciones al pasivo, sino también otro tipo de acciones que revelen un dominio material contra la agredida, que la obliguen a copular sin su voluntad. (Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito.- Jurisprudencia definida, Tesis 759.- Tomo II. Página 488.- Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995).

2. Violencia psicológica

La LGAMVLV define en su artículo 6. Los tipos de violencia contra las mujeres:

“La violencia psicológica. Es cualquier acto u omisión que dañe la estabilidad psicológica, que puede consistir en: negligencia, abandono, descuido reiterado, celotipia, insultos, humillaciones, devaluación, marginación, indiferencia, infidelidad, comparaciones destructivas, rechazo, restricción a la autodeterminación y amenazas, las cuales conllevan a la víctima a la depresión, al aislamiento, a la devaluación de su autoestima e incluso al suicidio;”

La expresión más común de esta violencia sin duda son las amenazas, que pueden ser directamente hacia la víctima o hacia otra persona con la que la víctima está ligada afectivamente. Es necesario que se valore, en cada caso, el impacto que la amenaza o las amenazas tienen en la víctima, de acuerdo a sus circunstancias personales, culturales, al entorno social en el que se desarrolla o en el que vive la víctima, para ello es muy útil los dictámenes psicológicos periciales y sobre todo considerar el desarrollo de la personalidad de la víctima como para hacer frente a estas amenazas o fuerza psicológica del agresor que la puede avasallar.

con el delito de violación de mujeres por razones de género; punto 2. Factores que obligan a realizar una investigación con perspectiva de género; p. 67.

⁴⁵ Idem, Lineamientos Generales.

3. La violación sexual como tortura⁴⁶

La violación sexual además de la satisfacción de dominio conlleva el control absoluto del cuerpo y voluntad de la víctima, por lo que este acto invade, somete, reduce, genera sentimientos de degradación y humillación; destruye la integridad no sólo física sino personal de la víctima; estas condiciones se redimensionan cuando la violación se comete, además, con fines de tortura.

La concepción de la violación sexual como tortura, cuando reúne ciertos requisitos, se funda en criterios de la Corte IDH, con relación a la resolución de los casos de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú⁴⁷; en este último caso, al hacer la calificación de los hechos relacionados con la violación sexual de la víctima indígena, la Corte señaló que ésta constituye una forma paradigmática de violencia contra las mujeres:

“La violación sexual es una experiencia sumamente traumática que tiene severas consecuencias y causa gran daño físico y psicológico que deja a la víctima humillada física y emocionalmente, situación difícilmente superable por el paso del tiempo [...] de ello se desprende que es inherente a la violación sexual el sufrimiento severo de la víctima, aun cuando no exista evidencia de lesiones o enfermedades físicas⁴⁸”

Incluso calificó la violación como tortura; el elemento intencionalidad fue comprobado porque uno de los soldados obligó a la víctima a tenderse en el piso, la tomó de las manos y mientras otro soldado la violaba, ella fue apuntada con un arma y fue observada por los demás soldados. La Corte IDH⁴⁹ señaló que:

“La Corte considera que, en términos generales, la violación sexual, al igual que la tortura, persigue, entre otros, los fines de intimidar, degradar, humillar, castigar o controlar a la persona que la sufre. La violación sexual de la señora Rosendo Cantú se produjo en el marco de una situación en la que los agentes militares interrogaron a la víctima y no obtuvieron respuesta sobre la información solicitada. Sin descartar la eventual concurrencia de otras finalidades, el Tribunal considera probado que el presente caso tuvo la finalidad específica de castigo ante la falta de información solicitada.”

⁴⁶ De conformidad con la disposición del artículo 5º de la Convención Americana de Derechos Humanos, el Estado mexicano está obligado a prevenir e investigar posibles actos de tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes

⁴⁷ Sentencia de Rosendo Cantú vs Estado mexicano, Corte IDH, 2010, párr. 109. pág. 37

⁴⁸ Ibidem, párr. 124,

⁴⁹ Ibidem, párr. 118.

Es importante el análisis que va desarrollando la Corte en la sentencia de Rosendo Cantú para considerar que una violación sexual puede constituir tortura aun cuando consista en un solo hecho u ocurra fuera de instalaciones estatales. La Corte infirió que los elementos objetivos y subjetivos que califican un hecho como tortura no se refieren ni a la acumulación de hechos ni al lugar donde el acto se realiza, sino a la intencionalidad, a la severidad del sufrimiento y a la finalidad del acto. La Corte concluyó que la violación sexual había implicado violación a la integridad personal de la víctima constituyendo actos de tortura en los términos de los artículos 5.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos y 2º de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.

Caso de mujeres privadas de su libertad:

La tortura sexual debe investigarse siempre en aquellos casos en que las mujeres están sometidas a detención, sea o no en recintos oficiales y a disposición de elementos del Estado, (policías, soldados, custodios).

El simple hecho de reunir estas condiciones, puede constituir una presunción de esta violencia ejecutada contra aquellas mujeres que están privadas de su libertad a merced de policías, soldados u otros agentes del Estado, ya sea en el trayecto del lugar de su detención a los separos, reclusorio centros de detención, de ahí la importancia de que sean mujeres agentes de seguridad pública quienes despachen las órdenes de aprehensión, aun en este supuesto, pese a esta medida, la o el AMPF no debe descartar la posibilidad de que haya existido abuso corporal y sexual contra la mujer sometida.

El artículo 7.2 e) del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional determina que: “por tortura se entenderá causar intencionalmente dolor o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, a una persona que el acusado tenga bajo su custodia o control [...]”. Desde esta normatividad entre los elementos constitutivos de la tortura no se incluye ni la finalidad del acto-castigo u obtención de información, entre otros, ni la calidad del sujeto activo del ilícito, es decir la participación de un agente del Estado⁵⁰.

En los casos en que efectivamente los agentes del Estado cometan este acto de barbarie, sobre las mujeres que hayan privado de su libertad o las tengan bajo su custodia, es un ilícito de la mayor gravedad, podrían ser responsables del delito de tortura conforme a la definición de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura⁵¹.

⁵⁰, "La jurisprudencia sobre la protección de las mujeres emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra México", Montoya Ramos Isabel, *Revista Penal México*, México, núm. 5, septiembre de 2013-febrero 2014, pág.235

⁵¹ Emitida en Cartagena de Indias, Colombia, suscrita por México el 9 de diciembre de 1985, aprobada y ratificada por el senado de la República y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1º de septiembre de 1987.

“Artículo 3

Serán responsables del delito de tortura:

- a). los empleados o funcionarios públicos que actuando en ese carácter ordenen, instiguen, induzcan a su comisión, lo cometan directamente o que, pudiendo impedirlo, no lo hagan.***
- b). las personas que a instigación de los funcionarios o empleados públicos a que se refiere el inciso a. ordenen, instiguen o induzcan a su comisión, lo cometan directamente o sean cómplices.”***

La Convención emite su propia definición de tortura:

“Artículo 2

Para los efectos de la presente Convención se entenderá por tortura todo acto realizado intencionalmente por el cual se inflijan a una persona penas o sufrimientos físicos o mentales, con fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal, como medida preventiva, como pena o con cualquier otro fin. Se entenderá también como tortura la aplicación sobre una persona de métodos tendientes a anular la personalidad de la víctima o a disminuir su capacidad física o mental, aunque no causen dolor físico o angustia psíquica.”

La argumentación que invoquen las y los AMPF deberá atender a las definiciones que proporciona el DIDH en casos de que encontrar evidencia de tortura sexual en las mujeres detenidas por cualquier elemento de seguridad pública o militar.

4. Características de la tortura sexual⁵²

Para la investigación de este tipo de violencia sexual, se deberá atender a la metodología que aporta el *Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes*, conocido como: Protocolo de Estambul⁵³.

- La tortura sexual empieza por la desnudez forzada, que puede ser un factor constante en las situaciones de tortura.

⁵²*Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes*, Protocolo de Estambul, pp. 215-217

⁵³*Ibidem*, párr. 215, p79.

- La persona nunca es tan vulnerable como cuando se encuentra desnuda y sometida.
- La desnudez aumenta el terror psicológico de todos los aspectos de la tortura pues abre siempre la posibilidad de malos tratos, violación o sodomía.
- Las amenazas verbales, los insultos y las burlas sexuales forman parte de la tortura sexual pues incrementan la humillación y sus aspectos degradantes, todo lo cual forma parte del procedimiento de sometimiento y tortura.
- El toqueteo o manoseo, sin consentimiento, sobre el cuerpo de la víctima, siempre es traumático, cuando es sometida o está privada de su libertad se puede considerar tortura.
- En la mayor parte de los casos interviene un elemento sexual perverso y en otros la tortura se dirige a los genitales.
- La violación se puede cometer con objetos.
- Al traumatismo físico resultante se le añade el maltrato verbal.
- Siempre incluye violación sexual por una o ambas vías.
- Se pueden sumar quemaduras o causar lesiones graves con arma blanca, picos, vidrios, astillas de madera, en la zona pubiana; punta de armas de fuego, introducción de objetos o animales (roedores).
- Graves lesiones en el ano y vagina.
- Mutilación o heridas en los senos.
- El traumatismo puede verse potenciado por el miedo a la violación, dado el profundo estigma cultural que va vinculado a ésta.
- La violación, siempre va asociada al riesgo de las infecciones de transmisión sexual, en particular la causada por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH)⁵⁴. En la actualidad, la única profilaxis eficaz contra el VIH debe aplicarse en las horas que siguen al incidente.
- No hay que descuidar el trauma de un posible embarazo, el temor a perder la virginidad y a quedar infecundas (aun cuando la violación pueda después ocultarse ante un posible marido y el resto de la sociedad).

CAPITULO V. DE LA INVESTIGACION DE LA VIOLENCIA SEXUAL

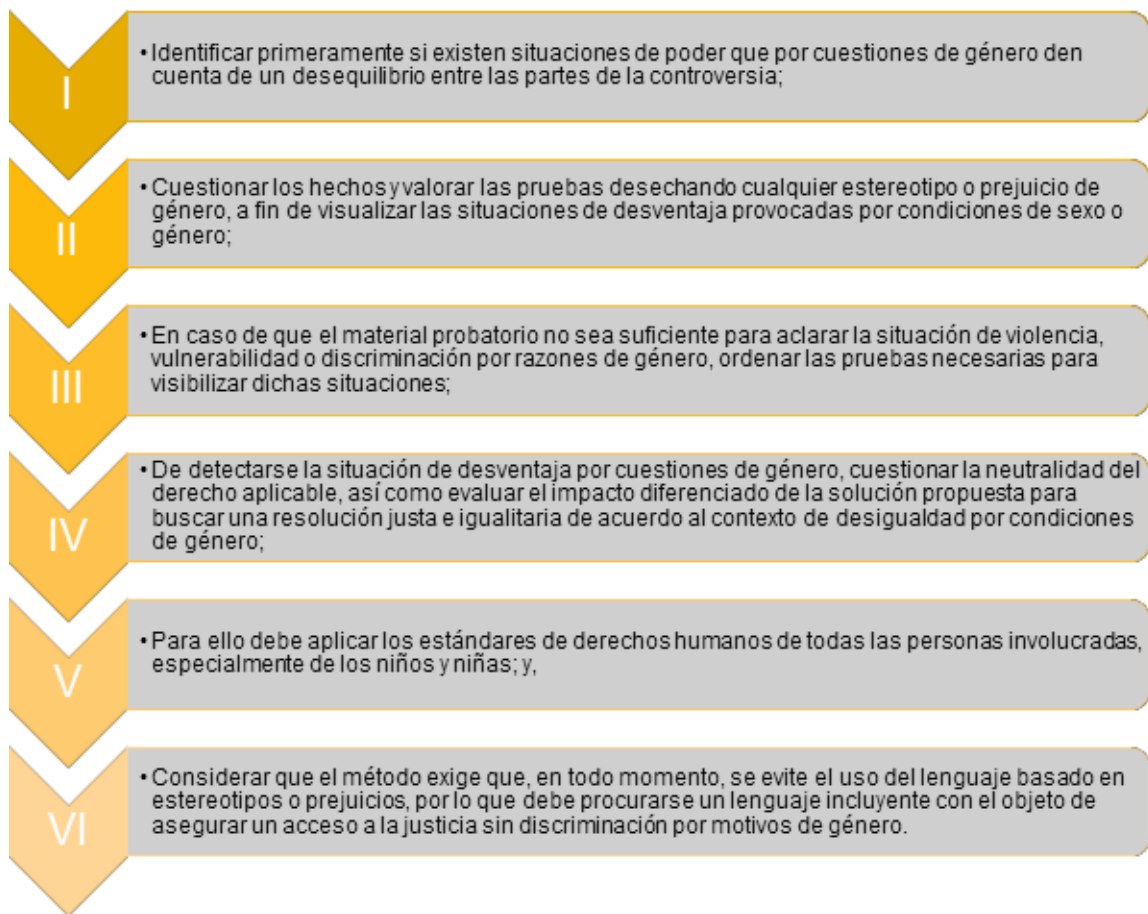
Las autoridades encargadas de desarrollar la investigación de los delitos se regirán por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez, lealtad y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados.

⁵⁴ Citado en el P. Estambul: D. Lunde y J. Ortmann, "Sexual torture and the treatment of its consequences", *Torture and Its Consequences, Current Treatment Approaches*, M. Başoğlu, ed. (Cambridge, Cambridge University Press, 1992), págs. 310 a 331.

1. Consideraciones para analizar objetivamente los casos de violencia contra las mujeres desde la perspectiva de género.

La Corte IDH, ha señalado que ciertas líneas de investigación, cuando eluden el análisis de los patrones sistemáticos en los que se enmarcan ciertos tipos de violaciones a los derechos humanos de las mujeres, pueden generar ineficacia en las investigaciones.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó ciertos elementos⁵⁵ que se deben tomar en cuenta para verificar si existe una situación de violencia o vulnerabilidad que, por cuestiones de género, impida el acceso a la justicia de manera completa e igualitaria para mujeres con relación a los hombres, son puntos importantes para la comprensión de quienes guían la investigación ministerial en casos de delitos de violencia contra niñas y mujeres por razón de género:



2. Reglas mínimas para la investigación ministerial

Además de las obligaciones que le devienen al AMPF de la Constitución y de disposiciones del Capítulo V, artículos del 127 al 131 del CNPP, atenderá a:

Toda diligencia debe ser impulsada de oficio, sin que sean las víctimas y sus familiares quienes tengan la carga de asumir tal iniciativa.

- Investigar con la sensibilidad requerida a las necesidades y condiciones de la víctima.
- Evitar interpretaciones formalistas en materia de violación, es decir: el requisito de que la víctima debía haberse resistido físicamente no es estrictamente necesario.
- Tener siempre en cuenta que la fuerza no es un elemento imprescindible para castigar una conducta sexual no consentida, basta con que haya elementos coercitivos derivados de las circunstancias⁵⁶.
- Que la investigación de los actos sexuales no consentidos, en la práctica, se hace con base tanto en el tipo penal como en una valoración sensible al contexto de la evidencia del caso.

Garantías que deberá proporcionar el AMPF en una investigación penal de cualquier delito cometido con violencia sexual⁵⁷:

- La declaración de la víctima se realice en un ambiente cómodo, privado, digno y seguro que le brinde confianza y protección.
- La declaración de la víctima se registre de forma tal que se evite o limite la necesidad de su repetición.
- Se brinde atención médica, sanitaria y psicológica a la víctima, tanto de emergencia como de forma continuada si así se requiere, mediante la atención cuyo objetivo sea reducir las consecuencias de salud y post-traumáticas de la violación.

⁵⁶ Tomado de Lineamientos Generales INACIPE op. Cit., Apartado B: Investigación del Delito de Violación de Mujeres por Razones de Género.-I. Investigación Ministerial.-1. Objeto de la investigación y obligación de debida diligencia en relación con el delito de violación de mujeres por razones de género. P. 70

⁵⁷ Lineamientos Generales INACIPE, op. cit., p.71

- Se realice inmediatamente un examen médico y psicológico completo y detallado por personal capacitado, sensible, respetuoso y capacitado, incluso de su mismo sexo si la víctima así lo desea, ofreciéndole que sea acompañada por alguien de su confianza;
- Se documenten y coordinen los actos investigativos y se maneje diligentemente la prueba, tomando muestras suficientes, realizando estudios para determinar la posible autoría del hecho, asegurando otras pruebas como la ropa de la víctima, investigando de forma inmediata el lugar de los hechos y garantizando la correcta cadena de custodia, así como dar intervención a peritos en genética forense, para recabar indicios y/o evidencias que se encuentren en cualquier parte del cuerpo de la víctima.
- Se brinde acceso y asistencia jurídica gratuita a la víctima durante todas las etapas del procedimiento.

La noticia criminal ⁵⁸

Existen fuentes formales y fuentes informales para la obtención de la noticia criminal. Las fuentes formales son la denuncia y la querrella, en tanto que las fuentes informales constituyen cualquier otro método de obtención de la noticia criminal⁵⁹.

De conformidad con el artículo 21, párrafo 1, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tanto el Ministerio Público como los cuerpos policiacos están facultados para recibir la noticia criminal. En todo caso, quien recabe la noticia criminal deberá reunir los siguientes datos:

Consultar: Anexo I, Entrevista a la víctima

- a. Acta de entrevista a quien denuncia.
- b. Formato de reserva de datos personales.
- c. Acta de lectura de derechos a la víctima u ofendido.

⁵⁸ Basado en contenido del *Protocolo de investigación de delitos sexuales cometidos contra menores*, Protocolos de investigación criminal que contiene la página web de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, Secretaría de Gobernación, página consultada el 11 octubre de 2014, http://www.setec.gob.mx/es/SETEC/Protocolos_de_Investigacion_Criminal_

⁵⁹ El art. 131, fracción II del CNPP, amplía el espectro de las vías para recibir las denuncias, incluso a través de medios digitales y anónimos.

El acta de entrevista al denunciante, debe contener, al menos, los siguientes requisitos:

- a. Fecha, lugar y hora donde se realiza la entrevista.
- b. Datos personales de la o el entrevistado (aunque se pueden mantener en reserva).
- c. Descripción de los hechos, conteniendo información que responda a: cuando, como, donde, quienes, entre otros datos circunstanciales.
- d. Datos de quien entrevista.
- e. Firmas de quienes participan.
- f. Observaciones y anexos.

Quienes lleven a cabo la entrevista, deben conducirse con respeto y trato amable.

2.1 Niñas o adolescentes o personas que no comprendan el significado del hecho o no puedan resistirlo.

Tratándose de personas menores de edad, cuando presenten la denuncia como víctimas de algún delito de naturaleza sexual, quien entrevista deberá tomar en consideración su edad y/o etapa de desarrollo intelectual de la niña o adolescente.

En este sentido, se debe preguntar sin culpabilizar a la víctima. Informarle claramente las razones por las cuales se hace necesaria la intervención ministerial.

En el caso de niñas o adolescentes víctimas de violación equiparada, estupro, abuso sexual, lenocinio, trata de personas, turismo sexual, pornografía infantil, tienen el derecho al resguardo de su identidad y demás datos personales (art. 108, fracción XXVI CNPP). La reserva de datos personales, se funda de conformidad con los artículos 16, párrafo 2 y 20, apartado C, fracción V de la Constitución, en la medida de lo posible, evitará todo contacto físico, visual o auditivo entre víctima y el imputado.

En el caso de violación equiparada, el estupro y el abuso sexual, en el que la víctima es una niña, niño o adolescente, el bien jurídico protegido es el normal desarrollo psicosexual y la libertad sexual. Este último se trata de un bien jurídico indisponible porque la víctima menor de doce años de edad no puede disponer de su libertad sexual todavía, por ello, aunque sea la propia víctima la que otorgue su consentimiento para la realización del hecho, aún con ello el tipo penal en cuestión se configura.

En el caso del abordaje de la violencia sexual cometida contra menores de edad, se debe cumplir con la sensibilidad y observación de sus derechos humanos⁶⁰, anteponiendo

⁶⁰ Disposición del último párrafo del artículo 109 CNPP.

el interés superior de la niñez como lo dispone la Convención de los Derechos del Niño, la Ley de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.

Con base en el principio de interés superior de la niñez, el Ministerio Público debe garantizar que si la víctima es menor de edad, además deberá ser atendida en todo momento por personal especializado en psicología y por el personal médico especializado en la interpretación de los signos de violencia sexual. De igual forma, debe asegurarse de que la persona menor de edad cuente con la atención especializada que necesita, y, en su caso prever que esté presente su padre, su madre o alguien de confianza que cuide del menor, considerando en todo momento su grado de desarrollo, dinámica familiar, las características y normas culturales. Deberá garantizarse que en todo momento la víctima este acompañada, y si esto no fuera posible o no lo tuviera, se designará a alguien que le asista, de alguna institución, como por ejemplo el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia⁶¹.

Las y los niños son personas titulares de derechos humanos, merecen un trato digno y diferente, deben ser tomados en cuenta con seriedad y respetadas sus preguntas y respuestas, en el ejercicio de sus derechos se deberá tomar en cuenta los distintos factores que les afectan de manera especial la pobreza, la marginación, pertenencia a grupos indígenas, orientación sexual, condición económica, retraso educativo, entre otros.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en febrero 2012 editó el *Protocolo de Actuación para quienes Imparten Justicia en casos que Afecten a Niñas, Niños y Adolescentes*, su lectura es aleccionadora para conocer las principales características de la infancia y sus implicaciones en un proceso jurídico.

Tener en cuenta que en lo que respecta al trauma, con frecuencia la persona menor de edad no expresa sus pensamientos y emociones verbalmente sino más bien en su comportamiento. El grado en que los menores de edad puedan verbalizar sus pensamientos y afectos depende de su edad, su grado de desarrollo y otros factores, como la dinámica familiar, las características de la personalidad y las normas culturales⁶².

⁶¹. Lineamientos INACIPE, op. cit. p.75

⁶². *Lineamientos Generales*, INACIPE, op. cit., Apartado B, Investigación del delito de Violación de Mujeres por Razones de Género. punto 13.

2.2 Reserva de datos

La información de identidad de las víctimas, debe resguardarse en sobre cerrado donde se agregue el formato de reserva de datos, contener el eslabón de protección de datos personales, cuyos elementos son los siguientes:

- a. Los datos de la averiguación previa o carpeta de investigación o número de informe.
- b. Los datos de quien entrega: nombre, firma, fecha, lugar y hora.
- c. Los datos de quien recibe: nombre, firma, fecha, lugar y hora.

2.3 El formato de reserva de datos personales debe contener los siguientes aspectos:

- a. Fecha, lugar y hora donde se practica la diligencia.
- b. Causa y fundamento de la reserva de datos.
- c. Datos de localización.
- d. Datos de identidad.
- e. Datos de quien actúa.
- f. Firmas de quienes intervienen.

2.4 Sobre las medidas de protección, providencias precautorias y medidas cautelares

El personal sustantivo actuará tomando en cuenta, de conformidad con los principios pro persona y el de máxima protección (artículo 5 y 40 de la LGV), lo que en base a los estándares internacionales sea aplicable.

Las mujeres víctimas tienen derecho a la protección del Estado, incluido el bienestar físico y psicológico, y la seguridad del entorno con respeto a su dignidad y privacidad, con independencia de que se encuentren dentro un procedimiento penal o de cualquier otra índole. Lo anterior incluye el derecho a la protección de su intimidad contra injerencias ilegítimas, así como derecho a contar con medidas de protección eficaces cuando su vida o integridad personal o libertad personal sean amenazadas o se hallen en riesgo en razón de su condición de víctima y/o del ejercicio de sus derechos.

La o el AMPF deberá cumplir con esta obligación, con carácter inmediato y adoptar o solicitar las medidas precautorias y/o medidas cautelares que sean necesarias, considerando o evaluando el riesgo, para:

- Evitar que la víctima sufra alguna lesión o daño
- Cuando se encuentre amenazada en su integridad personal o en su vida o a su familia
- Existan razones fundadas para pensar que estos derechos están en riesgo

- Cuando el agresor pertenezca a alguna banda delictiva
- Cuando la víctima haya sido incomunicada previamente a la comisión del delito
- Cuando el agresor tenga antecedentes de otras agresiones, comisión de ilícitos cometidos con violencia
- Cuando el agresor sea integrante de fuerzas armadas y/o disponga de armas
- Cuando la violencia sexual haya sido cometida por más de un agresor
- Las medidas se deben registrar en las bases de datos correspondientes la información desglosada
- La o el AMPF debe evaluar el tiempo necesario de la duración de las medidas con relación a la evaluación del riesgo y la necesidad de seguridad y protección de las niñas y mujeres víctimas, aplicando las disposiciones de la LGAMVLV y la LGV.

El respeto a los derechos humanos de las víctimas implica que quienes tienen la responsabilidad de investigar un hecho de violencia sexual, independientemente del tipo de delito que se trate, además de la habilidad de la investigación científica y metodológica, también adquieran la sensibilidad de entender el proceso por el que atraviesa una mujer o niña víctima de esta violencia sexual, que es un acto violento, degradante, invasivo que tiene raíces de discriminación por género, ante el cual la víctima sometida sufre en el momento del acto, pero además tiene el riesgo de permanecer con secuelas graves físicas y psicológicas, de difícil recuperación sino recibe el apoyo del Estado a través de la debida atención⁶³, servicios psicológicos, medidas de protección, albergues, acceso a la justicia con debida diligencia y reparación del daño, entre otros, de ahí la importancia de la adopción de medidas de protección.

2.5 Medidas de apoyo asistencial

Las medidas de apoyo implican asistir a las víctimas en sus necesidades inmediatas. En caso que lo amerite, se podrá contar con los servicios que brinda el Refugio Especializado de la PGR; no obstante, deberá explorar en las dependencias o instituciones públicas o privadas encargadas de brindar servicios de salud, educación, trabajo, albergue o refugio, asistencia y re-inclusión social, trámites migratorios para regular su estancia en el país, entre otros temas, según lo estime necesario en el caso concreto, con la finalidad de atender necesidades especiales de personas ofendidas y familiares de las víctimas por sus condiciones propias de vulnerabilidad. Para ello podrá fundarse en las disposiciones del Título Cuarto de la Ley General de Víctimas.

⁶³Poner especial atención a proporcionar información sobre servicios médicos de contracepción, prevenir infecciones y enfermedades sexualmente transmitidas como hepatitis y VIH.

En cuanto a protección y derechos, es importante tomar en cuenta la disposición del último párrafo del artículo 137 del CNPP que remite, para todos los casos de delitos cometidos con violencia de género, a las normas de la LGAMVLV.

2.6 Sobre protección de testigos⁶⁴

De igual forma, deberá adoptar las medidas adecuadas para evitar todo daño a las víctimas, sus familiares y testigos, ofreciendo a las persona la posibilidad de rendir su testimonio a través de dispositivos que distorsionen la imagen o la voz, o por televisión en circuito cerrado, debiendo cuidar en todo momento que no se violen los derechos del imputado⁶⁵.

En el caso de testigos, de acuerdo con el *Protocolo de Estambul*, si se concluye que existe un temor razonable de persecución, acoso o agresión a cualquier testigo o posible testigo, puede considerarse conveniente recoger las pruebas en lugar cerrado, mantener confidencial su identidad, utilizar sólo aquellas que no lo expongan y adoptar otras medidas adecuadas. Por lo tanto, las personas en calidad de testigos, tal como lo señalan las normas internacionales, serán protegidas de actos o amenazas de violencia o de cualquier formade intimidación que pueda surgir como resultado de la investigación.

Cuando el hecho de hablar con un investigador pueda poner en peligro a alguien, la persona que realice la entrevista buscará un lugar en el que pueda mantener la privacidad, seguridad y libertad de quien depone. Esta prerrogativa la refuerza el Protocolo de Minnesota⁶⁶, al establecer que el gobierno, a través de las instancias correspondientes debe proteger a las personas denunciantes, testigos, familiares o cualquier otra que tenga relación con el caso que se investiga.

2.7 Obligación del Ministerio Público de verificar la ejecución de la cadena de custodia⁶⁷.

Es una parte muy importante en la investigación en casos de violencia contra las mujeres particularmente en violencia sexual, la experiencia arroja resultados negativos en el sentido quede en esta diligencia en la que usualmente se cometen errores u omisiones;

⁶⁴ Consultar la Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal; DOF. 8 de junio de 2012

⁶⁵ Citado en Lineamientos Generales op. cit. , p12. Seguridad y auxilio a víctimas, personas ofendidas y testigos.

⁶⁶ *Manual sobre Prevención e Investigación Eficaces de las Ejecuciones Extralegales, Arbitrarias o Sumarias (Protocolo de Minnesota)*, ONU 1991, Nueva York. Seguridad y auxilio a personas ofendidas y testigos, p.145

⁶⁷ Lineamientos INACIPE, op.cit.,p. 76

deficiencias que acarrea responsabilidad para las y los operadores, por lo que se debe prestar especial atención a la constitución y aseguramiento de la cadena de custodia.

El personal ministerial al cargo de la investigación, se cerciorará de que se han seguido los procedimientos para preservar los indicios o evidencias y debe ordenar la práctica de las diligencias periciales que resulten procedentes, desde una visión interdisciplinaria que le permita recabar las pruebas que conduzcan a una investigación que concluya que el delito cometido que se indaga fue cometido por razones de género.

La custodia por parte del Ministerio Público de la información o datos de prueba recolectados durante la investigación, debe ser realizada con la mayor diligencia, a fin de evitar cualquier pérdida de información.

En caso de que la recolección levantamiento y traslado de los indicios no se haya hecho como lo señalan las disposiciones legales y los procedimientos respectivos, la o el AMPF lo asentará en los registros de la investigación y, en su caso, dará vista a las autoridades que resulten competentes para efectos de las responsabilidades a que haya lugar.

El procedimiento de cadena de custodia deberá regirse por los Acuerdos A/002/10 y A/78/2012, emitido por el Procurador General de la República, para preservar los indicios o evidencias en el lugar y la forma en que se encuentren y solicitará la investigación de los hechos, localización y presentación de testigos y probables responsables; y, por la normatividad aplicable en cada entidad.

2.8 Establecimiento de la teoría del caso

La construcción de la teoría del caso, incluye agotar las distintas hipótesis o líneas de investigación que elabore el AMPF, para saber cuál de esas estrategias puede tener mayor viabilidad al momento de consignar la averiguación previa, o de judicializar la carpeta correspondiente (en los casos en que esté vigente el CNPP).

La teoría del caso deberá orientarse a acreditar, cuando menos los siguientes aspectos:

- a. El tipo penal que atribuye al sujeto activo.
- b. El grado de la ejecución del hecho (para saber si el hecho típico fue consumado o se quedó en tentativa).
- c. La forma de intervención (para conocer si el sujeto es autor o partícipe del hecho típico que se le atribuye).
- d. La naturaleza de la conducta (normalmente la naturaleza de la conducta de los delitos sexuales consiste en una acción dolosa)

- e. Los rasgos de violencia de género con que el agresor motivó la ejecución del ilícito

2.9 Caso de denuncias extemporáneas (no inmediatas)

En los casos de violencia contra las mujeres y específicamente en la violencia sexual, obtener y valorar las pruebas es una tarea complicada porque el investigador y la víctima se enfrentan a obstáculos materiales y formales, que se acrecientan cuando la denuncia no se presenta inmediatamente; sumado a que la característica principal de la comisión de estos ilícitos es que, en su inmensa mayoría, se cometen intramuros, sin testigos, por otra parte, en ocasiones el agresor es un conocido; sobre todo en el caso de menores de edad, en consecuencia la víctima no tiene la capacidad de denunciar a tiempo, en virtud del lazo consanguíneo que mantienen, lo que incrementa la vulnerabilidad de las víctimas y dilata, en muchos casos, que denuncie oportunamente.

Suponer que una víctima debe tener la fortaleza, el apoyo y la autonomía para denunciar inmediatamente a su violador, sobre todo cuando son menores de edad, es una forma de re- victimización. Hay casos en que los jueces/as desestiman las pruebas aportadas cuando la niña ha convivido por años con su violador dentro de la familia, y puede haber “naturalizado” las agresiones y posteriormente es capaz de iniciar vida sexual con su pareja, cohabitando con su agresor, sin haberlo denunciado. En estos casos la argumentación para defender la teoría del caso debe incluir fundamento de DIDH sobre la obligación de las y los juzgadores de valorar las condiciones de desigualdad, sumisión, discriminación por género y violencia psicológica que impiden la reacción inmediata de las víctimas al vivir continuamente situaciones de violencia que limitan su acceso a la justicia.

Ante el transcurso del tiempo, se pueden diluir las evidencias físicas, pero difícilmente las huellas de afectación psicológica, por lo que cobra mucha relevancia este aspecto en los casos de denuncias extemporáneas. Muchas veces el dictamen pericial en materia psicológica es lo único con que se puede contar como elemento probatorio para acreditar el daño o afectación anímica; del resultado de este dictamen se tiene que motivar la argumentación de cómo repercutió negativamente, la comisión del ilícito, en el proyecto de vida de la víctima, tanto en mujeres adultas como en niñas o adolescentes. La pericial en psicología es importante para determinar la consistencia entre el relato de la víctima y los síntomas que presenta, aún transcurrido el tiempo. No en todos los casos el trauma puede ser tan fuerte y doloroso que lo puede reprimir.

La valoración sobre estas periciales debe ser con un enfoque de género que evite prejuicios y estereotipos cuyo resultado sería desestimar las pruebas psicológicas.

Además, es oportuno apoyarse en valoraciones socio-ambientales del entorno coercitivo que crea el agresor dentro de la familia o lugar de convivencia, así como la violencia psicológica que se puede apreciar generada en todo el entorno en que vivió la víctima por años, es muy útil en los casos en que la madre o algún familiar fue cómplice o propiciador

por silencio, miedo o victimización, es útil ordenar la práctica del dictamen de antropología social.

En sus alegatos, es obligación de las y los AMPF combatir la interpretación estereotipada de las pruebas, en las que los jueces cuestionan o dan más valor a la conducta de las víctimas⁶⁸.

2.10 Las pruebas indiciarias

Precisamente por las circunstancias de contexto en que se cometen estos ilícitos, las pruebas indiciarias o circunstanciales muchas veces es lo único que se tiene.

En el caso de Fernández Ortega, la Corte indicó que la violación sexual es un tipo particular de agresión caracterizada por producirse en situaciones solitarias en las que solamente se encuentra la víctima y el agresor; por lo tanto “no se pueden esperar pruebas gráficas o documentales” y, por ello, la declaración de la víctima constituye una prueba fundamental sobre el hecho.

Es útil utilizar la prueba circunstancial, los indicios y las presunciones para acreditar los hechos y sostener una sentencia, siempre que de ellos puedan inferirse conclusiones consistentes sobre los hechos⁶⁹.

2.11 En el caso de que las víctimas no deseen declarar

En muchas ocasiones la resistencia de las víctimas a declarar tiene que ver con las condiciones traumáticas del evento, la desconfianza o temor ante las instituciones, o la vergüenza que sienten, o la falta de ciertas garantías como el resguardo de su identidad, de ahí la importancia de que las autoridades que intervengan cumplan con su obligación de otorgar esas garantías e informar con respeto y de manera suficiente a las víctimas sobre sus derechos de protección en casos de violación, menores de edad o cuando a juicio del juzgador sea necesario para su protección; por lo que es deber del AMPF invocar

⁶⁸ Se tiene que tener cuidado para no aumentar a la afectación psicológica o anímica de las víctimas consecuencia de la agresión sexual, con una nula o deficiente atención o respuesta institucional, sobre todo en algunas regiones rurales o distantes de los centros de atención, cuando las mujeres se enfrentan a múltiples obstáculos de tiempo, distancias y disponibilidad de servicios médicos o una agencia del MP cercana, lo que perjudica la obtención de prueba científica y la coordinación eficaz de las instituciones para iniciar las investigaciones.

⁶⁹ Sentencia Rosendo Cantú, CortelDH, op. cit. párrf. 102

Estas excepciones al principio de publicidad de conformidad con la Constitución, la LGV artículo 12, fracción VI y el artículo 64 del CNPP, bajo el principio de la máxima protección conforme a DIDH.

De igual manera, la o el operador puede utilizar los mensajes claves que aquí se incluyen en este protocolo a fin de establecer un acercamiento de confianza con la víctima y sus familiares; es importante que se espere a que las víctimas estabilicen su estado anímico y entrevistarlas en lugares privados, cumpliendo con las directrices de la entrevista que aquí se incluyen.

Por ello es importante que se aliente la adopción de medidas que resulten adecuadas para mitigar los efectos negativos del delito (victimización primaria). Es responsabilidad de las y los AMPF procurar que el daño sufrido por la víctima del delito no se vea incrementado como consecuencia de su contacto con el sistema de justicia (victimización secundaria)⁷⁰. Se debe cumplir con las directrices mínimas de abordaje para estos casos que procuren tender un puente de confianza y buena fe para con las víctimas.

La negativa o reticencia de la víctima para aportar datos no exime al AMPF de su obligación de impulsar las investigaciones y allegarse de todas las pruebas para acreditar los hechos, con o sin cooperación de la víctima y sus familiares, por lo que el principio de la debida diligencia se debe cumplir en estos casos con mayor suficiencia y constancia.

2.12 Entrevista a través de la Cámara de Gesell.

Para evitar la re-victimización, y el desgaste a las víctimas, es muy útil acudir a la entrevista a través de la Cámara Gesell⁷¹. La cual esencialmente consiste en dos habitaciones con una pared divisoria y un vidrio de gran tamaño que permite ver desde una de las habitaciones lo que ocurre en la otra, pero no al revés. Particularmente, en el caso de menores de edad, el fin es observar su conducta, sin que éstas se sientan presionadas o incómodas por la mirada de una/un observador.

Este mecanismo, tiene una doble función; por una parte contribuye a reducir el daño que sufre la víctima por el recuerdo del evento relatado, ya que se realiza una entrevista en calidad de prueba para el resto del proceso, conducida por una/un psicólogo. Y por otra, garantiza el derecho a la defensa del imputado, ya que sus abogada/os o perita/os pueden estar presentes durante el procedimiento.

⁷⁰100 Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, aprobada en la XIV Cumbre Judicial Iberoamericana, en febrero de 2008.

⁷¹ Fue creada por el estadounidense Arnold Gesell (1880 – 1961), psicólogo, quien se dedicó a estudiar las etapas del desarrollo de niñas y niños.

Una de las características de esta estrategia es que contribuye indefectiblemente a resguardar el testimonio de quienes son entrevistada/os bajo condiciones controladas que se esperan favorezcan su espontaneidad. Ello permite la videograbación simultánea de la entrevista conducida por una/un experto psicólogo, con énfasis en el testimonio del evento vivenciado o percibido.

Es útil para conformar prueba anticipada (conforme bases del CNPP)⁷², y la re-victimización, porque se pretende evitar la sobreexposición a interrogatorios, entrevistas o procedimientos que re-pregunten y hagan pasar a la víctima por doble o triple comparecencia para narrar los hechos.

Sobre los pasos para la entrevista a través de Cámara de Gesell, favor de remitirse al Anexo 2.

2.13 Actuaciones básicas con respecto al probable responsable⁷³

Si el probable responsable se encuentra a disposición del Ministerio Público, se deberá:	
<p>Solicitar al personal médico legista dictamine la integridad física antes y después de declarar, fe ministerial de los mismos e incorporar los dictámenes al expediente.</p> <p>Solicitar el examen andrológico, ante la negativa, pedir autorización judicial</p> <p>Practicar las pruebas anticipadas necesarias</p> <p>Recabar la ropa del imputado, identificarla y embalarla sobre la cual se pedirán exámenes periciales necesarios</p>	<p>Durante este examen es conveniente que el ministerio público solicite al probable responsable que, de manera voluntaria, proporcione muestras de fluidos, vello o pelo, los que deberán ser analizados y comparados con los encontrados en la víctima y en el lugar de los hechos. Lo que puede constituir una prueba importante para determinar la probable responsabilidad del sujeto activo. Ante su negativa, solicitar autorización judicial de inmediato.</p> <p>Solicitud de intervención de Servicios Periciales en la especialidad de química para búsqueda de fosfatasa ácida, líquido seminal y espermatozoides; así como para toma de muestra del surco balano prepucial (búsqueda de moléculas con <i>cuerpo de Barr</i>) y para muestra de folículos pilosos;</p>

⁷² 100 Reglas de Brasilia, op. cit. Se considera *en condición de vulnerabilidad* aquella víctima del delito que tenga una relevante limitación para evitar o mitigar los daños y perjuicios derivados de la infracción penal o de su contacto con el sistema de justicia, o para afrontar los riesgos de sufrir una nueva victimización. La vulnerabilidad puede proceder de sus propias características personales o bien de las circunstancias de la infracción penal. Destacan a estos efectos, entre otras víctimas, las personas menores de edad, las víctimas de violencia doméstica o intrafamiliar, las víctimas de delitos sexuales, los adultos mayores, así como los familiares de víctimas de muerte violenta

⁷³ Lineamientos, op.cit., p.83

Solicitar examen toxicológico, fe ministerial del mismo e incorporar el dictamen al expediente.	
Solicitar a la o el perito en psicología o psiquiatría, determine la personalidad del probable responsable y emita el dictamen de la entrevista con éste; dar fe ministerial de los mismos, anexándose al expediente.	<p>El dictamen pericial, en materia de psicología, deberá estar orientado a señalar la personalidad del personas agresoras.</p> <p>Estos dictámenes deben ser considerados como parte de la declaración del probable responsable, que seguramente ampliará las circunstancias en las que se cometió el hecho.</p>
Solicitar la intervención de personal pericial en fotografía y dactiloscopia para la identificación del probable responsable.	Ordenar la preservación del lugar de los hechos, supervisar la continuidad debida de la cadena de custodia, particularmente sobre evidencia biológica (A/002/10) y la perfecta conservación de la misma.
Recabar la documentación necesaria para acreditar la calidad del probable responsable cuando hubiera relación de parentesco consanguíneo, civil o por afinidad.	
Identificación del probable responsable a través de cámara Gesell u otro medio idóneo que permita no poner en riesgo a la víctima.	Cumpliendo el protocolo de operación de la Cámara Gesell
Declarar al probable responsable en compañía de su abogada/o o persona de su confianza y hacer de su conocimiento los derechos que le asisten.	
Solicitar a la Policía Federal Ministerial la investigación de los antecedentes del probable responsable, así como de los hechos.	Debemos recordar que un agresorsexual tiende a repetir estas conductas y que probablemente sus víctimas se encuentran en círculos cercanos. Establecer redes delincuenciales

2.14 Investigación del lugar del hecho y/o del hallazgo⁷⁴

Deberá de existir constancia documental en orden cronológico de las acciones realizadas:

- Sobre la identidad y datos de las personas que descubrieron a la víctima, así como su participación en el lugar del hecho y/o del hallazgo, señalar si hubo modificaciones del lugar por parte de los testigos, y en caso de que movieran a la víctima por cualquier motivo, establecer la causa.
- Sobre la preservación y conservación del lugar de los hechos o del hallazgo.
- Fotografiar el lugar (interior y exterior), así como todo indicio o prueba física.
- Especificar las condiciones climáticas del lugar de los hechos o del hallazgo al momento de realizar la investigación y de ser posible las previas al arribo, así como la posible existencia de fauna nociva y de todo dato que pudiese alterar el determinar la posible hora de los hechos.
- Deben anotarse los factores que sirvan para determinar la hora de la violación, y en su caso, de la muerte.
- Dejar constancia fotográfica de la posición del cadáver y de la condición de la vestimenta, al igual que del entorno del lugar de los hechos y/o del hallazgo.
- Analizar si existen indicios de tortura utilizando los criterios establecidos en el “Manual para la Investigación y Documentación Eficaces de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes” (Protocolo de Estambul), debiendo tomarse en cuenta de manera enunciativa y no limitativa.

En caso de que el médico forense detecte signos de tortura, se realizarán las acciones correspondientes para investigar dicho supuesto.

3. Reglas mínimas para la investigación policial

La policía siempre debe regirse bajo la conducción y mando del ministerio público y tendrá que cumplir con las obligaciones que determinan la Constitución mexicana, las leyes y sus reglamentos referentes a la actuación policial, así como lo dispuesto en los artículos 21 de la Constitución; 127, 131 fracciones III, VII y VIII, 132 del CNPP (en cuanto se determine su inicio de vigencia), la Ley Orgánica de la PGR y tendrá que actuar bajo parámetros de respeto a los DIDH aplicables a su responsabilidad.

A la policía de investigación corresponde efectuar las diligencias de investigación cumpliendo con el respeto a los derechos humanos de víctimas y presuntos responsables, con la debida diligencia, legalidad, pertinencia, suficiencia y contundencia en las pesquisas y recolección de indicios y evidencias.

⁷⁴ Lineamientos Generales, INACIPE, op.cit.pp.92,93

3.1 Obligaciones de la policía de investigación.

La reforma al sistema de justicia penal reconduce la actividad de la policía para diversificar sus funciones y convertirla en una auténtica fuente de investigación⁷⁵. A la operatividad propia de su actividad, hay que añadir un enfoque jurídico y un incremento en el grado de especialización, siendo que el catálogo de sus obligaciones la ubica en distintos ámbitos y momentos de la investigación, siempre sometida a la estricta conducción, orientación y vigilancia del Ministerio Público.

En el marco operativo–policial hay actividades específicas que sujetan a la policía a cumplir con sus obligaciones en el respeto a los derechos humanos de víctimas, imputados y testigos y lo dotan de legalidad, como lo son, por un lado, la obligación de mantener informado al Ministerio Público del inicio, desarrollo y resultados de toda actuación o diligencia que se practique en la etapa de investigación del delito, mientras que, por el otro, el deber de dejar constancia o integrar en el registro de la investigación toda actuación o diligencia que en esta fase se realice.

Como se verá a continuación, dichas obligaciones forman parte de un amplio catálogo de obligaciones que la reforma al nuevo sistema de justicia penal impone a la policía de investigación. Particularmente en la fase de investigación, sus responsabilidades pueden clasificarse del siguiente modo⁷⁶:

- i. Actividades internas de coordinación y de constancia o registro de las actuaciones;
- ii. Actividades operativo–policiales de protección y de investigación, y
- iii. Actividades técnicas de identificación y protección de evidencias o indicios.

3.2 Conocimiento del hecho⁷⁷.

Antes de trasladarse a la investigación de campo, el personal de la Policía Federal Ministerial o de investigación, deberá recabar y asentar en una bitácora la información siguiente:

- ¿Cómo se tiene conocimiento del hecho posiblemente constitutivo del delito?

⁷⁵Protocolo de investigación de delitos sexuales, SETEC. op. cit., p. 40

⁷⁶ Protocolo de investigación de delitos sexuales. SETEC. op. cit. pp. 40-51

⁷⁷ Lineamientos Generales, INACIPE, op.cit. pp.84,85

- Nombre de quien notifica el hecho posiblemente constitutivo del delito y medio utilizado para informar.
- Hora de recepción de la noticia.
- Ubicación y características del lugar de los hechos y/o del hallazgo y datos de referencia.
- Condiciones ambientales y geográficas del lugar de los hechos.
- Número de elementos que se trasladarán al lugar de los hechos.

3.3 Preservación y conservación, inmediata del espacio físico denominado: lugar del hecho.

Consiste en la preservación y conservación del lugar de los hechos y/o del hallazgo; cuando la Policía Federal Ministerial arribe antes que el Ministerio Público, se deberán realizar las acciones conducentes de acuerdo a la “Guía Básica para la Preservación del Lugar de los Hechos” conforme a los acuerdos A/002/10 y A/078/12.

3.4 Disposiciones policiales de carácter operativo en la investigación.

La Policía Federal Ministerial en el ámbito de su competencia deberá:

- Recibir la denuncia de hechos presentada por la víctima o por cualquier persona a efecto de iniciar de manera inmediata la investigación respectiva e informarle en breve y de manera oportuna al AMPF.
- Atender a la víctima, denunciante o personas ofendidas de forma respetuosa, con diligencia, respeto a su dignidad y derechos humanos, imparcialidad y rectitud.
- Evitar juicios sobre la vida privada o conducta de las mujeres víctimas.
- Evitar cuestionamientos fincados en los estereotipos de género a las víctimas.
- Informar a la víctima, denunciante o personas ofendidas sobre el procedimiento a seguir durante la investigación, con mucha cautela deberá informarle de la necesidad de que la víctima no mude de ropa, no se bañe y la importancia de que comparezca lo más pronto posible ante el Ministerio Público.
- Trasladarse inmediatamente al lugar de los hechos, para estar en posibilidad de determinar la situación de la víctima, localizar testigos, objetos y datos de utilidad para la investigación.
- Asegurar o proteger, durante la cadena de custodia, los indicios, evidencias, instrumentos, objetos o productos del delito, así como aquellos bienes en los que existan huellas o datos que puedan tener relación con el hecho. Se debe evitar que se alteren, destruyan o desaparezcan.

- Realizar la aprehensión inmediata en caso de flagrancia.
- Realizar las acciones de protección inmediatas que requieran las víctimas.
- Registro de todas sus actuaciones, llevando el control y seguimiento que proceda. Guardar la secrecía de la información.
- Reportar de inmediato o en forma oportuna, al AMPF al cargo, de los resultados de sus investigaciones y las vertientes de las líneas de investigación que pudiera descubrir en el transcurso de sus actuaciones en campo.
- En todas sus actuaciones cumplir con la incorporación del enfoque de género.

4. Reglas mínimas para la intervención pericial.

La intervención pericial, en caso de investigación de la violencia sexual, debe cumplir estrictamente los protocolos científicos-técnicos aplicables a cada especialidad, el propósito de este instrumento es aportar los elementos de la ciencia y metodológicos para incorporar el enfoque de género, sea en la entrevista, análisis, evaluación de resultados y en el procedimiento aplicado para emitir sus dictámenes, a fin de considerar las directrices aquí contenidas para casos de violencia sexual en agravio de niñas, adolescentes y mujeres; por lo que las periciales incluidas son enunciativas y no limitativas.

En tanto a la perita o el perito psicóloga/o, su función se limita a explorar en su intervención pericial a través del estudio psicológico reacciones, alteraciones, daño, secuelas psicológicas, síndromes y trastornos más frecuentes ante el impacto de la violencia sexual de acuerdo a la temporalidad del evento y la fecha de intervención. Identificar las conductas que la persona refiera haber experimentado respecto al hecho investigado, sin pronunciarse para calificar penalmente dichas conductas y de esta manera con su dictamen coadyuvar al Ministerio Público a fundamentar los elementos de tipo penal:

La suficiencia, número y oportunidad de la realización de diligencias para acreditar las razones de género en la comisión de ilícitos afectados por violencia contra las mujeres, es responsabilidad de cada operador del sistema.

El personal pericial debe conducirse, en lo general, bajo los siguientes lineamientos:

1. Personal del mismo sexo.- Se reitera que es derecho de las mujeres víctimas de agresiones sexuales que personal del mismo sexo sea quien la revise y entreviste⁷⁸. En los casos que por la urgencia de las diligencia o por la disponibilidad de personal, no se pueda ofrecer esta circunstancia, se le dará a conocer que puede solicitar que otra persona de su mismo sexo esté presente en la sala de exploración médica, si es que no cuenta con una persona de su confianza en ese momento para tal fin. Dado el carácter delicado de la investigación en una agresión sexual, se le debe informar que puede estar acompañada en las

revisiones por una persona de su elección.

2. Si se utiliza una persona intérprete⁷⁹, puede al mismo tiempo desempeñar el papel de acompañante. Es preciso que la víctima se sienta cómoda y relajada antes del examen forense. Deberá realizarse una minuciosa exploración física, junto con una meticulosa documentación de todos los signos físicos observados, con indicaciones de tamaño, ubicación y color de los elementos pertinentes y, siempre se procurará fotografiar estos elementos y se tomarán muestras para su examen.
3. Sensibilidad del personal.- La sensibilidad para atender estos casos de violencia sexual es fundamental e indispensable para el logro de que la víctima coopere con las investigaciones y no se vulneren sus derechos humanos; preservar la confidencialidad y el respeto a la intimidad de las víctimas es responsabilidad del personal pericial. En ningún caso se cuestionará la conducta de la víctima.
4. Consentimiento informado.- Entre los deberes del personal pericial figura el de obtener el consentimiento informado y voluntario para proceder al reconocimiento, entrevista o cualquier otra diligencia que involucre la participación de la víctima. El personal pericial deberá informar siempre de la manera más comprensible y con toda claridad a la víctima sobre los procedimientos de evaluación, revisión física y su importancia para la investigación.
5. La intervención pericial se solicita a través del AMPF. Las especialidades forenses que intervendrán y los tipos de intervención que se realizarán, dependerán de las necesidades y circunstancias del caso en concreto, para una investigación con perspectiva de género es importante considerar los aspectos antropológicos, sociales y culturales sobre la violencia de género en el caso en particular.
6. Sin hacer a un lado sus conocimientos científicos y técnicos, el personal pericial que intervenga deberá observar una conducta y lenguaje con apego a la perspectiva de género en todo momento.
7. Sobre la exploración física.- Para contribuir a que la víctima se vaya relajando para un examen completo, el *Protocolo de Estambul* recomienda⁸⁰ que la exploración física no se inicie por la zona genital; sino que se tome nota de toda deformidad observada. Conceder particular

atención a un examen minucioso de la piel en busca de lesiones cutáneas que puedan haber sido consecuencia de la agresión: hematomas, laceraciones, equimosis y petequias que podrían obedecer a succiones o mordiscos. Cuando las lesiones genitales sean mínimas, las situadas en otras partes del organismo pueden constituir el síntoma más significativo de la agresión.

4.1 Requisitos básicos de la presentación del personal de servicios periciales

El personal de servicios periciales que intervenga deberá:

- Portar bata blanca limpia e identificación oficial vigente en un lugar visible.
- Presentarse con nombre, apellido, cargo y especialidad ante la víctima.
- Para favorecer la confianza de la víctima, la o el profesional puede expresar algunas frases clave para la atención de las víctimas que ya se sugirieron en este instrumento.
- Para la práctica de la diligencia de que se trate, se deberá obtener el consentimiento informado y se verificará en todo momento que cada acción se realice con total respeto a su dignidad y derechos humanos.
- Respecto al consentimiento informado, la Declaración de Lisboa de la Asociación Médica Mundial⁸¹ señala la obligación de obtenerlo de manera voluntaria e informada de las personas mentalmente competentes para cualquier examen o tratamiento, esto significa que las personas necesitan conocer y comprender los posibles beneficios y las consecuencias que pueden tener su consentimiento o su rechazo. La persona tiene derecho de rehusarse a la evaluación, y en este caso, el personal encargado tendrá que referir y exponer las razones del rechazo.

Criminalística de campo.- Sobre los indicios y/o evidencias más comunes encontrados en casos de violencia sexual⁸²

Tipos de indicios y/o evidencias

- Lesiones físicas externas genitales, extragenitales o paragenitales. Son conjunto de indicios y/o evidencias que de manera integral sugieren respecto del trato criminal, cruel, inhumano o degradante, incluyendo evidencias de actos relacionados por ejemplo con parafilias.

⁸¹Adoptada por el Protocolo de Estambul (OACDH, 2001)

⁸²Lineamientos Generales INACIPE, op. cit. p.98

- Objetos vulnerantes de tipo cortante, contuso, punzante, y sus variantes, constrictores de diversos tipos, usos, dimensiones, armas de fuego, sustancias toxicas, fármacos y narcóticos y demás.
- Cintas adhesivas.
- Colillas de cigarrillos.
- Prendas de vestir en condiciones de desorden, con daños, desgarradas, desabotonadas, con maculaciones hemáticas y biológicas.
- Envases de plástico, lata, vidrio o fragmentos de estos materiales.
- Fragmentos de papel diverso incluyendo cartón.
- Daño psicológico, estrés postraumático, presencia de síndromes.
- Embarazo no deseado.
- Adicciones.
- Patologías orgánicas, desnutrición, signos de omisión de cuidados.
- Conductas depresivas, aislamiento social, miedo, rechazo, incapacidad de relacionarse, autocastigo, etcétera.

Medicina forense⁸³

Su objetivo es establecer el diagnóstico diferencial de la acción o acto sexual violento y sin consentimiento de la víctima; no violento y sin consentimiento y, en el caso en el cual el consentimiento no pueda inferirse de ninguna palabra o conducta de la víctima cuando la fuerza haya disminuido su capacidad para dar un consentimiento voluntario y libre o de la falta de resistencia de la víctima

Estudio ginecológico y/o proctológico

- ✓ Antecedentes ginecobstétricos
- ✓ Exploración
- ✓ Clasificación médico-legal de las lesiones
- ✓ Resultados/dictamen

Genética forense

Establecer a través de la confronta y análisis estadístico en el CODIS⁸⁴ los perfiles genéticos del ADN, la identidad del probable responsable con un grado de confiabilidad

⁸³Lineamientos Generales, INACIPE, op cit., p.101

⁸⁴Base de datos que permite almacenar perfiles genéticos y darles una trazabilidad y proporciona datos estadísticos para la identificación de personas.

absoluta. En algunos casos, si así lo requiere la investigación, se podrá realizar la identificación de la víctima y su grado de parentesco.

Toma de muestras biológicas para estudios complementarios en la persona examinada

Respecto de la toma de muestras para la búsqueda de líquido seminal en cavidad oral, vaginal y anal, para los diferentes tipos de estudios médico-forenses; así mismo la toma de estas dependerá directamente del tiempo transcurrido entre los hechos que se investigan y la misma toma. La búsqueda de líquido seminal se realizará en un tiempo que no exceda las 24 horas de ocurridos los hechos. Todas las muestras forenses deberán estar plenamente protegidas y su cadena de custodia perfectamente documentada.

4.2 Acciones médicas complementarias necesarias en caso de violación

- Atención médica especializada.
- Atención psicológica especializada.
- Estudios que corroboren o descarten un posible embarazo.
- Estudios que corroboren o descarten posibles infecciones de transmisión sexual.
- En todos los casos de violación se prescribirán las pruebas de laboratorio adecuadas y el consiguiente tratamiento, asimismo se obtendrán cultivos iniciales y se practicarán pruebas serológicas, iniciando la terapéutica correspondiente.
- Práctica de estudios especializados relativos a posibles enfermedades relacionadas con el delito de violación cuyas consecuencias pueden ser: infertilidad, estrés post traumático, entre otros.
- Ofrecer de inmediato la anticoncepción de emergencia, así como la profilaxis contra VIH/SIDA, hepatitis (artículo 35 de la LGV).
- En el lugar de los hechos y/o del hallazgo, se debe seguir la metodología rigurosa para obtener indicios y/o evidencias que permitan reconstruir el hecho delictuoso y la identificación del probable responsable o responsables
- Solicitud de intervención de Servicios Periciales en la especialidad de psicología para determinar la personalidad del probable responsable

4.3 Psicología forense⁸⁵

Objetivo de la psicología forense en la investigación.

Identificar los factores de vulnerabilidad psicosociales por razones de género. **Es importante que ningún dato obtenido sea utilizado para realizar juicios subjetivos que presuman la responsabilidad de la víctima respecto de los hechos.**

En esta intervención, toda la información que se reúna se utilizará para auxiliar la investigación, **por lo que de ninguna manera se puede usar información personal y privada de la víctima en forma discriminatoria, o para culpabilizarla de lo que le ocurrió, especialmente lo referente a su vida sexual, su profesión o sus preferencias de cualquier tipo.**

El personal que intervenga debe propiciar que el examen que se practique a la víctima sea en un espacio digno, bajo un ambiente que le genere respeto, seguridad y confianza. En caso de que la víctima sea niña o niño, se recomienda que además de lo anterior el espacio este decorado con motivos infantiles para proporcionar un ambiente acogedor, cordial y amigable.

La víctima deberá de ser informada en forma clara del procedimiento de evaluación psicológica y del destino futuro de la información recabada a fin de obtener su consentimiento y aceptación de los tiempos, formas y tareas que esto implica.

Desarrollar la evaluación psicológica correspondiente que permita determinar, fundamentalmente, el estado emocional, o daño psicológico consecuencia de la agresión sexual, así como las características del entorno bio-psico-sociales que pudieran potencializar el riesgo de victimización de la persona evaluada.

Desarrollo de la sincronía empática

La persona que evalúa deberá mantener una actitud empática, tanto verbal como no verbal, una distancia física, atención, respeto y objetividad que permitan a la víctima sentirse confiada y segura al describir el evento de agresión denunciado y todos y cada uno de los aspectos implicados en la evaluación psicológica en proceso.

A la entrevista debe dedicársele el tiempo adecuado de acuerdo con las circunstancias propias de cada caso a examinar. Con personas adultas debe de permitirse el ingreso de acompañantes en caso de que la víctima así lo desee, en caso de víctimas menores de edad inicialmente entrará la víctima con una persona que le acompañe, lo cual facilita

⁸⁵ Lineamientos Generales, INACIPE, op. cit., pp.108 y adelante

manejar su ansiedad y sirve de apoyo para obtener la información general sobre los antecedentes. Sin embargo, se recomienda tomar las providencias necesarias en cada caso concreto.

En cualquier caso se le debe recomendar a la o el acompañante permanecer en silencio y ubicarse cerca de la víctima, pero fuera de su vista para evitar que pueda influir en el desarrollo de la entrevista.

Generar la catarsis emocional y cognitiva en la víctima.

Indagar cómo se encuentra la víctima, cómo se siente, cuáles son sus preocupaciones y temores. Ubicar los hechos en su contexto espacial particular; brindarle devoluciones verbales sobre su dicho que le permitan o le faciliten estructurar cognitivamente el evento a través de su discurso.

Facilitar la narrativa de la víctima.

Ubicar indicadores de la probable tipología de la persona en calidad de probable responsable y los factores de vulnerabilidad en la víctima, al generar en ésta las condiciones idóneas de confianza y seguridad que le faciliten la expresión emocional y la narrativa de cada detalle relacionado con la agresión denunciada que permita su esclarecimiento.

Identificar el estado psicológico general.

Realizar todos aquellos cuestionamientos que permitan obtener indicadores objetivos acerca de las condiciones en que la víctima se encuentra respecto a sus áreas cognitiva, afectivo/emocional y conductual, sin descartar las funciones mentales básicas que posibiliten clarificar el estado psicológico en curso.

Las consecuencias psicológicas se manifiestan en el contexto del significado que personalmente se le dé, del desarrollo de la personalidad y de factores sociales, políticos y culturales, por esta razón, no cabe suponer que todas las formas de agresión sexual dan el mismo resultado. Cabe señalar que la violación puede dejar daños profundos en las relaciones íntimas entre cónyuges, padres e hijos y otros miembros de la familia, así como en las relaciones entre las víctimas y sus comunidades. Muchas víctimas experimentan profundas reacciones emocionales y síntomas psicológicos, los que principalmente se asocian a la violación son: trastorno de estrés postraumático (TEPT) y depresión profunda.

Retroalimentar y verificar el estado emocional de la víctima.

Hacer la correspondiente retroalimentación a la víctima sobre los aspectos emocionales y de afrontamiento requeridos para su estabilidad emocional. Si es necesario, se debe canalizar a la víctima a la atención especializada que corresponda.

Realizar la entrevista psicológica.

La persona que evalúa deberá realizar una entrevista psicológica que tome en consideración la condición emocional de la víctima y que permita a la misma tener la sensación de seguridad y confianza necesarias para aportar los datos requeridos.

El objetivo general de toda evaluación psicológica consiste en evaluar el grado de coherencia que existe entre el relato que la persona hace de los hechos y los hallazgos psicológicos que se observan en el curso de la evaluación.

Muy recomendable es que se tome en cuenta el contexto psicosocial de la víctima.

Si no tiene un buen conocimiento o no conoce en absoluto el medio cultural de la víctima, es esencial la ayuda de un intérprete. Lo mejor es que se trate de un intérprete que sea del país de la víctima y conozca el idioma, costumbres, tradiciones religiosas y otras creencias que deben tenerse en cuenta en el curso de la investigación.

Tener en cuenta que la entrevista puede despertar temores y desconfianza por parte de la víctima y es posible que le recuerde sus anteriores interrogatorios.

En caso de evidencias sobre haber sufrido violación como tortura sexual, se debe comenzar explicando con detalle qué procedimientos se van a seguir (qué preguntas se van a formular sobre antecedentes psicosociales, incluido el desarrollo de la violación, la tortura, en su caso, y el actual funcionamiento psicológico), lo que prepara a la persona entrevistada para las difíciles reacciones emocionales que pueden provocar las preguntas. Es preciso que la persona entrevistada pueda pedir una pausa e interrumpir la entrevista y poderse ir si el estrés llega a resultarle intolerable, con la posibilidad de una cita ulterior. En estos casos el personal pericial debe apegarse al cumplimiento de las disposiciones del Protocolo de Estambul.

En el proceso de la entrevista, la víctima puede experimentar sentimientos negativos contra la persona que realiza la entrevista, tales como: miedo, rabia, rechazo, confusión, pánico u odio. Quien realiza la entrevista debe dar lugar a que se expresen y expliquen esos sentimientos y manifestar su comprensión ante la difícil situación de la víctima.

Tener en cuenta que a causa de presiones psicológicas antes mencionadas, las víctimas pueden sufrir un nuevo traumatismo y verse abrumadas por sus recuerdos.

Componentes de la evaluación psicológica/psiquiátrica⁸⁶.

- a) Historia general de abuso sexual y /o violación, tortura y malos tratos.
- b) Quejas psicológicas actuales.
- c) Historia posterior a la agresión.
- d) Historia previa a la agresión.
- e) Historia clínica.
- f) Antecedentes de uso y abuso de sustancias⁸⁷.
- g) Examen del estado mental.
- h) Evaluación del funcionamiento social.
- i) Impresión clínica.

La persona que realice la entrevista deberá dar su opinión acerca de la relación que pueda existir entre los signos psicológicos y la medida en que esos signos guardan relación con los presuntos malos tratos. Deberán describirse el estado emocional y la expresión de la persona durante la entrevista, sus síntomas, la historia de detención y violación y tortura y la historia personal previa. Se tomará nota de factores como el momento en que se inician cada uno de los síntomas en relación con el trauma, la especificidad de todos los signos psicológicos y las modalidades de funcionamiento psicológico. También se mencionarán otros factores adicionales, situaciones condicionantes de discriminación por género, migración forzada, el reasentamiento, dificultades de aculturación, problemas de lenguaje, desempleo, pérdida del hogar, familia y estado social. Se evaluará y describirá la relación y la concordancia entre los acontecimientos y los síntomas.

4.4 Otras especialidades.

De acuerdo con las circunstancias del caso, se podrá solicitar la intervención de diversas especialidades forenses, con sus respectivas diligencias. Debe ser prioritario atender las necesidades de la investigación para que ésta sea pronta y eficaz, por lo que no se debe escatimar en la solicitud de aquellas especialidades forenses que se requieran.

En caso de que el área de servicios periciales de la entidad federativa no cuenten con la especialidad requerida, se deberá solicitar el apoyo de perito/as o experto/as correspondientes en otras dependencias, procuradurías, universidades o instituciones de reconocido prestigio.

⁸⁶ Protocolo Estambul, op. cit., párr. 275 y siguientes

⁸⁷ Prot. Estambul., op. cit., ár. 248, pp.92,95 y 258

ANEXO 1. Entrevista inicial a la víctima de agresión sexual.

Nota: Son sugerencias como parte de la rutina de entrevista.

9. Entrevista que realiza el personal ministerial a la víctima de agresión sexual⁸⁸.

- 1) Las y los servidores públicos se deben identificar con la víctima.
- 2) Informarle que puede ser atendida por personal del mismo sexo, o del sexo que elija (Artículo 109 fracción III, CNPP).
- 3) Explicar a la víctima cuál es la función de la o el servidor público que la está entrevistando.
- 4) Si es menor requerirá un acompañante por lo que se debe solicitar a la institución competente que se hará cargo de él, a la que se le pedirá que esté permanezca durante todas las diligencias.
- 5) Si la víctima tiene otra nacionalidad, se le informa que contará con asistencia migratoria y se llamará al cónsul antes de empezar las diligencias (Artículo 109 fracción XIII, CNPP).
- 6) Si es discapacitada, se le proveerán las facilidades de ingreso y permanencia así como todo lo necesario a fin de que entienda las diligencias (Artículo 109 fracción XII, CNPP).
- 7) Si es indígena y perteneciere a un pueblo o comunidad indígena y no conoce o no comprende el idioma español, antes de empezar las diligencias se le proporcionará un traductor o intérprete. (Artículo 109 fracción XI, CNPP). Ello deberá explicársele de manera que sepa que puede apoyarse en alguien de su confianza de su comunidad. (Protocolo de Estambul).
- 8) Si la víctima es indígena, la o el Asesor Jurídico deberá tener conocimiento de su lengua y cultura y, en caso de que no fuere posible, deberá actuar asistido de un intérprete que tenga dicho conocimiento.
- 9) Si la víctima no tiene la capacidad de comprender el significado del hecho o no pudo resistirlo, se solicitará la intervención de un perito en psiquiatría y medicina legal para acreditar el estado físico y mental de la víctima.
- 10) Informar a la víctima de los derechos que le reconoce la Constitución y la LGV.
- 11) Informar a la víctima o a sus representantes de los derechos adicionales que tiene conforme a los estándares internacionales de derechos humanos aplicables a su caso (enfoque diferencial y especializado).

88 Este es un cuestionario básico, aplicable en los casos que amerite, sea violación, hostigamiento, abuso o estupro, utilizando la que corresponda a la investigación.

- 12) Explicar a la víctima la trascendencia y alcances de su comparecencia.
- 13) Informar a la víctima cuánto tiempo puede durar la primera diligencia.
- 14) Preguntar cuándo fueron los hechos.
- 15) Explicarle qué elementos pueden servir para probar el hecho sucedido a fin de que ella vea cómo puede colaborar.
- 16) Si la victimización es reciente, de inmediato se ordena que intervenga personal pericial y médico y de criminalística para la toma de muestras, quienes igual que los AMPF deberán primero presentarse, identificarse y deben explicar a la víctima qué se busca con cada examen que se va a efectuar y recabar su consentimiento, o el de su representante.
- 17) Si al realizar la exploración se detecta que el estado de salud físico de la víctima es grave, se dictan las medidas necesarias para que la víctima sea trasladada de emergencia al hospital acompañada por una persona de la institución que para tal efecto se determine (Medidas de ayuda inmediata establecidas en el Capítulo I, LGV y el Artículo 47 fracción III, LGAMVLV).
- 18) Si es reciente y comunica que ya se cambió de ropa, se le dan facilidades para que se comunique con las personas indicadas y preserven las evidencias en tanto llega el personal pericial al lugar correspondiente (ropa, zapatos, objetos varios, ropa de cama, etc.).
- 19) Preguntar a la víctima cuáles son sus necesidades y ver en lo posible cómo se le puede apoyar a fin de que esté concentrada en la diligencia.
- 20) Hacer la constancia en carpeta de investigación de que se le informaron sus derechos.
- 21) Informar que tiene derecho en cualquier etapa del procedimiento, a intervenir por sí o a través de su Asesor Jurídico particular que deberá ser licenciada/o en derecho o abogada/o titulada/o, quien deberá acreditar su profesión desde el inicio de su intervención mediante cédula profesional.
- 22) Si expresa la víctima que no tiene asesor/a jurídica/o a quien nombrar, se le nombrará uno a cargo del Estado (Artículo 110, CNPP).
- 23) Informar que la intervención de la persona que funja como Asesor jurídico será para orientarla, asesorarla o intervenir legalmente en el procedimiento penal en su representación y que se encuentra en igualdad de condiciones que la o el Defensor del imputado.

- 24) Informar a la víctima que puede coadyuvar con el Ministerio Público y explicarle lo que eso significa.
- 25) Preguntar sus datos generales: edad, nacionalidad, estado de salud, etc.
- 26) Explicarle que se le va a tomar una declaración, que es una denuncia sobre los hechos que vivió y hacerle saber la importancia e implicaciones de hacerlo.
- 27) Para ello, deberá respetarse su estado emocional y esperar a que se sienta segura.
- 28) Si se detecta que la víctima está en estado psicológico alterado o en crisis, se pide la intervención de la psicóloga para que le dé los primeros auxilios psicológicos.
- 29) Proporcionar a la víctima la información objetiva que le permita reconocer su situación (Artículo 27 fracción VI, LGAMVLV).
- 30) Permitir que exprese sus opiniones. Esta dinámica es de vital importancia para valorar con perspectiva de género los hechos relevantes para la investigación, detectando patrones de poder y presencia de estereotipos a través de la cronología y la dinámica criminológica de la agresión sufrida y la dimensión e implicaciones que esto ha significado en su proyecto de vida.
- 31) Solicitar la realización de las diligencias de investigación que correspondan al caso; salvo si se considerara que no es necesario, se debe fundar y motivar la negativa (Artículo 109 fracción XVII, CNPP).
- 32) Inmediatamente que se conozcan hechos constitutivo de infracciones o delitos que impliquen violencia hacia la víctima directa o indirecta o pongan en riesgo su identidad y demás datos personales, El AGMPF debe solicitar a la o al juez de control la aplicación de medidas de protección, providencias precautorias y medidas cautelares, fundando y motivando la misma (Artículo 109 fracciones XIX y XXVI, CNPP y Capítulo VI, artículos 27 al 34, LGAMVLV).
- 33) Registrar en el banco de datos (BANAVIM) las órdenes de protección que se giren y las personas sujetas ella, así como todos los datos desglosados que se requieran.
- 34) Si la víctima está en el hospital y lo que se recibió es un llamado de emergencia, se instrumenta la visita al hospital.
- 35) Si la víctima no puede comparecer por su edad, enfermedad grave o por alguna otra imposibilidad física o psicológica, se requerirá la dispensa, por sí o por un tercero, con anticipación.

- 36) Si la víctima está en su domicilio y se considera adecuado, el servicio irá a realizar las diligencias o proporcionará traslado al lugar en donde se encuentre, para ser interrogada o participar en el acto para el cual fue citada (Artículo 109 fracción XX, CNPP).
- 37) Ordenar que el imputado o procesado sea evaluado por el mismo perito médico que exploró a la víctima para ubicar y recabar evidencias.
- 38) Elaborar la estrategia de intervención.
- 39) Informar a la víctima y a sus representantes qué tipo de datos o elementos de prueba son importantes en su caso, a fin de recabarlos y recibirlos.
- 40) Brindar a la víctima la información integral sobre las instituciones públicas o privadas encargadas de su atención (Artículo 47 fracción V , LGAMVLV; Artículo 109 fracción XVIII, CNPP)
- 41) Proporcionarle la información, los servicios médicos y el tratamiento adecuado, oportuno e inmediato sobre métodos de detección de VIH, hepatitis o cualquier enfermedad o infección de transmisión sexual, así como sobre el acceso a la interrupción del embarazo por causa de violación (Artículo 35, LGV).
- 42) Informarle que tiene acceso a los registros de la investigación durante el procedimiento.
- 43) Entregarle una copia gratuita los registros de la investigación durante el procedimiento si los solicita, salvo que la información esté sujeta a reserva así determinada por el órgano jurisdiccional.
- 44) Informar a la víctima que en cualquier estado del procedimiento, podrá solicitar que el juzgado correspondiente ordene como medida provisional, cuando la naturaleza del hecho lo permita, la restitución de sus bienes, objetos, instrumentos o productos del delito, o la reposición o restablecimiento de las cosas al estado que tenían antes del hecho, siempre que haya suficientes elementos para decidirlo (Artículo 111, CNPP).

10. BIBLIOGRAFÍA:

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
- Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
- Ley General de Víctimas.
- Ley de Protección para Niñas, Niños y Adolescentes.
- Código Federal Penal.
- Código Nacional de Procedimientos Penales.
- Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.
- Programa Nacional de Procuración de Justicia 2013-2018.
- *Acuerdo A/002/10, emitido por el Procurador General de la República, que establece los lineamientos que deberán observar todos los servidores públicos para la debida preservación y procesamiento del lugar de los hechos y/o del hallazgo, y de todos los indicios y/o evidencias relacionados con el hecho delictuoso, en congruencia con lo dispuesto por el artículo 123 Bis del Código Federal de Procedimiento Penales.* Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de febrero-2010, México.
- *Protocolo de Investigación de los delitos de violencia sexual hacia mujeres del Estado de Tlaxcala.* (no aparecen más datos).
- *Protocolo de investigación de delitos sexuales cometidos contra menores,* apartado de Protocolos de investigación criminal que contiene la página web de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, Secretaría de Gobernación, página consultada el 11 octubre de 2014,
http://www.setec.gob.mx/es/SETEC/Protocolos_de_Investigacion_Criminal.
- *Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género,* SCJN, México, 2013.
- *Protocolo de Actuación para quienes Imparten Justicia en casos que Afecten a Niñas, Niños y Adolescentes,* SCJN, México, febrero 2012.
- Criterios jurisprudenciales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2014.
- *Sentencia del Caso González y otras ("Campo algodónero") contra México,* sentencia de 16 de noviembre 2009, San José, Costa Rica.

Corte IDH.

- *Sentencias de la Corte IDH de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, contra el Estado mexicano*, dictadas el 30 y 31 de agosto de 2010.

Lineamientos Generales para la Estandarización de Investigaciones de los Delitos Relacionados con Desapariciones de Mujeres, del Delito de Violación de Mujeres y del Delito de Homicidio de Mujeres por Razones de Género. Instituto Nacional de Ciencias Penales, proyecto de 2010.

- *Recomendación General 16*. 21 de mayo de 2009. Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
- *La jurisprudencia sobre la protección de las mujeres emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra México*, Montoya Ramos, Isabel *Revista Penal México*, núm. 5, febrero, 2013.
- *100 Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad*, aprobada en la XIV Cumbre Judicial Iberoamericana, en febrero de 2008.
- *Modelo de Protocolo Latinoamericano de Investigación de las Muertes Violentas de Mujeres por Razones de Género (femicidio/feminicidio)*. ONU Mujeres, Oficina Regional para América Central del Alto Comisionado para América Latina, 2013.
- *Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes* (Protocolo de Estambul), Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Naciones Unidas, Ginebra, Suiza (2001).
- *Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres* (CEDAW), Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de marzo de 1981.
- *Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer "Convención de Belém do Pará"*. DOF enero 1999.
- *Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer*, aprobada mediante Resolución de la Asamblea General 48/104 del 20 de diciembre del año citado, Nueva York. (ONU, 1993), Consultada (junio 2014) en el link:
[http://www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/\(Symbol\)/A.RES.48.104.S.p?Open document](http://www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/(Symbol)/A.RES.48.104.S.p?Open%20document)
- *Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación*

en Contra de la Mujer. Recomendación General No. 19 sobre la violencia contra la mujer, Nueva York. (ONU, 1992), Consultada (junio 2014) en el link: <http://www.equidad.scjn.gob.mx/IMG/pdf/VI-A-1-a-19-Recommendacion General No- 19- La violencia contra la mujer-.pdf>

- *Informe de México producido por el Comité CEDAW* bajo el Artículo 8 del Protocolo Facultativo de la Convención y respuesta del Gobierno de México, CEDAW/C/2005/OP.8/MEXICO, párr. 159.
- *Recomendación General número 19, La violencia contra la mujer, del 11 Periodo de sesiones año 1992 del Comité CEDAW.*
- *Recomendación 28* relativa al artículo 2º de la CEDAW, 6 Diciembre 2010
- *Manual sobre Prevención e Investigación Eficaces de las Ejecuciones Extralegales, Arbitrarias o Sumarias (Protocolo de Minnesota)*, ONU 1991, Nueva York.
- *Convención sobre los Derechos del Niño*, adoptada Asamblea General ONU en su resolución 44/25 de 20 de noviembre de 1989. DOF 25 enero 1991.
- *Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes*, DOF 6 marzo 1986
- *Código de Conducta para funcionarios encargados de cumplir la ley*, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 34/169, de 17 de diciembre de 1979.
- *Manual sobre Investigación para Casos de Violencia de Pareja y Feminicidios en Chile*, Fiscalía Nacional. Ministerio Público de Chile. Santiago de Chile, 2012.
- *Protocolo Común para la Actuación Sanitaria ante la Violencia de Género*, Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Madrid, España, 2012.
- "La jurisprudencia sobre la protección de las mujeres emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra México", Montoya Ramos Isabel, *Revista Penal México*, México, núm. 5, septiembre de 2013-febrero 2014, pág.235
- *Diccionario Esencial de la Lengua Española de la Real Academia Española*. Editorial Espasa (2006),

-----00000-----

Homologado de Investigación de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión.

Instrumento útil en la investigación de delitos cometidos en contra de periodistas y/o instituciones de medios de comunicación en el marco del derecho a la libertad de expresión con un enfoque diferencial y especializado, que abarca los actos que deben desarrollarse en las dos etapas de la investigación (inicial y complementaria).



Protocolo Homologado de

INVESTIGACIÓN DE DELITOS COMETIDOS CONTRA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

Índice

1.	Introducción	2
2.	Marco jurídico	5
3.	Libertad de expresión	10
4.	Alcance.....	14
5.	Objetivos del Protocolo	14
	Generales.....	14
	Específicos.....	14
6.	Políticas de operación.....	16
7.	Roles de Participantes	19
8.	Principios de Actuación.....	21
9.	Modelado de Procesos	23
	Diagramas.....	23
	Procedimiento	25
10.	Glosario.....	46
11.	Anexos	48
	Anexo 1. Simbología empleada	48
	Anexo 2. Lineamientos para la elaboración del análisis de contexto en la investigación de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión	50
12.	Control de cambios	59

1. Introducción

El 18 de junio de 2008, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones en materia de Seguridad Pública y Justicia Penal, a través del cual se determinó la transición al Sistema de Justicia Penal Acusatorio (SJPA).

El artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) establece que:

“En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los Derechos Humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley”.

Según lo resuelto por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el expediente Varios 912/2010, todas las autoridades que no ejercen funciones jurisdiccionales están obligadas a interpretar los derechos humanos de la manera en que más favorezca a la persona humana, siguiendo para tal efecto el principio pro persona, cuyo contenido y alcance se encuentra definido en el párrafo segundo del artículo primero de la norma fundamental.

En el mismo sentido, el pleno del máximo Tribunal Constitucional de nuestro país, en la Contradicción de Tesis 293/2011, señaló que en el artículo primero de la CPEUM se encuentra el “parámetro de regularidad constitucional” mismo que se compone por todas las normas en materia de Derechos Humanos, sin importar si su fuente se encuentra en la Carta Magna, o en un tratado internacional, siendo obligación de todas las autoridades del Estado mexicano observar este parámetro, de manera que los actos que se emitan con motivo del ejercicio de sus funciones sean coherentes con dicho contenido.

El 25 de junio de 2012, se publicó en el DOF el Decreto por el que se expide la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (LPPDDHP), cuyo objeto es establecer la cooperación entre la Federación y las entidades federativas para implementar y operar las medidas de prevención, medidas preventivas y medidas urgentes de protección que garanticen la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas que se encuentren en situación de riesgo como consecuencia de la defensa o promoción de los derechos humanos, y del ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo. Asimismo crea el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y

Periodistas (MPPDDHP), para que el Estado atienda su responsabilidad fundamental de proteger, promover y garantizar los derechos humanos.

De igual forma, el 08 de octubre de 2013, se publicó en el DOF el Decreto por el que se reforma la fracción XXI del artículo 73 de la CPEUM, estableciendo que las autoridades federales podrán conocer de los delitos del fuero común, cuando estos tengan conexidad con delitos federales o delitos contra periodistas, personas o instalaciones que afecten, limiten o menoscaben el derecho a la información o las libertades de expresión o imprenta.

El 05 de marzo de 2014, se publicó en el DOF el Decreto por el que se expide el Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP) el cual establece en su artículo 21 la posibilidad de que la Procuraduría General de la República (PGR) ejerza la facultad de atracción de los delitos del fuero común cometidos contra algún periodista, persona o instalación, que dolosamente afecten, limiten o menoscaben el derecho a la información o las libertades de expresión o imprenta.

Bajo esta tesitura, el estado mexicano reafirma su compromiso en prevenir e investigar los delitos que afectan el derecho humano a la libertad de expresión, piedra angular de una sociedad democrática y condición esencial para que la sociedad se encuentre debidamente informada sobre hechos trascendentales para la convivencia social. El derecho a la libertad de expresión comprende la manifestación de pensamientos e ideas, así como la posibilidad de hacerlas públicas por los medios que se estimen idóneos. Su contenido se traduce en un derecho funcionalmente central del Estado que tiene una doble faceta: por un lado, asegura a las personas espacios esenciales para el despliegue de su autonomía y, por otro, goza de una vertiente pública, colectiva o institucional que lo convierte en una pieza básica para el adecuado funcionamiento de la democracia representativa.

Las instancias de procuración de justicia del país al investigar y perseguir los delitos que se relacionan directamente con el ejercicio de la libertad de expresión, realizan acciones destinadas a salvaguardar la vida e integridad de aquellos que ejercen este derecho, por lo que resulta necesario establecer un procedimiento que establezca los estándares mínimos que deberá adoptar el personal sustantivo de las instancias de procuración de justicia del país para llevar a cabo de manera profesional, eficiente, correcta y homologada las investigaciones sobre hechos delictivos cometidos contra la libertad de expresión, a efecto de contribuir con una procuración de justicia pronta y expedita en el país. Asimismo, la adopción de los mecanismos de protección no puede quedar únicamente en el ámbito de decisión de las o los agentes del Ministerio Público (AMP), sino que resulta necesario establecer la descripción de un procedimiento con los estándares mínimos que deberá adoptar el personal sustantivo de las instancias de procuración de justicia del país a fin de alcanzar una mayor homologación en las actuaciones dentro del procedimiento penal en lo que atañe a la protección y acompañamiento de las personas que se dedican al periodismo o a la comunicación.

En este sentido, el artículo Décimo Primero transitorio del CNPP, establece como una obligación la instrumentación de protocolos de investigación y de actuación del personal sustantivo en los lugares en donde esté en operación el SJP.

En virtud de lo anterior, se hizo necesaria la elaboración del presente Protocolo Homologado mismo que contempla las mejores prácticas para la investigación ministerial, pericial y policial de delitos cometidos contra la libertad de expresión, y principios de actuación para una atención digna y respetuosa hacia la víctima.

Con base en lo anterior, el Protocolo que aquí se presenta, busca establecer políticas de actuación y procedimientos que garanticen que las investigaciones realizadas por las autoridades federales y estatales se encuentren apegadas a los estándares nacionales e internacionales de derechos humanos para la investigación de los delitos cometidos contra la libertad de expresión para una investigación exhaustiva de los hechos ilícitos, la obtención de evidencias y la no revictimización de la persona que ha sufrido la conducta delictiva, que contribuya con una procuración de justicia pronta y expedita en el país.

2. Marco jurídico

INTERNACIONAL

1. Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley
2. Conjunto de Principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión
3. Convención Americana sobre Derechos Humanos
4. Convención Interamericana contra toda Forma de Discriminación e Intolerancia
5. Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad
6. Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas
7. Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención Belém Do Pará”
8. Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura
9. Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas
10. Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial
11. Convención Internacional sobre la Protección de los Artistas Intérpretes o Ejecutantes, los Productores de Fonogramas y los Organismos de Radiodifusión
12. Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer
13. Convención sobre los Derechos del Niño
14. Convención Universal sobre Derecho de Autor
15. Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre
16. Declaración Conjunta Sobre Delitos Contra La Libertad de Expresión 2012-2

17. Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión y los Antecedentes e Interpretación de la Declaración de Principios
18. Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra la Tortura y otros Tratos o Penas Cruelles, Inhumanos o Degradantes
19. Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos de abusos de poder
20. Declaración Universal de los Derechos Humanos.
21. Directrices sobre la función de los fiscales
22. Manual para la Investigación y Documentación Eficaces de la Tortura y otros Tratos o Penas Cruelles, Inhumanos o Degradantes "Protocolo de Estambul"
23. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
24. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
25. Principios actualizados para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad
26. Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de hacer cumplir la Ley
27. Principios relativos a la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes
28. Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones

NACIONAL

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
2. Código Nacional de Procedimientos Penales
3. Ley General de Víctimas
4. Ley General de Responsabilidades Administrativas
5. Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros tratos o Penas Cruelles, Inhumanos o Degradantes
6. Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos
7. Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión

8. Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos
9. Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado
10. Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal
11. Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
12. Ley de Asistencia Social
13. Ley de Migración
14. Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas
15. Ley Sobre Delitos de Imprenta
16. Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República
17. Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República
18. Reglamento de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas
19. Modelo Integral de Atención a Víctimas (MIAV)
20. Recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de las que resaltan por su importancia y relevancia jurídica
21. Recomendación General 20/2013, sobre agravios a periodistas en México y la impunidad imperante
22. Recomendación General 24 de la CNDH de 2016. Sobre el ejercicio de la Libertad de Expresión en México
23. Recomendación 32/1995, sobre el Caso del Consejo Guerrerense 500 Años de Resistencia Indígena, A.C.
24. Recomendación 16/2008, sobre el caso del señor Rodolfo Franco Ramírez, Conductor del programa "Comentando la Noticia"
25. Recomendación 16/2009, sobre el Caso de la detención y traslado de la periodista Lidia Cacho Ribeiro
26. Recomendación 13 /2015 sobre el caso de las violaciones a la Libertad de Expresión, a la seguridad jurídica y a la integridad personal cometidas en agravio de v1
27. Recomendación 72 /2017 sobre el caso de violación al derecho de acceso a la justicia en su modalidad de procuración de justicia, en agravio de V2, V3, V4 y V5, en la investigación del homicidio de V1, periodista en el Estado de Guerrero
28. Códigos Penales de las Entidades Federativas
29. Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tesis Aislada, Décima Época: PERIODISTA. LA DEFINICIÓN DEL

TÉRMINO DEBE ORIENTARSE A SUS FUNCIONES

30. Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tesis Aislada, Décima Época: PROTECCIÓN A PERIODISTAS. EL CANAL DE COMUNICACIÓN POR EL CUAL SE EJERCE LA FUNCIÓN PERIODÍSTICA ES IRRELEVANTE PARA DETERMINAR LA CALIDAD DE PERIODISTA
31. Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tesis Aislada, Décima Época: PROTECCIÓN A PERIODISTAS. CRITERIO TEMPORAL PARA DETERMINAR LA CALIDAD DE PERIODISTA
32. Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tesis Aislada, Décima Época: PROTECCIÓN A PERIODISTAS. LA PERTENENCIA A UN MEDIO DE COMUNICACIÓN ES IRRELEVANTE PARA DETERMINAR LA CALIDAD DE PERIODISTA
33. Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tesis Aislada, Décima Época: PROTECCIÓN A PERIODISTAS. LA FACULTAD DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL PARA ATRAER DE DELITOS COMUNES RELACIONADOS CON EL EJERCICIO PERIODÍSTICO DEBE UTILIZARSE ATENDIENDO A UNA DEFINICIÓN FUNCIONAL DEL TÉRMINO "PERIODISTA"
34. Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tesis Aislada, Décima Época: LIBERTAD DE EXPRESIÓN. DIMENSIÓN INDIVIDUAL DE ESTE DERECHO FUNDAMENTAL

INSTRUMENTOS DE CONSULTA

1. Corte IDH. Caso "La Última Tentación de Cristo" (Olmedo Bustos y Otros) Vs. Chile. Sentencia 5 de febrero de 2001
2. Corte IDH. Caso Ivcher Bronstein Vs. Perú. Sentencia de 6 de Febrero de 2001
3. Corte IDH. Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica. Sentencia de 31 de agosto de 2004
4. Corte IDH. Caso Ricardo Canese Vs. Paraguay. Sentencia 31 de Agosto de 2004
5. Corte IDH. Caso Palamara Iribarne Vs. Chile. Sentencia 22 de noviembre de 2005
6. Corte IDH. Caso Claude Reyes y otros Vs. Chile. Sentencia de 19 de septiembre de 2006
7. Corte IDH. Caso Kimel Vs. Argentina. Sentencia de 2 de mayo de 2008
8. Corte IDH. Caso Tristan Donoso Vs. Panamá. Sentencia de 27 de enero de 2009
9. Corte IDH. Caso Ríos y otros Vs. Venezuela. Sentencia de 28 de enero de 2009
10. Corte IDH. Caso Perozo y otros Vs. Venezuela. Sentencia de 28 de enero de 2009
11. Corte IDH. Caso Usón Ramírez Vs. Venezuela. Sentencia de 20 de noviembre de 2009
12. Informe No. 37/10 Caso Manoel Leal de Oliveira Vs. Brasil. del 17 de marzo de 2010 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

13. Corte IDH. Caso Manuel Cepeda Vargas Vs. Colombia. Sentencia de 26 de mayo de 2010
14. Corte IDH. Caso Gómez Lund y otros. Vs. Brasil. Sentencia de 24 de noviembre de 2010
15. Corte IDH. Caso Fontevecchia y D'Amico Vs. Argentina. Sentencia de 29 de noviembre de 2011
16. Corte IDH. Caso González Medina y Familiares Vs. República Dominicana. Sentencia de 27 de febrero de 2012
17. Corte IDH. Caso Vélez Restrepo y Familiares Vs. Colombia. Sentencia de 3 de septiembre de 2012
18. Corte IDH. Caso Uzcátegui y otros Vs. Venezuela. Sentencia de 3 de septiembre de 2012
19. Corte IDH. Caso Norin Catriman y Otros (dirigentes, miembros del pueblo indígena Mapuche) Vs. Chile Sentencia de 29 de mayo de 2014
20. Corte IDH. Caso Granier y otros (Radio Caracas Televisión) Vs. Venezuela. Sentencia de 22 de junio de 2015
21. Corte IDH. Caso López Lone y otros Vs. Honduras. Sentencia de 5 de octubre de 2015
22. Corte IDH. Caso I.V Vs. Bolivia. Sentencia de 30 de noviembre de 2016
23. Corte IDH. Caso Lagos del Campo vs. Perú. Sentencia del 31 de agosto de 2017
24. Corte IDH. Caso Carvajal Carvajal y otros Vs. Colombia. Sentencia de 13 de marzo de 2018
25. Corte IDH. Caso Herzog y otros Vs. Brasil. Sentencia de 15 de marzo de 2018
26. Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional
27. Informe de la CIDH, sobre el caso de asesinato del periodista Héctor Félix Miranda en México: 1) Informe N° 50/99, Caso 11.739
28. Informe de la CIDH, sobre el caso de asesinato del periodista Víctor Manuel Oropeza en México: Informe N° 130/99, Caso 11.740
29. Modelo de protocolo latinoamericano de investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de género (femicidio/feminicidio)
30. Observación General Número 20 del Comité de los Derechos Humanos "Prohibición de la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes"
31. Observación General N° 34 del Comité de los Derechos Humanos
32. Protocolo de Minnesota o Protocolo modelo para la investigación legal de ejecuciones extralegales, arbitrarias y sumarias

3. Libertad de expresión

La CPEUM en su artículo 6 señala lo siguiente

“La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado.

Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión”.

En el mismo sentido, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, establece: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.

Por su parte, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), en su artículo 13.1, señala:

“Libertad de Pensamiento y de Expresión. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección”.

La primera dimensión de la libertad de expresión comprende el derecho a utilizar cualquier medio apropiado para difundir opiniones, ideas e información y hacerlo llegar al mayor número de destinatarios.

La libertad de expresión contempla una condición necesaria para prevenir el arraigo de sistemas autoritarios, para facilitar la autodeterminación personal y colectiva; para hacer operativos los mecanismos de control ciudadano, fortaleciendo el Estado Democrático de Derecho.

En ese sentido, ha sido interpretado por la jurisprudencia emitida por la SCJN, que la:

“Libertad de Expresión en su dimensión individual asegura a las personas espacios esenciales para desplegar su autonomía individual. Así, se ha establecido que el contenido del mensaje no necesariamente debe ser de interés público para encontrarse protegido. En consecuencia, la dimensión individual de la Libertad de Expresión también exige de un elevado nivel de protección, en tanto se relaciona con valores fundamentales como la autonomía y la libertad personal. Desde tal óptica, existe un ámbito que no puede ser invadido por el Estado, en el cual el individuo puede manifestarse libremente sin ser

cuestionado sobre el contenido de sus opiniones y los medios que ha elegido para difundirlas. Precisamente, la libre manifestación y flujo de información, ideas y opiniones, ha sido erigida en condición indispensable de prácticamente todas las demás formas de libertad, y como un prerequisite para evitar la atrofia o el control del pensamiento, presupuesto esencial para garantizar la autonomía y autorrealización de la persona”; (véase Marco jurídico, apartado Nacional, punto 34).

Por su parte la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha sido constante en considerar que quienes están bajo la protección de la CADH tienen el derecho de buscar, recibir y difundir ideas e informaciones de toda índole, así como también el de recibir y conocer las informaciones e ideas difundidas por los demás.

Ahora bien, considerando que el presente protocolo tiene por objeto establecer las bases para la correcta investigación de los delitos cometidos contra la libertad de expresión, es necesario remarcar que la CPEUM, en su artículo 73, fracción XXI, establece que la facultad concurrente de las instituciones de procuración de justicia del fuero federal y del fuero común podrán conocer aquellos delitos cometidos en contra de periodistas, personas o instalaciones que afecten, limiten o menoscaben el derecho a la información o a las libertades de expresión o imprenta.

Para efecto de considerar el alcance y dimensión de los conceptos establecidos en dicho artículo, conviene señalar que la LPPDDHP, en su artículo segundo, señala el concepto de periodistas; asimismo el Relator Especial sobre la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y Expresión, Frank La Rue; en su Informe A/HRC/20/17, del 4 de junio 2012 menciona que “los periodistas son personas que observan, describen, documentan y analizan los acontecimientos y documentan y analizan declaraciones, políticas y cualquier propuesta que pueda afectar a la sociedad, con el propósito de sistematizar esa información y reunir hechos y análisis para informar a los sectores de la sociedad o a esta en su conjunto”.

En el mismo sentido, la CIDH ha destacado que “la profesión de periodista [...] implica precisamente el buscar, recibir y difundir información. El ejercicio del periodismo por tanto, requiere que una persona se involucre en actividades que están definidas o encerradas en la Libertad de Expresión garantizada en la Convención”.

La CIDH continúa señalando que el ejercicio profesional del periodismo es una actividad específicamente garantizada por la CADH y “no puede ser diferenciado de la Libertad de Expresión, por el contrario, ambas cosas están evidentemente imbricadas, pues el periodista profesional no es, ni puede ser, otra cosa que una persona que ha decidido ejercer la Libertad de Expresión de modo continuo, estable y remunerado”.

Adicionalmente, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en la Recomendación General 24 sobre el ejercicio de la libertad de expresión en México, emitida el 8 de febrero de 2016, establece el

concepto de periodista como: “aquellas personas que recaban, generan, procesan, editan, comentan, opinan, difunden, publican o proveen información a través de cualquier medio de difusión y comunicación, ya sea de manera eventual o permanente, lo que incluye a los comunicadores, a los medios de comunicación y sus instalaciones, así como a sus trabajadores, en tanto que ejercen o contribuyen a ejercer la Libertad de Expresión, tal como lo indica el artículo 2 de la LPPDDHP, y los estándares internacionales en la materia”.

Igualmente, existen diversas tesis jurisprudenciales emitidas por la SCJN, en las que se destaca el alcance y contenido del concepto de periodista y el criterio funcional del mismo:

- Protección a periodistas. La facultad de la o el AMPF para atraer delitos comunes relacionados con el ejercicio periodístico debe utilizarse atendiendo a una definición funcional del término periodista.
- Periodista. La definición del término debe orientarse a sus funciones.
- Protección a periodistas. Criterio temporal para determinar la calidad de periodista.
- Protección a periodistas. El canal de comunicación por el cual se ejerce la función periodista es irrelevante para determinar la calidad del periodista.

De acuerdo a los criterios establecidos anteriormente, se debe atender a la función realizada por la persona dedicada al periodismo, es decir: dar a conocer opiniones, ideas e información de interés público a la sociedad, no importando así la acreditación o certificación oficial de dicha calidad, ni el medio ni la forma por el cual se realiza dicha función; este concepto incluye el periodismo: independiente, digital, freelance, ciudadano, medios comunitarios, radio social, entre otros.

Igualmente, en diversas sentencias, la CIDH ha señalado la obligación de los Estados de atender la investigación del delito bajo principios de debida diligencia; así como también ha referido, con base en el artículo 13 de la CADH, las personas tienen el derecho no solo de expresar su propia opinión, sino también de buscar y recibir información, por lo que se implica un “derecho colectivo a recibir cualquier información y a conocer la expresión del pensamiento ajeno”. Así pues, conforme al noveno principio de la “Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión”.

El asesinato, secuestro, intimidación, amenazas a las o los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, violan los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión.

Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a las personas responsables y asegurar a las víctimas una reparación adecuada. En la investigación de los delitos cometidos para menoscabar la libertad de expresión, las Fiscalías Especializadas tienen la obligación de actuar en representación del Estado para cumplir con su deber de investigar e identificar a todas las personas responsables del hecho delictivo, tanto materiales como intelectuales, copartícipes, quienes colaboraron o encubrieron los hechos; por medio de la investigación de las circunstancias así como de las estructuras que permitieron o planearon la ejecución de los crímenes.

Para la investigación de los casos de delitos contra el ejercicio de la actividad periodística, dada la

naturaleza del interés público que reviste la misma así como de la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran las personas dedicadas al periodismo, al ser objeto de agresiones que pueden provenir de particulares o grupos de personas, cuyos intereses son contrarios a los vertidos en sus opiniones, trabajos de investigación y notas periodísticas; las Fiscalías Especializadas tienen la necesidad de fundamentar sus investigaciones y actuaciones sobre el análisis y estudio de las circunstancias que rodean a la comisión del hecho delictivo. En este sentido, las violaciones a los derechos de las personas dedicadas al periodismo son analizadas con base en la valoración y protección de la información así como las fuentes que posee; de igual forma las amenazas y agresiones previas ocurridas al momento de la denuncia; además de los hechos delictivos de los que fue víctima, la identificación de testigos y la recolección de datos de prueba; todo lo anterior con el propósito de identificar a las personas responsables de tratar de impedir el ejercicio pleno de la libertad de expresión.

En este sentido, la característica particular de la investigación en estos casos, incide en la valoración de la situación de peligro, que el ejercicio de la libertad de expresión representa para la víctima bajo una serie de condiciones específicas, con el propósito de identificar a las personas responsables del hecho delictivo.

Para ello, es necesario el desarrollo de directrices que orienten el trabajo de la o el AMP, personal de la Policía, así como personal Pericial, encaminadas al análisis del hecho delictivo tanto en su dimensión material como en las circunstancias que rodean al hecho, la valoración de la situación de riesgo de la víctima, la formulación de hipótesis, el establecimiento de un plan de investigación, el desarrollo de estrategias, y la formulación de una teoría del caso.

En conclusión, el personal sustantivo que aplicará el presente Protocolo, deberán tener en cuenta en todo momento durante su actuación los marcos teórico y jurídico señalados para la determinación de su competencia en razón del ejercicio del periodismo y la perspectiva de investigación.

4. Alcance

El presente Protocolo abarca la Investigación en sus dos etapas, la inicial y la complementaria; desde la recepción de la noticia del hecho, la ejecución de actos de investigación que permitan identificar posibles líneas de investigación respecto de algún delito cometido contra la libertad de expresión y hasta obtener los resultados idóneos para determinar la Carpeta de Investigación conforme a derecho proceda.

5. Objetivos del Protocolo

Generales

- ❖ Establecer parámetros y elementos que debe reunir una investigación completa e imparcial para determinar responsabilidades penales en los delitos cometidos contra periodistas y/o instituciones de medios de comunicación con motivo del ejercicio del derecho a la libertad de expresión.
- ❖ Dotar a la o el AMP de una herramienta que sirva para investigar los delitos cometidos en contra de quienes ejercen la actividad periodística en el marco de la libertad de expresión, a través de un enfoque diferencial y especializado de acuerdo con los estándares internacionales en libertad de expresión, bajo los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez, lealtad y respeto a los derechos humanos, con el propósito de esclarecer los hechos, y en su caso, sustentar el ejercicio de la acción penal, la acusación contra la persona imputada u optar por la mejor alternativa a nivel procesal garantizando en todo momento la reparación del daño.
- ❖ Otorgar a la persona periodista, directamente o en coordinación con autoridades competentes, apoyo, orientación, asesoría jurídica y protección que garanticen la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas que se encuentren en situación de riesgo como consecuencia del ejercicio de la actividad periodística, así como a las víctimas indirectas o potenciales.

Específicos

- ❖ Establecer estándares para desahogar adecuadamente las líneas de investigación, relacionadas con la probable comisión de hechos delictivos en contra del derecho a la libertad de expresión.
- ❖ Definir con claridad los medios de colaboración entre las autoridades encargadas de la investigación de delitos, con el MPPDDHP, las Comisiones de Atención a Víctimas (CAV); así como con los organismos públicos nacionales o estatales, dentro del marco legal aplicable, facilitando siempre su labor.

- ❖ Ordenar las medidas de protección idóneas durante la investigación cuando las víctimas directas e indirectas se encuentren en situación de riesgo como consecuencia del ejercicio de la libertad de expresión.
- ❖ Atender a las víctimas de hechos que la ley señale como delito cometido contra la libertad de expresión, con estricto apego a los derechos humanos reconocidos en la CPEUM, en los tratados internacionales y de acuerdo a los principios establecidos en la Ley General de Víctimas (LGV).
- ❖ Canalizar y en su caso gestionar ante otras instituciones apoyo para la víctima o persona ofendida que permitan garantizar la vida, integridad, libertad y su seguridad.
- ❖ Llevar a cabo las diligencias necesarias e idóneas para la investigación de los delitos, a fin de esclarecer los hechos y someter al juicio de las autoridades jurisdiccionales correspondientes a las personas responsables de cometer delitos contra las personas dedicadas al periodismo, abatiendo así la impunidad en los delitos cometidos en contra de la libertad de expresión, procurando en todo momento la reparación del daño a las víctimas.

6. Políticas de operación

1. La o el AMP deberá actuar bajo los principios de certeza, legalidad, objetividad, imparcialidad, eficiencia, profesionalismo, honradez, lealtad, disciplina y respeto a los derechos humanos, ello en aras de una debida diligencia y al debido proceso.
2. La o el AMP deberá tratar con dignidad y respeto a la persona periodista u ofendida y evitar en todo momento un trato o conducta que implique violaciones a los derechos humanos, revictimización y discriminación de cualquier índole.
3. La o el AMP deberá analizar en todos los casos que se presenten a su conocimiento, todas las líneas de investigación que permitan determinar lo sucedido e identificar a las personas responsables, priorizando la posible conexión entre la agresión y/o delito, así como el ejercicio de la labor periodística de la víctima.
4. La o el AMP dependiendo del caso concreto y de la complejidad de la investigación a su cargo, se apoyará de un análisis de contexto que permita hacer una revisión exhaustiva del trabajo periodístico de la víctima, el contexto político, social, cultural, delincuencial y económico en el que se desempeñaba y las personas responsables e intereses identificados en el trabajo periodístico y el contexto. Dicho análisis de contexto permitirá a la o el AMP identificar líneas de investigación que auxiliarán su labor de conducción (para mayor información ver Anexo 2 Lineamientos para la elaboración del análisis de contexto en la investigación de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión).
5. La o el AMP no deberá discriminar a una persona o a un grupo de personas en razón de su condición étnica, migratoria, de género, por edad, por discapacidad, condición social, salud, religión, opiniones, preferencia sexual, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.
6. Cuando la persona periodista u ofendida pertenezca a un grupo que históricamente se encuentra en situación de vulnerabilidad, se identifique como parte de la comunidad lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero, travesti e intersexual (LGBTTTI), como migrante o miembro de alguna comunidad indígena, el personal sustantivo deberá brindarles la atención conforme al protocolo de actuación correspondiente, considerando en todo momento una perspectiva transversal de derechos humanos, con énfasis en perspectiva de género y un enfoque multicultural.
7. En los casos en que la persona periodista u ofendida sea mujer, el personal sustantivo al que está dirigido el presente Protocolo deberá considerar un enfoque con perspectiva de género en la totalidad de su actuación, considerando en todo momento los factores de vulnerabilidad adicional que pudiesen haberse presentado en la agresión y sus circunstancias particulares, y en su caso, aplicar los protocolos existentes en materia de investigación de violencia sexual, así como cuando se solicite que la investigación sea atendida por persona del sexo opuesto, se procurará en la medida de las capacidades institucionales, atender dicha petición.
8. Cuando la víctima o persona ofendida manifieste tener nacionalidad de un país extranjero, la o el AMP deberá dar aviso a la brevedad a las autoridades consulares correspondientes de acuerdo a lo dispuesto por la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, el CNPP y demás disposiciones aplicables.
9. Cuando por las condiciones en que se encuentre a la víctima o persona ofendida, sea necesaria su atención médica o psicológica, la o el AMP canalizará de manera inmediata a la persona a las instituciones que le proporcionen dicha atención a fin de garantizar su integridad física y emocional.

10. Se analizará la situación de riesgo y vulnerabilidad de la víctima o persona ofendida, para la aplicación de medidas de protección.
11. La o el AMP deberá dar a conocer a la víctima o persona ofendida la existencia del MPPDDHP que coordina la Secretaría de Gobernación, explicando los procesos de incorporación (ordinario o extraordinario), el tipo de medidas (medidas preventivas, medidas de protección y medidas urgentes de protección) y el contacto con el personal especializado de dicha institución. En caso de considerarlo necesario por las características del hecho denunciado y con previo consentimiento de la víctima o persona ofendida, dará aviso inmediato a la Unidad de Recepción de casos y Reacción inmediata del MPPDDHP.
12. La o el AMP deberá hacer constar por escrito la decisión de la persona periodista u ofendida de no continuar con las medidas de protección o su incorporación al MPPDDHP a fin de ajustar su actuación al respeto irrestricto de los derechos humanos de la persona ofendida o la víctima y por ende dar seguridad jurídica a las actuaciones ministeriales.
13. El personal responsable de la aplicación del presente protocolo, deberá hacer de conocimiento a la víctima o persona ofendida las atribuciones y competencia de la CAV, según corresponda de acuerdo a lo dispuesto a la LGV. En los casos que así proceda y previo consentimiento de la víctima, se dará vista a dichas autoridades para que, en ejercicio de sus atribuciones, den el seguimiento correspondiente al caso y designe una Asesora o Asesor Jurídico.
14. En los casos que corresponda, la o el AMP deberá informar de manera clara y completa a la víctima o persona ofendida sobre los diversos Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal (MASCMP) que prevé la legislación penal vigente, para que este tome una decisión informada sobre el destino de su procedimiento.
15. Todo el personal responsable de la aplicación del presente protocolo deberá colaborar y coordinarse con las autoridades del MPPDDHP, de las CAV u organismos autónomos de derechos humanos correspondientes, a efecto de garantizar que los derechos de la víctima o persona ofendida sean respetados durante todo el procedimiento de investigación y judicialización.
16. La o el AMP deberá garantizar el derecho de las víctimas o persona ofendidas a conocer las líneas de investigación y avances en la misma, así como a participar en la misma de conformidad con la legislación vigente en la materia. Para este efecto propiciará la existencia de reuniones periódicas con las víctimas o personas ofendidas y/o sus representantes a efecto de dar a conocer el estado de la investigación y la perspectiva de la misma.
17. Considerando la facultad constitucional de la PGR de conocer conductas delictivas que corresponden de manera originaria al fuero común, en aquellos casos en que exista una duplicidad de investigaciones a nivel federal y estatal, la o el AMP deberá establecer una coordinación permanente con las autoridades estatales a fin de obtener y compartir la información relacionada con los delitos de su conocimiento.
18. La o el AMP tomará en consideración la jurisprudencia, nacional e internacional, en la materia de libertad de expresión y de investigación de delitos.
19. La o el AMP deberá realizar todas aquellas acciones tendentes a reparar de manera integral y efectiva el daño o menoscabo que ha sufrido la víctima o persona ofendida, por la comisión de algún delito de conformidad con la ley aplicable.
20. En el momento procesal oportuno, la o el AMP, cuando no se corrobore la existencia de un delito cometido

contra la libertad de expresión, persona o instalación, que dolosamente afecte, limite o menoscabe el derecho a la información o a la libertad de expresión, orientará a la persona periodista u ofendida, respecto de qué instituciones le pueden proporcionar algún tipo de asistencia de acuerdo a sus necesidades.

7. Roles de Participantes

Responsable	Descripción
Agente del Ministerio Público	Recibe las noticias sobre hechos con apariencia de un delito que atenta contra la libertad de expresión, ejerce la conducción y mando para investigarlas con la finalidad de acreditar la existencia del delito y la responsabilidad así como recabar los datos de prueba que sustenten la solicitud de reparación del daño en favor de la víctima.
	Coordina las acciones con personal de la Policía y con los servicios periciales durante el trámite de la investigación.
	Ordena a personal de la Policía y a sus auxiliares, en el ámbito de su competencia, la práctica de actos de investigación conducentes para el esclarecimiento del hecho delictivo, así como analizar las que dichas autoridades hubieren practicado.
	Requiere informes o documentación a otras autoridades y a particulares, así como solicitar la práctica de peritajes y diligencias para la obtención de otros datos de prueba.
	Preserva, ordena o supervisa, según sea el caso, la aplicación y ejecución de las medidas necesarias para impedir que se pierdan, destruyan o alteren indicios, huellas o vestigios del hecho delictuoso; así como los instrumentos, objetos o productos del delito una vez que tenga noticia del mismo, así como cerciorarse de que se han seguido las reglas y protocolos para su preservación y procesamiento.
	Solicita se lleven a cabo y se promuevan las acciones necesarias para que se provea la seguridad y proporcionar el auxilio a víctimas, personas ofendidas, testigos, personal de los Órganos Jurisdiccionales, policías, personal pericial y, en general, a quienes participen y con motivo de su intervención en el procedimiento, cuya vida o integridad corporal se encuentren en riesgo inminente.
	Determina el archivo temporal y el no ejercicio de la acción penal, así como ejercer la facultad de abstenerse de investigar.
	Ejerce la acción penal cuando existan elementos suficientes para acreditar el hecho que sea constitutivo de un delito, así como la responsabilidad de que la persona imputada lo cometió.

Personal de la Policía	Practica todas las diligencias necesarias que permitan el esclarecimiento de los hechos con apariencia de delito y la identidad de la persona imputada.
Responsable	Descripción
	<p>Realiza detenciones en los casos que prevé la CPEUM, haciendo saber a la persona detenida los derechos que esta le otorga.</p> <p>Realiza constancia de cada una de sus actuaciones y lleva el control y seguimiento de estas.</p> <p>Recibe y preserva todos los indicios y elementos de prueba que la víctima o persona ofendida aporten para el esclarecimiento de los hechos y la responsabilidad de la persona imputada, informando de inmediato a la o el AMP.</p> <p>Emite el Informe Policial Homologado y demás documentos, de conformidad con las disposiciones aplicables.</p>
Personal Pericial	Aporta el sustento científico técnico de la investigación, da asesoría técnico-científica con base en conocimiento especializado, procesa y valora los indicios o elementos materiales que sirven de base para la emisión de los dictámenes.
Analista de Información	Elabora análisis de contexto.

8. Principios de Actuación

Como ya se mencionó anteriormente, toda investigación se regirá por los principios de certeza, legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, imparcialidad, lealtad, honradez, disciplina y respeto a los derechos humanos reconocidos en la CPEUM y los instrumentos internacionales ratificados por el Estado Mexicano, para asegurar el debido proceso.

PERSPECTIVA DE ENFOQUE DIFERENCIADO

La o el AMP deberá aplicar un enfoque diferencial y especializado en todas sus actuaciones, haciendo valer en todo momento el derecho a la igualdad y diversidad. El análisis con dicho enfoque le permitirá abordar el hecho delictivo de manera integral, ponerlo en contexto y comprender la violencia ejercida contra las personas periodistas por cualquier condición, mediante la consideración de los motivos que pudieron causar una agresión.

La o el AMP deberá buscar en todo momento identificar si en el caso concreto existieron impactos diferenciados por cualquier condición, en la conducta que se investiga.

En este sentido, el impacto diferenciado implica revisar si existió un contexto de desigualdad en razón de género y/o situaciones asimétricas de poder en el ejercicio a la libertad de expresión.

En los casos en que la víctima o persona ofendida así lo solicite, la o el AMP procurará asignar personal del mismo sexo para la atención y seguimiento del proceso, siempre dentro de las posibilidades de la institución.

La o el AMP, deberá aplicar transversalmente, aquellos protocolos en materia de investigación y atención a víctimas existentes, de acuerdo a las características de la víctima o persona ofendida, así como de los delitos investigados.

PERSPECTIVA DE INTERCULTURALIDAD

Cuando la víctima o persona ofendida manifieste pertenecer a una comunidad indígena, se deberá ajustar la actuación de la o el AMP procurando en todo momento considerar los elementos de la cultura y contexto de la víctima o persona ofendida en la conducción de la investigación.

La o el AMP deberá allegarse de lo necesario para comprender la cultura y contexto de la víctima o persona ofendida, implicaciones de su actuación y las particularidades del ejercicio periodístico en el contexto indígena y de la región donde sucedieron los hechos.

En caso de que el asunto involucre una víctima indígena, se deberá solicitar la presencia de un intérprete que conozca su lengua y su cultura para que lo acompañe durante el proceso.

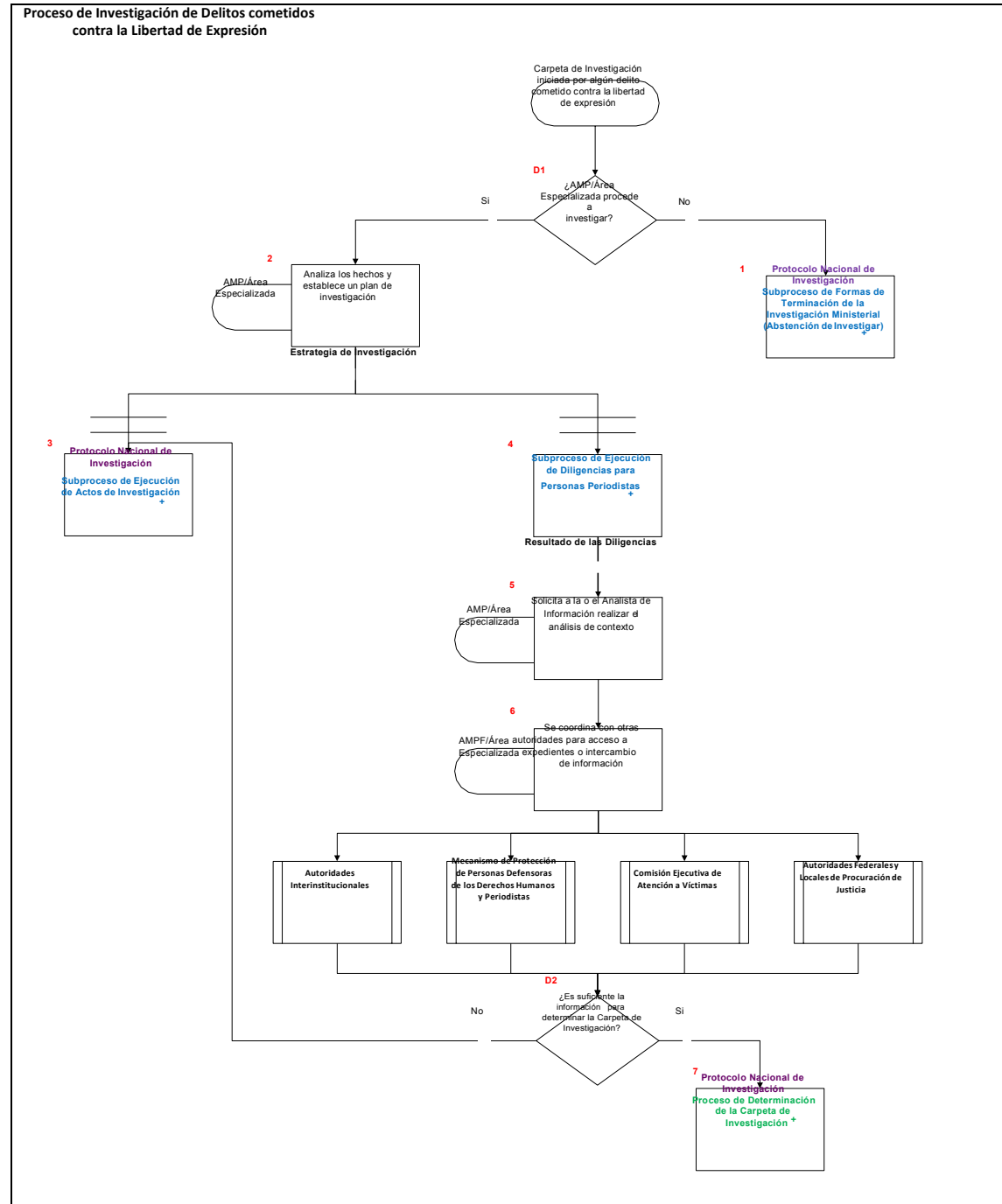
PARTICIPACIÓN DE PERSONAS DE NACIONALIDAD EXTRANJERA

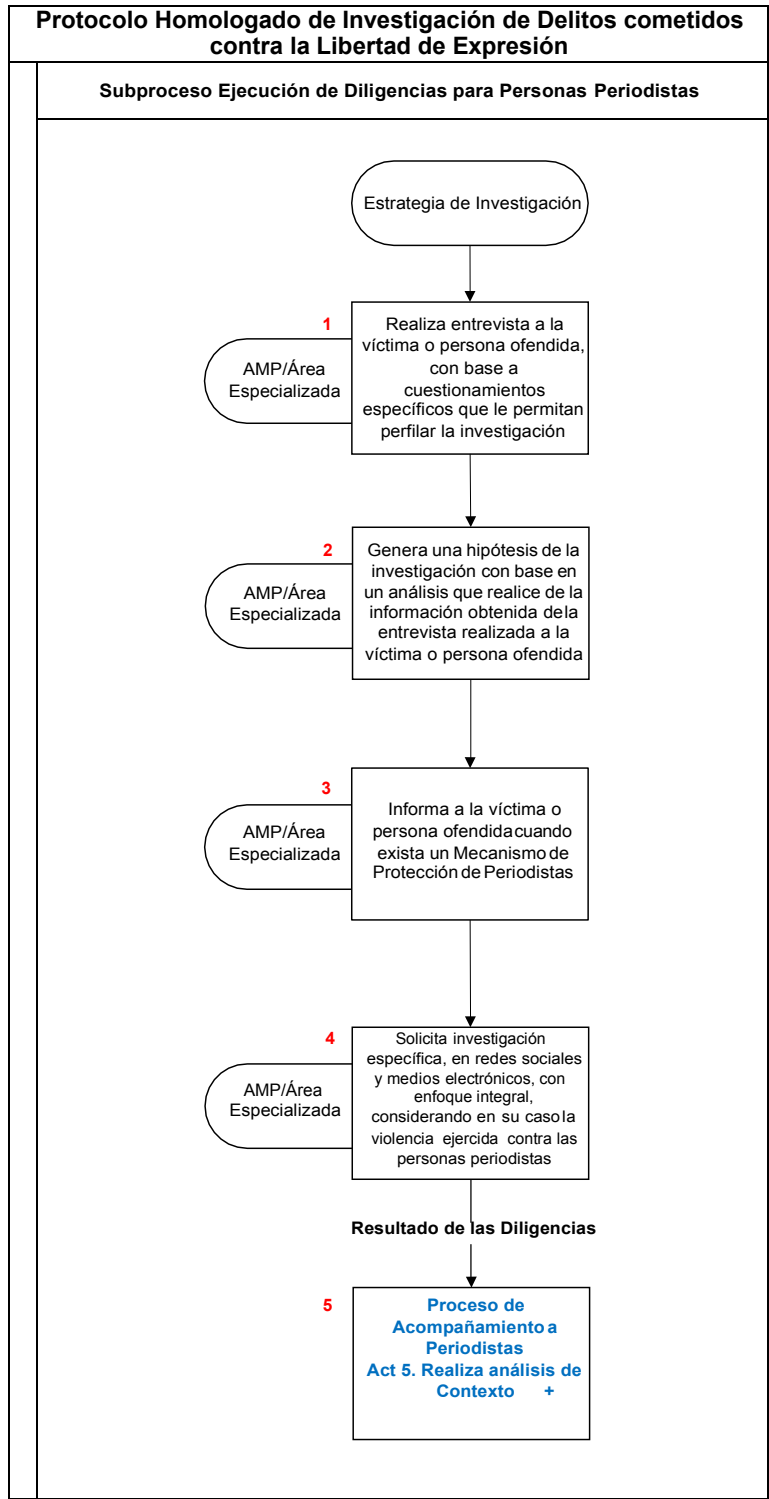
Cuando la víctima o persona ofendida manifieste ser de nacionalidad extranjera, la o el AMP le hará saber de inmediato el derecho que tiene a que se notifique a la representación consular de su país sobre el inicio de la carpeta de investigación.

En caso de que la víctima o persona ofendida no entienda el idioma español, la o el AMP solicitará inmediatamente un traductor en la lengua correspondiente.

9. Modelado de Procesos Diagramas

Protocolo Homologado de Investigación de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión





Procedimiento

INICIO DE LA INVESTIGACIÓN

CONOCIMIENTO DE HECHOS

La investigación inicia con el conocimiento de hechos con apariencia de delito cometido contra una persona o instalación, que dolosamente afecte, limite o menoscabe el derecho a la información o a la libertad de expresión, de la cual puede conocer la o el AMP a través de:

- Denuncia de la víctima o persona ofendida, de cualquier persona, organismo de derechos humanos, nacional o internacional, u organización de la sociedad civil.
- De oficio a partir de los informes policiales, vistas judiciales, o comunicación de cualquier autoridad.

Cualquier otro medio de información que dé a conocer la comisión de un hecho con apariencia de delito que atente contra la libertad de expresión, por ejemplo un correo electrónico o incluso una denuncia anónima.

Nota: La o el AMP puede iniciar la investigación y remitirla en su oportunidad al área especializada en razón de competencia; o de no existir un área especializada, la o el AMP que corresponda iniciará y determinará la investigación; asimismo el área especializada puede iniciar directamente la investigación por algún delito cometido contra la libertad de expresión.

CALIFICACIÓN INICIAL

Cuando la o el AMP recibe la noticia del hecho con apariencia de delito que atenta contra la libertad de expresión deberá analizar la información a su alcance y determinar si los hechos de su conocimiento constituyen un delito y, en su caso, determinar si este debe ser investigado de oficio o por querella de la persona ofendida de acuerdo a lo establecido en la ley correspondiente.

En aquellos casos en los que se identifique una conducta delictiva que deba ser investigada de oficio o en los delitos de querella en los que se cuente con la denuncia de la víctima o parte ofendida, la o el AMP dará inicio a la investigación y calificará de manera preliminar los hechos de su conocimiento.

Cuando de conformidad con la legislación aplicable, se requiera de querella de la víctima u ofendido para el inicio del procedimiento penal ordinario y la noticia del hecho se haya recibido por información distinta a la proporcionada por la persona facultada para hacerla del conocimiento a la o el AMP generará un registro administrativo y recabará toda la información que se encuentre a su alcance, para que en caso de que se presente la querella correspondiente se tome en consideración dicha información en la carpeta de investigación.

En caso de que los hechos denunciados no constituyan una conducta punible por la ley penal, la o el AMP deberá abstenerse de investigar a través de un acuerdo de abstención de investigación.

TURNO AL ÁREA ESPECIALIZADA

En aquellos casos en que la o el AMP que recibe la noticia del hecho no pertenezca al área especializada en investigación de delitos cometidos contra la libertad de expresión, deberá realizar aquellos actos de investigación urgentes e inaplazables para salvaguardar los indicios necesarios de conformidad con el presente protocolo y después remitir la carpeta de investigación a dicha área especializada.

En caso de no existir área especializada o equivalente en materia de libertad de expresión, la o el AMP deberá continuar con la investigación de los hechos.

Las o los AMP están obligados a recibir las denuncias y/o querellas que les sean presentadas independientemente de la competencia por fuero o materia.

ESTRATEGIA

Una vez iniciada la investigación o al recibir la denuncia o querella por comparecencia de la víctima u ofendido la o el AMP deberá de analizar de manera inmediata toda la información con la que cuenta con la finalidad de generar una estrategia de investigación.

Para determinar la estrategia de investigación, la o el AMP considerará, de manera enunciativa y no limitativa, los siguientes cuestionamientos que le permitan perfilar la investigación:

Para entrevistar a la víctima o persona ofendida:

- ¿Cuál es la actividad de la víctima o persona ofendida?
- ¿Existió alguna amenaza o agresión previa? Y en su caso, ¿Existió una denuncia, queja o registro al respecto? En caso afirmativo, ¿Cuál fue la determinación en la misma? ¿Previamente contaba con alguna medida de protección?
- ¿En qué condiciones físicas o psicológicas se encuentra la víctima o persona ofendida?
- ¿Requiere asistencia médica o ayuda emocional?
- ¿Existen víctimas indirectas o potenciales?
- ¿Es posible identificar algún factor de riesgo para la vida o integridad de la víctima o persona ofendida?
- ¿Es necesario dictar medidas de seguridad y precautorias?
- ¿Es necesario notificar al MPPDDHP?
- ¿Es necesario notificar a las CAV que corresponda?
- ¿Pertenece a un grupo en situación de vulnerabilidad? ¿Considera que su condición de vulnerabilidad, fue factor relevante en la comisión del delito?
- ¿Pertenece a una comunidad indígena?

- ¿Es de nacionalidad extranjera?
- ¿Es una persona migrante?
- ¿Es una persona adulta mayor que requiera asistencia especial?
- ¿Es necesaria la aplicación de una investigación con perspectiva de género o enfoque diferenciado por alguna condición específica?
- ¿Fue víctima de alguna agresión sexual?
- ¿Fue víctima de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes?
- ¿Fue víctima de desaparición forzada/cometida por particulares?
- ¿El delito denunciado es susceptible de atención a través de MASCMP?

Respecto de la competencia en materia de libertad de expresión:

- ¿La víctima o persona ofendida identifica alguna relación de la conducta delictiva con su actividad periodística?
- ¿La víctima o persona ofendida hizo alguna publicación o investigación en la que señalara a la persona imputada?
- ¿Qué fuentes informativas cubre y sobre qué temas?
- ¿En qué lugar de la República ejerce su actividad periodística?
- ¿A través de que medio o forma ejerce su actividad periodística?
- ¿Hace cuánto tiempo ejerce su actividad periodística?
- ¿Existen trabajos periodísticos de la víctima o persona ofendida que requieran ser consultadas?
- ¿Existen fuentes periodísticas que deban de ser consideradas como víctimas potenciales o que requieran protección derivado de los hechos?

Respecto del contexto:

- ¿Cuál es la situación en materia de agresiones a periodistas en la región donde ocurrieron los hechos?
- ¿Cuál es el contexto delictivo en la entidad federativa en donde ocurrieron los hechos?
- ¿Cuál es el contexto geográfico, social y económico del lugar en donde sucedieron los hechos?
- ¿Cuál es el contexto político en el lugar que ocurrieron los hechos?
- ¿Cuál es la relación de las autoridades locales o de otro nivel con la víctima o persona ofendida?
- ¿Con cuáles actores sociales, políticos o económicos tenía relación la víctima o persona ofendida?
- ¿Existen antecedentes de ataques en contra del medio en el cual labora?

Respecto de la persona imputada:

- ¿Existe algún señalamiento sobre su identidad?

- ¿Es un particular o persona al servicio del estado?
- Si es persona al servicio del estado ¿En qué nivel de gobierno presta sus servicios? ¿En qué institución, dependencia, entidad o corporación se encuentra laborando? y ¿Realizó la conducta delictiva en ejercicio de sus funciones?
- ¿Se conoce su ubicación?
- ¿Se encuentra en posición de causar daños a la víctima o persona ofendida?
- ¿Se encuentra en posibilidad de causar daños a terceras personas?
- ¿Se encuentra en contacto directo con la víctima o persona ofendida?
- ¿Es posible identificar a la persona imputada relacionada con algún grupo de delincuencia organizada?

Respecto a la evidencia:

- ¿Con qué pruebas se cuenta?
- ¿La declaración de la víctima o persona ofendida provee de información que permita la identificación de evidencias?
- ¿En qué lugar sucedieron los hechos?
- ¿Existen videgrabaciones que pudieran ser utilizadas como evidencia de los hechos? En caso positivo, ¿A quién pertenecen esas videgrabaciones? y ¿Cuánto tiempo resguardan la información?
- ¿Existen cámaras de videgrabación de seguridad pública cercanas al lugar de los hechos?
- ¿Existen registros de llamada de emergencia?
- ¿Existió alguna autoridad como primer respondiente de los hechos?
- ¿Existen testigos que presenciaron los hechos? Si es así, ¿Se cuentan con datos para su localización?
- ¿Las o los testigos tienen alguna relación con la víctima o persona ofendida?
- ¿Existe alguna situación de riesgo para las o los testigos? En caso positivo, ¿Qué medidas deben tomarse para garantizar su seguridad?
- ¿Existen evidencias físicas u objetos que estén vinculados con los hechos? (ejemplo armas, vehículos, computadoras, teléfonos celulares, etc.).
- ¿Cuáles exámenes periciales se deben de practicar para la identificación de evidencia? (ejemplo huellas digitales, manchas hemáticas, videos, audios, etc.).
- ¿Se cuenta con documentación que pueda ser utilizada? En caso positivo, ¿Cuáles son las características de las mismas?
- ¿Existen antecedentes de la investigación de los hechos en el fuero común o en algún organismo público en materia de derechos humanos?
- ¿Existen evidencias que puedan desaparecer con el paso del tiempo?
- ¿Requiere la realización de peritajes especiales o irreproducibles?

Respecto de casos que involucren medios electrónicos o redes sociales:

- ¿Qué tipo de medio de comunicación o electrónico fue utilizado?
- ¿Se debe realizar la fijación de las imágenes y cuentas utilizadas?
- ¿Se requiere la participación de algún especialista para analizar la información?
- ¿Qué especialidad se requiere para analizar la información?
- En caso de utilización de redes sociales, ¿La cuenta de origen sigue activa?
- ¿Es necesario solicitar información al proveedor del servicio?
- ¿Existen antecedentes de las cuentas utilizadas para la comisión del delito?
- ¿Existe algún elemento que permita la identificación del sujeto activo?
- ¿La víctima o persona ofendida sabe quien cometió la agresión o conoce la cuenta utilizada para tal efecto?

Las preguntas relacionadas anteriormente (que son de carácter enunciativo y no limitativo), deben de ser una guía para la o el AMP a efecto de determinar la información con la que se cuenta y aquella que debe recabarse como parte de la investigación para determinar el delito y la responsabilidad de la persona imputada.

TEORÍA DEL CASO

La o el AMP deberá analizar los hechos denunciados y establecer si se ajustan a determinado delito, a efecto de determinar una línea de investigación adecuada, tomando en consideración la información que se obtuvo de manera inicial y las circunstancias en las que la víctima o persona ofendida lleva a cabo su actividad relacionada con la libertad de expresión, con lo cual genera su teoría del caso.

La o el AMP a efecto de garantizar una investigación integral de los hechos, deberá siempre agotar la hipótesis que contemple en su teoría del caso, a efecto de que vincule en la investigación, el trabajo periodístico con la agresión sufrida por parte de la víctima.

En caso de que no se acredite la relación del delito con la actividad periodística, la o el AMP deberá fundar y motivar su determinación de incompetencia ya sea en razón del fuero, especialidad o territorio según sea el caso.

ACCIONES INMEDIATAS

A partir de la información obtenida, la o el AMP establecerá las acciones inmediatas necesarias para garantizar en todo momento los derechos de las víctimas o persona ofendidas, en especial aquellas que deban realizarse con la finalidad de garantizar su vida e integridad personal, entre ellas:

- De acuerdo a la situación de riesgo, se deberá informar a la víctima o persona ofendida de manera clara y oportuna sobre la existencia del MPPDDHP.

Nota: Dicha explicación deberá contener cuando menos cuáles son las competencias y estructura del MPPDDHP, tipos de procedimientos, datos de contacto y ubicación, así como los tipos de medidas de protección con las que cuenta.

En caso urgente, la o el AMP, previo consentimiento informado de la víctima o persona ofendida, podrá hacer la canalización inmediata vía telefónica con el personal del MPPDDHP a fin de garantizar su vida e integridad personal.

Sin perjuicio de lo anterior, la o el AMP dictará aquellas medidas de protección que correspondan, de acuerdo a la situación de riesgo de la víctima o persona ofendida.

- En cuanto a la víctima o persona ofendida, se deberá informar de manera clara y oportuna los derechos con los que cuenta de conformidad con las leyes aplicables.

Igualmente, deberá informar la existencia de las CAV, de los servicios con los que cuenta de conformidad con la LGV, en materia de ayuda inmediata, asistencia social y económica, atención médica y acompañamiento jurídico y psicológico.

Se deberán proporcionar a la víctima o persona ofendida los datos de contacto y ubicación de las CAV.

En caso urgente, la o el AMP previo consentimiento informado de la víctima o persona ofendida podrá hacer la canalización inmediata vía telefónica con el personal de la CAV.

La o el AMP dará aviso por escrito a las CAV sobre el inicio de las investigaciones para los efectos legales correspondientes.

- En casos de personas desaparecidas, la o el AMP deberá aplicar inmediatamente el Protocolo Homologado de Investigación para los Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares de conformidad a lo dispuesto en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas; y solicitando la aplicación del mecanismo de búsqueda urgente a que refiere dicho protocolo.
- En los casos en donde la persona denuncie la comisión del delito de tortura o de los elementos de información con los que cuente la o el AMP, permitan suponer fundamentalmente la existencia de dicho delito, se deberá aplicar lo dispuesto por el Protocolo Homologado para la Investigación del Delito de Tortura, de conformidad a lo dispuesto a la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
- En los casos en que se presente un delito relacionado con violencia sexual, el personal encargado de la investigación deberá aplicar lo dispuesto por el Protocolo de Investigación Ministerial, Pericial y Policial con perspectiva de Género para la Violencia Sexual.

La o el AMP deberá dar relevancia a la recolección de evidencia documental sobre el trabajo periodístico de la víctima o persona ofendida, identificar y entrevistar a quienes eran sus compañeros (ejemplo colegas de redacción, edición entre otros) y recolectar la demás evidencia relacionada con los hechos.

PLANEACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

La o el AMP integrará un equipo de investigación con sus auxiliares, con el que revisará paso a paso la estrategia de investigación, asignará tiempos y responsabilidades de manera oportuna a partir de la información obtenida hasta el momento, así como las hipótesis planteadas y las líneas de investigación.

El personal que integre el equipo de investigación procurará ajustarse, dentro de las posibilidades, a las circunstancias especiales que requiera la calidad de cada una de las víctimas o personas ofendidas.

De manera enunciativa y no limitativa, se deberán considerar las siguientes diligencias de acuerdo a las características de cada caso concreto.

En relación con los datos de prueba:

- **Entrevistas con testigos:** La o el AMP deberá instruir a personal de la Policía que recabe la entrevista de testigos y/o terceros que pudieran aportar información relevante para la investigación.

Se deberá analizar la información proporcionada por la víctima o persona ofendida y, en su caso, solicitar a personal de la Policía que se avoque a la localización de las personas señaladas para efecto de tomar sus declaraciones de manera inmediata.

La o el AMP deberá orientar al personal de la Policía respecto a la información relacionada con las o los testigos de quienes se tenga conocimiento y de preguntas pertinentes a realizarse, a efecto de que las entrevistas permitan obtener información útil dentro de los registros de la carpeta de investigación.

- **Obtención de videgrabaciones o material fotográfico:** La o el AMP solicitará al personal de la Policía la identificación de cualquier material, incluso de fuentes abiertas, de videgrabación o fotografía que pudiera ser relevante para la investigación de los hechos.

En caso de identificar material relevante para la investigación ordenará inmediatamente el resguardo y extracción de la información, garantizando en todo momento el buen manejo y evitar su contaminación a través de la cadena de custodia.

En caso de que alguna persona o institución en posesión de las videgrabaciones se negare a aportarlas, la o el AMP deberá valorar la necesidad de solicitar las autorizaciones judiciales correspondientes para su aseguramiento o la aplicación de las medidas de apremio que establece la ley, para su obtención.

En todo momento, la o el AMP instruirá al personal de la Policía para que realice las acciones de manera inmediata a efecto de evitar la pérdida o destrucción de evidencia por el paso del tiempo.

- **Solicitud de información a autoridades:** En caso de ser necesario, la o el AMP solicitará al personal de la Policía la obtención de información relevante en poder de cualquier autoridad.

Cuando corresponda, la o el AMP solicitará dicha información por escrito y tendrá las facultades correspondientes para ejercer las medidas de apremio establecidas en la ley.

En los casos en que la persona imputada trabaje al servicio del estado, se requerirá su expediente personal y antecedentes, así como álbumes fotográficos, detalles de sus atribuciones, empleo cargo o comisión público a la unidad administrativa, órgano, área o equivalente de la dependencia, de la institución a la que pertenece.

En caso de que exista una queja o recomendación emitida por algún organismo público de derechos humanos, se solicitará copia del expediente a efecto de incorporar aquellos elementos de prueba que sean útiles para la investigación de los hechos.

- **Inspección del lugar de los hechos:** De acuerdo a las circunstancias del caso, la o el AMP solicitará al personal de la Policía y a personal Pericial que corresponda, la realización de una inspección del lugar de los hechos o de otro lugar para la obtención de evidencias e información relevante para la investigación.

La o el AMP orientará a quienes realicen las inspecciones para identificar los objetivos y en aquellos casos en los que se considere de especial relevancia su presencia.

Al practicarse una inspección, personal de la Policía entrevistará a las personas que se encuentren presentes en el lugar y que puedan proporcionar algún dato útil para el esclarecimiento de los hechos.

De las inspecciones se procurará obtener croquis o planos de los lugares.

- **Actos de investigación que requieren autorización judicial:** De acuerdo a las circunstancias de cada investigación, la o el AMP deberá solicitar autorización judicial para la realización de técnicas de investigación que impliquen alguna afectación a los derechos establecidos por la CPEUM; entre ellas, se puede destacar la intervención de comunicaciones privadas, geolocalización, registros telefónicos de la víctima (cuando no exista previo consentimiento) o de la persona imputada, órdenes de cateo, toma de muestras personales, exhumación de cadáveres, entre otras que sean necesarias para obtener evidencia relevante para la investigación.
- **Dictámenes periciales:** La o el AMP ordenará la realización de aquellos dictámenes periciales que sean necesarios para esclarecer los hechos u obtener evidencias que puedan ser utilizadas para acreditar el delito y la responsabilidad.

La o el AMP deberá considerar la necesidad de realizar peritajes en materia de antropología con perspectiva de género y/o interculturalidad; así como peritajes especiales o

irreproducibles, cuando lo considere necesario.

La o el AMP procurará tener contacto directo con el personal Pericial que fue designado a efecto de garantizar que la solicitud presentada se realice acorde a las necesidades de la investigación y que los resultados permitan esclarecer los hechos investigados.

En caso de que la víctima o la persona imputada ofrezcan un peritaje para abonar al esclarecimiento de los hechos, sin mayor trámite, la o el AMP recibirá la documentación correspondiente y, en su caso, la información y los datos de prueba que ahí consten, los tomará en consideración respecto al ejercicio de la acción penal y las subsiguientes decisiones procesales.

- **Declaración de las personas imputadas:** Solo cuando se considere excepcionalmente necesario para el esclarecimiento de los hechos o para corroborar información obtenida en la investigación, se solicitará la comparecencia de las personas imputadas para recabar su declaración respecto a los hechos. La o el AMP deberá asegurarse de que tengan previo acceso a los registros que integran la carpeta de investigación y, de igual forma, se respeten en todo momento los derechos de la persona imputada, explicándole que debe contar durante su declaración con una defensora o defensor público o particular.

Siempre será indispensable ponderar la necesidad de obtener la declaración de las personas imputadas ello de acuerdo a la información que se pretenda obtener de la persona y del mismo modo no comprometer la información y el sigilo con el cual debe ser realizada la investigación.

- **Redes sociales y medios electrónicos:** En aquellos casos en que los hechos denunciados se hayan consumado por medios electrónicos o redes sociales, la o el AMP solicitará de manera inmediata al personal de la Policía especializada en materia de ciberseguridad realice una investigación.

En especial, cuando se trate de redes sociales (ejemplo facebook, twitter, gmail, entre otros) solicitará la identificación de la cuenta de origen en la que se considere el nombre de usuario, la dirección IP, los datos públicos de la cuenta (nombre, ubicación, profesión, sexo, entre otros), la geolocalización, los contactos, redes de vínculos y análisis de la actividad de la cuenta (en especial el comportamiento de la misma, la interacción de quienes los usan, las publicaciones realizadas y el análisis de las imágenes publicadas) y todos aquellos datos que sean relevantes para la investigación.

La o el AMP deberá mantener un contacto directo e inmediato con el personal de la Policía a cargo de la investigación para la identificación de la persona imputada y fijar la evidencia necesaria para el esclarecimiento de los hechos.

Cuando los servidores de alguna plataforma electrónica se encuentren fuera del país, la o el AMP deberá solicitar de manera inmediata la información correspondiente de acuerdo a los tratados internacionales en la materia.

De ser necesario, se pedirá la autorización judicial correspondiente para la obtención de información de redes sociales.

Con relación a la libertad de expresión y el contexto:

- La o el AMP, deberá considerar el trabajo periodístico de la víctima o persona ofendida durante todas las etapas de la investigación a efecto de determinar si el delito de que se trata, se cometió contra la libertad de expresión.
- La o el AMP identificará los elementos que pudieran estar relacionados con los hechos delictivos con base en el análisis del trabajo periodístico que realiza la víctima o persona ofendida.
- La o el AMP deberá, en todo momento, fundamentar las investigaciones y actuaciones sobre el análisis y estudio de las circunstancias que rodean a la comisión del hecho delictivo.
- Se deberá valorar y tomar las medidas pertinentes para proteger la información y las fuentes periodísticas que posee la víctima o persona ofendida.
- Se deberán valorar en todos los casos las amenazas y agresiones previas ocurridas al momento de la denuncia.
- **Análisis de contexto:** En aquellos casos en que la relación entre el hecho delictivo y el ejercicio de la libertad de expresión no se encuentren acreditados con la evidencia con la que cuente la investigación, así como cuando resulte necesario para el esclarecimiento de los hechos la o el AMP deberá valorar la pertinencia de requerir la elaboración de un análisis de contexto que identifique, a partir de fuentes abiertas y elementos de prueba con los que se cuenten en la carpeta de investigación, las circunstancias delictivas, económicas, sociales, políticas y culturales del lugar en donde desarrollaba su actividad la víctima o persona ofendida), así como la situación de la libertad de expresión en el lugar. Dicho análisis deberá revisar a detalle también el trabajo periodístico de la víctima o persona ofendida, y en su caso, del medio de comunicación en donde participa o de otros medios locales, a efecto de identificar posibles líneas de investigación relacionadas con su actividad (para mayor información ver Anexo 2 Lineamientos para la elaboración del análisis de contexto en la investigación de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión.

En relación a la víctima o persona ofendida:

- **Otras entrevistas:** En aquellos casos en que de la información obtenida con posterioridad a su primer entrevista, sea necesario obtener más información o realizar más o nuevas preguntas a la víctima o persona ofendida, la o el AMP realizará el citatorio correspondiente.

En todo momento se deberá valorar la necesidad de realizar esta entrevista, evitando una revictimización, garantizando que la información que se le requiera sea distinta a la ya aportada, que no pudo haber sido conocida en la declaración inicial y que se desprenda de los nuevos datos que se han obtenido con el avance de las investigaciones.

- **Mínima intervención y protección a la integridad de las víctimas o persona ofendida:** En la medida de lo posible, deberá procurarse que los dictámenes periciales o las entrevistas en los que esté involucrada la víctima o persona ofendida se realicen en el menor número de sesiones posibles de acuerdo a la naturaleza de los mismos y del hecho victimizante, para evitar la revictimización y/o victimización secundaria.

Durante la planeación, se deberá considerar la coordinación entre autoridades federales y estatales cuando sea necesario, así como la determinación sobre el ejercicio de la facultad de atracción.

ANÁLISIS DE CONTEXTO

La determinación de realizar el análisis de contexto depende de las evidencias recabadas inicialmente por la o el AMP. Si las evidencias son suficientes para acreditar el delito del que se trate no será necesaria la realización del análisis de contexto. Si de las evidencias recabadas la o el AMP advierte que su relación no está vinculada con la actividad periodística o que no existió dicho vínculo, no se realizará tal solicitud.

En caso que sea necesario contar con un panorama más amplio sobre la situación actual del ejercicio de la libertad de expresión, la situación de agresiones a la prensa en general o a periodistas en particular en el lugar de los hechos o de otros factores que vulneren el derecho a la información, la o el AMP solicitará a la o el Analista de información un estudio que permita establecer, delimitar o fortalecer líneas de investigación (para mayor información ver Anexo 2 Lineamientos para la elaboración del análisis de contexto en la investigación de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión).

En casos de homicidio, tortura o desaparición forzada de persona, la o el AMP deberá solicitar la realización de un análisis de contexto obligatorio.

El análisis de contexto deberá contener, cuando menos el estudio de la siguiente información:

- La incidencia delictiva y tipo de delitos cometidos en la región.
- Consideraciones de la situación de violaciones a los derechos humanos en la región.
- La incidencia y situación actual de los riesgos del ejercicio del periodismo en la región.
- Revisión y análisis del trabajo periodístico de la víctima o persona ofendida al momento de los hechos, hasta el periodo de tiempo previo que sea necesario de acuerdo a la información con la que se cuente en la investigación.
- El contexto económico, cultural, social y todos aquellos factores que permitan identificar las relaciones que inciden en la comisión de delitos en el lugar de los hechos.
- Identificar los personajes referidos o aludidos en el trabajo periodístico de la víctima o persona ofendida, así como las posibles causas de los hechos delictivos que se investigan, con motivo del ejercicio de la libertad de expresión.
- Identificar a que quienes actúan, los cuales pudieran estar relacionados con los hechos a partir del análisis de la información que se obtenga de su trabajo periodístico, o en su caso un mapeo de las o los actores e intereses.
- La posibilidad de casos similares o que puedan estar relacionados entre sí.

- Sugerencias, en caso de que existan, a la o el AMP sobre información que pueda ser relevante para la investigación y líneas de investigación a explorar.

La o el AMP y Analista de información deberán mantener reuniones periódicas para conocer los avances en la recopilación de la información y para orientar el trabajo de la persona que realiza el análisis de acuerdo a las particularidades del caso.

La valoración de la información por parte de las o los Analistas deberá ser entregada lo más pronto posible a la o el AMP para que sea incorporado a la carpeta de investigación.

La o el Analista responsable de la elaboración del análisis de contexto deberá mantener un archivo digital y escrito de los análisis entregados, que permita identificar casos, patrones de conductas y agentes que pudieran estar relacionados en más de un caso, para efecto de informar a la autoridad ministerial de manera oportuna.

GARANTÍA DE PARTICIPACIÓN Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA VÍCTIMA O PERSONA OFENDIDA

La o el AMP y sus superiores jerárquicos tienen la obligación de garantizar el derecho de la víctima o persona ofendida a estar informado del proceso de investigación, así como de participar y colaborar, directamente o a través de sus representantes, de manera activa en el mismo.

Se deberá informar, lo más pronto posible y dentro de las particularidades de cada investigación, a la víctima o persona ofendida sobre la estrategia y plan de investigación al inicio de esta y conforme se avance en las investigaciones y se obtenga información derivada de las diligencias planteadas. La o el AMP deberá realizar reuniones periódicas con la víctima, persona ofendida o sus representantes, a fin de que conozca la información contenida en la carpeta de investigación y la estrategia.

Asimismo, la o el AMP deberá valorar de manera oportuna y objetiva la realización de aquellas diligencias de investigación propuestas por la víctima o persona ofendida, directamente o a través de sus representantes.

Se deberán tomar las medidas necesarias para garantizar que la víctima o persona ofendida pueda participar en las diligencias que correspondan, en especial tomando en cuenta en todo momento su situación de seguridad y riesgo.

En todo momento se deberá considerar la no revictimización y/o victimización secundaria, por ejemplo: no requerir varias veces la misma información a la víctima o persona ofendida, evitar citar a una persona en diferentes ocasiones cuando puede realizarse en una sola cita, no dejar la carga de la prueba a la víctima u obstaculizar el acceso al expediente.

La víctima o persona ofendida podrá tener acceso a los registros de investigación durante el procedimiento. La o el AMP cuando considere que por su naturaleza, pueda estar comprometido el éxito

de la investigación, podrá solicitar a la o el Juez de Control que se decrete la reserva sobre la misma.

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN

La o el AMP y sus superiores jerárquicos deberán analizar la información que se obtenga de la práctica de las diligencias y reevaluar las hipótesis y líneas de investigación de manera periódica, a fin de garantizar una investigación exhaustiva.

Lo anterior, para determinar nuevas diligencias a realizarse o replantear la estrategia de investigación de acuerdo con el avance de las investigaciones, tomando en cuenta las aportaciones de la víctima o persona ofendida y, en su caso, los resultados del análisis de contexto.

Los datos de prueba obtenidos tienen valor en la investigación inicial o complementaria, solo adquieren calidad de prueba después de que son desahogadas ante el Órgano Jurisdiccional.

Los datos de prueba obtenidos tienen valor probatorio únicamente para que la o el AMP ejerza acción penal o formule la imputación.

Si la o el AMP con base en los datos de prueba acredita la posible participación de la persona imputada en el hecho que la ley señala como delito, determinará el ejercicio de la acción penal.

Para la determinación de la punibilidad debe establecerse si existió tentativa, autoría, participación u omisión, respecto de todas las personas que pudieran estar involucradas en los hechos.

PERSONAS IMPUTADAS AL SERVICIO DEL ESTADO

En los casos en que una persona al servicio del estado de cualquier nivel de gobierno se le señale como imputada en la comisión de un delito, la o el AMP, deberá tomar las medidas necesarias para garantizar que la investigación sea imparcial y se garantice el derecho a la verdad de la víctima o persona ofendida.

De manera enunciativa y no limitativa, se presentan algunas de las medidas que se pueden tomar de acuerdo al caso concreto:

- Garantizar que la persona investigada no tenga participación dentro de la investigación;
- Investigar la red de contactos e influencia de la persona investigada, a efecto de impedir que puedan participar en la investigación;
- Garantizar que se solicite de manera inmediata y sin demora la información que esté en poder de autoridades;
- Ejercer las facultades de investigación y medidas de apremio de manera inmediata;
- Solicitar al personal de la Policía que acuda personalmente y recabe directamente la información de su fuente, sin esperar a que la autoridad la rinda mediante oficio; y
- Dictar las medidas precautorias necesarias para evitar que la información se pierda, destruya o se altere.

La o el AMP deberá analizar las agravantes correspondientes a la responsabilidad de las personas al servicio del estado en la comisión de un delito, cuando lo haya ordenado, instigado, inducido, cometido directamente, o que pudiendo impedirlo no lo hubiera hecho, o el particular que lo cometa con consentimiento de la persona al servicio del estado; de acuerdo a la legislación aplicable.

CLASIFICACIÓN O RECLASIFICACIÓN DEL DELITO

La o el AMP, deberá valorar la información a su alcance a efecto de determinar el tipo penal de acuerdo a los hechos denunciados y a la información obtenida del desahogo de las diligencias correspondientes.

En todo momento durante el trámite de la investigación, la o el AMP podrá reclasificar el tipo penal por el que se realiza la investigación atendiendo a la información a su alcance y el resultado de las diligencias llevadas a cabo.

En aquellos casos en que se determine reclasificar el delito, la o el AMP informará oportunamente a la víctima o persona ofendida y tomará en cuenta su postura al respecto.

PROTECCIÓN DE LA VÍCTIMA O PERSONA OFENDIDA

IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN POR PARTE DE LA O EL AMP

En el caso en que la víctima o persona ofendida, manifieste que no se encuentra incorporado al MPPDDHP y manifieste que existe un riesgo a su vida e integridad personal, la o el AMP bajo su más estricta responsabilidad, determinará sobre la necesidad de dictar fundada y motivadamente la aplicación de las medidas de protección idóneas, de conformidad con lo establecido en el artículo 137, del CNPP.

Para este efecto, analizará de manera inmediata si existen condiciones de riesgo y/o vulnerabilidad para la víctima o persona ofendida, tomando en consideración los siguientes principios y criterios:

- Principio de protección: Considera primordial la protección de la vida, la integridad física, la libertad y la seguridad de las personas;
- Principio de necesidad y proporcionalidad: Las medidas de protección deben responder al nivel de riesgo o peligro en que se encuentre la persona destinataria, y deben ser aplicadas en cuanto sean necesarias para garantizar su seguridad o reducir los riesgos existentes de acuerdo a la penalidad;
- Principio de confidencialidad: Toda la información y actividad administrativa o jurisdiccional relacionada con el ámbito de protección de las personas, debe ser reservada para los fines de la investigación o del proceso respectivo; y
- Principio de oportunidad y eficacia: Las medidas deben ser oportunas, específicas, adecuadas y eficientes para la protección de la víctima o persona ofendida y deben ser otorgadas e implementadas a partir del momento y durante el tiempo que garanticen su objetivo.

Aspectos a considerar para determinar el riesgo:

- Las agresiones y amenazas previas al hecho;
- El medio de comunicación para el que labora o si trabaja de manera independiente;
- El tipo de fuente y/o temas de cobertura;
- Las publicaciones que afectaron intereses;
- Las investigaciones en curso que pudieran afectar intereses;
- La gravedad del delito;
- La posible persona agresora y las probables capacidades económicas, políticas y sociales de vulnerar a la víctima o persona ofendida, entre otras;
- El grupo en situación de vulnerabilidad al que pertenece;

Aspectos a considerar para determinar la vulnerabilidad:

- La edad;
- Si existe una discapacidad;
- La pertenencia a comunidades indígenas o a minorías;
- La victimización;
- La migración y el desplazamiento interno;
- El grado de pobreza;
- El sexo o el género de la víctima o persona ofendida.

A partir del análisis de dicha información y tomando en consideración la voluntad de la víctima o persona ofendida, la o el AMP dictará las medidas de protección idóneas de acuerdo al riesgo y la vulnerabilidad obtenida, respetando en todo momento lo dispuesto por el CNPP para tal efecto.

De manera inmediata, deberá hacer del conocimiento a la víctima o persona ofendida el tipo de medidas ordenadas en atención al riesgo obtenido. En ningún caso, se dictarán medidas que sean contrarias a la voluntad de la víctima o persona ofendida.

Si la víctima o persona ofendida no acepta las medidas de protección propuestas por la o el AMP, se deberá hacer constar por escrito tal circunstancia. No obstante, víctima o persona ofendida en cualquier momento podrá posteriormente solicitar las medidas de protección necesarias ante nuevas circunstancias de riesgo.

De manera inmediata, la o el AMP solicitará la aplicación de las medidas de protección a la autoridad o institución correspondiente y en los casos en que estas instituciones o autoridades no apliquen lo ordenado, impondrá las medidas de apremio de conformidad con lo establecido en el CNPP.

Se deberá solicitar que la autoridad y/o institución responsable de la aplicación de las medidas rinda el informe periódico respecto de la aplicación de medidas de protección y dará seguimiento con la víctima o persona ofendida sobre la correcta aplicación de las mismas.

La o el AMP, una vez que reciba el análisis de contexto correspondiente, deberá revalorar las medidas de protección otorgadas.

CONCLUSIÓN DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN ORDENADAS POR LA O EL AMP

De conformidad con la periodicidad dispuesta en la legislación aplicable, la o el AMP deberá valorar la necesidad de continuar las medidas de protección de acuerdo al nivel de riesgo y la vulnerabilidad de la víctima o persona ofendida.

La o el AMP deberá considerar la voluntad de la víctima o persona ofendida al momento de emitir una determinación al respecto.

En aquellos casos en que se determine la conclusión de las medidas de protección, se deberá de notificar de manera inmediata a la autoridad y/o institución, así como a la víctima o persona ofendida la conclusión de dichas medidas.

La continuidad de las medidas de protección en ningún caso implicará la conclusión de la investigación de los hechos.

COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL

La PGR, Procuradurías y Fiscalías Generales de los Estados deberán coordinarse con los organismos públicos autónomos en materia de derechos humanos, estatales o nacionales según corresponda dentro del marco legal aplicable, para el acceso a los expedientes y el intercambio de información.

COORDINACIÓN CON EL MPPDDHP

En aquellos casos en que la víctima o persona ofendida se encuentre incorporada al MPPDDHP, la o el AMP mantendrá comunicación constante con la Unidad de Análisis de Riesgo y Seguimiento de Medidas, a efecto de colaborar y proporcionar aquella información necesaria para valorar el riesgo y el buen funcionamiento de las medidas.

En aquellos casos en que la víctima o persona ofendida manifieste no encontrarse incorporado al MPPDDHP, la o el AMP le informará a la víctima o persona ofendida sobre las atribuciones y procesos relacionados con el mismo. Una vez que se ha informado a la víctima o persona ofendida sobre dicho mecanismo, preguntará su voluntad de solicitar que esa autoridad evalúe la viabilidad de su incorporación y, en caso de que manifestase su voluntad de ser incorporado, elaborará oficio para solicitar la incorporación de la persona periodista.

La o el AMP deberá valorar la necesidad de incorporar a la investigación las constancias y actuaciones que obren en el expediente del MPPDDHP, sobre todo, en aquellos casos en que se requiera probar una

afectación personal a la víctima o persona ofendida (ejemplo delito de amenazas o lesiones). Para este efecto, la o el AMP deberá considerar la voluntad de la víctima o persona ofendida.

En los casos en que dentro del desarrollo de la Junta de Gobierno del MPPDDHP, se advierta la existencia de la comisión de alguna conducta delictiva relacionada con el ejercicio de la libertad de expresión, se determinará si se trata de un delito que se persigue de oficio o por querrela de acuerdo a la ley penal.

En aquellos casos en que se trate de un delito de querrela, se hará una invitación a la víctima o persona ofendida a hacer la denuncia correspondiente, y en caso de que se trate de un delito de oficio, se tendrá por recibida la noticia del hecho y se procederá a iniciar la carpeta de investigación correspondiente.

En ambos casos, el personal que acuda en representación de la instancia de procuración de justicia correspondiente, orientará a la víctima o persona ofendida de manera inmediata, a efecto de garantizar que se lleve a cabo una investigación oportuna y eficaz de los hechos delictivos.

COORDINACIÓN CON LAS CAV

En aquellos casos en que la víctima o persona ofendida cuente con su correspondiente Registro ante las CAV, la o el AMP mantendrá comunicación constante con dicha institución a efecto de que en los términos que resulte procedente colaborar y proporcionar aquella información debidamente solicitada dentro del marco de su competencia, necesaria para garantizar una atención adecuada y garantizar sus derechos como víctima de un delito o de una violación a sus derechos humanos.

En aquellos casos en que la víctima o persona ofendida manifieste no contar con dicho registro, se notificará a las CAV, sobre la apertura de una investigación por la probable comisión de un delito cometido contra la libertad de expresión.

La o el AMP deberá conocer el Modelo Integral de Atención a Víctimas publicado por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, para efecto de informar adecuadamente a la víctima o persona ofendida sobre los derechos que tiene y las atribuciones, procedimientos, acciones y principios para que la citada Comisión proporcione ayuda inmediata, atención, asistencia, protección y reparación integral y prevenir la revictimización y/o victimización secundaria.

La o el AMP deberá valorar la necesidad de incorporar a la investigación las constancias y actuaciones que obren en el expediente de las CAV, sobre todo, en aquellos casos en que se requiera probar una afectación personal a la víctima o persona ofendida (ejemplo delito de amenazas o lesiones). Para este efecto, la o el AMP deberá considerar la voluntad de la víctima o persona ofendida.

COORDINACIÓN ENTRE AUTORIDADES FEDERALES Y ESTATALES DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA

Las autoridades del fuero federal y del fuero común deberán mantener una coordinación permanente en aquellos casos en los que originariamente el delito investigado corresponda al fuero común o que pudiera existir una afectación a la libertad de expresión, a fin de garantizar que la información relacionada con la investigación sea compartida de manera oportuna y eficaz, garantizando en todo momento el derecho de las víctimas o personas ofendidas a conocer el avance de las investigaciones. Dicha coordinación debe ser, incluso entre autoridades estatales.

Asimismo, para la ejecución de todas las diligencias, la o el AMP podrá auxiliarse de cualquier dependencia, de los tres órdenes de gobierno según lo estime necesario en el caso concreto.

La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) será responsable de coordinar con las Procuradurías o Fiscalías Generales de los Estados, la estrategia de investigación y la comunicación social del avance de las investigaciones, en aquellos casos en que ambas instancias investiguen los mismos hechos.

Las autoridades de ambos niveles de gobiernos deberán procurar mantener reuniones periódicas para garantizar que la información relacionada con la investigación y las estrategias utilizadas, tengan como finalidad el esclarecimiento de los hechos que se imputen al acusado, para acreditar que los mismos constituyen un delito y la probabilidad de que la persona imputada lo cometió o participó en su comisión.

Las o los AMP deberán privilegiar la coordinación entre autoridades, a fin de evitar la duplicidad de actuaciones.

Las autoridades deberán establecer un método claro de comunicación con las víctimas o personas ofendidas, a fin de garantizar el derecho que tienen a participar en las investigaciones y a conocer la información contenida en la carpeta de investigación. En todo momento deberá de considerarse la no revictimización y/o victimización secundaria como el eje fundamental de dicha coordinación, a efecto de no requerir la misma información en varias ocasiones y/o brindar información contradictoria.

FACULTAD DE ATRACCIÓN

Con la finalidad de contar con elementos objetivos que auxilien al AMP de la Federación para que valore la pertinencia de ejercer o no la facultad a que se refiere el artículo 21 del CNPP, se podrán tomar en cuenta los siguientes criterios de carácter orientador:

- Para efecto de determinar el vínculo de la agresión con la afectación, limitación o menoscabo doloso del derecho a la información o las libertades de expresión o imprenta, se deberán tomar en consideración las evidencias existentes que vinculen el trabajo periodístico de la víctima o persona ofendida como causa y motivación de la agresión;
- Para efectos de lo dispuesto por las fracción I y II del artículo 21 del CNPP, se podrá tomar en cuenta la evidencia, dato de prueba o indicio, existente que indique la participación de alguna persona al servicio del estado de las autoridades federales, estatales y/o municipales; o que existan elementos para suponer que se está ocultando o protegiendo a la persona imputada por parte de las autoridades encargadas de su investigación y/o sanción;
- Para efectos de lo dispuesto en la fracción III del artículo 21 del CNPP, se podrá tomar en cuenta los derechos afectados mediante la conducta delictiva, considerando especialmente aquellos casos en donde se ha afectado el derecho a la vida, integridad y a la libertad personal;
- Para efectos de lo dispuesto por la fracción IV del artículo 21 del CNPP, se podrá tomar en cuenta el análisis de riesgo elaborado por el MPPDDHP o el análisis realizado por la o el AMP;
- Para efectos de lo dispuesto por la fracción V del artículo 21 del CNPP, se podrá tomar en consideración, la colaboración existente entre las autoridades federales y estatales, así como la celeridad en el desahogo de las diligencias correspondientes y la existencia de acciones u omisiones por parte de las autoridades estatales para dilatar el desarrollo de aquellas diligencias necesarias para determinar la veracidad de los hechos;
- Para efectos de lo dispuesto por la fracción VI del artículo 21 del CNPP, se podrá tomar en consideración la línea editorial, alcance y difusión del trabajo periodístico que realiza o realizaba la víctima o persona ofendida y que probablemente causó la afectación de sus bienes jurídicos, así como los resultados del análisis de contexto;
- Para efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 21 del CNPP, se podrá tomar en consideración la información estadística sobre el número de agresiones a periodistas en el país, los resultados que se obtengan del análisis de contexto, así como la información que publique el MPPDDHP al respecto.

En aquellos casos en que del análisis integral del caso, la o el AMP determine la viabilidad de ejercer la facultad de atracción de la investigación, tomará siempre en consideración la posición de la víctima o persona ofendida, y en su caso, emitirá el dictamen debidamente fundado y motivado.

La o el AMP deberá notificar dicha determinación a la autoridad correspondiente de manera inmediata y recabará la carpeta de investigación y tomará las medidas necesarias para resguardar toda la evidencia correspondiente. Igualmente, notificará por escrito a la víctima o persona ofendida de dicha determinación.

En caso de que la o el AMP advierta la existencia de una violación al debido proceso o alguna

irregularidad en la investigación que se atrajo, deberá dar vista a las autoridades correspondientes de manera inmediata.

No obstante, el hecho sea investigado y procesado en el fuero común, la FEADLE podrá brindar en todo momento el acompañamiento, asesoría técnica y colaboración para garantizar los fines del proceso y la especialidad de las investigaciones en materia de libertad de expresión.

La decisión de atraer o no un caso, no se limita a la relación entre el delito y el ejercicio periodístico o del derecho a la libertad de expresión, por lo que, para ejercer esta facultad deberá tomarse en cuenta que el fortalecimiento de las capacidades institucionales de las entidades federativas en la procuración y administración de justicia, es una prioridad frente al conocimiento de las autoridades federales.

La FEADLE podrá ejercer la facultad de atracción independientemente de la etapa en la que se encuentre la investigación.

DETERMINACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

INVESTIGACIÓN CON RESULTADOS NEGATIVOS

Si del resultado de los actos de investigación no existen datos que establezcan que se cometió el hecho con apariencia de delito, ni la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, o no se tiene identificado a éste, se deberá emitir un NEAP o Archivo Temporal conforme lo prevé el Título III, Capítulo V del CNPP. (se deberán seguir los protocolos de autorización institucionales correspondientes)

INVESTIGACIÓN CON RESULTADOS POSITIVOS

Conclusión de la Investigación Inicial

Si de la información y evidencia obtenida a partir de las investigaciones realizadas, la o el AMP puede acreditar que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que la persona imputada lo cometió o participó en su comisión, ejercerá acción penal para continuar en el ámbito judicial el curso correspondiente. (se deberán seguir los protocolos institucionales correspondientes)

ACUSACIÓN

Conclusión de la Investigación Complementaria

Una vez concluida la investigación complementaria, y en caso de considerarlo pertinente, deberá formular la acusación, la cual deberá contener la enunciación de los hechos que se atribuyen a las personas acusadas, su clasificación jurídica, grado de intervención, así como las penas y el monto de reparación del daño. (se deberán seguir los protocolos institucionales correspondientes)

En todo momento se deberá plantear en la acusación la relación existente entre el trabajo periodístico y el ejercicio de la libertad de expresión con la conducta delictiva, así como las agravantes que considera la ley cuando la víctima es periodista; así como la individualización de la pena.

REPARACIÓN DEL DAÑO

La o el AMP solicitará la reparación del daño y ofrecerá las pruebas conducentes ante la autoridad judicial en el momento procesal oportuno, considerando en todo momento la afectación, limitación o menoscabo a la libertad de expresión, como el eje rector de la solicitud a este respecto.

En este proceso, deberá considerar lo establecido por la LGV, la cual señala que las víctimas del delito tienen derecho a ser reparadas de manera oportuna, plena, diferenciada, transformadora, integral y efectiva por el daño que han sufrido, comprendiendo medidas de:

Restitución: busca devolver a la víctima a la situación anterior a la comisión del delito;

Rehabilitación: busca facilitar a la víctima hacer frente a los efectos sufridos por causa del hecho punible o de las violaciones de derechos humanos;

Compensación: ha de otorgarse a la víctima de forma apropiada y proporcional a la gravedad del hecho y teniendo en cuenta las circunstancias de las víctimas.

La o el AMP solicitará que esta se otorgue por todos los perjuicios, sufrimientos y pérdidas económicamente evaluables que sean consecuencia del delito o de la violación de derechos humanos (daño moral, daños a la integridad, lucro cesante, daño emergente, gastos y costas judiciales);

Satisfacción: busca reconocer y restablecer la dignidad de las víctimas;

No reiteración: buscan que el hecho punible o la violación de derechos sufrida por la víctima no vuelva a ocurrir.

En todas las medidas de reparación se requiere considerar la situación o condición de la víctima, algunas de estas pueden ser: si es una niña, niño o adolescente, si tiene alguna discapacidad, si es migrante, si es persona adulta mayor, embarazada, desplazada de su lugar de residencia, si se encuentra en riesgo, si sufrió agresión sexual, si requiere tratamiento médico o psicológico a corto, mediano o largo plazo, entre otras.

MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS EN MATERIA PENAL

La o el AMP analizará la información a su alcance a fin de determinar si el delito investigado y acreditado a través de las diligencias de investigación es susceptible de ser resuelto a través de algún MASCOMP de acuerdo con las leyes vigentes.

En aquellos casos en que sea procedente, informará de manera detallada y oportuna a la víctima o persona ofendida las características y condiciones de dichos MASCMP, así como del derecho que tienen a decidir si se someten o no a alguno de estos MASCMP.

La aplicación de estos criterios deberá ser congruente con la política de persecución penal de la institución correspondiente y con la relevancia a la protección del derecho a la libertad de expresión.

INCOMPETENCIA EN RAZÓN DE MATERIA

En caso de que exista evidencia o datos de prueba pertinentes, que permitan determinar que los hechos delictivos investigados no tienen una relación directa con el ejercicio de la actividad periodística y la libertad de expresión, la o el AMP informará de manera fundada y motivada a la víctima o persona ofendida dichos resultados y determinará el envío de la investigación a la autoridad ministerial competente en razón de territorio y materia.


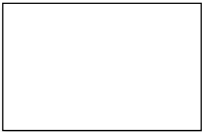

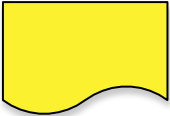
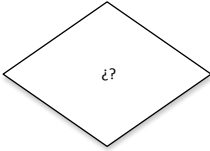


10. Glosario



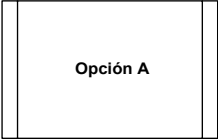
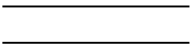




Acrónimos/Siglas	Definición
CADH	Convención Americana sobre Derechos Humanos
CAV	Comisiones de Atención a Víctimas
CIDH	Corte Interamericana de Derechos Humanos
CNPP	Código Nacional de Procedimientos Penales
CPEUM	Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
DOF	Diario Oficial de la Federación
FEADLE	Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión
MASCMP	Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal
MPPDDHP	Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas
LPPDDHP	Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas
PGR	Procuraduría General de la República
SCJN	Suprema Corte de Justicia de la Nación
SPPA	Sistema Procesal Penal Acusatorio

Término	Definición
Análisis de contexto	Es un estudio que realiza la o el Analista de información y datos que permite identificar posibles líneas de investigación, el contexto, formas de intervención los probables vínculos existentes entre el delito denunciado y el ejercicio de la actividad periodística.
Comisiones de Atención a Víctimas	Se entiende a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (federal) y las Comisiones Estatales de Atención a Víctimas.
Facultad de atracción	Es el medio excepcional para atraer asuntos que, en principio, no son de su competencia originaria, pero que cumplen con alguno de los supuestos a que hace referencia el artículo 21 del CNPP.
Hipótesis	Son conjeturas acerca de lo sucedido que marcarán los pasos a seguir en la investigación. Se elaboran analizando y comparando la información disponible para formular suposiciones sobre lo que pudo haber ocurrido, seleccionando la explicación que sea más creíble y posible, de acuerdo con las evidencias preliminares.
Libertad de expresión	Es un Derecho Humano consistente en que todas las personas tengan el derecho de buscar, recibir y difundir información libremente, sin consideración de requisitos y fronteras, ya sea oralmente, en forma impresa, electrónica o digital.
Periodistas	Las personas físicas, así como medios de comunicación y difusión públicos, comunitarios, privados, independientes, universitarios, experimentales o de cualquier otra índole cuyo trabajo consiste en recabar, generar, procesar, editar, comentar, opinar, difundir, publicar o proveer información, a través de cualquier medio de difusión y comunicación que puede ser impreso, radioeléctrico, digital o imagen.

11. Anexos

Anexo 1. Simbología empleada

Símbolo	Nombre	Descripción
	Inicio Fin	Muestra el inicio o entradas y fin del proceso.
	Actividad	Indica la realización de una actividad sustantiva.
	Responsable Sustantivo	Indica quién es el responsable de la ejecución de la actividad sustantiva.
	Documento	Representa la generación de un documento en el desarrollo de una actividad.
	Decisión	Consiste en una pregunta o condición, cuya respuesta indica el camino que debe tomarse.
	Subproceso	Indica la ejecución de un subproceso dentro del flujo.
	Actividad externa	Indica la realización de una actividad externa en el proceso.

Símbolo	Nombre	Descripción
	Responsable externo	Indica quién es el actor que ejecuta la actividad externa.
	Conector de actividad	Representa el enlace de dos actividades dentro de la misma página.
	Opción múltiple	Permite elegir uno o varios caminos con actividades distintas entre ellos.
	Paralelismo	Indica la ejecución simultánea de las figuras que precede.
	Área de interés en el flujo	Destaca una zona para indicar la importancia de un conjunto de actividades que están relacionadas.
	Punto de control	Sirven para indicar puntos de control o supervisión a cargo del Superior Jerárquico (SJ).
 Tiempo	Plazos	Indica el lapso de tiempo en el que se debe realizar una actividad.
	Dirección de flujo o línea de unión	Conecta símbolos y muestra la dirección del flujo del proceso. Se acompañan.

Símbolo	Nombre	Descripción
<div> <div>Entrada</div> <div>↓</div> <div>#</div> <div>Subproceso de x</div> <div>+</div> <div>(Salida de x1/entrada de x2)</div> <div>↓</div> <div>#</div> <div>Subproceso de x2</div> <div>+</div> <div>Salida</div> <div>↓</div> </div>	Entradas y Salidas	Se escriben sobre las líneas de dirección de flujo que entran a un subproceso o salen de él a fin de señalar los detonantes y productos de los mismos.

Anexo 2. Lineamientos para la elaboración del análisis de contexto en la investigación de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión

Dada la naturaleza y la complejidad de la investigación de los delitos cometidos contra la libertad de expresión y su afectación a determinados derechos humanos, en algunos casos es necesario contar con herramientas adicionales para garantizar su comprensión, lo que se traduce en un análisis del trabajo periodístico de la víctima y el contexto en el que realiza dicha labor al momento de los hechos investigados. Por ello, el personal especializado en análisis de contexto tiene como función principal llevar a cabo análisis de la información a su alcance para auxiliar a la o el AMP.

El análisis de contexto es “una herramienta analítica que permite identificar una serie de hechos, conductas o discursos [...] que constituyen el marco en el cual un determinado fenómeno estudiado tiene lugar en un tiempo y espacio concretos”. En este sentido, se concibe como una metodología útil para estudiar e identificar causas profundas o patrones estructurales de determinados hechos sociales pues permite exponer los factores relevantes que modifican la comprensión de dichos hechos.

El análisis de contexto, implica la elaboración de la totalidad de los siguientes temas: i) identificación de información estratégica; ii) elaboración de redes de vínculos; iii) seguimiento de medios; iv) análisis cuantitativo de publicaciones de períodos específicos; v) análisis cualitativo de publicaciones de períodos específicos; vi) información estadística; vii) mapas regionales y nacionales sobre la problemática identificada; viii) análisis de entorno económico; ix) análisis de entorno político; x) análisis de entorno social, y xi) análisis de redes sociales.

La o el AMP podrá solicitar un análisis completo o una selección de los temas señalados anteriormente por separado, de acuerdo a las características y necesidades de la investigación en la que se actúe.

La o el Analista de información deberá realizar el análisis de contexto tanto a nivel macro, como a nivel micro. A nivel macro, debe contar con una base de datos donde se sistematice la información sociodemográfica del país y de cada entidad federativa que permita conocer, entre otras cosas, las principales zonas de riesgo para el ejercicio de la libertad de expresión, encontrar indicios de que dichas violaciones se llevan a cabo por medio de una red de diversos actores estatales o privados, identificar patrones estructurales de determinados delitos, entre otros. De esta manera podrá extraer de esta base de datos información necesaria para el análisis de cada caso en específico.

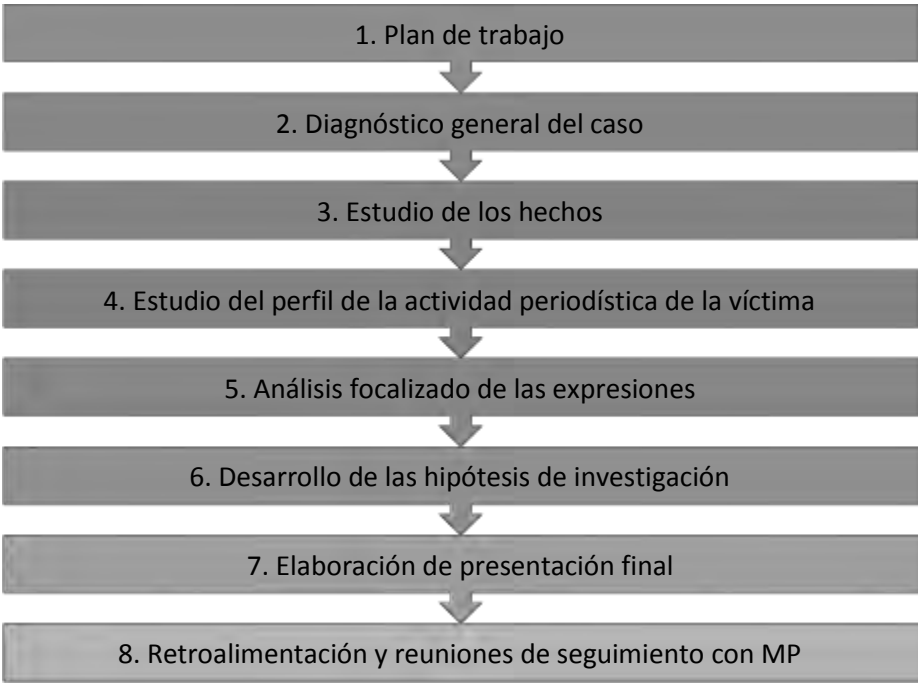
En cuanto a la investigación a nivel micro, la o el Analista realizará a solicitud de la o el AMP, una investigación documental de un delito presuntamente cometido en contra de la libertad de expresión, que se podrá traducir en análisis de contexto o bien algún producto específico relacionado con dicho análisis. Para ambos casos, deberá utilizar el presente protocolo como punto de partida para el desarrollo sistematizado de su trabajo, esta es una guía para homologar el proceso y los elementos que se deben tomar en cuenta al realizar un análisis de contexto, pero bajo la perspectiva que cada caso es distinto,

sus circunstancias específicas podrían implicar la búsqueda de diferentes datos o la aplicación de distintas metodologías no contempladas en el presente protocolo.

Análisis de Contexto

A efecto de obtener un correcto y completo análisis de contexto para la investigación de un caso concreto se debe seguir el siguiente procedimiento que permita a la o el Analista evaluar de manera completa e integral la información sobre los hechos investigados, la calidad periodística de la víctima o persona ofendida y el desarrollo de su libertad de expresión.

Este procedimiento consta de ocho etapas:



1. Plan de trabajo

Inicia con la solicitud que realiza la o el AMP, e implica que la o el Analista de información debe elaborar un plan de trabajo (cronograma) para el análisis de la información disponible, estableciendo tiempos estimados para el desarrollo de cada una de las siguientes etapas.

Tabla 1: Actividades relacionadas al plan de trabajo

Paso	Responsable	Actividad
------	-------------	-----------

1	AMP	Realiza oficio de solicitud de análisis de contexto o alguno de los temas individuales señalados en el presente documento y determina su prioridad en relación con otros casos.
2	Coordinación de análisis	Persona o servidor público encargado de coordinar a las o los Analistas de información, revisa la solicitud y realiza preguntas aclaratorias a la o el AMP en caso de ser necesario.
3	Coordinación de análisis	Asigna a la o el Analista responsable de la elaboración.

4	Analista	Identifica la existencia de información disponible en fuentes abiertas.
5	Analista	Lleva a cabo una reunión inicial con la o el AMP a cargo de la investigación y, en caso de que lo considere necesario podrá solicitar el acceso a los registros de la carpeta de investigación con el fin contextualizar el caso e identificar la información más importante.
6	Analista	Elabora plan de trabajo con base en la información disponible. Este plan de trabajo podrá ser modificado con posterioridad dependiendo del volumen y la calidad de la información disponible.

2. Diagnóstico general del caso

La o el Analista realiza un diagnóstico general del caso mediante un estudio preliminar sobre las expresiones de la víctima en ejercicio de su libertad de expresión, así como datos esenciales sobre esta persona. El propósito de este diagnóstico es que la o el Analista cuente con la información necesaria para dar respuesta siguientes preguntas:

2.1. ¿La víctima o persona ofendida puede considerarse periodista?

1.2. ¿Es posible identificar si en las publicaciones de la víctima o persona ofendida se repite algún nombre, situación o tema en específico?

Tabla 2: Actividades relacionadas al diagnóstico general del caso

Paso	Actividad	Preguntas guía
7	La o el Analista realiza una revisión inicial para contemplar la disponibilidad de la información obtenida de fuentes abiertas en relación a las expresiones de la víctima o persona ofendida así como el volumen de las mismas.	
8	Hace una revisión inicial para contemplar la disponibilidad de la información sobre la víctima o persona ofendida en fuentes abiertas y a través de sus redes sociales.	

9	Realiza la captura y guarda la información obtenida en los puntos 7 y 8. Se recomienda que este paso se siga a lo largo de la investigación y cada vez que se tenga acceso a un nuevo sitio con el fin de garantizar que la información no se pierda con el paso del tiempo.
10	Determina con base en las respuestas obtenidas en los pasos 7 y 8, si de manera inicial la víctima o persona ofendida puede considerarse periodista.

3. Estudio de los hechos

La o el Analista realiza un estudio del lugar y momento en que sucedieron los hechos, tomando como principal fuente de información el análisis de contexto macro ya sistematizado en una base de datos. El propósito de este estudio es que la o el Analista cuente con la información necesaria para dar respuesta a las siguientes preguntas:

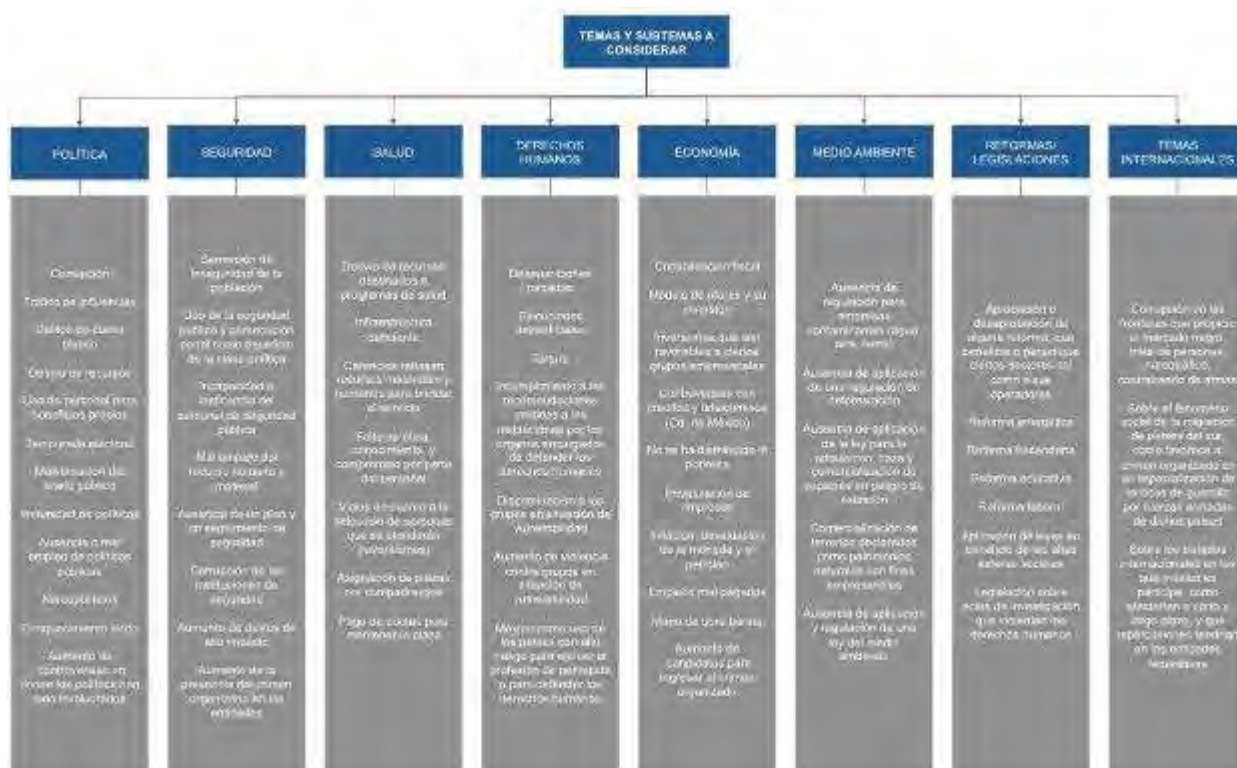
1. ¿Los hechos sucedieron en un lugar identificado como zona de riesgo para el ejercicio de la libertad de expresión?
2. ¿Los hechos sucedieron en el marco de algún evento relevante dentro de las temáticas especificadas?

Tabla 3: Actividades relacionadas al estudio de los hechos

Paso	Actividad	Preguntas guía
11	Análisis y radiografía del lugar de la agresión	<ul style="list-style-type: none"> • ¿Cuál es la incidencia delictiva en la región? Específicamente en relación a los siguientes delitos: homicidio, lesiones, delitos cometidos por personas al servicio del estado. • ¿Cuál es la situación actual de la región en relación al ejercicio de la libertad de expresión? • ¿Se pueden identificar otros casos similares dentro de la región?

12	<p>¿Se abordan temas de relevancia en las siguientes materias?:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Política • Procesos electorales • Corrupción • Delincuencia organizada <p>Además de lo anterior, ¿Se abordan temas de relevancia contemplados en el anexo 1?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Seguridad; • Salud; • Derechos humanos; • Economía; • Medio ambiente; • Reformas y legislaciones; y • Temas internacionales. 	<p>Análisis de los eventos más relevantes que estaban aconteciendo en el momento de la agresión y tres meses atrás</p>
13	<p>Determinar si es posible relacionar las expresiones de la víctima o persona ofendida con alguno de los eventos relevantes que se estaban suscitando en el lugar/momento de la agresión o si de los resultados del estudio de los hechos es necesario explorar otras hipótesis de investigación.</p>	

Respecto de la actividad periodística de la víctima o medio de comunicación, el analista considerará la siguiente matriz de temas y subtemas característicos de la actividad periodística:



23. Estudio del perfil periodístico de la víctima

Una vez realizado el diagnóstico inicial sobre las expresiones de la víctima o persona ofendida, así como un estudio de los hechos, se realiza un estudio general sobre su perfil. Lo anterior con el fin de investigar más a fondo si existe una relación entre sus expresiones y la agresión en su contra y/o si existen otras posibles hipótesis que den explicación a los hechos sucedidos y que no se vinculen específicamente al ejercicio de la libertad de expresión.

Tabla 4: Actividades relacionadas al estudio del modo de vida de la víctima o persona ofendida

Paso	Actividad	Preguntas guía
14	Análisis general del perfil periodístico de la víctima	<ul style="list-style-type: none">• ¿Cuál es la trayectoria profesional de la víctima o persona ofendida?• ¿Dónde desarrolla su actividad periodística?• ¿Temas relevantes dentro de su actividad periodística?• ¿Actores relevantes y su tratamiento en el trabajo periodístico de la víctima?• ¿Cuál es la incidencia en el tratamiento de los diferentes temas?• ¿Qué género periodístico aborda?
		<ul style="list-style-type: none">• ¿Cuál ha sido la trayectoria profesional en materia periodística de la víctima?• Pertenece la víctima a algún movimiento social, sindicato, grupo o asociación?

24. Análisis focalizado de las expresiones

Una vez que se afirma la calidad de periodista de la víctima o persona ofendida, identificada la información necesaria sobre el ejercicio de su libertad de expresión, los datos relevantes en torno al momento y lugar de los hechos, así como el análisis de su perfil periodístico es importante relacionar estas ideas a través de un análisis focalizado de las expresiones de la víctima o persona ofendida. Lo anterior, con el fin de que la o el Analista pueda dar respuesta a las siguientes preguntas:

1. ¿Es posible relacionar la agresión en contra de la víctima o persona ofendida con el ejercicio de su libertad de expresión?
2. ¿Las publicaciones de la víctima o persona ofendida afectan a algún actor político, económico, social o delictual?

Tabla 5: Actividades relacionadas al análisis focalizado de las expresiones

Paso	Actividad
15	<p>Análisis de las expresiones de la víctima o persona ofendida (por lo menos del momento de la agresión a tres meses atrás). Identificar dentro de las expresiones si hay algún patrón o uso continuo de: hechos, lugares, temas, personajes y/o declaraciones con base en las siguientes preguntas guía.</p> <ul style="list-style-type: none"> • ¿La víctima o persona ofendida se expresa públicamente? • ¿En cuáles espacios de comunicación se expresa la víctima o persona ofendida? Redes sociales, sitios de noticia, blogs en línea, programas de TV, programas de radio, etc. • ¿Con qué periodicidad se expresa la víctima o persona ofendida? • ¿Cuál es su línea editorial? • ¿Qué tipo de lenguaje utiliza? • ¿A qué público se dirige? • ¿Es posible identificar el público que lee sus publicaciones? ¿Quién es? • ¿Respecto de qué (tema, lugar) o quién (personaje) publica? • ¿Hay cambios en sus temáticas?
16	Análisis cuantitativos de los principales hechos, lugares, temas, personajes y/o declaraciones abordados por la víctima o persona ofendida.
17	Análisis cualitativos de los principales hechos, lugares, temas, personajes y/o declaraciones abordados por la víctima o persona ofendida.
18	Construcción de una línea de tiempo de tiempo de las expresiones que se consideren más relevantes de la víctima o persona ofendida con base en los análisis desarrollados en los pasos 15, 16 y 17.

Para el análisis de los textos, éstos se clasificarán conforma a la fecha de publicación, su contenido y actores referidos. Se identificaran las temáticas (categorías y subcategorías) que aborda el periodista, además de relacionar el sentido o connotación que podría tener cada uno de los textos publicados. Los textos se registraran en una matriz de trabajo para facilitar su cuantificación y análisis conforme a las variables identificadas.

Por su connotación las notas podrían ser: positivas, negativas o neutras.

En las positivas se dan a conocer los hechos u opiniones, respecto de un actor/institución/organización político, económico, social, o delincuencial, mediante las que se les apoya, respalda, destaca, reconoce, exalta, defiende o se les califica en términos desfavorables.

Las negativas se dan a conocer hechos u opiniones, respecto de un actor/institución/organización político, económico, social o delincuencial, mediante las que no se les apoya, respalda, destaca, reconoce, exalta, defiende o se les califica en términos desfavorables.

Las de sentido neutro presentan hechos u opiniones respecto de un actor/institución/organización político,

económico, social o delincuencial sin expresare un apoyo, cuestionamiento o crítica.

25. Desarrollo de las hipótesis de investigación del análisis de contexto

A partir de las conclusiones emitidas en las etapas 4 y 5, la o el Analista de información deberá desarrollar las hipótesis de investigación que considere pertinentes para brindar a la o el AMP la información necesaria sobre diferentes líneas de investigación que se desprenden del análisis de contexto del caso.

Tabla 6: Actividades relacionadas al desarrollo de las hipótesis de investigación

Paso	Responsable	Actividad
19	Analista	Elabora las diversas hipótesis de investigación considerando en la información obtenida de las etapas 4 y 5.
20	Coordinación de análisis	Revisa las diversas hipótesis y da retroalimentación.
21	Analista	Atiende observaciones de la persona que realiza la coordinación y elabora versión final del desarrollo de hipótesis de investigación.

26. *Elaboración de presentación final*

Una vez concluida la investigación, la o el Analista de información desarrollará una presentación final con las principales conclusiones obtenidas en las etapas 1 a la 6.

Tabla 7: Actividades relacionadas la elaboración de la presentación final

Paso	Responsable	Actividad
22	Analista	Elabora presentación final que debe incluir los siguientes puntos: <ul style="list-style-type: none">• Resumen de resultados de la etapa 2 (diagnóstico general).• Respuesta a las dos principales preguntas de la etapa 2.• Resumen de resultados de la etapa 3 (estudio de los hechos).• Respuesta a las dos principales preguntas de la etapa 3.• Resumen de resultados de la etapa 4 (estudio del perfil de la actividad periodística de la víctima o persona ofendida o medio).• Resumen de resultados de la etapa 5. (análisis focalizado de las expresiones)• Respuesta a las dos principales preguntas de la etapa 5.• Línea de tiempo con análisis de las expresiones de la víctima o persona ofendida.• Desarrollo de las diversas hipótesis de investigación.
23	Coordinación del análisis	Revisa la presentación final y da retroalimentación.
21	Analista	Considera observaciones del coordinador y elabora versión final de la presentación.

27. *Retroalimentación y reuniones de seguimiento*

La última etapa consiste en la presentación del documento final a la o el AMP, así como la realización de las reuniones de seguimiento necesarias.

Tabla 8: Actividades relacionadas a la retroalimentación y reuniones de seguimiento

Paso	Responsable	Actividad
22	Coordinación del análisis	Entrega de la presentación final a la o el AMP y programa reunión para la explicación del documento.
23	AMP y Coordinación del análisis	Llevar a cabo reunión para la explicación de documento y reuniones futuras para dar el seguimiento necesario.

24	Coordinación del análisis	Atención de comentarios y observaciones hechos por la o el AMP, y formalización de la entrega del documento mediante oficio.
----	---------------------------	--

12. Control de cambios

Elaboración

Área	Puesto	Responsable	Firma	Comentarios	Versión	Fecha

Revisión

Área	Puesto	Responsable	Firma	Comentarios

Autorización

Área	Puesto	Responsable	Firma

Homologado para la Investigación del Delito de Tortura.

Serie de lineamientos, políticas de actuación y procedimientos que deberán aplicar los operadores de las instituciones de Procuración de justicia, en apego a los estándares internacionales, en tratándose de la investigación del delito de tortura.

PROTOCOLO HOMOLOGADO PARA LA INVESTIGACIÓN DEL DELITO DE TORTURA

ÍNDICE

PRESENTACIÓN	3
MARCO JURÍDICO	5
SISTEMA INTERNACIONAL	5
SISTEMA INTERAMERICANO	8
FEDERAL	12
ESTATAL	16
ALCANCE	17
GLOSARIO	18
OBJETIVOS	20
GENERAL	20
ESPECÍFICOS	20
ROLES	21
PRINCIPALES ROLES	21
PRINCIPIOS Y POLÍTICAS DE ACTUACIÓN	21
PRINCIPIOS GENERALES DE LA INVESTIGACIÓN	26
PROCEDIMIENTO	28
INICIO DE LA INVESTIGACIÓN	28
RECEPCIÓN DE NOTICIA CRIMINAL	28
FISCALÍA ESPECIAL	30
ESTRATEGIA DE INVESTIGACIÓN	30
DEFINICIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN	31
HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN	32
INFORMACIÓN FALTANTE A RECABAR	33
ASIGNACIÓN DE TIEMPOS Y EQUIPO	33
ENTREVISTA DE LA VÍCTIMA	33
VALORACIÓN DEL RIESGO	34
DATOS DE PRUEBA	35

SOLICITUD DE INFORMACIÓN A AUTORIDADES.....	35
---	----

INSPECCIÓN DEL LUGAR DE LOS HECHOS	36
--	----

ENTREVISTA CON TESTIGOS	38
-------------------------------	----

ANÁLISIS PERICIALES.....	38
--------------------------	----

DECLARACIÓN DEL IMPUTADO.....	39
-------------------------------	----

DICTAMEN MÉDICO PSICOLÓGICO ESPECIALIZADO	39
---	----

INFORME CONJUNTO. ANÁLISIS INTEGRAL DE LOS RESULTADOS	48
---	----

DETERMINACIÓN	50
---------------------	----

REPARACIÓN DEL DAÑO	50
---------------------------	----

ANEXO	52
--------------	----

PRESENTACIÓN

El conjunto de principios para la protección y la promoción de los Derechos Humanos mediante la lucha contra la impunidad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), establece que conforme al derecho internacional, son considerados delitos graves, entre otros, la tortura, las desapariciones forzadas, la ejecución extrajudicial y la esclavitud.

La investigación del delito de tortura, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes es uno de los principales retos que aún prevalecen en el sistema de justicia de la Nación y demanda el fortalecimiento de capacidades institucionales en el marco del cambio del sistema jurídico mexicano y de la transición del sistema penal inquisitorio hacia el acusatorio.

El Consejo Nacional de Seguridad Pública, acordó el 19 de diciembre de 2014, la elaboración del Protocolo Homologado de Investigación del Delito de Tortura, de aplicación nacional, que contemplara las mejores prácticas para la investigación ministerial, pericial y policial de este delito, y principios de actuación para una atención digna y respetuosa hacia la víctima.

La reforma al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que facultó al Congreso de la Unión para emitir una ley general en materia de tortura y tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, permitió que en un esfuerzo conjunto entre sociedad y Gobierno, naciera a la vida jurídica, la Ley General para Prevenir, Investigar y sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Cruels, Inhumanos o Degradantes (LGPIST), siendo esto, un avance sustancial en la materia ya que permite corregir la dispersión normativa en los tipos penales, así como los problemas de coordinación entre las autoridades federales y estatales en la investigación y persecución de este delito.

El 26 de junio de 2017 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se expide la LGPIST, con esta ley el Estado mexicano asume los compromisos adquiridos al ratificar las dos Convenciones Internacionales en la materia, y en el cumplimiento de las obligaciones derivadas de las recomendaciones y sentencias en materia de tortura pronunciadas por los Organismos

Internacionales de Derechos Humanos, tanto del Sistema de Naciones Unidas como del Sistema Interamericano.

La investigación del delito de tortura, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes es uno de los principales retos en el sistema de justicia de la Nación y demanda el fortalecimiento de las capacidades institucionales para la erradicación de tan lamentables actos, que infieren en la vida democrática del país y causan un menoscabo irreparable a la dignidad humana, principio Universal de los Derechos Humanos.

Por disposición de la propia LGPIST, en su artículo 60 fracciones, III y IV, obliga a los operadores de las Instituciones de Procuración de Justicia, a la implementación, revisión y actualización del Protocolo Homologado, que tiene como finalidad establecer las directrices de acuerdo a los estándares Internacionales, así como alinear las acciones de investigación y documentación eficaz del delito de tortura de acuerdo a lo dispuesto en la propia ley general.

Por lo anterior, se revisó y actualizó el Protocolo Homologado, como un ejercicio de construcción colectiva entre la Procuraduría General de la República, las Procuradurías y Fiscalías Estatales y de la Ciudad de México, en el marco de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, que busca establecer políticas de actuación y procedimientos apegados a los estándares internacionales de derechos humanos para la investigación del delito de tortura, el objetivo es que sirva como guía en las distintas etapas del procedimiento penal, que aseguren una investigación exhaustiva de los hechos y la no revictimización de la persona que ha sufrido la tortura.

MARCO JURÍDICO

SISTEMA INTERNACIONAL

- ❖ Declaración Universal de Derechos Humanos.
- ❖ Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra la Tortura y otros Tratos o Penas Cruels, Inhumanos o Degradantes.
- ❖ Declaración de Tokio de la Asociación Médica Mundial: Normas Directivas para Médicos con respecto a la Tortura y otros Tratos o Castigos crueles, inhumanos o degradantes, impuestos sobre personas detenidas o encarceladas.
- ❖ Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.
- ❖ Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
- ❖ Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Cruels, Inhumanos o Degradantes.
- ❖ Reconocimiento por parte de México de la Competencia del Comité contra la Tortura, establecido en la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Cruels, Inhumanos o Degradantes del 10 de diciembre de 1984.
- ❖ Enmiendas a los artículos 17 párrafo 7 y 18 párrafo 5 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Cruels, Inhumanos o Degradantes, del 10 de diciembre de 1984.
- ❖ Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Cruels, Inhumanos o Degradantes.

- ❖ Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer.
- ❖ Convención sobre los Derechos del Niño.
- ❖ Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
- ❖ Convención Internacional sobre la Protección de todos los Trabajadores Migratorios y sus Familias.
- ❖ Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas.
- ❖ Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes.
- ❖ Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados.
- ❖ Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía.
- ❖ Principios relativos a la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
- ❖ Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley.
- ❖ Principios básicos para el tratamiento de los reclusos.

- ❖ Conjunto de Principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión.
- ❖ Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones.
- ❖ Principios actualizados para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad.
- ❖ Principios de Ética Médica Aplicables a la Función del Personal de la Salud, especialmente los médicos, en la protección de personas presas y detenidas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
- ❖ Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos.
- ❖ Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores (Reglas de Beijing).
- ❖ Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad.
- ❖ Observación General Número 2 del Comité Contra la Tortura.
- ❖ Observación General Número 20 del Comité de los Derechos Humanos “Prohibición de la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (artículo 7)”.
- ❖ Observación General Número 3 del Comité Contra la Tortura “Aplicación del artículo

14 por los Estados partes”.

- ❖ Observación General Número 8 del Comité de los Derechos del Niño “El derecho del niño a la protección contra los castigos corporales y otras formas de castigo crueles o degradantes”.
- ❖ Observación General Número 13 del Comité de los Derechos del Niño “Derecho del niño a no ser objeto de ninguna forma de violencia”.
- ❖ Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley.
- ❖ Directrices sobre la función de los Fiscales.
- ❖ Manual para la Investigación y Documentación Eficaces de la Tortura y otros Tratos o Penas Cruelles, Inhumanos o Degradantes “Protocolo de Estambul”.

SISTEMA INTERAMERICANO

- ❖ Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.
- ❖ Convención Americana sobre Derechos Humanos.
- ❖ Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.
- ❖ Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención Belém Do Pará”.
- ❖ Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.
- ❖ Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad.

- ❖ Convención Interamericana contra toda Forma de Discriminación e Intolerancia.
- ❖ Principios y buenas prácticas sobre la protección de las personas privadas de libertad en las Américas.
- ❖ Corte IDH. Caso García Cruz y Sánchez Silvestre Vs. México. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de noviembre de 2013. Serie C No. 273.
- ❖ Corte IDH. Caso García Lucero y otras Vs. Chile. Excepción Preliminar, Fondo y Reparaciones. Sentencia de 28 de agosto de 2013. Serie C No. 267.
- ❖ Corte IDH. Caso Gudiel Álvarez y otros ("Diario Militar") Vs. Guatemala. Interpretación de la Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de agosto de 2013. Serie C No. 262.
- ❖ Corte IDH. Caso Mendoza y otros Vs. Argentina. Excepciones Preliminares, Fondo y Reparaciones. Sentencia de 14 de mayo de 2013 Serie C No. 260.
- ❖ Corte IDH. Caso Gudiel Álvarez y otros ("Diario Militar") Vs. Guatemala. Fondo Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 noviembre de 2012 Serie C No. 253.
- ❖ Corte IDH. Caso Pacheco Teruel y otros Vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de abril de 2012 Serie C No. 241.
- ❖ Corte IDH. Caso Fleury y otros Vs. Haití. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 23 de noviembre de 2011. Serie C No. 236.
- ❖ Corte IDH. Caso Rosendo Cantú y otra Vs. México. Interpretación de la Sentencia de Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 15 de mayo de

2011. Serie C No. 225.

- ❖ Corte IDH. Caso Cabrera García y Montiel Flores Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de noviembre de 2010 Serie C No. 220.
- ❖ Corte IDH. Caso Rosendo Cantú y otra Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2010 Serie C No. 216.
- ❖ Corte IDH. Caso De la Masacre de las Dos Erres Vs. Guatemala. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211.
- ❖ Corte IDH. Caso González y otras (“Campo Algodonero”) Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Serie C No.205.
- ❖ Corte IDH. Caso Bueno Alves Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 11 de mayo de 2007. Serie C No. 164.
- ❖ Corte IDH. Caso Vargas Areco Vs. Paraguay. Sentencia de 26 de septiembre de 2006. Serie C No. 155.
- ❖ Corte IDH. Caso de las Masacres de Ituango Vs. Colombia. Sentencia de 1 de julio de 2006 Serie C No. 148.
- ❖ Corte IDH. Caso Baldeón García Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de abril de 2006. Serie C No. 147.
- ❖ Corte IDH. Caso Gutiérrez Soler Vs. Colombia. Sentencia de 12 de septiembre de

2005. Serie C No. 132.

- ❖ Corte IDH. Caso Caesar Vs. Trinidad y Tobago. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 11 de marzo 2005. Serie C No. 123.
- ❖ Corte IDH. Caso Alfonso Martín del Campo Dodd Vs. México. Excepciones Preliminares. Sentencia de 3 de septiembre de 2004. Serie C No. 113.
- ❖ Corte IDH. Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 8 de julio de 2004. Serie C No. 110.
- ❖ Corte IDH. Caso Maritza Urrutia Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 2003. Serie C No. 103.
- ❖ Corte IDH. Caso Cantoral Benavides Vs. Perú. Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de diciembre de 2001. Serie C No. 88.
- ❖ Corte IDH. Caso Cesti Hurtado Vs. Perú. Interpretación de la Sentencia de Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 2001. Serie C No. 86.
- ❖ Corte IDH. Caso Cesti Hurtado Vs. Perú. Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de mayo de 2001. Serie C No. 78.
- ❖ Corte IDH. Caso de la "Panel Blanca" (Paniagua Morales y otros) Vs. Guatemala. Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de mayo de 2001. Serie C No. 76.
- ❖ Corte IDH. Caso Cantoral Benavides Vs. Perú. Fondo. Sentencia de 18 de agosto de 2000. Serie C No. 69.
- ❖ Corte IDH. Caso Cesti Hurtado Vs. Perú. Interpretación de la Sentencia de Fondo.

Sentencia de 29 de enero de 2000. Serie C No. 65.

- ❖ Corte IDH. Caso Cesti Hurtado Vs. Perú. Interpretación de la Sentencia de Fondo. Resolución del 19 de noviembre de 1999. Serie C No. 62.
- ❖ Corte IDH. Caso Cesti Hurtado Vs. Perú. Fondo. Sentencia de 29 de septiembre de 1999. Serie C No. 56.
- ❖ Corte IDH. Caso Cesti Hurtado Vs. Perú. Excepciones Preliminares. Sentencia de 26 de enero de 1999. Serie C No. 49.
- ❖ Corte IDH. Caso Cantoral Benavides Vs. Perú. Excepciones Preliminares. Sentencia de 3 de septiembre de 1998. Serie C No. 40.
- ❖ Corte IDH. Caso Benavides Cevallos Vs. Ecuador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de junio de 1998. Serie C No. 38.
- ❖ Corte IDH. Caso de la “Panel Blanca” (Paniagua Morales y otros) Vs. Guatemala. Fondo. Sentencia de 8 de marzo de 1998. Serie C No. 37.
- ❖ Corte IDH. Caso de la “Panel Blanca” (Paniagua Morales y otros) Vs. Guatemala. Excepciones Preliminares. Sentencia de 25 de enero de 1996. Serie C No. 23.

FEDERAL

- ❖ Código Nacional de Procedimientos Penales.
- ❖ Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
- ❖ Ley General de Responsabilidades Administrativas.

- ❖ Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado.
- ❖ Ley General de Víctimas.
- ❖ Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal.
- ❖ Ley de Migración.
- ❖ Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.
- ❖ Suprema Corte de Justicia de la Nación, Resolución 912/2010.
- ❖ Suprema Corte de Justicia de la Nación, Contradicción de Tesis 293/2011.
- ❖ Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tesis Aislada, Décima Época: TORTURA. LA OMISIÓN DE INDAGAR LA DENUNCIA REFERIDA POR PERSONAS DISTINTAS AL INCULPADO, QUE INTERVINIERON EN ALGUNA FASE PROCEDIMENTAL CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO, QUE AMERITA SU REPOSICIÓN.
- ❖ Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tesis Aislada, Décima Época: 1a. LVII/2015 (10a.) TORTURA, TRATOS CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES. FORMA DE REALIZAR SU INVESTIGACIÓN.
- ❖ Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tesis Aislada, Décima Época: 1a. LVI/2015 (10a.) TORTURA. GRADOS DE VIOLACIÓN DEL DERECHO A LA INTEGRIDAD FÍSICA Y PSÍQUICA DE LAS PERSONAS.

- ❖ Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tesis Aislada, Décima Época: 1a. LIV/2015 (10a.) TORTURA. LA AUTORIDAD TIENE LA OBLIGACIÓN DE INVESTIGARLA EN CASO DE EXISTIR EVIDENCIA RAZONABLE.

- ❖ Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tesis Aislada, Décima Época: III.2o.P.66 P (10a.) TORTURA. AL NO CONSTITUIR UN ACTO CONSUMADO DE MODO IRREPARABLE, EN SU CONTRA PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO, POR TANTO, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIR LA DEMANDA AUNQUE LA AVERIGUACIÓN PREVIA, DONDE ADUCE EL QUEJOSO FUE OBJETO DE DICHO TRATO, HAYA SIDO CONSIGNADA A LA AUTORIDAD JUDICIAL.

- ❖ Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tesis Aislada, Décima Época: 1a. LV/2015 (10a.) TORTURA. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. DETENCIÓN. SI EL INDICIADO QUE CONFESÓ SU PARTICIPACIÓN EN LOS HECHOS DELICTIVOS ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO, FUE CAPTURADO EN FLAGRANCIA EN UNA DIVERSA AVERIGUACIÓN PREVIA Y, POR TANTO, EN CUANTO A SU LIBERTAD SE ENCUENTRA A DISPOSICIÓN DE ESA OTRA AUTORIDAD, PARA DETERMINAR LA VALIDEZ DE DICHA CONFESIÓN, PREVIAMENTE DEBEN RECABARSE LAS CONSTANCIAS QUE AVALEN LA LEGALIDAD DE AQUÉLLA Y PATENTICEN SI FUE O NO PROLONGADA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN). IV.1o.P.10 P (10a.)

- ❖ Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tesis Aislada, Décima Época: 1a. CCCLXXXIII/2014 (10a.) TORTURA. LA AUTOINCRIMINACIÓN DEL INCULPADO NO ES UNA CONDICIÓN NECESARIA PARA ACREDITARLA.

- ❖ Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tesis Aislada, Décima Época: 1a. CCV/2014 (10a.) TORTURA. CONSTITUYE UNA CATEGORÍA ESPECIAL Y DE MAYOR GRAVEDAD QUE IMPONE LA OBLIGACIÓN DE UN ESCRUTINIO ESTRICTO BAJO LOS ESTÁNDARES NACIONALES E INTERNACIONALES.

- ❖ Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tesis Aislada, Décima Época: 1a. CCVII/2014 (10a.) TORTURA. OBLIGACIONES DE LA AUTORIDAD CUANDO UNA PERSONA MANIFIESTA HABERLA SUFRIDO O SE TENGAN DATOS DE LA MISMA.
- ❖ Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tesis Aislada, Décima Época: 1a. CCVI/2014 (10a.) TORTURA. SU SENTIDO Y ALCANCE COMO PROHIBICIÓN CONSTITUYE UN DERECHO ABSOLUTO, MIENTRAS QUE SUS CONSECUENCIAS Y EFECTOS SE PRODUCEN TANTO EN SU IMPACTO DE VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS COMO DE DELITO.
- ❖ Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tesis Aislada, Décima Época: XXVI.5o. (V Región) 7 P (10a.) TORTURA. SU SENTIDO Y ALCANCE COMO PROHIBICIÓN CONSTITUYE UN DERECHO ABSOLUTO, MIENTRAS QUE SUS CONSECUENCIAS Y EFECTOS SE PRODUCEN TANTO EN SU IMPACTO DE VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS COMO DE DELITO.
- ❖ Suprema Corte de Justicia de la Nación, el 18 de marzo de 2015 la Primera Sala resolvió, por mayoría de votos, el amparo en revisión 631/2013, mediante el cual ordenó la inmediata libertad de Alfonso Martín del Campo Dodd, al haberse comprobado la tortura de la cual fue objeto para obtener su confesión en la comisión de dos delitos, sin que hubiera más pruebas en el proceso penal que lo inculpara.
- ❖ Suprema Corte de Justicia de la Nación. Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en asuntos que involucren hechos constitutivos de tortura y malos tratos

ESTATAL

- ❖ Constitución Política de las entidades federativas y la Ciudad de México.

- ❖ Código Penal de las entidades federativas.
- ❖ Ley Orgánica de la Procuraduría o Fiscalías Generales de Justicia de las entidades federativas.
- ❖ Ley para prevenir y sancionar la tortura en el Estado de Aguascalientes.
- ❖ Ley para prevenir y sancionar la tortura en el Estado de Campeche.
- ❖ Ley para prevenir y sancionar la tortura en el Estado de Coahuila de Zaragoza.
- ❖ Ley local para prevenir y sancionar la tortura del Estado de Chiapas.
- ❖ Ley para prevenir, sancionar y erradicar la tortura en el Estado de Chihuahua.
- ❖ Ley número 439 para prevenir, sancionar y erradicar la tortura en el Estado de Guerrero.
- ❖ Ley local para prevenir y sancionar la tortura del Estado de Jalisco.
- ❖ Ley para prevenir y sancionar la tortura en el Estado de México.
- ❖ Ley para prevenir y sancionar la tortura en el Estado de Morelos.
- ❖ Ley para prevenir y sancionar la tortura en el Estado de Nayarit.
- ❖ Ley local para prevenir y sancionar la tortura del Estado de Oaxaca.
- ❖ Ley para prevenir, investigar, sancionar, y en su caso, erradicar la tortura en el Estado de Puebla.

- ❖ Ley para prevenir y sancionar la tortura en el Estado de Quintana Roo.
- ❖ Ley para prevenir, sancionar y erradicar la tortura en el Estado de Sonora.
- ❖ Ley para prevenir y sancionar la tortura para el Estado de Tlaxcala.
- ❖ Ley para prevenir y sancionar la tortura en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
- ❖ Ley para prevenir, combatir y sancionar la tortura en el Estado de Yucatán.

ALCANCE

Es un instrumento jurídico que define los procesos que deberán seguir las instancias de procuración de justicia en la investigación del delito de tortura, a fin de garantizar en el ámbito nacional un trato adecuado homologado por parte de servidoras y servidores públicos al recibir denuncias de delitos de tortura.

GLOSARIO

AMP o Fiscal (Agente del Ministerio Público): Es la persona encargada de dar cumplimiento a las obligaciones previstas en el artículo 131 del CNPP ordenando la realización de las diligencias necesarias.

DMPE (Dictamen Médico Psicológico Especializado): Es un examen que realizan los peritos médicos y psicólogos, siguiendo las directrices del Protocolo de Estambul, que es un manual elaborado expresamente para la investigación y documentación de la tortura.

Inspección: Es un acto de investigación sobre el estado que guardan lugares, objetos, instrumentos o productos del delito.

IPH: Informe Policial Homologado.

Perito: Es la persona con conocimientos especiales en alguna ciencia, arte, técnica u oficio, que ejecuta las actividades del procesamiento de los indicios o elementos materiales probatorios.

Asimismo analiza los indicios o elementos materiales probatorios en las instalaciones de los servicios periciales y emite el informe, requerimiento o dictamen correspondiente.

Policía: Persona que actúa bajo la conducción y el mando del Ministerio Público en la investigación de delitos.

RNDT (Registro Nacional del Delito de Tortura): Es la herramienta de investigación y de información estadística que incluye los datos sobre todos los casos en los que se denuncie y se investiguen los casos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes; incluido el número de Víctimas de los mismos, el cual estará integrado por las bases de datos de las Instituciones de Procuración de Justicia, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de los Organismos de Protección de los Derechos Humanos, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y las Comisiones de Atención a Víctimas de las entidades federativas; así como de los casos que se tramiten ante organismos internacionales de protección de los derechos humanos.

OBJETIVOS

GENERAL

El Protocolo busca definir políticas de actuación y procedimientos de las/los agentes del Ministerio Público (AMP) o Fiscales, personal de servicios periciales y policías, apegados a los estándares internacionales de derechos humanos para la investigación del delito de tortura por parte de las Procuradurías y Fiscalías del país.

ESPECÍFICOS

- ❖ Establecer los lineamientos a seguir para realizar una investigación científica, minuciosa e imparcial, a efecto de lograr el esclarecimiento de los hechos y procurar que el culpable no quede impune, en las denuncias presentadas por el delito de tortura.
- ❖ Establecer estándares de observancia obligatoria para la práctica del Dictamen Médico Psicológico Especializado (DMPE) para la investigación de la tortura, de acuerdo con lo establecido en el Protocolo de Estambul.

- ❖ Precisar los daños y sufrimientos físicos y psicológicos causados a la Víctima, que permita la determinación de una reparación integral del daño, y la adopción de medidas de protección.
- ❖ Sistematizar la información que arroje la investigación integral del delito de tortura, a fin de contar con un banco de datos certero que permita generar estadísticas sobre la incidencia en la comisión del ilícito y facilitar el desarrollo de políticas públicas tendientes a su erradicación.

ROLES

PRINCIPALES ROLES

Agente del Ministerio Público o Fiscal, le compete la dirección, conducción y mando de la investigación del delito de Tortura, para lo cual, deberá coordinar a la Policía y Peritos en la investigación del delito de tortura.

Perito, ejecuta las actividades propias encaminadas al esclarecimiento de los hechos, aplicando adecuadamente su conocimiento científico especializado en la materia, vinculado en la investigación de delitos de tortura, con la habilidad para desarrollar el Protocolo de Estambul.

Policía, actuará bajo la conducción y el mando de la/del AMP o Fiscal, en la investigación del delito de tortura.

PRINCIPIOS Y POLÍTICAS DE ACTUACIÓN

- ❖ La investigación de la tortura debe ser autónoma, conducida bajo el principio de debida diligencia, que se traduce en que toda prevención, investigación, proceso penal y reparación que se inicie por los delitos o violaciones a derechos fundamentales previstos en esta Ley, se deberá garantizar su desarrollo de manera autónoma, independiente, inmediata, imparcial, eficaz; y deberá ser realizada con oportunidad,

exhaustividad, respeto a los derechos humanos y máximo nivel de profesionalismo.

- ❖ Las autoridades deberán respetar y proteger tanto la dignidad de la Víctima como la del imputado.
- ❖ Enfoque diferencial y especializado. En la aplicación del presente protocolo, la/el AMP, Policía o Perito deberá reconocer la existencia de grupos de población con características particulares o con mayor situación de vulnerabilidad en razón de su edad, género, preferencia u orientación sexual, etnia, condición de discapacidad y otros, cuyos daños requieren atención especializada que responda a las particularidades y grado de vulnerabilidad de las víctimas y faculta a las autoridades para ofrecer en el ámbito de sus respectivas competencias, garantías especiales y medidas de protección a los grupos expuestos a un mayor riesgo de violación a sus derechos.
- ❖ La/el AMP garantizará que las entrevistas con la Víctima y testigos se realicen en lugar adecuado, con las suficientes medidas de seguridad y protección a su integridad física y psicológica.
- ❖ La/el AMP que inicie la investigación de tortura, deberá ser distinto del que investiga una conducta delictiva atribuida a la Víctima de tortura.
- ❖ La investigación debe realizarse de manera inmediata, eficiente, exhaustiva, profesional e imparcial, libre de estereotipos y discriminación, orientada a explorar todas las líneas de investigación posibles que permitan allegarse de datos para el esclarecimiento del hecho que la ley señala como delito, así como la identificación de quien lo cometió o participó en su comisión.
- ❖ La/el AMP, Policía y Peritos evitarán dilaciones innecesarias durante la investigación.
- ❖ Los servidores públicos deben brindar a las Víctimas los servicios de ayuda, atención y asistencia desde el momento en que lo requiera, así como respetar y permitir el ejercicio efectivo de sus derechos.

- ❖ En los casos de autoría indeterminada o complicidad corresponsable, la/el AMP debe asegurarse de integrar todos los elementos de probable responsabilidad, analizando cada supuesto de autoría y participación, regulados en la normatividad vigente, incluidas las establecidas directamente en el tipo penal, así como las que deriven de responsabilidades por ejercicio del encargo, tales como la comisión por omisión.
- ❖ Las Víctimas tendrán derecho a ser examinadas por médicos especializados y/o psicólogos de su elección.
- ❖ Las autoridades intervinientes en el proceso informarán a la Víctima, desde el primer momento, de manera comprensible y empleando lenguaje sencillo, la naturaleza del procedimiento, su progreso, y cómo se utilizará toda la información proporcionada por ella.
- ❖ La/el AMP instruirá a los peritos médicos, psicológicos y fotógrafos especializados, a efecto de realizar la evaluación de la Víctima para emitir el DMPE, en materia de tortura.
- ❖ En todas las diligencias que practiquen la/el AMP, Policía o Perito, se hará mención el día, hora y lugar en donde se está llevando a cabo, además de los nombres y cargos de quienes intervienen.
- ❖ La/el AMP, en su caso, deberá emitir las medidas de protección necesarias para resguardar la integridad de las Víctimas y testigos.
- ❖ En el Protocolo de Estambul se establecen reglas específicas para tratar los casos en los que la tortura se ha producido a menores de edad, entre las que se encuentran:
 - La tortura puede afectar a un niño directa o indirectamente. Cuando se tortura a personas del entorno del niño, el impacto sobre éste es inevitable.
 - Al hacer la evaluación, el especialista debe asegurarse de que el niño se sienta

seguro, será necesario que durante la evaluación esté presente su padre, su madre o alguien de confianza que cuide de él.

- Con frecuencia, el niño no expresa sus pensamientos y emociones verbalmente con respecto al trauma sino más bien en su comportamiento.
 - El grado para verbalizar sus pensamientos y afectos depende principalmente de su edad y su grado de desarrollo; a partir de los 8 o 9 años, el niño es capaz de dar una cronología fidedigna de los acontecimientos.
 - Tratándose de niños de 3 años o menos que hayan experimentado o presenciado tortura, es fundamental el papel protector y tranquilizador de las personas que cuidan de él.
 - Si un niño ha sido sexualmente agredido, deberá ser examinado por un especialista en agresiones sexuales.
 - Pueden aparecer síntomas de trastorno de estrés postraumático similares a los del adulto, pero el especialista debe fiarse más de la observación del comportamiento del niño que de su expresión verbal.
 - Los peritos que realicen el examen a un menor de edad deberán tener experiencia en el trato con niños, niñas y adolescentes.
- ❖ Cuando la Víctima sea menor de edad, pero mayor de dieciséis años, podrá denunciar por sí mismo o por quien esté legitimado para ello. Tratándose de menores de esta edad o de otros incapaces, la denuncia se presentará por quienes ejerzan la patria potestad o la tutela.

PRINCIPIOS GENERALES DE LA INVESTIGACIÓN

- ❖ Establecer los hechos y reconocer la responsabilidad de las personas, ante las Víctimas y sus familias.
- ❖ Determinar medidas preventivas y necesarias para impedir la repetición de tales actos.
- ❖ Facilitar el procedimiento para que los responsables sean sancionados y fomentar la reparación del daño.
- ❖ Fomentar por parte del Estado la aplicación de la ley de forma rápida y expedita.
- ❖ Garantizar que el investigador cuente con lo necesario para ejecutar la evaluación pertinente.
- ❖ Garantizar a las Víctimas y sus representantes legales el acceso a la información respecto al procedimiento.
- ❖ Prestar por parte del Estado asesoría técnico-jurídica a la Víctima en caso de que ésta no tenga la posibilidad de contar con ella.
- ❖ Asegurar que los expertos médicos y psicólogos conduzcan la evaluación dentro de toda ética y dictaminen, con la metodología pertinente al caso.
- ❖ Garantizar que el informe tenga estricta confidencialidad.

En aplicación de estos principios, es claro que la investigación y documentación de la tortura requiere de un trabajo multidisciplinario, que no sólo busca esclarecer los hechos, también pretende evitar su repetición, facilitar los procedimientos, sancionar a los responsables, acompañar a las Víctimas y reparar el daño.

PROCEDIMIENTO

INICIO DE LA INVESTIGACIÓN

RECEPCIÓN DE NOTICIA CRIMINAL

La/el AMP que reciba una denuncia de hechos, partes informativos, IPH, informes o vistas que emita el órgano jurisdiccional de la posible comisión del delito de tortura, inmediatamente deberá analizar los hechos, a efecto de determinar si son constitutivos del delito de tortura, previsto en los artículos 24 y 25 de la LGPIST, si de la narrativa de los mismos no se aprecia que sean constitutivos del delito de tortura, deberá realizar la clasificación del delito que conforme a los hechos se actualice.

No se considerará tortura los dolores o sufrimientos físicos o psicológicos que sean únicamente consecuencia de medidas legales impuestas por autoridad competente, o las inherentes o incidentales a éstas, o de las derivadas del uso legítimo de la fuerza.

En casos de flagrancia o urgencia, la/el AMP realizará las diligencias necesarias, que no admitan demora así como las señaladas en el artículo 35 de la LGPIST, como solicitar la intervención de los peritos médicos y psicólogos especializados en la aplicación del DMPE para casos de posible tortura, para que inicien el procedimiento respectivo, e informar a la Fiscalía Especial a efecto de:

- Remitir el asunto a esa Fiscalía Especial
- Que el personal de la Fiscalía Especial se traslade al lugar donde se encuentra el detenido
- Que el personal de la Fiscalía Especial asesore a la/el AMP que recibió la puesta a disposición del detenido

Si los hechos se adecuan a la descripción del tipo penal del delito de tortura, la/el AMP que tenga conocimiento de éstos, previo a la apertura de una carpeta de investigación y a su remisión al área especializada, deberá efectuar de inmediato los siguientes actos de investigación:

- I. Localizar a la Víctima. Si no se encuentra a la Víctima, la/el AMP solicita a la Policía su localización.

Si no se localizara a la Víctima, la investigación se agotará en todas sus líneas, y en caso de no acreditarse la comisión del ilícito, se determinará lo que conforme a derecho corresponda;

- II. Realizar la entrevista de la Víctima, a fin de que señale el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución de los probables hechos; informándole sus derechos contenidos en el anexo del presente protocolo.

En caso de que la Víctima sea una persona extranjera, notificar a la autoridad competente del Estado del que sea nacional;

- III. Verificar la existencia de antecedentes en el Registro Nacional del Delito de Tortura (RNDT);

- IV. Notificar, de ser el caso, al juez o magistrado que dio la noticia de los hechos que dieron inicio a los actos de investigación correspondientes;

- V. Obtener todos aquellos dictámenes médicos de integridad física, psicológicos o psiquiátricos que se le hayan practicado a la Víctima;

- VI. Recabar el registro de la detención y puesta a disposición de la Víctima, así como el IPH y las entrevistas que se le hayan realizado, y

- VII. Solicitar se elabore la pericial en mecánica de lesiones y/o en su caso en psicología. En el caso de que los hechos no sean constitutivos del delito de tortura, se procederá conforme a derecho corresponda.

Con base en la información obtenida y de existir datos suficientes que presuman la comisión del delito de tortura, se remitirán las constancias correspondientes de manera inmediata a la

Fiscalía Especial en Investigación del Delito de Tortura, Estatal o Federal que corresponda, para que inmediatamente se realicen los actos de investigación conducentes.

El servidor público que haya sido denunciado como responsable de cometer el delito de tortura, no deberá participar en la investigación. Dicha circunstancia deberá ser supervisada por su superior inmediato.

Una vez recibida la investigación, únicamente será la Fiscalía Especial quien registrará el hecho en el RNDT.

FISCALÍA ESPECIAL

ESTRATEGIA DE INVESTIGACIÓN

Esta estrategia debe ser realizada llevando a cabo un análisis de la información que se tiene hasta el momento, a efecto de establecer con mayor efectividad y en el menor tiempo posible los actos de investigación a realizar, atendiendo la teoría del caso planteado.

La información que no se tenga, podrá ser identificada mediante este análisis y se solicitará a la brevedad, según sea el caso.

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

Los cuestionamientos que a continuación se presentan son de manera enunciativa, más no limitativa y permitirán delimitar el problema de investigación:

LA VÍCTIMA

Si es menor de edad; tiene alguna discapacidad; es persona migrante; pertenece a alguna comunidad indígena; es persona adulta mayor; está privada de libertad; en dónde; si no está privada de libertad, determinar si se le puede localizar; pertenece a algún grupo en situación de vulnerabilidad; se encuentra en riesgo; qué dolores o sufrimientos físicos y psicológicos se reportan en la denuncia; hubo agresión sexual; en qué condiciones físicas y psicológicas se encuentra; cuenta ya con algún examen médico; qué registros existen de la salud de la Víctima y si existen Víctimas indirectas y potenciales.

EL IMPUTADO

Si se trata de un servidor público o un particular; si es autoridad; a qué dependencia pertenece; se encuentra en posición de poder infligir daños a la Víctima; si puede conocer la información de la investigación por tortura; puede estar localizado y está en contacto directo con la Víctima.

LOS TESTIGOS

Si alguien presencié los hechos; qué relación tienen con la Víctima; se les puede localizar y qué medidas se deben adoptar para evitar ponerlos en situación de riesgo.

DOCUMENTACIÓN

Con qué documentación se cuenta: fotografías, declaración, entrevistas, videos, periciales, queja de un Organismo Público de Derechos Humanos; si la Víctima es probable responsable o imputado en otra investigación; si existe un examen de integridad en la carpeta de investigación de origen; qué registros oficiales existen de la detención y condiciones de detención de la Víctima; si existe confesión de responsabilidad y si existe parte informativo o IPH de otros servidores públicos diferentes del imputado (policías, abogados, defensores, médicos, etc.).

TIEMPO, MODO Y LUGAR DE LOS HECHOS

Cuál es el lugar en que se cometió la tortura o si fue en varios lugares; fechas y horas de la probable tortura; la posibilidad de utilización de armas u otros objetos.

DETENCIÓN

(Sólo si la Víctima está detenida)

Cómo se llevó a cabo la detención; en qué vehículo se trasladó a la Víctima, a qué corporación pertenece; cuánto tiempo transcurrió de la detención a la puesta a disposición del detenido; se le detuvo en flagrancia; por caso urgente; o en cumplimiento de una orden

de aprehensión; se calificó la legalidad de la detención; qué consta en los registros de personas detenidas; razonabilidad del parte informativo; congruencia entre hechos y narración en general y si éstos coinciden con lo narrado por la Víctima, los testigos y otros servidores públicos; si participaron diversas autoridades en la detención, si existen videos o cámaras en el lugar de la detención.

HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN

Las hipótesis son conjeturas acerca de lo sucedido que marcarán los pasos a seguir en la investigación. Se elaboran analizando y comparando la información disponible para formular suposiciones sobre lo que pudo haber ocurrido, seleccionando la explicación que sea más creíble y posible, de acuerdo a las evidencias preliminares. A partir de estas hipótesis se formularán las líneas de investigación.

INFORMACIÓN FALTANTE A RECABAR

Contestar las referidas preguntas de investigación debe servir a la/al AMP para definir de inicio, cuál es la información faltante para acreditar el hecho que la ley señala como delito de tortura; cuáles serán las fuentes de información a las que necesita recurrir; la que estima necesaria y qué auxiliares requerirá para hacerlo.

ASIGNACIÓN DE TIEMPOS Y EQUIPO

El personal será designado de acuerdo con las necesidades de las Víctimas; por ejemplo, si son mujeres, la/el AMP solicitará que quienes realicen los exámenes sean mujeres o del sexo de la elección de la Víctima.

Tomando en cuenta las consideraciones anteriores, la/el AMP integrará el equipo de investigación, con el que revisará paso a paso la estrategia de investigación y asignará tiempos y responsabilidades.

El personal que intervenga en la investigación debe estudiar las documentales que integran hasta ese momento el expediente.

En caso de que la Fiscalía Especial requiriera nuevamente la entrevista de la Víctima y ésta no se localizara, se remitirá a lo señalado en la fracción I, párrafo segundo, del apartado

denominado “Recepción de Noticia Criminal”.

ENTREVISTA DE LA VÍCTIMA

En caso que se requiera ampliar la entrevista de la Víctima, la diligencia se podrá llevar a cabo en lugar diferente al indicado en el citatorio, por razones diversas (falta de recursos económicos, temor, privación de libertad, tener alguna discapacidad, etc.), la/el AMP acudirá al lugar donde la Víctima señale para recabar su comparecencia.

Antes de iniciar, la/el AMP notificará a la Víctima todos los derechos que le son consagrados en nuestra norma y explicará a detalle los procedimientos que se llevarán a cabo para la investigación de los hechos.

Si la Víctima lo desea, durante la comparecencia podrá solicitar la presencia de un asesor jurídico.

Para evitar la revictimización en el examen médico, la comparecencia, y el DMPE, la/el AMP cuidará recabar sólo aquella información y evidencias en poder de las Víctimas que no se puedan obtener de los otros procedimientos.

Es importante abundar respecto a la información que pudiera permitir establecer las medidas de reparación del daño.

Las declaraciones o entrevistas de las Víctimas o de los testigos, deberán registrarse por cualquier medio, de manera que se observen las condiciones en las que se realizaron y las personas que intervinieron en las mismas.

VALORACIÓN DEL RIESGO

A partir de la declaración, la/el AMP debe identificar los elementos necesarios para hacer una valoración del riesgo de la Víctima directa, así como de las indirectas y potenciales.

La evaluación de riesgo de las Víctimas implica analizar la situación en materia de seguridad y de salud física y mental. Algunas preguntas orientadoras para determinar el grado de riesgo son:

- ¿La persona ha recibido amenazas? ¿Cuántas? ¿Qué decían? ¿Por qué medio las recibió?
- ¿Se han dado situaciones de inseguridad cerca de su domicilio?
- Si la persona está privada de libertad ¿se requiere hacer un traslado a otro dormitorio o a otro reclusorio?
- ¿La persona denunciada como probable responsable o imputada puede tener acceso a la Víctima, o es parte de la familia? ¿Es necesario solicitar una medida de protección?
- ¿Qué personas concretamente pueden estar en riesgo?
- ¿Está tendiendo deterioro de su salud física o mental?
- ¿Hay niños o niñas en situación de riesgo?
- ¿La Víctima está embarazada?

Por motivo de la tortura, la Víctima puede tener otro tipo de riesgos, que requieran la adopción de las medidas establecidas en la Ley General de Víctimas (LGV).

DATOS DE PRUEBA

SOLICITUD DE INFORMACIÓN A AUTORIDADES

De datos de prueba a recabar con urgencia a fin de que no se deterioren, desaparezcan, sean borradas u ocultadas las evidencias, como lo son las documentales, o las de audio o video en poder de las autoridades o de particulares.

Algunos de los registros importantes a recabar, siendo ésta una lista no limitativa son:

- ❖ Registros sobre la detención y custodia (si la Víctima está detenida):
 - Registro de la detención
 - Parte o IPH
 - Datos del vehículo en el que fue transportada
 - Detención en flagrancia, por caso urgente o en cumplimiento de una

orden de aprehensión

- Calificación de legalidad de la detención
 - Videos o audios en el lugar de la detención
 - Registros de los servicios (fatigas o bitácoras)
 - Registros de operativos o puntos de revisión, en los que se incluya servicio desempeñado, arma y vehículo asignado
 - Información relativa al armamento que coincida con las características aportadas por la Víctima o testigos
 - Características y descripción de los uniformes e insignias
 - Tiempo entre la detención y la puesta a disposición
 - Documentales de ingreso a los centros de detención o reclusión
 - Declaración inicial
 - Examen de integridad física u otros que se le hayan podido practicar
- ❖ Documentales en poder de los organismos públicos de derechos humanos en caso de que exista una queja.
- ❖ Registros de servidores públicos señalados como probables responsables:
- Alta en la dependencia
 - Álbumes fotográficos
 - Kardex y/o expediente personal

INSPECCIÓN DEL LUGAR DE LOS HECHOS

La Fiscalía Especial de acuerdo con las necesidades de información detectadas en la estrategia de investigación a través de la/el AMP, solicita a la Policía recabar dicha información, tales como elementos materiales probatorios en el lugar de los hechos y de los probables responsables, entrevistas con testigos, periciales, etc.

Para la inspección del lugar de los hechos, la/el AMP solicitará el apoyo de los servicios periciales y de la Policía.

Es necesario proteger el lugar de los hechos, hacer observaciones, fijaciones y narraciones sobre lo que se encuentre, así como tomar fotografías, hacer dibujos, croquis, planimetría y señalización de los indicios.

Al practicarse una inspección, la Policía entrevistará a las personas que se encuentren presentes en el lugar y que puedan proporcionar algún dato útil para el esclarecimiento de los hechos.

Los Peritos deben identificar, documentar, recolectar, empacar y entregar las evidencias a la Policía, con el registro de cadena de custodia debidamente requisitado, de acuerdo a lo establecido en la normatividad.

El manejo de indicios deberá describirse en un registro de cadena de custodia, en el que se deje constancia sobre quién intervino, el estado de las cosas y personas, así como las evidencias recolectadas u objetos asegurados, y las medidas adoptadas para su resguardo y entrega a la/al AMP o ingreso a la bodega de evidencias.

La Policía recibe los indicios o elementos materiales probatorios embalados y los entrega a los servicios periciales para su estudio de acuerdo a las solicitudes de la/del AMP.

La Policía elabora el informe inmediatamente después del momento en que se realizó la diligencia, respondiendo a toda la información requerida por la/el AMP.

ENTREVISTA CON TESTIGOS

La/el AMP solicitará a la Policía entrevistar a los testigos para detectar si existe información que pueda ser recabada ministerialmente.

En el momento en el que la Policía haga contacto con las personas, les explicará el motivo por el que se le requiere y la naturaleza de la diligencia que se va a practicar.

Tanto la/el AMP como la Policía deben verificar que los testigos no hayan recibido ningún tipo de intimidación que pueda afectar el resultado de la investigación.

ANÁLISIS PERICIALES

Además de las periciales que se hubieran realizado derivadas del examen de integridad a la Víctima y, en su caso, al probable responsable, y del DMPE, la/el AMP puede solicitar a los Servicios Periciales de acuerdo a las evidencias que haya recabado, otras periciales, tales como:

- ❖ Balística forense
- ❖ Audio y video
- ❖ Prueba de Luminol
- ❖ Criminalística de campo
- ❖ Dactiloscópicas
- ❖ Físico químicas
- ❖ Fotografía forense
- ❖ Retratos hablados
- ❖ Odontología forense
- ❖ Toxicología
- ❖ Psiquiátricas
- ❖ Psicológicas

La/el AMP de conformidad con lo dispuesto por el artículo 369 del Código Nacional de Procedimientos Penales, acreditará a los peritos independientes en la carpeta de investigación, o si el peritaje ya está realizado, lo anexará como otro dato de prueba que posteriormente evaluará, como lo haría con los peritajes oficiales.

DECLARACIÓN DEL IMPUTADO

Antes de iniciar la declaración, la/el AMP informará a la persona imputada todos los derechos que le son consagrados en nuestras disposiciones legales.

La/el AMP explicará a la persona, que tiene derecho de contar durante la declaración con un abogado particular; en caso de que no cuente con éste, la/el AMP solicitará a la instancia correspondiente la asignación de un defensor público.

La/el AMP asegura el respeto de los derechos del imputado. Para ello, elabora un formato en el cual debe firmar la defensa y las personas que presten asistencia de traducción o intérprete, cuando sea el caso, o los tutores o representantes legales, de así requerirse. En este formato, están escritos los derechos de la persona, por lo que una vez que los ha hecho del conocimiento de las partes intervinientes, solicita la firma del documento.

Antes de iniciar la declaración, la/el AMP solicitará a los servicios periciales el examen de integridad física y psicológica.

DICTAMEN MÉDICO PSICOLÓGICO ESPECIALIZADO

PERTINENCIA DE REALIZAR EL DICTAMEN

La decisión acerca de realizar o no un DMPE dependerá de las evidencias recabadas hasta el momento por parte de la/del AMP. Si las evidencias son suficientes para acreditar la tortura, no se ordenará la práctica de éste, ya que su realización implica que la Víctima reviva la tortura.

Si hubiere un peritaje médico psicológico elaborado por un organismo público de derechos humanos, o peritos médicos-psicológicos particulares, la/el AMP los tomará como parte de la evidencia.

En caso de decidir que es necesario el dictamen, la/el AMP preguntará a la Víctima si desea que se le realice. La persona puede decidir que sea realizado por peritos gubernamentales o por perito particular, que debe acreditar la/el AMP en la carpeta de investigación.

PLAZO PARA REALIZAR EL DICTAMEN

En caso de decidir que debe realizarse, esto debe hacerse lo antes posible (el Protocolo de Estambul señala que sea antes de las seis semanas de haber ocurrido la tortura), a fin de

registrar los daños y sufrimientos causados por la tortura en un tiempo cercano al evento.

Lo anterior no quiere decir que si se hace tiempo después no se pueda evidenciar la tortura, ya que ésta siempre deja secuelas; sin embargo, algunas lesiones físicas no serán tan evidentes.

PERITAJES DE PARTICULARES U ORGANISMOS PÚBLICOS DE DERECHOS

HUMANOS

La/el AMP puede solicitar a peritos particulares o al organismo público de derechos humanos correspondiente, la realización de los peritajes necesarios para la debida investigación y documentación de los delitos de la materia.

CONSENTIMIENTO INFORMADO

El Perito médico y el psicólogo explican a la Víctima de forma clara y sencilla el tipo de estudio clínico a realizar, en particular, cuál es el objetivo del examen, de cuántas secciones consiste, el tiempo aproximado que se empleará para la diligencia, en cuántos apartados se divide el dictamen, quién le realizará cada uno de ellos, cómo se van a utilizar los datos que se obtengan sobre su salud, cómo se conservarán, quién podrá tener acceso a ellos, o cualquier otra duda que manifieste la persona.

Independientemente de que la persona haya firmado el consentimiento informado, en cualquier momento durante el desarrollo del dictamen podrá revocarlo.

Los Peritos deberán verificar que la Víctima y/o testigos no están declinando la ejecución del dictamen por presiones, amenazas o actos intimidatorios en su agravio, de ser así se notificará a la/el AMP para que éste establezca otros medios de prueba mediante los cuales pueda recabar evidencia sustantiva, sin poner en riesgo a la Víctima y/o testigos.

En todos aquellos casos en los que la información que se le hubiera proporcionado a la Víctima sea errónea o falsa, el consentimiento informado que se haya obtenido, será nulo.

PREPARACIÓN DE LOS PERITOS

En caso de que la persona autorice que peritos oficiales realicen el dictamen, la/el AMP solicitará al área de servicios periciales la asignación de un médico y de un psicólogo, con las características necesarias para atender las particularidades de las Víctimas. Los peritos médicos y psicológicos leerán la carpeta de investigación para conocer detalles que permitan una mejor intervención con la Víctima.

Durante el dictamen, los peritos tomarán nota de aquellas pruebas que mediante su exploración puedan ser documentadas, recuperadas e incluso preservadas, que guarden relación con la tortura y que sirvan para identificar los sufrimientos, dolores, daños o penas causadas a la Víctima.

Los peritos médico y psicólogo verifican las condiciones físicas del entorno y de seguridad, para lo cual acuden al lugar indicado por la/el AMP con la anticipación necesaria para valorarlo.

Un lugar adecuado es aquel que sea privado (completamente cerrado) adecuadamente iluminado, en condiciones climáticas dignas, seguro, cómodo y con acceso a instalaciones sanitarias, y que no replique el sitio donde la tortura fue cometida.

En el supuesto de que no existan las condiciones requeridas, el perito solicita a la/el AMP que ordene a quien corresponda que se brinden.

En caso de que, por las condiciones del lugar en donde se encuentra la Víctima, sea materialmente imposible brindar un espacio para la realización del dictamen con los requerimientos deseables señalados, el perito valorará realizarlo, siempre y cuando existan condiciones de privacidad y de seguridad para la persona entrevistada.

Una vez que se hayan otorgado las condiciones adecuadas para realizar el dictamen, los peritos planean la logística con el equipo multidisciplinario, atendiendo a las circunstancias particulares del caso, como por ejemplo si la Víctima se encuentra en estado de crisis.

CONSIDERACIONES GENERALES

El personal pericial debe formular preguntas sobre los hechos específicos relacionados con

los actos de tortura, evitando interrogatorios innecesarios sobre la personalidad de la probable o cualquier otro que afecte la intimidad, la condición de salud física y mental, o estigmatice, discrimine o propicie la revictimización.

El personal pericial debe formular preguntas neutras a la Víctima, no sugerentes, es decir, sin suposiciones o conclusiones, de manera que la persona examinada ofrezca el testimonio más completo y objetivo.

Deben evitarse las preguntas a base de listas, que pueden llevar a la persona entrevistada a dar respuestas inexactas, si lo que realmente ha sucedido no corresponde con exactitud a alguna de las opciones que se le brindan.

Los peritos que realizan el dictamen deben alentar a la persona a que utilice todos sus sentidos para describir lo que le ha sucedido; para ello, se debe de preguntar qué es lo que ha visto, oído, sentido y tocado.

El perito médico y el psicólogo se cercioran que la persona comprenda el estudio que se le va a practicar.

Si la Víctima se encuentra en estado de crisis, se priorizará la intervención del perito psicólogo, y si fuera necesario o aconsejable para el bienestar de la Víctima, podrá suspender el desarrollo de la entrevista y establecerá nueva fecha para reanudarla.

El personal pericial utilizará fotografías para complementar la documentación del estado físico. Debe tenerse en cuenta que las fotografías de revelado instantáneo pueden irse borrando con el tiempo. Se preferirán fotografías profesionales que deberán ser tomadas en el momento en que pueda disponerse del equipo necesario. Serán obligatorias las cámaras que señalen automáticamente la fecha.

A través del registro fotográfico se documentará con todo detalle la cadena de custodia.

En el supuesto de que los peritos requieran estudios complementarios y/o interconsultas, elaboran el requerimiento a la/al AMP, el cual debe solventar el requerimiento.

La valoración médica tiene como objetivos:

- ❖ Correlacionar el grado de concordancia entre la historia de síntomas físicos e incapacidades agudas y crónicas con las alegaciones de tortura.
- ❖ Correlacionar el grado de concordancia entre los hallazgos de la exploración física y las alegaciones de tortura.
- ❖ Correlacionar el grado de concordancia entre los hallazgos físicos del individuo y su conocimiento de los métodos de tortura utilizados en una determinada región y sus efectos ulteriores comunes.

El médico anotará fecha y hora de inicio del examen médico; solicita a la persona datos personales que incluyan su nombre, edad, estado civil, lugar de nacimiento, ocupación y grado de estudios; antecedentes personales patológicos, entendiéndose por estos los padecimientos médico traumatológicos, quirúrgicos y, en su caso, gineco-obstétricos; y el tratamiento actual prescrito, si está ingiriendo medicamentos.

El médico valorará en la persona presentada: su estado de conciencia; orientación en tiempo, lugar, memoria, concentración, lenguaje, congruencia, coherencia, fluidez, comprensión, repetición, tono y aliento a alcohol, solventes, entre otros, así como su actitud, expresión facial y marcha.

Tomará los signos vitales en la persona, explorará la coordinación neuromuscular. Cuando la persona presente, en el momento de la práctica del examen solicitado, un padecimiento agudo como: sangrado, dolor de abdomen agudo o agudización de algún padecimiento crónico como: hipertensión arterial, diabetes mellitus o epilepsia, que pudieran poner en peligro su integridad física o su vida.

El médico proporcionará los primeros auxilios que sean posibles y notificará inmediatamente

por escrito a la autoridad correspondiente para que solicite y facilite el traslado urgente al nivel hospitalario correspondiente.

El Perito Médico lleva a cabo la exploración corporal por aparatos y sistemas. Inspeccionará la totalidad de la anatomía corporal, debiendo contar con autorización por escrito de la persona examinada si es mayor de edad y de los tutores o representantes legales tratándose de menores o incapaces, para examinar área genital, en la que deberá estar acompañado de sus padres o quien ejerza la patria potestad, tutela, guarda o custodia, o esté a cargo de la representación en suplencia, salvo disposición judicial en contrario, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables y siempre respetando el derecho a la intimidad y el interés superior de la niñez.

En el caso de que el médico observe lesiones derivadas de la tortura, describirá sus características generales, tomará fotografías, e informará de inmediato a la/al AMP para que de manera oportuna inicie con las investigaciones que resulten necesarias, sin perjuicio de la atención médica que deba proporcionarse.

EXAMEN PSICOLÓGICO

El examen psicológico tiene como objetivos:

- ❖ Correlacionar el grado de concordancia entre los hallazgos psicológicos y la descripción de la presunta tortura.
- ❖ Evaluar si los signos psicológicos hallados son reacciones esperables o típicas al estrés extremo dentro del contexto cultural y social del sujeto.
- ❖ Señalar el estado del sujeto en la evolución fluctuante a lo largo del tiempo de los trastornos mentales relacionados con los traumas, es decir, cuál sería el marco temporal en relación con los acontecimientos de tortura y en qué punto de la recuperación se encuentra el sujeto.
- ❖ Identificar todo elemento estresante coexistente que actúe sobre el sujeto (por

ejemplo, persecución mantenida, migración forzada, exilio, pérdida del papel familiar y social, etc.), así como el impacto que esas influencias puedan tener sobre el sujeto.

- ❖ Mencionar las condiciones físicas que pueden contribuir al cuadro clínico, en particular en lo que respecta a posibles signos de traumatismo craneal sufrido durante la tortura o la detención.

El perito psicólogo realiza la entrevista teniendo en cuenta que, lo que se considera comportamiento perturbado o patológico en una cultura, puede no ser considerado como anormal en otra, por ello, las evaluaciones psicológicas deben considerar los diversos contextos socio políticos, y culturales.

Si el perito no tiene conocimiento del contexto cultural de la Víctima, es incluso posible que se requiera la asistencia de un intérprete o facilitador para el entendimiento del entorno social que puede hacer que dolores o sufrimientos que a simple interpretación no parezca graves, entendidos desde el entorno y características personales de la Víctima, adquieran una gravedad específica.

El perito psicólogo debe esforzarse por establecer una relación entre el sufrimiento mental y el contexto de las creencias y normas culturales de la Víctima, lo que incluye el respeto al contexto político, a la cultura y a las creencias religiosas.

Cuando se realiza una evaluación psicológica a una Víctima de tortura, el perito no debe precipitarse a establecer diagnósticos y calificaciones; es mejor que se transmita a la Víctima la idea de que sus quejas y sufrimientos se reconocen como reales y previsibles, dadas las circunstancias. En este sentido, una actitud empática y sensitiva puede dar a la Víctima algún alivio de su experiencia.

Las reacciones psicológicas más frecuentes, aunque no las únicas son la re-experimentación de la tortura; evitación y embotamiento emocional, hiper excitación (ansiedad, irritabilidad, dificultad de concentración, entre otros), síntoma de depresión, disminución de la autoestima y desesperanza en cuanto al futuro, disociación,

despersonalización y comportamiento atípico, quejas psicosomáticas, disfunciones sexuales, psicosis, utilización abusiva de sustancias y deterioro neuropsicológico.

INFORME CONJUNTO. ANÁLISIS INTEGRAL DE LOS RESULTADOS

Los peritos formulan sus conclusiones y, en su caso, recomendaciones o medidas para atender un posible padecimiento en la Víctima a causa de la tortura y que requiera atención médica inmediata.

Para preparar una impresión clínica con miras a redactar un informe sobre signos físicos y psicológicos de tortura, deberá valorarse lo siguiente:

- ¿Hay una relación entre los signos físicos y psicológicos hallados y el informe de presunta tortura?
- ¿Qué condiciones físicas contribuyen al cuadro clínico?
- ¿Son los signos psicológicos hallados los que cabe expresar o las reacciones típicas ante un estrés máximo dentro del contexto cultural, y social del individuo?
- Dado el curso fluctuante con el tiempo de los trastornos mentales relacionados con los traumas, ¿cuál sería la cronología en relación con los actos de tortura? ¿En qué punto de la recuperación se encuentra el sujeto?
- ¿Qué otros factores de estrés afectan al sujeto (por ejemplo, una persecución mantenida, migración forzada, exilio, pérdida de los papeles familiar y social, etc.)?
- ¿Qué impacto tienen estas cuestiones sobre la Víctima?

Adicionalmente, deberá valorarse los siguientes elementos:

- Antecedentes clínicos, psiquiátricos, así como de uso y abuso de sustancias
- Alegaciones de tortura
- Síntomas y discapacidades físicas
- Formas de reparación del daño

Los peritos médico y psicólogo realizan una confrontación de los testimonios recabados para el dictamen y la mecánica de lesiones.

Los peritos anotan las restricciones que encontraron durante la evaluación.

Al finalizar la intervención, los peritos firman el dictamen y lo entregan a la/el AMP, quien firmará a su vez de recibido.

En la entrega del dictamen, el perito debe asegurar que contenga la firma de todos los peritos que participaron, de acuerdo con su especialidad.

En caso de peritajes de médicos o psicológicos independientes, se corroborará el dictamen ante la/el AMP, con el objetivo de equiparar el dictamen realizado por servicios periciales de las Procuradurías o Fiscalías, con los requerimientos establecidos por los acuerdos de éstas.

La/el AMP agrega el formato original del dictamen a la carpeta de investigación.

DETERMINACIÓN

Una vez recabados los datos de prueba y analizados por parte de la/el AMP resolverá lo que en derecho corresponda.

REPARACIÓN DEL DAÑO

La/el AMP está obligado a solicitar la reparación del daño.

La LGV establece que las Víctimas del delito tienen derecho a ser reparadas de manera oportuna, plena, diferenciada, transformadora, integral y efectiva por el daño que han sufrido, comprendiendo medidas de:

- ❖ **Restitución:** busca devolver a la Víctima a la situación anterior a la comisión del delito dentro de lo posible;
- ❖ **Rehabilitación:** busca facilitar a la Víctima hacer frente a los efectos sufridos por causa del hecho punible o de las violaciones de derechos humanos;
- ❖ **Compensación:** ha de otorgarse a la Víctima de forma apropiada y proporcional a la gravedad del hecho y teniendo en cuenta las circunstancias de las Víctimas.
- ❖ **Satisfacción:** busca reconocer y restablecer la dignidad de las Víctimas, y
- ❖ **No repetición:** buscan que el hecho punible o la violación de derechos sufrida por la Víctima no vuelva a ocurrir.

En todas las medidas de reparación se requiere considerar la situación o condición de la Víctima, algunas de estas pueden ser si es menor de edad, si tiene alguna discapacidad; si es migrante, si es persona adulta mayor, si está privada de libertad, embarazada o desplazada, si se encuentra en riesgo, si sufrió agresión sexual; si requiere tratamiento médico o psicológico a corto, mediano o largo plazo, entre otras.

Cabe señalar que además de un delito, la tortura es una violación a los derechos humanos. De acuerdo con el artículo 65 de la LGV, todas las Víctimas de violaciones a los derechos humanos serán compensadas, en los términos y montos que determine la resolución que emita en su caso un órgano jurisdiccional nacional.

ANEXO

DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS QUE DEBE INFORMARLES EL MINISTERIO PÚBLICO DE LA

- I. Que tiene derecho a presentar en cualquier momento, todos los medios de prueba que estime convenientes;
- II. Su derecho a ser examinada por médicos especializados o psicólogos de su elección; y
- III. Que de aceptar se le realice el examen médico-psicológico, éste deberá realizarse en los términos siguientes:
 - ❖ Respetando su derecho a no ser revictimizada;
 - ❖ De manera colegiada, individual o privada, salvo cuando deban realizarse diferentes peritajes a personas agredidas sexualmente o cuando la naturaleza del hecho delictivo lo amerite, deberá integrarse un equipo interdisciplinario con profesionales capacitados en atención a Víctimas, con el fin de concentrar en una misma sesión las entrevistas que ésta requiera, para la elaboración del dictamen respectivo;
 - ❖ Cuando la Víctima sea una niña, niño o adolescente en todo caso deberá estar acompañada de sus padres o quien ejerza la patria potestad, tutela, guarda o custodia, o esté a cargo de la representación en suplencia, salvo disposición judicial en contrario, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables; y siempre respetando el derecho a la intimidad y el interés superior de la niñez;

- ❖ Que sólo deberá tratarse sobre los hechos específicos relacionados con los actos de tortura, evitando cualquier interrogatorio que estigmatice, discrimine o propicie la revictimización;
- ❖ Que deberá efectuarse en lugar seguro, salubre, que garantice la privacidad de la Víctima;
- ❖ Cuando la Víctima sea una mujer, preferentemente debe realizarse por peritos del sexo femenino o del sexo que la Víctima elija;
- ❖ Cuando la Víctima sea una niña, niño o adolescente, preferentemente debe realizarse por médicos pediatras y otros profesionales con especialidad en el tratamiento de niñas, niños o adolescentes;
- ❖ En los casos de violencia sexual, la asistencia médica deberá ser proporcionada por un médico especialista en ginecología, de sexo femenino o del sexo que la Víctima elija, o de cualquier otra especialidad que sea requerida y de conformidad con los principios establecidos en los protocolos con perspectiva de género en la materia.



Actuación para el Personal de las Instancias de Procuración de Justicia del País,
en Casos que Involucren la Orientación Sexual o la Identidad de Género.

Material aplicable en casos en los cuales se encuentre involucrada una persona de la población LGTBTI con cualquier calidad dentro de un procedimiento penal, pues contiene las pautas que se deben observar durante dicho procedimiento para garantizar un trato adecuado y el debido respeto de sus derechos humanos, alejados de todo acto de discriminación.

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA EL PERSONAL DE LAS INSTANCIAS DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA DEL PAÍS, EN CASOS QUE INVOLUCREN LA ORIENTACIÓN SEXUAL O LA IDENTIDAD DE GÉNERO

DICIEMBRE 2017

Presentación

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece los principios para que ciudadanas y ciudadanos convivan en armonía y en paz social, privilegiando los derechos y las garantías que ella consagra. En su artículo primero establece que: “en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte” y en su párrafo quinto, prohíbe toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra, que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

En razón de lo anterior, se reconoce la titularidad de los derechos de toda persona o grupo de personas, los que en ningún momento se encuentran supeditados a características personales, toda vez que gozan de la máxima protección de la Ley fundamental de la nación, así como los tratados internacionales de los que México forma parte y la normatividad aplicable, por lo que el Estado Mexicano y sus autoridades, tienen la obligación de promover y respetar los derechos humanos; así como sancionar en su caso las violaciones de los mismos y garantizar la reparación conducente.

Es importante mencionar el apoyo del Estado Mexicano a las *Resoluciones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos sobre Derechos Humanos, Orientación Sexual e Identidad de Género*, en las que se ha condenado los actos de violencia y las violaciones de derechos humanos en contra de personas a causa de su orientación sexual e identidad de género, compromiso ratificado por México a través del Decreto Presidencial del veintiuno de marzo de 2014 por el que se instituyen los días 17 de mayo de cada año, como Día Nacional de la Lucha contra la Homofobia destacando la obligación de los poderes públicos federales para llevar a cabo medidas de inclusión e instrumentar políticas contra toda forma de discriminación, incluyendo la homofobia, xenofobia, la misoginia, la discriminación por apariencia o el adulto-centrismo.

En atención a lo anterior, la estrategia de desarrollo nacional traza la ruta de gobernabilidad para llevar al país a su máximo potencial, subrayando la necesidad de transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente que garantice el respeto y protección de los derechos humanos y la erradicación de la discriminación. Derivado de lo anterior, el Programa Nacional para la Igualdad y No Discriminación (2014–2018) establece medidas útiles para combatir la discriminación por razones de orientación sexual, identidad de género, expresión de género y/o características sexuales, que deben implementar todas las instancias de procuración de justicia del país.

Además, el Programa Nacional de Derechos Humanos (2014-2018) establece de manera específica la obligación de implementar acciones afirmativas para hacer realidad el derecho a la igualdad de personas y grupos en situación de vulnerabilidad, impulsando una cultura



de respeto de los derechos de las personas de la población lesbico, gay, bisexual, transexual, transgénero, travesti e intersexual, en lo sucesivo, denominados con las siglas: LGBTTTI que contribuya a garantizar el acceso a la justicia igualitaria; así como el combate la violencia, corrupción y desigualdad a través de la institucionalización del enfoque de derechos humanos en todo el quehacer público, de manera específica en los protocolos de actuación de policías y fuerzas armadas.

El Programa Nacional de Procuración de Justicia (2014-2018) señala la importancia de homologar las actuaciones del personal sustantivo a través de los protocolos en los que se establecen directrices para el ejercicio de las potestades en casos concretos; contribuyen a transparentar las funciones de servidoras y servidores de las instancias de procuración de justicia a fin de combatir la corrupción.

Por consiguiente, el pasado 9 de diciembre de 2016, durante la Asamblea Plenaria de la XXXVI Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, en la Ciudad de México, la Procuraduría General de la República, en conjunto con las Instancias de Procuración de Justicia, consensaron el siguiente punto de acuerdo: **"...CNPJ/XXXVI/06/16.- Estrategia de Atención a Personas de la Comunidad Lesbico, Gay, Bisexual, Transexual, Transgénero, Travesti e Intersexual (LGBTTTI), en el Marco de una Procuración de Justicia Igualitaria.**

Párrafo Único

La Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia acuerda conformar una comisión de trabajo entre las procuradurías y fiscalías generales con el objetivo de elaborar el protocolo de actuación para el personal de las instancias de procuración de justicia del país, con los casos que involucren la orientación sexual o la identidad de género, tomando como base el símil publicado en el diario Oficial de la Federación el 26 de junio de 2015; mismo que se someterá a opinión de las distintas organizaciones de la sociedad civil relacionadas con el tema..."

Por lo tanto y con el ánimo de contribuir a garantizar el acceso a la justicia de todas las personas, se emite el presente Protocolo como una guía de actuación para la atención con enfoque diferencial y especializado a personas LGBTTTI por parte de servidoras y servidores públicos de las instancias de procuración de justicia del país, destacando que el presente instrumento es el resultado del trabajo conjunto de las instancias de procuración de justicia del país con las Organizaciones de la Sociedad Civil y la colaboración de instituciones como el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

LIC. ALBERTO ELÍAS BULTRÁN
SUBPROCURADOR JURÍDICO Y DE ASUNTOS INTERNACIONALES,
EN SUPLENCIA DEL PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA
PRESIDENTE DE LA CONFERENCIA NACIONAL DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA



Protocolo de Actuación para el Personal de las Instancias de Procuración de Justicia del País, en casos que involucren la Orientación Sexual o la Identidad de Género

Índice

1.	Justificación	5
2.	Abreviaturas y acrónimos	9
3.	Marco jurídico	10
4.	Consideraciones previas	13
5.	Objetivos	15
6.	Ámbito de aplicación	16
7.	Políticas de operación	23
8.	Procedimiento	26
9.	Formatos con elementos mínimos	31
10.	Atención a víctimas de la población LGBTTTI	41
11.	Mecanismo de coordinación para la implementación del protocolo	42
12.	Instrumentos especializados y lecturas recomendadas	46
13.	Términos del contexto de la diversidad sexual	49

1. Justificación

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) es un pacto social que asegura a todas las personas el goce y ejercicio pleno de sus derechos humanos; se fortalece con la participación de mexicanas y mexicanos en el cumplimiento de las obligaciones que cada cual debe asumir dentro de un Estado democrático de derecho. Por consiguiente, son destacables las numerosas modificaciones a los contenidos de nuestra ley fundamental, pues todas ellas reflejan su perfectibilidad, así como el deber del Estado de respetar y proteger la dignidad humana.

Entre otras, citaremos dos de las reformas más significativas, una es la de 2008, que permitió la implementación del sistema de justicia penal de corte acusatorio y oral que contiene los principios procesales que hoy conocemos, y bifurca el progreso en materia de derechos humanos en México, la otra reforma es al artículo primero de la CPEUM de 2011, que incorporó a su texto lo previsto en los Tratados Internacionales en materia de derechos humanos de los que México forme parte, estableciendo la obligación del Estado mexicano de prevenir, investigar, sancionar y reparar violaciones a derechos humanos y, en consecuencia, adoptar con arreglo a sus procedimientos constitucionales, las medidas legislativas y demás convenios concordantes.

En el texto constitucional queda expresamente prohibida la discriminación motivada por diversas causales; entre ellas las preferencias sexuales o cualquier otra que atente contra la dignidad humana, por lo que todas las autoridades –en el ámbito de sus competencias– deberán promover, respetar, proteger y garantizar plenamente los derechos humanos de las personas, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha establecido, en la resolución del expediente Varios 912 de 2010 y en la Contradicción de Tesis 293 de 2011, que las normas protectoras de derechos humanos contenidas en la CPEUM y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte conforman un espacio interpretativo que da como resultado la constante aplicación de la ley que más favorezca a la persona, toda vez que aquella, puede provenir de fuente nacional o internacional. De igual manera, ese máximo tribunal de justicia ha dispuesto que la jurisprudencia de los tribunales mexicanos y la que se origina en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoiDH) son igualmente vinculantes bajo el principio constitucional de que en caso de conflicto normativo prevalecerá la doctrina que favorezca en todo tiempo a la persona mediante la protección más amplia, a esto se refiere el principio *Pro Persona*.

Las normas provenientes de Tratados Internacionales, al igual que las normas constitucionales, deben ser aplicadas mediante un control de constitucionalidad y convencionalidad con los alcances que la propia SCJN prevé en su jurisprudencia, con mayor razón, respecto de actividades de carácter administrativo, en el sentido de que en éstas no pueden dejar de observar dichas normas de protección.

Asimismo, se observa que el marco jurídico internacional de derechos humanos consagra en sus contenidos el principio de igualdad y no discriminación, y exhorta a los Estados parte a combatir todo tipo de discriminación contra personas en las distintas esferas de su vida, incluyendo la discriminación por motivos de orientación sexual, identidad de género, expresión de género y características sexuales, en apego, tanto a los tratados internacionales como a la interpretación evolutiva de los derechos realizada por la SCJN, la CIDH y los organismos internacionales de derechos humanos.

Abordar el tema relativo a los derechos humanos de la población Lésbico, Gay, Bisexual, Transgénero, Transexual, Travesti e Intersexual (LGBTTTI)¹ no exige la creación de nuevos derechos, ni que se concedan derechos especiales a ciertos grupos o individuos, sino hacer que se respeten, protejan y garanticen los establecidos para toda persona, incluyendo los de aquellas minorías, cuyos derechos han sido vulnerados históricamente. Es por ello que sin importar cuán grande o pequeña sea su población, y recordando que la Convención Americana sobre Derechos Humanos estipula que toda persona es ser humano y consecuentemente, titular de todos los derechos que le protegen y amparan a través de leyes y Tratados Internacionales de los que México forma parte, servidoras y servidores públicos, en el ejercicio de nuestras funciones, debemos garantizar los derechos humanos como prerrogativas universales, interdependientes, indivisibles y progresivas.

Es importante citar, como parte del entramado jurídico internacional existente, los *Principios sobre la aplicación de la legislación internacional de derechos humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de género* conocidos también como *Principios de Yogyakarta*, respecto de los cuales la SCJN ha determinado que si bien no constituyen un documento vinculante, sí constituyen un criterio orientador que afirma las normas internacionales que los Estados deben cumplir, dado que desarrollan de manera transversal el principio de igualdad y no discriminación en las distintas prerrogativas que contiene –en el que se basa nuestro orden jurídico nacional–, entre las cuales se encuentra el derecho de toda persona a ser tratada humanamente; a que les sea reconocida su personalidad jurídica; a la seguridad personal; a la privacidad; a la libertad en sus diversas vertientes; al trabajo, entre otros.

La voz de la comunidad internacional LGBTTTI, a través de la *Declaración de Montreal sobre los Derechos Humanos de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales*, propone generar un cambio social en el que se considera fundamental la participación de los diversos actores, a fin de que a las personas con orientaciones sexuales e identidades de género no normativas (o que transgreden las normas de género socialmente aceptadas), les sea garantizado el ejercicio pleno de sus derechos,

¹ Se considera lo señalado en el Estudio sobre terminología y estándares relevantes sobre la orientación sexual, identidad de género y expresión de género que elaboró la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos “CIDH” en cumplimiento de la resolución AG/RES. 2653 (XLI-O/11): Derechos Humanos, Orientación Sexual e Identidad de Género, sobre agrupar las categorías de personas transgénero, travestis y transexuales en la palabra *trans*, resultando el uso del acrónimo LGBTI para referirse a personas lesbianas, gay, bisexuales, transgénero, travestis, transexuales e intersexuales, sin embargo atendiendo al principio de auto identificación y a la manifestación de personas representantes de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) en México, sobre el riesgo de invisibilizar a los mencionados grupos que forman parte de la diversidad sexual *trans*, se optó por utilizar en lo sucesivo el acrónimo LGBTTTI. Lo anterior con la salvedad de que estas clasificaciones no representan el universo de la diversidad sexual, pues existen otras orientaciones e identidades de género no normativas que se encuentran reivindicando el acceso a sus derechos sin discriminación.



entre ellos, los relativos a la protección ante la violencia pública y privada; el respeto a la libertad de relacionarse con personas del mismo sexo con el consentimiento mutuo y entre personas adultas.

La responsabilidad de servidoras y servidores públicos en materia de procuración de justicia del país consiste en garantizar una de justicia efectiva ante los tribunales competentes en materia penal, conforme a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez, lealtad, disciplina y respeto a los derechos humanos, en concordancia con la legislación aplicable.

Debemos tener presente que la seguridad pública, como función exclusiva a cargo de la Federación, las entidades federativas y los municipios, comprende la prevención, investigación y persecución de delitos para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas en términos de la ley, de acuerdo a la esfera de competencias que la CPEUM determina. Instrumento jurídico en el que se origina la razón de ser de las instancias de procuración de justicia consistente en la investigación de delitos y persecución de los probables responsables ante los tribunales competentes, la atención y protección a las víctimas de los delitos, la implementación de la política criminal del país, a través de las estrategias y mecanismos conducentes, así como la defensa de los derechos humanos, del interés social y del bien común, a través de la consolidación del sistema penal acusatorio.

Es de reconocer que la situación de violencia contra personas LGBTTTI, yace en la discriminación estructural existente, misma que subsiste en su vertiente formal y sustantiva; es omnipresente y se encuentra fuertemente arraigada en la cultura, lo que con frecuencia deriva en actos de discriminación directa (hacia la persona) o indirecta (a través de las estructuras sociales, jurídicas, administrativas o políticas). Sumado a lo anterior, es sabido que en México y en el mundo existen expresiones de violencia en contra de las personas con orientaciones sexuales, identidades o expresiones de género que transgreden las normas de género socialmente aceptadas, o características sexuales distintas a lo que se entiende por “mujeres” y “hombres”; sin embargo, ninguna persona, por motivo de su orientación sexual, identidad de género, expresión de género, características sexuales o por cualquier otra condición, merece la violencia de la que se reconoce ha sido objeto.

Por lo tanto, es importante desdibujar dicha visión social heteronormativa y adoptar un enfoque pluralista e incluyente, sustentado en los derechos humanos como resultado del respeto a la diversidad humana a partir del reconocimiento de la legitimidad del otro; lo que promueve también la aceptación de la convivencia entre personas distintas, toda vez que la situación de vulnerabilidad de las personas LGBTTTI no se origina realmente a causa de la orientación sexual, identidad de género, expresión de género y/o características sexuales de la persona, sino se la falta de reconocimiento y respeto de la diversidad sexual que se manifiesta en la discriminación estructural (*de jure* y *de facto*) existente, lo cual impacta en diversos ámbitos de su vida.

La violencia contra personas LGBTTTI se evidencia en distintas formas y contextos sociales que van desde la indiferencia ante la problemática, expresiones de rechazo, descalificación, exclusión, humillaciones públicas, incluso, a través de mensajes o discursos impregnados de odio por parte de algunos grupos o personas, actos que han alcanzado límites insospechados de violencia, llevándola a su máxima expresión, afectando diversos derechos como: la integridad personal, el libre desarrollo de la personalidad, la libertad de expresión y hasta la pérdida de la vida, como el bien jurídico y humano máspreciado.



A fin de garantizar una procuración de justicia eficaz y eficiente, vitalicia en un Estado democrático de derecho, es necesario tomar como base los instrumentos jurídicos que tutelan derechos humanos, pero también las propuestas que emanan de los estudios que existen en la materia; así como los informes especializados que emiten diversos organismos de derechos humanos, pues en todos ellos se expresa la preocupación de la comunidad jurídica internacional ante la violencia en contra de las personas LGBTTTI. Por citar alguna de las observaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al Estado Mexicano, que se encuentra de manera constante y reiterada en los diversos informes que emite respecto a la violencia ejercida en contra de personas en situación de vulnerabilidad, es la necesidad de contar con datos estadísticos desagregados que permitan conocer el panorama de violencia ejercida de manera precisa a fin de establecer las medidas de política criminal más adecuadas.

De acuerdo con la CIDH, otro de los elementos para comprender las formas de violencia en contra de personas LGBTTTI o aquellas percibidas como tales, es la *heteronormatividad*, entendida como el conjunto de reglas jurídicas, sociales y culturales que se establecen a partir de la expectativa colectiva única, común, que descansa en las formas aceptables de sexualidad masculina y femenina, estigmatizando todas las demás posibilidades de relaciones entre personas en el ámbito sexual.

La discriminación es una práctica cotidiana prolifera día con día en la sociedad, reforzando una cultura de intolerancia ante lo distinto, reflejándose en la tradición existente, que ha tenido como base un paradigma que enaltece un modelo ejemplar de *hombre blanco, heterosexual, adulto, libre, propietario, sin discapacidades visibles, ciudadano* al que deben asimilarse todas las personas y cuyas características le hacen acreedor de derechos.

El principio de igualdad no postula la paridad de todas las personas, sino que exige la razonabilidad en la diferencia de trato hacia ellas, es importante identificar las situaciones de desventaja de este sector poblacional sobre los otros en el acceso a derechos correspondientes y en su caso, adoptar las medidas necesarias para garantizar un ejercicio de procuración de justicia igualitario.

Por consiguiente, si bien es cierto que el Estado –como garante de derechos humanos– tiene una responsabilidad importante en el proceso de transición hacia una sociedad incluyente, es fundamental la actuación de la sociedad, toda vez que a través de la cultura se transmite –desde temprana edad– las prácticas y valores fundados en creencias acerca de la naturaleza humana y de situaciones concretas de la realidad.

El presente Protocolo surge del compromiso institucional del Estado mexicano con la ciudadanía y se constituye como una acción afirmativa para combatir la discriminación, en el ámbito de la procuración de justicia, por motivos de orientación sexual, identidad de género, expresión de género y características sexuales; por lo que establece las líneas de actuación específicas para personas servidoras públicas de las instancias de procuración de justicia de todo el país, que serán observadas durante todo el procedimiento penal, vinculado a un proceso previo de capacitación y sensibilización de su personal operativo y administrativo, cuya finalidad es contribuir a proporcionar un servicio de procuración de justicia libre de discriminación y orientado al respeto absoluto de la dignidad humana.



3. Marco jurídico

A continuación se citan de manera enunciativa, más no limitativa, las normas que conforman las principales disposiciones de tutela a los derechos humanos de las personas LGBTTTI, lo cual no impide en modo alguno que la actuación de las servidoras y servidores públicos se pueda regir también por otros preceptos concordantes, contenidos tanto en normas convencionales imperativas categóricas e independientes de su fuente formal y normas de derecho derivado, como las producidas mediante resoluciones de la AGNU y de la OEA.

3.1. Principal

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

3.2. Internacional

- Declaración Universal de los Derechos Humanos.
- Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.
- Declaración sobre Orientación Sexual e Identidad de Género de las Naciones Unidas.
- Declaración sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer.
- Declaración sobre la Eliminación de Violencia contra las Mujeres.
- Declaración de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial.
- Declaración del Programa de Acción de la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas conexas de Intolerancia (Declaración de Durban).
- Declaración sobre los Principios Fundamentales Relativos a la Contribución de Medios

- de Comunicación de Masas al Fortalecimiento de la Paz y Comprensión internacional a la Promoción de los Derechos Humanos y a la Lucha contra el Racismo, el *Apartheid* y la Incitación a la Guerra.
Resolución AG/RES.2863 (XLIV-O/14): Derechos Humanos, Orientación Sexual e
- Identidad y Expresión de Género; (Aprobada en la cuarta sesión plenaria, celebrada el 5 de junio de 2014).
Convención Americana sobre los Derechos Humanos: "Pacto de San José de Costa Rica".
Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
- Racial.
Convención sobre los Derechos del Niño.
Mujer.
- Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Cruels e Inhumanos o Degradantes.
- Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales.
- Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer: "Convención de Belem do Pará".
- Carta de Naciones Unidas.
- Carta de la Organización de los Estados Americanos.
- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

- Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
- Leyes y prácticas discriminatorias y actos de violencia cometidos contra personas por su orientación sexual e identidad de género. Informe del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. (AGNU: 2011). Ratificado en noviembre de 2016.

Principios sobre la Aplicación de la Legislación Internacional de Derechos Humanos en Relación con la Orientación Sexual y la Identidad de Género (Principios de Yogyakarta).

100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad.

- Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador”.
- Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley.

3.3. General

- Ley General de Víctimas.
- Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
- Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.
- Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
- Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
- Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.



Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

-

3.4. Nacional

- Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal.
- Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes.
- Código Nacional de Procedimientos Penales.

3.5. Federal

- Código Penal Federal.
- Código Federal de Procedimientos Penales.
- Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.
- Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal.
- Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
- Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y su Reglamento.
- Código de Ética de los servidores públicos del Gobierno Federal, las Reglas de integridad para el ejercicio de la función pública y los Lineamientos generales para propiciar la integridad de los servidores públicos y para implementar acciones permanentes que favorezcan su comportamiento ético a través de los Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés.

- Código de conducta de la Procuraduría General de la República.
- Acuerdos, circulares, guías y demás normatividad aplicable.

3.6. Local

- Constituciones políticas de las entidades federativas.
- Códigos penales de las entidades federativas.
- Leyes relacionadas con la seguridad pública de las entidades federativas.
- Leyes locales para prevenir la discriminación.
- Leyes orgánicas de las procuradurías y fiscalías de las entidades federativas.
- Códigos de ética de las instancias de procuración de justicia en el país.
- Acuerdos, circulares, guías y demás normatividad aplicable.

4. Consideraciones previas

La discriminación es una práctica cotidiana, cuyos componentes se han incrustado en la cultura nacional, la cual se puede comprender como “la forma en que las relaciones sociales de un grupo son estructuradas y modeladas, así como la manera en que esas formas son experimentadas, entendidas e interpretadas” (Fernando Naharro: 1985).

La cultura se comparte, se transmite, construye idiosincrasias y se transforma a través del tiempo y el espacio, tan es así, que las instituciones son un reflejo de las construcciones culturales imperantes de la sociedad en determinada época, por lo que distintas formas de discriminación pueden tomar lugar en diversos ámbitos de la vida: a través de las normas jurídicas, las normas sociales, las estructuras de organización, los procesos y ambientes de trabajo, familiares, en la filosofía de vida, valores, creencias y demás elementos cuya combinación impacta en la actitud de las personas.

El derecho a la igualdad y no discriminación es un derecho de carácter transversal, que se origina del mandato constitucional, convencional y legal, por el que se instruye a las autoridades –en el ámbito de su competencia– a combatir todo tipo de discriminación contra personas en las distintas esferas de la vida, incluyendo la discriminación por motivos de preferencia u orientación sexual, identidad de género, expresión de género y características sexuales, lo que afecta principalmente a personas de la población LGTBTTI.

Esta discriminación significa toda distinción, exclusión, restricción, o preferencia que por acción u omisión, con intención o sin ella, no sea objetiva, racional ni proporcional, tenga por objeto o por resultado obstaculizar, impedir, anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos y libertades, cuando se base en motivos de orientación sexual, identidad de género, expresión de género y/o características sexuales, incluyendo dentro de este término a la homofobia, bifobia, lesbofobia, transfobia y otras formas conexas de intolerancia, cuyas definiciones se contienen en el apartado final de este instrumento.

La SCJN señala en su Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren la orientación sexual o identidad de género, que “una de las herramientas más poderosas con la que cuentan las y los juzgadores para analizar casos de discriminación es la de identificar los estereotipos que se tienen sobre diversos grupos de personas...”.

En el ámbito de procuración de justicia se deben eliminar toda idea sin fundamento acerca de individuos o situaciones basadas en valoraciones injustas que puedan influir subjetivamente en la investigación de los hechos: “Esto es, identificar y desechar las preconcepciones que se tiene de las personas, por virtud de su identidad o expresión de género o de su orientación sexual”, observando con objetividad los comportamientos que despliegan las personas, toda vez que los prejuicios, estereotipos y estigmas que se plasman en el desarrollo de la investigación, así como la falta de capacitación de los operadores de justicia y consecuentemente la omisión de un trato con enfoque diferencial y especializado, son causas que originan deficiencias durante la investigación y la acusación penal, por lo que se vuelve indispensable eliminar todo tipo de discriminación durante el procedimiento penal.

Los componentes de la discriminación se encuentran presentes en la cultura, lo cual precisa de una transformación profunda que emane de la toma de conciencia de la población en general, sobre sus efectos nocivos a nivel individuo y sociedad. Aplicando esta perspectiva en el servicio público que se debe ofrecer, se visualizan las siguientes consideraciones:

¿Cómo no discriminar?



La igualdad como principio de carácter transversal

Antes de cualquier actuación debemos reconocer la dignidad inherente a toda persona por el hecho de ser y existir y, consecuentemente, su titularidad de derechos correspondientes a la especie humana. Aceptar que la sociedad se constituye de una diversidad en sus distintas vertientes implica reconocer los derechos de las personas de la población LGBTTTI, que en realidad son los mismos de los que debe gozar toda persona.

Una procuración de justicia igualitaria requiere considerar la situación particular y el contexto social de las personas, a fin de identificar desventajas respecto a otras personas para el goce y disfrute de prerrogativas, así como para evaluar el riesgo de violencia que enfrentan las personas, aplicando el enfoque diferencial y especializado para su adecuada atención.

La discriminación y violencia son un binomio que se encuentra presente no solamente en la problemática que afecta a personas de la población LGBTTTI, sino también a otros grupos en situación de vulnerabilidad. Combatir la discriminación contra personas es indispensable para prevenir la violencia, toda vez que ésta se manifiesta en los diversos ámbitos de la vida de



individuos, generando un alto impacto social, como es el caso de la violencia de género, dentro de la cual se encuentra la violencia por prejuicio en relación a personas con expresión de sexualidades e identidades no normativas.

La violencia en contra cada uno de los sectores de la población LGBTTTI se manifiesta de distintas formas, sin embargo todas ellas se constituyen como una variante de la violencia de género, la cual se impulsa en el deseo u objeto de castigar a quienes se considera desafían las normas de género y se mantiene inversa a todas las formas y manifestaciones de la sexualidad distintas a lo general y socialmente aceptado.

La violencia por prejuicio es una forma de violencia social contextualizada en la que la motivación del agresor alude a un fenómeno complejo y multifacético, y no sólo como un acto individual, toda vez que genera un efecto simbólico y promueve el terror generalizado entre la comunidad. Se ejerce contra personas que se percibe transgreden las normas de género, incluidas las personas con características corporales distintas al entendimiento binario de hombre o mujer (CIDH: 2015).

5. Objetivos

5.1. General

Establecer las reglas de actuación que deberá seguir el personal de las instancias de procuración de justicia del país que intervengan en la investigación de hechos que la ley señala como delitos y la persecución de los responsables de aquéllos, en casos que involucren a personas LGBTTTI, a fin de poner en práctica acciones afirmativas con base en la orientación sexual, identidad de género, la expresión de género y/o las características sexuales, sustentadas en el respeto y garantía de los derechos humanos, con una *perspectiva de género y no discriminación*.

5.2. Específicos

- a. Contribuir al logro de una procuración de justicia eficaz y eficiente, instrumentando la capacitación especializada de las servidoras y los servidores públicos de las instancias de procuración de justicia a través del presente protocolo.
- b. Señalar en qué consiste la discriminación por motivos de orientación sexual, identidad de género, expresión de género y/o características sexuales en el servicio público, a fin de que el personal de las instancias de procuración de justicia pueda adoptar las medidas conducentes para su prevención durante el procedimiento penal.
- c. Establecer los principios de *respeto a la dignidad, igualdad y no discriminación, enfoque diferencial y especializado, protección de datos personales, libre desarrollo de la personalidad, no victimización secundaria, protección integral a los derechos y no criminalización*, que deben ser observados durante el procedimiento penal con enfoque



diferencial y especializado del que son acreedores las personas en situación de vulnerabilidad, entre las cuales se encuentra la población LGBTTTI.

- d. conceptuales que permitan mejorar el ejercicio de sus funciones, haciendo énfasis en algunas prácticas o directrices que han utilizado diversos países para llevar a cabo investigaciones de delitos motivados por la orientación sexual, identidad de género, expresión de género y/o características sexuales.

6. Ámbito de aplicación

El presente documento es de observancia obligatoria para servidoras y servidores públicos de las Procuradurías/Fiscalías Generales del país, en los casos que involucren a personas de la población LGBTTTI que participen, con cualquier calidad, en un procedimiento penal. Por lo tanto, los contenidos de este protocolo deben ser conocidos por todo el personal sustantivo; sin embargo, su existencia debe ser difundida entre todo el personal de las instancias de procuración de justicia.

Al ser un tema de carácter transversal, que versa principalmente sobre el trato que debe darse a las personas LGBTTTI, puede ser consultado también por la ciudadanía, especialmente por quienes forman parte de la población LGBTTTI, a efecto de que conozcan las medidas establecidas por parte del Estado para garantizar sus derechos durante el procedimiento penal.

6.1. Alcance del Protocolo

Es un instrumento jurídico que incorpora las recomendaciones generales y específicas que emite la CIDH sobre la obligación de garantizar el acceso a la justicia e investigar con la debida diligencia los delitos cometidos contra personas de la población LGBTTTI (o aquellas que se perciben como tal) considerando el contexto social, legal y cultural de México.

Lograr la eficiente aplicación del presente instrumento implica el establecimiento de un mecanismo de coordinación entre las instancias de procuración de justicia del país, así como con algunas instituciones relacionadas, a fin de garantizar en el ámbito nacional un trato adecuado homologado por parte de servidoras y servidores públicos al recibir denuncias de delitos; brindar la adecuada protección a víctimas y testigos en el proceso penal, definir un programa de asistencia jurídica y, especialmente, capacitar al personal. Como se observa, el éxito del Protocolo requiere de la sinergia de las Instituciones, a fin de establecer una correcta articulación de funciones que contemple la participación de los diversos actores, incidiendo en una mejora significativa de trato a quienes demandan los servicios, reflejándose en una mejora de la percepción de confianza de la ciudadanía en las Instituciones, así como en las condiciones de servicio y de vida.

6.2. Principios orientadores

El personal ministerial deberá actuar en apego a los principios que rigen el procedimiento penal, así como los relativos al servicio público y de procuración de justicia, de manera imparcial a efecto de evitar todo tipo de discriminación por orientación sexual, identidad de género, expresión de género y/o características sexuales; asegurando salvaguardar especialmente los siguientes:

Respeto a la dignidad. La dignidad humana consagra el valor fundamental de calidad de persona, como titular y sujeto de derechos, por el mero hecho de pertenecer a la especie humana, constituyéndose toda persona como acreedora a un trato digno y nunca en calidad de objeto, humillada, degradada o envilecida. Las autoridades del Estado deberán respetar los derechos humanos, el debido proceso y especialmente la autonomía de la víctima, asegurando que no se vea disminuido el mínimo existencial al que aquélla tiene derecho y en el caso de la persona imputada, garantizar el respeto a los derechos humanos, al debido proceso y al principio de presunción de inocencia.

Igualdad y no discriminación. Todas las personas que intervengan en el procedimiento penal recibirán el mismo trato y tendrán las mismas oportunidades para sostener la acusación o la defensa. De acuerdo con lo anterior, ninguna persona, por razones injustificadas o debido a su orientación sexual, identidad de género, expresión de género y características sexuales, puede ser sometida a un trato inequitativo y discriminatorio, toda vez que el establecimiento de diferencias arbitrarias redundan en detrimento de los derechos humanos. Las autoridades deberán brindar la atención que garantice la igualdad sobre la base de la equidad en el ejercicio de los derechos correspondientes.

El enfoque de no discriminación implica considerar la realidad particular que viven las personas por virtud de su orientación sexual, identidad de género, expresión de género y/o características sexuales; esto es, detectar, visibilizar y eliminar aquellas desigualdades que vulneran derechos de personas.

Enfoque diferencial y especializado. La ley reconoce la existencia de grupos de población con características particulares o con mayor situación de vulnerabilidad en razón de su edad, género, preferencia u orientación sexual, etnia, condición de discapacidad y otros, cuyos daños requieren atención especializada que responda a las particularidades y grado de vulnerabilidad de las víctimas y faculta a las autoridades para ofrecer –en el ámbito de sus respectivas competencias– garantías especiales y medidas de protección a los grupos expuestos a un mayor riesgo de violación a sus derechos.



Protección de datos personales. Las servidoras y servidores públicos que intervengan en el procedimiento garantizarán, en el ejercicio de sus funciones, el manejo y protección de datos personales y datos personales sensibles conforme a la normatividad aplicable.

Libre desarrollo de la personalidad. Toda persona tiene derecho a elegir –de manera libre, autónoma y con la limitación de respeto a los derechos de terceros– su proyecto de vida. Implica el reconocimiento del Estado sobre la facultad natural de cada persona a ser como quiere ser, y a *realizar* las actividades que considere necesarias para el cumplimiento de sus metas individuales, pues las acciones que realizan los individuos en el ejercicio de su autonomía personal suponen la decisión de llevarlas a cabo.

Es un derecho personalísimo que deriva de la dignidad humana y se relaciona estrechamente al derecho a la identidad personal, sexual y de género, pues a partir de estos, las personas se proyectan frente a sí mismas y dentro de una sociedad. La reasignación genital es una decisión que forma parte de libre desarrollo en tanto es una expresión de individualidad de la persona.

No victimización secundaria. Las características y condiciones particulares de la víctima no podrán ser motivo para negarle su calidad de víctima. El Estado tampoco podrá exigir mecanismos o procedimientos que agraven su condición, ni establecer requisitos que obstaculicen e impidan el ejercicio de sus derechos ni la expongan a sufrir un nuevo daño por conductas de servidoras y servidores públicos. Debe evitarse la *violencia institucional*, entendida como cualquier conducta u omisión cometida por servidoras o servidores públicos que atente contra la integridad física o emocional de las personas durante el procedimiento. En caso de registrarse un evento de esta naturaleza, el superior jerárquico deberá hacer la notificación correspondiente a la instancia competente para su investigación y, en su caso, sanción.

Protección integral a los derechos. Las personas que intervienen en el procedimiento penal tienen derecho a recibir los servicios que requieran por las unidades administrativas e instancias de servicio público especializadas, de acuerdo a sus necesidades concretas, con un enfoque de derechos humanos, género y no discriminación. Respecto a las víctimas se deberá decretar a su favor las medidas de protección para salvaguardar su integridad, así como la de su familia o “familia social”, entendida como aquellas personas distintas a la familia inmediata o demás familiares, que hacen los roles esperados dentro de la familia y proporcionan el apoyo con el único propósito de contribuir al bienestar de las víctimas.

No criminalización. Las autoridades no deberán agravar el sufrimiento de la víctima ni tratarla en ningún caso como sospechosa o responsable de la comisión de los hechos que denuncié por motivo de su orientación sexual, identidad de género, expresión de género y/o características sexuales. La estigmatización, el prejuicio y las consideraciones subjetivas deben evitarse.

Estándar de debida diligencia para la investigación de delitos en contra de personas LGBTTTI

La CIDH sugiere a los Estados –independientemente de contar o no con la legislación penal conducente– investigar en todos los crímenes contra personas LGBTTTI (o aquellos que se perciben como tal) la posibilidad de que hayan sido cometidos por razones de orientación sexual, identidad de género, real o percibida de la víctima.

La CIDH establece que algunos principios rectores que define la CIDH para desarrollar el concepto de debida diligencia incluye: recuperar y preservar el material probatorio, identificar posibles testigos, obtener declaraciones de los testigos, y determinar la naturaleza, causa, lugar y momento del acto investigado, además del examen minucioso de la escena del crimen y realizar los exámenes forenses de manera rigurosa, considerando las causas y consecuencias de la violencia por prejuicio.

La CIDH también reconoce que aunque en muchos casos puede ser difícil establecer el elemento subjetivo de la motivación del hecho que la ley señale como delito –dada la dificultad de determinar la existencia del prejuicio por parte del perpetrador– existen algunos elementos que podrían ser indicativos de que el delito pudo estar motivado por prejuicio, particularmente tratándose de personas LGBTTTI cuando los siguientes aparecen en combinación:

- (i) **Declaraciones de la víctima u ofendido(a) o persona imputada de que el delito estuvo motivado por prejuicio;**
- (ii) **La brutalidad del crimen y signos de ensañamiento** (incluyendo los casos de homicidio en los que la naturaleza y el nivel de violencia parecen ir más allá de la mera intención de matar y estar dirigidos a castigar o “borrar” la identidad de la víctima);
- (iii) **Insultos o comentarios denigrantes realizados por las o los presuntos responsables que hacen referencia a la orientación sexual, identidad, expresión de género y/o características sexuales de la víctima.**
- (iv) **El estatus de la víctima como activista de temas LGBTTTI o como defensor (a) de las personas LGBTTTI y sus derechos, o la participación de la víctima en un evento especial para celebrar la diversidad de personas LGBTTTI;**



- (v) La presencia de un **prejuicio conocido contra personas LGBTTTI en el perpetrador** o si el perpetrador forma parte de un grupo que tiene prejuicios contra personas LGBTTTI;
- (vi) Análisis de la naturaleza o significado del **lugar donde se desarrolló la violencia, o desde donde las víctimas fueron atraídas** (por ejemplo, si se trata de un lugar conocido por ser frecuentado por personas LGBTTTI, o un área frecuentada por personas *trans* que ejercen el trabajo sexual);
- (vii) Si la **víctima o víctimas habían estado con una pareja del mismo sexo o con un grupo de personas LGBTTTI cuando el acto de violencia ocurrió.**

Desde el inicio de la investigación se debe realizar un examen sobre los motivos del hecho controvertido, considerando la relevancia de la orientación sexual, identidad de género, expresión de género -real o percibida- y/o o respecto a sus características sexuales, para la construcción de la hipótesis de investigación lo que precisa considerar el contexto general de violencia contra personas LGBTTTI en México, en lo cual la o el AMP podrá solicitar el apoyo de personal pericial, que cuente con la habilidad, capacitación y formación en derechos humanos.

El reporte de violencia contra personas LGBTI (CIDH: 2015) señala que los prejuicios en el desarrollo de la investigación y la falta de enfoque diferenciado conllevan deficiencias en la investigación y acusación penal; señaló que en la mayoría de los casos que revisó la orientación sexual o identidad de género fue ignorada, con lo que se obstaculiza la garantía de exhaustividad en la investigación penal. Por consiguiente, la eficacia del sistema de justicia implica determinar si el delito contra la persona se llevó a cabo por prejuicio, es decir, requiere indagar a profundidad sobre la causa de la violencia, pues no todos los actos pueden clasificarse bajo dicha circunstancia.



ACCIONES MÍNIMAS PARA GARANTIZAR EL ACCESO A LA JUSTICIA EN EL PROCEDIMIENTO PENAL DE ACUERDO CON EL CNPP

El personal ministerial deberá llevar a cabo:

- a) Una investigación inmediata, eficiente, exhaustiva, profesional, libre de estereotipos y discriminación, enfocada al esclarecimiento de los hechos a través de la exploración de todas las líneas de investigación posibles.

Investigar los hechos, ordenar la recolección de indicios y medios de prueba que deberán servir para sus respectivas resoluciones, garantizando una valoración libre de discriminación por orientación sexual, identidad de género, expresión de género o características sexuales.

Involucradas en los hechos que se investigan:

- ✓ Agotar todas las líneas de investigación posibles que permitan allegarse de datos útiles para el esclarecimiento de los hechos, así como la identificación de quien o quienes cometieron o de quienes participaron en la comisión de la conducta delictiva.

- b) Una investigación oficiosa, evitando desestimar u omitir investigar seriamente un delito cometido en agravio de personas:

- c) Una investigación objetiva conducida con la debida diligencia y asegurando el cumplimiento de las directrices que deberán observar las personas servidoras públicas que intervengan en materia de Cadena de Custodia. ✓ Considerar las condiciones de vulnerabilidad de las personas

- d) Una investigación imparcial, lo que implica que deberá actuar y conducirse sin pretender favorecer o perjudicar a las partes que intervengan en el procedimiento penal.

Garantizar que se respeten los derechos que tienen las víctimas u ofendidos en la investigación.

✓ Atender con prontitud, sin dilaciones injustificadas, las solicitudes de las partes que intervengan en el procedimiento penal.

Garantizar que se respeten los derechos que tienen las y los imputados en la investigación.

Velar porque las partes en el procedimiento tengan acceso a la asesoría jurídica y/o defensa adecuada.

Salvaguardar la integridad y la seguridad de la persona LGTTT durante la investigación de los hechos en el procedimiento penal.

Respetar el derecho a la intimidad y a la privacidad de cualquier persona que intervenga en el procedimiento penal, en los términos y con las excepciones que fijen las leyes aplicables.



6.3. Roles participantes

La procuración de justicia es una función constitucional del Estado delegada al Ministerio Público en su carácter de representante social y en quien recae la obligación de la investigación de los delitos y, en su caso, el ejercicio de la acción penal ante los tribunales, como lo mandata el artículo 21 de la CPEUM. Derivado de las obligaciones constitucionales con que deben dirigirse todas las autoridades en el ámbito de su competencia, todas las personas servidoras públicas, a que se refieren los apartados siguientes, deberán dirigir su actuación de conformidad con los principios que rigen el servicio público de procuración de justicia y siempre en apego a las normas internacionales de derechos humanos, privilegiando en todo momento a las personas con la protección más amplia, de conformidad con el artículo 1º CPEUM.

- A. Jefe(a) inmediato(a): Coordina y supervisa la actuación del personal a su cargo en la investigación, con una perspectiva de derechos humanos.
- B. Agente del Ministerio Público (AMP): Planea y conduce las investigaciones en las que estén involucradas personas de la población LGTTTI, resuelve sobre el ejercicio de la acción penal con perspectiva de derechos humanos, conforme a los principios normativos y mediante la obtención de elementos de prueba y su debido control para esclarecer los hechos e imputar las conductas ante los/as jueces conducentes.
- C. Policía: Propone y realiza la actuación que proceda conforme a las necesidades y requerimientos de la investigación, bajo el mando y conducción de la o el AMP de conformidad con la legislación procesal penal aplicable, dentro del marco de derechos humanos y con la perspectiva de género y no discriminación.
- D. Perito (a): Propone y aporta elementos técnicos científicos en la investigación, que requieran un conocimiento especializado, fundamentado metodológicamente y con perspectiva de derechos humanos.
- E. Personal de auxilio en la investigación: son los técnicos, profesionales y demás personas especialistas en algún arte u oficio que auxilian al ministerio público durante la investigación.
- F. Víctima: Es la persona física que directa o indirectamente ha sufrido daño o el menoscabo de sus derechos producto de una violación de derechos humanos o de la comisión de un delito. De conformidad con el sistema penal vigente, tiene una participación activa durante la investigación penal.

Cabe señalar que una de las bondades del sistema penal acusatorio vigente, es la participación activa de la víctima en el procedimiento penal, lo que incluye la posibilidad de que aquella manifieste –durante cualquier etapa del procedimiento y a través de su asesor jurídico– lo que a su derecho convenga. La CIDH destaca la necesidad eminente de que el personal que funja como asesor jurídico, defensores(as), jueces de control y demás personas que tengan participación durante el procedimiento, reciban la capacitación especializada necesaria para ejercer sus funciones libres de toda forma de discriminación.

7. Políticas de operación

- A) El personal deberá garantizar que todas sus conductas se encuentren encaminadas al cumplimiento de la Misión de las instituciones de procuración de justicia.
- B) El personal no discriminará a persona alguna o a un grupo de personas en razón de su orientación sexual, identidad de género, expresión de género o características sexuales o cualquier otro motivo que atente contra la dignidad humana o que tenga por objeto o resultado anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.
- C) El personal ministerial establecerá las medidas de igualdad conducentes para garantizar el derecho a la no discriminación de la persona durante el procedimiento penal, partiendo del respeto absoluto a la dignidad de la persona.
- D) En casos que involucren personas LGBTTTI, velará especialmente por el respeto a la privacidad respecto a su identidad personal incluyendo la identidad de género y orientación sexual, para lo cual resulta de gran utilidad el conocimiento del derecho aplicable.
- E) El personal ministerial, al tener el primer contacto con la persona, preguntará si pertenece a algún grupo en situación de vulnerabilidad, para lo cual requisará el formato de situación de vulnerabilidad, datos que deberán quedar asentados en el Sistema de Registro para fines Estadísticos correspondiente. Lo anterior, con la finalidad de proveer los medios que garanticen el acceso a una procuración de justicia igualitaria (remite a formato de situación de vulnerabilidad).
- F) La o el AMP y la o el Policía solicitará al personal capacitado la contención emocional y atención en crisis en casos que se requiera. En los casos que involucren personas LGBTTTI, procurará al personal especializado de la Institución con entrenamiento en temas de discriminación, violencia de género y violencia por prejuicio.
- G) Subsecuentemente, la o el AMP solicitará a la autoridad o institución competente la intervención del personal especializado para la atención integral de las víctimas.
- H) El personal brindará una atención dentro del marco de derechos humanos y con perspectiva de género y no discriminación durante las etapas del procedimiento penal en las que intervenga.
- I) La o el AMP orientará e informará sobre la aplicación de mecanismos alternativos de solución de controversias en los casos previstos en la ley.
- J) El personal evitará la victimización secundaria a la persona LGBTTTI, así como a sus familiares directos o sociales, al recabar la información necesaria e idónea (datos de prueba, muestras biológicas, entrevistas, etc.) para la construcción de la teoría del caso.



- S) La o el AMP tomará en consideración para el ejercicio de la acción penal aquellos datos o elementos de prueba que aporten, en coadyuvancia, las personas LGBTTTI que estén involucradas en la investigación de los hechos que la ley señale como delitos.
- T) La o el AMP deberá analizar la urgencia y necesidad de la imposición de medidas de protección o medidas cautelares cuando la integridad de personas LGBTTTI se encuentre en riesgo, para lo cual deberá considerar el contexto social de discriminación por orientación sexual, identidad de género, expresión de género y/o características sexuales.
- U) El personal deberá abstenerse de utilizar términos peyorativos, denostativos o discriminatorios así como cualquier manifestación expresa, implícita o contextualizada (insinuación), que contenga algún juicio de valor sobre la orientación sexual o identidad de género –real o percibida– de la víctima o persona imputada, así como manifestar su personal parecer sobre la diversidad sexual.
- V) El personal que sea requerido para casos que involucren a personas de la población LGBTTTI ejecutará su labor con apego a los principios que rigen el servicio público, de conformidad con el presente Protocolo que se encuadra dentro de la gama de derechos humanos contenidos en diversos instrumentos internacionales y promueve la aplicación de la perspectiva de género y no discriminación en la actuación del personal.
- W) Dentro de los actos de investigación, relativos a las revisiones de carácter corporal, de acuerdo al artículo 269 del CNPP, la obtención de muestras o imágenes deberán realizarse por personal especializado del mismo sexo, o del sexo que la persona de quien se obtenga la muestra elija, con estricto apego al principio de dignidad que cimienta los derechos humanos y de conformidad con los protocolos correspondientes.
- X) A fin de garantizar el interés superior de las y los menores, consagrado en la CPEUM, así como en diversos instrumentos internacionales, el personal sustantivo deberá dar el seguimiento puntual al conjunto de pautas de atención o medidas especiales en caso de que las víctimas o personas inculpadas de la población LGBTTTI sean adolescentes. Esta perspectiva antidiscriminatoria y de enfoque interseccional, aplicará en todos los casos en que confluían en una persona diversas características relacionadas a situaciones de vulnerabilidad.
- Y) En todo caso, el (la) AMP deberá obtener el consentimiento de la persona previo a la entrevista que se le practique, haciendo hincapié de que los datos que proporcionará serán confidenciales y, en su caso, reservados, conforme a la normativa vigente.

8. Procedimiento

El procedimiento establecido en el presente Protocolo será aplicable tanto a víctimas u ofendidos, testigos, así como a imputados o probables responsables en cualquier momento de las etapas que conforman el proceso penal, tanto en el acusatorio como en el tradicional, por lo que hace a las averiguaciones previas iniciadas con antelación a la entrada en vigor del Sistema de Justicia Penal Adversarial.

8.1. Descripción del Procedimiento

Inicio

1. La/el Policía o la/el AMP y/o PR recibe noticia de hechos probablemente constitutivos de delito que involucren a una persona de la población LGBTTTI.

Nota. También podrán conocer de los hechos que involucren a la persona LGBTTTI, otras autoridades que se sitúen como PR. (Véase Protocolo Nacional de Actuación del Primer Respondiente del Consejo Nacional de Seguridad Pública).

2. La/el AMP inicia el registro de investigación.

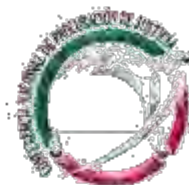
3. La/el Policía o la/el AMP y/o PR pregunta a la persona con que identidad de género se auto identifica. Tomará en cuenta con qué género se auto identifica la persona, respetando su identidad de género auto percibida, su expresión de género. Preguntará su nombre y subsecuentemente se dirigirá a ella utilizando el pronombre y el nombre social femenino o masculino que la persona indique, reconociendo la posicionabilidad sobre su propio género y protegiendo el derecho al libre desarrollo de la personalidad.

- A. Dependiendo de quien toma conocimiento del asunto, el procedimiento puede tomar distintos cursos de acción: A (Policía); B (Agente del Ministerio Público y la/el Policía).

- A1. La/el Policía da lectura y explicación a los derechos de la persona. Según el carácter que tenga en los hechos, ya sea como víctima u ofendido(a), persona imputada o como testigo.

Nota. En su actuación durante la investigación de los hechos delictivos, La/el Policía respetará la identidad de género, expresión de género con la que se auto identifica la persona y se dirigirá a ella utilizando el pronombre y el nombre social que la persona indique, independientemente de que exista alguna discordancia entre la expresión e identidad de género y el nombre legal que aparezca en el documento de identificación que presentara. Debiendo emitir la Constancia de individualización de género. Lo cual deberá quedar asentado en el Sistema de Registro para fines Estadísticos.

- A2. La/el Policía traslada a la persona.



Nota. La/el AMP procurará que la persona responsable del traslado tenga la capacitación adecuada, entendida como el entrenamiento en materia de derechos humanos, perspectiva de género y no discriminación.

A3. Se ejecuta el Protocolo Nacional de Actuación de Traslado.

A4. Una vez ejecutado el Protocolo Nacional de Actuación de Traslado se conecta con el Protocolo de Investigación Ministerial y posteriormente con la actividad B.

B. La/el Agente del Ministerio Público (AMP).

B.1. Deja constancia en los registros de la investigación de la identidad de género que asume la persona al momento de la individualización. Quedará asentado en el Sistema de Registro para fines Estadísticos de la carpeta de investigación los datos sobre la pertenencia de la persona a algún sector de la población en situación de vulnerabilidad (Ver Constancia de individualización de género y Formato sobre situación de vulnerabilidad).

Nota. En el caso de que la persona se identifique con un documento que no concuerde con su identidad y/o expresión, o sus características sexuales, se solicitará respetuosamente que indique la identidad de género con la cual se identifica, información que se mantendrá en sobre cerrado en el expediente o carpeta de investigación, por tratarse de datos de carácter personal, confidencial y sensibles, deberá agregarse al expediente del trámite correspondiente (Ver formato de entrevista).

B.2. La/el AMP verifica la situación jurídica con la que interviene en el procedimiento penal la persona de la población LGBTTTI.

Nota. En cualquier caso, La/el AMP lleva a cabo investigaciones libres de prejuicios relacionados con la orientación sexual, identidad de género, expresión de género y/o características sexuales de la persona, es decir deberá basar su actuación en los hechos objetivos.

Identificar la calidad que tiene la persona de la población LGBTTTI:

¿La persona de la población LGBTTTI es víctima u ofendido(a)? Si, Continúa con el paso B7.

B.3. No, Imputada o probable responsable.

B.4. Si la persona es imputada o probable responsable, la/el AMP solicita se certifique el estado físico de la persona y la mecánica de lesiones, en su caso, señalando en los documentos la identidad de género con la que se auto identifica la persona.

Nota. Dicha certificación del estado físico se practicará—conforme al protocolo correspondiente—por la/el especialista del mismo género que indique ser la persona o incluso el que elija (art.269 CNPP). La/el AMP procurará que la/el especialista médico tenga el *perfil adecuado* para certificar la integridad física de la persona.

En el caso de personas transexuales se deberá tomar en consideración la posibilidad de que se encuentre en tratamiento hormonal a efecto de reconocer los posibles efectos del tratamiento y, en su caso, no entorpecer su continuidad, durante el procedimiento penal.

¿La persona manifiesta haber sufrido malos tratos, inhumanos o degradantes y/o tortura?



B.5. Si, ordena la aplicación del dictamen médico ceñido al Protocolo de Actuación de Medicina Forense.

Nota: La/el AMP asegura que personal especializado brinde la valoración psicológica y en su caso, la subsecuente canalización para su tratamiento ante las instancias correspondientes.

B.6. No, la/el AMP solicita ubicar a la persona detenida en un área que permita salvaguardar su integridad física. De acuerdo a la identidad de género con la que se asuma tomando en cuenta la autopercepción de riesgo de la persona detenida. Continúa con la actividad B.15. Investigación Ministerial.

Nota. La/el Policía se apegará a los lineamientos establecidos en las áreas de separo, lineamientos supeditados a la garantía de derechos humanos correspondientes.

B.7. Víctima u ofendido.

B.8. Si la persona es víctima u ofendido, la/el AMP requiere la asistencia médica, psicológica y de asesor(a) jurídico(a) por parte de las instancias conducentes.

El personal de asistencia o auxilio a víctimas que intervenga en la atención de personas de la población LGBTTTI, deberá tener conocimientos y experiencia en el trato con víctimas de discriminación y violencia, así como en técnicas de contención de personas en crisis, en cuyo caso necesario podrá solicitar apoyo de las organizaciones de la sociedad civil que conozcan y hayan trabajado en las principales problemáticas de acuerdo a los sectores: lesbico, gay, bisexual, transgénero, transexual, travesti e intersexual, u otros.

Nota. En caso de ser necesario, durante la investigación la/el AMP solicitará a las instituciones públicas correspondientes la atención y asistencia integral de la víctima u ofendido(a), a efecto de garantizar los derechos establecidos en la Ley General de Víctimas.

B.9. La/el AMP, al momento de realizar la entrevista a la víctima u ofendido(a), verifica si existen antecedentes de ilícitos o violencia en su contra, por razones de orientación o preferencia sexual, identidad de género, expresión de género y/o características sexuales, considerando también la información que puedan tener las víctimas indirectas o "familia social".

Nota. La/el M.P. indagará si el ilícito o acto de violencia en contra de la víctima se encuentra vinculado a cuestiones relacionadas con su identidad o expresión de género u orientación sexual, para lo cual deberá contextualizar la información vertida con los hechos motivo de la investigación. En caso de existir antecedentes los recabará. (Ver las recomendaciones que emite la CIDH sobre algunos elementos que podrían ser indicativos de que el hecho delictivo pudo estar motivado por prejuicio, particularmente cuando aparecen en combinación).

B.10. La/el AMP analiza si la persona de la población LGBTTTI requiere de alguna medida de protección. Considerando la personal manifestación de la persona, así como las principales formas y contextos de violencia en contra de las personas LGBTTTI.

Identificar las necesidades de implementar medidas de protección:

¿La persona de la población LGBTTTI requiere medidas de protección?



B.11. Si la persona de la población LGBTTTI requiere medidas de protección, la/el AMP dicta las medidas de protección necesarias para salvaguardar la seguridad y los derechos de la víctima u ofendido. Considerando las circunstancias particulares del caso y la normatividad aplicable, así como las posibles repercusiones de ellas en su contexto, considerando entre otros los elementos de riesgo que señala el apartado sobre “Estándar de debida diligencia para la investigación de delitos en contra de personas LGBTTTI” que incluye el Protocolo.

B.12. La/el AMP solicita a la autoridad competente la ejecución de las medidas de protección dictadas, el procedimiento continúa con la actividad B.13, solicita pruebas periciales.

Nota: Si la persona de la población LGBTTTI no requirió medidas de protección continúa la investigación.

B.13. Si la persona de la población LGBTTTI No requiere medidas de protección, la/el AMP o Policía solicita pruebas periciales para determinar los factores de vulnerabilidad y violencia de género de la víctima u ofendido, por prejuicio ejercida en contra de la víctima u ofendido; a fin de conocer la incidencia de estos factores en la comisión del delito. Las especialidades periciales que podrán ser solicitadas son antropología social, psicología, trabajo social u otras con experiencia y capacitación en derechos humanos, diversidad sexual, género y no discriminación.

Nota: Se procurará al personal que cuente con entrenamiento para identificar elementos de discriminación y prejuicio por motivo de orientación sexual, identidad de género, expresión de género y/o características sexuales, a fin de conocer el contexto global de violencia contra personas LGBTTTI y sus manifestaciones. La/el perito deberá implementar el presente protocolo.

B.14. Se ejecuta el Protocolo de antropología forense en el análisis sociocultural a fin de identificar los factores de vulnerabilidad que pusieron en riesgo a la persona.

Una vez ejecutado el Protocolo de antropología forense en el análisis sociocultural. Se ejecuta el subproceso de la Investigación Ministerial, de acuerdo a la calidad de la persona como víctima, ofendido(a) o imputado(a).



9. Formatos con elementos mínimos

Elementos mínimos.

a) Datos iniciales de identificación:

- Unidad de adscripción.
- Número de carpeta de investigación.
- Nombre de la determinación.

b) Contenido esencial:

- Lugar y fecha.
- Información que se hace constar.
- Fundamento legal.

c) Datos de cierre:

- Nombre legal y social (de ser el caso) y firma del o la entrevistado (a).
- Nombre legal y social (de ser el caso) y firma del o la entrevistador (a).

Nota: Los formatos que acompañan a los elementos mínimos, son de carácter informativo y no limitativo.

5. RECOMENDACIONES PARA LLEVAR A CABO LA ENTREVISTA

Es ineludible que la atención dirigida a toda persona por parte de las instituciones de los tres órdenes de gobierno, deberá ser eficaz y eficiente, pero sobre todo humana. En ella se debe plasmar el cumplimiento de principios que rigen el actuar público, así como aquellos aplicables en el ámbito de procuración de justicia, lo que incluye el compromiso con la ciudadanía a la cual debemos de servirle.

Garantizar una procuración de justicia igualitaria implica evitar todo tipo de discriminación, toda vez que esta conducta puede configurarse como un delito que atenta contra la dignidad humana, ya que anula o menoscaba derechos y libertades de personas a través de la negación de alguna prestación o servicio al que se es acreedor, por los motivos prohibidos por la ley. Por tal razón es importante identificar las situaciones que generan desigualdad en el acceso a la justicia entre la población, lo que se puede lograr a través del análisis de las características particulares o del contexto social que rodea a la persona. Esto es, si una persona ciudadana o extranjera que acude a las instalaciones de alguna instancia de investigación y/o procuración de justicia en México y se comunica solamente en una lengua distinta al español, el proceso de comunicación se ve limitado y consecuentemente la participación de la persona (por sí misma) durante el procedimiento penal.

En el caso de las personas de la población LGTBTI –de acuerdo con los informes existentes– uno de los obstáculos que se ha presentado frecuentemente en el ámbito civil y administrativo, es que se han negado servicios debido a la discordancia de sus identificaciones oficiales con la expresión de género que manifiestan; dichas circunstancias ameritan considerar en todo momento que los cambios de carácter sexo genérico tienen dificultades en la práctica. Debido a la naturaleza personal y confidencial de esta información, la ley en la materia estipula la obligación de las autoridades que la tengan en su posesión para dar el tratamiento y resguardo correspondiente.

Se trata de aplicar la perspectiva de género en su más amplio sentido, toda vez que consiste en un enfoque que considera la realidad particular que viven las personas por virtud de su identidad de género y orientación sexual, detectando y eliminando las barreras que impiden la igualdad, por lo que el personal que realice las entrevistas debe contar con un conocimiento actualizado de las categorías que se utilizan para nombrar personas, procesos sociales y objetos en el contexto de la diversidad sexual.

PREVIO A LA ENTREVISTA. Comience por procurar el espacio físico adecuado para realizar la entrevista (sin ruido, con luz suficiente, espacio holgado, mobiliario adecuado, privacidad, material de apoyo y planeación de la entrevista), en condiciones óptimas generar el ambiente de colaboración mutua. Cuando no sea posible contar con todas estas medidas físicas, tome en cuenta que lo más importante es garantizar una atención adecuada a la persona, toda vez que en el caso de víctimas o personas ofendidas, parte de la reparación del daño inicia dentro del propio procedimiento penal, a través del primer contacto con personas servidoras públicas.



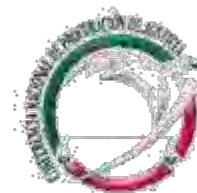
DURANTE LA ENTREVISTA. Trate de establecer un primer contacto de cordialidad con la persona, en el que genere un ambiente de confianza para que facilite a la persona externar o declarar sobre los hechos controvertidos. Algunas habilidades que debe mostrar la persona entrevistadora son:

- ✓ Uso de lenguaje claro y sencillo,
- ✓ Mantener el contacto visual,
- ✓ Prestar atención a lo que manifiesta la persona,
- ✓ Emitir un tono de voz adecuado,
- ✓ Aplicar las técnicas de entrevista de acuerdo al caso concreto,
- ✓ Permitir que la persona hable,
- ✓ Contar con apoyos previos para realizar la entrevista,
- ✓ Formular las preguntas adecuadas en el momento oportuno,
- ✓ Asegurar que se brinde la contención en caso de ser necesario,
- ✓ Evitar la confrontación,
- ✓ Facilitar los requerimientos de personas en casos de situación de vulnerabilidad,
- ✓ Mantener la escucha activa,
- ✓ Contar con especialistas, (psicología y medicina o personal capacitado) que puedan hacer frente a situaciones de crisis de la persona entrevistada,
- ✓ Permitir que el entrevistado se acompañe de una persona de su confianza (familiar, pareja o asesor jurídico).

En el caso que nos ocupa es indispensable que el personal cuente con los conocimientos suficientes y se abstenga de realizar cualquier manifestación expresa, implícita o contextualizada (insinuación) que contenga algún juicio de valor sobre la orientación sexual y/o la identidad de género –real o percibida- de la víctima u ofendido o de persona imputada, así como manifestar su personal parecer sobre la diversidad sexual.

Conforme al derecho de toda persona a la intimidad y privacidad, el personal que realice la entrevista indagará sobre la orientación sexual de la persona solamente cuando este dato sea relevante para el esclarecimiento de los hechos motivo de la investigación penal, toda vez que garantizar una atención adecuada, implica evitar cualquier tipo de victimización secundaria, así como cualquier actitud fría y mecanizada. En cambio, el personal que entreviste deberá ser capaz de hacer eficiente, efectivo y con enfoque humanista el proceso de obtención de datos, sin recurrir a una actitud estricta de interrogatorio.

Finalmente, es preciso destacar que la comunicación inicial es un indicador de vital importancia para la medición del desempeño institucional, toda vez que impacta fuertemente en la percepción de confianza de la ciudadanía en las instituciones de procuración de justicia.



9.1- Apartado sobre situación y condiciones de vulnerabilidad

Subprocuraduría de
¿Defensor(a) de derechos humanos? Si resulta afirmativo, desplegar las opciones

Número de registro de investigación

(En el caso de personas imputadas lo aplica la servidora o servidor público, en el caso de víctima u ofendido, puede ser a través de la auto aplicación a fin de evitar la revictimización, expresando el apoyo del personal conducente para el llenado del formato y la importancia de conocer estos datos para el establecimiento de medidas conducentes dentro de la investigación penal)

I. Pregunte: **¿Pertenece usted a alguno de los siguientes sectores de la población?**

- Pueblo indígena
- Sin nacionalidad
- Extranjero
- Menor de edad
- Persona mayor
- Persona en situación de calle
- Persona con discapacidad, si contesta afirmativo, establecer el tipo de discapacidad que determina la ley:
 - física
 - mental
 - sensorial
 - Múltiple (en el caso de marcar dos o más)
- Migrante (país de origen, país destino, ¿habla español?)
- Refugiado (a) (País de origen, motivo, ¿habla español?)
- Asilado(a) político(a) (motivo)
- Persona indígena; si resulta afirmativo, preguntar: ¿A qué pueblo, comunidad o etnia pertenece? ¿Habla lengua indígena? Si o No, ¿Qué variante?, ¿Habla español? ¿Requiere traducción?²
- Población con orientación sexual, identidad de género, expresión de género y/o características sexuales distintas al común denominador “hombre” o “mujer”. Si resulta afirmativo, preguntar: Para fines de retroalimentar el Sistema de Registro para fines Estadísticos, puede contestar si usted pertenece a alguno de los siguientes sectores (LGBTTTI):
 - lésbico,
 - gay,
 - bisexual,
 - transgénero,
 - transexual,
 - travesti, e
 - intersexual

² En este apartado sería conveniente contar con un listado de características primordiales de los 68 pueblos indígenas (sistemas normativos propios, a.2 CPEUM) y el señalamiento o mención de la existencia del Dictamen antropológico social como herramienta de apoyo para la investigación penal.



9.2.- Registro de la entrevista/constancia para la individualización de género

- SOBRE CERRADO -

Subprocuraduría de _____

Número de carpeta de investigación _____

REGISTRO DE ENTREVISTA

En la Ciudad de México, siendo las ____ horas del ____/____/____ el (la) suscrito (a) _____, Agente del Ministerio Público adscrito(a) a la _____, previa identificación, y enterado(a) del motivo de la presente diligencia, en entrevista con la persona que dijo llamarse _____, pronombre que en lo sucesivo se le denominará, quien se identifica con credencial No. _____ cuyo nombre es _____

I. Señale por favor la opción que corresponda:

¿El documento con el que se identifica concuerda con la identidad de género de la persona?
(Anexo copia oficial de identificación) SI ☐ NO ☐

Motivo de la discordancia: _____

¿Se informó a la persona LGBTTTI sobre el derecho que tiene de que los datos relativos a la identidad sexo genérica sean resguardados de manera razonable y proporcional en cuanto a los derechos de la contraparte?

SI ☐ NO ☐

¿Es voluntad de la persona LGBTTTI entrevistada que su identidad permanezca bajo reserva y el Agente del Ministerio Público satisfaciendo los derechos correspondientes?

SI ☐ NO ☐

Firma de la persona entrevistada



En consecuencia, se determina que los datos generales de _____ sean reservados en un sobre cerrado con las correspondientes medidas de seguridad, por lo que para efecto de continuar con la presente diligencia esta autoridad en lo sucesivo deberá dirigirse a dicha persona como _____.

(Cuando el M.P. haga la petición de hacerse llegar las pruebas necesarias, deberá expresar la necesidad de seguimiento al Protocolo de Actuación para el personal de las instancias de procuración de justicia del país, en casos que involucren la orientación sexual o la identidad de género, resguardando la identidad de género).

II. Existe algún parentesco con la persona imputada (en caso de la víctima u ofendido)

SI NO

Si es así, especifique el tipo y grado de parentesco: _____

(Se deberá informar a la persona el derecho que tiene de abstenerse de declarar, sobre circunstancias que le deparen responsabilidad)

Existe algún parentesco con la víctima u ofendido (en caso persona imputada)

SI NO

Si es así, especifique el tipo y grado de parentesco: _____

(Se deberá informar el derecho que tiene de no declarar sobre circunstancias que le deparen responsabilidad)

Características o circunstancias particulares del entrevistado como minoría de edad, integrante de un grupo étnico, discapacidad, etc.

Nombre y firma del (la) entrevistado (a)

Nombre y firma del (la) entrevistador (a)



9.3. Constancia de lectura de derechos a la persona detenida y a la víctima o persona ofendida.

Datos iniciales de identificación

Número de referencia.

-

Unidad Administrativa.

-

Lugar, fecha y hora.

Contenido esencial

Fundamento legal.

Derechos dados a conocer.

Datos de cierre

Nombre legal y social (de ser el caso) firma del detenido (a) o de la víctima u ofendido(a).

Nombre legal y social (de ser el caso) firma de la persona que actúa como testigo.



No. de referencia

Constancia de lectura de derechos al detenido

Dependencia/Institución:

Entidad federativa:

Ciudad, municipio, delegación:

Localidad:

Fecha:

Día

Mes

Año

dd

mm

aaaa

Hora:

hh:mm

Fundamento jurídico

Artículo 20, apartado 8, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y artículos 113 (como persona imputada) y 152 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Derechos dados a conocer en el momento de la detención (art. 113 del CNPP):

1. Usted tiene derecho a saber el motivo de su detención. Por lo que se le informa:
2. Tiene derecho a guardar silencio.
3. Tiene derecho a declarar, y en caso de hacerlo, lo hará asistido(a) de su defensor(a) ante la autoridad competente.
4. Tiene derecho a ser asistida por un(a) defensor(a). Si no quiere o no puede hacerlo, le será designado(a) un defensor(a) público.
5. Tiene derecho a hacer del conocimiento a un familiar o persona que desee, los hechos de su detención y el lugar de custodia en que se hallé en cada momento.
6. Usted es considerado(a) inocente desde este momento hasta que se determine lo contrario.
7. En caso de ser extranjero(a), tiene derecho a que el consulado de su país sea notificado de su detención.
8. Tiene derecho a un traductor o intérprete, el cual le será proporcionado por el Estado.
9. Tiene derecho a ser presentado(a) ante el Ministerio Público o ante el Juez de control, según sea el caso, inmediatamente después de ser detenido(a) o aprehendido(a).
10. Tiene derecho (como toda persona) a un trato respetuoso de su orientación sexual, identidad de género, expresión de género y/o características sexuales.

¿Comprendió usted sus derechos?

Se proporcionó copia de los derechos:

☐ Sí

☐ No

Nombre y firma del (la) detenido (a)

Nombre y firma del actuante testigo

Nota: En caso de que la persona detenida se niegue o exista la imposibilidad para firmar, el actuante testigo asentará el motivo en el lugar que corresponda la firma.



No. de referencia

Constancia de lectura de derechos de la víctima u ofendido(a)

Dependencia/Institución:

Entidad federativa:

Ciudad, municipio, delegación:

Localidad:

Fecha:

Día Mes Año

dd mm aaaa

Hora:

hh:mm

Fundamento jurídico

Artículo 20, apartado C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y artículos 109 del Código Nacional de Procedimientos Penales y 7 de la Ley General de Víctimas.

Derechos dados a conocer de la víctima u ofendido(a):

1. Recibir asesoría jurídica; ser informado(a) de los derechos que en su favor establece la Constitución y, cuando lo solicite, ser informado(a) del desarrollo del procedimiento penal.
2. Recibir, desde la comisión del delito, atención médica y psicológica de urgencia.
3. A comunicarse, inmediatamente después de haberse cometido el delito con un familiar incluido con su asesor(a) jurídico.
4. A ser tratado(a) con respeto y dignidad.
5. A contar con un asesor(a) jurídico gratuito en cualquier etapa del procedimiento; en los términos de la legislación aplicable.
6. A acceder a la justicia de manera pronta, gratuita e imparcial respecto de sus denuncias o querrelas.
7. A recibir gratuitamente la asistencia de un intérprete o traductor.
8. A que se le proporcione asistencia migratoria cuando tenga otra nacionalidad.
9. Tiene derecho (como toda persona) a un trato respetuoso de su orientación sexual, identidad de género, expresión de género y/o características sexuales.

Nombre y firma de la víctima

Nombre y firma del actuante
testigo

10. Atención a víctimas de la población LGBTTTI

Se considera conveniente que las instancias de procuración de justicia cuenten con un área integrada principalmente por trabajadores (as) sociales y psicólogos (as) que puedan coadyuvar como auxiliares en la investigación, consolidando la capacidad las instancias de procuración de justicia para responder a las solicitudes inmediatas de asistencia por parte de la autoridad ministerial durante el procedimiento penal, así como atender al llamado de las víctimas para brindar un servicio de procuración de justicia eficaz, eficiente y más humanizado.

El personal de auxilio en la atención a víctimas deberá contar con el *perfil adecuado* para la atención de personas LGBTTTI, esto significa que además del conocimiento propio de sus funciones, deberá estar capacitado(a) en *derechos humanos*, perspectiva de género, así como en cuanto al *contexto de la diversidad sexual*. Así mismo se sugiere consultar el parecer de la víctima respecto al género de la persona que le pueda brindar la atención a fin de propiciar que se sienta cómoda. Entre las acciones que se prevé lleve a cabo esta área de auxilio en la investigación, se encuentran:

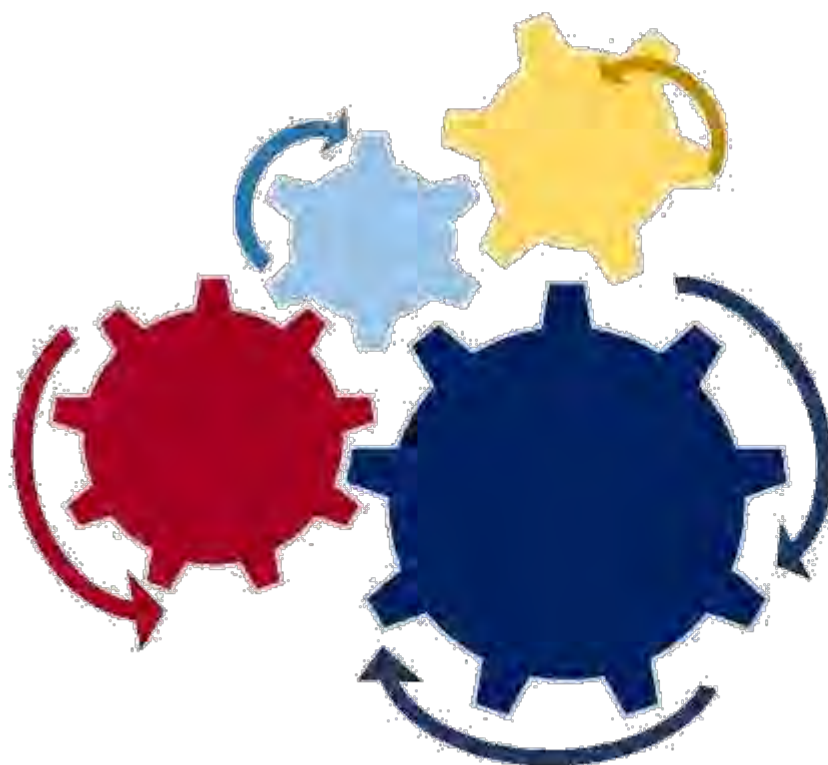
- Atención psicológica individual y grupal dentro de la instancia.
- Acompañamiento durante diligencias ministeriales: toma de declaraciones, ampliación de declaraciones, careos, entre otras.
- Acompañamiento a víctimas durante reuniones de trabajo relacionadas con los avances en las investigaciones ministeriales y demás actividades de competencia institucional.
- Detección inmediata de necesidades psicosociales en las comunidades afectadas.
- Vinculación y acompañamiento a otras dependencias gubernamentales, con la finalidad de contribuir a garantizar el acceso a un tratamiento integral con servicios especializados.

Esquema de auxilio.



11. Mecanismo de coordinación para la implementación del protocolo

Derivado del compromiso institucional con la sociedad, mismo que fue pactado entre las instancias de procuración de justicia del país el 9 de diciembre de 2016 durante la Asamblea Plenaria de la XXXVI Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, a través del punto de acuerdo: "...CNPJ/XXXVI/06/16.- Estrategia de Atención a Personas de la Comunidad Lésbico, Gay, Transexual, Transgénero, Travesti e Intersexual (LGBTITI), en el Marco de una Procuración de Justicia Igualitaria..." el cual implicó la conformación de una Comisión Nacional de trabajo para la elaboración del presente protocolo, y reconociendo que el éxito de este instrumento no se acota a una acción aislada, se prevé la necesidad de establecer un mecanismo de coordinación que garantice la sinergia de los esfuerzos de diversos actores en el cumplimiento de un objetivo común, la cual abarca los siguientes rubros:



La sinergia de las acciones programadas para la correcta

Sociedad Civil

Implementación incluye:

Organizada

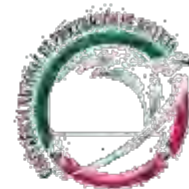
Otr@s

1. Generación y recolección de datos estadísticos en el Sistema de Registro correspondiente sobre

delitos cometidos en contra y por personas LGBTTTI, diferenciando por sectores de dicha población.
2. Capacitación, seguimiento y supervisión para la aplicación del protocolo.
3. Participación de la Sociedad Civil Organizada (SCO) y de otras instituciones relacionadas en el establecimiento de cadenas de apoyo.
4. Prevención de violencia a través del combate a la discriminación.

1) Generación y recolección de datos estadísticos.

Entre las propuestas que plantea la CNDH, así como posteriormente las recomendaciones que emite la CIDH al Estado Mexicano para garantizar los derechos humanos de personas LGBTTTI, se encuentra el establecimiento de indicadores objetivos para informar a la sociedad sobre los datos estadísticos respecto de delitos cometidos contra esta población, que considere un enfoque interseccional y sociodemográfico que asegure la aplicación de la perspectiva antidiscriminatoria al incluir también lo relativo a distintos grupos en situación de vulnerabilidad (Mujeres, niñas, niños y



adolescentes, personas migrantes, defensores de derechos humanos, operadores de justicia, personas indígenas y personas privadas de libertad).

Por consiguiente y en cumplimiento a dichas recomendaciones, se considera de suma importancia impulsar la generación de datos estadísticos a través del registro, sistematización y análisis de información que permita visualizar la violencia ejercida en contra de individuos en relación a su situación de vulnerabilidad, observando las condiciones en las que se dio el hecho delictivo, y así contar con mayores elementos para prevenir, combatir y erradicar eventualmente la violencia a partir de la construcción paulatina de un registro nacional de delitos cometidos contra y por personas de la población LGBTTTI.

A fin de posibilitar la inclusión de una variable en el Sistema de Información Estadístico Nacional – que alimentan las instancias de procuración de justicia– que permita conocer la incidencia de aquellos delitos cometidos por prejuicio; por razones de género u orientación sexual, mejor conocidos como *delitos de odio*, sería indispensable contar –en primer término– con la descripción del delito en los Códigos sustantivos o en su defecto, la comprobación de la motivación de la conducta delictiva se fundó en dicha característica.

Actualmente en la mayoría de entidades federativas no es posible establecer un rubro de clasificación de dichos tipos penales, toda vez que no se cuenta con la legislación conducente, sin embargo se sabe –a través de las iniciativas legislativas presentadas por los actores correspondientes– que el país está logrando avances que permiten hacer frente a esta problemática de carácter estructural; no obstante, una alternativa viable para cumplimentar la obligación institucional de garantizar el acceso a la justicia en la esfera de actuación de las instancias de procuración de justicia, consiste en el establecimiento de variables nominales sobre la pertenencia de personas a determinados sectores de la población en condición de vulnerabilidad, incluyendo aquellas con orientación sexual, identidad/expresión de género y/o características sexuales no normativas. La creación del Sistema de Registro para fines Estadísticos con la calidad que se sugiere, permitirá:

Visibilizar la violencia ejercida en contra de la población LGBTTTI e identificar las condiciones en que se cometen los delitos, diferenciándola según los sectores que conforman dicha población.

Proporcionar elementos para el análisis interseccional y sociodemográfico dentro de la investigación penal a fin de identificar los factores de vulnerabilidad que promueven mayor riesgo de violencia.

Mejorar la atención a víctimas al contar con elementos que permitan establecer

medidas de no repetición.

Promover la perspectiva de género y no discriminación para garantizar una

✓

procuración de justicia igualitaria.

Facilitar el análisis de la incidencia delictiva y, en general, sobre la problemática de seguridad pública de acuerdo al ámbito de competencia respectiva.

Obtener datos útiles para trabajos de investigación y subsecuentemente para el

diseño de políticas públicas de prevención del delito y combate a la delincuencia.



✓ Proporcionar información para el análisis comparativo por periodos de tiempo así

como entre entidades federativas, incluso en el ámbito internacional.

✓ Generar datos objetivos que coadyuven a impulsar el trabajo legislativo

encaminado a la eficacia de la norma y al combate a la impunidad.

✓ Promover el derecho de acceso a la información de la ciudadanía al establecer

indicadores de desempeño sectorial gubernamental.

✓ Obtener los insumos que permitan bifurcar –en el mediano plazo- directrices

específicas para la investigación de delitos motivados por prejuicio, como parte de una estrategia de atención en el ámbito de procuración de justicia.

2) Capacitación, seguimiento y supervisión para la implementación del protocolo

El Programa Nacional de Procuración de Justicia (2013-2018) señala la necesidad de coordinar esfuerzos para fomentar el cambio cultural a través del desarrollo humano y profesional del personal, a través de la capacitación dirigida a la promoción y defensa de los derechos humanos y perspectiva de género y no discriminación, así como la actualización, sensibilización y estandarización de niveles de conocimiento y práctica entre personas servidoras públicas.

De conformidad con lo anterior, la capacitación de servidoras y servidores públicos debe proveer las herramientas necesarias que aseguren la aplicación de los estándares de derechos humanos en el procesamiento de casos a fin de que las decisiones en el ejercicio de funciones satisfagan los requisitos legales de manera efectiva y apropiada. El éxito de la implementación del Protocolo depende en cierta medida de la capacitación adecuada a personas servidoras públicas.

En dicha tesitura y como parte de las acciones que integran la Estrategia de Atención desde el ámbito de Procuración de Justicia, y de manera concomitante a las recomendaciones contenidas en diversos informes sobre derechos humanos, así como las políticas públicas del Estado, se diseñó un Programa específico de capacitación/sensibilización orientado a garantizar el cumplimiento de las obligaciones en materia de derechos humanos lo que a su vez, contribuye a promover la transformación cultural del entorno público y social desde el ámbito de procuración de justicia.

La formación de expertos de las instituciones de procuración de justicia del país con el *perfil adecuado* para brindar la atención con enfoque diferencial y especializado a personas con orientación sexual, identidad de género, expresión de género y/o características sexuales diversas, podrá llevarse a cabo a través de los Institutos de Formación Profesional de cada instancia, quienes se encargarán de ejecutar la estrategia de capacitación en sus demarcaciones territoriales, quienes podrán solicitar del apoyo de las instituciones gubernamentales que trabajan el temas relacionados, así como con la participación de las OSC.

Asimismo es indispensable destacar que la función que lleguen a desempeñar las unidades de vigilancia y supervisión de cada Fiscalía y/o Procuraduría será de vital importancia para la aplicación del Protocolo, por lo que se espera cuenten con mecanismos eficaces para la detección de actos discriminatorios y violatorios de derechos humanos dentro del proceso penal, así como en los procedimientos de atención a la ciudadana o demás servicios de carácter administrativo. Sin



embargo es preciso señalar que el protocolo es un documento perfectible y susceptible de mejorar con el paso del tiempo y en la medida que se retomen las experiencias que resulten de su implementación, por lo que se observa que la fase inicial de supervisión consiste en el amoldamiento de la conducta del personal de las instancias de procuración de justicia, dentro del marco de derechos humanos y con miras hacia el objetivo primordial de este documento.

3) Participación de la Sociedad Civil Organizada (SCO) y de otras instituciones relacionadas.

Es de reconocer el trabajo que han desarrollado Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) que se especializan en el estudio de ciertas temáticas propias de cada uno de los sectores que conforman la población LGTBTTI, así como aquellas que han auxiliado a víctimas de delitos y las que continúan trabajando en la reivindicación de derechos correspondientes.

Por ello la estrategia nacional de desarrollo contempla invariablemente la participación de dichas instancias no gubernamentales en el diseño de políticas públicas, programas y demás acciones, reconociendo que son precisamente las OSC quienes conocen a profundidad y con detalle la situación que adolecen.

Para asegurar la eficacia en la implementación del protocolo se ha contemplado la participación y trabajo continuo con la SCO principalmente en dos rubros: a) Considerar el trabajo que han desarrollado de acuerdo a sus áreas de expertise que pueda ser de utilidad en el ámbito de procuración de justicia y b) La consulta respecto a las acciones institucionales que les atañen y por las que manifiesten respetuosamente las necesidades de mejora que han detectado.

Para el seguimiento de la implementación del protocolo, se prevé también la colaboración del Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE), reconocido Centro de Investigación Público sectorizado a la Procuraduría General de la República, algunos otros Institutos de Investigación, Universidades, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación o sus equivalentes en las entidades federativas, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y sus Delegaciones estatales, así como demás instancias que puedan apoyar dentro de este camino hacia la consolidación del protocolo.

4) Prevención de violencia a través del Combate a la Discriminación

Se ha reconocido que la violencia contra personas LGTBTTI en sus distintas modalidades y expresiones se constituye como un problema social cuyo trasfondo es la discriminación, la cual se ha normalizado y por lo tanto reproduce y proliferan los esquemas de violencia. Debido a lo anterior se vuelve fundamental combatir enérgicamente la discriminación, a través de las herramientas que dispone la ley, tal como las medidas acciones afirmativas necesarias para garantizar a toda persona la igualdad real de oportunidades y el derecho de acceso a la justicia sin discriminación.

Por consiguiente cada Fiscalía y/o Procuraduría podrá –de acuerdo a su realidad particular– diseñar, establecer o adoptar las acciones conducentes para cumplimentar el mandato constitucional, convencional y legal de incorporar la perspectiva antidiscriminatoria en el quehacer público



gubernamental, para lo cual se prevé la posibilidad de solicitar asesoría, materiales y demás insumos que han desarrollado algunas de las entidades gubernamentales que abonan a dicho objetivo, como el CONAPRED y la CEAV. De tal forma que después de cierto período de implementación del multicitado protocolo, se genere un espacio para compartir con las demás instancias de procuración de justicia aquellas acciones que se lleven a cabo en sus demarcaciones territoriales y les han resultado exitosas, a esto se le denomina "buenas prácticas" en el ámbito de procuración de justicia.

12. Instrumentos especializados y lecturas recomendadas

En casos de violencia delictiva que involucren la orientación sexual, identidad de género, expresión de género y/o características sexuales, se considera importante conocer algunas porciones textuales contenidas en los siguientes documentos:

✓

De acuerdo con la **Declaración de las Naciones Unidas sobre la Eliminación**

de la Violencia contra la Mujer, la violencia contra la mujer es "...todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada". Consecuentemente, se puede considerar que la violencia contra personas a causa de su identidad/expresión de género femenino, también es una forma de violencia contra la mujer. En este supuesto se encuentran las mujeres transexuales, entre otras personas.

✓

El Modelo de **protocolo latinoamericano de Investigación de las Muertes**

Violentas de Mujeres por razones de Género (femicidio/feminicidio), disponible en la página web: <http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/WRGS/ProtocololatinoamericanoDeInvestigacion.pdf>; destaca que "la investigación penal debe agotar todos los medios legales disponibles y estar dirigida a la determinación de la verdad, la captura, el enjuiciamiento y el castigo de los responsables" y señala también que los elementos del análisis forense y criminal para la investigación de los feminicidios son aplicables a la violencia letal ejercida sobre personas transexuales o transgénero, pues a partir de ellos se podrán conocer las motivaciones de la conducta criminal y si existen motivaciones basadas en el género, comprendidas desde el marco de la legislación penal existente.



✓ El

informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos **Jede de Violencia Cometidos contra Personas por su Orientación Sexual e Identidad de Género**, de 17 de noviembre de 2011 (A/HRC/19/41)" describe el contexto global de violencia por motivos de orientación sexual e identidad de género a través de visibilizar las leyes y prácticas discriminatorias y, además,

✓

El **Protocolo de Investigación ministerial, pericial y policial con perspectiva de género para la violencia sexual de la Procuraduría General de la República** reconoce expresamente la diversidad sexual existente en niñas, niños y adolescentes y señala que el análisis interseccional de las características identitarias que confluyen en una misma persona es fundamental para la comprensión de las formas de violencia contra la víctima y como parte de la estructura global de dominación, toda vez que: "Tradicionalmente las mujeres son objeto de violencia, primero, por ser mujeres y después por una suma de variables que tienen que ver con su contexto de vida; los hombres, generalmente, viven la violencia propia de la inseguridad pública o por otras causas que ninguna tiene que ver con razones de género, excepto si su identidad de género es femenina." (Nota 15).

✓

Informe sobre Violencia contra Personas Lesbianas, Gay, Bisexuales,

Trans e Intersex en América de la CIDH (OEA:2015) el cual define la violencia contra personas de cada sector poblacional; describe las formas de violencia y el contexto en que se desarrolla, señala también, cuál ha sido la respuesta estatal frente a la violencia y al acceso a la justicia y emite una serie de sugerencias y recomendaciones a los Estados de América sobre las *buenas prácticas efectuadas* en la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) del Departamento de Justicia de Estados Unidos, en la que se desarrolla un Manual de entrenamiento para las fuerzas de la policía y otras agencias que recopilan información sobre estos crímenes odio (*Hate Crime Data Collection Guidelines and Training Manual*: Dec. 2012) como un conjunto de directrices establecidos para investigaciones de crímenes basados en prejuicios.



✓ **Recomendaciones Básicas para la Atención a Personas LGBTI de la**

desarrollo de la personalidad. Como principio rector, el de estado de cada persona y a no ser discriminado en el acceso a la justicia. personas, como la confidencialidad, el respeto a los derechos humanos, evitar los estereotipos de género y el uso de un lenguaje incluyente.

✓

Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que

involucren la orientación sexual o identidad de género, que publicó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en 2015, el cual parte de la descomposición de estereotipos de género, destacando el principio de libre

✓ **Protocolo para juzgar con perspectiva de género** (SCJN) por ser un

documento que emite el máximo tribunal de impartición de justicia, dirigido a todas aquellas personas e instituciones involucradas en los procesos de acceso a la justicia.

✓ **La Declaración de Montreal sobre los Derechos Humanos de Lesbianas,**

Gays, Bisexuales y Transexuales (Conferencia Internacional sobre los Derechos Humanos LGBT) de 2006 en el que se plasmaron exigencias relativas a los derechos básicos de las personas LGBT.

✓ **100 Reglas**

de Brasilia sobre Acceso a la Justicia es un documento orientador que define a las personas en condición de vulnerabilidad y procura "Una justicia que protege a los más débiles". Estas reglas adquieren una motivación importante para otorgar a las personas vulnerables un trato adecuado a sus circunstancias singulares, pues establecen estándares básicos para garantizar el acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, aprobado por representantes de instituciones del sistema judicial durante la XIV Cumbre Iberoamericana (sometidos en su momento a la aprobación por la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos, la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas, la Federación Iberoamericana de Ombudsman y la Unión Iberoamericana de Colegios y Agrupaciones de Abogados, entre otros).



13. Términos del contexto de la diversidad sexual

✓ Protocolo para el Acceso sin Discriminación

El personal de la **Prestación de Servicios** de justicia que intervengan en casos que involucren la orientación sexual, la identidad de género, la expresión de género y/o las características sexuales o en la que esté relacionada una persona de la población LGBTTTI, deberá contar con el conocimiento actualizado de las categorías que se utilizan para nombrar personas, procesos sociales y objetos en el contexto de la diversidad sexual.

Sobre los términos que desconozca deberá investigar y documentar los datos de su lenguaje especializado y validarlos para establecer la relación entre el derecho aplicable, los hechos y las pruebas.

Este apartado reúne los conceptos que contienen las siguientes fuentes de información acreditadas:

- a) Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren la orientación sexual o identidad de género de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN: 2014).
- b) Estudio de Términos y Estándares Relevantes sobre orientación sexual, identidad de género y expresión de género, elaborado por la CIDH en cumplimiento de la resolución AG/RES.2653 (XLI-O/11); Derechos Humanos, Orientación Sexual e Identidad de Género.
- c) Principios sobre la aplicación de la Legislación Internacional de Derechos Humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de Género (Principios de Yogyakarta).
- d) Glosario de la diversidad sexual, de género y características sexuales (2016); Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), originado del grupo de trabajo 3 de la Comisión Intergubernamental de derechos humanos de la Secretaría de Gobernación (SEGOB).
- e) Señalamientos de las organizaciones de la sociedad civil a través de sus representantes como personas que se autodefinen.

Asexual. Orientación sexual de una persona que no siente atracción erótica hacia otras personas. Puede relacionarse afectiva y románticamente. No implica necesariamente no tener sexo o no poder sentir excitación.

Bifobia. Rechazo, discriminación, invisibilización, burlas y otras formas de violencia basadas en prejuicios y estigmas hacia las personas bisexuales o que parecen serlo. Puede derivar en otras formas de violencia como los crímenes de odio por bifobia, aun cuando cabe aclarar que ese hecho delictivo todavía no se encuentra legalmente tipificado. Supone, además, que todas las personas deben limitar su atracción afectiva y sexual a las mujeres o a los hombres exclusivamente; esto es;



a uno solo de los géneros, y si no lo hacen así se les considera "en transición", como inestables o indecisos.

Binarismo de género. Se refiere a los modelos sociales dominantes en la cultura occidental que sostienen que el género y el sexo se limitan a sólo dos categorías: hombres (biológicamente: machos de la especie humana) y mujeres (biológicamente: hembras de la especie humana), excluyendo a personas que no necesariamente se auto identifiquen dentro de estas dos categorías. Sobre estos juicios de valor sobre lo que "deberían ser" mujeres y hombres, se sustenta la discriminación, exclusión y violencia en contra de cualquier identidad, expresión y experiencia de género diversas.

Bisexualidad. Capacidad de una persona por sentir una atracción erótica afectiva por personas de un género diferente al suyo y hacia personas de su mismo género; así como para mantener relaciones íntimas y sexuales con ellas. Esto no implica que sea con la misma intensidad, al mismo tiempo, de la misma forma, ni que sienta atracción por todas las personas de su mismo género o del otro.

Características sexuales: Se refiere a las características físicas o biológicas, cromosómicas, gonadales, hormonales y anatómicas de una persona, que incluyen características innatas, tales como los órganos sexuales y genitales, y/o estructuras cromosómicas y hormonales, así como características secundarias, tales como la masa muscular, la distribución del pelo, los pechos o mamas.

Discriminación por orientación sexual, identidad de género y/o expresión de género. En apego a distintos instrumentos internacionales, es toda distinción, exclusión, restricción, o preferencia que por acción u omisión, con intención o sin ella, no sea objetiva, racional ni proporcional, tenga por objeto o por resultado –ya sea *de jure* o *de facto*– obstaculizar, impedir, anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos y libertades, cuando se base en motivos de orientación sexual, identidad de género y/o expresión de género y/o características sexuales, incluyendo dentro de este término a la homofobia, bifobia, lesbofobia, transfobia y otras formas conexas de intolerancia.

Discurso de odio. Se consideran como discurso de odio todas aquellas acciones que son motivadas, completamente o en parte, por los prejuicios y/o estigmas sociales hacia una o más características de una persona. El discurso de odio por lesbofobia, homofobia, bifobia, transfobia o intersexfobia se entiende como el hecho de violentar a una persona por su orientación sexual, identidad de género, expresión de género o por características sexuales que por medio de conductas discriminatorias, de rechazo y desprecio que menoscaban la integridad física y psicológica de la persona y que además comunican un mensaje amenazante al resto de los integrantes de esos grupos, comunidades o minorías. En los casos más extremos, las expresiones de odio pueden ser utilizadas como armas para incitar, promover o impulsar el exterminio de un grupo de personas, como se vio en la Alemania nazi y en el genocidio de Ruanda en 1994.



Diversidad sexogenérica: Es la condición del ser diverso y sugiere una distancia respecto de la "norma" que hasta ahora ha sido la heterosexualidad (Weeks, 2000) sin embargo la diversidad sexual se refiere a todas las posibilidades de asumir, expresar y vivir su sexualidad, así como de adoptar expresiones, preferencias u orientaciones e identidades sexuales y surge a partir del reconocimiento de las diferentes expresiones de la sexualidad dentro de cada cultura.

Estereotipo. Son las preconcepciones, generalmente negativas y con frecuencia formuladas inconscientemente, acerca de los atributos, características o roles asignados a las personas, por el simple hecho de pertenecer a un grupo en particular, sin considerar sus habilidades, necesidades, deseos y circunstancias individuales.

Estigma. Es la desvalorización o desacreditación de las personas de ciertos grupos de población, atendiendo a un atributo, cualidad o identidad de las mismas, que se considera inferior, anormal o diferente, en un determinado contexto social y cultural, toda vez que no se ajusta a lo socialmente establecido.

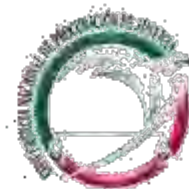
Expresión de género: Es la manifestación externa de los rasgos culturales que permiten identificar a una persona como masculina o femenina, conforme a los patrones considerados propios de cada género por una sociedad determinada en un momento histórico determinado. Puede incluir la forma de hablar, manierismos, modo de vestir, comportamiento personal, comportamiento o interacción social, modificaciones corporales, entre otros aspectos. Constituye las expresiones del género que vive cada persona, ya sea impuesto, aceptado o asumido.

Familia social. Incluyen aquellas personas distintas a la familia inmediata o demás familiares de alguna persona, que hacen las veces de los roles esperados dentro de la familia y proporcionan el apoyo a partir del bienestar de éstas. La CIDH determina "familia social" a aquellas personas diferentes a la familia inmediata o demás familiares que reclaman justicia a nombre de las personas trans fallecidas, quienes a menudo comprenden otras mujeres trans.

Gay: Hombre que se siente atraído erótico afectivamente hacia otro hombre. Es una expresión alternativa a "homosexual" (de origen médico). Algunos hombres y mujeres, homosexuales o lesbianas, prefieren el término gay, por su contenido político y uso popular.

Género: Se refiere a los atributos que social, histórica, cultural, económica, política y geográficamente han sido asignados a los hombres y a las mujeres. El género designa un sistema de representación cultural que socializa los cuerpos sexuados a través de la clasificación de personas en masculino y femenino, atribuyendo a cada cual un conjunto de prácticas, estereotipos, roles, normas, actitudes, nociones, valores, patrones de comportamiento, formas de expresar y relacionarse en sus ámbitos de la vida; aspectos que se transmiten, circulan y se reproducen en la cotidianidad; en el ámbito individual, familiar, institucional y colectivo.

Grupos sociales en situación de vulnerabilidad. "Aquellos núcleos de población y personas que por diferentes factores o la combinación de ellos, enfrentan situaciones de riesgo o discriminación que les impiden alcanzar mejores niveles de vida y, por lo tanto, requieren de la atención e inversión del Gobierno para lograr su bienestar". Consecuentemente es posible observar la existencia de



diversos grupos en situación de vulnerabilidad; sin embargo para los efectos de este Protocolo se debe subrayar que el objeto de conocer la pertenencia de una persona a determinados grupos, radica en brindar las facilidades correspondientes para el acceso a la justicia en igualdad de condiciones que las demás personas.

Heteronormalización. Se refiere al proceso por el que, a través del tiempo, se establecen, de manera generalizada, las reglas jurídicas, sociales y culturales sobre las formas aceptables de sexualidad masculina y femenina, estigmatizando todas las demás posibilidades de relaciones entre personas en el ámbito sexual. Emana de la expectativa social y colectiva de que la **heterosexualidad** es la única condición natural de sexualidad, válida ética, legítima, cultural y socialmente.

La visión heteronormativa asume como norma "sana", "natural" o "correcta" la visión binaria de la sexualidad masculina-femenina, sin embargo este enfoque excluye a una parte de la población en el acceso y goce de derechos correspondientes. Por consiguiente para eliminar la discriminación y promover una cultura de inclusión es preciso tomar consciencia de que las expresiones de género no se dividen en las "normales" y "las demás", sino que resultan formas que existen y se legitiman por el derecho a la libre autodeterminación.

Heterosexualidad. Capacidad de una persona por sentir atracción erótica afectiva por personas de un género diferente al suyo, así como la capacidad de mantener relaciones íntimas y sexuales con ellas.

Homofobia: Son todas las formas de discriminación, rechazo, ridiculización y violencia derivadas de un estigma o prejuicio social en contra de las personas que difieren de lo que socialmente es aceptado como sexo y género, que puede expresarse de diversas maneras, incluyendo las que pueden afectar o afectan la integridad física, cuya manifestación extrema es el homicidio, aunque también se refleja en diversas prácticas violatorias de derechos humanos, como repudio de ciertas expresiones, apariencias, modales, prácticas o vestimentas distintas a las de personas heterosexuales.

Homosexualidad. Capacidad de cada persona de sentir una atracción erótica afectiva por personas de un mismo género, así como mantener relaciones íntimas y sexuales con ellas. Diversos instrumentos destacan la tendencia en el movimiento LGTBTTI para reivindicar el uso y referencia de los términos lesbiana (homosexualidad femenina) y "gay" o "gai" (homosexualidad masculina o femenina).

Identidad de género: Es la vivencia personal e interna del género, tal y como lo percibe la persona, misma que puede corresponder o no con el sexo asignado al nacer, esto es, si se asume en la feminidad, en la masculinidad, o en una combinación de ambas. Incluye la vivencia personal del cuerpo, que podría o no, involucrar la modificación de la apariencia o funcionalidad corporal a través de tratamientos farmacológicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que la misma sea libremente escogida. En relación a ello, la SCJN señala que: Recientemente se ha comenzado a utilizar el término: "cisgénero" para las personas cuya identidad de género y sexo asignado al nacer son concordantes, en cambio, se le llama "personas trans" a aquella cuya identidad de género no



Orientación sexual: ¿Qué se entiende al decir que una persona de sexo masculino siente una profunda atracción emocional y afectiva por una o más personas de un género diferente al suyo, de su mismo género, o más de un género, así como la capacidad de mantener relaciones íntimas y sexuales con estas personas? La **intersexfobia**, rechazo, discriminación, invisibilización, burlas y otras formas de violencia basadas en orientación sexual de una persona es independiente del sexo biológico o de la identidad de género en prejuicios y estigmas hacia las características sexuales diversas que transgreden la idea del binarismo sexual, es un componente fundamental en la vida privada de las personas y se constituye como categoría sospechosa de discriminación en determinados contextos, derivados de las concepciones culturales hegemónicas.

Pansexualidad: Capacidad de una persona de sentir una atracción erótica afectiva hacia otra persona con independencia del sexo, género, identidad de género, orientación sexual o roles sexuales, así como la capacidad de mantener relaciones íntimas y/o sexuales con ella.

Intersexualidad: Todas aquellas situaciones en las que la anatomía fisiológica sexual de una persona no se ajusta completamente a los estándares definidos para los dos sexos que culturalmente han sido asignados como masculino y femenino.

Perfil adecuado: Se refiere a las servidoras y servidores públicos entrenados y con las competencias que demandan sus funciones, pero que además cuenten con la capacitación para ser una categoría. De esta manera, las características sexuales innatas en las personas con variaciones intersexuales podrían corresponder en diferente grado a ambos sexos.

Personas trans: Es una condición del ser, en la que la identidad de género de la persona no coincide con el género asignado al nacer. La intersexualidad no siempre es inmediatamente evidente al momento de nacer, algunas variaciones son hasta la pubertad o la adolescencia y otras no se pueden conocer sin exámenes médicos adicionales, pero pueden manifestarse en la anatomía sexual primaria o secundaria que es visible. Desde una perspectiva de derechos humanos, que alude a derecho a la identidad y al libre desarrollo de la personalidad, y a partir de la reivindicación de dicho concepto impulsada por los movimientos de personas intersexuales en el mundo, se considera que el término intersexual es adecuado para su uso, rechazando el de hermafroditismo o pseudohermafroditismo, usado hace

Personas transgénero: Es una condición del ser que refleja que la identidad de género de una persona no coincide con el género que se le asignó al nacer de acuerdo a sus genitales. Por lo general, solo optan por una reasignación hormonal, sin llegar a la intervención quirúrgica de los órganos pélvicos sexuales internos, optando por un tratamiento hormonal, a fin de que su imagen corporal se asemeje a su realidad psíquica, espiritual y social.

Lesbiana: Mujer que se relaciona erótico-afectiva-amorosamente con mujeres. Se utiliza como sinónimo de la identidad de las mujeres homosexuales. Es una construcción de la identidad y resulta también una manera de auto denominación.

Lesbofobia: Rechazo, discriminación, invisibilización, burlas y otras formas de violencia basadas en este concepto remite a la transición de la persona de un género a otro, haciendo énfasis en el aspecto cultural y no médico solamente, nació con el multiculturalismo ampliamente nutrido por la teoría queer, que intenta deconstruir la división hombre-mujer y profundizar en otro tipo de identidades que se conocían por las formas de vida categorizadas por las específicas genitales biológicas. Actualmente las personas transgénero también se identifican como mujeres y esta población es generalmente practicadas por familiares y amistades de sus familias.

Personas transexuales: Es una condición del ser que refleja que la identidad de género de una persona no coincide con el género que se le asignó al nacer de acuerdo a sus genitales. Consecuentemente, el deseo de modificar las características sexuales externas que no corresponden con el género auto percibido, lleva a las personas a intentar adecuar su cuerpo para vivir y ser aceptadas como personas del género en el que se sienten y conciben a sí mismas. La **Misoginia**, odio, rechazo, aversión y desprecio hacia la mujer y en general hacia todo lo relacionado con lo femenino que se manifiesta en actos violentos y crueles contra ella por el hecho de ser mujer.

Nombre social: Es el vocativo por medio del cual se individualiza la persona en sus relaciones sociales dentro de su contexto y consiste en el sustantivo por medio del cual se auto designa e identifica una persona y a su vez se le distingue de las demás personas en sociedad.



adecuación de la corporalidad a su realidad psíquica, espiritual y social supone transitar por una intervención médico-hormonal, quirúrgica o ambas.

Persona travesti. Son personas que por lo general no desean ser llamadas transexual o transgénero; sin embargo gustan de presentar de manera transitoria o duradera una apariencia opuesta a la de género que socialmente se asigna a su sexo de nacimiento, mediante la utilización de prendas de vestir, actitudes y comportamientos.

Perspectiva de género. Es una visión científica, analítica y política sobre las mujeres y los hombres. Se propone eliminar las causas de la opresión de género como la desigualdad, la injusticia y la jerarquización de las personas basada en el género. Promueve la igualdad entre los géneros a través de la equidad, el adelanto y el bienestar de las mujeres y hombres; contribuye a construir una sociedad en donde las mujeres y los hombres tengan el mismo valor, la igualdad de derechos y oportunidades para acceder a los recursos económicos y a la representación política y social en los ámbitos de toma de decisiones.

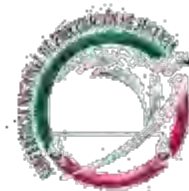
Perspectiva de género y de diversidad sexual. Es un concepto que desarrolla la SCJN a través de su Protocolo en la materia, que consiste en aquella perspectiva que considere la realidad particular que viven las personas por virtud de su orientación sexual, identidad de género, expresión de género y características sexuales. Lo que implica detectar y eliminar todas las barreras y obstáculos que discriminan a las personas por dichas razones; es decir, considerar las situaciones de desventaja que, por cuestiones de género u orientación sexual, discriminan e impiden la igualdad.

Posicionabilidad sobre el propio género. Es el derecho que tiene toda persona de decidir cómo se asume a sí misma, de acuerdo con su vivencia personal del cuerpo, sus caracteres físicos, sus emociones, sentimientos, acciones y expresiones en torno a su género y sexualidad, reconociendo y protegiendo el derecho al libre desarrollo de la personalidad.

Prejuicio. Percepciones generalmente negativas o predisposición irracional a adoptar un comportamiento negativo hacia una persona en particular o un grupo poblacional, basadas en la ignorancia y generalizaciones erróneas acerca de tales personas o grupos, que se plasman en estereotipos.

Queer. Las personas queer, o quienes no se identifican con el binarismo de género (femenino-masculino), son aquellas que además de no identificarse y rechazar el género socialmente asignado a su sexo de nacimiento, tampoco se identifican con el otro género o con alguno en particular. Dichas personas pueden manifestar, más que identidades fijas, expresiones y experiencias que: 1) se mueven entre un género y otro alternativamente; 2) se producen por la articulación de los dos géneros socialmente hegemónicos; 3) formulan nuevas alternativas de identidades, por lo que no habría, en sentido estricto, una transición que partiera de un sitio y buscara llegar al polo opuesto, como en el caso de las personas transexuales.

Reasignación de sexo genérico: Proceso de intervención profesional mediante el cual la persona obtiene concordancia entre los aspectos corporales y su identidad de género, que puede incluir; parcial o totalmente entrenamiento de expresión de rol de género, administración de hormonas,



psicoterapia de apoyo o las intervenciones quirúrgicas que haya requerido su proceso y que tendrá como consecuencia, mediante resolución judicial una identidad jurídica de hombre o mujer según elija y corresponda al deseo de la persona.

Rol de género. Conjunto de manifestaciones relacionadas con la vestimenta, la expresión corporal o verbal y el comportamiento de las personas que puede o no identificarse con el género asignado al nacimiento.

Salud sexual. Es un estado de bienestar físico, mental y social en relación con la sexualidad que requiere un enfoque positivo y respetuoso de la sexualidad y de las relaciones sexuales, así como la posibilidad de tener experiencias sexuales placenteras y seguras, libres de toda coacción, discriminación y violencia. Para que la salud sexual se logre, es necesario que los derechos sexuales de las personas se reconozcan y se garanticen. Requiere de un enfoque positivo y respetuoso de las distintas formas de expresión de la sexualidad y las relaciones sexuales, así como de la posibilidad de ejercer y disfrutar experiencias sexuales placenteras, seguras, dignas, libres de coerción, de discriminación y de violencia.

Sexismo. Ejercicio discriminatorio por el cual se adscriben características psicológicas y formas de comportamiento, y se asignan roles sociales fijos a las personas, por el solo hecho de la asignación de un determinado sexo al nacer, restringiendo y condicionando de este modo la posibilidad de un desarrollo pleno para todos los sujetos sociales sean mujeres u hombres.

Sexo: La palabra sexo tiene su origen en el latín "sexus", que deriva del verbo sectore que significa separar, cortar, dividir. Se determina por el conjunto de diferencias biológicas (fisiológicas, anatómicas, hormonales y genéticas) por las que se clasifica a la especie humana en mujeres y hombres. El criterio comúnmente utilizado para realizar la distinción de las personas al nacer, atiende a los genitales que poseen, sin embargo, "desde la perspectiva del sexo, además de los hombres y mujeres, se alude también a las personas intersex", entendiendo la intersexualidad como todas aquellas situaciones en las que el cuerpo sexuado de una persona varía respecto al estándar de corporalidad femenina o masculina culturalmente vigente.

Sexualidad. Es un aspecto central del ser humano, presente a lo largo de su vida. Abarca al sexo, las identidades y los papeles de género, el erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción y la orientación sexual. Se vive y se expresa a través de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, conductas, prácticas, papeles y relaciones interpersonales. La sexualidad puede incluir todas estas dimensiones, no obstante, no todas ellas se vivencian o se expresan siempre. La sexualidad está influida por la interacción de factores biológicos, psicológicos, sociales, económicos, políticos, culturales, éticos, legales, históricos, religiosos y espirituales.

Transfobia. Rechazo, discriminación, invisibilización, burlas, no reconocimiento de la identidad y/o expresión de género de la persona y otras formas de violencia basadas en prejuicios, estereotipos y estigmas hacia las personas con identidades, expresiones y experiencias trans, o que son percibidas como tales.

El Agente del Ministerio Público observará en los casos en los que se acredite la existencia del hecho con apariencia de delito, que se adecue en la norma jurídica penal y que se reúnan los elementos que integren el delito de que se trate, así como establecer la autoría o participación de la persona a la que se le atribuye esa conducta ilícita, para esto una vez iniciada la carpeta de investigación correspondiente ya sea por cualquiera de los supuestos que prevé el Código Nacional como lo es la denuncia, querrella o requisito equivalente, la autoridad investigadora a través de sus órganos auxiliares, recabarán los datos, útiles, lícitos y pertinentes con el objetivo de sustentar el ejercicio de la acción penal, o bien, suspender la investigación con la utilización del archivo temporal o concluirla por medio del no ejercicio de la acción penal o a través de la utilización de los criterios de oportunidad.

Es importante mencionar que ante el conocimiento de hechos delictivos por parte del Agente del Ministerio Público a través de la puesta a disposición de personas detenidas en flagrancia y con objetos, instrumentos o productos del delito, deberá observarse lo establecido en la Guía Nacional de Cadena de Custodia aprobada por la Conferencia Nacional de Procuración De Justicia y de Secretarios de Seguridad Pública y lo establecido por el acuerdo A/09/2015 de la Procuraduría General de la Republica, para establecer cuál de estos puede ingresar o no a la Bodega de indicios de la institución, es necesario que tanto el policía en calidad de primer respondiente como el agente de la Policía Ministerial auxiliar del Agente del Ministerio Publico, sepa identificar el tipo de indicio que será puesto a disposición de la representación social, quienes en coordinación con el encargado de la bodega de indicios clasificarán los indicios de acuerdo a su naturaleza, observando desde luego el Manual de Operación para la Administración de las Bodegas de Indicios, Evidencias y/o Elementos Materiales Probatorios:



Manual de Operación para la Administración de las

Bodegas de Indicios, Evidencias y/o Elementos Materiales

Probatorios

Contenido.

I.	Presentación de la primera edición.....	3
II.	Presentación de la segunda edición	6
III.	Marco jurídico.....	8
IV.	Objetivos	10
a)	Objetivo General	10
b)	Objetivos Específicos	10
V.	Sujetos	11
VI.	Definiciones.....	12
VII.	Políticas de Operación.....	16
a)	Del Procedimiento.	16
b)	De la Infraestructura.	17
VIII.	Principales Roles de los Intervinientes	18
IX.	Generalidades de la Bodega de indicios y evidencias.....	19
X.	Procedimiento	21
1.	Entrada, Recepción y Registro	21
2.	Clasificación	22
3.	Almacenamiento.....	24
4.	Recomendaciones para el Almacenamiento.....	24
5.	Formas de Almacenamiento.....	25
6.	Empaques y Embalajes.....	26
7.	Salidas Temporales.....	26
8.	Reingreso.....	28
9.	Salidas definitivas.....	29
10.	Devolución o Entrega.	29
11.	Destrucción	30
XI.	Control, seguimiento e inventario de la Bodega.....	32
XII.	Mantenimiento de la Bodega	33
XIII.	Control de acceso a personas a la Bodega.	33
XIV.	Organización Interna de la bodega y medidas de supervisión y seguridad.....	34
XV.	Abreviaturas	37
XVI.	Formatos	38

1.	Registro de Cadena de Custodia: Acuerdo A-009/15.....	38
2.	Entrega-Recepción de Indicios y/o Elementos Materiales Probatorios: Acuerdo A-009/15	41
3.	Acta de Destrucción.	42
4.	Acta de Entrega/devolución de Objetos	44
5.	Hoja de control y seguimiento.....	45
XVII.	Anexos	47
1.	Equipamiento mínimo para la Bodega de Indicios, Evidencias y/o Elementos Materiales Probatorios.....	47
2.	Colores de identificación, su significado, indicaciones y precisiones	48
3.	Tabla de señales de prohibición	49
4.	Señales de obligación. Norma Oficial Mexicana NOM-026-STPS- 2008, Colores y Señales de Seguridad e higiene	50
5.	Tabla de señales de prohibición	51
6.	Señales para equipo a utilizar en caso de incendio	52
7.	Colores y señales de seguridad e higiene e identificación de riesgos.....	53
8.	Cédula de Perfil de Puesto del Auxiliar de la Bodega.	54
9.	Cédula de Perfil de Puesto del Encargado de la Bodega.....	60
10.	Libro de control de Indicios de entradas y salidas.....	66
11.	Libro de visitas	67
12.	Libro de Incidencias.....	68
13.	Distribución de las bodegas de indicios	69
XVIII.	Diagrama de flujo de los Procedimientos en las Bodegas de Indicios	70
XIX.	Hoja de Control de Cambios.....	71
XX.	Autores.....	72
XXI	Actas.....	74

I. Presentación de la primera edición.

En cumplimiento a la reforma constitucional en materia de Seguridad y Justicia, por la que se estableció la transición a un Sistema de Justicia Penal Acusatorio (SJPA), publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el pasado 18 de junio de 2008 y en cumplimiento a la meta *México en Paz* del Plan Nacional de Desarrollo 2013- 2018, se derivó el Programa Nacional de Procuración de Justicia 2013-2018 que plantea cuatro objetivos referentes a fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones de procuración de justicia, asegurar la implementación en tiempo y forma del sistema de justicia penal acusatorio, lograr una procuración de justicia eficaz y eficiente y reducir la impunidad.

Por lo anterior la Procuraduría General de la República (PGR), impulsó la publicación del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP), aplicable en todo el todo país, el cual fue expedido en el DOF el 5 de marzo de 2014, y entró en vigor el 18 de junio de 2016 a nivel federal.

El Poder Legislativo determinó en el CNPP el mismo procedimiento para la investigación de los delitos a cargo de los poderes ejecutivos de las entidades federativas y de los órganos jurisdiccionales federales y locales. En su artículo décimo primero transitorio, los legisladores determinaron: *“...la obligación de contar con el equipamiento necesario y con protocolos de investigación y de actuación del personal sustantivo y los manuales de procedimientos para el personal administrativo, el artículo séptimo transitorio estableció que la Procuraduría General de la República..., deberán elaborar los planes y programas necesarios para una adecuada y correcta implementación del mismo y deberán establecer dentro de los proyectos de presupuesto respectivo, a partir del año que se proyecte las partidas necesarias para atender la ejecución de estos programas, las obras de infraestructura, la contratación de personal, la capacitación y todos los demás requerimientos que sean necesarios para cumplir los objetivos para la implementación del Sistema Penal Acusatorio...”*.

Entre el mes de agosto de 2014 y el mes de marzo de 2016, personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), llevó a cabo visitas a las Bodegas de Indicios en las sedes y subsedes de las Delegaciones de la PGR. Esto con el fin de detectar y subsanar las necesidades que éstas requieren. Así, se pudo informar a las Subdelegaciones Administrativas de las modificaciones requeridas en las Instalaciones que fueron destinadas para cumplir con dicho fin dentro del SJPA. También, se dio conocimiento a la oficialía Mayor de la PGR.

La AIC de la PGR, estableció en el objetivo tres del Programa de Desarrollo Estratégico 2015 – 2018 “Incrementar las capacidades de investigación de la AIC”, para garantizar la oportuna implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio, correspondiente a sus líneas de acción 3.1.3 *que corresponde a rediseñar y actualizar los protocolos de actuación para el personal de la Agencia de Investigación Criminal, de acuerdo con estándares internacionales, para evitar la discrecionalidad a efecto de generar confianza en la sociedad,* y 3.3.3 *Proponer la adecuación de la infraestructura de las instalaciones de la Policía Federal Ministerial, Unidades de Análisis Criminal, Laboratorios Periciales, Bodegas de Indicios, Áreas de Retención y Separos.*

En el mismo sentido, la AIC expidió el Manual de Operación del Sistema Penal Acusatorio (MOSPA), el cual es de aplicación general para todas las áreas que integran la Agencia de Investigación Criminal, como lo son la Unidad de Análisis de Información para la AIC, Policía Federal Ministerial, Coordinación General de Servicios Periciales y el Centro Nacional de Planeación Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia. Dicho instrumento da cumplimiento al oficio circular C/001/16, emitido por la C. Procuradora General de la República.

En el MOSPA se estableció como objetivo, las áreas de responsabilidad y competencia de cada unidad que integra la Agencia de Investigación Criminal orientada a garantizar la operación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, así como evitar la duplicidad de funciones que repercuten en el uso indebido de los recursos y en detrimento de la investigación de los delitos.

Asimismo se determinó con el apoyo de la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, además de la Oficialía Mayor, el diseño del presente ***Manual de Operación para la Administración de las Bodegas de Indicios, Evidencias y/o Elementos Materiales Probatorios de la Procuraduría General de la República***, las cuales estarán a cargo de la Policía Federal Ministerial de la Agencia de Investigación Criminal en las Delegaciones de la PGR y las Bodegas de Indicios que se encuentren en las Unidades Administrativas Centrales y Órganos Desconcentrados estarán a cargo de los titulares de las mismas o en quien ellos delegue esa facultad.

El proceso de diseño del presente Manual se encuentra en el marco de los lineamientos para el diseño, aplicación y seguimiento de los protocolos y guías de actuación del personal de la AIC, emitidos por el Director en Jefe de la Agencia de Investigación Criminal.

Derivado de lo anterior, uno de los cambios más significativos de transitar de un sistema mixto inquisitivo a uno de corte acusatorio y oral es la investigación del delito, misma que se tiene que realizar de manera eficiente y efectiva a través de la aplicación de la ciencia, método y técnica, al servicio de la justicia que permita al Ministerio Público de la Federación sustentar y probar la comisión de un hecho delictivo.

En ese sentido, surge la necesidad de contar con los mecanismos que brinden la certeza jurídica para que los indicios, evidencias o elementos materiales probatorios que se recaben eviten ser alterados, destruidos, contaminados o desaparezcan, que conserven su mismidad y por ende, su fuerza probatoria durante el proceso, por lo que es necesario contar en la Procuraduría General de la República con espacios debidamente equipados para este fin.

El Sistema de Justicia Penal Acusatorio requiere de una sustancial reconfiguración de las instalaciones que componen la PGR, ya que los espacios con que se cuenta actualmente han sido habilitados de manera inapropiada ya que fueron construidos para un fin diferente al de almacenar indicios y por lo tanto para estar en condiciones de operar de manera correcta, es necesario cubrir las necesidades que requiere una Bodega de Indicios, Evidencias y/o Elementos Materiales Probatorios acorde a la incidencia delictiva de cada entidad federativa.

En este rubro existe un área de oportunidad para el ejercicio fiscal 2017, con el propósito de gestionar los recursos necesarios para la adecuación o construcción de nuevas bodegas en la Procuraduría General de la República (sedes y subsedes), para lograr su adecuación y/o implementación; así como, su mantenimiento.

Así como la construcción y equipamiento de helipuertos y pistas de aterrizaje dentro de las instalaciones o cercanas a ellas que permitan un traslado seguro y oportuno de los Indicios, Evidencias y/o Elementos Materiales Probatorios.

Es importante convencernos de que el costo que conlleva la construcción y equipamiento de bodegas es con el único fin de garantizar las necesidades y expectativas de la procuración de justicia, en el marco de las disposiciones legales vigentes.

En resumen, el éxito de la operación de las Bodegas de Indicios, Evidencias y/o Elementos Materiales Probatorios será la suma de voluntades y esfuerzos que cada Unidad Administrativa de la Procuraduría General de la República aporte a este proyecto, delimitando por supuesto, sus funciones y obligaciones, éstas últimas en los términos y plazos que se establezcan para ello.

II. Presentación de la segunda edición.

El sistema de Justicia Procesal Penal Acusatorio (SJPPA) exige de las instituciones de procuración de justicia una transformación y constante actualización que contribuya a su consolidación, ante este panorama, el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 refiere específicamente en la meta uno “México en Paz” y particularmente en el plan de acción para “fortalecer el Estado y garantizar la paz” que, a través de “garantizar un Sistema de Justicia Penal eficaz, expedito, imparcial y transparente”, se contribuirá a abatir la impunidad, lograr una procuración de justicia efectiva y combatir la corrupción.

En este sentido la investigación de los delitos requiere de la actualización constante de los procedimientos en torno a ella, con la finalidad de aumentar su eficiencia; derivado de esto, la Procuraduría General de la República realiza el seguimiento de cada uno de los procesos que comprende el desempeño de su función, particularmente en lo relativo a la investigación de los delitos, con el objetivo de fortalecer cada uno de ellos acorde a las necesidades que plantea el propio sistema de justicia.

La Agencia de Investigación Criminal, en cumplimiento a la responsabilidad que se encuentra contenida en el artículo décimo primero transitorio del Código Nacional de Procedimientos Penales y de su Programa de Desarrollo Estratégico 2015-2018 en lo referente a “...rediseñar y actualizar los protocolos de actuación para el personal de la Agencia de Investigación Criminal, de acuerdo con estándares internacionales, para evitar la discrecionalidad a efecto de generar confianza en la sociedad...”; contempla la actualización de los lineamientos del proceso de almacenamiento de los indicios, evidencias y/o elementos materiales probatorios relacionados con la investigación de los delitos con el propósito de contribuir al fortalecimiento de la investigación.

La actualización del Manual para la Operación y Administración de las Bodegas de Indicios, Evidencias y/o Elementos Materiales Probatorios se realiza acorde a un proceso de mejora continua que garantiza la operatividad de las mismas, homologando los procedimientos y actuaciones del personal que interviene directamente en ellas.

El presente Manual para la Operación y Administración de las Bodegas de Indicios, Evidencias y/o Elementos Materiales Probatorios, tiene como propósito contar con un procedimiento claro y específico que detalle el registro, clasificación y almacenamiento de los indicios, evidencias y elementos materiales probatorios.

Este documento está dirigido al personal de la Agencia de Investigación Criminal que tiene como función el manejo y administración de las bodegas de los indicios, evidencias y elementos materiales probatorios, y en general a todo usuario que efectúe la entrega y recepción de indicios, evidencias y elementos materiales probatorios en dichas bodegas.

El presente documento contempla los formatos que emplean el encargado, el auxiliar de la bodega y toda usuario que en el ámbito de sus respectivas competencias tenga contacto con los indicios, evidencias y elementos materiales probatorios para garantizar el cumplimiento del sistema de cadena de custodia desde el ingreso hasta su salida definitiva.

III. Marco jurídico.

El Manual de Operación para la Administración de las Bodegas de Indicios y Evidencias tiene sustento jurídico en los ordenamientos legales siguientes:

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
- Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.
- Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
- Código Nacional de Procedimientos Penales.
- Código Penal Federal.

Instrumentos Nacionales.

- Protocolo Nacional de Actuación de Primer Respondiente.
- Protocolo Nacional de Actuación para Policía con Capacidades para Procesar.
- Guía Nacional de Cadena de Custodia.

Instrumentos Internos.

- Acuerdo A/101/13 del Procurador General de la República por el que se crea la Agencia de Investigación Criminal y se establecen sus facultades y organización
- Acuerdo A/009/15 de Cadena de Custodia de la Procuraduría General de la República, hasta en tanto se actualice a la Guía Nacional de Cadena de Custodia.
- Protocolos de Intervención Policial, Pericial y del Analista de la Agencia de Investigación Criminal, en la etapa de investigación.
- Protocolo de Aseguramiento de la Procuraduría General de la República.
- Manual de Operación para el Sistema Penal Acusatorio de la Agencia de Investigación Criminal.
- Manual de Procedimientos de la Dirección General de Recursos Materiales y de Servicios Generales.

Normas Oficiales Mexicanas principales.

- NOM-003-SEGOB-2011, señales y avisos para protección civil, colores, formas y símbolos a utilizar.
- NOM-001-STPS-2008, Edificios, locales, instalaciones y áreas en los centros de trabajo - Condiciones de seguridad.
- NOM-002-STPS-2010, Condiciones de seguridad-prevención y protección contra incendios en los centros de trabajo.
- PROY-NOM-005-STPS-2017, Manejo de sustancias químicas peligrosas o sus mezclas en los centros de trabajo-Condiciones y procedimientos de seguridad y salud.
- NOM-006-STPS-2014, Manejo y almacenamiento de materiales – Condiciones de seguridad y salud en el trabajo.
- NOM-010-STPS- 2014, Agentes químicos contaminantes del ambiente laboral. Reconocimiento, evaluación y control.
- NOM-017-STPS-2008, Equipo de protección personal - Selección, uso y manejo en los centros de trabajo.
- NOM-026-STPS-2008, Colores y señales de seguridad e higiene, e identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías.
- NOM-028-STPS-2008; sistema para la administración del trabajo.
- NOM-008-SCFI-2002; sistema general de unidades de medidas contra incendios.
- NRF-015-PEMEX-2012, 14 de julio de 2012; protección de áreas y tanques de almacenamiento de productos inflamables y combustibles.
- NRF-018-PEMEX-2014, 25 de noviembre de 2014; análisis de riesgos.
- NRF-116-PEMEX-2014; materias primas contra incendios; polvos químicos y líquidos espumantes.

IV. Objetivos.

a) Objetivo General.

Establecer los procedimientos para la administración de las bodegas de indicios, evidencias y/o elementos materiales probatorios de la Procuraduría General de la República, mediante la estandarización de las actividades de recepción, clasificación, almacenamiento, salida y disposición final de los indicios, evidencias y/o elementos materiales probatorios para que no se pierdan, destruyan, alteren o contaminen; de conformidad con lo establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales.

b) Objetivos Específicos.

- Homologar los procedimientos y registros de las bodegas indicios, evidencias y/o elementos materiales probatorios, así como la infraestructura necesaria, mobiliario, materiales, equipamiento, libros de control y sistema informático.
- Proporcionar un instrumento que brinde seguridad y certeza jurídica en el actuar del personal encargado del manejo de la bodega, estandarizando los procedimientos de operación tanto técnicos como administrativos.
- Requisitar en el Registro de Cadena de Custodia, Libros de control y en el Sistema Único de Información de la Agencia de Investigación Criminal (SUIAIC) la información derivada del manejo y administración de indicios, evidencias y/o elementos materiales probatorios.

V. Sujetos.

- **Auxiliar de la Bodega¹:** Personal con conocimientos del control y manejo de indicios, evidencias y elementos materiales probatorios, que asiste al encargado de la bodega.
- **Encargado de la Bodega²:** Personal con conocimientos del control y manejo de indicios, evidencias y elementos materiales probatorios, responsable de la administración de la Bodega de Indicios y Evidencias.
- **Ministerio Público de la Federación:** Es quien conduce la investigación de los delitos, determina el aseguramiento de los indicios, evidencias y elementos materiales probatorios; coordina a las policías, a los servicios periciales, analistas de información criminal y a las autoridades coadyuvantes.
- **Usuario:** Personal encargado de la entrega de los indicios, evidencias y elementos materiales probatorios al encargado o al auxiliar de bodega para su ingreso, almacenamiento y custodia; así como toda persona autorizada para recibir los mismos a fin de realizar alguna función definida por la autoridad competente: inspección, consulta, peritaje, traslado y salida temporal o definitiva.

¹ En el perfil de puesto se habilitó a Agentes de la Policía Federal Ministerial de la Agencia de Investigación Criminal conforme al Anexo 8

² En el perfil de puesto se habilitó a Agentes de la Policía Federal Ministerial de la Agencia de Investigación Criminal conforme al Anexo 9

VI. Definiciones.

Para los efectos del presente manual se entenderá por:

- **Almacenamiento:** Procedimiento por el que se resguardan indicios, evidencias y/o elementos materiales probatorios en el interior de la bodega de manera ordenada, a efecto de garantizar su integridad, mediante su clasificación y ubicación.
- **Bodega de Indicios, Evidencias y/o Elementos Materiales Probatorios:** Lugar con características específicas que tiene como finalidad de almacenar y resguardar indicios, evidencias y elementos materiales probatorios para garantizar su integridad.
- **Cadena de Custodia:** Es el sistema de control y registro que se aplica al indicio bienes, instrumentos, objetos o productos del delito desde su localización, descubrimiento o aportación, en el lugar de intervención, hasta que la autoridad competente ordene su conclusión.
- **Clave de Ubicación:** Combinación alfanumérica asignada al indicio, evidencia y elemento material probatorio para determinar el lugar de almacenamiento dentro de la Bodega de Indicios y Evidencias.
- **Delegaciones:** Órgano desconcentrado de la Procuraduría General de República en cada entidad federativa.
- **Disposición Final:** Conclusión por parte de la autoridad competente de la pertinencia y/o utilidad del indicio, evidencia y/o elemento material probatorio en el procedimiento penal.
- **Documentación:** Registro fidedigno de la condición que guardan lugares, personas, objetos, indicios, o elementos materiales probatorios en el lugar de intervención.
- **Elemento Material Probatorio:** Evidencia física, objeto, instrumento o producto relacionado con un hecho delictivo y que puede constituirse como prueba.

- **Empaque:** Todo aquel material que se utiliza para contener, proteger y/o preservar el indicio o elemento material probatorio permitiendo que llegue íntegro a los servicios periciales, a la bodega de indicios o, en su caso, a algún otro lugar en condiciones de preservación o conservación.
- **Equipamiento:** Materiales y equipo de protección personal necesarios para el manejo de indicios, evidencias y elementos materiales probatorios.
- **Equipo de protección personal:** Cualquier equipo, objeto o instrumento que emplea una persona para crear una barrera física entre él, el sitio de intervención, los indicios, evidencia física, objeto, instrumento o producto relacionado con un hecho delictivo y las personas involucradas en un hecho, con la finalidad de evitar riesgos a la salud y la pérdida, alteración, destrucción o contaminación de los indicios o elementos materiales probatorios.
- **Etiqueta:** Letrero escrito o impreso que se añade al embalaje u objeto para identificarlo.
- **Etiquetado:** Acción de adherir al empaque/embalaje la etiqueta tomando en consideración los siguientes datos: Número Único de Atención, Carpeta de Investigación, Número de folio o equivalente, identificación del indicio, fecha y hora de recolección y tipo de indicio.
- **Evidencia:** Es la materia o información objeto de estudio, indubitable con respecto a su existencia, recolectada con motivo de la comisión de un hecho probablemente delictivo.
- **Identificación:** Término utilizado para asignar un número, letra o una combinación de ambos al indicio, evidencia física, objeto, instrumento o producto relacionado con un hecho delictivo, mismo que es único y tiene un orden consecutivo.
- **Indicio:** Son todos aquellos signos, señales, datos, marcas, huellas y vestigios reconocidos mediante la observación y análisis de lugares, objetos y personas ante la probable comisión de un hecho delictivo, los cuales pueden constituirse en evidencia física.

- **Libro de control:** Registro de los movimientos que presenta el indicio, evidencia y/o elemento material probatorio, durante su resguardo en la bodega y el personal que interviene en cada etapa.
- **Libro de Incidencias:** Registro todo riesgo, daño o percance detectado por el EB/AB que pone en riesgo la integridad de la infraestructura, equipamiento, indicios, evidencias y/o elementos materiales probatorios.
- **Libro de Visitantes:** Registro de control para el acceso de personas autorizadas, que con motivo de sus funciones (mantenimiento, control y supervisión) deben ingresar a la Bodega.
- **Número Único de Registro:** Clave alfanumérica asignada a cada indicio, evidencia y/o elemento material probatorio que ingresa y se registra en bodega de indicios y evidencias mediante el Sistema Único de Información para la Agencia de Investigación Criminal.
- **Objeto material del delito:** Para fines de Cadena de Custodia, es la cosa corpórea sobre la que recae la ejecución de la conducta.
- **Peritaje:** Opinión científico-técnica que emite por escrito un perito o experto en cualquier ciencia, arte, técnica u oficio, como resultado del examen de personas, hechos, objetos o circunstancias sometidas a su consideración.
- **Perito:** Persona experta o especializada en alguna ciencia, arte, técnica u oficio.
- **Personal Responsable del Traslado (PRT):** Persona que se encarga de ejecutar el traslado de los indicios, evidencias, elementos materiales probatorios, bienes, instrumentos, objetos o productos del delito, materia de aseguramiento con el registro correspondiente, de un lugar de origen a un lugar de destino, cumpliendo con las recomendaciones realizadas por el personal especializado.
- **Preservación:** Acciones para asegurar, que los indicios, evidencias y/o elementos materiales probatorios no se pierdan, alteren, destruyan o contaminen.

- **Producto del delito:** Bienes de cualquier índole derivados u obtenidos directa o indirectamente de la comisión de un delito.
- **Registro de Cadena de Custodia:** Documento en el que se registran los indicios, evidencias o elementos materiales probatorios y las personas que intervienen desde su localización, descubrimiento o aportación en el lugar de intervención hasta que la autoridad ordene su conclusión.
- **Sellado:** Consiste en cerrar el embalaje empleando medios adhesivos o térmicos que dejen rastros visibles cuando sea abierto indebidamente o sin autorización.
- **Sistema Único de Información para la Agencia de Investigación Criminal (SUIAIC):** Base de datos en la que se captura y da seguimiento a la entrada, salidas y reingresos de indicios, evidencias, elementos materiales probatorios, bienes, instrumentos, objetos o productos del delito en las bodegas a nivel nacional.
- **Traslado:** Es el desplazamiento o reubicación de personas, bienes u objetos de un lugar de origen a otro de destino.
- **Unidades Especializadas:** Subprocuradurías y Fiscalías con capacidades técnicas y operativas específicas, facultadas para resolver asuntos señalados en leyes especiales.